REPÚBLICA ARGENTINA

Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

PODER LEGISLATIVO

DIARIO DE SESIONES

XXXII PERÍODO LEGISLATIVO

AÑO 2015

REUNIÓN N° 15

6ª SESIÓN ESPECIAL, 8 de ENERO de 2016

Presidente: Juan Carlos ARCANDO, Myriam Noemí MARTÍNEZ y Pablo Gustavo VILLEGAS
Secretaria Legislativa: Andrea Elizabeth RODRÍGUEZ
Secretario Administrativo: Elio Enrique MÜLLER
Prosecretaria Administrativa: Mercedes Lidia GAUNA

Legisladores presentes:

BILOTA IVANDIC, Federico Ricardo

BLANCO, Pablo Daniel

BOYADJIAN, Cristina Ester

CARRASCO, Angelina Noelia Mariné

FREITES, Andrea Graciela

FURLAN, Ricardo Humberto

GÓMEZ, Marcela Rosa

HARRINGTON, Claudio Daniel

LÖFFLER, Damián Alberto

ROMANO, Ricardo Andrés

RUBINOS, Oscar Hugo

URQUIZA, Mónica Susana

Legisladores ausentes:

MARTÍNEZ ALLENDE, Liliana

En la ciudad de Ushuaia, capital de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a los ocho días de enero de dos mil dieciséis, se reúnen los señores legisladores en el recinto de sesiones de la Legislatura provincial, siendo las 14:20.

- I -

APERTURA DE LA SESIÓN

Sr. PRESIDENTE.— Buenas tardes a los señores legisladores.

Desde esta Presidencia quiero pedir disculpas por los acontecimientos ocurridos a algunos señores legisladores. Uno es responsable de esta Casa y se debe hacer cargo de algunas cuestiones que han pasado.

Simplemente, pido disculpas porque tuvimos las líneas cortadas -todos saben la situación que vivimos y seguimos viviendo, en la fecha-; no había comunicación con los teléfonos celulares. Y eso hizo que algunos señores legisladores tuvieran inconvenientes para poder acceder. Les pido que sepan comprender; pido disculpas, y me hago cargo de lo que ha ocurrido en la tarde de hoy.

Siendo las 14:20 y habiendo quórum legal, con la presencia de 14 legisladores se da comienzo a la sesión especial convocada conforme al requerimiento realizado por varios señores legisladores, en número reglamentario.

- II -

IZAMIENTO

Sr. PRESIDENTE.— Invito a la señora legisladora Cristina Ester Boyadjian a izar el pabellón nacional y provincial; y al resto de los señores legisladores y público presente a ponerse de pie.

- Así se hace. (Aplausos).

- III -

PEDIDOS DE LICENCIA

Sr. PRESIDENTE.— Por Secretaría Administrativa se informa si existen pedidos de licencia.

Sr. BLANCO.— Pido la palabra.

Señor presidente: Es para justificar la ausencia de la legisladora Liliana Martínez Allende, por razones de índole personal.

Sr. PRESIDENTE.— Gracias, señor legislador.

- IV -

HOMENAJES

Sr. PRESIDENTE.— Corresponde el tiempo de homenajes, si algún legislador desea hacer uso de la palabra.

- Sin asentimiento.

- V -

CONVOCATORIA

Sr. PRESIDENTE.— La presente sesión especial es convocada según lo establecido en la Constitución Provincial y en los artículos 27 y 32 del Reglamento Interno de esta Cámara.

Por Secretaría Legislativa, se dará lectura a la nota enviada por los legisladores y a la Resolución de Presidencia mediante la cual fue convocada esta sesión especial.

Nota de Legisladores

Sec. LEGISLATIVA.— "Señor vicegobernador y presidente del Poder Legislativo, don Juan Carlos Arcando:

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, en nuestro carácter de legisladores, de acuerdo a las atribuciones conferidas en el Reglamento Interno de Cámara y la Constitución Provincial, a los efectos de solicitarle convoque a sesión especial para el día viernes 8 del corriente mes y año, a las 14 horas, con el objeto de dar tratamiento a los siguientes asuntos:

- Asunto Nº 4/16. Poder Ejecutivo: Nota 290/15 que adjunta el Decreto provincial 3012/15, que ratifica el Convenio 17443, referente al Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias Argentinas, suscrito entre el gobierno nacional y la provincia de Tierra del Fuego.
- Asunto Nº 5/16. Poder Ejecutivo: Mensaje 1/16 y proyecto de ley que crea la Obra Social de la Provincia de Tierra del Fuego (OSPTF).
- Asunto Nº 6/16. Poder Ejecutivo: Mensaje 1/16 y proyecto de ley que crea la Caja de Previsión Social de la Provincia de Tierra del Fuego.
- Asunto Nº 7/16. Poder Ejecutivo: Mensaje 1/16 y proyecto de ley de Emergencia del Sistema de Seguridad Social de la provincia.
- Asunto Nº 8/16. Poder Ejecutivo: Mensaje 2/16 y proyecto de ley que modifica la Ley provincial 389, de Régimen Único de Pensiones Especiales (RUPE).
- Asunto Nº 9/16. Poder Ejecutivo: Mensaje 3/16 y proyecto de ley que crea la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF).
- Asunto Nº 10/16. Poder Ejecutivo: Mensaje 4/16 y proyecto de ley que modifica la Ley provincial 440 (Ley Impositiva).
- Asunto Nº 11/16. Poder Ejecutivo: Mensaje 5/16 y proyecto de ley de Código Fiscal.
- Asunto Nº 12/16. Poder Ejecutivo: Mensaje Nº 1/16 y proyecto de ley que modifica la Ley provincial 561 (Régimen de Jubilaciones y Pensiones para el Personal de los Tres Poderes del Estado).
- Asunto Nº 13/16. Resolución de Presidencia 12/16 (receso legislativo), para su ratificación.
- Asunto Nº 14/16. Bloques Frente para la Victoria, Unión Cívica Radical Cambiemos y Movimiento Popular Fueguino: proyecto de resolución que conforma la Comisión de Receso Legislativo.

Sin otro particular, lo saludamos muy atentamente.

Resolución de Presidencia 13/16

Visto la nota presentada por los legisladores Federico Bilota Ivandic, Ricardo Furlan, Myriam Martínez, Angelina Carrasco, Claudio Harrington, Ricardo Romano, Marcela Gómez, Andrea Freites; y

Considerando que en la misma se solicita la convocacatoria de sesión especial para el día viernes 8 del corriente mes del año, a las 14 horas, en el recinto de sesiones sito en la calle Yaganes y Héroes de Malvinas, de la ciudad de Ushuaia, de acuerdo a las atribuciones conferidas en el Reglamento Interno de Cámara y la Constitución Provincial, a los efectos de dar tratamiento a los siguientes asuntos: Asunto Nº 4/16, Asunto Nº 5/16, Asunto Nº 6/16,

Asunto Nº 7/16, Asunto Nº 8/16, Asunto Nº 9/16, Asunto Nº 10/16, Asunto Nº 11/16, Asunto Nº 12/16, Asunto Nº 13/16 y Asunto Nº 14/16.

Que la presente sirva de notificación fehaciente.

Que el suscrito se encuentre facultado para el dictado de la presente resolución según establecido en la Constitución Provincial y en los artículos 27 y 32 del Reglamento Interno de Cámara.

Por ello:

El Vicegobernador y Presidente del Poder Legislativo
de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Resuelve

Artículo 1º.- Convocar a sesión especial para el día viernes 8 del corriente mes y año, a las 14 horas, en el recinto de sesiones, sito en la calle Yaganes y Héroes de Malvinas de esta ciudad, a los efectos de dar tratamiento a los asuntos enunciados en los considerandos.

Ello, de acuerdo a la nota presentada por los legisladores Federico Bilota Ivandic, Ricardo Furlan, Myriam Martínez, Angelina Carrasco, Claudio Harrington, Ricardo Romano, Marcela Gómez y Andrea Freites.

Artículo 2º.- La presente resolución se dicta ad referéndum de la Cámara.

Artículo 3º.- Sirva la presente de notificación fehaciente.

Artículo 4º.- Registrar. Comunicar a los bloques políticos, secretarías Legislativa y Administrativa, y áreas de Presidencia a los efectos que correspondan. Cumplido, archivar. Resolución de Presidencia Nº 13/16.”.

- 1 -

Asunto Nº 15/16

Ratificación

La Legislatura de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas de Atlántico Sur

Resuelve:

Artículo 1º.- Ratificar en todos sus términos la Resolución de Presidencia Nº 13/16, que forma parte integrante de la presente.

Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese y archívese.”.

Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración de los señores legisladores, la ratificación de la convocatoria leída por Secretaría.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.

Moción

Sr. BILOTA IVANDIC.— Pido la palabra.

Señor presidente: Hago una moción de orden respecto al lugar en que trataremos los asuntos, porque entiendo que cada uno de ellos tiene una lógica para el tratamiento. Por eso, propongo que sea en el siguiente orden: asuntos N.os 4/16, 9/16, 10/16, 11/16, 12/16, 6/16, 5/16, 8/16, 7/16, 13/16 y 14/16.

Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración lo planteado por el legislador Bilota Ivandic.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.
Se dará lectura al primer asunto.

- 2 -

Asunto Nº 4/16

Desendeudamiento de las Provincias Argentinas

Moción

Sr. BILOTA IVANDIC.— Pido la palabra.
Señor presidente: Por tratarse de un proyecto de ley sin dictamen, corresponde que nos constituyamos en comisión.
Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración de los señores legisladores, poner en comisión al Cuerpo, para la lectura y posterior aprobación del Asunto Nº 4/16.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.

En Comisión

Sec. LEGISLATIVA.— “La Legislatura de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Sanciona con fuerza de ley

Artículo 1º.- Apruébase en todos sus términos el Acuerdo Complementario, registrado bajo el Nº 17443, referente al Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias Argentinas, celebrado el 25 de noviembre de 2015, entre la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el gobierno nacional; ratificado mediante Decreto provincial 3012/15
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.”.
Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración, en comisión, el proyecto de ley leído por Secretaría.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.

Moción

Sr. BILOTA IVANDIC.— Pido la palabra.
Señor presidente: Solicito constituir la Cámara en sesión.
Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración la moción del legislador Bilota Ivandic.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.

En Sesión

Sr. PRESIDENTE.— Por tratarse de un proyecto de ley, corresponde votación nominal, en general y en particular, que se toma por Secretaría Administrativa.
Sec. ADMINISTRATIVO.— Procedo a tomar la votación.

- Votan por la afirmativa los legisladores Bilota Ivandic, Blanco, Carrasco, Freites, Furlan, Gómez, Harrington, Martínez, Romano, Rubinos, Urquiza y Villegas.
- Votan por la negativa los legisladores Boyadjian y Löffler.

Sec. ADMINISTRATIVO.— Resultan 12 votos por la afirmativa y dos por la negativa.
Sr. PRESIDENTE.— Aprobado. Se comunicará al Poder Ejecutivo provincial.

- 3 -

Asunto Nº 5/16

Obra Social de la Provincia de Tierra del Fuego

Moción

Sr. BLANCO.— Pido la palabra.
Señor presidente: Solicito un cuarto intermedio sobre bancas, de dos minutos, porque necesitamos tener en nuestro poder el artículado corregido de lo que se va a leer.
Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración la moción del legislador Blanco.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.

Cuarto Intermedio

- Son las 14:40.
- A las 15:25

Sr. PRESIDENTE.— Se levanta el cuarto intermedio. Seguimos con el tratamiento del Asunto Nº 9/16.

- 4 -

Asunto Nº 9/16

Agencia de Recaudación Fueguina (AREF)

Moción

Sr. BILOTA IVANDIC.— Pido la palabra.
Señor presidente: Solicito la consideración de la Cámara, para que se constituya en comisión por tratarse un proyecto de ley sin dictamen de comisión.
Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración la moción del legislador Bilota Ivandic.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.

En Comisión

Sec. LEGISLATIVA.— "La Legislatura de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Sanciona con fuerza de ley

Creación de la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF)

Capítulo I
De la Agencia de Recaudación Fueguina

Artículo 1°.- Créase, en el ámbito del Ministerio de Economía de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF) como entidad autárquica en el orden administrativo y financiero, con las competencias fijadas por la presente ley.

El Ministerio de Economía ejercerá, respecto de la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF), la superintendencia general.

Artículo 2°.- Fusiónese en el ámbito de la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF) a las dependencias del Ministerio de Economía que se detallan a continuación:

a) Secretaría de Ingresos Públicos;
b) Subsecretaría de Catastro;
c) Dirección Provincial de Asuntos Dominiales;
d) Dirección Provincial de Catastro;
e) Dirección Provincial de Información Territorial; y la
f) Dirección General de Rentas.

La Agencia de Recaudación Fueguina (AREF) ejercerá todas las competencias, facultades, derechos y obligaciones que le fueran originalmente asignadas a las dependencias fusionadas por la presente ley.

Todas las referencias que las normas legales y reglamentarias vigentes hagan a las dependencias citadas precedentemente, su competencia o autoridades, se considerarán hechas a la Agencia de Recaudación Fueguina.

Los cargos y secretarías de las dependencias fusionadas por la presente pasarán a formar parte íntegra de la Agencia de Recaudación Fueguina. A tal efecto, se faculta al Ministerio de Economía a reasignar las partidas presupuestarias que correspondan a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente párrafo.

Capítulo II
Finalidades y Atribuciones

Artículo 3°.- La Agencia de Recaudación Fueguina será el ente de ejecución de la política tributaria de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el que perciba el pago de los cánones, regalías y derechos relacionados, conforme lo establecido en la Ley nacional 26197 o la que en un futuro la reemplace.

La Agencia de Recaudación Fueguina es la autoridad de aplicación del Código Fiscal de la provincia, de la Ley de Catastro, de las disposiciones legales complementarias y toda otra ley fiscal, salvo expreso mandato en contrario. Podrá disponer, en cada caso, la investigación y aplicación de sanciones por las infracciones determinadas en las mismas y ejercerá todas las funciones referentes a la determinación, fiscalización, devolución,

percepción y ejecución judicial de los tributos y accesorios establecidos por las normas legales y la administración de Catastro e Información Territorial.

Asimismo, podrá recaudar otros ingresos públicos por mandato legal específico, por encargo del Poder Ejecutivo provincial o en virtud de convenios celebrados con otras entidades públicas nacionales, provinciales o municipales.

Artículo 4°.- Sin perjuicio de las atribuciones conferidas por el artículo 3º, por otras normas legales o las que resulten necesarias para el cumplimiento de su finalidad, la Agencia de Recaudación Fueguina tendrá las siguientes atribuciones:

a) administrar, resolver y aprobar los gastos e inversiones de los recursos asignados a la entidad. A tal fin, podrá proponer la venta de bienes, autorizar, adjudicar y contratar obras y servicios, adquirir bienes bajo cualquier título y modalidad, y aceptar donaciones con o sin cargo;
b) entender en el proceso de negociaciones colectivas de trabajo con las entidades gremiales que representen al personal, con la autorización previa del Ministerio de Economía, en el marco de lo dispuesto por la Ley provincial 113;
c) solicitar el auxilio de la fuerza pública de los organismos de seguridad nacionales y/o provinciales y requerir de su colaboración para el cumplimiento sus competencias;
d) difundir y comunicar a la población las actividades del organismo y, especialmente, las normas que dictare y fueran de interés para el universo de contribuyentes de la provincia. Podrá, entre otras acciones, contratar espacios de publicidad, idear, elaborar y editar publicaciones, y toda acción necesaria para la difusión de las actividades y resultados del organismo, utilizando las partidas del presupuesto propias de la Agencia de Recaudación Fueguina;
e) efectuar la suscripción de convenios de colaboración y/o complementación de servicios técnicos especializados con organismos públicos, entes privados y/o mixtos en el ámbito de las materias que hacen a las competencias de la Agencia de Recaudación Fueguina;
f) aplicar sanciones disciplinarias a sus agentes de conformidad con las normas legales y reglamentarias respectivas;
g) convenir la realización de acciones conjuntas con organismos municipales, provinciales, nacionales, regionales e internacionales, a los efectos del cumplimiento de la finalidad especificada en el presente ley, sin perjuicio de la observación de los recaudos que sobre el particular exige la legislación vigente;
h) efectuar la suscripción de convenios de colaboración y/o complementación de servicios con organismos públicos estatales nacionales, provinciales o municipales, tendientes a controlar y constatar, en el marco de las acciones de fiscalización que se desarrollen, cuestiones vinculadas a las competencias específicas de dichos organismos. Las citadas acciones de fiscalización podrán desarrollarse exclusivamente con personal de la Agencia de Recaudación Fueguina o en forma conjunta con personal dependiente de los restantes organismos indicados; e
i) todas aquellas funciones que surjan de su misión y las necesarias para su administración interna.

Artículo 5°.- Los actos de administración y la documentación consecuente que respalden la entrada o salida de fondos de la Agencia de Recaudación Fueguina requerirán la previa intervención de su contaduría, sin perjuicio de las acciones que correspondan a los organismos de control previstos en la Constitución Provincial.

Artículo 6°.- Se considerarán agentes de la Agencia de Recaudación Fueguina a todo funcionario, empleado, personal permanente, no permanente o contratado que preste servicio en forma efectiva para la Agencia de Recaudación Fueguina, sean funciones remuneradas o ad honórem, y cualquiera sea su nivel jerárquico.

Artículo 7°.- Todos los agentes pertenecientes a la Agencia de Recaudación Fueguina deberán presentar ante dicho organismo, una declaración jurada patrimonial integral en la

forma y plazos que se establezcan por reglamentación, la que deberá contemplar la situación patrimonial del agente a partir del 1 de enero del año de asunción a su cargo.

Capítulo III
Dirección y Administración

Artículo 8°.- La Dirección Superior y la Administración de la Agencia de Recaudación Fueguina estarán a cargo de un director ejecutivo, que será designado y removido por el Poder Ejecutivo, y tendrá rango y remuneración equivalente al de secretario.

La duración de su mandato será de cuatro años, pudiendo ser designado por períodos sucesivos de igual duración.

Cuando por cualquier motivo se produjere la vacancia del cargo antes del vencimiento de su mandato, la designación de su reemplazante se hará por el término que reste hasta la finalización del mandato inconcluso.

Artículo 9°.- Son facultades y atribuciones del director Ejecutivo:

a) representar a la Agencia de Recaudación Fueguina y dictar todos los actos y contratos que se requieran para el funcionamiento, la finalidad y el desenvolvimiento del servicio a la agencia de acuerdo a las disposiciones en vigor;
b) representar al gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur ante las comisiones encargadas de la aplicación del convenio multilateral de impuestos sobre los ingresos brutos, en carácter de titular, y ante la Comisión Federal de Impuestos (CFI), en carácter de suplente;
c) representar al gobierno de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur en el Centro de Administraciones Tributarias Subnacionales y en cualquier otro organismo, congreso y/o reuniones de carácter internacional, nacional, provincial, municipal, público, privado y/o mixto en las materias que hacen a la competencia de la Agencia de Recaudación Fueguina;
d) conservar la máxima autoridad dentro del organismo y avocarse al conocimiento y decisión de cualquiera de las cuestiones planteadas;
e) administrar y dirigir las actividades de la Agencia de Recaudación Fueguina. A tal fin podrá establecer, organizar y aprobar, de acuerdo al presupuesto anual asignado, su estructura orgánica funcional, de administración de personal, sus agentes, el plantel básico correspondiente y el régimen por cumplimiento de metas y objetivos -incluyendo sus propios servicios de contaduría, tesorería y servicios generales que resulten necesarios- y fijar las políticas, el planeamiento estratégico, los programas y criterios generales de la conducción del organismo;
f) proponer, al Poder Ejecutivo provincial y/o Poder Legislativo provincial, las normas que complementen, modifiquen o reglamenten la legislación tributaria provincial y participar en los proyectos de normas elaborados por el Poder Ejecutivo provincial y/o Poder Legislativo provincial cuando las mismas complementen, modifiquen o reglamenten aspectos relacionados con la legislación tributaria provincial, la administración tributaria y las competencias de la Agencia de Recaudación Fueguina;
g) elevar anualmente al Ministerio de Economía los compromisos de gestión, el anteproyecto de presupuesto de gastos y el cálculo de recursos para el año siguiente. Rendir anualmente, a dicho ministerio, los resultados de los compromisos de gestión suscritos para el período así como la memoria anual de lo actuado, de acuerdo a la reglamentación que dicho ministerio dicte;
h) delegar facultades de su competencia en el personal de la Agencia de Recaudación Fueguina;
i) designar y remover el personal a su cargo y aplicar medidas disciplinarias conforme las pautas establecidas en la legislación vigente;
j) designar provisoriamente, y limitar en sus funciones, a los funcionarios que ejercen los cargos del agrupamiento jerárquico hasta la cobertura definitiva de los cargos

vacantes;

k) disponer de los ascensos y promociones del personal de la Agencia de Recaudación Fueguina, previo desarrollo de concursos que garanticen la transparencia y la igualdad de oportunidades;

l) impartir normas generales obligatorias para los responsables y terceros en las materias en que las leyes autoricen a la Agencia de Recaudación Fueguina a reglamentar la situación de aquellos frente a la administración;

m) interpretar con carácter general las disposiciones de la presente ley y de las normas legales que establecen o rigen la percepción de los gravámenes a cargo de la Agencia de Recaudación Fueguina. Asimismo, a solicitud de los contribuyentes y/u otros responsables y siempre que el pronunciamiento a dictarse ofrezca interés general, la Agencia de Recaudación Fueguina podrá pronunciarse sobre la interpretación de una norma determinada en un caso concreto. El pedido de dicho pronunciamiento no suspenderá cualquier decisión que los demás funcionarios de la Agencia de Recaudación Fueguina hayan de adoptar en casos particulares;

n) autorizar la recaudación de los tributos por intermedio de instituciones bancarias o agentes oficiales o privados. Asimismo, podrá designar agentes de percepción, retención, recaudación e información tributaria e implementar y/o diseñar nuevos regímenes;

o) efectuar contrataciones de personal para la realización de labores estacionales, extraordinarias y/o especiales que no puedan realizarse con sus recursos de planta permanente, fijando las condiciones y requisitos de prestación de servicio y su remuneración;

p) iniciar los juicios de ejecución fiscal y solicitar, en los supuestos legalmente autorizados, embargos preventivos por las sumas adeudadas por los contribuyentes, responsables o deudores solidarios, debiendo los jueces decretarlo en 24 horas ante el solo pedido y bajo la responsabilidad del Fisco;

q) conceder planes de facilidades de pago a los contribuyentes o responsables a efectos de regularizar obligaciones tributarias que ellos mantengan con la Agencia de Recaudación Fueguina;

r) cumplir y hacer cumplir el secreto fiscal;

s) ejercer la dirección y potestad de remoción de los mandatarios judiciales en los juicios de ejecución fiscal, la que estará a su cargo, en función de la evaluación de su desempeño;

t) nombrar el personal de planta permanente en el ámbito de su dependencia; y

u) toda otra atribución necesaria compatible con el cargo, para el cumplimiento de las finalidades y funciones del organismo que le asigna la presente ley o establecidas en las normas legales vigentes, a cuyo fin se entenderá que los apartados precedentes no revisten carácter taxativo.

Artículo 10.- Los compromisos de gestión consistirán en programas acordados y suscritos anualmente por el director ejecutivo de la Agencia de Recaudación Fueguina y el Ministerio de Economía. Su finalidad será la de contar con la definición previa del curso de acción a seguir por el organismo y los resultados concretos a alcanzar en materia de cumplimiento de políticas, objetivos y metas, todo ello a efectos de lograr una mayor eficiencia, eficacia y calidad en su gestión.

Artículo 11.- De lo recaudado del artículo 19, inciso a), la Agencia de Recaudación Fueguina detraerá una suma que se llamará 'Cuenta Incentivo', en la cual se acreditará el 1,56% del importe mensual de la recaudación fiscal y los ingresos provenientes de las prestaciones a terceros relacionadas con la finalidad del organismo, para su distribución entre sus agentes.

La Cuenta Incentivo tendrá carácter remunerativo y se distribuirá en forma mensual en partes iguales entre todos los agentes, incluyendo al director ejecutivo y al personal jerárquico que presten servicio en la Agencia de Recaudación Fueguina al tiempo de su devengamiento.

Ningún agente podrá percibir en concepto de Cuenta Incentivo una suma superior a

su salario bruto mensual percibido en el mes a liquidar y que, a tales efectos, se considerará como máximo del adicional a liquidar a cada agente, respectivamente. A este fin, se considerará 'salario bruto mensual' a la remuneración total –excluidos los ítems correspondientes a asignaciones familiares y la presente Cuenta Incentivo- que corresponda percibir a cada agente.

Quedan expresamente excluidos de la Cuenta Incentivo establecida por el presente, los miembros integrantes del Consejo Asesor de Impuestos Provinciales, con excepción del director ejecutivo.

El director ejecutivo podrá reglamentar el otorgamiento del incentivo mencionado precedentemente contemplando quitas por inasistencias, indisciplina y otros factores que disminuyan la capacidad operativa de la Agencia de Recaudación Fueguina.

Los fondos ingresados y no devengados, el excedente de la suma que integre la Cuenta Incentivo, luego de haberse repartido entre los agentes, de acuerdo a la reglamentación vigente, formarán parte íntegra del patrimonio de la Agencia de Recaudación Fueguina, en los términos del artículo 19, inciso b.

Artículo 12.- La Agencia de Recaudación Fueguina contará con un Consejo Asesor de Impuestos Provinciales y Regalías, con carácter no vinculante, que tendrá como objetivo elaborar un proyecto de coordinación fiscal entre el Estado provincial y los estados municipales. El proyecto buscará evitar la doble imposición de los impuestos y tasas provinciales y/o municipales y mejorar la coordinación e intercambio de información entre los organismos de recaudación en funcionamiento en la provincia de Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur.

La reglamentación que dictare el director ejecutivo determinará las modalidades y procedimientos de funcionamiento del Consejo Asesor de Impuestos Provinciales y Regalías.

Artículo 13.- El Consejo Asesor de Impuestos Provinciales y Regalías Provinciales estará integrado por el director ejecutivo –que presidirá el presente consejo-, un representante del Ministerio de Economía y cinco lugares vacantes. La reglamentación a dictarse por el director ejecutivo determinará las modalidades, condiciones y el procedimiento a seguir para el funcionamiento, ocupación e implementación de las vacantes.

Se desempeñarán en el cargo durante el período de dos años, pudiendo ser reelegidos.

Artículo 14.- Los miembros del Consejo Asesor de Impuestos Provinciales y Regalías ejercerán sus funciones ad honórem.

Artículo 15.- Asimismo, la Agencia de Recaudación Fueguina contará con un gabinete asesor que tendrá a su cargo el seguimiento trimestral y la evaluación del cumplimiento de los compromisos de gestión asumidos. La reglamentación determinará las modalidades y procedimientos de funcionamiento del Consejo Asesor.

Artículo 16.- El Consejo Asesor estará integrado por cuatro miembros que tendrán cargo de subsecretario provincial. La reglamentación establecerá las modalidades, condiciones y el procedimiento de funcionamiento.

Capítulo IV
Patrimonio, Recursos y Personal

Artículo 17.- La Agencia de Recaudación Fueguina estará sometida al régimen establecido en el artículo 8°, inciso a), de la Ley provincial 495, y la Ley provincial 1015 sobre contrataciones.

Artículo 18.- El patrimonio de la Agencia de Recaudación Fueguina estará constituido por la totalidad del patrimonio actual correspondiente a las dependencias fusionadas por la presente medida, por todos los bienes que le asigne el Estado provincial y por aquellos que le sean transmitidos o adquiera por cualquier causa jurídica válida, quedando afectados los bienes propios o los cedidos en uso, créditos, derechos y obligaciones de las fusionadas y de sus órganos dependientes.

El Poder Ejecutivo quedará facultado para transferir, sin cargo, los inmuebles en uso por la Agencia de Recaudación Fueguina y que son propiedad del Estado provincial.

La Agencia de Recaudación Fueguina deberá llevar el inventario general de los bienes en forma actualizada.

Artículo 19.- Para el cumplimiento de sus misiones y funciones, la Agencia de Recaudación Fueguina contará con recursos financieros que serán incluidos en el presupuesto de la provincia y que estarán conformados por:

a) una suma equivalente al 4,20% de la recaudación fiscal mensual de los tributos y los cánones, regalías y derechos derivados de la Ley nacional 26197, o la que en un futuro la reemplace, cuya recaudación está a cargo de la Agencia de Recaudación Fueguina; de lo recaudado por todos estos conceptos se obtendrá la Cuenta Incentivo que se establece en el artículo 11.

   El porcentual establecido en el presente inciso es previo a la coparticipación de recursos con las municipalidades conforme la Ley provincial 892, o la que en un futuro la reemplace, excluidos los ingresos en concepto de coparticipación de impuestos federales;

b) los ingresos provenientes de las prestaciones a terceros relacionados con la finalidad de la Agencia de Recaudación Fueguina y el excedente al que se alude en el artículo 11 in fine;

c) todo recurso adicional establecido en el presupuesto provincial que determinare el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo;

d) por la venta de publicaciones, formularios y otros bienes y servicios conforme el ordenamiento vigente; y

e) así como cualquier otro ingreso recibido por legado, donación o asignado por otra norma.

La Agencia de Recaudación Fueguina tendrá, con arreglo al ordenamiento jurídico, amplias facultades de administración y disposición de los bienes propios y de los recursos asignados.

A tal efecto, el director ejecutivo podrá asignar y redistribuir los fondos que le correspondan a la Agencia de Recaudación Fueguina, a proyectos, programas, premios, tareas y actividades, así como para determinar la planta de personal, su distribución y la asignación de dotaciones a las distintas unidades del organismo y efectuar las inversiones que resulten necesarias para la mejor consecución de los compromisos de gestión asumidos.

Artículo 20.- La Agencia de Recaudación Fueguina es titular de todos los recursos enumerados en el artículo anterior; recursos que no podrán ser afectados por ningún poder del Estado. Los fondos correspondientes que no fuesen utilizados al finalizar el ejercicio pasarán a incrementar los recursos del año siguiente.

Artículo 21.- El director ejecutivo elaborará el proyecto de presupuesto de la Agencia de Recaudación Fueguina debiendo observar los principios de transparencia en la gestión, eficiencia y asignación racional en el uso de los recursos.

Artículo 22.- La Agencia de Recaudación Fueguina dispondrá de un sistema de contratación de personal por concursos, donde los cargos deberán ser ocupados por quienes surjan de concurso público convocado con la antelación suficiente, conforme lo establezca el director ejecutivo, y aprobado por el Poder Ejecutivo provincial.

Artículo 23.- Los derechos y obligaciones del personal de la Agencia de Recaudación Fueguina se regirán por las disposiciones de la Ley Marco de Regulación del Empleo Público 22140. Las condiciones de trabajo, empleo y las relaciones entre empleadores y trabajadores o las organizaciones que los representen serán establecidas mediante los mecanismos de negociación colectiva previstos en la Ley provincial 113.”.

Artículo 24.- Deróguese la Ley provincial 603.

Capítulo V
Normas Transitorias

Artículo 25.- Al personal proveniente de los organismos mencionados en el artículo 2º, que pase a formar parte de la Agencia de Recaudación Fueguina, se le asegurará:

a) el reconocimiento de la antigüedad de cada agente en el sector público provincial;
b) el mantenimiento de su retribución al momento de la puesta en vigencia de la agencia; y
c) la estabilidad de todo el personal de planta permanente al momento de la entrada en vigencia de la presente ley.

El director ejecutivo de la Agencia de Recaudación Fueguina podrá disponer la apertura de un período de opción para incorporación voluntaria de agentes provenientes de otras áreas del Estado provincial, en caso de juzgarlo necesario y bajo idénticas condiciones de transferencia a las descriptas precedentemente.

Artículo 26.- Facúltase al Ministerio de Economía a efectuar las reasignaciones presupuestarias que se requieran para la puesta en funcionamiento y operación de la Agencia de Recaudación Fueguina.

Artículo 27.- Facúltase al Poder Ejecutivo a disponer las medidas necesarias para la implementación y el funcionamiento de la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF), en todos sus aspectos administrativos, presupuestarios y de personal.

Artículo 28.- Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial.”.

Moción

Sr. BILOTA IVANDIC.— Pido la palabra.

Señor presidente: Quiero hacer algunas consideraciones con respecto a este proyecto de ley, y solicito autorización para leer algunos párrafos de la fundamentación.

Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración lo solicitado por el legislador Bilota Ivandic.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.

Sr. BILOTA IVANDIC.— El Poder Ejecutivo provincial ha tomado la decisión de mejorar los estándares de eficiencia de la Administración Pública provincial.

Esta Agencia de Recaudación Fueguina remplazará a la actual Dirección General de Rentas, dirección que responde actualmente a una estructura burocrática, rígida, que depende funcionalmente del Ministerio de Economía. Esto conlleva aumentos en los tiempos y costos administrativos, ya que no puede ejecutar nada por sí misma.

Lo que se pretende con esta ley, señor presidente, es dotar a este nuevo organismo, a esta agencia de recaudación, de autonomía financiera y administrativa, facilitando la ejecución de políticas tributarias; reducir costos de interacción entre los organismos del Estado provincial y de los contribuyentes; implementar por sí la ejecución y recaudación de las políticas tributarias definidas por el Poder Ejecutivo.

Con esta agencia se pretende dotar a su personal de elevados niveles de profesionalización y especialización; certificar procedimientos mediante normas internacionales de calidad; y avanzar hacia una armonización fiscal de las bases imponibles y alícuotas existentes, entre las facultades impositivas provinciales y municipales.

Asimismo, y como uno de los ejes y lineamientos de la política tributaria, esta agencia de recaudación elaborará un plan anual de fiscalización que permitirá contrarrestar el uso indebido del convenio multilateral, respecto del cual se ha podido advertir un elevado índice de evasión.

En esta agencia se van a fusionar distintas áreas de gobierno, tales como la de Ingresos Públicos, Catastro, Asuntos Dominiales, Información Territorial y, por supuesto, la Dirección General de Rentas.

Va a ser conducida por un director ejecutivo, que será designado y removido por el propio Poder Ejecutivo; y contará con un Consejo Asesor de Impuestos Provinciales y Regalías, que tendrá como objeto elaborar un proyecto de coordinación fiscal entre el Estado provincial y los estados municipales.

Estará integrado por el director ejecutivo de la agencia, un representante de Ministerio de Economía y cinco integrantes más, que la reglamentación del Poder Ejecutivo establecerá, obviamente todos ellos con función en carácter ad honórem.

A este respecto, quiero señalar que el Consejo Profesional de Ciencias Económicas ha manifestado formalmente, al Poder Ejecutivo, su interés y acompañamiento a la creación de esta agencia, y en participar del Consejo Asesor mencionado, señalándolo como un hecho sumamente destacable que interesa sobremanera a los profesionales matriculados.

Por todo ello, señor presidente, pido que se ponga a consideración el proyecto, requiriendo obviamente el acompañamiento del resto de los legisladores.

Sr. BLANCO.— Pido la palabra.

Señor presidente: Solamente es para hacer una aclaración de algo que -según dijo recientemente el legislador preopinante- va a quedar sujeto a la reglamentación.

Ayer, cuando se discutió en la reunión, entendí que iba a quedar en la ley que este Consejo Asesor esté compuesto por un representante de cada uno de los municipios, para que no esté sujeto a los vaivenes de las relaciones entre las instituciones. Es decir, que quede establecido con un representante de cada municipio, uno del Poder Legislativo y un del Consejo Profesional.

Es lo que ayer hablamos con la persona que nos vino a explicar el proyecto. Esto es para que no quede atado a la reglamentación, porque usted sabe que hoy podemos ser amigos y mañana no; y que, de esta forma, sean representados institucionalmente cada uno de los municipios y la Legislatura.

Moción

Sr. BILOTA IVANDIC.— Pido la palabra.

Señor presidente: Solicito un cuarto intermedio, para ponernos de acuerdo con la formulación del texto.

Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración la moción del legislador Bilota Ivandic.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.

Cuarto Intermedio

- Son las 15:44.
- A las 15:46.

Sr. PRESIDENTE.— Se levanta el cuarto intermedio.

Moción

Sr. BLANCO.— Pido la palabra.

Señor presidente: Hay que redactar que de los cinco miembros, un representante será del municipio de Ushuaia, uno del de Río Grande, uno del de Tolhuin, uno del Poder Legislativo y uno del Consejo Profesional de Ciencias Económicas.

Sr. PRESIDENTE.— ¿Qué artículo es?

Sr. BLANCO.— El artículo 13: “El Consejo Asesor de Impuestos Provinciales y Regalías Provinciales estará integrado por el director ejecutivo –que presidirá el presente consejo-, un representante del ministerio de Economía y cinco lugares vacantes”. Aquí, en vez de “lugares

vacantes” debe decir “y cinco representantes, uno por el municipio de Ushuaia, uno por el municipio de Río Grande, uno por el municipio de Tolhuin, uno por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y uno por la Legislatura provincial”, así quedaría integrado.

Sr. VILLEGAS.— Pido la palabra.

Señor presidente: Con respecto a lo que prescribe en el artículo 11, en relación de la Cuenta Incentivo, ¿tengo una seria de duda o estamos creando un superdirector a través de esta norma? ¿O yo soy el equivocado? Quisiera que se aclare porque, con respecto al incentivo, el director ejecutivo estaría autorizado a que también lo cobre, pero a la vez es la autoridad que tiene la facultad de reglamentarlo.Entonces él mismo se reglamenta cómo se va a cobrar el incentivo en el ámbito de este órgano de gobierno.

Y me parece que es un tema a tenerlo presente porque, además, tiene una remuneración fijada, en los primeros artículos, en carácter de secretario. Es decir, cobrará como secretario y además percibirá el incentivo, de acuerdo a como está redactada esta norma. Y siendo un funcionario político, no se sí legalmente se podrá realizar de la manera en que está plasmado en este texto.

Más allá de eso, también quiero dejar en claro que oportunamente votaré por la negativa pero, independientemente de eso, me parece que puede llegar a ser de interés de la Cámara que vamos a tener a un funcionario que cobrará como tal y también lo hará a través del incentivo que le corresponde a los trabajadores de la Administración Pública. Nada más.

Sr. PRESIDENTE.— Señores legisladores: les aclaro que seguimos en comisión.

Sra. URQUIZA.— Pido la palabra.

Señor presidente: Adelanto mi voto negativo, básicamente teniendo en cuenta el poco tiempo que hemos tenido para el análisis y por eso surgen estas cosas, incluso de la simple lectura.

El artículo 13 menciona al Consejo Asesor, del cual recién se aclararon los integrantes.

Después, el artículo 14 menciona que los miembros del Consejo Asesor ejercerán sus funciones ad honórem.

El artículo 15 dice que la agencia de recaudación contará con un gabinete asesor que tendrá a su cargo el seguimiento trimestral y demás de los asuntos, la reglamentación. Y esto habla de “gabinete asesor”.

El artículo 16 dice “el Consejo Asesor” del que hablábamos en el artículo 13.

El artículo 14 dice que las funciones se ejercerán ad honórem, y el 16 dice: “El Consejo Asesor estará integrado por cuatro miembros que tendrán el cargo de subsecretario provincial y la reglamentación establecerá las modalidades y condiciones, y el procedimiento de su funcionamiento.

¿Yo interpreto mal o el artículo 16 corresponde al Consejo Asesor?

- Hablan varios a la vez.

Sr. PRESIDENTE.— No dialoguen; pidan la palabra.

Sra. URQUIZA.— Es el artículo 16. Gracias, señor presidente.

Sra. MARTÍNEZ.— Pido la palabra.

Señor presidente: Acá vemos que uno es el Consejo Asesor, que está muy claro en el artículo 13. Después, tenemos el artículo 14: “los miembros” del Consejo Asesor.

En el artículo 16 es el Consejo Asesor, y otra cuestión es el Gabinete Asesor.

Sr. LÖFFLER.— Pido la palabra.

Señor presidente: El artículo16 debiera decir: “el Consejo Asesor estará integrado”, y que continúe la redacción que tiene actualmente. Nada más que eso.

- Hablan varios a la vez.

Sr. LÖFFLER.— Donde dice “Consejo Asesor”, debería decir “Gabinete Asesor”.
Sr. PRESIDENTE.— ¿Cómo quedaría redactado?
Sra. URQUIZA.— Pido la palabra.

Señor presidente: No cuestiono el contenido ni la integración, ni demás. Lo que digo es que, como dijo el legislador Löffler, no es el Consejo Asesor sino “el Gabinete Asesor”.
Sr. BILOTA IVANDIC.— Pido la palabra.

Señor presidente: Solicito que se corrija el artículo 16 y que se dé lectura a la redacción, tal como quedaría.

El artículo 16 debe decir: “El Gabinete Asesor estará integrado por cuatro miembros que tendrán cargo de subsecretario provincial. La reglamentación establecerá las modalidades, condiciones y el procedimiento del funcionamiento.” Se cambia “Consejo” por “Gabinete”. Este es un error de redacción.
Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración de los señores legisladores en comisión, el proyecto de ley leído por Secretaría, con las modificaciones introducidas por los legisladores Blanco y Bilota Ivandic.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.

Moción

Sr. BILOTA IVANDIC.— Pido la palabra.

Señor presidente: Solicito constituir la Cámara en sesión.
Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración la moción del legislador Bilota Ivandic.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.

En Sesión

Sr. PRESIDENTE.— Por tratarse de un proyecto de ley, corresponde votación nominal, en general y en particular, que se toma por Secretaría Administrativa.
Sec. ADMINISTRATIVO.— Procedo a tomar la votación.

- Votan por la afirmativa los legisladores Bilota Ivandic, Blanco, Carrasco, Freites, Furlan, Gómez, Harrington, Martínez, Romano y Rubinos.
- Votan por la negativa los legisladores Boyadjian, Löffler, Urquiza y Villegas.

Sec. ADMINISTRATIVO.— Resultan 10 votos por la afirmativa y cuatro por la negativa.
Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.

- 5 -

Asunto Nº 10/16

Modificación Ley Impositiva

Moción

Sr. BILOTA IVANDIC.— Pido la palabra.

Señor presidente: Por tratarse de un proyecto de ley sin dictamen, solicito constituir la Cámara en comisión.

Sr. PRESIDENTE.— Solicito al Cuerpo pasar a un cuarto intermedio, para que se termine de repartir el proyecto consensuado. Los que estén por la afirmativa a mano alzada.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.

Cuarto Intermedio

- Son las 15:50.
- A las 15:56.

Sr. PRESIDENTE.— Se levanta el cuarto intermedio.

Se pone a consideración la moción planteada por el legislador Bilota Ivandic de pasar el Cuerpo a comisión por tratarse de un proyecto de ley.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.

En Comisión

Sec. LEGISLATIVA.— "La Legislatura de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Sanciona con fuerza de ley

Modificación de la Ley Impositiva

Artículo 1º.- Sustitúyese el punto 3, del artículo 9º, de la Ley provincial 440, por el siguiente texto:

'3.- Dirección de General de Catastro
Establécese que, para la valuación de las tasas retributivas de los servicios que a continuación se detallan, se tomará como base en Unidad de Medida (U.M.) el equivalente al valor de mercado en la provincia de un litro de nafta súper YPF:

3.1.) Certificados Catastrales:

a) por cada certificado catastral, solicitado por escrito para el otorgamiento de actas notariales, inscripción de declaratorias de herederos, títulos, etcétera, 25 U.M.;
b) por informes, certificados o valuaciones, para cada parcela, 25 U.M.;
c) todo trámite urgente, dentro de las 72 horas subsiguientes a la presentación y con documentación en regla, tributará el doble de las tasas establecida.

3.2.) Copias:

a) por fotocopia de cada foja de una carpeta de antecedentes catastrales, 0,20 U.M.;
b) por fotocopia de cada plano catastral de manzana (plancheta), 10 U.M.;
c) por fotocopia parcial (tamaño A4) de plano de mensura, dos U.M.

3.3.) Planos de Subdivisión en Propiedad Horizontal:

a) por cada unidad funcional o complementaria que se originen en las subdivisiones bajo el régimen de propiedad horizontal, 30 U.M.;
b) por la reforma de planos registrados que no originen nuevas unidades funcionales ni modifiquen las ya existentes, 20 U.M.;
c) cuando la reforma o reformas a introducir en planos registrados sean a efectos de originar nuevas unidades funcionales o complementarias, o

modificar las ya existentes, se pagará además de lo establecido en el inciso anterior por cada unidad funcional y complementaria que se origine o modifique, 20 U.M.;

d) por pedido de anulación de planos registrados, 40 U.M.;
e) por primera visación provisoria de todo plano de mensura y subdivisión para someter al régimen de propiedad horizontal, 30 U.M.;
f) por reposición de fojas en todo expediente de mensura, por foja, tres U.M.;
g) por pedido de urgente despacho dentro de las 72 horas, 50 U.M. por cada unidad funcional o complementaria que origine el plano;
h) por corrección de un plano o registro para subsanar errores u omisiones imputables al profesional que lo suscribe, 50 U.M.;
i) cuando se tramite un plano de subdivisión de un inmueble propiedad del Estado nacional, provincial o municipal, así como sus entes autárquicos que no sea realizado por administración, el profesional deberá abonar las tasas retributivas previstas en esta ley.

3.4.) Reproducciones:

a) por cada copia de plano reproducida en sistema heliográfico se pagará por superficie, tomando como unidad de medida el tamaño oficio, una tasa de una U.M.;
b) por fotocopia en blanco y negro de aerofotogramas, tres U.M.;
c) por copia heliográfica de hojas de restitución fotogramétrica a escalas 1/1000, 1/5000, 1/10000, por hoja 10 U.M.;
d) por graficaciones color parciales de archivos de restitución fotogramétrica o SIG se pagará por superficie, tomando como unidad de medida el tamaño oficio, una tasa de dos U.M.;
e) por graficaciones parciales de imágenes satelitales en papel opaco se pagará por superficie, tomando como unidad de medida el tamaño oficio, una tasa de cuatro U.M.;
f) por graficaciones parciales de imágenes satelitales en papel brillante se pagará por superficie, tomando como unidad de medida el tamaño oficio, una tasa de cinco U.M.;
g) por archivos digitales de imágenes satelitales no rectificadas, una U.M. cada 1000 pixeles;
h) por archivos digitales de imágenes satelitales rectificadas, dos U.M. cada 1000 pixeles;
i) por archivos digitales de restitución, 100 U.M. el primer megabyte de tamaño del archivo sin comprimir y 50 U.M. los siguientes megabytes o fracción del mismo.

- Ocupa la Presidencia la vicepresidenta primera Myriam Martínez.

3.5.) Planos de mensura:

a) por visación provisoria de todo plano de mensura, 30 U.M.;
b) por reposición de fojas en todo expediente de registro de planos, por foja, tres U.M.;
c) por pedido de urgente despacho de expediente de mensura dentro de las 72 horas, 50 U.M. por parcela originada;
d) por cada unidad parcelaria que originen los planos de mensura o subdivisión, a registrar, 30 U.M.;
e) por cada parcela originada que supere una hectárea deberá complementarse la tasa del inciso anterior con un adicional por hectárea de cinco U.M.;
f) por anulación de planos registrados, 60 U.M.;
g) por corrección de un plano registrado para subsanar errores u omisiones

imputables al profesional que lo suscribe, 50 U.M.;

h) por ratificación de un plano encuadrado en el Decreto territorial 348/86, 60 U.M.;

i) cuando se tramite un plano de mensura de inmueble propiedad del Estado nacional, provincial o municipal, así como de sus entes autárquicos que no sea realizado por administración, el profesional deberá abonar las tasas retributivas previstas en la presente ley, de cinco U.M..

3.6.) Reingresos - Urgencias:

a) por cada reingreso de trámites se abonará el 50% de la tasa establecida en cada caso;

b) por todo trámite urgente, dentro de las 72 horas hábiles subsiguientes a la presentación, con documentación en regla, se tributará el doble de la tasa establecida en los incisos anteriores.

3.7.) Disposiciones Generales:

I. Título Ejecutivo: en todos los casos será suficiente título ejecutivo la certificación de multa o la certificación de deuda emitida por la Dirección de Catastro;

II. Redondeo: Las fracciones que surjan del resultado de la valuación realizada en unidades de medida deberán absorberse por redondeo a favor del administrado;

III. Cuenta Especial y Fondo Específico: el total de los fondos recaudados serán de carácter específico con destino a gastos operativos y de equipamientos. Se depositarán en una cuenta especial de la Dirección General de Catastro e Información Territorial de la provincia creada para tal fin.

Artículo 2°.- Incorpórase a continuación del artículo 9° ter, de la Ley provincial 440, lo siguiente:

Tasas Retributivas de Servicios Especiales del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

Artículo 9° quáter.- Por los servicios que a continuación se detallan, prestados por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social o reparticiones que de él dependan, se pagarán las siguientes tasas:

a) Tasa en relación a rúbrica de libros:

1) por rúbrica de libros obligatorios según lo establecido por el artículo 52 de la Ley nacional 20744, por hoja útil, $1;

2) por rúbrica de hojas móviles de libros según lo establecido por el artículo 52 de la Ley nacional 20744, por hoja, $1;

3) por rúbrica de libros de actas obligatorios según lo establecido por el artículo 21 de la Ley provincial 90, por libro, $300;

4) por rúbrica de libros en caso de extravío acompañando certificado expedido por autoridad competente, por libro, $600;

5) por rúbrica de planillas de control de kilometraje recorrido, por hoja, $1;

6) por rúbrica de hojas móviles libro de viajantes, según lo establecido en el artículo 10 de la Ley nacional 14546, por hoja $1;

7) por rúbrica de libretas de trabajo, por libreta, $10;

8) por rúbrica de microfichas, por folio contenido en cada microficha, $1;

9) por rúbrica de libro de enfermedades y accidentes, según lo establecido en el artículo 21, inciso 1.2, Decreto nacional 351/79, reglamentario de la Ley nacional 19587, por libro, $300;

10) por rúbrica del libro de contaminantes ambientales, según lo establecido en el artículo 38, del Decreto nacional 351/79, reglamentario de la Ley nacional 19587, por libro, $300.”.

- Ocupa la Presidencia el vicegobernador Juan Carlos Arcando.

Artículo 3º.- Incorpórase, a continuación del artículo 42 de la Ley provincial 440, el siguiente capítulo:

Capítulo V

Fondo de Provincial de Prevención y Consumo de Productos
que Causan Enfermedades de Carácter Adictivo

Artículo 42 bis.- Créase el Fondo Provincial de Prevención al Consumo de Productos que causan enfermedades de carácter adictivo.
Artículo 42 ter.- La finalidad de dicho fondo será el financiamiento de obras de infraestructura sanitaria, campañas de prevención, asistencia directa de la salud pública para atender las causas y desalentar el consumo de productos comerciales o sustancias que provocan adicción o trastornos de la conducta, perjudiciales a la salud de los consumidores y el riesgo de daño a la salud de terceros.
Artículo 42 quáter.- Para su financiamiento se establece una contribución especial sobre el expendio minorista de cigarrillos, cigarros, cigarritos, rabillos, trompetillas y demás manufacturas de tabaco para ser consumidos en todas sus formas y envases, bebidas alcohólicas y bebidas energizantes e hipertónicas –formuladas a base de cafeína y taurina con glucoronolactona e inositol, entre otros ingredientes-, de libre comercialización, destinados al consumo de la población, según el detalle que informe la Agencia de Recaudación Fueguina, utilizando como parámetro la nomenclatura común del Mercosur.
Articulo 42 quinquies.- El fondo implementado en el presente capítulo se formará aplicando una alícuota del 20% sobre los ingresos brutos obtenidos por la comercialización minorista de los productos establecidos en el artículo anterior.

Dada la afectación especifica de los presentes recursos, los mismos no serán coparticipables a los municipios, teniendo en cuenta que los gastos que se cubren con estos recursos dan cobertura al conjunto de la comunidad de la provincia.”.

Sr. BLANCO.— Pido la palabra.

Señor presidente: Ayer, cuando nosotros estábamos viendo esta parte del proyecto de ley, consultamos a gente de Ingresos Públicos de la provincia, y quiero que quede clara la consulta que hicimos y la respuesta obtenida, para no dar una errónea interpretación.

No estamos creando un nuevo impuesto ni una nueva alícuota, sino que de lo que se recauda actualmente –por lo menos, esa es la explicación que nos dio- de ingresos brutos, por estos rubros, el 20% de esa recaudación se detrae previo a la coparticipación y se destina a este fondo.

Quiero que quede claro eso: que no es sobre lo que se recauda, un 20% más, sino que de lo que se recauda se detrae un 20% y se destina a este fondo específico. No se está aumentando la alícuota, porque escuché comentarios en los medios de comunicación. No es así.

Aclaro que, en ese sentido, acompañaremos. No con la creación de una nueva tasa sino con la detracción del 20% de lo actualmente se recauda.

Sr. PRESIDENTE.— Queda en la versión taquigráfica lo planteado por el legislador Blanco.

Sec. LEGISLATIVA.— “Artículo 42 sexies.- Son sujetos pasivos de esta contribución, los contribuyentes que efectúen el expendio minorista de los mencionados productos, se faculta a la Agencia de Recaudación Fueguina para designar a los fabricantes, productores, mayoristas y distribuidores, en la calidad de agentes de percepción, por las operaciones de ventas que efectúen la comerciantes minoristas.

Entiéndase como 'comerciante minorista' aquel cuya actividad consista…”.

Sr. LÖFFLER.— Pido la palabra.

Señor presidente: Con respecto a la inquietud planteada por el legislador Blanco, de la lectura del artículo 42, si no hay creación de un tributo nuevo y simplemente se afecta a este fondo el 20% de lo recaudado por ingresos brutos, no debería hacer la aclaración de “dada la afectación especifica de los siguientes recursos los mismos no serán coparticipables a los municipios”; la coparticipación es previa, dijo el legislador preopinante.

Si la coparticipación fuese previa no lo diría en el párrafo siguiente, que acabo de leer.

El segundo párrafo del artículo 42 dice: “Dada la afectación específica de los presentes recursos, los mismos no serán coparticipables a los municipios, teniendo en cuenta que los gastos que se cubren con estos recursos dan cobertura al conjunto de la comunidad de la provincia”.

Entiendo que sí se está creando un fondo nuevo, del 20% de la alícuota; es un fondo nuevo que no es coparticipable con los municipios. Justamente, todo lo contrario a lo que usted ha dicho.

Moción

Sr. BLANCO.— Pido la palabra.

Señor presidente: Ante esta consulta, que le hicimos al encargado de Ingresos Públicos de la provincia en este sentido, lo que nos dijo fue que de lo recaudado de ingresos brutos, previo a la coparticipación, se detraía el 20% para la creación de este fondo específico de enfermedades adictivas, y que ese producido no iba a ser coparticipable, producto de que algún municipio que tiene tarea de salud lo reclame para sí.

Por eso, para que quede bien claro -si no, pidamos un cuarto intermedio para hacer una redacción acorde- que si se recaudan $100 de ingresos brutos por este concepto, se detrae el 20%, y ese 20% no es coparticipable a aquellos que tengan la función de salud. Eso se nos explicó. Porque si no, a los $100 le aumentamos el 20%, y esa parte no es coparticipable. Y esa no es la interpretación que dicen.

En ese sentido, nosotros lo acompañamos. Si hay un aumento de la alícuota, no vamos a acompañar.

Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración la moción del legislador Blanco.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.

Pasamos a un cuarto intermedio sobre bancas.

Cuarto Intermedio

- Son las 16:12.
-A las 16:20

Sr. PRESIDENTE.— Se levanta el cuarto intermedio.

Sr. BILOTA IVANDIC.— Pido la palabra.

Señor presidente: Es para hacer dos consideraciones; una, con respecto interpretación que hizo el legislador Blanco, en el encuentro de ayer, previo a esta reunión, este bloque coincidió con la interpretación, y lo hablamos con el secretario de Ingresos Públicos. Pero para evitar cualquier confusión respecto de una nueva imposición en la creación de un tributo o de aumento de una alícuota, eliminamos el artículo 3º.

Sr. PRESIDENTE.— Se hará el corrimiento, y se procede a leer el artículo 3º.

Sr. BLANCO.— Pido la palabra.

Señor presidente: Entiendo que el que se eliminó es el capítulo V.

Sr. BILOTA IVANDIC.— El artículo 3º se elimina por completo. Entiendo que es el artículo que contiene el capítulo.

Sr. PRESIDENTE.— Se continúa con la lectura del proyecto, tal como quedará redactado.
Sec. LEGISLATIVA.— "Artículo 3º.- Incorpórase, a continuación del artículo 42 septies, de la Ley provincial 440, el siguiente capítulo:

Capítulo VI
Fondo de Financiamiento para el Sistema Previsional

Artículo 42 octies.- Créase el Fondo de Financiamiento para el Sistema Previsional con afectación específica al sostenimiento del sistema previsional de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, el que se integrará con el producido derivado de una alícuota adicional del impuesto sobre los ingresos brutos del 3%, aplicable a las actividades gravadas por dicho impuesto, según el siguiente detalle: 651100, 652110, 652120, 652130, 652200, 652202, 652203, 659810, 659891, 659892, 659910, 659920, 659990, 661110, 661120, 661130, 661210, 661220, 661300, 662000, 671110, 671120, 671130, 671200, 671910, 671920, 671990, 672110, 672191, 672192, 672200, 672201.

Dada la afectación específica de los recursos del presente artículo, los mismos no serán coparticipables a los municipios, considerando asimismo que el sistema previsional los incluye.

La Agencia de Recaudación Fueguina establecerá por vía reglamentaria la forma y condiciones de recaudación de este adicional.".

Sr. RUBINOS.— Pido la palabra.

Señor presidente: La verdad es que a este asunto lo estuvimos analizando en el tiempo que pudimos. Dado el inconveniente que surgió con un tema muy sencillo -porque el asunto anterior del fondo era sencillo, lo habíamos explicado, lo habíamos consultado y nos habían asegurado que no se estaba creando ningún fondo- cuando consultamos todos estos ítems de los impuestos, nos aseguraron que eran todos referidos a la renta financiera, y en ningún caso afectaban a las tarjetas de créditos, al comercio, a los consumidores y a los vecinos de Tierra del Fuego.

¿Podríamos buscar la manera, en un listado a lo que nos referimos con todos estos números, para asegurarnos que no estamos afectando a nuestros vecinos, que no estamos poniéndole rentas a la tarjeta de crédito?

Sr. BLANCO.— Pido la palabra.

Señor presidente: Por ahí no me comuniqué con mi compañero de bloque pero esto tenía dictamen previo, en la Legislatura anterior. Y nos cercioramos de que todas y cada una de las aplicaciones se correspondían al sistema financiero, y no están alcanzadas las tarjetas de créditos. Pero si tienen el Código, no habría inconveniente de traerlo pero este asunto, salvo la incorporación de ese fondo anterior, tenía dictamen de la Comisión de Presupuesto en la Legislatura y no pudo ser tratado - usted recordará que la gobernadora se nos enfermó gravemente de la garganta y no pudimos hacer la sesión-, pero estaba para ser tratado ese día el dictamen. Y mi compañero de bancada no formaba parte de esta Cámara en esa época, por eso tiene toda la razón de solicitar la información.

Moción

Sr. BILOTA IVANDIC.— Pido la palabra.

Señor presidente: Si podemos hacernos de los códigos, no tenemos ningún problema. Pedimos un cuarto intermedio y se los ofrecemos al resto de los legisladores para hacer un chequeo.

Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración la moción del legislador Bilota Ivandic.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.

Cuarto Intermedio

- Son las 16:27.
-A las 16:56

Sr. PRESIDENTE.— Se levanta el cuarto intermedio.
Por Secretaria Legislativa, se continúa con la lectura del proyecto.
Sec. LEGISLATIVA.— "Artículo 4°.- Establécese que el capítulo V, que incluye a los artículos 43 y 44 de la Ley provincial 440, se denominará Capítulo VII- Disposiciones Varias.".
Artículo 5°.- Las disposiciones establecidas en los artículos 1º, 2° y 3° de la presente ley regirán para los hechos imponibles generados a partir del primer día del mes siguiente al de su publicación.
Artículo 6º.- Autorízase al Poder Ejecutivo provincial a elaborar un texto ordenado de la Ley provincial 440.
Artículo 7º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.".
Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración, en comisión, el proyecto de ley leído por Secretaría con las modificaciones introducidas.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.

Moción

Sr. BILOTA IVANDIC.— Pido la palabra.
Señor presidente: Solicito que el Cuerpo se constituya en sesión.
Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración la moción del legislador Bilota Ivandic.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.

En Sesión

Sr. PRESIDENTE.— Por tratarse de un proyecto de ley se tomará votación nominal en general y en particular.
Sec. ADMINISTRATIVO.— Procedo a tomar la votación.

- Votan por la afirmativa los legisladores Bilota Ivandic, Blanco, Carrasco, Freites, Furlan, Gómez, Harrington, Martínez, Romano, Urquiza y Villegas.
- Votan por la negativa Boyadjian, Löffler y Rubinos.

Sec. ADMINISTRATIVO.— Resultan 11 votos por la afirmativa y tres por la negativa.
Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.

- 6 -

Asunto Nº 11/16

Código Fiscal

Sr. BILOTA IVANDIC.— Pido la palabra.
Señor presidente: Solicito que la Cámara se constituya en comisión.
Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración lo propuesto por legislador Bilota Ivandic.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.

En Comisión

Sr. PRESIDENTE.— El Cuerpo está en comisión, para la aprobación del proyecto de ley, que se leerá por Secretaria.
Sec. ADMINISTRATIVO.— "La Legislatura de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Sanciona con fuerza de ley

Código Fiscal

Libro Primero
Parte General

Título Primero
Disposiciones Comunes

Ámbito de Aplicación de las Normas

Artículo 1º.- Este código regirá respecto de la determinación, fiscalización, percepción de todos los tributos y aplicación de sanciones por infracciones materiales y formales vinculadas con tributos que se impongan en el ámbito de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur por los organismos de la Administración central, de acuerdo a las leyes y normas complementarias.

Asimismo, las disposiciones contenidas en el libro primero de este código se aplicarán supletoriamente a las leyes tributarias especiales.

Vigencia de las Normas Tributarias.

Artículo 2º.- Toda ley, decreto, resolución general y decisión de la autoridad de aplicación, cualquiera sea su forma, dictada a los fines previstos en el artículo 1º de este código, tiene vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la provincia, conforme el artículo 112 de la Constitución de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, salvo que la propia norma disponga otra fecha de vigencia.

Hecho Imponible.

Artículo 3º.- Se considera hecho imponible a todo hecho, acto, operación o situación de vida económica, de los que este código o las leyes tributarias especiales hagan depender el nacimiento de la obligación tributaria.

Nacimiento de la Obligación Tributaria.

Artículo 4º.- La obligación tributaria nace al producirse el hecho, acto o circunstancia previsto en la ley. Los medios o procedimientos para la determinación de la deuda revisten carácter meramente declarativos.

De la Interpretación y Aplicación de las Leyes.

Artículo 5°.- En la interpretación de las disposiciones de este código o de las leyes tributarias sujetas a su régimen, se atenderá al fin de las mismas y a su significación económica. Solo cuando no sea posible establecer el sentido o alcance de las mismas a través del análisis, a través de su texto o de su espíritu, podrá recurrirse a los distintos métodos de interpretación aplicables en el derecho privado.

Aplicación Supletoria.

Artículo 6º.- Para los casos que no puedan ser resueltos por las disposiciones pertinentes de este código o de una ley tributaria especial se recurrirá supletoriamente a las disposiciones de

las siguientes normas de acuerdo al orden de prelación que se enumera a continuación, a saber: la Ley nacional 11683, de Procedimiento Tributario de la Nación y sus modificaciones, la Ley provincial 141, de Procedimiento Administrativo de la provincia y el Código Procesal Civil, Comercial, Laboral, Rural y Minero de la provincia.

En caso de insuficiencia de las normas de aplicación supletoria se recurrirá a los principios generales de derecho, teniendo en cuenta la finalidad y naturaleza de las normas fiscales.

Realidad Económica.

Artículo 7º.- Para determinar la verdadera naturaleza de los hechos imponibles se atenderá a los actos, situaciones o relaciones económicas que efectivamente realicen, persigan o establezcan los contribuyentes.

Cuando estos sometan tales actos, situaciones o relaciones a formas y/o estructuras jurídicas que no sean las que el derecho privado prevea o autorice para representar adecuadamente la cabal intención económica y efectiva de los contribuyentes se prescindirá, a los efectos de la consideración del hecho imponible real, de las formas y estructuras jurídicas inadecuadas y se considerará, a los fines de la configuración de la relación tributaria, como encuadradas en las formas o estructuras que el derecho privado les aplicará con independencia de las escogidas por los contribuyentes.

Términos.

Artículo 8º.- Los términos o plazos establecidos en este código y en las leyes tributarias especiales se refieren a días hábiles administrativos.

Respecto del título décimo, el juicio de ejecución fiscal, se refiere a días hábiles judiciales.

Para hacer efectiva la sanción de clausura se computarán días corridos.

Cuando la fecha de vencimiento fijada por leyes, decretos o resoluciones, para la presentación de las declaraciones juradas, pagos de impuestos, anticipos o vencimientos coincida con día no laborable, feriado o inhábil -nacional, provincial o municipal- en el lugar donde deba cumplirse la obligación, el pago o presentación se considerarán realizados en término si se efectúan hasta el primer día hábil siguiente.

En caso de recibirse notificación en día inhábil o feriado, se tendrá por efectuada el primer día hábil siguiente.

Plazo General Subsidiario.

Artículo 9º.- Cuando no se haya establecido un plazo especial para las citaciones, intimaciones y emplazamientos, o para cualquier otro acto que requiera la intervención del contribuyente y/o responsable, el mismo será de 10 días hábiles, sin perjuicio de la excepción establecida por el artículo 31 del presente código.

Efectos.

Artículo 10.- Los plazos administrativos obligan por igual y sin necesidad de intimación alguna a la Agencia de Recaudación Fueguina, a los funcionarios públicos personalmente y a los interesados en el procedimiento.

Secreto Fiscal.

Artículo 11.- Las declaraciones juradas, comunicaciones, informes y escritos que los contribuyentes, responsables o terceros presenten ante la administración son secretos en cuanto en ellos se consignen informaciones referentes a la situación u operaciones económicas de aquellos, a su persona o las de sus familiares.

La información allí expresada no será admitida como prueba en causas judiciales, debiendo los jueces rechazarla de oficio, salvo que sea ofrecida por el mismo contribuyente, responsable o tercero, y siempre que no revele datos de terceros o en las cuestiones de familia y en los procesos criminales por delitos comunes cuando aquella se halle directamente relacionada con los hechos que se investiguen.

El deber del secreto no alcanza a la utilización de las informaciones por la administración para la fiscalización de obligaciones tributarias diferentes de aquellas para las que fueron obtenidas o para su uso con la Unidad de Información Financiera o el organismo que en el futuro lo reemplace, ni subsiste previo acuerdo de reciprocidad, frente a los pedidos

de informes de las municipalidades y comunas de la provincia, del fisco nacional o de fiscos provinciales. Tampoco rige el secreto para el supuesto en que, por desconocerse el domicilio del contribuyente o responsable, sea necesario recurrir a la notificación por edictos.

Tampoco rige el secreto fiscal para personas, empresas o entidades a quienes la administración encomiende la realización de relevamientos, estadísticas, sistemas de computación, procedimiento de información y otras cuestiones para el cumplimiento de sus fines. En este caso, para las entidades o personas intervinientes y para el personal de ellas, rigen las prohibiciones establecidas en este código y, en el supuesto que divulguen, reproduzcan o utilicen la información suministrada u obtenida con motivo o en ocasión de la tarea encomendada por la administración serán pasibles de la pena prevista en el artículo 156 del Código Penal. El uso de la facultad establecida en este párrafo debe estar debidamente fundamentada por el director ejecutivo.

Título Segundo
Domicilio Fiscal

Concepto.

Artículo 12.- A los efectos de la aplicación de este Código, de las leyes tributarias especiales y normas legales complementarias, se considerará como domicilio fiscal de los contribuyentes y demás responsables de impuestos, tasas o contribuciones los que se establecen en el presente título, los que serán válidos para todos los efectos administrativos y judiciales.

1. Se entiende por domicilio fiscal de las personas físicas los que se indican a continuación, en el siguiente orden:
   a) lugar de residencia permanente o habitual;
   b) subsidiariamente, si hubiera dificultad para su determinación, el lugar en el que ejerzan su actividad comercial, industrial, profesional, establecimiento o medio de vida.
2. Se entiende por domicilio fiscal de las personas jurídicas los que se indican a continuación, en el siguiente orden:
   a) lugar dónde se encuentre su dirección o administración;
   b) subsidiariamente, si hubiera dificultad para su determinación, el lugar donde desarrollen su actividad o establecimiento principal. Cuando no coincida con el lugar donde esté situada la dirección, administración o explotación principal y efectiva de sus actividades dentro de la jurisdicción provincial, este último deberá ser el denunciado como domicilio fiscal.

Cuando no se hubiere denunciado el domicilio fiscal y la agencia de recaudación fueguina conociere alguno de los domicilios previstos en el presente artículo o cuando se comprobare que el domicilio denunciado no es el previsto en el presente artículo, o fuere físicamente inexistente, quedare abandonado, desapareciere, o se alterase o suprimiese su numeración, y la Agencia de Recaudación Fueguina conociere el lugar de su asiento podrá declararlo de oficio como domicilio fiscal, conforme al procedimiento que determine la reglamentación.

Cuando no fuere posible la determinación del domicilio fiscal por la Agencia de Recaudación Fueguina, conforme a lo previsto en los párrafos anteriores, la agencia podrá, de oficio, tenerlo por constituido en la sede de la agencia.

A los efectos de proceder de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo precedente, la agencia deberá publicar edictos en el Boletín Oficial por dos días.

La autoridad de aplicación podrá establecer mediante la reglamentación pertinente el carácter único del domicilio fiscal para todas las obligaciones tributarias que los contribuyentes y demás responsables mantienen con la Agencia de Recaudación Fueguina.

Efectos del Domicilio Fiscal.

Artículo 13.- El domicilio fiscal produce en el ámbito administrativo los efectos del domicilio constituido, siendo válidas, vinculantes y plenamente eficaces todas las notificaciones, emplazamientos y comunicaciones que allí se practiquen en los términos del artículo 45, de la

Ley provincial 141, de Procedimiento Administrativo o la que en un futuro la reemplace.

Sin perjuicio de la facultad otorgada por el artículo 19, puede constituirse domicilio especial al contestar vistas, resoluciones, citaciones, intimaciones y notificaciones, siempre que ello no obstaculice la prosecución del trámite administrativo, la determinación y/o percepción de los tributos, según el caso.

Domicilio Fiscal Electrónico.

Artículo 14.- Se entiende por domicilio fiscal electrónico al sitio informático personalizado, seguro, registrado por los contribuyentes y responsables para el cumplimiento de las obligaciones fiscales y para la entrega o recepción de comunicaciones de cualquier naturaleza.

Su constitución, implementación, funcionamiento y cambio se efectuará conforme a las formas, requisitos y condiciones que establezca la autoridad de aplicación.

Dicho domicilio producirá en el ámbito administrativo los mismos efectos indicados en el primer párrafo del artículo 13.

La autoridad de aplicación podrá disponer, con relación a aquellos contribuyentes o responsables que evidencien acceso al equipamiento informático necesario, la constitución obligatoria del domicilio fiscal electrónico, conforme lo determine la reglamentación, la que también podrá habilitar a los contribuyentes o responsables interesados para constituir voluntariamente domicilio fiscal electrónico.

Domicilio Fuera de Jurisdicción.

Artículo 15.- Cuando los contribuyentes o demás responsables se domicilien fuera del territorio de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur están obligados a constituir un domicilio tributario dentro de la provincia.

Si no se cumpliere con lo establecido en precedencia, se considerará como domicilio el último de los domicilios que tenga o haya tenido de acuerdo al artículo 12 o, en defecto, el de su agente o representante en la provincia.

En caso de tratarse de personas físicas que se inscriban en el impuesto sobre los ingresos brutos dentro de la categoría de contribuyentes locales o régimen simplificado, se presumirá sin admitir prueba en contrario que, no realizan operaciones que configuren sustento territorial en jurisdicción ajena a esta. En caso de existir sustento territorial en otras jurisdicciones, no podrá solicitar devolución del impuesto abonado en esta jurisdicción.

Cambio de Domicilio.

Artículo 16.- Los contribuyentes y responsables están obligados a denunciar cualquier cambio de domicilio fiscal en la forma que determine la reglamentación dentro de los 15 días de efectuado quedando, en caso contrario, sujeto a las sanciones que este código establezca al respecto. La agencia únicamente quedará obligada a tener en cuenta el cambio de domicilio si el mismo hubiere sido realizado conforme lo determine la reglamentación, caso contrario, el mismo no surtirá efecto vinculante alguno, subsistiendo el anterior,a todos los efectos.

No habiéndose denunciado el cambio de domicilio, y sin perjuicio de las sanciones que correspondan, se reputará subsistente el último domicilio que se haya comunicado, en la forma debida, o que haya sido determinado como tal por la agencia de recaudación fueguina, en ejercicio de las facultades conferidas por este título.

Si se denunciara el cambio de domicilio de acuerdo a los párrafos precedentes pero el contribuyente o responsable tuviere actuaciones administrativas en curso, deberá además cumplir con la carga que le impone el artículo a continuación.

Comunicación del Cambio de Domicilio en Actuaciones Administrativas.

Artículo 17.- Una vez iniciado un trámite, ya sea por la administración o por un contribuyente, todo cambio del domicilio fiscal, además de ser comunicado de acuerdo con las disposiciones del artículo 16 y las normas dictadas por la agencia de recaudación fueguina, debe denunciarse de modo fehaciente en la actuación correspondiente para que surta plenos efectos legales en esas actuaciones.

Caso contrario, toda notificación se efectuará en el domicilio fiscal conocido en la actuación, cualquiera sea la instancia administrativa del trámite de que se trate. Ello sin perjuicio de la validez del domicilio denunciado conforme el artículo 16 para actuaciones de

fecha posterior al cambio de domicilio.
Informes para Obtener el Domicilio del Contribuyente.
Artículo 18.- Cuando a la Agencia de Recaudación Fueguina le resulte necesario conocer el domicilio de un contribuyente y este no surgiere de sus registros podrá requerir informes al Registro Nacional de las Personas, a la Justicia Electoral, a la Dirección de Personas Jurídicas, a la Administración Federal de Ingresos Públicos, organismos fiscales provinciales y, en general, a todo organismo público o privado hábil al efecto.

El domicilio obtenido permitirá cursar las notificaciones que correspondan al responsable y/o apoderado denunciados, quienes más allá de exhibir elementos que prueben su desvinculación del contribuyente no servirán de oposición al cumplimiento si la comunicación que los desvincule no es implementada adjuntando los formularios y demás requisitos exigidos en la forma que la reglamentación determina.
Domicilio Especial.
Artículo 19.- Podrá admitirse la constitución de un domicilio especial cuando se considere que de ese modo se facilita el cumplimiento de las obligaciones.
Domicilio Postal.
Artículo 20.- Los responsables de los tributos empadronados cuya liquidación esté a cargo de la Agencia de Recaudación Fueguina podrán constituir, de modo fehaciente, un domicilio postal en cualquier punto del país a efectos de que le sean remitidas las boletas de gravámenes.
Características.
Artículo 21.- La constitución del domicilio se hará en forma clara y precisa, indicando calle, número, agregando piso, número o letra del inmueble, código postal, localidad y provincia, así como cualquier otro dato de utilidad a efectos de cursar la notificación o lo que pudiera corresponder.

Título Tercero
Notificaciones

Forma.
Artículo 22.- Las citaciones, notificaciones, intimaciones de pago, etcétera, serán practicadas en cualquiera de las siguientes formas:

1. por carta documento, por carta certificada con aviso especial de retorno con constancia fehaciente del contenido de la misma. El aviso de recibo o el aviso de retorno, en su caso, servirá de suficiente prueba de notificación siempre que la carta haya sido entregada en el domicilio fiscal o, de corresponder, en domicilio especial de los contribuyentes y/o responsables, aunque aparezca suscripto por algún tercero;
2. personalmente a través de un empleado de la autoridad de aplicación, y mediante cédula por duplicado en la que estará transcripta la citación, la resolución, intimación de pago, etcétera, que deba notificarse. Una de las copias la entregará a la persona a la cual deba notificar, o en su defecto, a quien se encuentre en el domicilio. En la otra copia, destinada a ser agregada a las actuaciones respectivas, dejará constancia del lugar, día y hora de la entrega requiriendo la firma del interesado o de la persona que manifieste ser de la casa o dejando constancia de que se negaron a firmar.

   Si el interesado no supiese o no pudiera firmar, podrá hacerlo a su ruego un testigo.

   Cuando no encontrase la persona a la cual va a notificar, o esta se negare a firmar y ninguna de las otras personas de la casa quisiera recibirla, la fijará en la puerta de la misma dejando constancia de tal hecho en el ejemplar destinado a ser agregado a las actuaciones respectivas. Las actas labradas por los empleados de la autoridad de aplicación harán plena fe mientras no se acredite su falsedad en los términos del artículo 289 y concordantes del Código Civil y Comercial, o la

enumeración que en un futuro lo reemplace;
3. por telegrama colacionado;
4. por comunicación informática en la forma y condiciones que determine la reglamentación. La notificación se considerará perfeccionada con la puesta a disposición del archivo o registro que la contiene, en el domicilio fiscal electrónico del contribuyente o responsable.

Si las citaciones, notificaciones, intimaciones, etcétera, no pudieran practicarse en la forma antedicha por no conocerse el domicilio del contribuyente, se efectuarán por medio de edictos publicados durante cinco días en el Boletín Oficial.

Efectos.

Artículo 23.- Las notificaciones de los actos y resoluciones dictados por la Agencia de Recaudación Fueguina en ejercicio de sus funciones se tendrán por válidas y vinculantes cuando se hubieren realizado en el domicilio fiscal de los contribuyentes y responsables conforme lo establecido en el título anterior.

Contenido de la Notificación.

Artículo 24.- Cuando la administración proceda a notificar a los contribuyentes y/o responsables de la determinación de oficio de tributos y/o el requerimiento del pago de los mismos, deberá hacerse constar en la notificación, citación o intimación la vía impugnativa que tendrá el contribuyente, con indicación expresa del recurso que podrá interponer, los plazos con que cuenta y el detalle de la norma aplicable.

Título Cuarto
Del Órgano Encargado de la Administración Fiscal

Denominación. Remisión.

Artículo 25.- Cuando en este código se mencione la palabra 'dirección', 'agencia', 'agencia de recaudación', 'administración', 'administración fiscal', 'administración tributaria', 'autoridad fiscal' o 'autoridad de aplicación' se referirá a la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF) o al organismo que en un futuro la remplace, en función de las competencias dispuestas para dicho organismo por el presente código y por las leyes especiales correspondientes.

Funciones de la Administración Fiscal.

Artículo 26.- La Agencia de Recaudación Fueguina será la encargada de la aplicación del presente código, y las facultades y poderes atribuidos por este código, leyes fiscales especiales y normas reglamentarias serán ejercidos por el director de la agencia, sin perjuicio de las delegación de facultades y de las facultades que la Constitución Provincial y las leyes atribuyan a otros órganos del Estado.

De la Representación de la Agencia.

Artículo 27.- La Agencia de Recaudación Fueguina está a cargo de un director ejecutivo que tiene todas las facultades, poderes, atribuciones y deberes asignados a la agencia, y las que fueren establecidas por leyes tributarias especiales.

Representa a la agencia, legalmente en forma personal o por delegación, en todos los actos y contratos que se requieran para el funcionamiento del servicio, de acuerdo a las disposiciones en vigor, suscribiendo los documentos públicos y/o privados que sean necesarios.

Esta representación la ejerce ante los poderes públicos, contribuyentes, responsables y terceros.”.

Prosec. ADMINISTRATIVA.— “Respecto de la Delegación de Facultades.

Artículo 28.- El director ejecutivo de la Agencia de Recaudación Fueguina podrá, a través de los actos administrativos correspondientes, delegar en los dependientes la suscripción de los actos y/o contratos que estime pertinentes y que se requieran para el funcionamiento del servicio. A su vez, en caso de ausencia y/o impedimento del director ejecutivo, el mismo designará al funcionario responsable a cargo de la firma del despacho.

No obstante la delegación de las competencias dadas por el director ejecutivo, este conserva la máxima autoridad dentro de la agencia y puede, por lo tanto, avocarse al

conocimiento y decisión de cualquiera de las cuestiones planteadas.
Facultades de la Administración Fiscal.
Artículo 29.- Para el cumplimiento de sus funciones la Agencia de Recaudación Fueguina tiene las siguientes obligaciones y facultades:

a) establecer, modificar y reglamentar su organización interna y de personal;
b) dictar e impartir normas generales obligatorias para los responsables y terceros en cuanto a la forma y modo como deban cumplirse los deberes formales así como en las materias en que las leyes autorizan a la Agencia de Recaudación Fueguina a reglamentar la situación de aquellos frente a la administración tributaria. La administración podrá, además, dictar resoluciones generales modificatorias o interpretativas de las normas tributarias cuando así lo estimare conveniente o a solicitud de los contribuyentes y responsables o de cualquier entidad con personería jurídica. El pedido de tal pronunciamiento, en ningún caso, suspenderá cualquier decisión que los funcionarios de la administración hayan de adoptar en casos particulares.
   Dichas resoluciones deberán contener las razones de hecho y de derecho en que se funden, y entrarán en vigor en los términos del artículo 2º del presente código;
c) responder las consultas vinculantes que los sujetos pasivos y demás obligados tributarios hubiesen formulado de acuerdo a lo establecido en el artículo 38 de este código;
d) aplicar sanciones, liquidar intereses, actualizaciones, recibir pagos totales o parciales, compensar, acreditar, imputar y disponer la devolución de las sumas pagadas de más;
e) resolver las cuestiones atinentes a las exenciones tributarias y a las vías recursivas previstas en este código o por leyes tributarias especiales en las cuales sea competente;
f) emitir constancias de deuda para el cobro judicial de los tributos;
g) implementar nuevos regímenes de percepción, retención, información, pagos a cuenta y designar los agentes para que actúen dentro de los diferentes regímenes;
h) conceder planes de facilidades de pagos a contribuyentes o responsables a efectos de regularizar obligaciones que ellos mantengan con la administración;
i) disponer clausuras de establecimientos cuando se constatare que se hayan configurado uno o más de los hechos u omisiones previstas en el artículo 103 de este código;
j) hacerse parte o tomar intervención en todo procedimiento judicial o administrativo a los efectos de determinar, verificar o exigir el pago de tributos, tasas, contribuciones y sus actualizaciones, intereses y sanciones;
k) participar en los procesos concursales y aceptar o rechazar, las propuestas de acuerdo presentadas. Asimismo, adoptar cualquier otra medida que tienda a asegurar y defender los derechos como mejor convenga a los intereses del Estado;
l) tomar intervención en los proyectos de disposiciones legales iniciados por cualquier jurisdicción en el ámbito de la provincia que se refieran, relacionen o incidan sobre la materia tributaria. Las jurisdicciones que propicien los proyectos deberán dar la pertinente y oportuna intervención de los mismos al director ejecutivo de la agencia;
m) establecer y/o suscribir convenios de cooperación e intercambio de información con organismos estatales municipales, provinciales o nacionales, instituciones privadas y/o sin fines de lucro con el fin de recabar información útil para el cumplimiento de las funciones establecidas en este Código, y;
n) denunciar ante el fuero penal la presunta comisión de los delitos tipificados en la Ley nacional 24769 (Boletín Oficial Nº 28564) y sus modificatorias, respecto de los tributos locales, cuando entendiere que se ha ejecutado una conducta punible encuadrable en alguno de los tipo penales contemplados en esa ley.

Incompatibilidades.
Artículo 30.- Las personas encargadas de ejercer sus funciones en el ámbito de la Agencia de Recaudación Fueguina no podrán, bajo ningún carácter o título, asesorar, liquidar y/o realizar, promover o participar en trámites de los contribuyentes que se relacionen directa o indirectamente con los impuestos cuya recaudación está a cargo de dicha institución, bajo el apercibimiento de aplicarse las sanciones previstas en la legislación vigente. Se aplicarán también las sanciones que correspondan cuando el mencionado personal invocando expresamente la representación de la agencia, dictare o participare en conferencias, debates o similares, relacionadas con tributos provinciales, sin la previa autorización expresa de la Agencia de Recaudación Fueguina.
De las Presentaciones ante la Agencia. Dos primeras.
Artículo 31.- Para determinar si un escrito presentado personalmente en las oficinas de la administración lo ha sido en término se tomará en cuenta la fecha indicada en el cargo o sello fechador. En caso de duda, deberá estarse a la fecha enunciada en el escrito y si este no la tuviere, se considerará que ha sido presentado en término.

El escrito no presentado dentro del horario administrativo del día en que venciere el término podrá ser entregado válidamente el día hábil inmediato siguiente y dentro de las dos primeras horas del horario de atención, incluyendo el supuesto contemplado en el artículo siguiente.
Escritos Recibidos por Correo.
Artículo 32.- Los escritos recibidos por correo se consideran presentados en la fecha de su imposición en la oficina de correos, a cuyo efecto se agregará el sobre sin destruir su sello fechador. En el caso de los telegramas y cartas documento se contará a partir de la fecha de emisión que en ellos conste como tal.
Actuación y Representación Legal.
Arrtículo 33.- La persona que se presente en las actuaciones administrativas que tramiten por ante la administración por un derecho o interés que no sea propio, deberá acompañar los documentos que acrediten la calidad invocada en la primera presentación. Ante la imposibilidad de acompañar dichos documentos, la administración fiscal podrá acordar un plazo razonable para la subsanación de dicho requisito el cual no podrá ser inferior a 10 días.

La parte interesada, su apoderado, letrado patrocinante y/o las personas que ellos expresamente autoricen tendrán libre acceso al expediente durante todo su trámite. A tal efecto, los autorizantes deberán denunciar el número de documento nacional de identidad de las personas a las que autorizan a tomar vista del expediente.
Formas de Acreditar la Personería.
Artículo 34.- Los representantes o apoderados acreditarán su personería con el instrumento público correspondiente o copia simple del mismo, debidamente suscripta por el mandante o por escribano público o autoridad competente.

En caso de que dichos instrumentos se encontrasen agregados a otro expediente que tramite ante la administración bastará la certificación correspondiente.
Acta Poder.
Artículo 35.- El mandato también podrá otorgarse por acta ante la agencia de recaudación, la que contendrá una simple relación de la identidad y domicilio del compareciente, designación de la persona del mandatario, mención de la facultad de percibir sumas de dinero u otra facultad especial que se le confiera para actuar ante la administración.
Gestión. Actos Urgentes.
Artículo 36.- Cuando sea necesario la realización de actos urgentes de cualquier naturaleza y existan hechos o circunstancias que impidan la actuación de la parte que ha de cumplirlos, se admitirá la comparecencia de quien no tuviere representación conferida.

Si dentro de los 30 días, contados desde la primera presentación del gestor, no fueren acompañados los instrumentos que acreditan su personería como apoderado o la parte no ratificase todo lo actuado por el gestor, se tendrán por no realizados los actos en los cuales este haya intervenido, a sus efectos.

Alcances de Representación.
Artículo 37.- Desde el momento en que el mandato se presenta a la autoridad administrativa y esta admita la personería, el representante asume todas las responsabilidades que las leyes le imponen y sus actos obligan al mandante como si personalmente los hubiere practicado. Está obligado a continuar la gestión mientras no haya cesado legalmente en su mandato y con él se entenderán los emplazamientos, citaciones y notificaciones, incluso las de las decisiones de carácter definitivo, salvo las actuaciones que la ley disponga se notifiquen al mismo mandante o que tengan por objeto su comparendo personal.
Consulta Vinculante. Concepto.
Artículo 38.- Los sujetos pasivos y demás obligados tributarios, que tuvieran un interés personal y directo, podrán formular ante la agencia consultas vinculantes debidamente documentadas sobre la determinación de los impuestos cuya recaudación se encuentra a cargo de dicho organismo y/o sobre la aplicación del derecho a una situación actual y real.

A tal efecto, deberá exponer con claridad y precisión todos los elementos constitutivos de la situación que motiva la consulta y podrá, asimismo, expresar su opinión fundada.

La consulta deberá presentarse conforme las condiciones reglamentarias que, a tal efecto, dicte la mencionada agencia, debiendo ser contestada en un plazo que no deberá exceder el término de 60 días, contados a partir de la fecha de notificación al contribuyente de la admisibilidad formal de la consulta vinculante.

En caso de requerirse informes o dictámenes de otros organismos, o de resultar pertinente solicitar al consultante el aporte de nuevos elementos necesarios para la contestación de la consulta, el plazo se suspenderá hasta tanto dichos requerimientos sean respondidos o venzan los plazos para hacerlo. Si dentro del plazo requerido, el consultante no cumpliere con la requisitoria, el pedido se considerará denegado y remitido para su archivo.

La presentación de la consulta no suspenderá el transcurso de los plazos ni justificará, en modo alguno, el incumplimiento de los obligados.
Impedimentos de Derecho.
Artículo 39.- No podrán someterse al régimen de consulta vinculante los hechos imponibles o situaciones que a continuación se describen:

1. se vinculen con la interpretación de aspectos cuya competencia le corresponda a los organismos del convenio multilateral y/o la Comisión Federal de Impuestos;
2. se refieran a la aplicación o interpretación de regímenes de retención, percepción y/o recaudación establecidos;
3. se hallen sometidos a un procedimiento de fiscalización debidamente notificado al contribuyente o responsable, respecto del mismo gravamen por el que se pretende efectuar la consulta, o esta última se refiera a temas relacionados con una determinación de oficio o de deuda en trámite, o un recurso impugnativo interpuesto en sede administrativa, judicial u organismos interjurisdiccionales. Este impedimento operará aún cuando la fiscalización, determinación o recurso se refiera a períodos fiscales distintos al involucrado en la consulta;
4. se hallen sometidos a juicios de ejecución fiscal, respecto del mismo gravamen, aún cuando se refieran a períodos fiscales distintos por el que se pretende efectuar la consulta. Tratándose del impuesto sobre los ingresos brutos, dicha exclusión resulta de aplicación cuando la materia consultada pueda relacionarse con la deuda ejecutada.

Efectos de su Planteamiento.
Artículo 40.- La consulta y su respectiva respuesta vinculará, exclusivamente, al consultante y a la agencia con relación al caso estrictamente consultado, en tanto no se hubieren alterado los antecedentes, circunstancias y datos suministrados en otra oportunidad de evacuarse la misma o se modifique la legislación vigente.

La administración estará obligada a aplicar, respecto al consultante, el criterio técnico sustentado en la contestación. Sin perjuicio de ello, la respuesta emitida podrá ser revisada, modificada y/o dejada sin efecto de oficio y en cualquier momento por la agencia. El cambio surtirá efectos respecto de los consultantes, únicamente con relación a hechos imponibles que

se produzcan a partir de la notificación del acto que dispuso su revocación y/o modificación.

Las contestaciones por parte de la administración serán vinculantes para ella y quien las formule siempre que se establezca en la presentación el carácter vinculante de la misma. La omisión trae como efecto que, en los términos previstos en los artículos precedentes, la consulta tendrá carácter meramente informativo y lo allí resuelto no será vinculante para la administración.

Recurso Jerárquico.

Artículo 41.- Contra la respuesta emitida por la autoridad competente, el consultante podrá interponerse recurso jerárquico ante el Ministerio de Economía dentro de los 15 días de notificada la resolución. En el recurso deberá presentarse ante la administración y deberá ser fundado en ese mismo acto. La dirección elevará las actuaciones para que el Ministerio de Economía dicte resolución definitiva dentro de los 120 días de recepcionado el expediente en el área pertinente.

Título Quinto
De Los Sujetos Pasivos de las Obligaciones Fiscales

Contribuyentes.

Artículo 42.- Son contribuyentes, y están obligados a ingresar el tributo correspondiente como responsables del cumplimiento de las obligaciones propias en la forma y oportunidad debida así como cumplir con los restantes deberes que le impongan las disposiciones en vigor, siempre que se verifique, a su respecto, el hecho generador de la obligación tributaria previsto en este código o las leyes tributarias especiales, los siguientes:

1. las personas físicas, capaces o incapaces, según el Código Civil y Comercial;
2. las personas jurídicas de carácter público o privado del Código Civil y Comercial;
3. todas aquellas entidades a las que el derecho privado reconoce la calidad de sujetos de derecho, incluso las organizadas bajo la Ley nacional 20337;
4. las entidades que no poseen la calidad prevista en el inciso anterior, los patrimonios destinados a un fin determinado, las uniones transitorias de empresas, las agrupaciones de colaboración empresaria, los demás consorcios y formas asociativas que no tienen personería jurídica pero que son considerados por las normas tributarias como unidades económicas para la atribución del hecho imponible. En tales casos y cuando corresponda, deben inscribirse incorporando el nombre de todos sus integrantes;
5. las sociedades no constituidas según lo dispuesto en el capítulo III, de la Ley General de Sociedades, conforme leyes nacionales 26994 y 27077, o la que en un futuro la reemplace, deben inscribirse a nombre de todos sus integrantes;
6. los fideicomisos que se constituyan de acuerdo a lo establecido en la Ley nacional 24441, excepto los constituidos con fines de garantía; y
7. las sucesiones indivisas, hasta la declaratoria de herederos o se declare la validez del testamento que cumpla la misma finalidad.

La Agencia de Recaudación Fueguina se encuentra facultada para calificar a los sujetos pasivos, categorizarlos y crear un registro especial a fin de obtener un estricto control de las actividades y/u operaciones que efectúen.

Pluralidad de Personas Realizando un Mismo Acto.

Artículo 43.- Cuando un mismo acto, operación o situación que origine obligaciones fiscales sea realizado o se verifique respecto de dos o más personas, todas serán consideradas como contribuyentes por igual y obligadas solidariamente al pago del gravamen en su totalidad. Ello sin perjuicio del derecho de la administración de dividir la obligación a cargo de cada una de ellas.

Conjunto Económico.

Artículo 44.- Los actos, operaciones o situaciones en que interviniese una persona o entidad se atribuirán también a otra persona o entidad con la cual aquella tenga vinculaciones económicas o jurídicas, cuando de la naturaleza de esas vinculaciones resultare que ambas

personas o entidades pueden ser consideradas como constituyendo una unidad o conjunto económico que hubiere sido adoptado exclusivamente para eludir en todo o en parte obligaciones fiscales. En este caso, ambas personas o entidades se considerarán como contribuyentes codeudores de los gravámenes con responsabilidad solidaria y total.".

Sec. ADMINISTRATIVO.— "Responsables.

Artículo 45.- Son responsables, y están obligados a ingresar el tributo correspondiente como responsables del cumplimiento por deuda ajena en la forma y oportunidad debida que corresponda así como a cumplir con los restantes deberes que le impongan las disposiciones en vigor:

a) el cónyuge, que percibe y dispone de todos los réditos propios del otro;
b) los padres, tutores o curadores de los incapaces o inhabilitados, total o parcialmente;
c) los síndicos designados en los concursos preventivos o quiebras y los liquidadores de entidades financieras regidas por la Ley nacional 21526 o de otros entes cuyos regímenes legales prevean similar procedimiento, representantes de las sociedades en liquidación, los albaceas o administradores legales o judiciales de las sucesiones y, a falta de estos, el cónyuge supérstite y los herederos;
d) los directores, gerentes y demás representantes, fiduciarios y administradores de las personas jurídicas, sociedades, asociaciones, entidades, empresas y patrimonios a que se refiere el artículo 42 de este código;
e) los administradores de patrimonios, empresas o bienes, que en ejercicio de sus funciones puedan determinar la materia imponible que gravan las respectivas normas tributarias con relación a los titulares de aquellos y pagar el gravamen correspondiente; y en las mismas condiciones los mandatarios con facultad de percibir dinero;
f) los agentes de retención, recaudación o de percepción de los impuestos;
g) los fiduciarios en las operaciones de fideicomiso previstas en la Ley nacional 24441, cuando el fideicomiso sea sujeto del impuesto según lo dispuesto en el apartado 6, del artículo 42, de este código;
h) los responsables sustitutos en la forma y oportunidad que, para cada caso, se estipule en las respectivas normas de aplicación;
i) los mandatarios y/o presentantes de trámites ante los registros de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios y los que por sus funciones públicas o por razón de su actividad, oficio o profesión intervengan en actos u operaciones sujetos a impuesto, tasas o contribuciones, o respecto de los bienes que administren y dispongan;
j) los que trasladen o transporten en forma onerosa o gratuita, habitual u ocasional, mercaderías, productos y/o todo tipo de cargas propias o ajenas, sujetas a impuestos, tasas o contribuciones, entre dos o más puntos dentro del territorio provincial, o que provengan desde otra jurisdicción provincial o nacional con destino a un punto o varios del territorio de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur;
k) los usufructuarios de bienes muebles o inmuebles sujetos al impuesto correspondiente;
l) los terceros que, incluso cuando no tuvieran deberes tributarios a su cargo, faciliten con su culpa o dolo la evasión del tributo;

Efectos de la Responsabilidad: la Solidaridad.

Artículo 46.- Los responsables indicados en el artículo precedente, por otras disposiciones del código o en virtud de leyes especiales responden en forma solidaria e ilimitada con el contribuyente por el pago de los gravámenes. A tal efecto, debe seguirse el procedimiento establecido en el artículo 51 de este código.

Los indicados en los incisos d) y e) del artículo precedente, se eximirán de esta responsabilidad solidaria si acreditan haber exigido de los sujetos pasivos de los gravámenes los fondos necesarios para el pago y que estos los colocaron en la imposibilidad de

cumplimiento en forma correcta y tempestiva.

Los responsables indicados en el inciso f) del artículo precedente se eximirán si acreditan fehacientemente que el contribuyente o responsable ha extinguido la obligación tributaria.

La retención, percepción o recaudación oportunamente practicada libera al contribuyente principal de toda consecuencia siempre que pueda acreditar fehacientemente la retención, percepción o recaudación que se le hubiera realizado.

En todos los casos, los convenios referidos a obligaciones tributarias realizados entre los contribuyentes y responsables o entre estos y terceros de ningún modo son oponibles al fisco.”.

Sec. LEGISLATIVA.— “Responsabilidad por los dependientes o subordinados.

Artículo 47.- Los contribuyentes o responsables responden por las consecuencias de los hechos y omisiones de sus factores, agentes o dependientes, incluyendo las sanciones, gastos y honorarios consiguientes. La responsabilidad aludida es la establecida en el artículo 46 de este código.

Responsabilidad de los Síndicos y Liquidadores.

Artículo 48.- Los síndicos designados en los concursos preventivos y en las quiebras y los liquidadores de entidades financieras regidas por la Ley nacional 21526, o de otros entes cuyos regímenes legales prevean similares procedimientos, deberán dentro de los 30 días corridos de haber aceptado su designación informar a la administración la nómina de los bienes inmuebles y muebles registrables, indicando los períodos por los que los mismos registren deudas.

Tratándose del impuesto sobre los ingresos brutos, los síndicos o liquidadores deberán suministrar la información que surja de la documentación de los fallidos o liquidados por todos los períodos fiscales no prescriptos.

En caso de incumplimiento de estas obligaciones serán considerados responsables por la totalidad del gravamen que resultare adeudado conforme el artículo 46 de este código.

Sucesores a Título Particular de Empresas, Explotaciones o Bienes.

Artículo 49.- Los sucesores a título particular en el activo y pasivo de empresas o explotaciones o en bienes que constituyan el objeto de hechos imponibles o servicios retribuibles, o beneficios que originen contribuciones, responderán solidariamente con el contribuyente y demás responsables por el pago de impuestos, tasas y contribuciones, con sus accesorios. La responsabilidad de los adquirentes cesará:

a) cuando la administración hubiere expedido certificación de no adeudarse ningún impuesto, tasa o contribución, según corresponda;
b) a los 180 días de efectuada la denuncia del acto jurídico de transferencia ante la administración si, al vencimiento de dicho plazo, esta no hubiese expedido el certificado aludido en el inciso a).

La responsabilidad a la que alude el presente artículo es la establecida en el artículo 46 del presente código.

Responsabilidad del Consumidor Final.

Artículo 50.- Es obligación del tercero particular que intervenga en actos u operaciones sujetas a impuestos, cuyo monto total sea superior a $20, o al monto que fije la Agencia de Recaudación Fueguina, exigir al contribuyente la emisión y entrega del comprobante que corresponda a cada tipo de acto u operación y exhibirlos cuando lo requiera un funcionario de la Agencia de Recaudación Fueguina.

Entiéndase por tercero particular la persona física o jurídica que participe como contratante del contribuyente, por sí o por otro, en cualquiera de las etapas del proceso de industrialización y/o comercialización de bienes y servicios.

El incumplimiento de dicha obligación hará pasible al tercero particular de asumir el carácter de responsable solidario del impuesto debiendo abonar el importe del tributo cuyo monto surge de la alícuota que sea aplicable a la operación que da origen al hecho imponible, sin perjuicio de la multa prevista por el artículo 101, de conformidad con lo que reglamente la Agencia de Recaudación Fueguina.

Sin perjuicio de todo ello, es obligación del contribuyente fijar en lugar visible y de modo claro las disposiciones precedentes para que pueda ser leída por el tercero particular contratante. En caso de incumplimiento tendrá la sanción establecida en el artículo 101 de este código, de acuerdo con lo que reglamente la Agencia de Recaudación Fueguina.

La sanción al que haya incumplido el deber de emitir o entregar facturas o comprobantes equivalentes será un requisito previo para que recaiga sanción al consumidor final por la misma omisión.

Procedimiento para Hacer Efectiva la Solidaridad.

Artículo 51.- El procedimiento para hacer efectiva la solidaridad establecida en el artículo 46 deberá promoverse contra todos los responsables a quienes se pretende obligar, debiendo extenderse los procedimientos administrativos a todos los involucrados de acuerdo a lo establecido en el artículo 62 del presente código.

Solidaridad. Efectos.

Artículo 52.- Los efectos de la solidaridad son los siguientes:

1. la obligación puede ser exigida, total o parcialmente, a cualquiera de los deudores, a elección del sujeto pasivo;
2. el pago efectuado por uno de los deudores libera a los demás;
3. el cumplimiento de un deber formal por parte de uno de los obligados no libera a los demás cuando sea de utilidad para el sujeto activo que los otros obligados lo cumplan;
4. la extensión o remisión de las obligaciones libera a todos los deudores salvo que el beneficio haya sido concedido a determinada persona. En este caso, el sujeto activo podrá exigir el cumplimiento a los demás con deducción de la parte proporcional al beneficiado;
5. cualquier interrupción o suspensión de la prescripción, caducidad o cosa juzgada favorece o perjudica a los demás.

Título Sexto
Determinación y Percepción de los Tributos

Determinación de la Obligación Tributaria.

Artículo 53.- La determinación de las obligaciones tributarias se efectuará en base a o mediante:

a) declaraciones juradas que los contribuyentes, responsables o terceros deberán presentar a la autoridad de aplicación, sea en soporte papel, por medios electrónicos o magnéticos;
b) datos que la agencia posea y utilice para efectuar la determinación o liquidación administrativa, según lo establecido con carácter general para el gravamen de que se trate;
c) exhibición de los documentos que sean pertinentes;
d) procedimiento de determinación de oficio.

La declaración jurada deberá contener todos los datos y elementos necesarios para hacer conocer el hecho imponible realizado y el monto del tributo. La información estará resguardada por el artículo 11 de este código.

Cuando la Agencia de Recaudación Fueguina lo juzgue necesario podrá también hacer extensiva la obligación impuesta en este artículo a los terceros que de cualquier modo intervengan en las operaciones o transacciones de los contribuyentes y demás responsables, que estén vinculados a los hechos gravados por leyes respectivas.

Liquidaciones Expedidas Mediante Sistemas de Computación.

Artículo 54.- Las liquidaciones de impuestos previstas en el artículo anterior así como las de intereses resarcitorios, punitorios y anticipos pueden expedirse por la Agencia de Recaudación Fueguina mediante sistemas de computación, por medios electrónicos o magnéticos y constituirán título suficiente a los efectos de la intimación de pago de los mismos si contienen la sola impresión del nombre y cargo del juez administrativo.

Obligatoriedad de Pago. Facultad Verificatoria. Declaraciones Juradas Rectificativas.
Artículo 55.- La declaración jurada presentada por el contribuyente o responsable obliga al declarante al pago de la suma allí indicada, cuyo monto no podrá reducir por declaraciones posteriores salvo por errores de cálculo cometidos en la misma. Sin perjuicio de ello, la declaración jurada presentada estará sujeta a verificación administrativa.

El contribuyente o responsable podrá presentar la declaración jurada rectificativa si antes no se hubiera determinado de oficio la obligación tributaria o se hubiesen reconocido los cargos formulados en el proceso de fiscalización.

Formación del Saldo de Declaración Jurada.
Artículo 56.- El importe del impuesto que deben abonar los contribuyentes o responsables en las circunstancias previstas por el artículo 61 y siguientes será el que resulte de deducir del total del gravamen correspondiente al período fiscal que se declare, las cantidades pagadas a cuenta del mismo, las retenciones sufridas por hechos gravados cuya denuncia incluya la declaración jurada y los saldos favorables ya acreditados por la Agencia de Recaudación Fueguina o que el propio responsable hubiera consignado en declaraciones juradas anteriores, en cuanto estas no hayan sido impugnadas.

Sin la conformidad de la Agencia de Recaudación Fueguina no podrán los responsables deducir, del impuesto que les corresponda abonar, otras cantidades que las provenientes de los conceptos indicados.

Importes Improcedentes. La Intimación de Pago.
Artículo 57.- Cuando en la declaración jurada el contribuyente o responsable compute contra el impuesto determinado conceptos o importes improcedentes, tales como retenciones, percepciones, pagos a cuenta, acreditaciones de saldos a favor y/o cuando aplique alícuotas que no se correspondan con las establecidas en la ley impositiva del período que se trate para la actividad declarada, no procederá para su impugnación el procedimiento establecido en los artículos 62 y siguientes de este código, sino que bastará la simple intimación de pago de los conceptos reclamados o la diferencia que generen en el resultado de dicha declaración jurada.

Para el supuesto en el que los agentes de retención, percepción o recaudación -habiendo practicado la retención, percepción o recaudación correspondiente- hubieran presentado declaraciones juradas determinativas o informativas de su situación frente al gravamen de que se trate o, alternativamente, la administración constatare la retención o percepción practicada a través de los pertinentes certificados, en cuyo caso no será de aplicación el procedimiento establecido por los artículos 62 y siguientes, bastando la simple intimación de pago.

En todos los casos, sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder.

Percepción en la Fuente.
Artículo 58.- La percepción de los tributos se hará en la misma fuente cuando así lo establezcan las leyes impositivas o cuando la Agencia de Recaudación Fueguina, por considerarlo conveniente y mediante resolución fundada, disponga qué personas y en qué casos intervendrán como agentes de retención y/o percepción.

En caso de incumplimiento resultarán de aplicación las disposiciones de los artículos 82, 83, 88 y 101, en caso de corresponder y artículos concordantes.

Determinación sobre Base Cierta.
Artículo 59.- La determinación de oficio se practicará sobre base cierta cuando el contribuyente o los responsables suministren a la Agencia de Recaudación Fueguina todos los elementos comprobatorios de las operaciones o situaciones que constituyen hechos imponibles o cuando las normas fiscales establezcan taxativamente los hechos y circunstancias que la autoridad de aplicación debe tener en cuenta a los fines de la determinación.

Determinación sobre Base Presunta.
Artículo 60.- Cuando no se cumplan las condiciones establecidas en el artículo anterior, la Agencia de Recaudación Fueguina practicará la determinación de oficio sobre base presunta considerando todos los hechos y circunstancias que, por su vinculación o conexión con las

normas fiscales, se conceptúen como hecho imponible y permitan inducir en el caso particular la procedencia y el monto del gravamen.

La determinación de oficio sobre base presunta se efectuará también cuando de hechos conocidos se presuma que hubiera habido hechos imponibles, y su posible magnitud, por los cuales se hubiere omitido el pago de los impuestos.

En las determinaciones de oficio sobre base presunta podrán aplicarse los promedios y coeficientes generales que a tal fin establezca la Agencia de Recaudación Fueguina con relación a explotaciones de un mismo género conforme lo establecido en el artículo 65 de este código.

Determinación de Oficio. Liquidación Administrativa.

Artículo 61.- Cuando no se hayan presentado declaraciones juradas o resulten impugnables las presentadas, la Agencia de Recaudación Fueguina procederá a determinar de oficio la materia imponible o el quebranto impositivo, en su caso, y a liquidar el gravamen correspondiente, sea en forma directa por conocimiento cierto de dicha materia, sea mediante estimación si los elementos conocidos solo permiten presumir la existencia y magnitud de aquella.

Las liquidaciones y actuaciones practicadas por los inspectores y demás empleados que intervienen en la fiscalización de los tributos, no constituyen determinación administrativa de aquellos, la que sólo compete a los funcionarios que ejercen las atribuciones de jueces administrativos.

Cuando se trate de liquidaciones administrativas el responsable podrá manifestar su disconformidad antes del vencimiento general del gravamen; no obstante ello, cuando no se hubiere recibido la liquidación 15 días antes del vencimiento, el término para hacer aquella manifestación se extenderá hasta 15 días después de recibida. El rechazo del reclamo autorizará al responsable a interponer los recursos previstos en el artículo 148 en la forma allí establecida.

Por cada notificación que practique la administración, conformadas o no por el contribuyente, se abonará un cargo que será fijado por la Ley Impositiva y reglamentado por el director ejecutivo.

También se aplicará un cargo por cada notificación que requiera de la presentación de declaraciones juradas o documentación equivalente por la que se abonará un cargo que será fijado por la Ley Impositiva y reglamentado por el director ejecutivo.

Procedimiento de Determinación de Oficio.

Artículo 62.- El procedimiento que determine, total o parcialmente, la obligación tributaria se iniciará por la administración que correrá vista al contribuyente o responsable de las actuaciones administrativas y de las impugnaciones o cargos que se le formulen proporcionando detallado fundamento de los mismos por el término de 15 días.

Reconociendo, negando u observando los hechos y el derecho controvertido, dentro del plazo establecido en el párrafo precedente el cual podrá ser prorrogado por otro lapso igual y por única vez, el contribuyente o responsable deberá contestar la vista: descargo. En este acto deberá acompañarse, conjuntamente, la prueba documental y ofrecerse los restantes medios probatorios que hagan a su derecho. No será admisible la prueba testimonial. Podrá agregar informes, certificaciones o pericias producidas por profesionales con título habilitante. Si no compareciera dentro del plazo fijado, las actuaciones continuarán en rebeldía.

La administración abrirá la causa a prueba disponiendo la producción y/o desestimando aquella que resulta inconducente, improcedente o meramente dilatoria. El interesado dispondrá para la producción de la prueba del término que a tal efecto le fije la administración y bajo ningún supuesto podrá ser inferior a 15 ni mayor a 60 días.

La agencia podrá disponer medidas para mejor proveer en cualquier estado del trámite con notificación al interesado.

La prueba no ofrecida o acompañada al momento de presentarse el descargo no puede ser ofrecida en las instancias posteriores, salvo la referida a hechos nuevos no

contemplados en la vista o a la necesaria para refutar el resultado de medidas para mejor proveer. Esta limitación no será aplicable en materia sancionatoria.

Vencido el término probatorio o cumplidas las medidas para mejor proveer, la administración dictará, dentro del plazo de 90 días, resolución fundada determinando el tributo e intimando el pago. No habiéndose abierto a prueba, la administración deberá dictar resolución en el mismo plazo, a contar desde la presentación del descargo o desde la fecha de vencimiento para formular descargo cuando se hallare en rebeldía, la causa sea de puro derecho o la prueba ofrecida improcedente.

Vencido los términos indicados precedentemente sin que la administración dicte la resolución determinativa, el contribuyente o responsable podrá requerir pronto despacho.

Recibido el requerimiento de pronto despacho, la administración deberá dictar la resolución determinando el tributo e intimando al pago dentro del plazo de 15 días. No habiéndose dictado la resolución en el plazo antedicho, caducará el procedimiento sin perjuicio de la validez de las actuaciones administrativas realizadas. En este supuesto, la Agencia de Recaudación Fueguina podrá iniciar, por una única vez, un nuevo proceso de determinación de oficio, previa autorización del titular de la Agencia de Recaudación Fueguina, de lo que se dará conocimiento dentro del término de 10 días al ente que ejerza la superintendencia respecto de la administración, con expresión de las razones que motivaron el evento y las medidas adoptadas en el orden interno.

No será necesario dictar resolución determinando la obligación tributaria e intimando al pago si, antes de ese acto, prestase el contribuyente o responsable su conformidad con las impugnaciones o cargos formulados, la que surtirá entonces los efectos de una declaración jurada para el responsable y de una determinación de oficio para la administración.

Si la disconformidad ocurriere en cuanto a errores de cálculo respecto de las liquidaciones administrativas practicadas por la Agencia de Recaudación Fueguina dicha disconformidad se resolverá sin sustanciación. Si la disconformidad se refiere a cuestiones conceptuales deberá estarse al procedimiento establecido en el presente artículo.

En los casos en que exista determinación de oficio, total o parcial, la notificación de la resolución deberá ajustarse a lo establecido en el artículo 23 del presente código.

Asimismo, el contribuyente o responsable podrá interponer el recurso previsto en el artículo 148 del presente; caso contrario, surtirá el efecto establecido en el artículo a continuación.

Modificación y Efectos de la Determinación de Oficio.

Artículo 63.- La resolución que determina de oficio la obligación tributaria adquirirá firmeza vencido el término de 15 días desde la notificación al contribuyente o responsable salvo que se interponga contra ella el recurso previsto en el artículo 148 del presente código.

Válidamente notificada, la resolución determinativa, sólo podrá ser modificada cuando en la resolución respectiva se hubiera dejado expresa constancia del carácter parcial de la determinación realizada y de los aspectos fiscalizados o cuando surjan nuevos elementos de juicio, se descubran errores, omisiones o fraudes en la exhibición o consideración de los datos o elementos que sirvieron de base para la determinación por la autoridad de aplicación.”.

- Ocupa la Presidencia el vicegobernador Juan Carlos Arcando.

Sec. ADMINISTRATIVO.— “Pago Provisorio de Impuestos Vencidos.

Artículo 64.- En aquellos supuestos en que los contribuyentes o responsables no ingresen uno o más de los anticipos fiscales liquidados por la Agencia de Recaudación Fueguina, esta podrá requerirles el pago de los mismos por vía de apremio.

Asimismo, en los casos de contribuyentes o responsables que liquiden el impuesto sobre la base de las declaraciones juradas y omitan la presentación de las mismas por uno o más anticipos fiscales y cuando la autoridad de aplicación conozca por declaraciones o determinaciones de oficio la medida en que les ha correspondido tributar total o parcialmente gravamen en períodos anteriores, sobre la base de los anticipos o los saldos de declaración jurada efectivamente ingresados, los emplazará para que en el término de 10 días presenten

las declaraciones juradas e ingresen el tributo correspondiente.

No habiéndose cumplido con dicha intimación podrá requerirles, sin otro trámite por vía de apremio el pago a cuenta del gravamen que en definitiva les sea debido abonar, de una suma equivalente a tantas veces el gravamen ingresado en la última oportunidad declarada o determinada, respecto a cualquiera de los anticipos o saldos de declaración jurada de los períodos por los cuales dejaron de presentar declaraciones.

A tal fin el monto de la obligación tributaria del último anticipo impositivo o saldo de declaración jurada anual, declarado o determinado, podrá ser corregido mediante la aplicación de un coeficiente indicativo de la variación de precios ocurrida durante el término transcurrido entre el último anticipo fiscal declarado o determinado y los de cada uno de los anticipos no declarados. La Agencia de Recaudación Fueguina utilizará los índices de precios que resulten compatibles con la actividad desarrollada por el contribuyente o responsable.

Vencido el plazo de 10 días indicado precedentemente se librará la constancia de deuda correspondiente y se iniciarán las acciones de apremio, con el alcance previsto en los artículos 130 y concordantes de este código.

Asimismo, no se admitirá ningún tipo de reclamo contra el importe requerido sino por la vía de la repetición establecida en el artículo 157 y previo pago de las costas y gastos del juicio e intereses que correspondan –condición *sine qua non* para la procedencia de la misma-.

En los casos de concursos civiles o comerciales, la liquidación de deuda confeccionada conforme el procedimiento descripto anteriormente, aún sin la previa intimación al concursado, expedida por el funcionario autorizado a tal efecto, será título suficiente a los efectos de solicitar la verificación del crédito fiscal ante la sindicatura.

Presunciones. Ingresos Gravados.

Artículo 65.- Para efectuar la determinación de oficio sobre base presunta podrán servir como indicio:

I. El capital invertido en la explotación, las fluctuaciones patrimoniales, el volumen de las transacciones y/o ventas de otros períodos fiscales, el monto de las compras, utilidades, la existencia de mercaderías, el rendimiento normal del negocio o explotación o de empresas similares, los gastos generales de aquellos, los salarios, el alquiler del negocio y de la casa-habitación, el nivel de vida del contribuyente y cualesquiera otros elementos de juicio que obren en poder de la autoridad de aplicación o que deberán proporcionarle los agentes de retención, cámaras de comercio o industria, bancos, asociaciones gremiales, entidades públicas o privadas, o cualquier otra persona que posea información útil al respecto, relacionada con el contribuyente y que resulte vinculada con la verificación de los hechos imponibles.

A los efectos de este artículo y para el impuesto sobre los ingresos brutos podrá tomarse como presunción general, salvo prueba en contrario, que:

1. cuando las diferencias físicas de inventario de mercaderías comprobadas por la autoridad de aplicación, valuadas de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Impuesto a las Ganancias fueran superiores al declarado o registrado por el contribuyente, cualitativamente representan un indicio de montos de ventas gravadas omitidas del ejercicio en curso.

   Los montos de ventas gravadas omitidas se determinarán aplicando sobre el valor determinado conforme lo dispuesto en el párrafo precedente el coeficiente que resulte de dividir el monto de ventas gravadas, correspondientes al ejercicio fiscal cerrado inmediato anterior a aquel en que se verifiquen las diferencias de inventarios, declaradas o registradas, ajustadas impositivamente, según corresponda, por el valor de las mercaderías en existencia al final del ejercicio citado precedentemente, declaradas o registradas, ajustadas impositivamente, según corresponda;
2. las diferencias entre la producción considerada por el contribuyente a los fines tributarios teniendo en cuenta las existencias iniciales y finales y la información

obtenida por relevamiento efectuado por dispositivos de detección remota, procesamiento de imágenes, censores, herramientas satelitales u otros mecanismos tecnológicos de alto nivel de certeza y precisión, previamente valuadas en función de precios oficiales determinados para exportación o en función de precios de mercado en los que el contribuyente acostumbra a operar, representa los montos de ventas omitidas;

3. el resultado de promediar el total de ventas, de prestaciones de servicios o de cualquier otra operación controlada por la Agencia de Recaudación Fueguina, en no menos de cinco días continuos o alternados, multiplicado por el total de días hábiles comerciales, representan las ventas, prestaciones de servicios u operaciones presuntas del contribuyente o responsable bajo control, durante ese período.

   Si el mencionado control se efectuara en no menos de cuatro meses continuos o alternados de un mismo ejercicio comercial o fiscal, el promedio de ventas, prestaciones de servicios u operaciones se considerará suficientemente representativo y podrá también aplicarse a los demás meses no controlados del mismo período, a condición de que se haya tenido debidamente en cuenta la estacionalidad de la actividad o ramo de que se trate.

   La diferencia de ventas, prestaciones de servicios u operaciones detectadas en ese período entre las declaradas o registradas y las ajustadas impositivamente, se considerarán ventas, prestaciones de servicios u operaciones gravadas o exentas en el impuesto en la misma proporción que tengan las que hubieran sido declaradas o registradas en cada uno de los períodos del ejercicio comercial anterior;

4. ante la comprobación de omisión de contabilizar, registrar o declarar:
   a) ventas o ingresos, el monto detectado se considerará para la base imponible en el impuesto sobre los ingresos brutos. Si el monto detectado corresponde a un período fiscal inferior a un mes, el porcentaje que resulte de compararlas con las registradas, informadas, declaradas o facturadas conforme a las normas legales vigentes, de ese mismo período, aplicado sobre las ventas de los últimos 12 meses, que pueden no coincidir con el ejercicio comercial, determinará, salvo prueba en contrario, diferencias de ventas que se consideraran en la misma forma que se prescribe en el inciso e) precedente para los meses involucrados y teniendo en cuenta lo allí determinado sobre la estacionalidad de la actividad o ramo de que se trate.

      Si la fiscalización y la comprobación de operaciones marginales abarcare un período fiscal, la presunción a que se refiere el párrafo precedente se aplicará, del modo allí previsto, sobre los años no prescriptos;
   b) compras, determinado el monto de las mismas, se considerarán ventas omitidas el monto resultante de adicionar a las compras omitidas el porcentaje de utilidad bruta sobre compras declaradas por el obligado en sus declaraciones juradas impositivas y otros elementos de juicio a falta de aquellas, del ejercicio;
   c) gastos, se considerará que el monto omitido y comprobado, representa utilidad bruta omitida del período fiscal al que pertenezcan los gastos y que se corresponden con ventas o ingresos omitidos del mismo período.

      A fin de determinar las ventas o ingresos omitidos citados precedentemente, se aplicará el procedimiento establecido en el segundo párrafo del inciso c);

5. los incrementos patrimoniales no declarados o no justificados total o parcialmente en el impuesto a las ganancias más un 10% en concepto de renta dispuesta o consumida, representan montos de ventas omitidas determinadas por la suma total de los mismos.

   Los montos de ventas omitidas indicadas previamente, serán atribuidos a cada uno de los meses calendarios comprendidos en el ejercicio comercial o impositivo en el que se constataren las mismas, prorrateándolas en función de las ventas

gravadas, no gravadas o exentas que se hubieren declarado o registrado;

6. los depósitos bancarios, debidamente depurados, que superen las ventas y/o ingresos declarados del período, representan los montos de ventas omitidas, determinadas por la suma equivalente a los mismos.

   Los montos de ventas omitidas indicadas previamente serán atribuidas a cada uno de los meses calendarios comprendidos en el ejercicio comercial o impositivo en el que se constataren las mismas, prorrateándolas en función de las ventas gravadas, no gravadas o exentas que se hubieren declarado o registrado;
7. el importe de las remuneraciones abonadas al personal en relación de dependencia no declarado, así como las diferencias salariales no declaradas, representan montos de ventas omitidas determinadas por un monto equivalente a las remuneraciones no declaradas en concepto de incremento patrimonial, más un 10% en concepto de renta dispuesta o consumida.

   Los montos de ventas omitidas indicadas previamente, serán atribuidas a cada uno de los meses calendarios comprendidos en el ejercicio comercial o impositivo en el que se constataren las mismas, prorrateándolas en función de las ventas gravadas, no gravadas o exentas que se hubieren declarado o registrado;
8. el valor de la mercadería que se traslade o transporte dentro del territorio provincial sin la documentación respaldatoria exigida por la Agencia de Recaudación Fueguina se considerará monto de ingreso gravado omitido del mes en el que se haya detectado. En caso de reincidencia dentro de un plazo de 24 meses se considerará que dicho ingreso también fue omitido en cada uno de los últimos seis meses incluido el de detección, y que se corresponden con ventas o ingresos omitidos durante el mismo lapso;
9. por el ejercicio de la actividad específica de profesionales matriculados en la provincia, que los importes netos declarados en el impuesto al valor agregado por los años no prescriptos, constituyen monto de ingreso gravado del impuesto sobre los ingresos brutos, debiéndose considerar las declaraciones del referido impuesto nacional que se correspondan con el anticipo del impuesto sobre los ingresos brutos objeto de determinación o en su defecto, la anterior o posterior más próxima. Tratándose de contribuyentes inscriptos en el régimen simplificado para pequeños contribuyentes, que el importe establecido como límite máximo de ingresos brutos anuales de la categoría en la que se encuentra encuadrado el contribuyente en el último mes del lapso fiscalizado, constituye monto de ingreso gravado del impuesto sobre los ingresos brutos de los últimos doce meses; como así también, que dicho ingreso fue omitido en los períodos fiscales anteriores no prescriptos;
10. el ingreso bruto de un período fiscal se presume no podrá ser inferior a tres veces las remuneraciones básicas promedio del convenio colectivo de trabajo propio de la actividad, conforme a los indicadores mínimos de trabajadores, previstos en la Ley 26063 y en la Resolución 2927/10 AFIP o la que en el futuro la remplace, o el alquiler que paguen o el que se comprometieran a pagar, el que fuera mayor correspondiente al mismo período.

    Cuando los importes locativos de los inmuebles que figuren en los instrumentos sean notoriamente inferiores a los vigentes en plaza, o cuando no figure valor locativo alguno, y ello no sea debidamente fundado y documentado por los interesados, por las condiciones de pago, por las características peculiares del inmueble o por otras circunstancias, la Agencia de Recaudación Fueguina podrá impugnar dichos precios y fijar de oficio un precio razonable de mercado, solicitar valuaciones e informes a entidades públicas o privadas;
11. cuando los precios de inmuebles que figuren en los boletos de compraventa y/o escrituras sean notoriamente inferiores a los vigentes en plaza al momento de su venta, y ello no sea debidamente fundado y documentado por los interesados, por las condiciones de pago, por características peculiares del inmueble o por otras

circunstancias la Agencia de Recaudación Fueguina podrá, a los fines de impugnar dichos precios y fijar de oficio un precio razonable de mercado, solicitar valuaciones e informes a entidades públicas o privadas.

Asimismo, a los efectos de lo previsto en este artículo, la autoridad de aplicación podrá valerse de cualquiera de las presunciones previstas en el artículo siguiente, aún con relación a contribuyentes o responsables que no revistan las características mencionadas en el primer párrafo de dicho artículo.

II. Para determinar la cuantía de las ventas, prestaciones de servicios u operaciones, en los casos de contribuyentes o responsables que no hubiesen presentado declaraciones juradas o abonado la liquidación practicada por la autoridad de aplicación por seis o más anticipos correspondientes al período fiscal en curso o a los últimos dos períodos fiscales vencidos; o que habiéndolas presentado, hayan declarado no tener actividad en seis o más anticipos correspondientes al período fiscal en curso o a los últimos dos períodos fiscales vencidos, en contraposición a lo que resulta de la información a su respecto suministrada por terceros; o hayan declarado un importe de ingresos inferior al que resultara verificado en un procedimiento de control de operaciones o de facturación realizado por la autoridad de aplicación durante el lapso de un día o más, o al que resulte del cruce de información de terceros; o hayan surgido diferencias entre las sumas declaradas y las obtenidas luego de la aplicación de los promedios o coeficientes elaborados en base a información de explotaciones de un mismo género, podrá tomarse como presunción, salvo prueba en contrario, que:

a) el importe de ingresos que resulte del control que la autoridad de aplicación efectúe sobre la emisión de comprobantes durante el lapso de un día, o el resultado de promediar los ingresos controlados cuando el procedimiento se realice durante dos días o más, multiplicado por las dos terceras partes de los días hábiles comerciales del mes en que se realice, a condición de tener debidamente en cuenta la representatividad que en el mes exhiba el lapso durante el cual se llevó acabo el procedimiento según la actividad o ramo de que se trate, constituye monto de ingreso gravado por el impuesto sobre los ingresos brutos para ese período.

   Asimismo, se considerará que el importe estimado es ingreso gravado en los demás meses no controlados de ese período fiscal y de los dos últimos períodos fiscales vencidos, a condición de que se haya tenido debidamente en cuenta la estacionalidad de la actividad o ramo de que se trate;

b) el equivalente hasta tres veces el monto total de liquidaciones por ventas, prestación de servicios o cualquier otra operación del contribuyente, autorizadas y efectuadas a través de tarjetas de crédito o débito, informado por las entidades emisoras de las mismas, constituye ingreso gravado del período fiscal en el que se han realizado. En el supuesto que se hubiera realizado un procedimiento de control de la facturación conforme lo previsto en el apartado anterior, a los fines de establecer el importe de ingreso gravado, se considerará la participación que representan las ventas con tarjeta sobre el total de operaciones controladas;

c) el equivalente hasta tres veces el monto total de las acreditaciones bancarias, neto de las remuneraciones obtenidas en relación de dependencia, jubilaciones, pensiones, préstamos de cualquier naturaleza, transferencias entre cuentas del mismo titular y contrasientos por error, efectuadas en cuenta corriente, caja de ahorro y/o similar de titularidad del contribuyente o responsable, durante el lapso de un mes, constituye monto de ingreso gravado del impuesto sobre los ingresos brutos para ese período. En aquellos supuestos en que las acreditaciones bancarias se produzcan en cuentas pertenecientes a más de un titular, para estimar el importe de ingresos gravados, la autoridad de aplicación tomará en consideración el monto que resulte de dividir el total de dichas acreditaciones en tantas partes iguales como cotitulares de la cuenta bancaria existan, salvo

prueba en contrario;

d) el monto de las compras no declaradas por el contribuyente, obtenido a partir de la información brindada por proveedores de aquel, más un importe equivalente al porcentaje de utilidad bruta sobre compras declaradas por otros contribuyentes que desarrollen actividades de similar naturaleza y magnitud, se considerará ventas o ingresos omitidos del período de que se trate;
e) constituye base imponible omitida el importe que resulte de la multiplicación de los volúmenes de producción o comercialización obtenidos mediante dispositivos de detección remota, procesamiento de imágenes, sensores, herramientas satelitales u otros mecanismos tecnológicos de alto nivel de certeza y precisión, con precios de referencia, cotizaciones y datos estadísticos provenientes de organismos oficiales o públicos no estatales, y en su defecto a entes privados vinculados a la actividad;
f) hasta el 30% del producido de las ventas o prestaciones de servicios o volúmenes de producción, obtenidos por el locatario del inmueble arrendado con destino que no sea el de casa-habitación, constituye ingreso gravado en concepto de cobro de alquileres del locador contribuyente del impuesto inmobiliario, correspondientes al período durante el cual se efectuaron las ventas o se verificó la producción; y
g) los importes correspondientes a ventas netas declaradas en el impuesto al valor agregado por los años no prescriptos, constituyen monto de ingreso gravado del impuesto sobre los ingresos brutos, debiéndose considerar las declaraciones del referido impuesto nacional que se correspondan con el anticipo del tributo provincial objeto de determinación o, en su defecto, la anterior o posterior más próxima.

Se presume el desarrollo de actividad gravada por el impuesto sobre los ingresos brutos cuando exista información sobre consumos de servicios por parte del contribuyente o responsable, suministrada por las empresas prestatarias de los mismos y/o por organismos de la nación, provincia o municipios; registre personal en relación de dependencia, conforme la información de organismos sindicales y previsionales; los agentes de recaudación con los que hubiera operado el contribuyente informen la percepción y/o retención del impuesto; o cuando ello resulte de cualquier otro elemento de juicio que obre en poder de la autoridad de aplicación o que le proporcionen los terceros.

La Agencia de Recaudación Fueguina podrá valerse de una o varias de las presunciones previstas en el presente artículo.

La Agencia de Recaudación Fueguina podrá valerse de los indicios, promedios o coeficientes relativos a explotaciones o actividades de un mismo género y de la siguiente información: el consumo de gas, de agua, de energía eléctrica u otros servicios públicos, la adquisición de materias primas o envases, el monto de los servicios de transporte utilizados, el importe de las remuneraciones abonadas al personal en relación de dependencia, calculado en función de los aportes de la seguridad social conforme dispone la Ley nacional 26063, y la que en futuro la reemplace, el monto de alquileres o el valor locativo del inmueble cedido gratuitamente donde realiza la actividad, los seguros, seguridad y vigilancia, publicidad, los gastos particulares (alimentación, vestimenta, combustible, educación, salud, servicio doméstico, alquiler, etcétera) acorde al nivel de vida de los propietarios o socios, el tipo de obra ejecutada, la superficie explotada y nivel de tecnificación y, en general, el tiempo de ejecución y las características de la explotación o actividad, los datos obtenidos por los *softwares* que contabilizan personas y vehículos a través de cámaras de video o filmaciones. Este detalle es meramente enunciativo y su empleo puede realizarse individualmente o utilizando diversos índices en forma combinada.”.

Sec. LEGISLATIVA.— “Artículo 66.- En los concursos preventivos o quiebras serán títulos suficientes para la verificación del crédito fiscal correspondiente al impuesto sobre los ingresos brutos, las liquidaciones de deuda expedidas por funcionario autorizado al efecto, cuando el contribuyente o responsable no hubiere presentado declaración jurada por uno o

más anticipos fiscales y la autoridad de aplicación conozca por declaraciones anteriores, determinaciones de oficio o declaraciones juradas presentadas ante otras administraciones tributarias, la medida en que presuntivamente les corresponda tributar el gravamen respectivo.

Título Séptimo
Pago e Intereses

Respecto del Pago. Anticipos.
Artículo 67.- La Agencia de Recaudación Fueguina podrá exigir con carácter general o para determinada categoría de contribuyentes o responsables, el ingreso de importes a cuenta del tributo que se deba abonar por el período fiscal en curso, en la forma y plazo que se establezca a tal efecto, hasta el vencimiento del plazo general o hasta la fecha de presentación de la declaración jurada, el que fuera posterior.
Pagos. Vencimientos.
Artículo 68.- El pago de los gravámenes deberá ser efectuado por los contribuyentes o responsables dentro de los siguientes plazos, en la forma y condiciones que establezca el órgano de aplicación:

a) los que resulten de declaraciones juradas, al vencimiento general que establezca la Agencia de Recaudación Fueguina;
b) los que resulten del procedimiento de determinación de oficio, a los 15 días de la notificación de la resolución dictada al efecto. En el supuesto que el contribuyente interponga recursos contra la resolución dictada por la autoridad de aplicación, al término de 15 días de agotada la vía administrativa;
c) los que no requieran declaración jurada de los contribuyentes o responsables, a los 15 días de realizado el hecho imponible, salvo disposición diferente de las normas fiscales;
d) en el caso de liquidaciones administrativas el pago de los impuestos determinados deberá ser efectuado dentro de los 15 días de notificada la liquidación respectiva.

Asimismo, la Agencia de Recaudación Fueguina podrá facultar a los contribuyentes y responsables, a efectuar pagos a cuenta de obligaciones fiscales futuras. En caso que los pagos así realizados deviniesen indebidos o sin causa, serán considerados como créditos fiscales a favor del contribuyente y podrán ser objeto de demanda de repetición conforme lo establecido en el artículo 157 en este código.
Pago de Multas. Término.
Artículo 69.- Las multas por infracciones previstas en los artículos 101, 120 y 121 deberán ser satisfechas por los infractores dentro de los 15 días de notificada la resolución respectiva.
Del Segundo Vencimiento.
Artículo 70.- Cuando el pago de los gravámenes se efectúe mediante la emisión de boletas a través de sistemas de computación, la autoridad de aplicación podrá incluir un segundo vencimiento dentro de los 30 días corridos posteriores al primero. En estos casos corresponderá también incluir la aplicación de un interés igual al previsto en el artículo 82, vigente al momento de disponerse la emisión, proporcional a los días de plazo que medien entre uno y otro vencimiento.

Las instituciones bancarias habilitadas recibirán hasta el segundo vencimiento de la obligación el importe de la misma con más el interés respectivo, sin necesidad de intervención previa de la autoridad de aplicación.
Forma de Pago.
Artículo 71.- El pago deberá efectuarse en efectivo, cheque, giro, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, a través de medios electrónicos o valores admitidos por el Poder Ejecutivo, en las oficinas o instituciones autorizadas al efecto.

Cuando el pago se efectúe con tarjetas de crédito y/o débito, el crédito fiscal se considerará cancelado al momento en el cual las entidades emisoras de las citadas tarjetas autoricen la operación a realizar.

Cuando el pago se efectúe con cheque o giro, el crédito fiscal se considerará

cancelado al momento de la presentación de los mismos ante la Agencia de Recaudación Fueguina, siempre y cuando su valor se acredite efectivamente en los plazos promedio fijados por las entidades bancarias, momento en el cual quedará facultada la emisión del correspondiente certificado de situación fiscal regular, de corresponder.

Facultades de la Agencia de Recaudación Fueguina para Establecer Otras Formas de Pago.

Artículo 72.- Si la Agencia de Recaudación Fueguina considerara que la aplicación de las disposiciones relativas a la percepción previstas por las leyes no resultaran adecuadas o eficaces para la recaudación, o la perjudicasen, podrá desistir de ellas, total o parcialmente, y disponer otras formas y plazos de ingreso.

- Ocupa la Presidencia la vicepresidenta primera Myriam Martínez.

Lugar De Pago.

Artículo 73.- Los pagos de los tributos deberán efectuarse en las instituciones bancarias u oficinas habilitadas por la Agencia de Recaudación Fueguina.

Responsable Sustituto.

Artículo 74.- Dispónese que el contribuyente del impuesto sobre los ingresos brutos no residente en el territorio nacional, resultará sustituido en el pago del tributo por el contratante, organizador, administrador, usuario, tenedor, pagador; debiendo ingresar dicho sustituto el monto resultante de la aplicación de la alícuota que corresponda en razón de la actividad de que se trate, sobre los ingresos atribuibles al ejercicio de la actividad gravada en el territorio de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, en la forma, modo y condiciones que establezca la Agencia de Recaudación Fueguina.

Artículo 75.- Los responsables determinarán, al efectuar los pagos o los ingresos a cuenta, a qué deudas deberán imputarse. Cuando así no lo hicieren y las circunstancias especiales del caso no permitiesen establecer la autoridad de aplicación de oficio imputará el pago de acuerdo al siguiente orden: 1) a las multas firmes o consentidas, 2) los recargos, 3) los intereses moratorios, 4) los intereses punitorios, 5) el capital de la deuda principal y, por último, 6) los cargos, si existieran.

Idéntico criterio se aplicará para la reimputación de pago respecto de planes de pagos caducos.

- Ocupa la Presidencia el vicegobernador Juan Carlos Arcando.

Compensación.

Artículo 76.- La autoridad de aplicación podrá compensar de oficio, o a pedido de los contribuyentes o responsables, los saldos acreedores provenientes de pagos hechos por error, en demasía o sin causa, con las deudas o saldos deudores de tributos declarados por los contribuyentes o responsables o determinados por la autoridad de aplicación.

La compensación se aplicará de modo tal de extinguir la totalidad de las deudas no prescriptas de la obligación fiscal comenzando por las más remotas y aunque se refieran a distintas obligaciones tributarias, previo de lo cual deberá actualizarse, cuando así correspondiere, débitos y créditos fiscales según las disposiciones vigentes en la materia.

Si una vez extinguida la totalidad de la deuda correspondiente a la obligación fiscal subsistiese a favor del contribuyente o responsable un remanente, la autoridad de aplicación podrá computar el mismo, en la forma y modo que establezca mediante reglamentación, como pago a cuenta de obligaciones futuras de la misma obligación, o aplicarlo a la cancelación de otras obligaciones adeudadas por el contribuyente o responsable.

La compensación prevista en el presente artículo se efectuará comenzando por los intereses y recargos, siguiendo con las multas y los gravámenes, en ese orden.

Cuando el contribuyente o responsable fuere acreedor del Estado provincial, por cualquier motivo, podrá solicitar al Poder Ejecutivo la compensación de su crédito con las obligaciones fiscales que adeude, en la forma que establezca la reglamentación.

Acreditación y Devolución.
Artículo 77.- Como consecuencia de la compensación prevista en el artículo anterior la administración podrá de oficio o a solicitud del interesado acreditarle el remanente respectivo o si lo estima necesario, en atención al monto o las circunstancias, proceder a su devolución.

Los contribuyentes que hayan deducido una acción de repetición no podrán hacer uso del mecanismo dispuesto en el párrafo anterior con relación a los saldos comprendidos en ella, hasta tanto la autoridad de aplicación resuelva su pretensión.

Los agentes de percepción podrán compensar en períodos posteriores, y respecto del mismo gravamen, lo ingresado en exceso por error en las percepciones efectuadas, en las formas y condiciones que establezca la reglamentación.

Los agentes de retención podrán compensar en operaciones posteriores, previa autorización de la Agencia de Recaudación Fueguina, lo ingresado en exceso por error en las retenciones efectuadas respecto del mismo gravamen a los mismos contribuyentes y responsables.

Prórroga.
Artículo 78.- Facúltase a la Agencia de Recaudación Fueguina para conceder facilidades para el pago de las deudas que los contribuyentes, responsables y terceros mantengan con la administración que acrediten encontrarse en condiciones económico-financieras que les impidan el cumplimiento oportuno de las obligaciones pertinentes.

Cuando la deuda se encontrare suficientemente garantizada a satisfacción de la Agencia de Recaudación Fueguina, se aplicará un interés que no podrá exceder del previsto por el artículo 83 y que resultará del cuadro de tasas que establecerá la Agencia de Recaudación Fueguina en atención a la antigüedad de la deuda.

Cuando la deuda no estuviere garantizada, se aplicará un interés que fijará la Agencia de Recaudación Fueguina dentro de los límites establecidos en el párrafo anterior.

La Agencia de Recaudación Fueguina podrá, en los casos de contribuyentes y responsables concursados, otorgar facilidades especiales para el ingreso de las deudas privilegiadas relativas a tributos y sus actualizaciones a cargo de aquella, originadas con anterioridad al auto de iniciación del concurso preventivo o auto declarativo de quiebra, estableciendo al efecto plazos y condiciones para dicho acogimiento.

Asimismo, la Agencia de Recaudación Fueguina podrá votar favorablemente en las condiciones que se fijen en las propuestas judiciales de acuerdos preventivos o resolutorios, por créditos quirografarios en tanto se otorgue al crédito fiscal idéntico tratamiento que al resto de las deudas quirografarias.

Planes de Facilidades de Pago.
Artículo 79.- La Agencia de Recaudación Fueguina podrá conceder con carácter general:

1. planes de facilidades de pago no mayores a cinco años, conforme con lo que establezca la reglamentación, pudiéndose extender a siete años en los casos de concurso o quiebras legislados en las Ley 24522 o la que en un futuro la reemplace.

   No gozarán de este beneficio los agentes de retención y percepción por los importes retenidos y/o percibidos a los contribuyentes o administradores;
2. prórroga para el cumplimiento de obligaciones formales en la forma que se reglamente.

   Los planes de pago podrán instrumentarse a través del sistema de tarjeta de crédito, pudiéndose adicionar el mismo porcentual que se aplique sobre el importe total de débito tributario a financiar en concepto de costo de administración del régimen.

Facúltase al director ejecutivo a:

a) acordar bonificaciones especiales para estimular el ingreso anticipado de impuestos no vencidos;
b) otorgar esperas y en general a celebrar acuerdos tendiente a asegurar la cancelación de las deudas fiscales pendientes;
c) otorgar planes de facilidades de pago no mayores de 12 cuotas, conforme con lo

que establezca la reglamentación para agentes de retención y percepción por los importes retenidos y/ o percibidos a los contribuyentes o administradores.

Cuando la deuda se encontrare suficientemente garantizada a satisfacción de la Agencia de Recaudación Fueguina, se aplicará un interés que no podrá exceder del previsto por el artículo 83 y que resultará del cuadro de tasas que establecerá la Agencia de Recaudación Fueguina en atención a la antigüedad de la deuda.

Cuando la deuda no estuviere garantizada, se aplicará un interés que fijará la Agencia de Recaudación Fueguina dentro de los límites establecidos en el párrafo anterior.

En todos los supuestos indicados precedentemente, la solicitud de facilidades que fuera denegada no suspende el curso de los accesorios correspondientes.

Garantía de Seguridad de Obligaciones Fiscales.

Artículo 80.- Para garantizar el ingreso de obligaciones en el marco de regímenes de facilidades de pago, o el otorgamiento de esperas para el pago, la Agencia de Recaudación Fueguina podrá exigir que se constituyan garantías tales como aval solidario de entidad de crédito o seguro de caución.

Asimismo podrá admitir garantías que consistan en hipoteca con cláusula de mandato irrevocable de venta, prenda, fianza personal y solidaria u otra que se estime suficiente, en la forma que determine la reglamentación.

La autoridad de aplicación podrá determinar mediante la reglamentación el universo de contribuyentes y/o responsables que resultarán alcanzados por lo dispuesto en el presente artículo .

En todos los casos, los gastos que deriven de la constitución, modificación y cancelación de las garantías estarán a cargo del contribuyente.

Artículo 81.- La constitución, ampliación, modificación, sustitución, cancelación y extinción de garantías en seguridad de obligaciones fiscales de cualquier naturaleza y de sus intereses, multas y restantes accesorios, como también de los demás actos u operaciones que así lo exijan, podrá efectivizarse por medios electrónicos o magnéticos que aseguren razonablemente la autoría e inalterabilidad de las mismas, en las formas, requisitos y condiciones que a tal efecto establezca la Agencia de Recaudación Fueguina.

Respecto de los Intereses. Recargos.

Artículo 82.- La falta de pago total o parcial de las obligaciones tributarias en los términos establecidos en este código o por las leyes tributarias especiales hará surgir, sin necesidad de interpelación alguna, la obligación de abonar simultáneamente con aquellas, más lo establecido por el artículo 83 de este código en caso de corresponder, un recargo mensual que no podrá exceder, al momento de su fijación, del doble del que aplique el Banco de Tierra del Fuego para las operaciones de descuento de documentos a 30 días.

Dicho recargo será establecido por el director ejecutivo, el que podrá determinar la forma en que el mismo será prorrateado, quedando facultado, asimismo, para adoptar las medidas que correspondan tendientes a compatibilizar la aplicación del nuevo régimen con el existente hasta el presente y establecer su vigencia.

Los plazos indicados se contarán en días corridos, desde la fecha en que debió efectuarse el pago y hasta aquella en que el pago se realice, se solicite la compensación, se inicie la acción judicial correspondiente, se acceda a un plan de facilidades de pago o hasta la fecha de la resolución de la administración que determine la obligación tributaria, la que correspondan según el caso.

La aplicación de los recargos no obsta a lo dispuesto en los artículos 101, 120 y 121 de este código.

Los recargos son aplicables también a los agentes de recaudación que no hubiesen percibido o retenido el tributo y la obligación de pagarlos por parte del agente subsiste aunque el gravamen sea ingresado por el contribuyente u otro responsable.

En el caso de concursos y quiebras, y a los efectos de la solicitud de verificación de créditos, los recargos se computarán desde la fecha en que debió efectuarse el pago hasta la fecha de presentación en concurso preventivo o fecha de sentencia declarativa de quiebra, según corresponda.

Cuando la extinción total o parcial de deudas tributarias vencidas no incluya el recargo resarcitorio generados hasta ese momento, este se capitalizará y generará idéntico recargo desde ese momento hasta la fecha de su pago.

Intereses Moratorios.

Artículo 83.- Los créditos fiscales por todo concepto que resulten de determinaciones practicadas por la administración y no sean abonadas dentro de los 15 días de notificada la resolución respectiva, devengarán, a partir de la fecha del dictado de la resolución y sin necesidad de interpelación alguna, un interés mensual que no podrá exceder, en el momento de su fijación, del doble del que aplique el Banco de la Provincia de Tierra del Fuego para las operaciones de descuento de documentos a 30 días.

Dicho interés será establecido por el director ejecutivo el que podrá determinar la forma en que el mismo será prorrateado, quedando facultado, asimismo, para adoptar las medidas que correspondan tendientes a compatibilizar la aplicación del nuevo régimen con el existente hasta el presente y establecer su vigencia.

La presentación en concurso preventivo y/o declaración de quiebra produce la suspensión de los intereses que devengue todo crédito de causa o título anterior a ella. El cómputo de los mismos renacerá con la homologación del acuerdo preventivo y/o resolutorio.

Cuando el monto del interés no fuera abonado al momento de ingresar el tributo o crédito fiscal adeudado, el mismo constituirá deuda fiscal y será de aplicación, desde ese momento y hasta el de efectivo pago, el régimen dispuesto en el primer párrafo.

El régimen previsto en el presente artículo no resultará aplicable a deudas por impuestos, tasas, contribuciones u otras obligaciones fiscales originadas en diferencias imputables exclusivamente a errores de liquidación por parte de la autoridad de aplicación, debidamente reconocidos.

Vía Recursiva.

Artículo 84.- Las liquidaciones en concepto de recargos o intereses expedidas por la administración únicamente podrán ser recurridas mediante la interposición de la demanda de repetición prevista en el artículo 157 de este código.

La Imputación de los Intereses.

Artículo 85.- Los importes abonados de conformidad con lo establecido en los artículos 82 y 83, respecto de anticipos, pagos a cuenta, retenciones y percepciones, no constituyen crédito a favor del contribuyente o responsable contra la deuda del tributo al vencimiento de este, salvo en los casos en que el mismo no fuere adeudado.

Falta de Reserva no Caduca Derecho.

Artículo 86.- La obligación de pagar los intereses o recargos subsiste no obstante la falta de reserva por parte de la Agencia de Recaudación Fueguina al recibir cualquier pago ingresado con posterioridad al vencimiento de la deuda principal, el que será imputado conforme lo dispuesto por el artículo precedente.

Sanciones. Independencia de las mismas.

Artículo 87.- Si la falta de pago, además, encuadra dentro de alguna de las conductas punibles, deberá ser materia de sanción conforme la normativa y el procedimiento vigente.

Intereses Punitorios.

Artículo 88.- En los juicios de ejecución fiscal se devengará, desde el momento de la interposición de la demanda, un interés mensual punitorio equivalente al doble del fijado en el artículo 83.

El referido interés, al igual que la forma en que el mismo será prorrateado, respecto de otros créditos fiscales que correspondan, será establecido por el Poder Ejecutivo.”.

Sr. RUBINOS.— Pido la palabra.

Señor presidente: Es para solicitar si podemos tener la información de lo que significa en términos de porcentajes, los intereses aplicados por moratoria en el artículo 83, que después devengan en el doble cuando, en el artículo que acabamos de leer, en las sanciones con independencia de las mismas.

Respecto a ese interés es que solicitamos información. Si alguien la puede buscar, mientras están leyendo, sobre todo teniendo en cuenta que estamos por tratar una ley de

emergencia por la que el Estado va a pagar sus deudas con un interés bastante menor a este. Si podríamos tenerlo para ver cuál va a ser el interés que aplique el Estado ante los que no cumplan con sus obligaciones tributarias.

Sr. BILOTA IVANDIC.— Pido la palabra.

Señor presidente: No hay problema en tratar de conseguir esa información, ya que se encuentran presentes funcionarios del equipo económico del gobierno de la provincia.

Sr. PRESIDENTE.— Legislador, hay un compromiso de darle la información, mientras tanto seguimos con la lectura del proyecto.

Sec. LEGISLATIVA.— "Título Octavo

Deberes Formales
Facultades de Verificación y Fiscalización

Deberes Formales. Concepto

Artículo 89.- Los contribuyentes, agentes de retención, percepción y/o información y demás sujetos responsables deben cumplir con los deberes que este código o leyes fiscales establezcan con el fin de facilitar la verificación, fiscalización, determinación y recaudación de los impuestos, tasas y contribuciones y sus accesorios.

Deberes Formales.

Artículo 90.- Sin perjuicio de lo que se establezca de manera especial en las leyes tributarias están obligados:

1. Los contribuyentes y responsables a:
   a) inscribirse en los registros que correspondan como contribuyente, agente de retención, percepción e información;
   b) presentar, en tiempo y forma, la declaración jurada o anticipos de todos los hechos imponibles atribuidos a ellos, por las normas de este código o las leyes fiscales especiales, salvo expresa indicación en contrario;
   c) presentar los estados contables en los casos de contribuyentes o responsables obligados a emitirlos;
   d) emitir y conservar las facturas o documentos equivalentes por todas las operaciones que efectúe, de conformidad con los requisitos que establezca la reglamentación respectiva, así como a registrar todas sus operaciones en libros o registros determinados, de acuerdo a la legislación nacional o provincial que a tal efecto se fije;
   e) comunicar a la administración, dentro de los 10 días de verificado, cualquier cambio en su situación que pueda dar origen a nuevos hechos imponibles, modificar o extinguir los existentes;
   f) conservar por el término de la prescripción y presentar a cada requerimiento de la administración todos los elementos y documentos que de algún modo se refieran a las operaciones y situaciones que constituyan los hechos imponibles y sirvan como comprobantes de veracidad de los datos consignados en las declaraciones juradas u otros documentos;
   g) presentar a requerimiento de la administración originales o copias certificadas de contratos, estatutos, sus modificaciones, actas sociales, papeles de trabajo y cualquier otro documento que la administración estime necesario para la identificación del sujeto tributario o para evaluar la naturaleza o cuantificación del hecho imponible, así como a conservar y exhibir los certificados o constancias por ella expedidos que acrediten su condición de contribuyente;
   h) contestar cualquier pedido de la administración de informes y aclaraciones con respecto a sus declaraciones juradas o, en general, a las operaciones y situaciones que, a juicio de la administración, puedan constituir hechos imponibles;
   i) comunicar directamente y en forma fehaciente a la dependencia que le haya intimado el ingreso o notificado el monto de la deuda fiscal, todo pago

relacionado con la misma y no computado en la respectiva liquidación. Esta comunicación deberá realizarla dentro de los 10 días corridos de la intimación o notificación. Sin perjuicio de la sanción que corresponda por incumplimiento a los deberes formales, su incumplimiento en caso de juicio de ejecución fiscal relevará a la administración de la parte de las costas que le puedan corresponder;

j) facilitar con todos los medios a su alcance las tareas de verificación, fiscalización y determinación de las obligaciones tributarias;
k) concurrir a las oficinas fiscales cuando su presencia le sea requerida y a acreditar personería cuando correspondiere;
l) utilizar los certificados, guías, formularios y demás documentos equivalentes que determine la administración y exhibirlos ante la autoridad competente;
m) comunicar a los dos días de la petición de concurso preventivo o quiebra propia a la administración dicha circunstancia, el incumplimiento de esta disposición liberará a la administración de la carga de las costas;
n) solicitar las constancias y/o documentación respecto del traslado o transporte de bienes en el territorio provincial, cualquiera fuese el destino y origen de los mismos.

2. Los agentes de retención, percepción y/o información a:

a) actuar como agente de retención, percepción o información cuando la administración lo designe como tal;
b) efectuar retenciones o percepciones de conformidad con las disposiciones legales vigentes;
c) presentar las declaraciones juradas que les correspondan con la información veraz y completa;
d) prestar la debida cooperación a las tareas de determinación, verificación y fiscalización de sus obligaciones conforme a las reglamentaciones vigentes emitidas por la administración.

Facultades de Verificación y Fiscalización.

Artículo 91.- Con el fin de asegurar la verificación y fiscalización oportuna de la situación impositiva de los contribuyentes y demás responsables, la autoridad de aplicación podrá exigir de ellos y aún de terceros:

a) la inscripción en tiempo y forma ante las autoridades fiscales correspondientes.

En tal sentido, se faculta a la Agencia de Recaudación Fueguina a unificar el número de inscripción de los contribuyentes con la Clave Única de Identificación Tributaria establecida por la Administración Federal de Ingresos Públicos;

b) la presentación de declaraciones en formularios, planillas, soporte magnético u otro medio similar de transferencia electrónica de datos, según se establezca de forma general, conteniendo la información requerida por las normas fiscales o por la autoridad administrativa;
c) la confección, exhibición y conservación por un término de 10 años de los libros de comercio rubricados, cuando corresponda, que registren todas las operaciones que interese verificar, o de los libros o registros especiales de las negociaciones y operaciones propias y de terceros que se vinculen con la materia imponible en la forma y condiciones que determine la autoridad de aplicación;

Todas las registraciones contables deberán estar respaldadas por los comprobantes y facturas correspondientes;

d) el mantenimiento en condiciones de operatividad de los soportes magnéticos que contengan datos vinculados a la materia imponible, por el término de cinco años contados a partir de la fecha de cierre del ejercicio en el cual se hubieran utilizado;
e) el suministro de información relativa a terceros;
f) la comunicación del cambio de domicilio, comienzo o cesación de actividades, transferencia de fondos de comercio, designación de nuevas autoridades societarias, modificación de integrantes de los órganos de la administración social,

cesión de cuotas y/o acciones; o cualquier otro acto que modifique su situación fiscal;

g) el otorgamiento, con motivo del ejercicio de la actividad, de determinados comprobantes y la conservación de sus duplicados, en la forma y condiciones que establezca la Agencia de Recaudación Fueguina;

Asimismo, la Agencia de Recaudación Fueguina podrá imponer obligaciones referidas a los sistemas de impresión de facturas de venta o documentos equivalentes;

h) el uso obligatorio de máquinas registradoras especiales, terminales, o similares, balanzas electrónicas, con medidor fiscal que emita tiques y posean memoria inalterable y de acceso exclusivo de la Agencia de Recaudación Fueguina de la provincia o compartido con la Dirección General Impositiva (AFIP), para el control de las obligaciones emergentes de los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización se encuentran a cargo de ambos organismos de fiscalización;

Los requisitos y características técnicas de los modelos, su aprobación, las condiciones que deben cumplir los fabricantes, proveedores o importadores en lo referente a mantenimiento, provisión de repuestos, controles, garantía de fabricación, así como todo otro requerimiento que deban reunir los equipos y las formalidades referidas al uso de los mismos serán reglamentadas por la Agencia de Recaudación Fueguina, no pudiendo diferir los mismos de los previstos a tal efecto por las disposiciones nacionales pertinentes;

i) atender las inspecciones y verificaciones enviadas por la autoridad de aplicación, no obstaculizando su curso con prácticas dilatorias;

j) cumplir, en el plazo que se fije, las intimaciones o requerimientos que se efectúen;

k) exhibir los comprobantes de pago, ordenados cronológicamente por vencimiento y por impuesto;

l) el mantenimiento en condiciones de operatividad de los soportes magnéticos que contengan datos vinculados con la materia imponible;

m) exigir de las sucursales, agencias, oficinas o anexos, que dependen de una administración central, ubicada fuera de la provincia y que no puedan aportar directamente los elementos necesarios para determinar las obligaciones, la registración de sus operaciones en libros especiales y conservar la documentación que las respalde.

Asimismo, podrá exigirse la exhibición y puesta a disposición de la administración, por el tiempo que esta estime razonable, de los libros de contabilidad o documentación que los sujetos posean fuera de su domicilio en la provincia.

La Agencia de Recaudación Fueguina tendrá amplios poderes para verificar en cualquier momento, inclusive en forma simultánea con la verificación del hecho imponible, el cumplimiento que los obligados den a las normas fiscales de cualquier índole.

A tal fin podrá:

1. Citar al firmante de la declaración jurada, al presunto contribuyente o responsable o a los terceros que a juicio de la autoridad de aplicación tengan conocimiento de las negociaciones u operaciones de aquellos, para que comparezcan a sus oficinas a contestar e informar verbalmente o por escrito, según esta estime conveniente, todas las preguntas o requerimientos que se les hagan sobre los ingresos, egresos, ventas y, en general, sobre las circunstancias y operaciones que a juicio de la autoridad de aplicación estén vinculadas al hecho imponible o a la naturaleza de los actos gravados;
2. requerir de los contribuyentes, responsables o terceros la presentación de todos los comprobantes, facturas y justificativos que se refieran al hecho precedentemente señalado;
3. inspeccionar los lugares, establecimientos, bienes, libros, anotaciones, papeles y documentos de contribuyentes o responsables, que puedan registrar o comprobar las negociaciones y operaciones que se juzguen vinculadas a los datos que

contengan o deban contener las declaraciones juradas.

La inspección a que se alude podrá efectuarse aún concomitantemente con la realización y ejecución de los actos u operaciones que interesen a la fiscalización.”.

Prosec. LEGISLATIVA.— “Asimismo, detener e inspeccionar los vehículos automotores, con el fin de verificar la situación impositiva de los contribuyentes y responsables, y la documentación respaldatoria de la mercadería transportada. Disponer un régimen de intervención fiscal permanente para determinada categoría de contribuyentes, que la reglamentación establecerá tomando en consideración la índole y magnitud de las actividades desarrolladas;

4. requerir de los contribuyentes, responsables y terceros, el acceso en tiempo real a los sistemas informáticos que registran operaciones vinculadas con la materia imponible y a los soportes magnéticos aludidos en el inciso d) del presente artículo, debiendo determinar la autoridad de aplicación los medios informáticos necesarios para generar el enlace con el contribuyente. Asimismo, podrá requerir copia de la totalidad o parte de dichos soportes magnéticos suministrando los elementos materiales al efecto;
5. requerir información o documentación relacionada con el equipamiento de computación utilizado y de las aplicaciones implantadas, sobre las características técnicas del hardware y software, ya sea que el procesamiento se desarrolle en equipos propios o arrendados o que el servicio sea prestado por un tercero. Asimismo podrá requerir especificaciones acerca del sistema operativo y los lenguajes y/o utilitarios utilizados, como así también listados de programas, carpetas de sistemas, diseños de archivos y toda otra documentación o archivo inherentes al procesamiento de los datos que configuran los sistemas de información;
6. previa autorización del juez correspondiente, utilizar, por parte del personal fiscalizador del organismo, los programas y utilitarios de aplicación en auditoría fiscal que posibiliten la obtención de datos, instalados en el equipamiento informático del contribuyente, que sean necesarios en los procedimientos de control a realizar. Lo especificado en el presente acápite también será de aplicación a los servicios de computación que realicen tareas para terceros.

   Esta norma sólo será de aplicación en relación a los sujetos que se encuentren bajo verificación. La autoridad de aplicación dispondrá los datos que obligatoriamente deberán registrarse, la información inicial a presentarse por parte de los responsables o terceros, y la forma y plazos en que deberán cumplimentarse las obligaciones dispuestas en el presente inciso;
7. requerir por medio del director de la Agencia de Recaudación Fueguina y demás funcionarios especialmente autorizados para estos fines por el mismo, el auxilio inmediato de la fuerza pública cuando vieran impedido el desempeño de sus funciones, cuando dicho auxilio fuera menester para hacer comparecer a los contribuyentes, responsables y terceros, o cuando fuera necesario para la ejecución de las órdenes de allanamiento, otorgadas por juez competente. Dicho auxilio deberá acordarse sin demora, bajo la exclusiva responsabilidad del funcionario que lo haya requerido;
8. solicitar al juez competente, cuando hubiere motivos para presumir que en algún lugar existen elementos de juicio probablemente relacionados con la presunta comisión de alguno de los delitos previstos en la Ley nacional 24769 y sus modificatorias, las medidas de urgencia y toda autorización que fuera necesaria a los efectos de la obtención y resguardo de aquellos.

   Dichas diligencias serán encomendadas al organismo recaudador, quien actuará en tales casos en calidad de auxiliar de la justicia, conjuntamente con el organismo de seguridad competente y/o la policía judicial, según lo disponga el juez interviniente.

   Asimismo, podrá recabar orden de allanamiento de la autoridad judicial citada,

cuando hubiere indicios vehementes de existencia de infracciones tributarias, como también en el caso de resistencia pasiva de los contribuyentes a la fiscalización. La solicitud especificará el lugar y la oportunidad en que habrá de practicarse, dejando expresa constancia de la facultad de los autorizados para secuestrar los libros, registros y documentación contable del lugar allanado que puedan servir como testimonio probatorio de infracciones a este código. Dichas órdenes deberán ser despachadas por el juez, dentro de las 24 horas, habilitándose días y horas si fuera solicitado;

9. el incumplimiento fehacientemente acreditado, en más de una oportunidad, de los deberes de información y colaboración previstos en los puntos 1) a 5) de este artículo, constituirá resistencia pasiva a la fiscalización;
10. en aquellos casos que se verifique la falta de inscripción en el impuesto sobre los ingresos brutos de aquel contribuyente que tuviera obligación de hacerlo y se encuentre ejerciendo actividad comercial en la vía pública o áreas comerciales no convencionales y se hallen en posesión de bienes y mercaderías sobre cuya adquisición no aporten facturas o comprobantes, se procederá al secuestro y posterior decomiso de la misma, en las formas y condiciones que establezca la autoridad de aplicación.

    La autoridad de aplicación podrá celebrar, con las correspondientes fuerzas de seguridad, los convenios que resulten necesarios a fin de permitir la correcta y eficaz implementación de lo regulado en el presente artículo.

Deber de Extender Constancia Escrita.

Artículo 92.- En todos los casos de ejercicio de facultades de verificación y fiscalización los funcionarios que las ejerciten deberán extender constancia escrita de los resultados así como de la existencia e individualización de los elementos exhibidos. Cada constancia escrita será suscripta por el funcionario que la extienda y por el interesado, salvo que este se negare o no pudiere firmar, de lo cual se dejará constancia. Las constancias escritas constituirán elementos de prueba en los procedimientos de determinación, de reconsideración y en los infraccionales.

- Ocupa la Presidencia la vicepresidenta primera Myriam Martínez.

Agentes de Información y Recaudación.

Artículo 93.- La Agencia de Recaudación Fueguina podrá imponer a terceros la obligación de actuar como agentes de información, control, recaudación, retención y/o percepción de impuestos, tasas, contribuciones en los casos y en la forma que ella determine.

Facúltese a la Agencia de Recaudación Fueguina a celebrar con los municipios de la provincia convenios para la gestión extrajudicial de cobranza de los impuestos administrados por ella, y de las multas impuestas por otros órganos u organismos provinciales, cuya cobranza se le haya asignado a la Agencia de Recaudación Fueguina, tendientes a evitar la promoción de acciones judiciales por apremio.

Artículo 94.- Los contadores públicos que certifiquen balances de entidades de cualquier tipo deberán hacer constar en el pasivo en renglón separado, claramente desglosada según corresponda a tributos, tasas o contribuciones provinciales, municipales y/o comunales, la deuda impaga por gravámenes y una previsión razonablemente estimada para cubrir los intereses que correspondiesen.

Artículo 95.- Los agentes de la Administración Pública provincial y municipal y los magistrados y funcionarios del Poder Judicial están obligados a informar al organismo recaudador los hechos que lleguen a su conocimiento en el desempeño de sus tareas específicas y que puedan constituir o modificar la materia imponible oportunamente declarada por el contribuyente o responsable.

A tal efecto, la Agencia de Recaudación Fueguina reglamentará el régimen de información previsto, cuyo incumplimiento hará a los respectivos funcionarios pasibles de la sanción establecida en el artículo 101.

Artículo 96.- Las instituciones bancarias, financieras, de seguros, organismos públicos o privados, nacionales, provinciales, municipales o comunales y, además, terceros en general están obligados a suministrar toda la información y documentación que le fuera requerida por la administración que refieran a hechos que en el ejercicio de sus actividades hayan contribuido a realizar o hayan debido conocer y que constituyan, modifiquen o extingan hechos imponibles o que refieran a bienes de titularidad de contribuyentes o terceros relacionados con el mismo, y toda otra información o documentación que a criterio de la administración resulte necesaria para el cumplimiento de sus funciones.

Artículo 97.- Los jueces notificarán de oficio a la Agencia de Recaudación Fueguina la apertura de juicios universales dentro de los dos días de iniciados, a fin de que la administración tome la intervención que corresponda.

Artículo 98.- La administración puede establecer, con carácter general o para una categoría de contribuyentes o responsables, la obligación de llevar uno o más libros donde anotarán las operaciones y los actos relevantes para la determinación de sus obligaciones tributarias, con independencia de los libros exigidos por la ley.

Artículo 99.- En los casos que se indican deberá observarse:

1. los escribanos no podrán otorgar escritura; los titulares del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor no podrán autorizar operaciones sobre bienes automotores; las entidades públicas centralizadas, descentralizadas y/o autárquicas o funcionarios del Poder Judicial no podrán realizar o autorizar tramitación alguna, sin previa:
   a) registración del número de CUIT (Clave Única de Identificación Tributaria) o CUIL (Clave Única de Identificación Laboral) o CDI (Clave de Identificación) o el que lo reemplazare, otorgado por la AFIP, correspondiente al o a los sujetos titulares y/o intervinientes en las operaciones, actos o bienes relacionados con obligaciones fiscales;
   b) acreditación del cumplimiento de las obligaciones fiscales pertinentes mediante la presentación de un certificado de cumplimiento fiscal de todos los tributos pertinentes extendido por la administración fiscal, con comprobantes de la Agencia de Recaudación Fueguina y de las demás reparticiones que tengan a su cargo la recaudación de tasas y contribuciones de mejoras;
   c) acreditación y/o declaración del bien o del personal en cuestión, según corresponda, en las obligaciones fiscales correspondientes al impuesto a las ganancias, impuesto sobre los bienes personales, impuesto a la ganancia mínima presunta, impuesto al valor agregado, impuestos internos y de la seguridad social, según corresponda;
2. en las transferencias de bienes, negocios, activos y pasivos de personas, entidades civiles o comerciales, o cualquier otro acto de similar naturaleza se deberá acreditar la inexistencia de deudas fiscales hasta la fecha de otorgamiento del acto, mediante certificación expedida por la Agencia de Recaudación Fueguina. El certificado de inexistencia de deudas, emitido por la Agencia de Recaudación Fueguina tendrá efectos liberatorios cuando se trate de los impuestos cuya recaudación y fiscalización están a cargo de dicha administración.

   Si la Agencia de Recaudación Fueguina constatare, antes del 31 de diciembre del año inmediato siguiente al de expedición de dicho certificado, la existencia de deudas, solamente estará obligado a su pago quien hubiera revestido en relación a las mismas la condición de contribuyente. Cuando se trate del impuesto sobre los ingresos brutos, la expedición del certificado solo tiene por objeto facilitar el acto y no posee efecto liberatorio, salvo cuando expresamente lo indicare el mismo certificado;
3. toda repartición del gobierno de la provincia, ente autárquico y organismo descentralizado, cuentas especiales, otras entidades, Poder Legislativo y Poder Judicial deberán requerir, previo pago de la orden de pago, la presentación a los proveedores de bienes y/o servicios que desarrollen actividades gravadas en la

provincia, constancia de cumplimiento fiscal de impuestos provinciales, conforme los determine la reglamentación de la Agencia de Recaudación Fueguina.

Título Noveno
Sanciones e Ilícitos

Infracciones. Concepto.

Artículo 100.- Toda acción u omisión que importe violación de normas tributarias de índole sustancial o formal constituye infracción punible en la medida y con los alcances establecidos en este código o leyes tributarias especiales. Las infracciones tributarias se aplicarán sin perjuicio de la responsabilidad penal por delitos comunes o por los delitos tributarios establecidos en la Ley nacional 24769 o la que en un futuro la reemplace.

Sanciones Formales.

Artículo 101.- El incumplimiento de los deberes formales establecidos en este código, en leyes tributarias especiales, en decretos reglamentarios, en resoluciones de la dirección y en toda otra norma de cumplimiento obligatorio, constituye infracción que será reprimida con multas graduable entre 1.100 U.A.P.E.S (Unidades Ajustables por Evolución Salarial) o la unidad que un futuro la reemplace, y 13.500 Unidades Ajustables por Evolución Salarial o la unidad que un futuro la reemplace, sin perjuicio de las multas que pudieren corresponder por otras infracciones.

En caso que la infracción consistiere en la omisión de presentar la declaración jurada dentro de los plazos establecidos será sancionada con una multa de 350 Unidades Ajustables por Evolución Salarial o la unidad que un futuro la reemplace, y 3.600 Unidades Ajustables por Evolución Salarial o la unidad que un futuro la reemplace, según se trate de persona física o jurídica, respectivamente, sin necesidad de requerimiento previo por parte de la administración. El procedimiento podrá iniciarse con la notificación emitida por el sistema de computación de la administración.

Si dentro del plazo de 15 días a partir de la notificación el infractor pagare voluntariamente la multa y presentare la declaración jurada omitida -o lo hubiese hecho antes de haber recibido la notificación-, el importe de la multa a que hace referencia el párrafo precedente se reducirá, de pleno derecho, a la mitad y la infracción no se considerará como antecedente en su contra.

En caso de no pagarse la multa o de no presentarse la declaración jurada reclamada conforme al procedimiento previsto en el segundo párrafo de este artículo, deberá sustanciarse el sumario previsto en el artículo 123 de este código. Sin perjuicio de las facultades previstas en el artículo 62 y/o, de reclamar el pago provisorio de impuestos vencidos, previstos en el artículo 64 del presente código.

Las multas por infracciones a los deberes formales podrán ser reducidas total o parcialmente mediante resolución fundada cuando las mismas impliquen culpa leve de los infractores.

Sumario. Excepciones.

Artículo 102.- Facúltase a la administración a no realizar el procedimiento establecido en el artículo 123 del presente código, para la imposición de sanciones por las infracciones a los deberes formales que tipifique la dirección, cuando el contribuyente o responsable cumplimente las formalidades omitidas, reconozca y abone espontáneamente la obligación adeudada, con más los recargos e intereses previstos en este Código de corresponder.

Multa y/o Clausura.

Artículo 103.- Sin perjuicio de la aplicación de las multas previstas en el artículo 101, la dirección podrá disponer la clausura por tres a 10 días de los establecimientos, en los siguientes casos:

1. cuando se hubiere comprobado la falta de inscripción, ante la dirección, de contribuyentes y responsables, en los casos y términos que establezca la reglamentación;
2. cuando se omita presentar reiteradamente las declaraciones juradas establecidas

en este código;

3. en caso que se omita la emisión y/o entrega y/o la registración de facturas o comprobantes equivalentes, relativos a operaciones comerciales, industriales, agropecuarias o de prestación de servicios, o que no reúnan los requisitos que establezca la dirección; o no conserven sus duplicados o constancias de emisión;
4. cuando no se acredite con la factura de compra o documento equivalente, o correspondiente, expedido en legal forma, la posesión en el establecimiento de materias primas, mercaderías o bienes de cambio;
5. cuando, ante requerimientos efectuados por la dirección, se verificara incumplimiento reiterado del contribuyente o responsable a suministrar en tiempo y forma la información solicitada por la autoridad administrativa;
6. no lleven anotaciones o registraciones de sus adquisiciones de bienes o servicios o de sus ventas, locaciones o prestaciones, o que llevadas, no reúnan los requisitos de oportunidad, orden o respaldo conforme a los requerimientos que en la materia exija la Agencia de Recaudación Fueguina;
7. haber recurrido a entes o personas jurídicas manifiestamente improcedentes respecto de la actividad específicamente desarrollada, adoptadas para evadir gravámenes. En tales casos la Agencia de Recaudación Fueguina deberá, obligatoriamente, poner en conocimiento a la Inspección General de Justicia tal circunstancia en un plazo no mayor de 45 días;
8. no mantener en condiciones de operatividad los soportes magnéticos que contengan datos vinculados con la materia imponible, por el término de cinco años contados a partir de la fecha de cierre del ejercicio en el cual se hubieren utilizado, o no facilitar a la Agencia de Recaudación Fueguina copia de los mismos cuando les sean requeridos;
9. no exhibir, dentro de los cinco días de solicitados por la autoridad de aplicación, los comprobantes de pago que les sean requeridos;
10. en los casos en que la Agencia de Recaudación Fueguina tome conocimiento fehaciente a través de información propia u obtenida de terceros respecto de la existencia de personal en relación de dependencia no registrado de acuerdo con las pautas establecidas por la Administración Federal de Ingresos Públicos.

Sin perjuicio de lo establecido en el primer párrafo del presente artículo, la autoridad de aplicación podrá determinar fundadamente la aplicación alternativa de la sanción de multa o de clausura, según las circunstancias objetivas que se registren en cada caso en particular.

Cuando se hubieren cumplido alguna de las sanciones previstas en este artículo, la reiteración de los hechos u omisiones indicados en el mismo dará lugar a la aplicación de las siguientes sanciones:

a) cuando se hubiere cumplido en forma exclusiva sanción de clausura: se aplicará una nueva clausura por el máximo de la escala;
b) cuando se hubieren cumplido las sanciones de clausura y multa en forma conjunta: se aplicarán en forma conjunta una nueva clausura y una nueva multa, ambas por el máximo de la escala;
c) cuando se hubiere cumplido en forma exclusiva sanción de multa: se aplicará sanción de clausura por seis días.

La reiteración aludida se considerará en relación a todos los establecimientos de un mismo responsable, dedicados total o parcialmente a igual actividad; pero la clausura sólo se hará efectiva sobre aquel en que se hubiera cometido la infracción salvo que, por depender de una dirección o administración común, se pruebe que los hechos u omisiones hubieran afectado a todo o una parte de ellos por igual. En este caso, la clausura se aplicará al conjunto de todos los establecimientos involucrados.

Acta de Comprobación. Citación.

Artículo 104.- La clausura prevista en el artículo anterior deberá ser precedida de un acta de comprobación en la cual los agentes de la administración dejarán constancias de todas las circunstancias relativas a los hechos y/o omisiones, a su prueba y de la normativa legal *prima*

facie infringida.

El acta de comprobación y citación deberá ser firmada por los agentes intervinientes y notificada en el mismo acto, entregándose copia a la persona que deba notificarse, o en su defecto, a cualquier persona del establecimiento o administración. Si se negaren a firmar o a recibirla, se dejará en el lugar donde se lleva a cabo la actuación, certificándose tal circunstancia en el original que se incorpore al sumario.

La misma acta contendrá una citación para que el contribuyente o responsable comparezcan a una audiencia para ejercer su defensa, munidos de las pruebas que hagan a su derecho, la que se fijará con un plazo no inferior a cinco días.

El imputado podrá presentar un escrito antes de la audiencia pero si así lo hiciere no tendrá derecho a ser oído verbalmente. Si este no asistiere a la audiencia o no presentare previamente un escrito se dejará constancia de ello y se procederá al dictado de la resolución respectiva, con los elementos obrantes en autos. Si compareciera con posterioridad se proseguirán las actuaciones en el estado en que se encuentren en ese momento.

Audiencia.

Artículo 105.- La audiencia o la presentación del escrito, en su caso, deberán realizarse ante el juez administrativo, quien deberá dictar resolución en un plazo no mayor a 10 días que podrá extenderse a 10 días más por decisión fundada. La resolución que ordene la clausura dispondrá sus alcances y el número de días en que deba cumplirse.

Firme la resolución, la dirección procederá a hacerla efectiva, adoptando los recaudos y seguridades del caso. Podrá realizar asimismo comprobaciones con el objeto de verificar el acatamiento de la medida y dejar constancia documentada de las violaciones que se observaren en la misma.

Procedimiento Recursivo Contra la Clausura.

Artículo 106.- La sanción de clausura podrá ser recurrida por recurso de apelación, otorgado con efecto suspensivo ante los tribunales de primera instancia en lo correccional que correspondan a la jurisdicción administrativa del deudor.

El recurso deberá ser interpuesto y fundado en sede administrativa, con patrocinio letrado, dentro de los cinco días de notificada la resolución del artículo anterior. Verificado el cumplimiento de los requisitos formales y dentro de los tres días de deducida la apelación, deberán elevarse el recurso y las piezas pertinentes de las actuaciones que determine el apelante y la dirección al juez competente, quien, previa audiencia del apelante, sin perjuicio de recabar todos los antecedentes que creyere indispensables, deberá dictar resolución dentro del término de 20 días, contados en su caso a partir de que se hayan practicado o adjudicado las diligencias o antecedentes necesarios e indispensables, requeridos por el mismo.

En caso de que la resolución establecida en el artículo anterior no sea recurrida por el infractor, la sanción se reducirá de pleno derecho a dos días.

Cese de Actividades Durante el Perióso de Clausura.

Artículo 107.- Durante el período de clausura cesará totalmente la actividad en los establecimientos, salvo la que fuese necesaria para la conservación o custodia de los bienes o para la continuidad de los procesos de producción que no pudieran interrumpirse por causas relativas a su naturaleza. El quebrantamiento de lo establecido en el presente será pasible de la sanción establecida en el artículo 108.

No podrá suspenderse el pago de salarios u obligaciones tributarias o previsionales, sin perjuicio del derecho del empleador a disponer de su personal en las formas que autoricen las normas laborales.

Quebrantamiento de la Clausura.

Artículo 108.- Quien quebrantare una clausura prevista en este título del código o violare los sellos, precintos o instrumentos que hubieran sido utilizados para hacerla efectiva, podrá ser sancionado con una nueva clausura hasta el triple del tiempo de aquella.

De la Incautación y del Decomiso de Bienes.

Artículo 109.- Serán objeto de decomiso los bienes cuyo traslado o transporte, dentro del territorio provincial, se realice en ausencia total de la documentación respaldatoria que

corresponda, en la forma y condiciones que exija la autoridad de aplicación, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 110 de este código y de las sanciones formales que pudieran corresponder.

En aquellos supuestos en los cuales la ausencia de documentación no fuera total, la autoridad de aplicación podrá optar entre aplicar la sanción de decomiso o una multa de entre el 15% y hasta el 30% del valor de los bienes transportados, aunque en ningún caso podrá ser inferior a la suma de 4.000 Unidades Ajustables por Evolución Salarial o la unidad que un futuro la reemplace.

En cualquiera de los supuestos previstos en los párrafos anteriores, si el interesado reconociere la infracción cometida dentro del plazo fijado para la celebración de la audiencia establecida en el artículo 105 o para la presentación de su descargo por escrito en sustitución de esta última, y abonara voluntariamente en forma conjunta una multa equivalente a los dos tercios del mínimo de la escala, se procederá al archivo de las actuaciones, no registrándose el caso como antecedente para el infractor. En estos supuestos la multa a abonarse no podrá ser inferior a la suma de 3.600 Unidades Ajustables por Evolución Salarial o la unidad que un futuro la reemplace.

A los fines indicados en este artículo, la autoridad de aplicación podrá proceder a la detención de vehículos automotores, requiriendo el auxilio de la fuerza pública en caso de ver obstaculizado el desempeño de sus funciones.

Artículo 110.- Verificada la infracción señalada en el artículo anterior, los funcionarios o agentes competentes podrán instrumentar el procedimiento tendiente a la aplicación de las siguientes medidas preventivas:

a) interdicción, en cuyo caso se designará como depositario al propietario, transportista, tenedor o quien acredite ser poseedor al momento de comprobarse el hecho;
b) secuestro, en cuyo supuesto se debe designar depositario a una tercera persona.

En tales casos se impondrá de las previsiones y obligaciones que establecen las leyes civiles y penales para el depositario debiendo, asimismo, ordenar las medidas necesarias para asegurar una buena conservación, atendiendo a la naturaleza y características de los bienes.

Los gastos que se generen con motivo de las medidas previstas en este artículo y los derivados de la guarda, custodia, conservación y traslado de los bienes, entre otros gastos, serán a cargo del propietario de los mismos.

Artículo 111.- La autoridad de aplicación estará facultada para disponer el traslado de los bienes objeto de la medida preventiva de secuestro a depósitos de su propiedad o contratados a terceros, pudiendo utilizar a tal efecto los vehículos en los que se transportaban los mismos.

En aquellos supuestos en que los contribuyentes no presten la colaboración necesaria para el traslado de los bienes al depósito designado para su almacenamiento, la autoridad de aplicación podrá disponer, según corresponda, el traspaso de los bienes a otro vehículo, la contratación de personal para la conducción de los vehículos que contengan los bienes, el remolque o la inmovilización del vehículo mediante el uso de cualquiera de los métodos adecuados a tal fin.”.

- Ocupa la Presidencia el vicegobernador Juan Carlos Arcando.

Sec. LEGISLATIVA.— “Artículo 112.- En el mismo acto del artículo 109 o 110, según corresponda, los agentes procederán a labrar un acta de comprobación de los hechos y omisiones detectados, de sus elementos de prueba y la norma *prima facie* infringida.

Asimismo, se dejará constancia de:

1) la medida preventiva dispuesta respecto de los bienes objeto del procedimiento;
2) la citación al propietario, poseedor, tenedor y/o transportista para que efectúen las manifestaciones que hagan a sus derechos, en una audiencia con el director ejecutivo de la agencia o con el funcionario a quien este delegue su competencia,

la que deberá celebrarse en el término máximo de cinco días corridos de comprobado el hecho.

Si alguno de los citados tuviera su domicilio fiscal a una distancia igual o superior a los 100 kilómetros de la sede en la que se debe comparecer se ampliará el plazo de la audiencia en razón de un día por cada 200 kilómetros o fracción que supere los 70 kilómetros;

3) el inventario de la mercadería y la descripción general del estado en que se encuentra, como así también la indicación de ausencia total o parcial de documentación respaldatoria. En caso de ausencia parcial de documentación respaldatoria, deberá detallarse la existente.

El acta deberá ser firmada por dos de los funcionarios o agentes intervinientes y el propietario, poseedor, tenedor y/o transportista de los bienes. Se hará entrega al interesado de copia de la misma.

Si el propietario, poseedor, tenedor y/o transportista de los bienes se negare a firmar el acta, se dejará constancia de tal circunstancia.

Artículo 113.- El acta de comprobación de la infracción deberá ser comunicada inmediatamente al director ejecutivo de la Agencia de Recaudación Fueguina o funcionario en quien se delegue su competencia, el que podrá dentro de las 48 horas, disponer el levantamiento o modificar la medida preventiva dispuesta, y, eventualmente, designar otro depositario. La resolución que al efecto se dicte será irrecurrible.

Cuando se decida el levantamiento de la medida preventiva se dispondrá que los bienes objeto del procedimiento sean devueltos o liberados en forma inmediata a favor de la persona oportunamente desapoderada, de quien no podrá exigirse el pago de gasto alguno derivado de la referida medida.

Artículo 114.- El imputado podrá presentar antes de la fecha prevista para la celebración de la audiencia, y en sustitución de esta, su defensa por escrito, quedando las actuaciones en estado de resolver.

El director de la Agencia de Recaudación Fueguina o el funcionario en quien delegue la competencia, decidirá sobre la procedencia de la sanción y el alcance de la misma, dictando resolución, en el plazo máximo de 10 días corridos, contados a partir de la celebración de la audiencia o de la fecha prevista para la misma en caso de incomparecencia, o de presentado el escrito de defensa.

Resuelta la improcedencia de la sanción por la autoridad de aplicación, se dispondrá que los bienes objeto del procedimiento sean devueltos o liberados en forma inmediata a favor de la persona oportunamente desapoderada, de quien no podrá exigirse el pago de gasto alguno.

La resolución que establece la sanción deberá disponer, cuando los bienes transportados en infracción sean de tipo perecederos, la entrega de mercadería de la misma naturaleza y cantidad que las descriptas en el acta de comprobación.

Asimismo, deberá establecer que le corresponde al imputado hacerse cargo de la totalidad de los gastos ocasionados por la medida preventiva que eventualmente se hubiera adoptado, como así también de la totalidad de los gastos derivados del cumplimiento de la sanción de decomiso, incluyendo aquellos referidos al traslado de los bienes decomisados al organismo público o institución a la cual los mismos sean destinados, de acuerdo con lo previsto en el artículo 118 del presente código.

Artículo 115.- El interesado podrá interponer, con efecto suspensivo, en contra de la resolución que disponga la sanción de decomiso, recurso de apelación ante los tribunales de primera instancia en lo correccional que correspondan a la jurisdicción administrativa del deudor, dentro de los cinco días hábiles de notificada la misma.

El recurso deberá presentarse debidamente fundado ante la autoridad que dictó la resolución que se recurre la cual, dentro de las 24 horas corridas, deberá elevarlo junto con todos los antecedentes del caso al juez competente. La sentencia que se dicte será inapelable.

Toda acción o impugnación judicial posterior, que ante cualquier instancia intente el

interesado, no suspenderá la ejecución de la sentencia.

Si correspondiere revocar la sanción no se podrá imponer al interesado el pago de gasto alguno, disponiendo asimismo el juez correccional la inmediata devolución o liberación de los bienes a favor de la persona oportunamente desapoderada.

Artículo 116.- Transcurrido el término para recurrir la sanción de decomiso, de conformidad con lo establecido en el artículo anterior, sin que se haga uso del derecho de apelar la decisión administrativa, el titular de la autoridad de aplicación o el funcionario a quien este delegue su competencia elevará, dentro de las 24 horas corridas, las actuaciones al juez correccional en turno quien deberá expedirse, sin más trámite, sobre la legalidad de la sanción de decomiso impuesta.

Artículo 117.- En los casos en que de acuerdo con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 109 se hubiere impuesto sanción de multa, la misma podrá recurrirse de acuerdo con lo establecido en el artículo 125 y concordantes del presente código.

Artículo 118.- Los bienes decomisados conforme las disposiciones establecidas por el presente título serán destinados a instituciones sin fines de lucro de tipo asistencial, educacional o religioso oficialmente reconocidas o las que el Poder Legislativo determine.

Las instituciones que resulten beneficiarias deberán destinar los bienes al cumplimiento de su fin social, quedando prohibida su transferencia bajo cualquier modalidad o título.

La autoridad de aplicación podrá proponer al contribuyente la sustitución de los bienes objeto de decomiso por otros bienes de primera necesidad, debiendo esto ser del mismo valor que los sustituidos. La totalidad de los gastos derivados de la sustitución de los bienes decomisados estará a cargo del sujeto sancionado.

Artículo 119.- Cuando se hubiere aplicado la sanción de decomiso de los bienes transportados, la misma quedará sin efecto si el propietario, poseedor, transportista o tenedor de los bienes, dentro del plazo establecido en el artículo 114, acompaña la documentación exigida por la autoridad de aplicación que diera origen a la infracción y abona una multa de hasta el 30% del valor de los bienes, la que, en ningún caso, podrá ser inferior a la suma de pesos 7.000, renunciando a la interposición de los recursos administrativos y judiciales que pudieran corresponder.

A los efectos de la graduación de la multa se entenderá por valor de los bienes al precio de venta de los mismos estimados por la autoridad de aplicación al momento de verificarse la infracción, facultándosela para disponer con carácter general los mecanismos y parámetros a considerar a tales efectos.

Sanciones Materiales.Omisión. Multas.

Artículo 120.- Incurrirá en omisión y será sancionado con una multa graduable de un 50% hasta un 200% del monto de la obligación fiscal omitida, todo contribuyente o responsable que omitiere el pago, total o parcial, de tributos y/o sus anticipos mediante la falta de presentación de declaraciones juradas o por ser inexactas las presentadas.

Cuando se tratare del impuesto de sellos, cuya determinación no se realice mediante la presentación de declaración jurada, la falta de pago total o parcial del gravamen por parte del contribuyente o responsable hará incurrir a este en las previsiones del párrafo anterior.

La misma sanción se aplicará a los agentes de retención y/o percepción y/o recaudación que no actuaren como tales.

No corresponderá la aplicación de la sanción prevista en este artículo cuando la infracción fuera considerada como defraudación por este código o por leyes tributarias especiales.

Asimismo, la multa establecida por el presente artículo sólo será de aplicación cuando existiere intimación, actuaciones o expedientes en trámite, vinculados con la situación fiscal del contribuyente o responsables o cuando se hubiera iniciado inspección.

Defraudación Fiscal. Multa.

Artículo 121.- Incurren en defraudación fiscal y son punibles con multas graduables de tres a 10 veces el importe del tributo en que se defraudare o se intentase defraudar al fisco, y/o clausura por 10 a 30 días, sin perjuicio de la responsabilidad penal por delitos comunes y por

delitos previstos en la ley penal tributaria:

1) los contribuyentes, responsables o terceros que realicen cualquier hecho, aserción, omisión, simulación, ocultación o maniobra con el propósito de producir o facilitar la evasión total o parcial de las obligaciones tributarias que a ellos o a terceros les incumban;
2) los agentes de retención o de percepción o de recaudación que mantengan en su poder el importe de tributos retenidos o percibidos después de haber vencido el plazo en que debieron abonarlos al fisco. El dolo se presume por el solo vencimiento del plazo, salvo prueba en contrario.

La multa que se establece en el presente artículo se reducirá al 100% del impuesto no ingresado oportunamente por los agentes de retención, percepción y recaudación, en tanto haya mediado el pago de los importes retenidos o percibidos hasta 10 días después del vencimiento establecido por las normas legales.

Asimismo, la multa establecida por el presente artículo sólo será de aplicación cuando existiere intimación, actuaciones o expedientes en trámite, vinculados con la situación fiscal del contribuyente o responsables o cuando se hubiera iniciado inspección.

Presunción de Fraude.

Artículo 122.- Se presume la intención de defraudar al fisco, salvo prueba en contrario, en las siguientes circunstancias cuando:

a. exista contradicción evidente entre las constancias de los libros, documentos o demás antecedentes con los datos consignados en las declaraciones juradas;
b. las declaraciones juradas contengan datos falsos o se omitan consignar bienes, actividades u operaciones que constituyan hechos imponibles;
c. se produzcan informes o comunicaciones intencionadamente falsos ante la dirección sobre bienes, actividades u operaciones que constituyan hechos imponibles;
d. se lleven dos o más juegos de libros para una misma contabilidad con distintos asientos o no se lleven o exhiban libros, documentos o antecedentes contables cuando la naturaleza o el volumen de las actividades u operaciones desarrolladas no justifique tal omisión;
e. no se lleven los libros especiales que menciona el artículo 90 de este código, documentos de comprobación suficiente u otras registraciones;
f. medie manifiesta disconformidad entre los preceptos legales o reglamentarios y su aplicación al declarar, liquidar o pagar el tributo;
g. los contribuyentes o responsables omitan presentar las declaraciones juradas y pagar el tributo adeudado, si por la naturaleza, volumen e importancia de las operaciones resulte que los mismos no podían ignorar su calidad de contribuyentes o responsables y la existencia de las obligaciones emergentes de tal condición;
h. cuando se adopten formas o estructuras jurídicas inadecuadas y/o improcedentes para desfigurar la efectiva operación gravada y ello se traduzca en apreciable disminución del ingreso tributario;
i. se adultere la fecha de los instrumentos o se extiendan sin fecha y lugar de otorgamiento, siempre que tales actos puedan resultar en un perjuicio a la renta fiscal;
j. se adulteren las estampillas y/o las fechas de su utilización;
k. se adulteren o destruya la documentación respecto de la cual los contribuyentes o responsables hubieran sido nombrados depositarios por la dirección. Se presumirá que existe adulteración cuando se observen diferencias entre los actos consignados por el inspector en las actas o planillas de inventarios de los documentos intervenidos y el contenido de los mismos, salvo que aquellos permaneciesen en paquetes lacrados y sellados que no presenten signos de violación, o que los originales o las copias fotostáticas, debidamente controladas, se hubieran agregado al expediente. Se presumirá que existe destrucción, cuando

la documentación intervenida no sea presentada a requerimiento de la dirección;

l. se produzcan cambios de titularidad de un negocio inscribiéndolo a nombre del cónyuge, otro familiar o tercero al solo efecto de eludir obligaciones fiscales y se probare debidamente la continuidad económica;

m. no comunique a la administración en tiempo y forma cambios o modificaciones que el contribuyente o responsable deba hacer a la administración respecto de su domicilio fiscal y/o todo otro proceder que obstaculice los poderes de fiscalización y verificación de la agencia.

Artículo 123.- Para aplicar las sanciones por las infracciones previstas por los artículos 101 -salvo la situación prevista en su segundo y tercer párrafos-, 120 y 121, dispondrá la instrucción de un sumario, si no ha entablado el procedimiento del artículo 62, notificando al presunto infractor y emplazándolo para que en el término de 15 días alegue su defensa y ofrezca las pruebas que hagan a su derecho. El interesado podrá agregar informes, certificaciones o pericias producidas por profesionales con título habilitante. No se admitirán las pruebas inconducentes ni las presentadas fuera de término.

La instrucción del sumario podrá disponerse por acta labrada por el funcionario de la dirección que hubiere comprobado la presunta infracción, acta que hará plena fe mientras no se pruebe lo contrario. Dicha acta será notificada al presunto infractor acordándole el plazo indicado en el párrafo anterior a los efectos y con los alcances allí consignados.

Si el imputado notificado en forma legal no compareciere dentro del término señalado en el párrafo anterior, el sumario proseguirá en rebeldía. Si compareciera con posterioridad, se seguirán las actuaciones en el estado en que se encuentren, debiendo el interesado purgar la rebeldía mediante el pago de la tasa retributiva de servicios cuyo importe establezca la ley impositiva anual, dentro del término consignado en los párrafos anteriores.

El interesado dispondrá para la producción de la prueba del término que a tal efecto le fije la dirección y que en ningún supuesto podrá ser inferior a 15 días.

El término de prueba no podrá ser prorrogado ni suspendido sino por disposición de la dirección.

La dirección podrá disponer medidas para mejor proveer en cualquier estado del trámite.

Vencido el término probatorio o cumplidas las medidas para mejor proveer, la dirección dictará resolución motivada, dentro de los 90 días siguientes, la que será notificada al interesado.

La resolución impondrá la multa correspondiente a la infracción cometida o declarará la inexistencia de la infracción y la absolución del imputado.

Sumario en la Determinación: Vistas Simultáneas.

Artículo 124.- Cuando de las actuaciones tendientes a determinar la obligación tributaria surja *prima facie* la existencia de infracciones previstas en los artículos 101 -salvo los supuestos indicados en el segundo y tercer párrafo del mismo-, 120 y 121, la dirección podrá ordenar la instrucción del sumario mencionado en el artículo anterior, antes de dictar la resolución que determine la obligación tributaria.

En tal caso, se podrá decretar simultáneamente la vista dispuesta por el artículo 62 y la notificación y emplazamiento aludidos en el artículo anterior, siendo facultativos de la dirección decidir ambas cuestiones en una sola o en distintas resoluciones.

Resoluciones. Notificación. Efecto.

Artículo 125.- Las resoluciones que apliquen las sanciones previstas en los artículos 101, 120 y 121 o declaren la inexistencia de presuntas infracciones deberán ser notificadas a los interesados y quedarán firmes si, dentro de los 15 días de notificadas, aquéllos no interponen la vía recursiva que corresponda según las disposiciones previstas en el artículo 148 de este Código.

Extinción de Acciones y Sanciones por Muerte del Infractor.

Artículo 126.- Las acciones y sanciones previstas en el presente título se extinguen por la muerte del infractor, aunque la decisión hubiere quedado firme y su importe no hubiere sido abonado.

Sanciones a los Terceros que Participen en el Ilícito.
Artículo 127.- Se aplicará la misma sanción que al responsable principal, sin perjuicio de la graduación que corresponda:

a) a los coautores, cómplices o encubridores, considerándose como tales a los que financien, instiguen o colaboren de cualquier manera con el autor para la realización del acto punible, según sea el caso;
b) a los directores, gerentes, administradores, representantes o mandatarios de entidades de hecho o de derecho y de personas físicas, cuando hubiesen actuado con dolo; y
c) a los terceros que, aunque no tuvieran deberes tributarios a su cargo, faciliten o silencien una infracción.

Sanciones a los Funcionarios y Profesionales.
Artículo 128.- Los funcionarios o profesionales que participen en carácter de coautores, cómplices o encubridores de las infracciones previstas en los artículos 120 y 121 de este código serán pasibles de las sanciones allí mencionadas, sin perjuicio de las que les correspondan por el ejercicio de su cargo o profesión.

La resolución de la Agencia de Recaudación Fueguina deberá ser comunicada al organismo que ejerza el contralor de la respectiva actividad.
Error Excusable.
Artículo 129.- En todos los casos, la dirección podrá no aplicar las multas previstas en los artículos 101 y 120 cuando las infracciones impliquen error excusable de hecho o de derecho.

Título Décimo
Juicio de Ejecucion Fiscal

Supuestos Comprendidos. Boleta de Deuda.
Artículo 130.- El cobro judicial de los tributos adeudados –total o parcialmente-, pagos a cuenta, retenciones, percepciones, anticipos, accesorios, intereses y multas ejecutoriadas se hará por la vía de la ejecución fiscal establecida en el presente título.

La ejecución fiscal procederá a partir del vencimiento de los plazos de pago establecidos, según corresponda, sin necesidad de mediar intimación individual o requerimiento extrajudicial alguno.

La dirección también podrá iniciar reclamos judiciales de los créditos en que resulten acreedores otros organismos del Estado provincial.

Servirá de suficiente título ejecutivo la liquidación y/o determinación administrativa de deuda expedida por los funcionarios autorizados al efecto y en las condiciones previstas por la Administración.

En caso de existir varios créditos contra una misma persona, podrán acumularse en una ejecución y en una misma boleta de deuda los varios conceptos, a elección del actor. La administración podrá fijar por resolución el límite mínimo de las deudas a ejecutar por la vía de la ejecución fiscal y el mínimo de las deudas a verificar en los procesos universales.

Cuando sea necesario recurrir a la vía judicial establecida en el presente, los importes respectivos devengarán un interés punitorio computable desde la fecha de interposición de la demanda conforme el artículo 88 de este Código.
Juicio Ejecutivo. Normas de Aplicación Supletoria.
Artículo 131.- La ejecución fiscal será considerada juicio ejecutivo a todos sus efectos, aplicándose las normas establecidas en este título y, de manera supletoria, las disposiciones contenidas en el Código Procesal Civil, Comercial, Laboral, Rural y Minero de la provincia.

En el juicio de ejecución fiscal no se producirá la caducidad de instancia. Asimismo, la administración podrá fijar por resolución el límite mínimo de las deudas a ejecutar.
De la Representación Ejercida por la Administración.
Artículo 132.- La representación del poder público en el juicio de ejecución fiscal será ejercida por los recaudadores fiscales nombrados por la administración fiscal de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Asimismo, la susodicha administración queda

facultada para removerlos.

Los recaudadores fiscales que lleven adelante las causas deberán ser abogados. En juicio, acreditarán la personería con la respectiva resolución de nombramiento, o copia íntegra de la misma certificada por la administración.

Los recaudadores fiscales no podrán actuar como patrocinantes, defensores o mandatarios en contra del Estado provincial, sus dependencias, reparticiones descentralizadas o desconcentradas, sus empresas, sociedades del Estado y/o municipales ya sea en recursos administrativos y/o acciones judiciales.

Los recaudadores no podrán percibir fuera de juicio los rubros ejecutados. Los honorarios y gastos causídicos, sea en forma total o parcial, serán calculados con intervención de la repartición de la cual dependen, conforme a la liquidación que la misma practique o la que apruebe la autoridad competente.

Tampoco podrán desistir, transar, conceder esperas, paralizar o suspender el procedimiento, sin previa autorización escrita de la superioridad. Los jueces no podrán proveer tales peticiones sin que se acredite esta circunstancia.

Interposición de la Demanda. Requisitos. Efectos.

Artículo 133.- La demanda de ejecución fiscal debe entablarse ante los tribunales ordinarios de la provincia que correspondan al domicilio fiscal del accionado, y en caso que el mismo no existiere o no subsistiere, se podrá optar entre el lugar de cumplimiento de la obligación o en el lugar donde se encuentren sus bienes inmuebles, sus negocios o ejerza su actividad económica o donde se realice el hecho imponible.

A los efectos del procedimiento, la ejecución se tendrá por interpuesta con la sola presentación de la demanda ante el juzgado y esta interposición es la que debe tomarse para computar los intereses establecidos por el artículo 88.

La demanda contendrá, según surja del título administrativo base de la acción, el nombre del demandado, su domicilio y el carácter del mismo, concepto y monto reclamado. Además, podrá especificar las medidas cautelares u otras medidas alternativas a trabarse para garantizar el cobro del crédito fiscal reclamado. La administración deberá constituir domicilio especial para la tramitación del juicio en cuestión.

En ningún caso la facultad que el fisco confiere a los contribuyentes para el pago de sus obligaciones fuera de la jurisdicción provincial podrá entenderse como declinación de esta última.

Pluralidad de Sujetos Pasivos. Pluralidad de Créditos.

Artículo 134.- Si fueren varios los ejecutados, en razón de la misma obligación, el juicio de ejecución fiscal tramitará en un solo juicio, unificándose la personería en un representante, a menos que existan intereses encontrados a criterio del magistrado. Si a la primera intimación las partes no coinciden en la elección del representante único, el juez lo designará de oficio y sin recurso alguno por parte de los ejecutados contra tal designación.

En caso de existir varios créditos contra una misma persona, podrán acumularse en una misma ejecución, a elección del actor. Asimismo podrá emitirse un único título ejecutivo comprensivo de todas las deudas y conceptos que el contribuyente o responsable mantenga con la administración.

Mandamiento de Intimación de Pago.

Artículo 135.- Cumplidos los recaudos del artículo 133 si el juez encontrara en forma el título ejecutivo, y sin más trámite, ordenará mandamiento de intimación de pago y embargo por el monto total reclamado en la demanda con más un 30% para atender a intereses y costas. En el mismo acto y auto citará de remate al deudor para que oponga excepciones en el término de cinco días perentorios e improrrogables.

Excepciones. Pruebas. Ofrecimiento y Oportunidad. Traslado de la Contestación.”.

- Murmullos del público.

Sr. PRESIDENTE.— Secretaria, un segundito. Por favor, pido a la sala un poco de silencio porque se está registrando versión taquigráfica y el ruido, por ahí, entorpece el trabajo.

Continúe, secretario.

Sec. ADMINISTRATIVO.— "Artículo 136.- Las únicas excepciones admisibles serán las siguientes, a saber:

a) pago total o parcial documentado. Los pagos efectuados después de iniciado el juicio, los pagos mal imputados por el contribuyente o no comunicados por el contribuyente o responsable en la forma establecida, no serán hábiles para fundar la excepción. Acreditados los mismos en los autos, procederá su archivo o la reducción del monto demandado con costas a los ejecutados;
b) espera documentada;
c) prescripción; y
d) inhabilidad de título, no admitiéndose esta excepción si no estuviere fundada exclusivamente en vicios relativos a la forma extrínseca del título ejecutivo.

En ningún caso y bajo ningún concepto bajo pena de decretar la nulidad de la sentencia admitirán los jueces en juicio controversias sobre el origen del crédito ejecutado ni podrá cuestionarse la inconstitucionalidad del tributo o conceptos cuyos pagos se perciben.

La prueba de las excepciones opuestas por el demandado deberá ofrecerse en el mismo escrito en que se opongan al contestar la intimación. No procediéndose así, el magistrado de oficio y sin más trámite rechazará las excepciones y dictará sentencia de trance y remate, siendo inapelable el pronunciamiento.

La prueba del pago deberá consistir exclusivamente en los recibos otorgados por funcionarios o reparticiones fiscales o constancias de instrumentos públicos o actuaciones judiciales. El comprobante respectivo deberá acompañarse al oponerse la excepción.

De las excepciones opuestas y documentación acompañada se dará traslado con copia por cinco días al ejecutante debiendo el auto que así lo dispone notificarse personalmente o por cédula. Inmediatamente de recibida la cédula o habiéndose notificado personalmente, el recaudador fiscal deberá notificar las defensas interpuestas por el ejecutado a su superioridad, bajo apercibimiento de la separación del cargo. Si se opusieren otras excepciones o defensas que las enumeradas o se intentara probar las admisibles en otra forma que la autorizada, el juez procederá a su rechazo sin más trámite, debiendo poner los autos para sentencia.

Contestadas las excepciones o una vez vencido el plazo para el traslado de las mismas, existiendo prueba a producir, se abrirá a prueba la causa por el término de 10 días, prorrogables.

Autos para Sentencia. Inapelabilidad.

Artículo 137.- Vencido el término que se hubiere acordado para producir la prueba, conforme a lo dispuesto en el anterior, el tribunal llamará a autos para sentencia y resolverá dentro de los 15 días siguientes.

La sentencia de ejecución o la revocación del auto de intimación de pago y embargo, en ambos casos son inapelables, quedando a salvo el derecho del fisco provincial de librar nuevo título ejecutivo, y del ejecutado de repetir las sumas abonadas conforme las normas tributarias aplicables en la especie.

En los casos de sentencias dictadas en los juicios de ejecución fiscal por cobro de tributos, la acción de repetición sólo podrá deducirse una vez satisfecho el tributo adeudado, accesorios y costas.

Juicio Ordinario de Conocimiento Posterior. Condición *Sine Qua Non*.

Artículo 138.- Cualquiera fuera la sentencia que recaiga en la ejecución fiscal el ejecutante o el ejecutado podrán promover juicio ordinario una vez cumplidas las condenas impuestas en aquellas y dentro de los 30 días de quedar firme la sentencia. Cumplir la condena impuesta en la sentencia de ejecución, para la parte que fuera, resultará condición *sine qua non* para la admisibilidad de la demanda de conocimiento posterior.

Toda defensa o excepción que por ley no fuera admisible en la ejecución fiscal podrán hacerse valer en el juicio ordinario. No corresponderá el nuevo proceso para el ejecutado que no opuso excepciones, respecto de las que legalmente pudo deducir, ni para el ejecutante en cuanto a las que se hubiese allanado. Tampoco se podrán discutir nuevamente las cuestiones

de hecho debatidas y resueltas en el juicio de ejecución fiscal cuya defensa o prueba no tuviesen limitaciones establecidas por la ley, ni las interpretaciones legales formuladas en la sentencia, ni la validez o nulidad del procedimiento de ejecución.

Curso del Sumario. Independencia de la Ejecución.

Artículo 139.- En todos los casos, el cobro de los impuestos por la vía de la ejecución fiscal no estará supeditado al curso del sumario a que pueda dar origen la falta de pago de los mismos.

Notificaciones. Oficiales Ad Hoc.

Artículo 140.- Las notificaciones que deban practicarse se efectuarán en el domicilio constituido por la parte demandada o el que corresponda al lugar de cumplimiento de la obligación, a elección del actor. Los jueces podrán autorizar notificaciones por telegrama colacionado, carta documento o cualquier otro medio fehaciente a solicitud del actor, y en este caso servirá como suficiente prueba de la notificación al ejecutado el recibo especial que expida la empresa a cargo del servicio público de correos y telecomunicaciones, contándose los términos a partir de la fecha consignada en el mismo.

El diligenciamiento de los mandamientos de ejecución y embargo y las notificaciones podrán estar a cargo de empleados de la administración cuando esta lo requiera. En estos casos, los jueces designarán al funcionario propuesto como oficial de justicia ad hoc dentro del término de 48 horas. El costo que demande la realización de diligencias será soportado por la parte condenada en costas.

La administración podrá, igualmente, una vez firme la sentencia de remate dictada en el juicio de ejecución fiscal, proponer martillero y tasador para efectuar la subasta, debiendo en tal caso el juez que entiende en la causa, designar al propuesto.

La publicación de los edictos pertinentes se efectuará por el término de dos días en el Boletín Oficial, en un diario de los de mayor circulación del lugar o en otros medios masivos de comunicación, a elección de la administración.

Facilidades de Pago.

Artículo 141.- La administración podrá acordar a los deudores ejecutados planes de facilidades de pago siempre que a juicio de esa administración la ejecución de los bienes pueda ocasionar un daño irreparable al contribuyente o responsable. Dicha facilidad podrá acordarse previa constitución de garantía suficiente. Habiéndose producido la caducidad de la facilidad de pago concedida, se proseguirá con las acciones en el estado en que se encontraban previo al otorgamiento de dicha facilidad.

El contribuyente que regularice su deuda en plan de regularización o de facilidades de pago deberá hacerse cargo de las costas y gastos causídicos, incluidos la tasa de justicia y la contribución sobre la misma respecto del juicio.

Deuda Garantizada.

Artículo 142.- Si la deuda líquida y exigible estuviera garantizada mediante aval, fianza personal, prenda, hipoteca o cualquier otra garantía, la demanda de ejecución fiscal se entablará conjuntamente contra el garante y el contribuyente o representante principal de la deuda reclamada. Dictada la sentencia de trance y remate, se procederá en primer lugar a ejecutar la garantía. Si la misma no fuese suficiente para cubrir la deuda, se podrá seguir con la ejecución contra cualquier otro bien o valor de los ejecutados. Los profesionales ejecutores no podrán percibir a sus nombres el capital reclamado ni sus intereses y actualización; las sumas correspondientes a tales conceptos se depositarán por el demandado a la orden de los autos del juicio correspondientes a la cuenta del juzgado, quien dispondrá la transferencia de los fondos a la orden de la administración.

Embargos Preventivos.

Artículo 143.- En cualquier momento podrá la administración solicitar embargo preventivo, inhibición general de los deudores o sus sucesores, o cualquier otra medida cautelar en resguardo del crédito fiscal, por la cantidad que presumiblemente adeuden los contribuyentes o responsables. En tal circunstancia, los jueces deberán decretarla en el término de 24 horas sin más recaudos ni necesidad de acreditar peligro en la demora, bajo responsabilidad del Fisco.

Para hacer efectivas las medidas que se ordenen, la administración podrá proponer la

designación de oficiales ad hoc, los que actuarán con las facultades y responsabilidades de los titulares. La caducidad de las medidas cautelares se producirá si la administración no iniciase la ejecución fiscal transcurridos 30 días judiciales contados de la siguiente manera, a saber:

a) desde la fecha de notificación al contribuyente del rechazo del recurso que agote la vía administrativa; y
b) desde que la deuda ha sido consentida por el contribuyente, al no interponer recurso contra su determinación o liquidación administrativa, dentro de los plazos establecidos.

Cuando el contribuyente o responsable cancele o regularice la deuda cautelada o solicite la sustitución de la medida trabada, las costas serán a su cargo.

Medidas Precautorias.

Artículo 144.- La administración estará facultada para trabar por las sumas reclamadas las medidas precautorias indicadas en el escrito de inicio del juicio de ejecución fiscal o que indicare en posteriores presentaciones.

A tal efecto, podrá la administración decretar el embargo de cuentas bancarias, fondos y valores depositados en entidades financieras, o de bienes de cualquier tipo o naturaleza, inhibiciones generales de bienes, y adoptar otras medidas cautelares tendientes a garantizar el recupero de la deuda en ejecución. También podrá disponer el embargo general de fondos y valores de cualquier naturaleza que los ejecutados tuvieran depositados en las entidades financieras regidas por la Ley nacional 21526. Asimismo, podrá controlar su diligenciamiento y efectiva traba. Dentro de los 15 días de notificadas de la medida, las entidades financieras deberán informar a la administración acerca de los fondos y valores que resulten embargados, no rigiendo a tales fines el secreto que establece el artículo 39 de la Ley nacional 21526.

Para los casos que se requieran desapoderamiento físico o allanamiento de domicilios deberá requerir la orden respectiva del juez competente. Asimismo, y en su caso, podrá llevar adelante la ejecución de sentencias mediante la enajenación de los bienes embargados a través de subasta o concurso públicos.

Si las medidas cautelares recayeran sobre bienes registrables o sobre cuentas bancarias del deudor, la anotación de las mismas se practicará de oficio expedido por la administración, el cual tendrá el mismo valor que una requisitoria y orden judicial.

En caso de que cualquier medida precautoria resulte efectivamente trabada antes de la intimación al demandado, estas deberán serle notificadas dentro de los cinco días siguientes de haber tomado conocimiento de la traba.

Las entidades financieras y terceros deberán transferir los importes totales o líquidos embargados a una cuenta a nombre de autos y a la orden del juzgado que deberá abrirse en la sucursal del Banco de la Provincia de Tierra del Fuego correspondiente a la jurisdicción del juzgado, hasta la concurrencia del monto total del título ejecutivo, dentro de los dos días hábiles inmediatos siguientes a la notificación de la orden emitida por el juez.

Los gastos y/o comisiones que demande dicha medida serán soportados íntegramente por el contribuyente o responsable y no podrán detraerse del monto transferido.

Levantamiento de las Medidas Precautorias.

Artículo 145.- La administración estará facultada para ordenar, previa regularización de la deuda o sustitución de la misma, el levantamiento de las medidas que oportunamente se hubieran trabado en resguardo del crédito fiscal de conformidad a lo establecido en el anterior, informándolo al juez interviniente en el juicio de ejecución fiscal.

Medidas Cautelares.

Artículo 146.- Al inicio de juicio de ejecución fiscal o con posterioridad y en cualquier estado del proceso podrá solicitarse como medida cautelar, entre otras, y el juez deberá disponerla en el término de 24 horas sin más recaudos ni necesidad de acreditación de peligro en la demora, todo ello bajo responsabilidad del Fisco:

1. Traba de embargos sobre:
   a) general de fondos, cuentas o activos bancarios y financieros, y valores de cualquier naturaleza que los contribuyentes tengan depositados en las entidades

financieras regidas por la Ley nacional 21526, a diligenciar directamente ante las entidades correspondientes para el supuesto de encontrarse determinadas, caso contrario ante el Banco Central de la República Argentina para que proceda a efectuar las comunicaciones pertinentes a las instituciones donde puedan existir, instruyendo la transferencia a cuenta de autos exclusivamente del monto reclamado con más lo presupuestado para responder a intereses y costas. Para el caso de resultar insuficientes, las cuentas permanecerán embargadas hasta que se acredite y transfiera el monto por el cual procedió la medida asegurativa del crédito fiscal;

b) bienes inmuebles y muebles sean registrables o no; y
c) sueldos, jubilaciones, pensiones u otras remuneraciones siempre que sean superiores a tres salarios mínimos.

2. inhibición general de bienes.
3. intervención de caja.

En todos los casos, las anotaciones y levantamientos de las medidas asegurativas del crédito fiscal como así también las órdenes de transferencia de fondos que tengan como destinatarios los registros públicos, instituciones bancarias o financieras, podrán efectivizarse a través de sistemas y medios de comunicación informáticos.

Responsabilidad de los Depositarios.

Artículo 147.- Las entidades financieras, así como las demás personas físicas o jurídicas depositarias de bienes embargados serán responsables en forma solidaria por hasta el valor del bien o la suma de dinero que se hubiere podido embargar, cuando con conocimiento previo del embargo hubieren permitido su levantamiento, y de manera particular en las siguientes situaciones:

a) sean causantes en forma directa de la ocultación de bienes, fondos, valores o derechos del contribuyente ejecutado, con la finalidad de impedir la traba del embargo; o
b) cuando sus dependientes incumplan las órdenes de embargo u otras medidas cautelares ordenadas por los jueces o por los agentes fiscales.

Verificada alguna de las situaciones descriptas, el agente fiscal comunicará de inmediato al juez de la ejecución fiscal de que se trate, acompañando todas las constancias que así lo acrediten. El juez dará traslado por cinco días a la entidad o persona denunciada, luego de lo cual deberá dictar resolución mandando a hacer efectiva la responsabilidad solidaria aquí prevista, la que deberá cumplirse dentro de un plazo máximo de 10 días.

Titulo Undécimo
Procedimiento Recursivo

Recurso de Reconsideración.

Artículo 148.- Contra las resoluciones de la administración que determinen total o parcialmente obligaciones tributarias, anticipos, pagos a cuenta y sus accesorios, impongan sanciones por infracciones –excepto de clausura o demanda de repetición- o denieguen exenciones o compensaciones, el contribuyente o responsable sólo podrá interponer el recurso de reconsideración, no pudiendo interponerse en esta materia ninguno de los previstos por la Ley provincial 141, de Procedimiento Administrativo.

Presentación. Forma.

Artículo 149.- El recurso establecido en el artículo precedente deberá interponerse por escrito ante la administración, personalmente, por correo o mediante carta certificada con recibo de retorno, fundadamente y dentro del plazo de 15 días de notificada la resolución que es objeto del recurso.

- Murmullos del público.

Sr. PRESIDENTE.— Un momento, señor secretario.

Nuevamente pido silencio en la sala porque se está tomando versión taquigráfica. Muchas gracias.

Sec. ADMINISTRATIVO.— "Con la interposición del recurso deberán exponerse circunstanciadamente los agravios que cause al recurrente la resolución recurrida. En el mismo acto deberán ofrecerse todas las pruebas acompañando las que consten en documentos.

Con el recurso interpuesto sólo podrán ofrecerse o acompañarse pruebas que se refieran a hechos posteriores a la resolución recurrida o documentos que no pudieron presentarse a la administración por impedimento justificable. Podrá también el recurrente reiterar la prueba ofrecida ante la administración y que no fue admitida o que, habiendo sido admitida y estando su producción a cargo de la administración, no hubiera sido sustanciada.

- Ocupa la Presidencia el vicepresidente segundo, Pablo Villegas.

Prosec. ADMINISTRATIVA.— "Plazo Máximo para Resolver.

Artículo 150.- La administración deberá resolver el recurso de reconsideración dentro de un plazo máximo de 90 días contados desde su interposición. En caso de que proceda la situación prevista por el artículo 153, el plazo estipulado precedentemente de 90 días podrá ampliarse por 30 días.

Una vez producida la prueba o vencido el plazo para la producción de la misma, la resolución que se dicte causará fuerza ejecutoria.

Vencido el plazo establecido en los apartados precedentes, sin que la dirección haya dictado resolución, el interesado podrá presentar pronto despacho para agotar la vía administrativa y, transcurridos 20 días sin resolución por parte de la dirección, podrá considerar denegada tácitamente el recurso, quedando habilitada la vía judicial pertinente previo pago del tributo reclamado.

Efecto Suspensivo para el Apelante.

Artículo 151.- La interposición del recurso de reconsideración suspenderá la intimación de pago respectiva.

Trámite del Recurso.

Artículo 152.- Dentro de los cinco días de interpuesto el recurso de reconsideración, la agencia examinará si el mismo ha sido deducido en término y si resulta procedente. Si existen defectos formales subsanables en la presentación del recurso se intimará al recurrente a fin de que subsane dicho defecto en el plazo que a tal efecto fije la administración, bajo apercibimiento de tenerlo por desistido.

Prueba.

Artículo 153.- La administración ordenará la recepción de las pruebas que se consideren admisibles, conducentes y pertinentes para la pronta y recta resolución de la materia objeto del recurso, fijando quién deberá diligenciarlas y el término dentro del cual deberán ser sustanciadas, el que no podrá exceder de 15 días.

La administración podrá ampliar, a solicitud del contribuyente antes de vencido el citado plazo y cuando existan circunstancias que así lo justifiquen, por igual término, el plazo establecido en el párrafo anterior.

Medidas para Mejor Proveer.

Artículo 154.- La administración podrá disponer medidas para mejor proveer. Las medidas para mejor proveer, incluidas las periciales, podrán ser practicadas por organismos provinciales competentes en la materia de que se trate. En todos los casos, las medidas para mejor proveer serán notificadas a las partes, quienes podrán controlar su diligenciamiento y efectuar las comprobaciones y verificaciones que estimen convenientes.

Resolución.

Artículo 155.- Vencido el término fijado para la producción de las pruebas y diligenciadas las medidas para mejor proveer que puedan disponer conforme el anterior, la administración deberá pronunciarse dentro del término establecido por el artículo 150, debiendo practicar en la resolución la liquidación del tributo con más sus accesorios y fijar el importe de la multa, en

su caso.

Esta resolución agota la vía administrativa y extingue el efecto suspensivo del recurso.

Demanda Ordinaria. Pago de lo Reclamado Condición Sine Qua Non.

Artículo 156.- Contra las decisiones definitivas y que agotan la vía administrativa, incluidas las de este título, el contribuyente o responsable podrá interponer demanda judicial dentro de los 30 días de notificada la resolución ante los fueros locales pertinentes.

En los casos de denegatoria presunta el interesado deberá presentar pronto despacho y si no hubiere pronunciamiento dentro de los 20 días hábiles quedará, por este solo hecho, expedita la vía judicial.

En todos los casos, el actor no podrá fundar sus pretensiones en hechos no alegados en la última instancia administrativa ni ofrecer prueba que no hubiera sido ofrecida en dicha instancia, con excepción de los hechos nuevos y de la prueba sobre los mismos.

Será requisito *sine qua non* para admitir la demanda judicial, el pago previo de los tributos adeudados, su actualización, recargos e intereses mediante las formas previstas en la ley vigente, liquidadas a la fecha de interposición de la demanda.

Ningún juez podrá dar curso a la demanda ordinaria si no se han abonado los importes reclamados, dar curso a la misma será considerada falta grave salvo que medien razones constitucionales debidamente acreditadas.

Presentada la demanda ante el Poder Judicial, el contribuyente deberá comunicar, mediante escrito a la dirección, en las oficinas donde se tramitan las actuaciones, la interposición de la misma dentro del plazo de cinco días. La falta de comunicación constituye una infracción que será reprimida en los términos del artículo 101 del presente código.

Recurso de Repetición.

Artículo 157.- Los contribuyentes o responsables podrán interponer ante la administración recurso de repetición de los impuestos, tasas, contribuciones y sus accesorios, cuando consideren que el pago de los mismos hubiere sido indebido o sin causa.

La devolución total o parcial de un tributo obliga a devolver, en la misma proporción, los intereses, recargos y multas excepto la multa prevista en el artículo 101 de este código.

En caso de que el recurso fuere promovido por agentes de retención o recaudación, estos deberán presentar la nómina de contribuyentes a quienes la administración efectuará la devolución de los importes cuestionados, salvo que acrediten la debida autorización para su cobro.

Pruebas. Determinación. Renacimiento de las Acciones y Poderes Prescriptos.

Artículo 158.- Para obtener la devolución de las sumas que consideren indebidamente abonadas y cuya restitución no hubiere sido dispuesta de oficio, los contribuyentes o responsables deberán interponer demanda o recurso de repetición ante la administración. Con la demanda deberán acompañarse y ofrecerse todas las pruebas.

La demanda de repetición obliga a la administración a practicar la determinación de la obligación tributaria con respecto al período y al tributo de que se trate y, en caso, a exigir el pago de las sumas que resultaren adeudarse. En caso de detectarse deuda, se procede en primer lugar a su compensación con el crédito reclamado, reintegrando o intimando el pago de la diferencia resultante.

La determinación de la obligación tributaria no será obligatoria para la administración cuando el demandante no fuera contribuyente ni responsable del tributo que abonó y cuya repetición solicita, o en el caso en que se resuelva compensar o acreditar las sumas reclamadas.

Cuando la demanda se refiera a tributos para cuya determinación estuvieren prescriptas las acciones y facultades del Fisco, estas renacerán en el período fiscal al que se impute la devolución y hasta el límite de la cantidad que se reclame. No será necesario el requisito de la protesta previa para la procedencia de la demanda de repetición, cualquiera sea la causa en que se funde.

Procedimiento.

Artículo 159.- Interpuesta la demanda, la administración previa sustanciación de la prueba ofrecida que considere conducente y demás medidas que estime oportuno disponer, correrá al

demandante la vista que prevé el artículo 62, a sus efectos, y dictará la resolución dentro de los 180 días de interpuesta la demanda. La resolución será notificada al demandante.
Firmeza. Pronto Despacho.
Artículo 160.- La resolución de la administración quedará firme a los 15 días de notificada. Vencido el plazo establecido en el artículo precedente, sin que la dirección haya dictado resolución, el interesado podrá presentar pronto despacho para agotar la vía administrativa y, transcurridos 20 días sin resolución por parte de la dirección, podrá considerar denegado tácitamente el recurso, quedando habilitada la vía judicial pertinente.
Efectos.
Artículo 161.- La resolución del recurso de repetición o su denegación tácita tendrá los efectos del recurso de reconsideración y podrá ser objeto de la vía impugnativa allí establecida. Quedará agotada la vía administrativa.

Si el reclamo fuera procedente, se podrá reconocer la actualización desde la fecha del reclamo hasta la fecha de notificación de la resolución que la reconoce. Asimismo, se devengarán los intereses desde la fecha del reclamo hasta la fecha de notificación de la resolución que reconoce el reclamo. A este efecto, se autoriza al director ejecutivo a establecer el mismo.”.

- Murmullos del público.

Sr. PRESIDENTE.— Por favor, silencio en la sala, así continuamos con la lectura.
Prosec. ADMINISTRATIVA.— “Título Duodécimo

Prescripción

Término.
Artículo 162.- Prescriben por el transcurso de cinco años:

a) las facultades de la administración para determinar las obligaciones tributarias y aplicar las sanciones por infracciones previstas en este código o leyes tributarias especiales;
b) la facultad de la administración para promover la acción judicial para el cobro de la deuda tributaria; y
c) la facultad de la administración para disponer la devolución, acreditación o compensación de las sumas indebidamente abonadas: de oficio o no.

Cuando se tratare de deudas originadas en regímenes de retención, percepción y/o recaudación, practicadas y no ingresadas a su vencimiento, las facultades establecidas en los incisos a) y b) del presente artículo prescriben por el trascurso de seis años.

En todos los casos, tratándose de contribuyentes no inscriptos y del impuesto inmobiliario la prescripción operará trascurrido el plazo de 10 años.
Cómputo del Término.
Artículo 163.-

1) El término de prescripción en el caso del apartado a), del artículo anterior, comenzará a correr desde el 1 de enero siguiente:
   a) del año en que se produzca el vencimiento del plazo para presentar la declaración jurada correspondiente;
   b) del año en que se produzca el hecho imponible generador de la obligación tributaria respectiva, cuando no mediare obligación de presentar la declaración jurada; y
   c) del año en que se cometieron las infracciones punibles.
2) En el supuesto contemplado en el apartado b), del artículo anterior, el término de prescripción comenzará a correr desde el 1 de enero del año siguiente al año en que quede firme la resolución de la agencia que determine la deuda tributaria o imponga las sanciones por infracciones o al año en que debió abonarse la obligación tributaria, cuando no mediare determinación;

3) bajo el mismo supuesto, en los casos de reconocimiento de obligaciones tributarias con motivo de acogimientos a planes de facilidades de pago, el término de la prescripción comenzará a correr desde el 1 de enero del año siguiente al año en que opere la caducidad del mismo;
4) en el supuesto del apartado c) del artículo anterior el término de prescripción comenzará a correr desde la fecha de cada pago;
5) los términos de prescripción establecidos en el artículo162 de este código no correrán mientras los hechos imponibles no hayan podido ser conocidos por la dirección por algún acto o hecho que los exteriorice en la provincia. Esta norma será de aplicación para el impuesto de sellos.

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, el impuesto no resultará exigible cuando al momento de la exteriorización hubieran transcurrido más de 10 años contados a partir del 1 de enero del año siguiente a la realización de los hechos imponibles.

- *Ocupa la Presidencia, el vicegobernador Juan Carlos Arcando.*

Suspensión del Término.
Artículo 164.- Se suspenderá el curso de la prescripción de las acciones y poderes fiscales:

a) en el caso del apartado a), del artículo 162, por la corrida de vista que se refiere el artículo 62 de este código o la intimación de pago en los casos que la misma no sea procedente, o por la iniciación del sumario a que se refiere el artículo 123 de este código, hasta 60 días después que la administración dicte resolución sobre los mismos o que venza el término para dictarla, lo que ocurra primero; no pudiendo extenderse el período de suspensión más allá de un año de acaecida la causa suspensiva.

   Cuando medien recursos de reconsideración ante la administración, la suspensión por el importe apelado se prolongará hasta 60 días después de notificada la resolución o, en su caso, de vencido el término legal para dictarla, no siendo aplicable el plazo límite de un año previsto en el párrafo precedente;

b) desde la fecha de interposición por el contribuyente o responsable del recurso previsto en el artículo 24, inciso b), del convenio multilateral, siempre que el contribuyente no haya hecho uso de los recursos establecidos en el presente código y notifique de la presentación en los términos y plazos previstos en la Ordenanza Procesal la Comisión Arbitral, la suspensión, en este caso, hasta el importe reclamado, se prolongará hasta 90 días después de haber adquirido firmeza la resolución dictada por la Comisión Arbitral o Plenaria, según corresponda.

Sin perjuicio de lo establecido en el inciso a) precedente, en relación a la suspensión del curso de la prescripción de las acciones y poderes fiscales para la iniciación del sumario a que se refiere el artículo 123 de este código, cuando exista formulación de denuncia penal establecida en la Ley nacional 24769 por presunta comisión de algunos de los delitos tipificados en dicha ley, la suspensión de la prescripción se extenderá hasta los 180 días posteriores al momento en que se encuentre firme la sentencia judicial que se dicte en la causa penal respectiva.
Interrupción de la Prescripción.
Artículo 165.- La prescripción de las facultades de la dirección para determinar la obligación tributaria se interrumpirá:

a) por el reconocimiento expreso o tácito de la obligación tributaria por parte del contribuyente o responsable;
b) por la renuncia al término corrido de la prescripción en curso.

El nuevo término de la prescripción comenzará a correr desde el 1 de enero siguiente en el que ocurra el reconocimiento o la renuncia.
Sanciones por Infracciones: Interrupción.
Artículo 166.- El término de prescripción de la facultad de la autoridad de aplicación para

aplicar sanciones por infracciones se interrumpirá por la comisión de nuevas infracciones, en cuyo caso el nuevo término de la prescripción comenzará a correr desde la comisión de la nueva infracción.

Facultad para Promover Ejecución Fiscal.

Artículo 167.- La prescripción de la facultad mencionada en el apartado b), del artículo 161, se interrumpirá por la iniciación del juicio ejecutivo contra el contribuyente o responsable, o por cualquier acto judicial tendiente a obtener el cobro de lo adeudado.

Acción de Repetición. Interrupción.

Artículo 168.- La prescripción de la acción de repetición del contribuyente o responsable se interrumpirá por la interposición de la demanda de repetición a que se refiere el artículo 157 de este código. El nuevo término de la prescripción comenzará a correr el 1 de enero siguiente a la fecha en que la administración debió dictar resolución, si el interesado no hubiere interpuesto los recursos autorizados por este código.

Título Decimotercero
Disposiciones Generales

Artículo 169.- Salvo disposición legal en contrario, las exenciones de gravámenes regirán a partir del momento en que el sujeto pasivo de la obligación fiscal reúna todos los requisitos exigidos por la ley y conservarán su vigencia mientras no se modifique el destino, afectación o condiciones de su procedencia.

La reglamentación determinará en cada caso cuáles sujetos se encuentran alcanzados por el deber de tramitar el acto declarativo del beneficio o de denunciar su situación mediante declaración tributaria pertinente, sin perjuicio de lo cual, si la autoridad de aplicación cuenta con la información necesaria respecto de la concurrencia de las condiciones para la procedencia del beneficio podrá otorgarlo de oficio.

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, las exenciones se otorgarán de oficio y de pleno derecho cuando se trate del Estado nacional, estados provinciales, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las municipalidades.

Artículo 170.- En el caso de transferencia de bienes inmuebles o muebles registrables, de un sujeto exento a otro gravado o viceversa, la obligación o la exención, respectivamente, comenzará a regir a partir de la fecha del otorgamiento del acto traslativo de dominio, excepto cuando uno de los sujetos fuera el Estado, en cuyo caso la obligación o la exención comenzará a partir de la fecha de la toma de posesión.

De corresponder la tributación, la Agencia de Recaudación Fueguina deberá practicar la liquidación del gravamen anual en forma proporcional por el lapso que reste hasta la finalización del ejercicio fiscal.

Libro Segundo
Parte Especial

Titulo Primero
Del Impuesto Inmobiliario

Del Hecho y la Base Imponible.

Artículo 171.- Los titulares de dominio, los usufructuarios, adjudicatarios de tierras fiscales y los poseedores a título de dueño pagarán anualmente por los inmuebles situados en la provincia, el impuesto establecido en el presente título.

El impuesto inmobiliario se abonará por cada inmueble, de acuerdo a las alícuotas y mínimos que fije la Ley Impositiva.

A efectos de lo dispuesto anteriormente, se considera como único inmueble al conjunto constructivo correspondiente a edificios destinados a hoteles, residenciales o similares, y a clínicas, sanatorios o similares aunque correspondan a divisiones o subdivisiones efectuadas en distintas épocas, cuando pertenezcan a un mismo titular de

dominio o correspondan a un mismo usufructuario o poseedor a título de dueño, sean personas físicas o jurídicas.

En el caso de subdivisiones parcelarias o loteos de inmuebles rurales destinados a la creación de clubes de campo, countries y/o emprendimientos similares, cada una de las nuevas parcelas resultantes de la subdivisión realizada no tributará el impuesto como inmueble rural independiente sino hasta ser transferida e inscripta a nombre de un nuevo titular o bien hasta que comiencen a realizarse en ellas obras de construcción o infraestructura o mejoras que evidencien un curso independiente de la parcela respectiva.

Artículo 172.- La base imponible del impuesto inmobiliario estará constituida por la valuación fiscal de cada inmueble, según lo establecido por la Ley territorial 118.

Artículo 173- Las obligaciones por el impuesto inmobiliario rural se generan por la sola existencia de los inmuebles, con prescindencia de su inscripción en los registros o padrones, o de la incorporación de las valuaciones fiscales al catastro, o de la determinación por la administración.

La administración podrá crear, asimismo, su propio padrón jurídico impositivo de contribuyentes del impuesto inmobiliario.

Contribuyentes y Responsables.

Artículo 174.- El gravamen correspondiente por cada inmueble es indivisible y son solidariamente responsables de su pago los condóminos, cousufructuarios, coherederos, coposeedores a título de dueño.”.

Sec. LEGISLATIVA.—“Del Pago.

Artículo 175.- El impuesto establecido por la presente ley deberá ser pagado anualmente, en una o varias cuotas, en las condiciones y términos que la Agencia de Recaudación Fueguina establezca.

Cuando se trate de la incorporación de edificios u otras mejoras declaradas por el obligado, el impuesto correspondiente al período fiscal corriente se considerará devengado a partir del momento que surja de los datos de la declaración jurada espontánea del contribuyente, en cuyo caso la autoridad de aplicación deberá practicar la liquidación del gravamen anual en forma proporcional al período que transcurra entre dicha fecha y la finalización del ejercicio.

Cuando se trate de la incorporación de edificios u otras mejoras efectuadas de oficio o se rectifique la declaración a que se refiere el párrafo anterior, el impuesto se considerará devengado desde el 1 de enero del año en que se hubiera originado la obligación de denunciar la modificación.

Artículo 176.- Las liquidaciones para el pago del impuesto expedidas por la Agencia de Recaudación Fueguina sobre la base de declaraciones juradas del contribuyente no constituyen determinaciones administrativas, quedando vigente la obligación de completar el pago total del impuesto cuando correspondiere.

Cuando de la aplicación del procedimiento de integración establecido para la determinación del impuesto queden alcanzados por el gravamen total resultante, sujetos que no revistan la calidad de contribuyentes con relación a alguno o algunos de los inmuebles objeto de integración, la autoridad de aplicación podrá efectuar la desintegración de los fraccionamientos o parcelas que correspondan, de oficio o a pedido de parte interesada, en la forma, modo y condiciones que determine la reglamentación a dictarse por la agencia de Recaudación Fueguina.

Artículo 177.- Sin perjuicio de lo establecido en el cuarto párrafo del artículo 171, a solicitud de parte interesada, se procederá a la apertura de las partidas inmobiliarias correspondientes a las subparcelas resultantes de un plano de mensura de subdivisión para someter al régimen de propiedad horizontal, con efectividad a la fecha de registración de dicho documento cartográfico.

Artículo 178.- La Agencia de Recaudación Fueguina no prestará aprobación a la unificación o subdivisión de partidas -aún en los casos de aperturas a que se refiere el artículo anterior-, sin la previa acreditación de inexistencia de deudas por el impuesto inmobiliario hasta la cuota que resulte exigible a la fecha de dicha aprobación, mediante certificación expedida por la

autoridad de aplicación. Dicha acreditación no será exigible cuando el titular del dominio solicite que dicha deuda sea imputada a la partida o partidas que se generen por la unificación o subdivisión, a cuyos efectos la citada agencia deberá establecer, con carácter general, el procedimiento y demás condiciones para su instrumentación.

Asimismo, la modalidad de imputación referida precedentemente también podrá aplicarse cuando la unificación o subdivisión sea realizada de oficio.

De las Exenciones.

Artículo 179.- Están exentos de este impuesto:

a) el Estado nacional, estados provinciales, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las municipalidades, y sus organismos descentralizados o autárquicos, salvo aquellos que realicen actos de comercio con la venta de bienes o prestación de servicios a terceros.

   También estarán exentos los inmuebles cedidos en uso gratuito al Estado nacional, los estados provinciales, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las municipalidades y sus organismos descentralizados o autárquicos, salvo aquellos que realicen actos de comercio con la venta de bienes o prestación de servicios a terceros;

b) los templos religiosos pertenecientes a cultos reconocidos por autoridad competente;

c) los arzobispados, obispados y los institutos de Vida Consagrada conforme a la Ley nacional 24483y decretos reglamentarios, de la Iglesia Católica Apostólica Romana;

d) las fundaciones debidamente reconocidas como tales por autoridad competente, cuyos inmuebles estén destinados exclusivamente a cumplir con su objeto estatutario;

e) las universidades reconocidas como tales;

f) la Cruz Roja Argentina;

g) los inmuebles declarados monumentos históricos, por autoridad competente;

h) los inmuebles o parte de los mismos que sean destinados a las asociaciones y sociedades civiles, con personería jurídica, cuando el producto de sus actividades se afecte exclusivamente a los fines de su creación y que no distribuyan suma alguna de su producto entre asociados y socios, y solamente respecto de aquellos inmuebles que se utilicen principalmente para los fines que a continuación se expresan:

   1) servicio de bomberos voluntarios;
   2) salud pública, asistencia social gratuita y beneficencia;
   3) bibliotecas públicas y actividades culturales;
   4) enseñanza e investigación científica;
   5) actividades deportivas;
   6) servicio especializado en la rehabilitación de personas discapacitadas.

   La exención del impuesto también alcanza a los propietarios de aquellos inmuebles cedidos gratuitamente en uso a las asociaciones y sociedades civiles mencionadas en el primer párrafo que utilicen los mismos para los fines señalados en el presente artículo.

i) los titulares de dominio y demás responsables por las instalaciones, obras accesorias y plantaciones de los inmuebles de las plantas rural y subrural, según la clasificación de la Ley de Catastro 146, modificatorias y complementarias;

j) el valor correspondiente a las plantaciones de los inmuebles de la zona suburbana, según la clasificación de la Ley de Catastro;

k) los inmuebles pertenecientes o cedidos en uso gratuito a los establecimientos educativos reconocidos y autorizados por el Ministerio de Educación de la provincia, y destinados total o parcialmente al servicio educativo;

   Asimismo, esta exención alcanzará a los bienes inmuebles locados o cedidos en comodato, usufructo o uso no gratuito, a los mencionados establecimientos,

siempre que se encontraren destinados en forma exclusiva y habitual al servicio educativo y cuando las contribuciones, tasas, impuestos o expensas comunes que gravan el bien fueren a su cargo.

l) los propietarios y demás responsables de inmuebles pertenecientes a la planta urbana edificada, cuyo avalúo fiscal total no supere la suma que fije la ley impositiva y además sean propietarios, usufructuarios o poseedores de ese solo inmueble.

En el supuesto de pluralidad de obligados al pago, gozarán de la exención solamente los que reúnan los requisitos establecidos en el párrafo anterior. El resto de los obligados abonará la parte proporcional del impuesto que corresponda, el que se liquidará de conformidad a lo establecido en el artículo 178;

m) los propietarios y demás responsables de inmuebles pertenecientes a la planta urbana edificada, cuyo avalúo fiscal total no supere la suma que fije la Ley Impositiva y que reúnan los siguientes requisitos:

1. ser el solicitante y/o su cónyuge o pareja conviviente jubilado o pensionado;
2. ser el solicitante y/o su cónyuge o pareja conviviente propietario, usufructuario o poseedor de ese sólo inmueble;
3. que el único ingreso de los beneficiarios esté constituido por haberes previsionales cuyos importes brutos, en conjunto, no superen mensualmente el monto que establezca la Ley Impositiva.

Cuando se trate de parejas convivientes deberá acreditarse un plazo de convivencia no menor a dos años mediante información sumaria judicial.

En el supuesto de la pluralidad de obligados al pago, la exención sólo beneficiará a aquellos que reúnan los requisitos establecidos precedentemente.

El resto de los obligados abonará la parte proporcional del impuesto que corresponda, el que se liquidará de conformidad con lo establecido en el 178;

n) los inmuebles ocupados por asociaciones gremiales de trabajadores con personería jurídica y/o gremial, siempre que les pertenezcan en propiedad, usufructo, o les hayan sido cedidos gratuitamente en uso, siempre que el uso y/o la explotación sean realizadas exclusivamente por dichas entidades;

o) los inmuebles ocupados por los partidos políticos y agrupaciones municipales, debidamente reconocidos, siempre que les pertenezcan en propiedad, usufructo o les hayan sido cedidos gratuitamente en uso, y se encontraren destinados en forma exclusiva y habitual a las actividades específicas del partido o agrupación municipal;

p) los titulares de dominio que hubieran participado en las acciones bélicas desarrolladas entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982, por la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur o sus derechohabientes beneficiarios de la pensión de guerra prevista en la Ley nacional 23848, que sean propietarios, poseedores o usufructuarios de esa única vivienda, la misma se encuentre destinada a uso familiar y la valuación fiscal no supere el monto que establezca la Ley Impositiva. Los límites de valuación fiscal y el de única vivienda referidos en el párrafo anterior no serán aplicables cuando quienes hayan participado de dichas acciones bélicas fueran exsoldados conscriptos y civiles. En el supuesto en el que los mismos sean propietarios, poseedores o usufructuarios de uno o varios inmuebles, la exención procederá únicamente por el que destinen a sus viviendas.

No podrán acceder a la exención prevista en este inciso o mantenerla quienes hubiesen sido condenados por delitos de lesa humanidad;

q) los inmuebles que hayan sido la última vivienda de personas que se encuentren en situación de desaparición forzada o que hubiesen fallecido como consecuencia del accionar de las fuerzas armadas, de seguridad o de cualquier grupo paramilitar, con anterioridad al 10 de diciembre de 1983, mientras que mantengan la titularidad

dominial de los mismos sus derechohabientes comprendidos en el beneficio establecido en la Ley nacional 24411 y sus modificatorias;

r) los titulares de dominio comprendidos en las leyes nacionales 24043 y 25914 y sus modificatorias, que sean propietarios, poseedores o usufructuarios de esa única vivienda y la misma se encuentre destinada a uso familiar y que la valuación fiscal no supere el monto que establezca la Ley Impositiva.

En todos los casos de exenciones contempladas en el presente artículo, la proporción exenta se calculará sobre el gravamen liquidado.

Artículo 180.- Las proporciones a que se refiere el segundo párrafo, del inciso j), del artículo 179 se determinarán sobre la base de los valores que surgen de las declaraciones juradas.

Artículo 181.- Los contadores públicos que certifiquen balances de entidades de cualquier tipo incluso unipersonales deberán hacer constar en el pasivo en renglón separado, claramente desglosada, la deuda impaga por este impuesto, en el supuesto de mora, así como la provisión razonablemente estimada, para cubrir los recargos, intereses y ajustes de valor por el mismo concepto, en cuanto correspondiese.

Artículo 182.- En los casos de transferencia del dominio de inmuebles o constitución de usufructo, producidos con anterioridad a la fecha de actualización de valuaciones, los adquirentes o usufructuarios serán responsables del pago de la diferencia de impuesto que pudiera resultar.

Titulo Segundo
Del Impuesto sobre los Ingresos Brutos

Del Hecho Imponible.

Artículo 183.- El ejercicio habitual y a título oneroso en jurisdicción de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, del comercio, industria, profesión, oficio, negocio, locaciones de bienes, obras o servicios, o de cualquier otra actividad a título oneroso -lucrativa o no- cualquiera sea la naturaleza del sujeto que la preste, incluidas las sociedades cooperativas y el lugar donde se realice (zonas portuarias, espacios ferroviarios, aeródromos y aeropuertos, terminales de transporte, edificios y lugares de dominio público y privado, y todo otro de similar naturaleza) estará alcanzado con un impuesto sobre los ingresos brutos en las condiciones que se determinan en los siguientes.

La habitualidad deberá determinarse teniendo en cuenta especialmente la índole de las actividades, el objeto de la empresa, profesión o locación y los usos y costumbres de la vida económica.

Se entenderá como ejercicio habitual de la actividad gravada el desarrollo, en el ejercicio fiscal, de hechos, actos u operaciones de la naturaleza de las gravadas por el impuesto, con prescindencia de su cantidad o monto, cuando los mismos sean efectuados por quienes hagan profesión de tales actividades.

La habitualidad no se pierde por el hecho de que, después de adquirida, las actividades se ejerzan en forma periódica o discontinua.

Actividades Alcanzadas.

Artículo 184.- Se considerarán también actividades alcanzadas por este impuesto, las siguientes operaciones, realizadas dentro de la provincia, sea en forma habitual o esporádica:

1. profesiones liberales: el hecho imponible está configurado por su ejercicio, no existiendo gravabilidad por la mera inscripción en la matrícula respectiva;
2. la mera compra de productos agropecuarios, forestales, frutos del país y minerales para industrializarlos o venderlos fuera de la jurisdicción. Se considerará 'fruto del país" a todos los bienes que sean el resultado de la producción nacional perteneciente a los reinos vegetal, animal o mineral obtenidos por acción de la naturaleza, el trabajo o el capital, mientras conserven su estado natural, aun en el caso de haberlos sometido a algún proceso o tratamiento -indispensable o no- para su conservación o transporte, lavado, salazón, derretimiento, pisado, clasificación, etcétera;

3. el fraccionamiento y la venta de inmuebles (loteos, la compraventa y la locación de inmuebles).

Esta disposición no alcanza a las siguientes operaciones realizadas por personas físicas sobre inmuebles propios:

a) alquiler de una unidad locativa independiente destinada a vivienda;
b) venta de inmuebles efectuada antes de los dos años de la escrituración. Este plazo no será exigible cuando se trate de enajenaciones efectuadas por sucesiones, o cuando versen sobre vivienda única o inmueble afectado como bien de uso;
c) ventas de lotes pertenecientes a subdivisiones de no más de cinco unidades.

Determinación del Hecho Imponible. Naturaleza de la Actividad Desarrollada.

Artículo 185.- Para la determinación del hecho imponible se atenderá a la naturaleza específica de la actividad desarrollada con prescindencia -en caso de discrepancia- de la calificación que mereciera a los fines de policía municipal o de cualquier otra índole, o a los fines del encuadramiento en otras normas nacionales, provinciales o municipales, ajenas a la finalidad de la ley.

Actividad No Gravada.

Artículo 186.- No constituye actividad gravada con este impuesto:

a) el trabajo personal ejecutado en relación de dependencia, con remuneración fija o variable;
b) el desempeño de cargos públicos;
c) el transporte internacional de pasajeros y/o cargas efectuados por empresas constituidas en el exterior, en estados con los cuales el país tenga suscriptos o suscriba acuerdos o convenios para evitar la doble imposición en la materia, de los que surja, a condición de reciprocidad, que la aplicación de gravámenes queda reservada únicamente al país en el cual están constituidas las empresas;
d) las exportaciones, entendiéndose por tales las actividades consistentes en la venta de productos y mercaderías efectuadas al exterior por el exportador, con sujeción a los mecanismos aplicados por la Administración Nacional de Aduanas.
   Esta exención no alcanza a las actividades conexas de transporte, eslingaje, estibaje, depósito y toda otra de similar naturaleza;
e) honorarios de directorios y consejos de vigilancia ni otros de similar naturaleza.
   Esta disposición no alcanza a los ingresos en concepto de sindicaturas;
f) jubilaciones y otras pasividades en general.

De los Contribuyentes y Demás Responsables.

Artículo 187.- Son contribuyentes del impuesto las personas físicas, sociedades con o sin personería jurídica, las uniones transitorias de empresas, las agrupaciones de colaboración empresaria y demás entes que realicen las actividades gravadas. Cuando lo establezca la administración deberán actuar como agentes de retención, percepción o información, las personas físicas, sociedades con o sin personería jurídica y toda entidad que intervenga en operaciones o actos de los que deriven o puedan derivar ingresos alcanzados por el impuesto.

Las sucesiones indivisas serán contribuyentes desde la fecha de fallecimiento del causante hasta la fecha de declaratoria de herederos o de declaración de validez del testamento que cumpla la misma finalidad. Asimismo, mantendrán su condición de sujetos pasivos quienes hayan sido declarados en quiebra o concurso civil o comercial, con relación a las ventas en subastas judiciales y a los demás hechos imponibles que se efectúen o generen en ocasión o con motivo de los procesos respectivos.

Artículo 188.- Los escribanos, martilleros, empresas inmobiliarias, industriales, de construcción, de seguros, de capitalización, de crédito recíproco, acopiadores, consignatarios, frigoríficos, cooperativas, asociaciones de productores agropecuarios, entidades o instituciones públicas o privadas que intervengan en operaciones o actos de los que deriven o puedan derivar ingresos alcanzados por el impuesto, actuarán como agentes de retención o exigirán la acreditación del pago del tributo determinado.

La agencia queda facultada para disponer la aplicación de una alícuota diferencial en los casos que los sujetos pasivos de la retención o percepción sean contribuyentes o

responsables obligados a inscribirse al momento de la retención o percepción y no demuestren tal calidad por los medios que la misma disponga.
Categorización de los Contribuyentes.
Artículo 189.- La Ley Impositiva podrá establecer en función de los ingresos brutos u otra base de medición, categorías de contribuyentes, excepto para los que tributan bajo el régimen del convenio multilateral.
Categorización de Contribuyentes.
Artículo 190.- La agencia de recaudación queda facultada a implantar un régimen de identificación -total o parcial- de contribuyentes y responsables del impuesto sobre los ingresos brutos, que será obligatorio para quienes desarrollen hechos, actos, operaciones o actividades que generen ingresos brutos gravados, conforme se reglamente. En la jurisdicción de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, los organismos de los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo nacional, provincial, municipal y sus dependencias no darán curso a ningún trámite que resulte de interés para los solicitantes si los obligados no exhiben, de corresponder como consecuencia de lo dispuesto en el párrafo anterior, la correspondiente identificación.

Tales organismos y sus funcionarios -de cualquier jerarquía- deberán prestar obligatoriamente la colaboración que se les requiera, a los fines del párrafo precedente, y si omitieren el cumplimiento de su obligación, en tiempo y forma, se harán pasibles de las sanciones que dispone este código.
Determinación de la Base Imponible. Excepciones.”.
Sr. PRESIDENTE.— Tiene la palabra el legislador Bilota Ivandic.

Moción

Sr. BILOTA IVANDIC.— Señor presidente: Solicito un breve cuarto intermedio.
Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración la moción del legislador Bilota Ivandic.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.

Cuarto Intermedio

- Son las 21:30
- A las 21:55,

Sr. PRESIDENTE.— Se levanta el cuarto intermedio.
Sec. LEGISLATIVA.— “Determinación de la Base Imponible. Excepciones.
Artículo 191.- Salvo expresa disposición en contrario, el gravamen se determinará sobre la base de los ingresos brutos devengados durante el período fiscal por el ejercicio de la actividad gravada.

Se considera ingreso bruto el valor o monto total -en valores monetarios, en especies o en servicios- devengado en concepto de venta de bienes, de remuneraciones totales obtenidas por los servicios, la retribución por la actividad ejercida, los intereses obtenidos por préstamos de dinero o plazos de financiación o, en general, el de las operaciones realizadas.

En las operaciones de venta de inmuebles en cuotas por plazos superiores a 12 meses, se considera ingreso bruto devengado, a la suma total de las cuotas o pagos que vencieran en cada período. En las operaciones realizadas por las entidades financieras comprendidas en el régimen de la Ley nacional 21526, se considerará ingreso bruto a los importes devengados, en función del tiempo, en cada período. En las operaciones realizadas por responsables que no tengan obligación legal de llevar libros y formular balances en forma comercial, la base imponible será el total de los ingresos percibidos en el período.

Los ingresos brutos se imputarán al período fiscal en que se devengan. Se entenderá

que los ingresos se han devengado, salvo las excepciones previstas en la presente ley:

a) en el caso de venta de inmuebles, desde el momento de la firma del boleto, la posesión o escrituración, el que fuere anterior;
b) en el caso de venta de otros bienes, desde el momento de la facturación o de la entrega del bien o acto equivalente, el que fuere anterior;
c) en los casos de trabajos sobre inmuebles de terceros, desde el momento de la aceptación del certificado de obra, parcial o total o de la percepción total o parcial del precio de la facturación, el que fuere anterior;
d) en el caso de prestaciones de servicio y de locaciones de obra y servicios -excepto las comprendidas en el inciso anterior- desde el momento en que se facture o termine total o parcialmente la ejecución de prestaciones pactadas o de la percepción de pagos a cuenta del precio, lo que fuere anterior, salvo que las mismas se efectuaren sobre bienes o mediante su entrega, en cuyo caso el gravamen se devengará desde el momento de la entrega de tales bienes;
e) en el caso de provisión de energía eléctrica, agua o gas, o prestaciones de servicios cloacales, de desagües o de telecomunicaciones, desde el momento en que se produzca el vencimiento del plazo fijado para su pago o desde su percepción total o parcial, el que fuere anterior;
f) en el caso de intereses y/o actualizaciones, desde el momento en que se generan y en proporción al tiempo transcurrido hasta cada período de pago del impuesto;
g) en el caso del recupero total o parcial de créditos deducidos con anterioridad como incobrables, en el momento en que se verifique el recupero;
h) en los demás casos, desde el momento en que se genere el derecho a la contraprestación.

A los fines de lo dispuesto precedentemente, se presume que el derecho a la percepción se devenga con prescindencia de la exigibilidad del mismo.

No Integran la Base Imponible.

Artículo 192.- No integran la base imponible los siguientes conceptos:

a) los importes correspondientes a impuestos internos, impuesto al valor agregado -débito fiscal- e impuesto para los fondos: Nacional de Autopistas, Tecnológico del Tabaco y de los Combustibles.

   Esta deducción sólo podrá ser efectuada por los contribuyentes de derecho de los gravámenes citados, en tanto se encuentren inscriptos como tales. El importe a computar será el del débito fiscal o el del monto liquidado, según se trate del impuesto al valor agregado o de los restantes gravámenes, respectivamente en todos los casos, en la medida en que correspondan a las operaciones de la actividad sujeta a impuesto, realizadas en el período fiscal que se liquida;
b) los importes que constituyan reintegro de capital, en los casos de depósitos, préstamos, créditos, descuentos y adelantos, y toda otra operación de tipo financiero, así como sus renovaciones, repeticiones, prórrogas, esperas u otras facilidades, cualquiera sea la modalidad o forma de instrumentación adoptada;
c) los reintegros que perciban los comisionistas, consignatarios y similares, correspondientes a gastos efectuados por cuenta de terceros en las operaciones de intermediación en que actúen y siempre que se rinda cuenta de los mismos, con comprobantes.

   Tratándose de concesionarios o agentes oficiales de ventas, lo dispuesto en el párrafo anterior sólo será de aplicación a los del Estado en materia de juegos de azar y similares y de combustibles;
d) los subsidios y subvenciones que otorguen el Estado nacional, provincial y las municipalidades;
e) las sumas percibidas por los exportadores de bienes o servicios, en concepto de reintegros o reembolsos acordados por la Nación;
f) los ingresos correspondientes a venta de bienes de uso propios;
g) los importes que correspondan al productor asociado por la entrega de su

producción, en las cooperativas que comercialicen producción agrícola, únicamente, y el retorno respectivo;

h) en las cooperativas de grado superior, los importes que correspondan a las cooperativas agrícolas asociadas de grado inferior, por la entrega de su producción agrícola y el retorno respectivo.

Las cooperativas citadas en los incisos g) y h) del presente artículo podrán pagar el impuesto deduciendo los conceptos mencionados en los citados incisos y aplicando las normas específicas dispuestas por la Ley Impositiva para estos casos, o bien podrán hacerlo aplicando las alícuotas pertinentes sobre el total de sus ingresos. Efectuada la opción en la forma que determinará la agencia de recaudación no podrá ser variada sin autorización expresa del citado organismo. Si la opción no se efectuare en el plazo que determine la agencia, se considerará que el contribuyente ha optado por el método de liquidar el gravamen sobre la totalidad de los ingresos.”.

Sr. PRESIDENTE.— Tiene la palabra el legislador Furlan.

Moción

Sr. FURLAN.— Solicito un cuarto intermedio.

Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración la moción del legislador Furlan.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.

Cuarto Intermedio

- Son las 22.

- Son las 22:02

Sr. PRESIDENTE.— Se levanta el cuarto intermedio.

Se continúa la lectura del proyecto en consideración.

Sec. LEGISLATIVA.— “Deducciones de la Base Imponible.

Artículo 192 bis.- De la base imponible se deducirán los siguientes conceptos:

a) las sumas correspondientes a devoluciones, bonificaciones y descuentos efectivamente acordados por épocas de pago, volumen de ventas u otros conceptos similares, generalmente admitidos según los usos y costumbres, correspondientes al período fiscal que se liquida;

b) el importe de los créditos incobrables producido en el transcurso del período fiscal que se liquida y que hayan sido computados como ingreso gravado en cualquier período fiscal;

Esta deducción no será procedente cuando la liquidación se efectúe por método de lo percibido.

Constituyen índices justificativos de la incobrabilidad cualquiera de los siguientes: la cesación de pagos, real y manifiesta, la quiebra, el concurso preventivo, la desaparición del deudor, la prescripción y la iniciación del cobro compulsivo;

En caso de posterior recupero, total o parcial, de los créditos deducidos por este concepto, se considerará que ello es un ingreso gravado imputable al período fiscal en que el hecho ocurra;

c) los importes correspondientes a envases y mercaderías devueltas por el comprador, siempre que no se trate de actos de retroventa o retrocesión.

Las deducciones enumeradas precedentemente sólo podrán efectuarse cuando los conceptos a que se refieren correspondan a operaciones o actividades de las que derivan los ingresos objeto de la imposición.

Las mismas deberán efectuarse en la oportunidad en que la erogación, débito fiscal o

detracción tengan lugar y siempre que sean respaldadas por las registraciones contables o comprobantes respectivos.

Conceptos No Excluidos.

Artículo 193.- De la base imponible no podrán detraerse el laudo correspondiente al personal, ni los tributos que incidan sobre la actividad, salvo los específicamente determinados en la ley.

Base Imponible Especial.

Artículo 194.- La base imponible estará constituida por la diferencia entre los precios de compra y de venta en los siguientes casos:

a) comercialización de billetes de lotería y juegos de azar autorizados cuando los valores de compra y de venta sean fijados por el Estado;
b) comercialización mayorista y minorista de tabacos, cigarros y cigarrillos;
c) las operaciones de compra y venta de divisas;
d) comercialización de productos agrícola-ganaderos efectuada por cuenta propia por los acopiadores de esos productos.

A opción del contribuyente, el impuesto podrá liquidarse aplicando las alícuotas pertinentes sobre el total de los ingresos respectivos.

A los efectos de cualquier tipo de categorización que se establezca en el presente código, deberán considerarse los ingresos brutos totales del contribuyente, aun cuando difiera de la base imponible considerada a los efectos de la determinación de la obligación tributaria.

Base Imponible. Entidades Financieras.

Artículo 195.- Para las entidades financieras comprendidas en la Ley nacional 21526 y sus modificatorias, la base imponible estará constituida por la diferencia que resulte entre el total de la suma del haber de las cuentas de resultados y los intereses y actualizaciones pasivas, ajustada en función de su exigibilidad en el período fiscal de que se trata.

Asimismo se computarán como intereses acreedores y deudores respectivamente, las compensaciones establecidas en el 3º de la Ley nacional 21572 y los cargos determinados de acuerdo con el 3º, inciso a), del citado texto legal.

Base Imponible. Préstamos de Dinero. Entidades No Incluidas en la Ley Nacional 21526.

Artículo 196.- En los casos de operaciones de préstamos de dinero realizadas por personas físicas o jurídicas que no sean las contempladas por la Ley nacional 21526 de entidades financieras, la base imponible será el monto de los intereses y ajustes por desvalorización monetaria.

Cuando en los documentos referidos a dichas operaciones no se mencione el tipo de interés o se fije uno inferior al establecido por el Banco Provincia de Tierra del Fuego para el descuento de documentos, se computará este último a los fines de la determinación de la base imponible.

Base Imponible. Compañías de Seguro.

Artículo 197.- Para las compañías de seguros y reaseguros se considera monto imponible aquel que implique una remuneración de los servicios o un beneficio para la entidad.

Se conceptúan especialmente en tal carácter:

a) la parte que sobre las primas, cuotas o aportes se afecte a gastos generales, de administración, pago de dividendos, distribución de utilidades u otras obligaciones a cargo de la institución;
b) las sumas ingresadas por locación de bienes inmuebles y la venta de valores mobiliarios no exenta del gravamen, así como las provenientes de cualquier otra inversión de sus reservas.

No se computarán como ingresos la parte de las primas de seguros destinada a reservas matemáticas y de riesgos en curso, reaseguros pasivos y siniestros y otras obligaciones con asegurados.

Base Imponible. Planes de Ahorro.

Artículo 198.- Las empresas o entidades que exploten directa o indirectamente los círculos de ahorro compartido, ahorro para fines determinados, círculos cerrados o planes de compra por autofinanciación, los también denominados '60 x 1.000', etcétera, pagarán sobre el total de ingresos brutos cualquiera sea la denominación de la percepción (cuota pura, gastos de

administración, intereses, inscripción, etcétera) deduciendo el costo de los bienes adjudicados.

Base Imponible. Comisionistas y Otros Intermediarios.

Artículo 199.- Para las operaciones efectuadas por comisionistas, consignatarios, mandatarios, corredores, representantes y/o cualquier tipo de intermediarios que realicen operaciones de naturaleza análoga, la base imponible estará constituida por los ingresos devengados en el período fiscal: comisiones, bonificaciones, participaciones, porcentajes o similares, así como todo otro ingreso que signifique una retribución por su actividad, las garantías de créditos, los fondos especiales, el pesaje y báscula, los intereses o actualizaciones, los fletes en camiones propios y cualquier otro recupero de gasto sin rendición de cuentas con comprobante.

Esta disposición no será de aplicación en los casos de operaciones de compraventa que por cuenta propia efectúen los intermediarios citados en el párrafo anterior. Tampoco para los concesionarios o agentes oficiales de venta, los que se regirán por las normas generales.

En el caso de ejercicio de profesiones liberales, cuando la percepción de los honorarios se efectúe -total o parcialmente- por intermedio de consejos o asociaciones profesionales, la base imponible estará constituida por el monto líquido percibido por los profesionales.

Base Imponible. Comercialización de Bienes Usados.

Artículo 200.- En el caso de comercialización de bienes usados, la base imponible será la diferencia entre su precio de venta y el monto que se le hubiere atribuido en oportunidad de su recepción o compra.

Artículo 201.- En el caso de comercialización de bienes usados recibidos como parte de pago de unidades nuevas o usadas, la base imponible será la diferencia entre su precio de venta y el monto que se le hubiere atribuido en oportunidad de su recepción.

Base Imponible. Agencias de Publicidad.

Artículo 202.- Para las agencias de publicidad, la base imponible está dada por los ingresos provenientes de los servicios de agencias, bonificaciones por volúmenes y los montos provenientes de servicios propios, y productos que facturen. Cuando la actividad consista en la simple intermediación, los ingresos provenientes de las comisiones recibirán el tratamiento previsto para comisionistas, consignatarios, mandatarios, corredores y representantes.

Base Imponible. Pagos en Especies.

Artículo 203.- Cuando el precio se pacte en especies, el ingreso bruto estará constituido por la valuación de la cosa entregada, la locación, el interés o el servicio prestado, aplicando los precios, la tasa de interés, el valor locativo, etcétera, oficiales o corrientes en plaza, a la fecha de generarse el devengamiento.

Exenciones.

Artículo 204.- Están exentos del pago de este gravamen:

a) las actividades ejercidas por el Estado nacional, el Estado provincial, los estados provinciales, las municipalidades y comunas, sus dependencias, reparticiones autárquicas y descentralizadas. No se encuentran comprendidos en esta disposición los organismos, reparticiones o empresas pertenecientes total o parcialmente al Estado nacional, provincial, municipal o comunal que ejerzan actos de comercio o industria;
b) la prestación de servicios públicos efectuados directamente por el Estado provincial, municipal o comunal, sus dependencias, reparticiones autárquicas o descentralizadas, cuando las prestaciones efectuadas lo sean en función de Estado como poder público y siempre que no constituyan actos de comercio o industria;
c) el Banco Provincia de Tierra del Fuego;
d) los partidos políticos reconocidos legalmente;
e) las representaciones diplomáticas y consulares de los países extranjeros acreditados ante el gobierno de la República en un todo de acuerdo a la legislación vigente;

f) las bolsas de Comercio autorizadas a cotizar títulos valores y los mercados de valores;
g) toda operación sobre títulos, letras, bonos, obligaciones y demás papeles emitidos y que se emitan en el futuro por la nación, las provincias o municipalidades, así como también las rentas producidas por los mismos o los ajustes de estabilización o corrección monetaria;

Aclárase que las actividades desarrolladas por los agentes de bolsa y todo tipo de intermediación en relación con tales operaciones no se encuentran alcanzadas por la presente exención;
h) los intereses de depósito en caja de ahorro y a plazo fijo;
i) la edición e impresión de libros, diarios, periódicos y revistas en todo su proceso de creación, ya sea que la actividad la realice el propio editor o terceros por cuenta de éste, incluidos los ingresos provenientes de la venta de espacios publicitarios. Igual tratamiento tendrán la distribución y venta de los impresos citados.

Esta exención no alcanza a la edición, impresión, distribución y venta de material de carácter condicionado;
j) las asociaciones mutualistas y las obras sociales constituidas de acuerdo a la legislación vigente, únicamente por los ingresos en concepto de cuotas sociales, de contribuciones que perciban de socios o terceros por la venta de medicamentos y por prestación de servicios de salud, las que serán otorgadas bajo resolución fundada de la Agencia de Recaudación Fueguina;
k) los ingresos percibidos por las cooperativas de trabajo y los ingresos de los socios o accionistas de las mismas, provenientes de los servicios prestados.

Esta exención no alcanza a los ingresos provenientes de prestaciones o locaciones de obra o de servicios por cuenta de terceros, aun cuando dichos terceros sean socios o accionistas o tengan inversiones que no integren el capital societario.
l) los ingresos obtenidos por asociaciones, entidades o comisiones de beneficencia, de bien público, asistencia social, de educación, científicas, artísticas, culturales y deportivas, instituciones religiosas y asociaciones gremiales únicamente por el cobro de las cuotas sociales y otras contribuciones que perciban de sus asociados, benefactores o terceros, o por la realización de festivales o actos de cultura, deportivos o de esparcimiento, por la venta de medicamentos y prestaciones de servicios de salud, por la prestación de servicios de salud, por la prestación de servicios encomendados y abonados por el Estado provincial, siempre que los ingresos obtenidos sean destinados exclusivamente al objeto previsto en sus estatutos sociales, acta de constitución o documento similar, y en ningún caso se distribuyan directa o indirectamente entre los socios. En estos casos, se deberá contar con personería jurídica o gremial o el reconocimiento o autorización por autoridad competente, según corresponda;
m) los establecimientos educativos privados incorporados a los planes de enseñanza oficial y reconocidos como tales en las respectivas jurisdicciones;
n) los ingresos de profesiones liberales correspondientes a cesiones o participaciones que les efectúen otros profesionales, cuando estos últimos computen la totalidad de los ingresos como materia gravada.

Esta disposición no será de aplicación en los casos de cesiones o participaciones efectuadas por empresas o sociedades inscriptas en el Registro Público de Comercio;
o) las emisoras de radiofonía y de televisión, incluyendo las de televisión por cable codificadas, satelitales, de circuitos cerrados y toda otra forma que haga que sus emisiones puedan ser captadas únicamente por sus abonados;
p) los ingresos percibidos por las cooperativas prestadoras de servicios eléctricos y de suministros de agua potable en el ámbito provincial, únicamente por la prestación de dichos servicios;

q) aquellos contribuyentes que se encuentren inscriptos en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social que depende de la Dirección Nacional de Fomento del Monotributo Social, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y que cumplan con las pautas vigentes al respecto.

Las exenciones previstas en el presente artículo serán otorgadas por la agencia de recaudación, siendo requisito indispensable que el solicitante se encuentre en situación fiscal regular por toda actividad a la que se halle vinculado y una vez cumplimentados todos los requisitos exigidos en la pertinente reglamentación. La exención comenzará a regir para el peticionante, cualquiera sea la fecha de solicitud de la exención, a partir del otorgamiento de la personería jurídica o del reconocimiento oficial en su caso y se mantendrá mientras mantenga su situación fiscal regular, de conformidad con las disposiciones legales vigentes. Sin perjuicio de ello, las entidades peticionantes que hubieren efectuado pagos por los conceptos exceptuados no podrán repetir los mismos, los que quedarán irrevocablemente incorporados al Fisco provincial.

Del Período Fiscal.

Artículo 205.- El período fiscal será el año calendario.

De la Liquidación y Pago.

Artículo 206.- La Ley Impositiva establecerá las distintas alícuotas a aplicar a los hechos imponibles alcanzados por la presente ley.

La misma ley fijará los impuestos mínimos y los importes fijos a abonar por los contribuyentes, tomando en consideración la actividad, la categoría de los servicios prestados o actividades realizadas, mayor o menor grado de suntuosidad, las características económicas u otros parámetros representativos de la actividad desarrollada.

Declaración Jurada.

Artículo 207.- El impuesto se liquidará por declaración jurada, en los plazos y condiciones que determine la Agencia de Recaudación Fueguina, la que establecerá asimismo, la forma y plazos de inscripción de los contribuyentes y demás responsables.

Así también, deberán presentar una declaración jurada en la que se resuma la totalidad de las operaciones del año, de conformidad con la reglamentación que a sus efectos dicte la autoridad de aplicación.

El pago se hará por el sistema de anticipos mensuales, en función de los ingresos calculados sobre base cierta, en las condiciones y plazos que determine la Agencia de Recaudación Fueguina.

Los contribuyentes comprendidos en las disposiciones del Convenio Multilateral, del 18 de agosto de 1977, y sus modificaciones ajustarán su liquidación y pago a las normas del mismo. Las normas citadas, en caso de concurrencia con normas provinciales, tendrán preeminencia. No son aplicables a los mencionados contribuyentes las normas generales relativas a impuestos mínimos y están sujetos a retención en la fuente.

En todos los casos, los anticipos abonados fuera de término, no abonados o abonados por un monto inferior al que correspondiere devengarán los intereses, actualizaciones y darán origen a las sanciones previstas en este código.

Los agentes de retención o percepción ingresarán el impuesto de conformidad con lo que determine al efecto la Agencia de Recaudación Fueguina.

El impuesto se ingresará por depósito en el Banco de la Provincia de Tierra del Fuego o en las entidades bancarias con las que se convenga la percepción y/o por medio de las tarjetas de crédito habilitadas por la Agencia de Recaudación Fueguina.

Régimen de Recaudación.

Artículo 208.- Facúltase a la Agencia de Recaudación Fueguina a establecer y reglamentar un régimen de recaudación del impuesto sobre los ingresos brutos que se aplicará sobre los importes acreditados en las cuentas abiertas en entidades regidas por la Ley nacional 21526 y sus modificatorias, a nombre de los contribuyentes de dicho impuesto, inclusive los comprendidos en el régimen del convenio multilateral. Los agentes de recaudación designados por la autoridad de aplicación o por la Comisión Arbitral, resultarán pasibles en caso de incumplimiento de sus deberes formales o materiales, de los procedimientos,

sanciones y responsabilidades establecidas en las leyes provinciales 439 y 440, sus modificatorias y normas reglamentarias, para los sujetos que actúen como agentes de retención y/o percepción. El importe debitado por el agente de recaudación tendrá para el contribuyente el carácter de un pago a cuenta de su obligación tributaria.

Reducciones por Cumplimiento.

Artículo 209.- Los contribuyentes que acrediten cumplimiento y situación regular en el pago del impuesto gozarán de las siguientes reducciones respecto de los importes que les corresponda tributar:

a) 12% para aquellos contribuyentes cuya base imponible anual no supere la suma de $ 37.500.000; y
b) 5% para aquellos contribuyentes que superen la base imponible anual establecida en el inciso a).

La base imponible anual a considerar para el encuadramiento en los porcentajes de reducción del tributo a ingresar será la correspondiente al año calendario inmediato anterior al ejercicio fiscal en que se usufructúe el beneficio.

En el caso de contribuyentes que tributan el impuesto bajo las disposiciones del régimen del convenio multilateral, las reducciones establecidas en el presente serán de aplicación para aquellos cuyo fisco sede sea la jurisdicción Tierra del Fuego y la base imponible anual a considerar para la determinación del porcentaje del beneficio a aplicar será la base imponible total del país del año calendario inmediato anterior.”.

Prosec. ADMINISTRATIVA.— “A los fines del encuadramiento en la presente norma, los contribuyentes deberán declarar su situación respecto de los supuestos indicados -a) o b)-, de conformidad con la reglamentación que al efecto se dicte.

Se considerará cumplimiento y situación regular en el pago del impuesto, el acreditar el cumplimiento de las obligaciones formales y materiales correspondientes a los tributos recaudados por la Agencia de Recaudación Fueguina, devengados o exigibles, conjuntamente con el pago de las últimas 12 posiciones y la que se pretende abonar en la fecha de vencimiento establecida por la mentada agencia.

A este efecto se considerará que se encuentran encuadrados aquellos contribuyentes que, poseyendo deuda con la administración, procedan o hayan procedido a su regularización mediante planes de facilidades de pago u otro medio de cancelación autorizado, en tanto y en cuanto no hayan incurrido o incurran en el futuro en causal de caducidad.

Aquellos contribuyentes que no reúnan las condiciones mencionadas precedentemente deberán tributar el impuesto sobre los ingresos brutos de conformidad con las alícuotas establecidas en la ley tarifaria correspondiente, sin el beneficio de reducción con más los accesorios de ley devengados hasta la fecha del efectivo pago.

El beneficio no podrá ser ejercido retroactivamente ni tampoco en forma acumulada y comenzará a gozarse a partir de la decimotercera posición, manteniéndose vigente en tanto y en cuanto las subsiguientes se sigan presentando y abonando en término. Se admitirá el pago fuera de término de tres posiciones mensuales por año calendario sin pérdida del beneficio, siempre que se cancelen con los intereses correspondientes dentro del mismo mes del vencimiento de la respectiva obligación.

Los contribuyentes que, habiendo comenzado a gozar del beneficio de la referida deducción, incurran en alguna falta formal o material relativa a las obligaciones y tributos que recauda la Agencia de Recaudación Fueguina no perderán el mismo, en tanto y en cuanto:

a) procedan a regularizar su situación en forma espontánea;
b) procedan a la regularización de la situación fiscal a requerimiento de la dirección y dentro del plazo establecido por la misma; y
c) procedan a la cancelación de la deuda exigida por la dirección en los términos establecidos, una vez firme.

A solicitud de los contribuyentes, y a efectos de evitar inequidades, se admitirá la aplicación retroactiva del párrafo mencionado precedentemente, siempre que el mismo no implique la generación de un derecho de repetición al contribuyente ni devolución de impuestos por parte del Fisco.

- Ocupa la Presidencia la vicepresidenta primera Miryam Martínez.

Anticipos. Carácter de Declaración Jurada.
Artículo 210.- La agencia podrá requerir anticipos del impuesto, que se determinarán en función de los ingresos brutos o del impuesto pagado del período que se fije, los que revestirán el carácter de declaración jurada, en la forma, condiciones y plazos que la misma establezca.

Los contribuyentes que no tengan actividad en el período a que corresponda el anticipo deberán comunicar a la agencia el inicio de dicha situación así como también su finalización, acreditándolo fehacientemente.

En los casos de contribuyentes o responsables que no abonen sus anticipos en los términos establecidos, la agencia de recaudación podrá liquidar y exigir el ingreso como pago a cuenta por cada mes adeudado, del pago de una suma igual a la ingresada por el mismo período considerado en el año inmediato anterior o en los que le antecedan, en ese orden o una suma igual a la ingresada por el mes anterior, o en defecto de ambos métodos que guardan prioridad, una suma igual a cualquiera de los anticipos ingresados, declarados o determinados, con anterioridad al que se liquida, sea perteneciente al mismo período fiscal o a uno anterior no prescripto, con más los intereses que resulten aplicables.

La notificación del obligado de los importes establecidos por la agencia de conformidad con el procedimiento indicado, elimina la facultad de autodeterminación de los anticipos por parte del contribuyente, no efectuada ni declarada en término. No obstante, si los importes aludidos excedieran la determinación practicada por el obligado, el saldo a su favor podrá ser compensado en las liquidaciones de los anticipos con vencimientos posteriores al del período considerado, o en la declaración jurada anual, sin perjuicio de la acción que corresponda por vía del recurso de repetición.

Cuando el monto del anticipo omitido excediera el importe del pago a cuenta del mismo, establecido por la dirección, subsistirá la obligación del contribuyente o responsable de ingresar la diferencia correspondiente, con más los intereses y actualización, sin perjuicio de la multa que pudiera corresponder.
Obligatoriedad del Pago del Anticipo Mínimo.
Artículo 211.- El pago de anticipo mínimo mensual será obligatorio desde la fecha de vencimiento de la posición correspondiente al inicio de actividades debidamente acreditadas. Dicha obligación cesará cuando el contribuyente comunique a la Agencia de Recaudación Fueguina su cese de actividad o cuando los elementos de prueba presentados indiquen que esta fuera anterior.

Los contribuyentes que ejerzan actividades alcanzadas con distinto tratamiento fiscal ingresarán sólo el impuesto mínimo mayor previsto para ellas.
Agentes de Recaudación. Alícuota Aplicable a Contribuyentes No Inscriptos.
Artículo 212.- Todo agente de retención o percepción que deba realizar o recibir pagos de contribuyentes no inscriptos deberá retener o percibir el doble de la alícuota establecida para la respectiva actividad.
Actividades. Discriminación.
Artículo 213.- Cuando un contribuyente ejerza dos o más actividades o rubros con distinto tratamiento, deberá discriminar en sus declaraciones juradas el monto de los ingresos brutos correspondiente a cada uno de ellos.

Cuando omitiera esta discriminación estará sujeto a la alícuota más elevada, tributando un impuesto no menor a la suma de los mínimos establecidos en la ley impositiva anual para cada actividad o rubro.

Las actividades o rubros complementarios de una actividad principal -incluido financiación y ajustes por desvalorización monetaria- estarán sujetos a la alícuota que, para aquella contemple la Ley Impositiva.
Agente de Percepción. Banco de la Provincia de Tierra del Fuego.
Artículo 214.- El Banco de la Provincia de Tierra del Fuego efectuará la percepción de los

impuestos correspondientes a todos los fiscos, que deben efectuar los contribuyentes del convenio multilateral, acreditando a la cuenta Convenio Multilateral los fondos resultantes de la liquidación efectuada en favor de esta provincia y efectuando las transferencias que resulten en favor de los fiscos respectivos, a condición de reciprocidad. La recaudación y transferencias respectivas, por ingresos de otros fiscos, se hallarán exentas del impuesto de sellos respectivos.

Las normas relativas a la mecánica de pago y transferencias y los formularios de pago serán dispuestos por la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral.

Declaraciones Juradas Anuales. Condiciones.

Artículo 215.- Facúltase a la agencia de recaudación a establecer la forma, condiciones y plazos para la presentación de las declaraciones juradas y pago del gravamen; este último no podrá exceder de 90 días de producida la finalización del período fiscal.

De los ingresos brutos del período fiscal no podrán efectuarse otras detracciones que las implícitamente enumeradas en la presente ley, las que únicamente podrán ser usufructuadas por parte de los responsables que, en cada caso, se indican. No dejará de gravarse un ramo o actividad por el hecho de que no haya sido previsto en forma expresa en esta ley o en la ley impositiva. En tal supuesto, se aplicará la alícuota general.

Honorarios Judiciales. Retención del Impuesto.

Artículo 216.- En toda regulación de honorarios, el juez actuante ordenará la retención que corresponda por aplicación de la alícuota correspondiente, depositando el importe respectivo en la cuenta oficial que al efecto habilite la agencia de recaudación.

Cuando en la causa que da origen a la regulación no existieran fondos depositados que permitieran efectuar la retención, el juzgado actuante comunicará a la agencia de recaudación el monto de los honorarios regulados.

En la declaración jurada del anticipo y determinado el impuesto a abonar, se deducirá del mismo el importe de las retenciones sufridas procediéndose al depósito del saldo resultante a favor del Fisco.

A los efectos establecidos en la presente, en la primera oportunidad en que el profesional tome intervención en cada proceso judicial deberá denunciar sus datos de inscripción como contribuyente al impuesto sobre los ingresos brutos y/o convenio multilateral.

La falta de cumplimiento de esta obligación importará la cesación automática de la intervención del profesional que, intimado a cumplimentar con tal recaudo, no lo efectivice dentro de las 48 horas subsiguientes.

Ante la falta de cumplimiento de la presente obligación así como en el supuesto de que el profesional actuante declare encontrarse inscripto como contribuyente en el convenio multilateral, deberá notificar la situación a la agencia de recaudación.

Del Inicio y Cese de Actividades.

Inscripción.

Artículo 217.- En los casos de iniciación de actividades, deberá solicitarse con carácter previo la inscripción como contribuyente dentro de los plazos y condiciones que la agencia de recaudación.

La agencia está facultada para disponer que, en determinadas circunstancias, ciertos tipos, clases o sectores de contribuyentes o responsables se encuentran eximidos de su obligación de inscribirse.

Cese de Actividades.

Artículo 218.- En caso de cese de actividades, incluidas transferencias de fondos de comercio, sociedades y explotaciones gravadas, la agencia de recaudación reglamentará las tramitaciones a cumplirse, estableciendo los plazos, formalidades, requisitos, condiciones y documentación a aportar por los contribuyentes o responsables. En estos casos deberá satisfacerse el impuesto correspondiente hasta la fecha de cese, presentándose la declaración jurada respectiva.

Si se tratara de contribuyentes cuya liquidación se efectúa por el sistema de lo percibido, deberán computar también los importes devengados no incluidos en aquel concepto.”.

Sr. BILOTA IVANDIC.— Pido la palabra.

Señora presidenta: solicito que se reitere el artículo 217, por favor, porque me parece que falta la conclusión de un párrafo.

Prosec. ADMINISTRATIVA.— "Artículo 217.- En los casos de iniciación de actividades, deberá solicitarse con carácter previo la inscripción como contribuyente dentro de los plazos y condiciones que la agencia de recaudación...".

Sr. BILOTA IVANDIC.— "Determine".

Prosec. ADMINISTRATIVA.— "...dentro de los plazos y condiciones que la agencia de recaudación determine.

La agencia está facultada para disponer que, en determinadas circunstancias, ciertos tipos, clases o sectores de contribuyentes o responsables se encuentran eximidos de su obligación de inscribirse.

Cese de Actividades.

Artículo 218.- En caso de cese de actividades, incluidas transferencias de fondos de comercio, sociedades y explotaciones gravadas, la agencia de recaudación reglamentará las tramitaciones a cumplirse, estableciendo los plazos, formalidades, requisitos, condiciones y documentación a aportar por los contribuyentes o responsables. En estos casos deberá satisfacerse el impuesto correspondiente hasta la fecha de cese, presentándose la declaración jurada respectiva.

Si se tratara de contribuyentes cuya liquidación se efectúa por el sistema de lo percibido, deberán computar también los importes devengados no incluidos en aquel concepto.

Lo dispuesto precedentemente no será de aplicación obligatoria en los casos de transferencias en las que se verifique continuidad económica para la explotación de la o de las mismas actividades y se conserve la inscripción como contribuyente, supuesto en el cual se considera que existe sucesión de las obligaciones fiscales.

- Ocupa la Presidencia el vicegobernador Juan Carlos Arcando.

Evidencian continuidad económica:

a) la fusión de empresas u organizaciones -incluidas las unipersonales- a través de una tercera que se forme o por absorción de una de ellas;
b) la venta o transferencia de una entidad a otra que, a pesar de ser jurídicamente independiente constituye un mismo conjunto económico;
c) el mantenimiento de la mayor parte del capital en la nueva entidad;
d) la permanencia de las facultades de dirección empresarial en la misma o mismas personas.

Titulo Tercero
Del Régimen Simplificado del Impuesto sobre los Ingresos Brutos

Artículo 219.- Establécese un régimen simplificado del impuesto sobre los ingresos brutos para los contribuyentes locales de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Este régimen sustituye la obligación de tributar por el sistema general del impuesto sobre los ingresos brutos para aquellos contribuyentes que resulten alcanzados.

Sujetos Obligados.

Artículo 220.- Están obligados a ingresar al régimen simplificado los pequeños contribuyentes del impuesto sobre los ingresos brutos. A estos fines se consideran pequeños contribuyentes del impuesto sobre los ingresos brutos a las personas físicas que realicen cualquiera de las actividades alcanzadas por dicho impuesto, y a las sucesiones indivisas en su carácter de continuadoras de las actividades de las mencionadas personas físicas.

Asimismo, las sociedades no constituidas según lo dispuesto en el capítulo III, de la Ley General de Sociedades, de acuerdo a la leyes nacionales 26994 y 27077, o la que en un

futuro la reemplace, se considerarán pequeños contribuyentes. En todos los casos serán considerados pequeños contribuyentes del impuesto sobre los ingresos brutos aquellos que cumplan las siguientes condiciones:

a) que por las actividades alcanzadas por el impuesto sobre los ingresos brutos hayan obtenido en el período fiscal inmediato anterior al que se trata, ingresos brutos totales (gravados, no gravados, exentos) inferiores o iguales al importe que fije la ley impositiva;
b) que no superen en el mismo período fiscal anterior los parámetros máximos referidos a las magnitudes físicas que se establezcan para su categorización a los efectos del pago de impuestos que les corresponda realizar;
c) que el precio máximo unitario de venta, solo en los casos de venta de cosas muebles, no supere la suma que fije la Ley Impositiva, y
d) que no realicen importaciones de cosas muebles y/o de servicios.

Categorías.

Artículo 221.- Se establecen ocho categorías de contribuyentes de acuerdo a las bases imponibles gravadas y a los parámetros máximos de las magnitudes físicas, entendiéndose por tales 'superficie afectada a la actividad' y 'energía eléctrica consumida'.

Artículo 222.- Los parámetros 'superficie afectada a la actividad' y/o 'energía eléctrica consumida' no deben ser considerados en las actividades que, para cada caso, se señalan a continuación:

1. Parámetro superficie afectada a la actividad:
   a) servicios de playas de estacionamiento, garajes y lavaderos de automotores;
   b) servicios de prácticas deportivas (clubes, gimnasios, canchas de tenis y paddle, piletas de natación y similares);
   c) servicios de diversión y esparcimiento (billares, *pool,* bowling, salones para fiestas, peloteros y similares);
   d) servicios de alojamiento y/u hospedaje prestados en hoteles, pensiones, excepto en alojamientos por hora;
   e) servicios de enseñanza, instrucción y capacitación (institutos, academias, liceos y similares), y los prestados por jardines de infantes, guarderías y jardines maternoinfantiles;
   f) servicios prestados por establecimientos geriátricos y hogares para ancianos;
   g) servicios de reparación, mantenimiento, conservación e instalación de equipos y accesorios, relativos a rodados, sus partes y componentes;
   h) servicios de depósitos y resguardo de cosas muebles; y
   i) locaciones de bienes inmuebles.
2. parámetro de 'energía eléctrica consumida':
   a) lavadero de automotores;
   b) expendio de helados;
   c) servicios de lavado y limpieza en seco, no industriales; y
   d) explotación de kioscos, polirrubros y similares.

La Dirección General de Rentas evaluará la procedencia de mantener las excepciones señaladas precedentemente en base al análisis periódico en las distintas actividades económicas involucradas.

Declaración Jurada Anual. Anticipos Mensuales.

Artículo 223.- La obligación que se determina para los contribuyentes alcanzados por este sistema tiene carácter anual y deberá ingresarse mensualmente según las categorías indicadas en el artículo precedente y de acuerdo a los montos que se consignan en la Ley Impositiva, para cada una de las alícuotas determinadas.

Los montos consignados que fije la Ley Impositiva deberán abonarse aunque no se hayan efectuado actividades ni obtenido bases imponibles computables por la actividad que desarrolle el contribuyente.

Los contribuyentes que realicen actividades que se encuentren alcanzadas por más de uno de los dos grupos de alícuotas descriptas en la Ley Impositiva tributarán de acuerdo al

mayor de ambos.
Inscripción.”.
Sec. LEGISLATIVA.— “Artículo 224.- La inscripción a este régimen simplificado se perfeccionará mediante la presentación de una declaración jurada ante la agencia de recaudación, la que establecerá los requisitos y exigencias que contendrá la misma.
Exclusiones.
Artículo 225.- Quedan excluidos del régimen simplificado:

a) los contribuyentes cuyas bases imponibles acumuladas o los parámetros máximos de las magnitudes físicas superen los límites de la máxima categoría, para cada alícuota y actividad;
b) sean sociedades no incluidas en el artículo 220;
c) se encuentren sujetos al régimen del convenio multilateral;
d) desarrollen actividades que, por su naturaleza, se encuentren alcanzadas con alícuotas diferenciales superiores a la alícuota general establecida en la Ley Impositiva vigente;

   Sin perjuicio de ello, aquellos contribuyentes que desarrollen la actividad de venta minorista de tabacos, cigarrillos y otras manufacturas de tabaco, quedarán comprendidos en el presente régimen, en la medida en que cumplan con todas las condiciones establecidas en el artículo 220. A los efectos de su categorización anual, los mencionados contribuyentes deberán excluir de los montos de facturación computables el importe correspondiente a la actividad reseñada;
e) desarrollen actividades que tengan supuestos especiales de base imponible, artículos 194 a 203, ambos inclusive, del Código Fiscal vigente;
f) desarrollen actividades que, de acuerdo a la Ley Impositiva vigente, tengan establecidos anticipos mínimos mensuales;
g) desarrollen actividades que se encuentran alcanzadas con el beneficio de tasa cero establecido en la Ley Impositiva vigente;
h) desarrollen la actividad de servicio de transporte automotor de pasajeros mediante taxis y remises; y
i) desarrolle la actividad de pesca artesanal.

Obligaciones Formales.
Artículo 226.- Los contribuyentes incluidos en el régimen simplificado deberán exhibir en sus establecimientos y en lugar visible al público los siguientes elementos:

a) la constancia que acredite su adhesión al régimen simplificado y la categoría en la cual se encuentra encuadrado, y
b) comprobante de pago correspondiente al último mes.

Régimen Sancionatorio.
Artículo 227.- Los contribuyentes comprendidos en el presente régimen quedan sujetos al régimen sancionatorio aplicable al incumplimiento de los deberes formales y materiales conforme el presente Código Fiscal, Ley Impositiva y normas regulatorias vigentes.”.

Moción

Sr. BILOTA IVANDIC.— Pido la palabra.
Señor presidente: Pido un cuarto intermedio sobre bancas.
Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración la moción del legislador Bilota Ivandic.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.

Cuarto Intermedio

- Son las 22:45.
- A las 22:50

Sr. PRESIDENTE.— Se levanta el cuarto intermedio.
Continuamos con la lectura del proyecto.
Sec. LEGISLATIVA.— "Exclusión de los Regímenes de Retención y Percepción.
Artículo 228.- Los agentes de retención y percepción designados por la agencia de recaudación deberán abstenerse de efectuar retenciones y percepciones a aquellos contribuyentes que se encuentren incluidos en el presente régimen. A tal fin, estos últimos deberán exhibir ante el agente de retención o percepción, el comprobante que lo acredite como inscripto, el cual será emitido por la agencia de recaudación en el tiempo y forma que la misma determine.
Cese de Actividades.
Artículo 229.- Cuando los contribuyentes cesen en sus actividades, a los efectos de dejar de tributar en el presente régimen, deberán informarlo a la agencia de recaudación de acuerdo al mecanismo que la misma determine.
Facultades de Control.
Artículo 230.- La agencia de recaudación queda facultada para impugnar, rechazar y/o modificar la inscripción en el régimen simplificado cuando existan indicios suficientes de que dicha inclusión está dirigida a ocultar el monto de la base imponible y eludir el pago del impuesto que efectivamente deberá abonarse.
Artículo 231.- La agencia de recaudación queda facultada para reglamentar el presente régimen en todo lo aquí no prescripto y a adoptar todas las medidas necesarias para su instrumentación.

Titulo Cuarto
Del Impuesto de Sellos

Sujetos.
Artículo 232.- Estarán sujetos al impuesto de sellos, de conformidad con las disposiciones del presente título, los actos, contratos y operaciones de carácter oneroso instrumentados sobre contratos a título oneroso formalizados por correspondencia, y sobre operaciones monetarias que representen entregas o recepciones de dinero que devenguen un interés efectuadas por las entidades financieras regidas por la Ley nacional 21526, siempre que:

a) se otorguen en jurisdicción de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, así como también los otorgados fuera de ella, en los casos especialmente previstos en este título; y
b) se formalicen en instrumentos públicos o privados, o por correspondencia en los casos previstos en el artículo 240 así como los que se efectúen con intervención de las bolsas o mercados, de acuerdo con lo que se establece a dichos efectos.

Artículo 233.- También estarán sujetos al impuesto:

a) los actos que tengan por objeto la transmisión de la propiedad de embarcaciones y aeronaves;
b) los contratos de seguros y sus endosos, incluido seguro de automotor, de incendio, transporte de bienes, robo, granizo y otras coberturas de daños patrimoniales. Los contratos de seguros serán gravados cuando cubran riesgos sobre cosas situadas o colocadas o personas domiciliadas en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, siempre que el tomador sea una persona jurídica;
También pagarán el impuesto los contratos de seguros emitidos fuera de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur que cubran bienes situados dentro de su jurisdicción o personas domiciliadas en la misma, siempre que el tomador sea una persona jurídica;

c) todas las operaciones efectuadas en el ejercicio de actividades hidrocarburíferas, sus servicios complementarios y los supuestos previstos en el artículo 21, del título III, capítulo IV, de la Ley nacional 23966;
d) los contradocumentos en instrumento público o privado; y
e) los contratos de fideicomiso celebrados al amparo de las disposiciones de la Ley nacional 24441, título I.

Extraña Jurisdicción.

Artículo 234.- Los actos, contratos u operaciones de carácter oneroso, formalizados en instrumentos públicos o privados, en las provincias o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se encuentran sujetos al pago de este impuesto en los siguientes casos:

1. cuando los bienes objeto de las transacciones se encuentren radicados o situados en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur;
2. cuando se trate de actos que tengan por objeto o que prometan la constitución, modificación o extinción de cualquier derecho real sobre bienes inmuebles ubicados dentro de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur o sobre bienes muebles registrables, inscriptos en dicha jurisdicción o en la matrícula nacional de buques y artefactos navales y aeronaves, con radicación en la provincia;
3. los contratos de locación o sublocación de inmuebles ubicados en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, así como los que instrumenten la locación de servicios y obras, públicas o privadas, sobre tales bienes;
4. los contratos de suministros de materiales y equipos para la ejecución de obras públicas en el país, que se formalicen en instrumentos separados del de la ejecución de la obra, cuando en tales instrumentos conste que a la fecha de celebración del contrato dichos bienes se encontraban ubicados en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur o, no habiendo constancia de la ubicación de los mismos, el domicilio del vendedor esté ubicado en esa jurisdicción;
5. las operaciones de compraventa de cereales, oleaginosas, semovientes, productos y subproductos ganaderos, agrícolas, forestales, apícolas, avícolas, frutícolas, de la pesca y de la minería, registrados o no en bolsas y mercados, cuando en los respectivos instrumentos o registros conste que a la fecha de celebración del contrato dichos bienes se encontraban ubicados en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur o, no habiendo constancia de la ubicación de los mismos, que el domicilio del vendedor esté ubicado en esa jurisdicción;
6. los contratos de constitución de sociedades o ampliación de su capital, sobre los aportes efectuados en:
   a) bienes inmuebles o muebles registrables que resulten sujetos al impuesto de este título en virtud de lo dispuesto por el inciso a) de este este título en virtud de lo dispuesto por el inciso a) de este artículo;
   b) semovientes, cuando en el instrumento conste que a la fecha de celebración del contrato dichos bienes se encontraban ubicados en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur;
7. los contratos de prórroga del término de duración de sociedades con domicilio social en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; y
8. los demás actos otorgados en las provincias o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, c) cuando produzcan efectos en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Contratos Formalizados en el Exterior.

Artículo 235.- En todos los casos los actos formalizados en el exterior deberán pagar el impuesto de acuerdo con las prescripciones del presente título al tener efectos en jurisdicción de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Artículo 236.- Los actos y contratos a que se refiere el presente título quedarán sujetos al impuesto por la sola creación y/o existencia material de los instrumentos respectivos, con

abstracción de su validez, eficacia jurídica o posterior cumplimiento.

Salvo los casos especialmente previstos, la anulación de los actos o la no utilización total o parcial de los instrumentos no darán lugar a la devolución, compensación o acreditación del impuesto pagado.

Artículo 237.- La obligación de tributar el presente impuesto no importa solo hacerlo respecto de los actos y contratos, expresa o implícitamente mencionados, sino también respecto de todos los actos y contratos expresa o implícitamente encuadrados en las disposiciones de este título.

Artículo 238.- A los fines de este título se entenderá por instrumento toda escritura, papel o documento del que surja el perfeccionamiento de los actos y contratos alcanzados por la misma, de manera que revista los caracteres exteriores de un título jurídico con el cual pueda ser exigido el cumplimiento de las obligaciones sin necesidad de otro documento y con prescindencia de los actos que efectivamente realicen los contribuyentes.

Artículo 239.- Las obligaciones condicionales se entenderán, a los efectos del impuesto, como si fueran puras y simples.

Artículo 240.- Los actos, contratos y operaciones cuyo precio, monto o valor pudiera resultar incrementado por cláusulas sujetas a condición, abonarán el tributo máximo condicional del contrato.

Cuando el contribuyente pudiere demostrar en forma fehaciente que dicha condición es de imposible cumplimiento, podrá solicitar vía repetición el reintegro de la diferencia de impuesto.

Artículo 241.- No abonarán nuevo impuesto los actos de aclaratoria, confirmación o ratificación de actos anteriores sujetos al tributo y los de simple modificación de las cláusulas pactadas, siempre que:

a) no se aumente su valor, cualquiera fuere la causa (aumento del precio pactado, mayores costos, actualización por desvalorización monetaria, etcétera);
b) no se cambie su naturaleza o los términos del acuerdo, o de otro modo se efectúe la novación de las obligaciones convenidas; y
c) no se sustituyan las partes intervinientes o no se prorrogue el plazo convenido, cuando la prórroga pudiera hacer variar el impuesto aplicable.

Si se dieran estos supuestos, se pagará sobre el respectivo instrumento el impuesto que corresponda por el nuevo acto o la ampliación de valor que resulte.

Tampoco abonarán impuesto los documentos que se emitan en ejecución de cláusulas pactadas en un contrato anterior sujetos al tributo (certificados de obra, liquidaciones y sus complementos, actas de reconocimiento, etcétera) aunque en los mismos se reconozca un mayor valor, siempre que este sea la consecuencia de la aplicación de los mecanismos previstos en el contrato anterior.

Artículo 242.- Será considerado acto o contrato sujeto al pago del impuesto que este título determine aquel que se verifique en forma epistolar, por carta, cable o telegrama, siempre que se verifique cualquiera de las siguientes condiciones:

a) se acepte la propuesta o el pedido formulado por carta, cable o telegrama, reproduciendo totalmente la propuesta o sus enunciaciones o elementos esenciales que permitan determinar el objeto del contrato; y
b) las propuestas o pedidos, o los presupuestos aplicados, aceptados con sus firmas por los destinatarios.

A los fines del párrafo anterior será en todos los casos requisito para la gravabilidad del acto que la aceptación respectiva haya sido recibida por el emisor de la propuesta, pedido o presupuesto.

La carta como cable o telegrama o cualquier otra correspondencia o papel firmado que acepte la propuesta o el pedido, sin reunir las condiciones establecidas en el primer párrafo de este artículo estarán gravados en el caso de ser presentados en juicio para hacer valer las obligaciones convenidas, su modificación o resolución. En dicha eventualidad, solo deberá abonarse el tributo por toda la correspondencia que se refiere a un mismo acto.

Artículo 243.- Si en un mismo instrumento se formalizan entre las mismas partes varios actos

que versan sobre un mismo objeto y guardan relación de interdependencia entre sí, solo debe abonarse el impuesto correspondiente al acto cuyo gravamen resulte mayor.

Si el instrumento no reuniera esas condiciones, cada acto abonará el impuesto que, aisladamente considerado, le corresponde.

Artículo 244.- Si los instrumentos se extienden en varios ejemplares de un mismo tenor, el impuesto solo deberá pagarse en uno de ellos; en los demás ejemplares, a solicitud del poseedor, la agencia de recaudación dejará constancia del impuesto pagado.

Artículo 245.- Cuando se trate de contratos celebrados con el Estado nacional, provincial o municipal, o sus dependencias y organismos, o con las empresas y entidades que le pertenezcan total o parcialmente, que para su aprobación se encuentren sujetos a un acto expreso de autoridad pública, a los fines del impuesto de esta ley, dichos contratos se considerarán perfeccionados en el momento en que la autoridad preste la conformidad respectiva y a partir de la fecha en que se notifique la misma.

Artículo 246.- Las oficinas recaudadoras se limitarán a habilitar los instrumentos con los impuestos que se les solicite, sin perjuicio de las multas que pudieran corresponder.

La intervención de estas oficinas no libera a las partes de la responsabilidad por la omisión del gravamen ni por las sanciones correspondientes.

De los Contribuyentes y Responsables.

Artículo 247.- Son contribuyentes del impuesto todos aquellos que formalicen actos, contratos y realicen las operaciones sometidas al impuesto de sellos.

Responsabilidad Solidaria.

Artículo 248.- Cuando en la realización del hecho imponible intervengan dos o más personas todas son solidariamente responsables por el total del impuesto, quedando a salvo el derecho de cada uno de repetir de los demás intervinientes la cuota parte que le pudiere corresponder de acuerdo con su participación en el acto.

Si alguno de los intervinientes estuviere exento del pago de este gravamen la obligación fiscal se considerará en este caso divisible y la exención se limitará a la cuota que le corresponda a la persona exenta.

Moción

Sr. BLANCO.— Pido la palabra.

Señor presidente: Solicito un breve cuarto intermedio.

Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración la moción del legislador Blanco.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.

Cuarto Intermedio

- Son las 23.
- A las 23:01

Sr. PRESIDENTE.— Se levanta el cuarto intermedio.

Continuamos con la lectura del proyecto en tratamiento”.

Sec. LEGISLATIVA.— “Artículo 249.- Los que otorguen, endosen, autoricen o conserven en su poder por cualquier título o razón, actos o instrumentos sujetos al impuesto, son solidariamente responsables del gravamen omitido parcial o totalmente y de las multas aplicables.

El impuesto correspondiente a las escrituras públicas será pagado bajo responsabilidad directa del escribano titular del registro, sin perjuicio de la solidaridad de los adscriptos por las escrituras que autoricen y de la prevista en el párrafo anterior, de las partes intervinientes.

Operaciones Dinerarias.
Artículo 250.- En las operaciones monetarias que representen entregas, o percepciones de dinero o que devenguen intereses, el impuesto estará a cargo de quien contrate con las entidades financieras sin perjuicio de la responsabilidad de estas como agentes de retención.
Contratos de Prendas. Hipotecas.
Artículo 251.- En los contratos de prenda y en las hipotecas el impuesto estará totalmente a cargo del deudor.
De la Base Imponible.
Transferencia de Dominio a Título Oneroso. Nuda Propiedad. Posesión de Inmuebles.
Artículo 252.- En toda transmisión de dominio a título oneroso de bienes inmuebles, incluida la transmisión de la nuda propiedad y los instrumentos por los cuales se otorgue la posesión de inmuebles, se liquidará el impuesto sobre el precio, monto o valor susceptible de apreciación dineraria asignado a la operación o la valuación fiscal, el que fuere mayor.

En los casos de trasmisión de dominio como consecuencia de subastas judiciales, subastas públicas realizadas por instituciones oficiales, conforme a las disposiciones de sus cartas orgánicas, y subastas privadas conforme a la Ley nacional 24441, la base imponible está constituida por el precio de venta.
Contratos de Compraventa. Transferencia de Dominio de Inmuebles.
Artículo 253.- En los contratos de compraventa de inmuebles o en cualquier otro acto por el cual se transfiera el dominio de inmuebles situados dentro y fuera de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y la transferencia se realice por un precio global sin determinarse en el respectivo instrumento los valores que corresponden a cada jurisdicción, el impuesto se aplica sobre el importe resultante de proporcionar el monto imponible, en función de las valuaciones fiscales de los inmuebles.

En ningún caso el monto imponible puede ser inferior a la valuación fiscal del o de los inmuebles ubicados en jurisdicción de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Contratos de Leasing.
Artículo 254.- En los contratos de leasing la base imponible estará constituida por el valor del canon establecido en función al tiempo del contrato.

En el caso que la transferencia de dominio de inmuebles o bienes muebles registrables tuviere lugar como consecuencia de un contrato de leasing, la base imponible al momento de formalizarse la escritura estará constituida por el valor total adjudicado al bien, canon de la locación más valor residual, o su valuación fiscal, el que fuera mayor.

El impuesto correspondiente al canon abonado durante la vigencia del contrato de leasing será tomado como pago a cuenta en caso de realizarse la opción de compra del bien.
Donaciones. Partición Hereditaria. División de Condominio. Liquidación de Sociedad Conyugal.
Artículo 255.- En el caso que la transferencia de inmuebles o bienes muebles registrables sea consecuencia de una donación, partición de herencia o división de condominio o liquidación de la sociedad conyugal, la base imponible estará constituida por el monto de la contraprestación pactada y siempre que esté constituida por una suma cierta y determinada. De no existir contraprestación de dichas características el acto no estará alcanzado por el impuesto.
Compraventa de Terrenos con Mejoras.
Artículo 256.- En los contratos de compraventa de terrenos en los cuales se hayan efectuado mejoras o construcciones con posterioridad a la fecha del boleto respectivo, el impuesto se liquidará sobre el precio de venta o valuación fiscal, el que fuere mayor, sin computar en esta última las mejoras incorporadas por el adquirente con posterioridad a la toma de posesión del inmueble.
Contratos de Permutas.
Artículo 257.- En las permutas de inmuebles o bienes muebles registrables el impuesto se aplica sobre la mitad de la suma de los valores que se permutan. Si no hubiera valor asignado a los inmuebles o bienes muebles registrables o este fuera inferior a las valuaciones fiscales,

el impuesto se aplica sobre la mitad de la suma de las valuaciones fiscales, el que resulte mayor.

En los casos en que una de las partes compense a la otra con una suma de dinero para equiparar el valor de las cosas permutadas y esta sea inferior o igual al valor de la cosa dada, el impuesto será el establecido en el párrafo anterior, hasta el tope de las cosas permutadas y por la compensación en dinero, el gravamen que corresponda de acuerdo con la alícuota que determina la ley impositiva para el tipo de bien permutado.

Artículo 258.- En el caso de permutas que comprendan inmuebles o bienes muebles registrables ubicados en varias jurisdicciones, el impuesto se aplica sobre el precio de venta o la valuación fiscal total del o de los inmuebles y la valuación fiscal de los bienes muebles registrables ubicados en jurisdicción de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur o sobre el mayor valor asignado a tales bienes.

Artículo 259.- Si en la permuta de bienes una de las partes se obliga a bonificar a la otra con la adición de una suma de dinero para igualar el valor de las cosas permutadas y esta suma es mayor al valor de la cosa dada, el contrato se reputará como de compraventa, debiendo satisfacerse los gravámenes que en cada caso correspondan, según la naturaleza de los bienes.

Pagos a Cuenta.

Artículo 260.- En los casos de transferencia de inmuebles y buques se computará como pago a cuenta, el impuesto de este título pagado sobre los boletos de compraventa, siempre que:

a) en la escritura traslativa de dominio el escribano autorizante deje constancia de la forma de pago efectuada en el boleto; y
b) el acto escriturario se celebre dentro de los 120 días corridos de la celebración del respectivo boleto de compraventa.

No será de aplicación este último requisito cuando el adquirente que haya suscripto el boleto de compraventa suscriba la escritura traslativa de dominio en el mismo carácter.

Hipotecas sobre Inmuebles Ubicados en Varias Jurisdicciones.

Artículo 261.- Cuando se constituyan hipotecas sobre inmuebles ubicados en varias jurisdicciones, sin afectarse a cada uno de ellos con una cantidad líquida, el impuesto se aplicará sobre la valuación fiscal del o de los inmuebles situados en jurisdicción de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. En ningún caso el impuesto podrá aplicarse sobre una suma mayor a la del crédito garantizado.

Cesiones de Crédito Hipotecario.

Artículo 262.- En las cesiones de créditos hipotecarios deberá liquidarse el impuesto sobre el precio convenido por la cesión o el monto efectivamente cedido, si fuera mayor que aquel. A ese efecto se deberán deducir las cantidades amortizadas. Igual procedimiento deberá observarse en cualquier contrato en donde se instrumente cesión de acciones y derechos.

Obligaciones de Pagar Sumas de Dinero.

Artículo 263.- En los contratos de locación y sublocación, cesión de uso, *leasing* o cualquier otra forma de contrato por la cual una de las partes se obliga a pagar a la otra una suma de dinero a cambio de que esta le proporcione el uso, disfrute o explotación de inmuebles ubicados en una o en varias jurisdicciones, así como los que instrumentan la locación de servicios y obras públicas y privadas sobre tales bienes, el impuesto se aplicará:

a) en los contratos enumerados en la primer parte del párrafo anterior: sobre el importe resultante de proporcionar el monto imponible en función de las valuaciones fiscales de los inmuebles, siempre que del instrumento respectivo no surja el monto atribuible a cada jurisdicción; y
b) en los contratos de locación de servicios y obras públicas y privadas: sobre el valor que corresponda a la parte realizada o a realizarse en jurisdicción de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Contratos de Seguros.

Artículo 264.- En los contratos de seguros el impuesto se liquidará según la alícuota que fije la ley impositiva, de acuerdo con las reglas que a continuación se establecen:

a) en los seguros elementales, sobre la prima y recargo, incluido el adicional

financiero, que se fije por la vigencia total del seguro; y

b) los certificados provisorios deberán pagar el impuesto conforme al inciso anterior, cuando no se emita la póliza definitiva dentro de los 90 días.

Transferencia de Dominio de Bienes Registrables.

Artículo 265.- En el caso que la transferencia de dominio de inmuebles o bienes muebles registrables tuviere lugar con motivo de aportes para la constitución de sociedades, aumento de su capital social, absorción, fusión, escisión o reorganización de las mismas, el impuesto de sellos deberá abonarse sobre el precio pactado o la valuación fiscal, el que sea mayor, en la oportunidad de la instrumentación del acto o contrato por el cual se perfeccione la transferencia del dominio.

Transferencias de Establecimientos Comerciales.

Artículo 266.- En las transferencias de establecimientos comerciales o industriales, el monto imponible será el precio neto de la operación. Si en la transferencia estuvieran comprendidos bienes inmuebles ubicados en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, dicho monto no podrá ser inferior a la valuación fiscal.

Disolución y Liquidación de Sociedades.

Artículo 267.- En las disoluciones y liquidaciones de sociedades, como así también en las adjudicaciones a los socios, el impuesto deberá pagarse únicamente cuando exista transmisión de domino de bienes inmuebles, tomándose como base imponible la valuación fiscal de dichos bienes o el valor asignado a los mismos, si fuera mayor. En tal caso el impuesto aplicable será el que corresponda a las transmisiones de dominio a título oneroso.

Contratos de Ejecución Sucesiva.

Artículo 268.- En los contratos de ejecución sucesiva, pagos periódicos u otros análogos, el impuesto se aplicará sobre el valor correspondiente a la duración total. Si la duración no fuera prevista, el impuesto se calculará como si aquella fuera de cinco años, debiendo renovarse cada cinco años o período inferior hasta la finalización de la relación contractual.

Prórrogas de los Contratos.

Artículo 269.- El valor de los contratos en que se prevea su prórroga, se determinará de la manera siguiente:

a) cuando la prórroga deba producirse por el solo silencio de las partes o aun cuando exista el derecho de rescisión por manifestación expresa de voluntad de ambas o de una de ellas, se calculará el tiempo de duración del contrato inicial más el período de prórroga;

b) cuando la prórroga sea por tiempo indeterminado, se la considerará como de cinco años, que se sumará al período inicial; si la prórroga fuera por períodos sucesivos, se considerará renovado el contrato en cada período de cinco años hasta la finalización de la relación contractual, debiendo ingresarse el tributo por cada una de las prórrogas efectuadas; y

c) cuando la prórroga está supeditada a una expresa declaración de voluntad de ambas partes o de una de ellas, se tomará como monto imponible solo el que corresponda al período inicial; al instrumentarse la prórroga o la opción, se abonará el impuesto correspondiente a la misma.

Contratos de Fideicomisos.

Artículo 270.- En los contratos de fideicomisos celebrados al amparo de las disposiciones de la Ley nacional 24441, título I, el impuesto se aplicará exclusivamente sobre la retribución que perciba el fiduciario durante la vigencia del contrato. No están alcanzados por el impuesto los instrumentos por medio de los cuales se formalice la transferencia de bienes que realicen los fiduciantes a favor de los fiduciarios. Los actos, contratos y operaciones de disposición o administración que realice el fideicomiso quedarán sometidos al impuesto en la medida que concurran los extremos de gravabilidad establecidos para este impuesto en cada caso.

Monto Imponible Expresado en Moneda Extranjera.

Artículo 271.- Si el valor imponible se expresa en moneda extranjera, el impuesto deberá liquidarse sobre el equivalente en moneda argentina al tipo de cambio vendedor vigente al primer día hábil anterior a la fecha del acto registrado y/o publicado por el Banco de la Nación

Argentina.
Valor de los Actos Indeterminado.
Artículo 272.- Salvo las disposiciones especiales contenidas en este Código, cuando el valor de los actos sea indeterminado, las partes estimarán dicho valor en el mismo instrumento; a tales efectos, la estimación se fundará en el rendimiento de convenios y prestaciones similares anteriores...".

Moción

Sr. BILOTA IVANDIC.— Pido la palabra.

Señor presidente: Solicito un cuarto intermedio sobre bancas.

Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración la moción del legislador Bilota Ivandic.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.

Cuarto Intermedio

- Son las 23:15
- A las 23:30

Sr. PRESIDENTE.— Se levanta el cuarto intermedio.
Sra. CARRASCO.— Pido la palabra:

Señor presidente: Solicito hacer unas modificaciones, sobre las que estuvimos hablando recién, en los artículos 233 y 276.

Sr. PRESIDENTE.— Habíamos acordado que cuando se dé lectura al artículo 276, se plantearán las modificaciones.
Sra. CARRASCO.— Bien, las planteo después.
Sr. PRESIDENTE.— Continúe, señora secretaria.
Sec. LEGISLATIVA.— "si no las hubiere, en los valores inferibles del negocio, inversiones, erogaciones y similares vinculados al contrato; y a falta de ellos, en todo elemento de juicio de significación a este fin existente a la fecha de celebración del acto. Cuando se fije como precio el corriente en fecha futura se pagará el impuesto con arreglo al precio de plaza en la fecha de otorgamiento.

Cuando se careciese de antecedentes y no pudiera practicarse una estimación del valor económico atribuible al acto, se satisfará el impuesto que establezca la ley tarifaria.

Dicha estimación y la circunstancias previstas en el párrafo anterior, cuando fueran invocadas por el contribuyente y/o responsable, podrán ser impugnadas por la Agencia de Recaudación Fueguina, quien la practicará de oficio sobre la base de los mismos elementos de juicio señalados en este artículo.

Cuando la estimación del organismo de aplicación sea superior a la determinada por las partes, se integrará sin multa ni intereses la diferencia del impuesto dentro de los 15 días de su notificación, siempre que el instrumento hubiere sido presentado dentro del plazo correspondiente.
Rentas Vitalicias.
Artículo 273.- En las rentas vitalicias el valor para aplicar el impuesto será igual al importe del quíntuplo de una anualidad de renta o el 5% anual de la valuación fiscal o tasación judicial, el que fuere mayor.
No Integran la Base Imponible.
Artículo 274.- No integran la base imponible los siguientes conceptos:

a) los importes correspondientes a los impuestos internos, impuesto al valor agregado, débito fiscal, impuesto a los combustibles líquidos y gas natural previsto en el título III, de la Ley nacional 23966 e impuestos para los fondos Nacional de

Autopistas y también Tecnológico del Tabaco;

b) los importes referidos a interés de financiación; y

c) gastos y expensas cuando quedan a cargo del locatario y no representen un ingreso para el locador.

Estas deducciones solo podrán ser efectuadas cuando se identifiquen y discriminen en forma precisa los conceptos enunciados en los instrumentos alcanzados por el tributo.”.

Sra. CARRASCO.— Pido la palabra.

Señor presidente: Propongo dos modificaciones. Una, en el artículo 233, inciso f), con la siguiente redacción: “están gravados con el impuesto de este capítulo las liquidaciones o resúmenes periódicos que las entidades emisoras de tarjetas de crédito o compra produzcan para su remisión a los titulares.

Son sujetos pasivos los titulares de las tarjetas de crédito o compra emitidas según lo indicado en el párrafo anterior.

La base imponible estará constituida por los débitos o cargos del período, netos de los ajustes provenientes de saldos anteriores. Los cargos o débitos a considerar son: compras..:”.

Sr. PRESIDENTE.— Un momento, señora legisladora.

¿Puede acercar por Secretaría así se toma nota de la modificación?

Sra. CARRASCO.— Sí.

Sr. PRESIDENTE.— Se va a dar lectura a la modificación del inciso f), del artículo 233.

Sec. LEGISLATIVA.— “Artículo 233, inciso f): están gravados con el impuesto de este capítulo las liquidaciones o resúmenes periódicos que las entidades emisoras de tarjetas de crédito o compra produzcan para su remisión a los titulares.

Son sujetos pasivos los titulares de las tarjetas de crédito o compra emitidas según lo indicado en el párrafo anterior.

La base imponible estará constituida por los débitos o cargos del período, netos de los ajustes provenientes de saldos anteriores. Los cargos o débitos a considerar son: compras, cargos financieros, intereses punitorios, cargos por servicios, adelantos de fondos y todo otro concepto incluido en la liquidación o resumen.

El impuesto se liquidará aplicando la alícuota que fije anualmente la Ley Impositiva, sobre la base imponible determinada conforme a lo previsto en el párrafo anterior, y será ingresado por las entidades que intervengan en la operatoria, a través del régimen de percepción que disponga la Agencia de Recaudación Fueguina.”.

Sr. PRESIDENTE.— Continuamos con la lectura del otro artículo.

Sra. CARRASCO.— Pido la palabra.

Señor presidente: Además hay una modificación en el artículo 276, para agregar al inciso 41. Pido que se lea por Secretaría.

Sr. PRESIDENTE.— Se da lectura por Secretaría.

Sec. LEGISLATIVA.— “Artículo 276, inciso 41: las liquidaciones o resúmenes periódicos que las entidades emisoras de tarjetas de débito produzcan para su remisión a los titulares.

Resúmenes de tarjetas de crédito o compras.

Artículo 275.- La base imponible en el caso de liquidaciones o resúmenes periódicos emitidos por entidades emisoras de tarjetas de crédito o compra estará constituida por los débitos o cargos del período, netos de los ajustes provenientes de saldos anteriores.

Los cargos o débitos a considerar son: compras, cargos financieros, intereses punitorios, cargos por servicios, adelantos de fondos y todo otro concepto incluido en la liquidación o resumen...”

Moción

Sra. CARRASCO.— Pido la palabra.

Señor presidente: Solicito un cuarto intermedio, por favor.

Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración la moción de la legisladora Carrasco. Los que estén por la afirmativa, a mano alzada.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.

Cuarto Intermedio

- Son las 23:33.
- A las 23:35

Sr. PRESIDENTE.— Se levanta el cuarto intermedio.
Sr. BILOTA IVANDIC.— Pido la palabra.

Señor presidente: Pido que comencemos la lectura con el artículo 275, dado que hubo una corrección sobre el artículo anterior.

Sec. LEGISLATIVA.— "Base Imponible. Registraciones Contables que Devenguen Intereses. Entidades Ley Nacional 21526.

Artículo 275.- Para las operaciones registradas contablemente, que representen entregas o recepciones de dinero, que devenguen intereses, efectuadas por entidades regidas por la Ley nacional 21526, de entidades financieras o sus modificaciones, el impuesto se pagará sobre la base de los numerales establecidos para la liquidación de los intereses, en proporción al tiempo de la utilización de los fondos en la forma y plazo que la Agencia de Recaudación Fueguina establezca.

El impuesto será exigible a partir del momento en que los intereses se debiten, acrediten o abonen. En los casos de cuentas con saldos alternativamente deudores y acreedores, el gravamen deberá liquidarse en forma independiente sobre los numerales respectivos.

De las Exenciones.

Artículo 276.- Están exentos del impuesto establecido en este título:

1. el Estado nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las municipalidades y sus dependencias administrativas. No están comprendidas en este inciso las empresas y entidades pertenecientes total o parcialmente al Estado nacional, provincial o municipal, a que se refiere el artículo 1º de la Ley nacional 22016;
2. las asociaciones y entidades civiles de asistencia social, de caridad, beneficencia, religiosas, de educación e instrucción, científicas, artísticas, gremiales, culturales, de fomento vecinal y protectoras de animales, siempre que sus réditos y patrimonio social se destinen exclusivamente a los fines de su creación y en ningún caso se distribuyan directa o indirectamente entre los socios. Se excluye de la exención establecida en el inciso a aquellas entidades organizadas jurídicamente en forma comercial y las que obtienen sus recursos en todo o en parte, de la explotación regular de espectáculos públicos, juegos de azar, carreras de caballos y actividades similares;
3. las sociedades cooperativas de viviendas constituidas con arreglo a la Ley nacional 20337 o sus modificaciones, y debidamente inscriptas como tales en el registro pertinente, así como los actos por los que se constituyan dichas entidades;
4. los instrumentos otorgados a favor del gobierno nacional, de los gobiernos provinciales y municipales y de sus respectivas dependencias, que tengan por objeto documentar o afianzar obligaciones de carácter fiscal y previsional;
5. las transferencias de bienes muebles y las cesiones de derechos que han debido tributar el impuesto de esta ley con motivo de la constitución de sociedades o ampliaciones de su capital;
6. en el caso de disolución de sociedades y adjudicación a los socios, las transferencias de bienes o establecimientos comerciales o industriales y las cesiones de derechos.

Esta norma no se aplicará en el caso de compraventa o permuta de inmuebles a título oneroso que se realicen con motivo de disolución de sociedades y/o adjudicación a los socios;

7. las transformaciones de sociedades en otras de tipo jurídico distinto, siempre que no se prorrogue la duración de la sociedad primitiva.

   Estarán también exentos los actos que formalicen la reorganización de sociedades o fondos de comercio (fusión, escisión o división), siempre que no se prorrogue el término de duración de la sociedad subsistente o de la nueva sociedad, según corresponda, respecto a la de mayor plazo de las que se reorganicen. Si el capital de la sociedad subsistente o de la nueva sociedad, en su caso, fuera mayor a la suma de los capitales de las sociedades reorganizadas, se abonará el impuesto sobre el aumento de capital.

   Se entiende por reorganización societaria o de fondos de comercio, las operaciones definidas como tales por el artículo 77, de la Ley nacional 20628, de impuesto a las ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, su decreto reglamentario y las normas complementarias dictadas por la Administración Federal de Ingresos Públicos, concordantes y modificatorias;
8. las transferencias postales o telegráficas y los giros vendidos por entidades regidas por la Ley nacional 21526, de entidades financieras, pagaderos a su presentación o hasta cinco días vista;
9. los actos de constitución de sociedades para la administración y explotación de servicios estatales que se privaticen, cuando sean formalizados por los empleados y/u operarios de aquellos;
10. las reinscripciones de hipotecas;
11. las declaraciones de dominio, cuando se haya expresado en la escritura de compra que la adquisición se efectuó para la persona a favor de la cual se formulen;
12. las divisiones de condominio;
13. los endosos efectuados en cheques, letras de cambio, pagaré y otros documentos a la orden;
14. las fianzas u otras obligaciones accesorias, como asimismo la constitución de prendas, cuando se pruebe que han sido contraídas para garantizar obligaciones que hayan pagado el impuesto de sellos correspondientes en la respectiva jurisdicción de otorgamiento, o que se encontraban exentas del mismo. Si no se demostrara el pago del impuesto sobre el instrumento principal, o en su caso la exención, el documento en el cual se formalicen las obligaciones accesorias estará sometido al impuesto correspondiente o al que grava la obligación principal, el que sea mayor, sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder;
15. los pagarés o las fianzas otorgadas en garantía de ofertas en licitaciones y contrataciones directas con reparticiones nacionales, provinciales o municipales, como asimismo las garantías otorgadas por los adjudicatarios;
16. los pagarés entregados como parte del precio de un contrato de compraventa de inmuebles, cuando se haya efectuado la escritura traslativa de dominio, siempre que lleven al dorso la certificación del escribano ante el cual haya sido otorgada dicha escritura, del que resulte la fecha y número de esta y el importe del impuesto pagado. No gozarán de esta exención los nuevos documentos que se otorguen para renovar las obligaciones no cumplidas a su vencimiento;
17. los documentos que se instrumenten o sean consecuencia de operaciones gravadas por el impuesto a la compra y venta de divisas;
18. los actos realizados en virtud de lo establecido en los artículos 17 y 18 de la Ley nacional 20539 y sus modificaciones, cualquiera sea la forma en que se instrumenten;
19. el establecimiento de sucursales o agencias en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, por parte de sociedades constituidas en las

provincias o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
20. los contratos de cesión de derechos de propiedad intelectual, los contratos de edición y los contratos de traducción de libros;
21. los contratos de impresión de libros, celebrados entre las empresas gráficas argentinas y las empresas editoras argentinas;
22. los contratos de venta de papel para libros;
23. los contratos de venta de libros, aunque el precio se difiera en cuanto a su percepción, siempre que dichos contratos los celebren, como vendedoras, las empresas editoras argentinas;
24. las asociaciones deportivas y de cultura física, siempre que las mismas no persigan fines de lucro, exploten o autoricen juegos de azar y/o cuyas actividades de mero carácter social priven sobre las deportivas, teniendo en cuenta los índices representativos de las mismas (cantidad de socios que participen activamente, fondos que se destinan y otros);
25. las operaciones de compra venta al contado o a plazo de mercaderías, cereales, oleaginosas, productos o subproductos de la agricultura, ganadería o minería y frutos del país o semovientes excluidas las de títulos, acciones y debentures, cuando constituyan operaciones de arbitraje en mercados a término;
26. el contrato de seguro y los reaseguros;
27. los conformes prestados con motivo de circularizaciones a deudores y acreedores, efectuadas en virtud de la ejecución de prácticas de auditoría interna o externa, y las conformidades prestadas en los estados, resúmenes o movimientos de cuentas corrientes de cualquier tipo, así como en los remitos y facturas no conformadas;
28. los créditos concedidos por las entidades regidas por la Ley nacional 21526 a más de un año de plazo originario, cualquiera sea la forma adoptada para su concertación. Si se otorgaran pagarés para documentar dichas operaciones, los mismos gozarán de este beneficio en tanto no se endosen a terceros y se haga constar en su texto o al dorso, mediante constancia firmada por la entidad prestamista, el plazo, causas y modalidades de la operación crediticia respectiva.
    Esta exención no será aplicable para la renovación de operaciones de menor plazo, aunque excedieran en su conjunto el plazo de un año. Tampoco regirá cuando antes de dicho lapso se produjera la cancelación total o parcial del crédito de que se trate, en cuyo caso deberá ingresarse el impuesto correspondiente al total de la operación debidamente actualizado de acuerdo con lo que dispone el Código Fiscal, sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder;
29. las escrituras hipotecarias y demás garantías otorgadas en seguridad de las operaciones sujetas al gravamen de este título, aun cuando estas garantías sean extensivas a las futuras renovaciones de dichas operaciones.
    Cuando las entregas o recepciones de dinero que devenguen intereses queden garantizadas mediante vales, billetes, pagarés, letras de cambio y órdenes de pago o la firma de fórmulas en blanco de dichos documentos se deberá abonar por los mismos el impuesto correspondiente;
30. los boletos y/o el otorgamiento de las escrituras de compraventa de viviendas celebrados entre el Instituto Provincial de la Vivienda y sus adjudicatarios, siempre que los mismos se refieran a viviendas construidas a través de planes oficiales;
31. las locaciones de viviendas únicas familiares, solamente por el 50% correspondiente a los locatarios;
32. los contratos de trabajo por tiempo determinado, con excepción de los contratos celebrados con personas que desarrollen tareas vinculadas a las actividades hidrocarburíferas;
33. las liquidaciones o resúmenes periódicos que las entidades emisoras de tarjetas de débito produzcan para su remisión a los titulares;
34. las letras de cambio, giros, cheques, cheques de pago diferido, órdenes de pago y cualquier otro título valor;

35. los certificados de depósito a plazo fijo;
36. los depósitos en cajas de ahorro, cuentas especiales de ahorro, cuentas corrientes y plazos fijos;
37. los actos y contratos vinculados con la operatoria de tarjetas de crédito o compra, con excepción de las liquidaciones o resúmenes periódicos que remiten las entidades a los titulares de las tarjetas de crédito y/o compra;
38. las órdenes de compra que emitan organismos públicos y sus dependencias pertenecientes al Estado nacional, provincial y municipal;
39. los contratos de locación de servicios y obras públicas celebrados por la Administración Pública nacional, provincial y municipal;
40. los contratos, acuerdos o convenios que celebre el Poder Ejecutivo con entidades públicas o privadas, que permitan obtener recursos corrientes y/o contribuciones extraordinarias, o bien, que establezcan herramientas o procedimientos que optimicen los servicios propios de la Administración Pública;
41. las liquidaciones o resúmenes periódicos que las entidades emisoras de tarjetas de débito produzcan para su remisión a los titulares.

Del Pago. Forma y Condiciones.

Artículo 277.- Los impuestos establecidos en este título se pagarán en la forma, condiciones y términos que establezca el organismo de aplicación según lo determine el Poder Ejecutivo en casos especiales o el organismo de aplicación con carácter general para determinados gravámenes o categorías de contribuyentes.

Podrán pagarse también sobre la base de declaraciones juradas cuando lo disponga el organismo de aplicación. El pago de impuestos se hará bajo exclusiva responsabilidad del contribuyente y las oficinas recaudadoras se limitarán a agregar, en cada caso, los valores que se soliciten, salvo cuando exista determinación previa del organismo de aplicación.

Los escribanos, las entidades financieras, las compañías de seguro y los encargados del Registro Nacional de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios quedan designados como agentes de recaudación del impuesto de sellos, en los términos de la presente ley y en los que establezca la reglamentación pertinente.

Del Procedimiento Administrativo e Infraccional Especial. Documentos ante Otras Autoridades Administrativas.

Artículo 278.- En todo documento que se presente ante cualquier autoridad administrativa y que aparezca en infracción a las disposiciones de este código u otras leyes tributarias deberá darse intervención a la Agencia de Recaudación Fueguina en la forma que establezca la reglamentación.

Escribanos. Obligaciones.

Artículo 279.- Los escribanos de registro no podrán aceptar para darle fecha cierta, transcribir, ni dar fe de haber tenido a la vista instrumentos gravados, sin acreditar el pago del impuesto, debiendo dejar constancia en el cuerpo de la escritura de la numeración, serie e importe de los valores con que se encuentren habilitados, o de la respectiva individualización del timbrado mecánico o sello de autorización para abonar el impuesto por declaración jurada. Tampoco podrán extender protestos de documentos en infracción, sin exigir su reposición o garantizarla para el primer día hábil siguiente.

La falta de cumplimiento de estos requisitos los constituirá en infractores siendo pasibles de una multa de tres veces el impuesto debidamente actualizado, de acuerdo con lo que establece el Código Fiscal, si se comprobaren omisiones de impuesto, o de $ 100.000 a $ 1.000.000 si se tratare de una infracción formal.

Simple Mora y Pago Espontáneo.

Artículo 280.- La simple mora en el pago del impuesto cuando el mismo se pague espontáneamente, inclusive en los casos en que el impuesto se abone por declaración jurada, será sancionada con una multa que resultará de aplicar la siguiente escala:

a) hasta tres meses de retardo: el 50% del impuesto que se ingrese fuera de término;
b) más de tres meses y hasta seis meses de retardo: 100% del impuesto que se ingrese fuera de término;

c) más de seis meses y hasta nueve meses de retardo: el 150% del impuesto que se ingrese fuera de término;
d) más de nueve meses y hasta 12 meses de retardo: el 200% del impuesto que se ingrese fuera de término; y,
e) más de 12 meses de retardo: el 250% del impuesto ingresado fuera de término.

Para la fijación de las multas sólo se tendrá en cuenta el sello omitido en el instrumento u operación, con independencia del número de partes intervinientes en el acto o de infractores, siendo estos responsables solidarios.

En todos los casos, las multas podrán ser reducidas total o parcialmente, mediante resolución fundada, cuando las mismas impliquen culpa leve de los infractores.

Artículo 281.- Establécese que a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, operará, ipso iure, la sustitución del capítulo III -Impuesto Inmobiliario Rural- de la Ley provincial 440, por el siguiente:

'Capítulo III- Del Impuesto Inmobiliario

Artículo 32- Establécese que los recursos producidos por el excedente en el cobro del Impuesto Inmobiliario sobre los inmuebles urbanos, respecto del importe actual recaudado por los municipios según bases imponibles y alícuotas que aplican a la fecha, serán coparticipados con los municipios de la provincia que adhieren a la presente ley, debiendo los mismos dejar de cobrar el impuesto creado por las ordenanzas locales.

Artículo 32 bis.- La coparticipación establecida en el artículo anterior será del 60%, considerando los inmuebles urbanos localizados en cada ejido municipal, respectivamente.

Artículo 33.- Establécese que la provincia podrá designar como agentes de percepción y/o de fiscalización del impuesto a los municipios de la provincia, los que podrán retener la parte correspondiente a la coparticipación del impuesto, conforme el artículo anterior, en el porcentaje que corresponda.

Artículo 33 bis.- Establécese las siguientes escalas de alícuotas para la liquidación del impuesto inmobiliario:

INMUEBLES RURALES			
VALUACIÓN FISCAL		CUOTA FIJA	ALÍCUOTA S/ EXCENDENTE LÍMITE MÍNIMO
MAYOR A:	IGUAL O MENOR A:		
$ 18.000.000,00		$136,656,90	1,20%
$ 9.000.000,00	$ 18.000.000,00	$ 46.656.90	1,00%
$ 4.500.000,00	$ 9.000.000,00	$ 15.606,90	0,69%
$ 3.600.000,00	$ 4.500.000,00	$ 11.556,90	0,45%
$ 2.700.000,00	$ 3.600.000,00	$ 8.046,90	0,39%
$ 1.800.000,00	$ 2.700.000,00	$ 4.987,00	0,34%
$ 900.000,00	$ 1.800.000,00	$ 2.196,90	0,31%
$ 333.000,00	$ 900.000,00	$ 666,00	0,27%
$ 0,00	$ 333.000,00		0,20%

INMUEBLES URBANOS CON MEJORAS		
VALUACIÓN FISCAL		ALÍCUOTA
MAYOR A:	IGUAL O MENOR A:	
$ 700.000,00		9,04%
$ 450.001,00	$ 700.000,00	7,50%
$ 363.001,00	$ 450.000,00	5,04%
$ 273.001,00	$ 363.000,00	3,15%
$182.001,00	$273.000,00	2,21%
$91.001,00	$182.000,00	1,89%
$1,00	$91.000,00	1,58%

INMUEBLES URBANOS BALDÍOS		
VALUACIÓN FISCAL		ALÍCUOTA
MAYOR A:	IGUAL O MENOR A:	
$ 73.001,00		15,75%
$ 24.001,00	$ 73.000,00	12,50%
$ 14.001,00	$ 24.000,00	10,08%
$ 7.201,00	$ 14.000,00	7,56%
$ 1,00	$ 7.200,00	6,30%

Artículo 33 ter. - Fíjase en $1.500,00 el impuesto mínimo para los inmuebles rurales.

Artículo 33 quáter.- Facúltase al Poder Ejecutivo a dictar toda la normativa reglamentaria necesaria para la ejecución de la presente'.

Artículo 282.- Establecer que a partir de la entrada en vigencia de la presente ley operará *ipso iure* la sustitución del artículo 44, de la Ley provincial 440, por el siguiente:

'44.- Por cada liquidación de deuda y su notificación el contribuyente o responsable deberá abonar un importe de hasta el 10% de la deuda.

Por cada notificación que requiera la presentación de declaraciones juradas o documentación equivalente en los que se acredite que existe mora u omisión, o en general, el incumplimiento satisfactorio de las obligaciones tributarias, el contribuyente o responsable deberá abonar un importe de hasta $200 pesos.

Lo prescripto en el presente artículo será conforme a la resolución que dicte la Agencia de Recaudación Fueguina.'.

Disposiciones Transitorias

Artículo 283.- Sustitúyese el artículo 9º de la Ley provincial 904 por el siguiente texto:

'Artículo 9º.- Exceptúase por única vez la aplicación de los artículos 10 y 11 de la Ley territorial 118, reemplazando el cálculo de los valores unitarios básicos allí establecidos por el resultante informe técnico producido según el contrato de obra (Expediente Nº 10367 00 01) con el Consejo Federal de Inversiones, en virtud de ello:

a) el valor unitario básico por hectárea para los inmuebles de planta rural de la provincia será de $900, el que será reajustado según los coeficientes correctores que se consignan en el Anexo I integrante de la presente ley. El valor así obtenido constituirá la valuación fiscal para el impuesto inmobiliario rural hasta tanto sea reemplazado según el procedimiento establecido por el artículo 6º, de la Ley territorial 118, y sin perjuicio de las actualizaciones que correspondan;
b) los valores unitarios básicos por metro cuadrado, libre de mejoras, para los inmuebles de la planta urbana de la provincia serán los establecidos en el siguiente cuadro. La valuación fiscal total resultará de aplicar los mencionados

valores básicos a la superficie del inmueble más el valor de las mejoras implantadas en cada parcela. Ello hasta tanto sea reemplazado según el procedimiento establecido por el artículo 6º, de la Ley territorial 118, y sin perjuicio de las actualizaciones que correspondan.

LOCALIDAD	SECCIÓN	$/m^2$
USHUAIA	A	$ 4.680,00
	B	$ 1.776,67
	C	$ 1.430,00
	D	$ 1.592,50
	E	$ 931,67
	F	$ 650,00
	G	$ 975,00
	H	$ 975,00
	I	$ 1.040,00
	J	$ 1.430,00
	K	$ 1.511,25
TOLHUIN	T	$ 137,27

c) el valor de las mejoras surgirá de aplicar un coeficiente de cinco veces sobre la última valuación fiscal de la mejora por aplicación de la Ley territorial 118, efectuada en el año 1990. Ello hasta tanto sea reemplazado según el procedimiento establecido por el artículo 6º, de la Ley territorial 118, y sin prejuicio de las actualizaciones que correspondan.

Disposiciones Transitorias

Artículo 284.- La presente ley que unifica el Código Fiscal entrará en vigencia *ipso iure* a partir del primer día del mes de febrero del año dos mil dieciséis y regirá respecto de los hechos imponibles y/o determinaciones que ocurran a partir de dicha fecha.

Artículo 285.- La totalidad de los recursos excedentes producidos por la modificación del...".

Moción

Sr. BILOTA IVANDIC.— Pido la palabra.

Señor presidente: Solicito un cuarto intermedio sobre bancas.

Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración la moción del legislador Bilota Ivandic.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.

Cuarto Intermedio

- Son las 00:03
- A las 00:15

Sr. PRESIDENTE.— Se levanta el cuarto intermedio.

Sr. BILOTA IVANDIC.— Señor presidente: Solicito hacer una corrección o una aclaración, cuando se leyó el artículo 33 bis, y se estableció respecto de inmuebles rurales, inmuebles urbanos con mejoras e inmuebles urbanos baldíos, cuando se leyeron los porcentajes -mejor dicho, las alícuotas- en el caso de inmuebles rurales únicamente, esa alícuota es en porcentaje, y en inmuebles urbanos con mejoras e inmuebles urbanos baldíos, la alícuota es

por mil. Pido que quede asentado eso.

También quiero hacer otro agregado de un cuadro en el artículo 283, que alcanzo a Secretaría, referido al artículo 9º, de la Ley 904, con respecto a Río Grande.

Sr. PRESIDENTE.— Se lee por Secretaría.

Sec. LEGISLATIVA.— “

RÍO GRANDE	A	$ 741,82
	B	$ 590,00
	C	$ 416,67
	D	$ 683,33
	E	$ 275,00
	F	$ 325,00
	G	$ 350,00
	H	$ 550,00
	J	$ 330,00
	K	$ 187,50”.

Artículo 285.- La totalidad de los recursos excedentes producidos por la modificación del Impuesto Inmobiliario prevista en la presente ley, serán destinados a financiar el pago de jubilaciones y pensiones del IPAUSS o el organismo que lo reemplace por un período máximo de 48 meses.

Artículo 286- Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial”.

Sr. RUBINOS.— Pido la palabra.

Señor presidente: Después de cinco o seis horas de lectura del Código Fiscal, podemos tomar un poco de conciencia de lo que significó tratar de estudiarlo en casi 40 horas de trabajo, en los últimos días, si cinco horas solamente nos lleva la lectura.

Hemos tratado de entender casi todos los puntos, de aportar algunas ideas -como lo manifestó Pablo (Blanco) y yo también- en algunas de las charlas con el resto de los legisladores.

Más allá que en general vamos a acompañar, quisiera dejar asentado por qué todo lo que corresponda al impuesto inmobiliario no lo vamos a acompañar.

En primer lugar, entendemos que correspondía hacer una valuación fiscal de los terrenos durante estos últimos años -es cierto que desde los años 95 y 96 no hay valuaciones- a la Dirección de Catastro, porque así está establecido en la Ley 118, sin ninguna necesidad de que esa valuación pase por la Legislatura para que sea aprobada. La valuación, según el artículo 15 debería realizarse, como mínimo, cada 5 años, a cargo de la Dirección de Catastro y Tierras Fiscales.

Como esta evaluación no se producía, señor presidente -y usted estaba en el Concejo Deliberante en ese momento- se sancionó una ordenanza para poder ir actualizando los valores que los municipios cobraban en concepto de impuesto inmobiliario. Aproximadamente, esa valuación del año 95, hoy tiene un índice de corrección primero de 1.5 y hoy de 4.95.

La verdad -tengo que decirlo- no entiendo los cuadros que nos han presentado, cuando nos muestran los valores fiscales, tantos de Ushuaia como de Río Grande, y realmente no entiendo por qué en Ushuaia hay valores de $ 4.600 como máximo, y en Río Grande el mayor es de $ 741, el metro cuadrado. No lo entiendo.

Pero más allá de eso, por ejemplo, el municipio de Ushuaia hoy ya tiene el impuesto inmobiliario de 2016, con el decreto firmado y autorizado por el Concejo Deliberante, y ya hay un aumento, con respecto a 2015, del 30- 35%.

Quiere decir que si nosotros aprobamos un valor diferente en el impuesto inmobiliario y esto les llega a los vecinos, tendrán un doble aumento en 2016. Y, la verdad, eso no lo podemos acompañar porque nosotros tratamos de ver, en cada uno de los temas considerados, el contexto por el que estamos pasando. ¿Cuál es el contexto? El tema de la

emergencia que se va a tratar, de las modificaciones de los regímenes jubilatorios, un mayor aporte de los trabajadores, escuchamos que habrá aumento del agua, del combustible, la dificultad de ajustar los salarios en los primeros meses del año. Bueno, en ese contexto, tenemos que tratar de que la gente reciba la menor cantidad de aumentos posibles.

Además, me parece que, hoy, plantear como lo establece el artículo 179, de este Código Fiscal, una serie de excepciones que sí tienen efecto inmediato. Por ejemplo, desde el momento en que se vote la excepción el municipio de Ushuaia -en estas pocas horas solo le pude hacer alguna consulta al director de Rentas de este municipio; y significa que el municipio de Ushuaia no le puede facturar -no hablemos de escuelas- a entes nacionales, provinciales, autárquicos y asociaciones, una pérdida entre el 30 y el 40% de la facturación del impuesto inmobiliario. Es cierto -y alguien puede plantearme- que es difícil cobrarlo. Pero también el municipio pierde capacidad de negociación, por ejemplo, con la calle de la Armada que tenemos aquí abajo. Nunca había cobrado esos impuestos inmobiliarios, pero eso le permitió al municipio de Ushuaia negociar, y quedarse con una calle, con el uso de un terreno para mejorar el tránsito de esta ciudad.

Esta no es una crítica, solo que no entendemos, y creemos que no es conveniente generar exepciones sin conversar para ver de qué forma harán frente los municipios para recuperar estos montos y, de recuperarlos, ese 30% que puedan perder que no sea a costa de cobrarle más a los vecinos de cada ciudad.

Y en los casos -también ha pasado en los municipios- en que esas valuaciones tienen saltos muy significativos, lo que se suele hacer es que el aumento a los vecinos sea progresivo; que no sea todo el primer año. Esto no está plasmado.

Mi pensamiento es que si se aprueba en estas condiciones y mañana uno de los municipios tiene la posibilidad de aumentar el 50 o el 60% del impuesto inmobiliario, tiene la tranquilidad de que la responsabilidad es de la Legislatura, que aprobó la norma. Por cierto, no quiero darles la posibilidad de que llegue un aumento de estas características a un vecino de la ciudad y que la culpa sea nuestra.

Son varios artículos: el 32, el 33, el 33 bis, tendríamos que ir viendo en la votación en particular, y mencionarlos porque nuestro bloque no estará a favor de ellos. Nada más, señor presidente.

Sr. VILLEGAS.— Pido la palabra.

Señor presidente: Además de compartir lo expuesto por el legislador Rubinos, quiero entrar, en esta cuestión del impuesto inmobiliario, a un ámbito que tiene que ver con el sistema de coparticipación de impuestos, y que tiene directa incidencia sobre las prescripciones que tiene previstas la Carta Orgánica municipal de la ciudad de Ushuaia.

Oportunamente, tuve el honor de haber sido convencional constituyente municipal y, mientras debatíamos, en aquella oportunidad dejamos bien en claro…la atribución que tenía el municipio de imponer un impuesto a los vecinos de la ciudad de Ushuaia, la facultad tributaria al ser considerado como un Estado de tercer grado.

Nosotros, a través de este proyecto de ley denominado “capítulo III - Impuesto Inmobiliario”, lisa y llanamente estamos metiéndonos de lleno en el sistema tributario de la Municipalidad de Ushuaia. En particular hablo de ella porque es la que me consta y de la que he sido convencional.

Más allá del acuerdo político que se puede llegar a hacer referencia -por allí se ha dejado traslucir en el sentido de que los intendentes estarían de acuerdo y también los concejos deliberantes- me pregunto en voz alta y tengo una seria duda, más allá del acuerdo político que pueda llegar a existir en la materia, si ese acuerdo puede realizarse en contra de lo que prescribe la Constitución local, que es la de Ushuaia. Tengo mis serias dudas, señor presidente, y por eso no voy a acompañar este proyecto de ley. Nada más.

Sr. PRESIDENTE.— ¿Algún otro legislador?

Se pone a consideración de los señores legisladores, en comisión, el proyecto de ley leído por Secretaría, con las modificaciones introducidas. Los que estén por la afirmativa, a mano alzada.

Sr. BLANCO.— Pido la palabra.

Señor presidente: Tendríamos que votarlo, primero, en general y después en particular, porque nosotros coincidimos con muchos artículos.

- Hablan varios legisladores a la vez.

Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración de los señores legisladores, el proyecto en comisión.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.

Moción

Sr. BILOTA IVANDIC.— Pido la palabra.

Señor presidente: Solicito constituir la Cámara en sesión.

Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración la moción del legislador Bilota Ivandic.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.

En Sesión

Sr. PRESIDENTE.— Solicito a los señores legisladores pasar a un cuarto intermedio, sobre bancas.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.

Cuarto Intermedio

- Son las 00:24.
- A las 00:31

Sr. PRESIDENTE.— Se levanta el cuarto intermedio.

Por tratarse de un proyecto de ley, como hay disidencias, primero tomaremos votación nominal en general, por Secretaría.

Sec. ADMINISTRATIVO.— Procedo a tomar la votación.

- Votan por la afirmativa los legisladores Bilota Ivandic, Blanco, Carrasco, Freites, Furlan, Gómez, Harrington, Martínez, Romano y Rubinos.
- Votan por la negativa Boyadjian, Löffler, Urquiza y Villegas.

Sec. ADMINISTRATIVO.— Resultan 10 votos por la afirmativa y cuatro por la negativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado, en general.

Propongo al Cuerpo que se vote en particular, exceptuados los artículos en disidencia, que son 32, 33, 33 bis, 33 ter, 33 quater, 282, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178 y 179; exceptuados estos, se toma votación nominal del resto de los artículos.

Sra. CARRASCO.— Pido la palabra.

Señor presidente: ¿Puede aclarar bien la moción?

Sr. PRESIDENTE.— La moción es en este caso que se vota, exceptuado los artículos en

disidencia 32, 33, 33 bis, 33 ter, 33 quater...

Sr. LÖFFLER.— Pido la palabra.

Señor presidente: Solicito que se omita tomar la votación en particular a quienes votamos general por la negativa, porque no tiene ningún sentido.

Sr. PRESIDENTE.— Tiene razón, legislador.

Votaremos nuevamente, en particular, exceptuados los legisladores que votaron por la negativa, en general.

En esta votación exceptuaremos en particular los artículos 32, 33, 33 bis, 33 ter, 33 quater, 282, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178 y 179.

El secretario tomará la votación nominal.

Sec. ADMINISTRATIVO.— Procedo a tomar la votación.

- *Votan por la afirmativa los legisladores Bilota Ivandic, Blanco, Carrasco, Freites, Furlan, Gómez, Harrington, Martínez, Romano y Rubinos.*

Sec. ADMINISTRATIVO.— Resultan 10 votos por la afirmativa, señor presidente.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.

Se pone a consideración de los legisladores los artículos que estaban en disidencia. Me refiero a los artículos 32, 33, 33 bis, 33 ter, 33 quater, 282, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178 y 179.

De esto, exceptuamos a los legisladores que votaron en forma negativa, en general.

Sec. ADMINISTRATIVO.— Procedo a tomar la votación.

- *Votan por la afirmativa los legisladores Bilota Ivandic, Carrasco, Freites, Furlan, Gómez, Harrington, Martínez y Romano.*
- *Votan por la negativa los legisladores Blanco y Rubinos.*

Sec. ADMINISTRATIVO.— Resultan ocho votos por la afirmativa y dos por la negativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

Sr. FURLAN.— Pido la palabra.

Señor presidente: Solicito que nos apartemos del Reglamento para hacer algunas consideraciones breves.

Entendí muy bien lo que dijeron los legisladores Rubinos y Villegas con respecto al tema de los municipios y su propia decisión en el tema impositivo y, sobre todo, con el inmobiliario, marcado en la Carta Orgánica y demás. Pero también es cierto que desde siempre existió un solo Estado, el Estado provincial, y que de ahí derivan las demás instituciones.

La provincia ha cedido. Creo que debe ser una de las pocas de los 24 distritos del país, de las 23 provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que ha cedido su tasa inmobiliaria, sus patentes y demás al municipio de Ushuaia.

Y, en este sentido, si bien es cierto lo que decía el legislador Villegas con respecto a un acuerdo político -por llamarlo de alguna forma- con los intendentes, no menos cierto es que los intendentes también están embarcados dentro de este Estado provincial, y que también tienen la posibilidad de colaborar. Pero independientemente de esto, hay uno de los artículos que dice: “establecer que los recursos producidos por el cobro del impuesto inmobiliario sean coparticipados con los municipios de la provincia 'que adhieran' a la presente”. Es decir, que deberán adherir a través de sus cuerpos deliberativos para poder avanzar en este tema.

Como estamos convencidos, en virtud de la crisis que mencionamos cuando tratamos el presupuesto, estamos convencidos de que todas las instituciones están abocadas y que cada una va contribuir en sacar a la provincia adelante.

Expongo estas consideraciones y decir que la provincia siempre ha estado, y cuando se habla de no cobrar al Estado o cobrar al Estado es lo mismo que te estés cobrando a vos mismo. No creo que sea tanta pérdida en ese sentido porque también existen los convenios de parte de deuda de cada uno de los estados con los mismos estados. Esas son las

consideraciones que quería hacer.

Le digo al legislador Rubinos que, obviamente, no queremos una doble imposición en ese sentido. Sabemos que desde el año 95, no tenemos la valuación fiscal correspondiente. Y esa valuación fiscal se puede hacer tranquilamente y la va hacer la agencia provincial que hace poco votamos. Muchas gracias, presidente.

Sr. BLANCO.— Pido la palabra.

Señor presidente: Lo que sucede -y lo dijimos ayer respecto a esto- es que por la Ley 236 del exterritorio, en su momento, el exterritorio le cedió a los municipios, la percepción de los impuestos a las patentes y el inmobiliario.

La Constitución Provincial, en su régimen municipal, estableció la autonomía de cada uno de los municipios, en el caso de Ushuaia y de Río Grande, y ellos dictaron su propia Carta Orgánica. La Carta Orgánica de Río Grande incluye, dentro del tesoro municipal, el impuesto inmobiliario.

Y ya hubo presentaciones en gobiernos anteriores, en las que se pretendió desde el gobierno provincial -no en el caso del impuesto inmobiliario sino en el del impuesto patente automotor- que lo cobre la provincia y que los copartícipe.

Mi duda al respecto es que, formando parte de la Carta Orgánica -y si bien una ley provincial está en la supremacía sobre la carta municipal- si algún concejal o Concejo Deliberante, o algún intendente firmará un convenio que vaya en contra de lo que dice la Carta Orgánica.

En el caso de Río Grande, hay un artículo específico que impide la resignación de algún tipo de impuestos que formen parte del tesoro municipal. Creo que este convenio por lo menos en esa ciudad no será posible.

Es cierto que con esto se está cambiando el impuesto inmobiliario, y por eso el Estado provincial no cobrará sobre el Estado provincial. Pero tengo mis dudas porque el impuesto inmobiliario -como decía- está cedido a los municipios. Entonces, ahora, se le está quitando al municipio esa facultad que oportunamente se otorgó, cuando era exterritorio, producto de un convenio que luego se ratificó en la Carta Orgánica.

Reitero, la duda es si el Concejo Deliberante o intendente de Río Grande, -independientemente de quien sea la persona o el partido político- van avanzar en contra de su Carta Orgánica municipal, con lo cual el convenio nunca se firmaría.

También es cierto que el municipio va a perder recursos porque coincido en que el Estado provincial no se cobrará el impuesto a sí mismo, pero cuando el impuesto inmobiliario era municipal sí le cobraba el Estado provincial.

Algunos dirán: “es el mismo Estado”. No, no es el mismo Estado. Una cosa es el Estado municipal y otra el Estado provincial; y más en una constitución como la que tiene Tierra del Fuego, que es esencialmente municipalista.

Tengo mis dudas al respecto, por eso acompañé el voto negativo en ese sentido. Nada más, señor presidente.

Sr. VILLEGAS.— Pido la palabra.

Señor presidente: En respuesta a lo que decían los legisladores Furlan y Blanco, del modo en el que está redactado, y más allá de las consideraciones y las voluntades políticas que puede llegar a existir en los intendentes, lo cierto es que hay un marco constitucional que tiene jerarquías por encima aún de la ley provincial.

La Constitución de la ciudad de Ushuaia en determinados aspectos, y más allá de lo que se puede llegar a interpretar, tiene jerarquías constitucionales que están por encima de una ley provincial; porque la Carta Orgánica municipal se dictó en orden, -como bien lo decía el legislador Blanco- al régimen municipal, que está previsto en la Constitución de la provincia.

Desde el Movimiento Popular Fueguino, siempre, en mi partido -al que orgullosamente pertenezco, señor presidente- hemos tenido como bandera política la defensa de las autonomías municipales. Y esa defensa tiene una relación directa con la defensa de la autonomía financiera y económica, y en cierto modo de la autonomía para manejar sus propios tributos, porque era un Estado de tercer grado.

Del modo en que está redactado, por ejemplo el artículo 32, cuando menciona -como

bien dijo el legislador Furlan- que se deben adherir los municipios, a la vez hace referencia a que los municipios deben dejar de cobrar los impuestos creados por las ordenanzas locales.

Por otra parte, en el artículo 33 dice: " establecer que la provincia podrá designar como agentes de percepción y o de fiscalización del impuesto a los municipios de la provincia". Es como que se está subvirtiendo a lo que hoy existe en realidad y que es un derecho de la ciudad de Ushuaia, que tiene derecho al cobro del impuesto inmobiliario. Y que se hace porque está legislado en materia municipal y por ordenanza. Y que tiene su génesis -como lo dijo el legislador Blanco- en la Ley 236 y en la parte del Régimen Municipal de la Constitución de la provincia, que está plasmada en forma clara y que ha sido defendida en particular por este constituyente en el momento de la Convención Municipal.

Entonces, más allá de la voluntad política, más allá de que se requiera o no la adhesión de parte de los concejos deliberantes, lo cierto es que ni siquiera hemos tenido la oportunidad de hablar con los concejales del Movimiento Popular Fueguino para poder discutir y debatir un tema tan neurálgico como es el de meter mano de forma directa en un sistema de coparticipación de recursos tributarios que son fundamentales para la provincia pero también para la Municipalidad de la ciudad de Ushuaia.

Y más allá, señor presidente, de que las municipalidades de la provincia están -como sabemos todos- bajo los colores políticos del Frente para la Victoria, defiendo a la Municipalidad de Ushuaia por ser miembro del Movimiento Popular Fueguino, porque mi partido se ha destacado siempre en organizar y en defender las autonomías municipales y porque creo que, desde el punto de vista constitucional, así corresponde. Nada más.

Sr. PRESIDENTE.— Por Secretaría se da lectura al Asunto Nº 12/16.

- 7 -

Asunto Nº 12/16

Régimen de Jubilaciones y Pensiones para el Personal de los tres Poderes del Estado

Moción

Sr. BILOTA IVANDIC.— Pido la palabra.

Señor presidente: Solicito constituir la Cámara en comisión.

Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración la moción del legislador Bilota Ivandic.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.

Sec. LEGISLATIVA.— "La Legislatura de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur Sanciona con fuerza de ley

Artículo 1º.- Sustitúyese el artículo 8° de la Ley provincial 561, por el siguiente texto:

'Artículo 8º.- Los aportes personales y las contribuciones a cargo de los empleadores serán obligatorios y equivalentes a un porcentaje de la remuneración determinada de conformidad con las normas de la presente ley, y cuyo monto será el que fije el Poder Ejecutivo de acuerdo con las necesidades económico-financieras del sistema. Los aportes personales serán del 14% para las jubilaciones ordinarias y del 16% para las jubilaciones previstas por los artículos 35, 35bis, 35ter y 38; las contribuciones patronales serán 16%.

El pago de los aportes y contribuciones será obligatorio para todo el personal a partir de los 16 años de edad, se realizará sobre el total de la remuneración determinada, sin existir monto máximo'.

Artículo 2º.- Sustitúyese el artículo 15 de la Ley provincial 561, por el siguiente texto:

'Artículo 15.- A los efectos de establecer los aportes y contribuciones correspondientes a servicios honorarios, se considerará devengada la remuneración que para iguales o similares actividades rigió en las épocas que se cumplieron. El aporte personal y la contribución patronal estarán a cargo del empleador'.

Artículo 3º.- Sustitúyese el artículo 18 de la Ley provincial 561, por el siguiente texto:

'Artículo 18.- Al solo efecto de acreditar el mínimo de servicios necesarios para el logro de la jubilación ordinaria, podrán compensar el exceso de edad con la falta de servicios, en la proporción de dos años de edad excedente por uno de servicios faltantes'.

Artículo 4º.- Sustitúyese el artículo 21 de la Ley provincial 561, por el siguiente texto:

'Artículo 21.- Tendrán derecho a la jubilación ordinaria los afiliados de ambos sexos que hayan cumplido 60 años de edad y acrediten treinta 30 años de servicios computables en uno o más regímenes jubilatorios comprendidos en el sistema de reciprocidad jubilatoria.

Estos beneficios se acuerdan a aquellos agentes que se hayan desempeñado durante un período mínimo de 20 años, dentro de las administraciones comprendidas en el presente régimen, computados a partir de enero de 1985'.

Artículo 5º.- Sustitúyese el artículo 22 de la Ley provincial 561, por el siguiente texto:

'Artículo 22.- Tendrán derecho a la jubilación por edad avanzada los afiliados que:

a) hayan cumplido 70 años de edad sin distinción de sexo;
b) acrediten 20 años de servicio con aportes computables en las administraciones comprendidas en la presente, debiendo encontrarse en funciones al solicitar el beneficio; y
c) no gocen de jubilación o retiro nacional, provincial o municipal, sea el mismo contributivo o no contributivo, ni tengan derecho a jubilación ordinaria en cualquier otro régimen jubilatorio del país.

En el caso de cumplir la edad requerida para obtener la jubilación por edad avanzada y se hubieran desempeñado durante un período mínimo de 15 años dentro de las administraciones comprendidas en el presente régimen tendrán derecho a la jubilación por edad avanzada mínima, debiendo encontrarse el causante en funciones al solicitar el beneficio'.

Artículo 6º.- Sustitúyese el artículo 23 de la Ley provincial 561, por el siguiente texto:

'Artículo 23.- Tendrán derecho a la jubilación por invalidez, cualquiera fuera su edad y antigüedad en el servicio, en concordancia con lo establecido en el artículo 34 de la presente norma, los agentes que se incapaciten física o intelectualmente en forma total para el desempeño de cualquier actividad compatible con sus aptitudes profesionales, siempre que la incapacidad se hubiera producido durante la relación de trabajo. La invalidez que produzca en la capacidad laborativa una disminución del 66% o más, se considera total. La posibilidad de sustituir la actividad habitual del afiliado por otras compatibles con sus aptitudes profesionales será evaluada por la autoridad de aplicación teniendo en cuenta su edad, su especialización en la actividad ejercitada, la jerarquía profesional que hubiere alcanzado y las conclusiones del dictamen médico respecto del grado y naturaleza de la invalidez'.

Artículo 7º.- Sustitúyese el artículo 35 de la Ley provincial 561, por el siguiente texto:

'Artículo 35.- Las jubilaciones del personal docente dependiente de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur se regirán por las disposiciones de la presente ley y las particulares que a continuación se establecen:

a) los docentes o profesores con un mínimo de 21 horas cátedra en todas las ramas de la enseñanza, que no correspondan a la gestión privada, dependientes de la provincia Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, al frente efectivo y directo de grado en establecimientos educativos públicos de la provincia, que no correspondan a la gestión privada, y el personal directivo y técnico docente con más de 10 años efectivos y directos al frente de grado en la provincia, obtendrán la jubilación ordinaria al cumplir 25 años de servicios dentro del ámbito de la

educación y 50 años de edad;

b) los docentes de educación especial con más de 10 años efectivos, al frente directo de grado en escuela de educación especial en cualquier jurisdicción y 15 años de servicios en escuelas especiales o diferenciadas en la provincia obtendrán la jubilación ordinaria al cumplir 25 años de servicios en enseñanza especial o diferenciada sin límite de edad'.".

Moción

Sra. MARTÍNEZ.— Pido la palabra.

Señor presidente: Es para modificar el inciso b), donde dice "... al cumplir 25 años..." propongo que diga "al cumplir 20 años de servicios en enseñanza especial o diferenciada sin límite de edad".

Sr. PRESIDENTE.— Se va a leer cómo quedó redactado el inciso b).

Sec. LEGISLATIVA.— "Inciso b) los docentes de educación especial con más de 10 años efectivos al frente directo de grado en escuela de educación especial en cualquier jurisdicción y 15 años de servicios en escuelas especiales o diferenciadas en la provincia obtendrán...".

Sra. MARTÍNEZ.— Pido la palabra.

Señor presidente: Estamos hablando del inciso b).

Sr. PRESIDENTE.— Sí, del inciso b); estamos leyendo eso.

Sec. LEGISLATIVA.— "...obtendrán la jubilación ordinaria al cumplir 20 años de servicios en enseñanza especial o diferenciada sin límite de edad;

c) el personal no comprendido en los incisos anteriores del presente artículo, con 15 años de servicios docentes en la provincia, que no correspondan a gestión privada, obtendrán su jubilación ordinaria al cumplir 30 años de servicios en el ámbito docente y 55 años de edad;

d) aquellos docentes que con 55 años de edad no reúnan las condiciones de años de aportes establecidas en el inciso a) del presente artículo podrán optar por acogerse al beneficio previsional debiendo:

d.1) acreditar 10 años de servicio efectivos frente al grado en establecimientos educativos públicos de la provincia, que no correspondan a gestión privada;

d.2) haber cumplido un mínimo de 15 años de servicios en la docencia con aportes a la caja provincial;

d.3) una vez obtenido el beneficio, aportar mensualmente el importe equivalente a los aportes y contribuciones que correspondan al monto actualizado por el que haya obtenido el beneficio, hasta alcanzar 25 años de aportes efectivos a la caja provincial;

e) los requisitos de aportes efectivos a la caja provincial serán, en todos los casos, de 20 años como mínimo, siendo computables para completar los restantes años de servicios aquellos aportes a regímenes jubilatorios comprendidos en el sistema de reciprocidad;

f) los servicios prestados en escuelas de ubicación desfavorable con residencia permanente, se computarán a razón de cuatro por cada tres meses de servicios efectivos. Se consideran a los fines de la presente ley como 'escuelas de ubicación desfavorable', aquellas instaladas o ubicadas fuera de los radios urbanos y suburbanos de las ciudades y comunas de la provincia;

g) para el personal docente regirá el haber jubilatorio móvil determinado en el inciso b.1), del artículo 43, o en el inciso b.1), del artículo 43bis, según corresponda;

h) a los efectos jubilatorios se considerarán todas las remuneraciones que el docente perciba regularmente como asignación por cargos, funciones diferentes, prolongación de jornada, bonificación por ubicación y antigüedad. El descuento jubilatorio y la contribución correspondiente se efectuará sobre estas remuneraciones.

Artículo 8º.- Sustitúyese el artículo 35 bis de la Ley provincial 561, por el siguiente texto:

Artículo 35 bis.- Las jubilaciones de personal de radiología dependientes de la provincia de Tierra del Fuego se regirán por las disposiciones de la presente ley y las particulares que a continuación se establecen...".

Sra. MARTÍNEZ.— Pido la palabra.

Señor presidente: El inciso g) es para anular lo del artículo 43 bis, que refiere a los 180 meses, por favor.

Sr. PRESIDENTE.— Se va a leer como queda redactado el inciso g).

Sec. LEGISLATIVA.— "Inciso g) para el personal docente regirá el haber jubilatorio móvil determinado en el inciso b.1) del artículo 43.".

Continúo:

"a) los médicos radiólogos dependientes de la provincia de Tierra del Fuego, en la atención directa a pacientes obtendrán....".

Sra. URQUIZA.— Pido la palabra.

Señor presidente: El inciso f) dice: "los servicios prestados en escuelas de ubicación desfavorable con residencia permanente, se computarán a razón de cuatro por cada tres meses" ¿o años? Hay que corregir porque el texto dice "meses".

Sr. PRESIDENTE.— Se da lectura al inciso f), como queda redactado.

Sec. LEGISLATIVA.— "Inciso f) los servicios prestados en escuelas de ubicación desfavorable con residencia permanente, se computarán a razón de cuatro por cada tres años de servicios efectivos. Se consideran a los fines de la presente ley como 'escuelas de ubicación desfavorable', aquellas instaladas o ubicadas fuera de los radios urbanos y suburbanos de las ciudades y comunas de la provincia.".

Sr. PRESIDENTE.— Continuamos con la lectura del artículo a que se estaba haciendo mención anteriormente.

Sec. LEGISLATIVA.— "Inciso a) los médicos radiólogos dependientes de la provincia de Tierra del Fuego, en atención directa a pacientes, obtendrán la jubilación ordinaria al cumplir, dentro del ámbito del servicio de radiología, 25 años de servicios sin límite de edad;

b) el personal que desempeñe tareas de técnico radiólogo, sea cual fuere su título, en atención directa a pacientes, obtendrá la jubilación ordinaria al cumplir....".

Sra. MARTÍNEZ.— Pido la palabra.

Señor presidente: El inciso h) del mismo artículo...

Sr. PRESIDENTE.— ¿El artículo 7º?

Sra. MARTÍNEZ.— Sí.

Sr. PRESIDENTE.— ¿Cuál es la modificación, legisladora?

- Hablan varios a la vez.

Sra. MARTÍNEZ.— No se leyó el inciso h).

Sr. PRESIDENTE.— Se da lectura al artículo 7º, inciso h).

Sec. LEGISLATIVA.— "Artículo 7º, inciso h), a los efectos jubilatorios se consideran todas las remuneraciones que el docente perciba regularmente, como asignación por cargos, funciones diferentes, prolongación de jornada, bonificación por ubicación y antigüedad. El descuento jubilatorio y la contribución correspondiente se efectuará sobre estas remuneraciones.". Artículo 8º.- Sustitúyese el artículo 35 bis de la Ley provincial 561, por el siguiente texto:

'Artículo 35 bis.- Las jubilaciones de personal...'.

¿Continúo leyendo, presidente?

Sr. PRESIDENTE.— Continúe desde el inciso b) que había quedado pendiente.

Sec. LEGISLATIVA.— "b) el personal que desempeñe tareas de técnico radiólogo, sea cual fuere su título, en atención directa a pacientes, obtendrá la jubilación ordinaria al cumplir, dentro del ámbito del servicio de radiología, 25 años de servicios sin límite de edad;

c) para el trabajo de radiología regirá el haber jubilatorio móvil determinado en el inciso b.1), del artículo 43, o en el inciso b.1), del artículo 43bis, según corresponda...".

Sr. BLANCO.— Pido la palabra.

Señor presidente: Hay que hacer la corrección como en el artículo anterior, inciso b.1), del artículo 43, y el resto se debe tachar porque habla de los 180 meses.

Sr. PRESIDENTE.— Se leerá cómo queda redactado el inciso c).

Sec. LEGISLATIVA.— "Inciso c) para el trabajo de radiología regirá el haber jubilatorio móvil determinado en el inciso b.1), del artículo 43;

d) los requisitos de aportes efectivos a la caja provincial serán de 20 años como mínimo, siendo computables para completar los 25 años de servicios a aquellos aportes a regímenes jubilatorios comprendidos en el sistema de reciprocidad, debiéndose demostrar que se realizaron las tareas en la especialidad radiológica y en atención directa a pacientes.

Una vez obtenida la jubilación en los términos del presente artículo no podrán desarrollar tareas vinculadas a la radiología, ya sean estas bajo relación de dependencia pública o privada, ni en forma autónoma.".

Artículo 9°.- Incorpórase el artículo 35 ter a la Ley provincial 561, con el siguiente texto:

'Artículo 35 ter.- Las jubilaciones de los profesionales que se desempeñen en atención directa a pacientes, conforme a la reglamentación que se dicte, en los hospitales y centros de atención primaria de salud dependientes del Ministerio de Salud de la provincia Tierra del Fuego se regirán por las disposiciones de la presente ley y las particulares que a continuación se establecen:

a) obtendrán la jubilación ordinaria al cumplir, dentro del ámbito del servicio de salud, 25 años de servicios y 55 años de edad;

b) los requisitos de aportes efectivos a la caja provincial serán de 20 años como mínimo, siendo computables para completar los 25 años de servicios aquellos aportes a regímenes jubilatorios comprendidos en el sistema de reciprocidad, debiéndose demostrar que se realizaron en hospitales o centros de salud dependientes del sector público nacional, provincial, municipal o comunal.

Una vez obtenida la jubilación en los términos del presente artículo no podrán desarrollar tareas en hospitales o centros de salud públicos o privados, salvo las de carácter honorífico o de consejeros, según reglamentación que se dicte'.

Artículo 10.- Sustitúyese el artículo 38 de la Ley provincial 561, por el siguiente texto:

'Artículo 38.- Los servicios prestados en tareas penosas, riesgosas, insalubres o determinantes de vejez o agotamiento prematuro, declaradas tales por la autoridad competente conforme la legislación vigente, se computarán a razón de cinco años por cada cuatro de servicios efectivos. El personal comprendido en el presente artículo obtendrá la jubilación ordinaria al cumplir 50 años de edad, computando 30 años de servicios y debiendo acreditar un mínimo de 20 años en dichas tareas en la administración provincial.

Una vez obtenida la jubilación en los términos del presente artículo no podrán desarrollar tareas penosas, riesgosas, insalubres o determinantes de vejez o agotamiento prematuro, declaradas tales por la autoridad competente conforme la legislación vigente, ya sean estas bajo relación de dependencia pública o privada, ni en forma autónoma'.

Artículo 11.- Sustitúyese el artículo 40 de la Ley provincial 561, por el siguiente texto:

'Artículo 40.- Para tener derecho a cualquiera de los beneficios que acuerda la presente ley el afiliado debe reunir los requisitos necesarios para su logro encontrándose en actividad en alguno de los tres poderes del Estado provincial, sus municipalidades y comunas, entes autárquicos y descentralizados y sociedades con participación mayoritaria estatal, en cualquiera de sus manifestaciones; salvo para el caso de la jubilación ordinaria, la que se otorgará al afiliado, reuniendo los restantes requisitos para el logro del beneficio, si hubiere cesado en la actividad en el ámbito del Estado provincial dentro de los dos años inmediatamente anteriores a la fecha en que se cumplió la edad requerida para la obtención de esta prestación'.

Artículo 12.- Sustitúyese el artículo 41 de la Ley 561, el que quedará redactado de la siguiente

manera:

'Artículo 41.- Las prestaciones se abonarán a los beneficiarios a partir de:

a) las jubilaciones ordinarias, por edad avanzada o por invalidez, desde el día en que se hubieren dejado de percibir remuneraciones del empleador, excepto para la salvedad prevista en la última parte del artículo 40, en que se pagarán a partir de que se cumplió la edad requerida respectivamente;
b) la pensión, desde el día de la muerte del causante o de la declaración judicial de su fallecimiento presunto, excepto en los supuestos previstos en el artículo 28, que se pagarán a partir de la fecha de la solicitud.

La caja no hará efectivo el pago de haber previsional hasta tanto no se acredite el cese definitivo del agente en el desempeño de sus funciones. No obstante dará curso a las solicitudes de reconocimientos de servicios en cualquier momento en que sean presentadas sin exigir que se justifique la iniciación del trámite jubilatorio.

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, cuando el afiliado reuniere los requisitos para obtener el beneficio, podrá optar, en el momento de la solicitud para que el cómputo se cierre a esa fecha, aunque no hubiere cesado en la actividad. Esta opción es irrevocable y los servicios prestados entre la fecha de solicitud y la de cese no darán derecho a reajuste o transformación alguna.”.

Artículo 13.- Sustitúyese el artículo 43, de la Ley 561, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 43.-.”.

Sr. BLANCO.— Pido la palabra.

Señor presidente: Donde dice “sin perjuicio en el párrafo anterior” y habla de los “requisitos para obtener el beneficio, podrá optar, en el momento de la solicitud para que el cómputo se cierre a esa fecha, aunque no hubiere cesado en la actividad”, ¿me lo pueden explicar? porque la verdad no entiendo lo que quieren decir. Por ahí estoy medio dormido...

Sra. MARTÍNEZ.— Pido la palabra.

Señor presidente: Lo que no entiende el legislador, a ver si puedo... “Esta opción es irrevocable y los servicios prestados entre la fecha de solicitud y la del cese no darán derecho a reajuste o transformación alguna.”.

Sr. PRESIDENTE.— No, no, no; no está hablando de eso. Está hablando del último párrafo del artículo anterior que fue leído.

Sra. MARTÍNEZ.— Lo que dice en este artículo es que el beneficiario puede optar independientemente, sin haber cesado, para que se cierre el cómputo, seguir trabajando, y que no le dé derecho al reajuste.

“Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior cuando el afiliado reuniere los requisitos para obtener el beneficio podrá optar, en el momento de la solicitud para que el cómputo se cierre en esa fecha aunque no hubiere cesado en la actividad” ¿Qué quiere decir? Que el trabajador puede continuar trabajando pero no va a tener derecho a un reajuste del haber, y se cierra el cómputo -¿se entiende?-. Se le cierra el cómputo de los servicios para poder obtener la liquidación del haber independientemente de que él continúe en actividad. La continuidad de la actividad no le va a dar derecho al reajuste del haber.

- Hablan varios a la vez.

Sra. MARTÍNEZ.— Vuelvo a leer: “Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, porque en el párrafo anterior dice que “la Caja no hará efectivo el pago del haber previsional hasta tanto no se acredite el cese definitivo del agente en el desempeño de sus funciones”.

No obstante, dará curso a las solicitudes de reconocimiento de servicios, en cualquier momento que sean presentadas, sin exigir que se justifique la iniciación del trámite jubilatorio”.

Sr. BLANCO.— Pido la palabra.

Señor presidente: Perdón, pero me parece que uno puede pedir certificación de servicios independientemente que quiera hacer el trámite de jubilación o no. Me parece que tenía otro objetivo porque este artículo fue modificado.

Sra. MARTÍNEZ.— El artículo fue modificado pero continúa: “sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, cuando el afiliado reuniere los requisitos para obtener -acá estamos hablando de obtener el beneficio, no estoy hablando del reconocimiento de los servicios porque una cosa es obtener un beneficio, y otra es un reconocimiento de servicio-podrá optar, en el momento de la solicitud para el cómputo de cierre a esa fecha, aunque no hubiere cesado en la actividad”. ¿Qué quiere decir, legislador? Que cuando usted inicia el trámite, se le va a liquidar la jubilación con el cierre de cómputo, aunque usted continúe trabajando. O sea, esto va a impedir que usted tenga que pedir un adelanto, por ejemplo, como sucede hoy en el IPAUSS que están pidiendo adelanto de haberes.
Sr. BLANCO.— Me parece que estamos mezclando todo.
Sra. MARTÍNEZ.— Pido un cuarto intermedio así le explico al legislador.
Sr. PRESIDENTE.— Estamos en comisión, por eso no es necesario pasar a un cuarto intermedio.
Sr. BLANCO.— Perdón, legisladora, estamos mezclando una cosa con otra porque cuando yo pido la fijación del haber, yo presento los papeles para jubilarme, presento la documentación para jubilarme; y a partir de hoy, vos me fijás el haber de acá a 10 años hacia atrás. Eso es lo que dice el artículo.

Yo presento la documentación para acceder al beneficio y digo: “a partir de hoy me fijás el haber 10 años para atrás”. Aunque el trámite de la concesión de la jubilación tome un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, cinco meses. Eso dice.
Sra. MARTÍNEZ.— Usted continua trabajando, se cierra la fecha y se le liquida el haber, y la caja le comunica. Eso está diciendo el artículo.
Sr. BLANCO.— Le voy a dar un ejemplo práctico, a ver si entendí bien o no.

Yo mañana cumplo los requisitos para acceder a la jubilación. A lo mejor la jubilación me tarda un año, pero dentro de los 10 años yo obtengo el mejor haber porque hace nueve años atrás tuve cargos altos, y si sigo trabajando tengo un cargo menor. Entonces, lo que le estoy diciendo es “jubíleme hasta acá, y de acá para atrás cuénteme los 10 años, porque me beneficia en la fijación del haber, porque si sigo para adelante voy a percibir una jubilación menor”. ¿Eso quiere decir?
Sra. MARTÍNEZ.— No, esa es una opción. Usted puede solicitar el cómputo del cierre y continuar trabajando hasta que se le liquide el trámite. ¿Se entiende?
Sr. BLANCO.— Sí, sí. Eso sí.
Sra. MARTÍNEZ.— Bueno, es una opción. Usted puede hacerlo o no.

- Hablan varios a la vez.

Sra. URQUIZA.— ...generaría mejorar el haber jubilatorio en el promedio de los 120 meses. Y si está otorgada no se actualiza el haber jubilatorio con el período que sigue trabajando.
Sr. PRESIDENTE.— Seguimos con la lectura del artículo.
Sec. LEGISLATIVA.— “Artículo 13.- Sustitúyese el artículo 43 de la Ley provincial 561, que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 43.- El haber mensual inicial de las prestaciones se determinará de la siguiente forma:

a) Consideraciones generales:

a.1.) a los efectos del cálculo del haber se tomaran los importes de las remuneraciones mensuales que perciban los agentes que detenten las mismas categorías, cargos o funciones desempeñadas por el beneficiario -a valores de la fecha del cálculo- y se multiplicarán por la cantidad de meses en que el beneficiario hubiere laborado en cada una de dichas categorías, cargos o funciones, en los respectivos escalafones, hasta totalizar los 120 meses. La sumatoria de dichos importes se dividirá por 120;

a.2) el importe inicial del haber jubilatorio a percibir por el beneficiario se establecerá multiplicando el monto obtenido por el porcentual previsto en el inciso b) del presente artículo según corresponda;

a.3) el importe resultante, a los efectos de la movilidad prevista en el artículo 46 de la presente ley, será referenciado proporcionalmente a los períodos en los que el agente se haya desempeñado en las categorías, cargos o funciones del respectivo escalafón en los últimos 120 meses anteriores al cese definitivo de servicios;

a.4) para el cálculo se tomarán en consideración los importes de la remuneraciones mensuales, sujetas al pago de aportes y contribuciones excluidos el sueldo anual complementario, las horas extras, las guardias, la bonificacion anual de energia (BAE) y retroactivos devengados en períodos anteriores al computado-, que por todo concepto hubiere percibido el trabajador de uno o más empleadores comprendidos en el régimen de la presente ley;

a.5) en los supuestos en que el trabajador compute menos de 120 meses de servicios dentro de las administraciones del régimen, para la determinación del haber inicial, se tomarán todos los períodos laborados y se completará los 120 meses con la categoría, cargo o función –del respectivo escalafón- en la que se haya desempeñado mayor cantidad de tiempo, la sumatoria dedichos importes, calculada conforme lo previsto en el párrafo anterior del presente artículo, se dividirá por 120. El importe inicial del haber jubilatorio a percibir por el beneficiario se establecerá multiplicando el monto obtenido por el porcentual correspondiente al beneficio en cuestión. Asimismo, a los efectos de la movilidad se tomará la categoría, cargo o función -del respectivo escalafón- en la que mayor tiempo se haya desempeñado el beneficiario.

a.6) en ningún caso las prestaciones previstas en los incisos b.2) y b.3) de presente artículo podrán ser inferiores al 82% del haber que perciba la menor categoría de la Administración Pública provincial...".

Sr. RUBINOS.— Pido la palabra.

Señor presidente: Me quedó una duda en el artículo anterior. Al final dice: "Asimismo, a los efectos de la movilidad se tomará la categoría, cargo o función -del respectivo escalafón- en la que mayor tiempo se haya desempeñado el beneficiario." ¿Esto se refiere a tomar la categoría cómo referencia para el haber jubilatorio?

- Hablan varios a la vez.

Sr. RUBINOS.— ¿Cómo quedaría redactado, en este caso?

Sra. MARTÍNEZ.— Quedaría el inciso "a.3) será referenciado proporcionalmente a los períodos en los que el agente se haya desempeñado en las categorías, cargos o funciones –del respectivo escalafón- en los últimos 120 meses, proporcionalmente".

Sr. RUBINOS.— Perdón, leé completo el a.3), porque dice: "el importe inicial del haber jubilatorio a percibir por el beneficiario se establecerá multiplicando el monto obtenido por el porcentual correspondido…." Entonces, después, diría: "el importe resultante -al que hacíamos referencia- a los efectos de la movilidad prevista...". O sea, que después "del beneficiario en cuestión" va completo el texto del a.3) anterior.

Sr. PRESIDENTE.— Se acercan a Secretaría para ver cómo quedaría redactado ese artículo.

Sr. BLANCO.— El a.5), dice Myriam...

- Hablan varios a la vez.

Sr. PRESIDENTE.— Continuamos con la lectura del artículo.

Sec. LEGISLATIVA.— "a.6) en ningún caso, las prestaciones previstas en los incisos b.2) y b.3) del presente artículo podrán ser inferiores al 82% del haber que perciba la menor categoría de la Administración Pública provincial;

b) monto del haber:

b.1.) jubilación ordinaria: será equivalente al 82% del promedio de la remuneración mensual actualizada sujeta al pago de aportes y contribuciones percibidas por el trabajador en los 120 meses laborados en las administraciones del régimen, anteriores al cese definitivo de servicios;

b.2.) jubilación por edad avanzada: será equivalente al 60% del promedio de la remuneración mensual actualizada sujeta al pago de aportes y contribuciones percibidas por el trabajador en los 120 meses laborados en las administraciones del régimen, anteriores al cese definitivo de servicios.

El haber se bonificará con el 2% de la remuneración por cada año de servicio que exceda el mínimo requerido de 20 años, no pudiendo superar el 82%.

La jubilación por edad avanzada mínima prevista en el artículo 22, último párrafo de la presente ley, será equivalente al 50% del promedio de la remuneración mensual actualizada sujeta al pago de aportes y contribuciones percibidas por el trabajador en 120 meses, laborados en las administraciones del régimen, anteriores al cese definitivo de servicios.

El haber se bonificará con el 2% de la remuneración por cada año de servicio que exceda el mínimo requerido de 15 años, no pudiendo superar el 82%;

b.3) jubilación por invalidez: será equivalente al 82% del promedio de la remuneración mensual actualizada sujeta al pago de aportes y contribuciones percibidas por el trabajador en los 120 meses laborados en las administraciones del régimen, anteriores al cese definitivo de servicios;

b.4) pensión: el equivalente al 75% del haber jubilatorio que goce o le haya correspondido al causante.

Artículo 14.- Sustitúyase el artículo 54 de la Ley provincial 561, por el siguiente texto:

'Artículo 54.- Los empleadores están sujetos, sin perjuicio de lo establecido por otras disposiciones legales o reglamentarias, a las siguientes obligaciones:

a) inscribirse como tales en la caja dentro del plazo de 30 días, a contar de la fecha de iniciación de las actividades;

b) afiliar o denunciar dentro del plazo de 30 días, a contar del comienzo de las relaciones laborales, a los trabajadores comprendidos dentro del presente régimen;

c) dar cuenta de las bajas que se produzcan en el personal, dentro de los 30 días corridos de producida la misma;

d) practicar en las remuneraciones los descuentos correspondientes al aporte personal, depositándolo en la institución bancaria que se indique a la orden de la Caja de Previsión Social de la Provincia de Tierra del Fuego;

e) depositar, en la misma forma indicada en el inciso anterior, las contribuciones a su cargo;

Sr. BLANCO.— Pido la palabra.

Señor presidente: Solamente una aclaración para que no se enoje la legisladora.

Seguramente, esto está hecho pensando que ya la división de las cajas iba a ser efectiva a partir de la (...) con anterioridad a la promulgación.

Habría que poner en el inciso d), “depositándolo en la institución bancaria que se indique “a la orden del IPAUSS o quien en el futuro lo remplace” o algo así.

Sec. LEGISLATIVA.— “d) practicar, en las remuneraciones, los descuentos correspondientes al aporte personal, depositándolo en la institución bancaria que se indique a la orden del IPAUSS o quien en el futuro lo remplace;

e) depositar, en la misma forma indicada en el inciso anterior, las contribuciones a su cargo;

f) deducir de las remuneraciones y abonar a la caja los importes que sean indicados por la caja, por conceptos de préstamos otorgados en la forma y plazo que se fije;

g) remitir a la caja las planillas de sueldos y aportes correspondientes al personal;

h) suministrar todo informe y exhibir los comprobantes y justificativos que requiera la

caja en el ejercicio de sus atribuciones, y permitir las inspecciones, investigaciones, comprobaciones y compulsas que ordene;

i) otorgar a los afiliados y beneficiarios...".

Sra. URQUIZA.— Pido la palabra.

Señor presidente: En estos incisos también nos referimos a la caja. Y hay que modificarlos, va a haber que hacer la aclaración en los incisos f), g), h), j) y k).

Sr. PRESIDENTE.— Se tomó nota de los incisos anteriores. Continúa la lectura.

Sec. LEGISLATIVA.— "i) otorgar a los afiliados y beneficiarios y sus causahabientes, cuando estos lo soliciten, dentro de cada quinquenio y en todos los casos a la extinción de la relación laboral, la certificación de los servicios prestados, remuneraciones percibidas y aportes retenidos y toda otra documentación necesaria para el reconocimiento de servicios u otorgamiento de cualquier prestación;

j) en general, dar cumplimiento en tiempo y forma a toda disposición que la presente ley establece, o que sea dispuesta por el IPAUSS, o quien en el futuro lo remplace; y

k) ninguna autoridad podrá disponer de los fondos del IPAUSS, o quien en el futuro lo remplace, indicados en el artículo 4º de la presente, ingresados o a ingresar, para otra aplicación que la que expresamente asigne la presente ley, bajo pena de ser acusados ante la jurisdicción que corresponda, siendo ello causal de juicio político o exoneración del funcionario responsable'.

Artículo 15.- Sustitúyese el artículo 61 de la Ley provincial 561, por el siguiente texto:

'Artículo 61.- Cuando el personal enunciado en el artículo 1° de la presente ley reuniere los requisitos necesarios para obtener el beneficio jubilatorio en el presente régimen o en alguno de los regímenes comprendidos en el sistema de reciprocidad podrá ser intimado a que inicie los trámites pertinentes. A partir de ese momento podrá continuar en la prestación de su servicio por un período máximo de un año a partir de la intimación respectiva'.

Artículo 16.- Sustitúyese el artículo 62 de la Ley provincial 561, por el siguiente texto:

'Artículo 62.- Las personas que reunieren los requisitos para acceder a la jubilación ordinaria y por edad avanzada, quedarán sujetos a las siguientes normas:

a) para entrar en el goce del beneficio deberá cesar en toda actividad en relación de dependencia, salvo en el supuesto previsto en el artículo 64 de la presente;

b) si reingresara en cualquier actividad en relación de dependencia o función pública ya sea bajo este régimen o cualquier otro, se le suspenderá el goce del beneficio hasta que cese en la actividad, salvo en los casos previstos en el artículo 64 de la presente o que dicha tarea sea realizada en carácter ad honórem; y

c) cualquiera fuera la naturaleza de los servicios computados podrán solicitar entrar en el goce del beneficio continuando o reingresando a la actividad autónoma sin incompatibilidad alguna'.

Artículo 17.- Sustitúyese el artículo 64 de la Ley provincial 561, por el siguiente texto:

'Artículo 64.- Percibirá la jubilación sin limitación alguna, el jubilado que continuare o reingresare a la actividad en los términos del último párrafo del artículo 35 ter, o en cargo docente o de investigación en universidades nacionales o en universidades provinciales o privadas autorizadas a funcionar por el Poder Ejecutivo nacional, o en facultades, escuelas, departamentos, institutos o demás establecimientos de nivel universitario que de ellas dependan. El Poder Ejecutivo provincial podrá extender esa compatibilidad a los cargos docentes o de investigación científica desempeñados en otros establecimientos o institutos oficiales de nivel universitario, científico o de investigación, como así también establecer en los supuestos contemplados en este párrafo y en el anterior, límites de compatibilidad con reducción del haber de los beneficios. La compatibilidad establecida en este artículo es aplicable a los docentes e investigadores que ejerzan una o más tareas'.

Artículo 18.- Sustitúyese el artículo 67 de la Ley provincial 561, por el siguiente texto:

'Artículo 67.- El jubilado que omitiere la denuncia en el plazo indicado en el artículo anterior será pasible de las siguientes medidas:

a) será suspendido en el goce del beneficio a partir del momento en que el IPAUSS, o quien en el futuro lo remplace, tome conocimiento de su reingreso a la actividad; y
b) deberá reintegrar actualizado y con intereses lo percibido indebidamente en concepto de haberes jubilatorios.

El jubilado que incumpliera con lo establecido en los artículos 35 bis, 35 ter y 38 de la presente ley será pasible de las siguientes medidas:

a) será suspendido en el goce del beneficio a partir del momento en que el IPAUSS, o quien en el futuro lo remplace, toma conocimiento de su incumplimiento; y
b) deberá reintegrar actualizado y con intereses lo percibido en concepto de haberes jubilatorios por el período en que se haya acreditado el incumplimiento'.

Artículo 19.- Sustitúyase el artículo 70 de la Ley provincial 561, que quedará redactado de la siguiente manera:

'Artículo 70.- El beneficiario de prestaciones de este régimen que reingrese a cualquier actividad en relación de dependencia o autónoma tiene la obligación de efectuar los aportes que en cada caso correspondan, los nuevos aportes no darán derecho a reajustes o mejoras en las prestaciones originarias otorgadas en el marco de la presente ley.

Los aportes y contribuciones que ingresen al sistema como consecuencia de lo establecido en el párrafo precedente son recursos del IPAUSS, o quien lo remplace en el futuro, quedando los mismos comprendidos en los incisos c) y d) del artículo 4º; y serán destinados al cumplimiento de los fines previstos en el artículo 3º'.

Artículo 20.- Transitoriamente para el logro de la prestación, únicamente las edades y los años de servicio establecidos en el artículo 21 de la Ley provincial 561, conforme ha quedado modificado por la presente ley, se incrementarán gradualmente de acuerdo a la siguiente escala:

	Edad		Años de Servicio	
A partir del año:	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre
2017	51	56	26	30
2019	52	57	27	30
2021	53	58	28	30
2023	54	59	29	30
2025	55	60	30	30
2027	56	60	30	30
2029	57	60	30	30
2031	58	60	30	30
2033	59	60	30	30
2035	60	60	30	30

Artículo 21.- Transitoriamente para el logro de la prestación...".

Sr. BLANCO.— Pido la palabra.

Señor presidente: Solamente para aclarar que nosotros vamos a acompañar parcialmente este artículo porque sostenemos que el hombre es a los 60 y la mujer a los 55. Era para hacer esa aclaración. Nada más.

Sr. PRESIDENTE.— Continuamos con la lectura del artículo.

Sec. LEGISLATIVA.— "Artículo 21.- Transitoriamente para el logro de la prestación, únicamente las edades y los años de servicio, establecidos en el artículo 22 de la Ley

provincial 561, conforme ha quedado modificado por la presente ley, se incrementarán gradualmente de acuerdo a la siguiente escala:

	Edad		Años de Servicio	
A partir del año	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre
2017	61	66	16	16
2019	62	67	17	17
2021	63	68	18	18
2023	64	69	19	19
2025	65	70	20	20
2027	66	70	20	20
2029	67	70	20	20
2031	68	70	20	20
2033	69	70	20	20
2035	70	70	20	20

Sr. RUBINOS.— Pido la palabra.

Señor presidente: Quiero hacer la aclaración que nosotros creemos que tiene que haber una diferencia entre la edad del hombre y la mujer pero, además, al igual que en el artículo anterior, nosotros habíamos estado trabajando en un artículo que planteaba que a partir del año 2020 las jubilaciones iban a ser calculadas con los últimos 180 meses para poner el haber jubilatorio inicial.

La verdad, nosotros planteábamos en las reuniones que estamos tomando decisiones a futuro -que en parte perjudica al empleado público que hoy está trabajando, y que logramos que este artículo no esté más- pero sin tener claro cuál va a ser la situación económica. Hoy estamos tomando medidas importantes que, desde hace muchos años eran necesario tomar, para sanear el instituto.

En ese caso, que estábamos hablando antes, que a partir del año 2020 tengan en cálculo de jubilación con los 180 meses, nosotros planteamos que esa decisión se puede tomar en el año 2019 o 2020. Hay tiempo para tomarla, y creo que lo mismo pasa acá.

Hablamos de tomar una decisión de agregarle cinco años a la mujer para igualar a la edad del hombre a partir de 2025, faltan 10 años para eso. Yo creo que, en este momento, si la caja no puede en 2023 seguir dándole una jubilación a la mujer cinco años antes que al hombre, podrá tomar una decisión, en ese momento, la Legislatura y cambiar las edades jubilatorias.

Me parece que no hace falta hacerlo ahora. Es nada más que una opinión nuestra.

Sra. MARTÍNEZ.— Pido la palabra.

Señor presidente: Es para comentar que la propuesta que estamos generando con este proyecto es a futuro. El impacto, por supuesto, lo vamos a tener a mediano, a corto y a largo plazo. Y lo estamos haciendo porque existen estudios actuariales correspondientes al año 2010-2040, del doctor Melinsky, que es un actuario muy reconocido.

También tenemos un informe del Tribunal de Cuentas, y tenemos también la justificación -después cuando me toque exponer, les contaré cuál es la decisión- de por qué se ha aumentado la edad y también por qué se unificaron las edades del hombre y la mujer. Esta es una opinión del legislador Rubinos, que respeto.

Sr. PRESIDENTE.— Seguimos con la lectura del proyecto.

Prosec. ADMINISTRATIVA.— “Artículo 22.- Transitoriamente para el logro de la prestación, únicamente los años de servicio establecidos en el artículo 35, inciso b), de la Ley provincial 561, conforme ha quedado modificado por la presente ley, se incrementarán gradualmente de acuerdo a la siguiente escala:

A partir del año	Años de Servicio
2017	21
2019	22
2021	23
2023	24
2025	25

Artículo 23.-Transitoriamente para el logro de la prestación, únicamente las edades y los años de servicio establecidos en el artículo 35, inciso c), de la Ley provincial 561, conforme ha quedado modificado por la presente ley, se incrementarán gradualmente de acuerdo a la siguiente escala:

	Edad		Años de Servicio	
A partir del año	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre
2017	49	54	26	30
2019	50	55		

Sr. RUBINOS.— Pido la palabra.

Señor presidente: En el artículo 22 se establece cómo paulatinamente van subiendo los años de servicio en el artículo 35, inciso b), para llegar a los 25 años. En realidad, nosotros habíamos modificado el artículo 35, inciso b), para que se mantenga en 20 años. Me parece que ese artículo no tendría que existir. ¿Puede ser?

Sr. PRESIDENTE.— ¿Cuál sería la propuesta?

Sr. RUBINOS.— Eliminar el artículo 22, porque en el artículo 35, inciso b), la jubilación es con 20 años de servicio, no con 25.

Sra. MARTÍNEZ.— Sí, queda tal cual.

- Hablan varios a la vez.

Sr. PRESIDENTE.— Continúa la lectura del proyecto.

Prosec. ADMINISTRATIVA.— "Artículo 22.- Transitoriamente para el logro de la prestación, únicamente las edades y los años de servicio establecidos en el artículo 35, inciso c), de la Ley provincial 561, conforme ha quedado modificado por la presente ley, se incrementarán gradualmente de acuerdo a la siguiente escala:

	Edad		Años de Servicio	
A partir del año	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre
2017	49	54	26	30
2019	50	55	27	30
2021	51	55	28	30
2023	52	55	29	30
2025	53	55	30	30
2027	54	55	30	30
2029	55	55	30	30

Artículo 23.- Transitoriamente para el logro de la prestación, únicamente los años de servicio establecidos en el artículo 35 bis, de la Ley provincial 561, conforme ha quedado modificado por la presente ley, se incrementarán gradualmente de acuerdo a la siguiente escala:

A partir del año	Años de Servicio
2017	21
2019	22
2021	23
2023	24
2025	25

Artículo 24.- Transitoriamente para el logro de la prestación, únicamente las edades de las mujeres establecidas en el artículo 35 ter, de la Ley provincial 561, conforme ha quedado redactado por la presente ley, se incrementará gradualmente de acuerdo a la siguiente escala:

A partir del año	Edad
	Mujer
2017	51
2019	52
2021	53
2023	54
2025	55

Artículo 25.- Hasta 31 de diciembre de 2025 tendrán derecho a jubilarse extraordinariamente los afiliados que:

a) hayan cumplido 50 años de edad las mujeres y 55 años de edad los hombres;
b) hayan ingresado a la Administración Pública provincial antes del 31 de diciembre de 2015;
c) se hallen desempeñando funciones, dentro de las administraciones indicadas en la presente ley, al momento de cumplir los requisitos necesarios para su logro;
d) acrediten 30 años de servicios computables en uno o más regímenes jubilatorios comprendidos en el sistema de reciprocidad de los cuales un mínimo de 20 años deben ser dentro de las administraciones comprendidas en el presente régimen, computados a partir de enero de 1985;
e) el importe inicial del haber jubilatorio a percibir por el beneficiario se establecerá multiplicando el monto obtenido por el porcentual previsto en la siguiente tabla, siendo de aplicación lo establecido en los incisos a.1), a.3) y a.4), del artículo 43, de la Ley provincial 561, conforme ha quedado modificado por la presente ley:
f)

Edad		
Mujer	Hombre	Porcentaje
50	55	65%
51	56	66%
52	57	67%
53	58	68%
54	59	70,00%

Artículo 26.- Con el fin de evaluar y controlar el comportamiento del sistema previsional del presente régimen, el IPAUSS o quien lo remplace en el futuro deberá realizar proyecciones financieras anuales de sus fondos, aportes, contribuciones, prestaciones y gastos, debiendo remitir la misma antes del 31 de agosto de cada año a la Legislatura provincial para su conocimiento. Asimismo trienalmente, deberá presentar en la misma fecha una proyección

financiera de largo plazo.
Artículo 27.- Las disposiciones contenidas en la presente ley no serán de aplicación a jubilaciones ya otorgadas ni a los trámites presentados ante el IPAUSS, siempre que:

a) se haya solicitado el beneficio con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente; y
b) se tenga el derecho para el otorgamiento del beneficio con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente.

Artículo 28.- Los agentes que hayan ingresado a la Administración Pública provincial, al 31 de diciembre del año 1994 inclusive, y acrediten 30 años de aportes efectivos e ininterrumpidos al sistema previsional de la provincia Tierra del Fuego, podrán compensar el exceso de servicios por edad, en la proporción de dos años de servicio excedente por cada uno de edad.
Artículo 29.- Derógase la Ley provincial 721, los artículos 53, 71, 77 y 79 de la Ley provincial 561 y el artículo 12 de la Ley provincial 460.
Artículo 30.- Derógase toda norma que se oponga a la presente ley.
Artículo 31.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.”.

Sr. RUBINOS.— Pido la palabra.

Señor presidente: Hemos estado conversando en las reuniones sobre la entrada en vigencia de estas modificaciones, haciendo referencia a cuando entró en vigencia la ley 742 que, en muchos casos se recalculó el haber jubilatorio con los 24 meses. No sé si quedó claro y si está aclarado en algún artículo o hace falta hacerlo, para no tener dificultad después con que se le quiera calcular el haber jubilatorio a los jubilados de la caja que tienen su haber calculado en base a los 24 meses de su mejor salario.

Por ahí es redundante, pero habíamos conversado en las reuniones previas, colocarlo en algún artículo.

Sr. BLANCO.— Pido la palabra.

Señor presidente: Solicito hacer una aclaración, porque me encontraba a fuera del recinto.

En el artículo 29, ¿qué fecha quedó? “Los agentes que hayan ingresado a la Administración Pública provincial, al 31…”.

Sr. PRESIDENTE.— Es el 94.

Sr. BLANCO.— Gracias.

Moción

Sra. URQUIZA.— Pido la palabra.

Señor presidente: En las charlas que tuvimos, de las cuales surgieron algunas modificaciones, también observamos, en el artículo 1º, los aportes personales, el aporte se incrementa al 14% para las tareas comunes, para las jubilaciones ordinarias. Y para las jubilaciones previstas en los artículos 35, 35 bis, 35 ter y 38 se incrementan al 16%. Pero, a su vez, nos dice que las contribuciones patronales serán, en ambos casos, del 16%.

Nosotros planteamos que, en ambos casos, las contribuciones patronales se incrementen en la misma proporción de los aportes personales; es decir, que para las jubilaciones previstas en los artículos 35, 35 bis, 35 ter y 38 la contribución patronal sea del 18%.

Sr. RUBINOS.— Pido la palabra.

Señor presidente: Lo que está comentando la legisladora Urquiza es así.

En las reuniones previas conversamos sobre la posibilidad de incorporar dos puntos en los casos especiales.

Sra. URQUIZA.— Pido la palabra.

Señor presidente: Le estamos aplicando al empleado un aporte superior, la contribución también debe acompañar.

Y además, al principio de la lectura solicité la aclaración con respecto al artículo 7º, de las jubilaciones docentes, en el inciso f), donde nos referíamos a los servicios prestados en escuelas en ubicación desfavorable con residencia permanente, se computarán a razón de

cuatro por cada tres, consultaba si eran meses o años.
Sr. PRESIDENTE.— Años, se calificó “años”.
Sra. URQUIZA.— Si, lo modificamos por año, pero verificamos que en la ley original (la Ley 761)se refiere a meses.
Sr. PRESIDENTE.— Entonces, el inciso f), del artículo 7º, quedaría, en lugar de “cuatro por cada tres años”, quedaría “cuatro por cada tres meses”. ¿Eso es lo que plantea?
Sra. URQUIZA.— Sí.
Sr. RUBINOS.— Pido la palabra.

Señor presidente: Sobre la duda que tenía, está bien en el ahora artículo 27 está claro que “las disposiciones contenidas en esta ley no serán de aplicación a las jubilaciones ya otorgadas ni a los trámites presentados ante el IPAUSS”.

Mi preocupación era que no se puedan recalcular las jubilaciones ya otorgadas. Entiendo que queda claro acá. Después podríamos dejarlo establecido en la versión taquigráfica.
Sr. PRESIDENTE.— Consulto: hay una propuesta de modificar el porcentaje. Quiero saber desde la bancada oficialista si se acepta esa modificación planteada por la legisladora Urquiza.
Sra. MARTÍNEZ.— Pido la palabra.

Señor presidente: La verdad, me gustaría poder considerar la propuesta de la legisladora pero estamos realmente en una situación económica muy crítica. De seguro, más adelante, la tendremos en consideración.
Sra. URQUIZA.— Pido la palabra.

Señor presidente: Bueno, lo planteo porque entiendo que debe ser así y que, más allá de que en esta misma sesión se vaya a tratar una ley de emergencia previsional -que por supuesto no acompañaremos- esto es la reforma del régimen y no tiene que ver con que el Estado y los municipios estén en una situación delicada. A su vez, también ellos son responsables de la situación del IPAUSS. Así que esta es la propuesta.

Por supuesto, no tenemos los votos necesarios, por lo que no prosperará pero quiero que quede constancia de que esta es nuestra proposición.
Sr. PRESIDENTE.— Se tomará nota de su postura, señora legisladora.
Sra. URQUIZA.— La postura concreta es esta, si no prospera…
Sr. PRESIDENTE.— Hay una moción en comisión, de una modificación, por lo que tomaremos votación.

- Se vota y es negativa.

Sr. PRESIDENTE.— No prospera.

Estamos en comisión.
Sr. LÖFFLER.— Pido la palabra.

Señor presidente: Sí, estamos en comisión. No votaré pero igualmente me parece que es redundante por el principio de la retroactividad, ya que entiendo que aquel que tenga un haber jubilatorio otorgado, previamente a la sanción de esta ley, tiene un derecho adquirido.

- Hablan varios a la vez.

Sr. BLANCO.— Pido la palabra.

Señor presidente:¿Votamos la propuesta de incrementar los aportes patronales?
Sr. PRESIDENTE.— Exactamente y no prosperó.
Sr. BLANCO.— ¿Contó bien?
Sr. PRESIDENTE.— Conté bien, señor legislador. La bancada oficialista no levantó la mano.
Sr. BLANCO.— Ah, ¿no? Bueno.
Sr. PRESIDENTE.— Se pone en consideración, en comisión, el proyecto de ley leído por Secretaría, con las modificaciones introducidas.

- Se vota y es afirmativo.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.

Moción

Sr. BILOTA IVANDIC.— Pido la palabra.

Señor presidente: Pongo en consideración de la Cámara constituir el Cuerpo en sesión.

Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración la moción del legislador Bilota Ivandic.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.

En Sesión

Sr. VILLEGAS.— Pido la palabra.

Señor presidente: Atento a haber disidencias respecto del artículo 1º, solicito que se vote en particular y en general.

Sr. PRESIDENTE.— A los efectos de ordenar, quiero ver cuáles son los artículos en los que hay en disidencias, así tomamos la votación.

Legislador Villegas, ¿cuáles son los artículos en disidencia?

Sr. VILLEGAS.— Del Movimiento Popular Fueguino, es el 1º.

Moción

Sr. RUBINOS.— Solicito un cuarto intermedio.

Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración la moción del legislador Rubinos.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.

- Son las 02:15.
- A las 02:20

Sr. PRESIDENTE.— Se levanta el cuarto intermedio.

Señora Freites, ¿puede tomar asiento que hay que efectuar la votación?

Como hay disidencias, primero vamos a tomar la votación en general y después en particular.

Por Secretaría Administrativa se tomará la votación, en general.

Sec. ADMINISTRATIVO.— Procedo a tomar la votación.

- Votan por la afirmativa los legisladores Bilota Ivandic, Blanco, Carrasco, Freites, Furlan, Gómez, Harrington, Martínez, Romano, Rubinos, Urquiza y Villegas.
- Votan por la negativa los legisladores Boyadjian y Löffler.

Sec. ADMINISTRATIVO.— Resultan 12 votos positivos y dos por la negativa, señor presidente.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado en general.

Se ponen a consideración, en particular, los artículos 2º al 32 -que no tendrían desidencias porque ningún legislador lo manifestó- exceptuados los dos votos que fueron por

la negativa en general y seguramente no van a acompañar en particular.

Se toma votación nominal de los artículos 2º al 32, inclusive.

Sec. ADMINISTRATIVO.— Procedo a tomar la votación.

- *Votan por la afirmativa los legisladores Bilota Ivandic, Blanco, Carrasco, Freites, Furlan, Gómez, Harrington, Martínez, Romano...*

Mociones

Sr. RUBINOS.— Pido la palabra.

Señor presidente: Se está votando mal. ¿Podemos hacer un cuarto intermedio?

Sr. BLANCO.— Pido la palabra.

Señor presidente: Lo que pasa es que nosotros aclaramos que íbamos a votar en forma negativa a la edad similar al hombre y la mujer. Cuando usted dijo que se ponen a votación los artículos 2º al 32, nos incluyó a todos.

Entonces, vamos a pedir -si es posible- la reconsideración del voto en todos los artículos donde haya coincidencia de la edad entre el hombre y la mujer; y en ellos tomen nuestro voto como negativo.

Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración la moción del legislador Blanco, y reconsiderar la votación que estamos llevando adelante.

- *Se vota y es afirmativa.*

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.

¿Legislador, cuál es el otro?

Sr. BLANCO.— Pido la palabra.

Señor presidente: A efecto de no votar artículo por artículo, todos aquellos artículos donde haya coincidencia en la edad del varón y de la mujer, nosotros votamos en forma negativa.

Sr. LÖFFLER.— Pido la palabra.

Señor presidente: Que se deje constancia el voto negativo de la UCR en los artículos que hizo referencia el legislador.

Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración de los señores legisladores la votación, nuevamente con la salvedad.

Sra. URQUIZA.— Pido la palabra.

Señor presidente: Es para adherir, con el legislador Villegas, a la moción de la Unión Cívica Radical. Nosotros también compartimos la diferenciación entre la edad del hombre y la mujer.

Sr. PRESIDENTE.— Se toma votación con las consideraciones del bloque Movimiento Popular Fueguino (Urquiza y Villegas) y Rubinos y Blanco.

Votamos en particular con estas salvedades, de los artículos 2º al 32 inclusive. Se toma votación nominal.

Sec. ADMINISTRATIVO.— Procedo a tomar la votación.

- Votan por la afirmativa los legisladores Bilota Ivandic, Blanco, Carrasco, Freites, Furlan, Gómez, Harrington, Martínez, Romano, Rubinos, Urquiza y Villegas.

Sec. ADMINISTRATIVO.— Resultan 12 votos por la afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado, con las salvedades mencionadas.

Se pone a consideración el artículo 1º. La votación es nominal y se tomará por Secretaría.

Sec. ADMINISTRATIVO.— Procedo a tomar la votación.

- Votan por la afirmativa los legisladores Bilota Ivandic, Carrasco, Freites, Furlan, Gómez, Harrington, Martínez y Romano.
- Votan por la negativa los legisladores Blanco, Rubinos, Urquiza y Villegas

Sec. ADMINISTRATIVO.— Resultan ocho votos por la afirmativa y cuatro por la negativa.
Sr. PRESIDENTE.— Aprobado. Se ha sancionado la norma leída por Secretaria y será comunicada al Poder Ejecutivo.

Moción

Sra. MARTÍNEZ.— Pido la palabra.

Señor presidente: Pido autorización al Cuerpo para leer algunas consideraciones y fundamentar este proyecto, como así también los próximos proyectos con respecto a la división del IPAUSS y a la modificación de la Ley 389 (RUPE).

Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración la moción de la legisladora Martínez, de apartarse del Reglamento para dar lectura a la fundamentación.

-Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.

Sra. MARTÍNEZ.— Señor presidente: “Estamos aquí reunidos tratando un importante paquete de leyes que ha presentado el Ejecutivo. El sistema de seguridad social de la provincia enfrenta una crisis que afecta la sustentabilidad misma del sistema.

Venimos a proponer una reforma que permita resolver los inconvenientes que afectan el funcionamiento, el financiamiento y la fortaleza del sistema.

Hoy es responsabilidad de este nuevo gobierno dar respuesta al problema.

El IPAUSS se encuentra en una situación financiera deficitaria y económicamente inviable para el Estado. Si seguimos así, los trabajadores de hoy no podrán obtener en el futuro su jubilación. Y tampoco nuestros jubilados no solamente no podrán cobrar en tiempo y en forma sino que se van a ver imposibilitados de poder percibir sus jubilaciones.

El IPAUSS acarrea un problema histórico. La intención de este gobierno no es echar culpas ni esquivar responsabilidades, sino gestionar y resolver los problemas de la gente.

Lo dijo con claridad la gobernadora Rosana Bertone, el día de la asunción: Tenemos que mirar hacia el futuro y recordar los sucesivos errores del pasado, debemos aprender y la experiencia vivida es el mejor método para hacerlo.

El Frente para la Victoria ha mantenido siempre una postura muy clara con respecto a lo que se debía hacer en el IPAUSS. Pero también durante estos últimos cuatro años que trabajamos en la Legislatura pensamos -y siempre estuvimos muy presentes con nuestras ideas cuando dijimos- que era el directorio, este cuerpo colegiado el que debía presentar los proyectos en la Legislatura para poder lograr los consensos, para poder trabajar, para poder de alguna manera generar un debate que nos ponga en agenda este tema tan importante.

También cuando se creo la Comisión Ley 865 -por medio de la Ley 865-, la Comisión de Reforma y Evaluación del IPAUSS, este espacio político votó en contra los primeros dos años de esta comisión. Entendíamos que teníamos que trabajar con las comisiones permanentes. Pero a pesar de eso y a pesar de haber perdido y otros, de alguna manera, haber logrado los consensos para crearla, trabajamos con mucha responsabilidad.

Sabíamos que éramos minoría pero también teníamos un compromiso con los trabajadores y con nuestra responsabilidad. Dijimos: “Bueno, qué va a pasar ahora...”

Más de una vez, el directorio fue convocado para poder exponer la situación del IPAUSS. Se presentaron muchos proyectos de sindicatos, de centros de jubilados, de espacios políticos. Durante todo este tiempo nunca pudimos hablar de un proyecto determinado. En cada encuentro, lo único que hacíamos era mirar hacia el pasado, nunca pudimos mirar no solamente el presente sino el futuro de los trabajadores, y el presente y el

futuro de nuestros jubilados.

También quiero recordar cuando comenzamos a trabajar para que la compañera Rosana Bertone fuera nuestra gobernadora de la provincia de Tierra del Fuego.

En toda la campaña le contamos a toda la sociedad, a los trabajadores estatales, a los privados, a los trabajadores que trabajan por cuenta propia, qué era lo que pensábamos con el IPAUSS; qué era lo que queríamos hacer con el IPAUSS.

Era un tema muy importante; a todos les interesaba saber qué es lo que pensaba hacer el Frente. Les contamos que queríamos hacer una reforma integral del sistema. Les contamos que queríamos dividir la obra social de la administración de los recursos previsionales. También les dijimos que queríamos hacer una modificación importante en cuanto al otorgamiento de la Ley 389, que otorga pensiones no contributivas a todas aquellas personas que sufren algún tipo de desamparo con respecto a la vejez y a la discapacidad, y también están incluidos los excombatientes. Todo esto lo dijimos.

Y también nos comprometimos desde el espacio del Frente para la Victoria, que a partir del 28 de junio, independientemente de quien fuera el que ganara las elecciones, -ya sea Federico Sciurano o Rosana Bertone- este espacio iba a presentar un proyecto, por lo menos para, de alguna manera, entablar un debate y los consensos necesarios para poder hablar del tema. Lamentablemente, no pudimos hacerlo.

Presentamos el proyecto que, en tres días récord, fue enviado al archivo. Luego de eso, lamentablemente no quieren hablar del tema, les molesta hablar del tema. Estamos en una situación muy difícil, financiera y económica, el sistema no es sustentable. No es sustentable. Lo que ingresa no alcanza para cubrir los gastos del instituto.

Tenemos un déficit presentado en el presupuesto y confeccionado por el directorio del IPAUSS, de 235 millones de pesos para este año; sumado a un déficit aproximado de 35 a 40 millones mensuales -mensuales-, estaríamos hablando de casi 400 millones de pesos.Todo esto que estoy contando lo vivimos hace cuatro años en esta Casa legislativa.

Y es por eso que, cuando este proyecto fue enviado a archivo, posteriormente hubo reuniones, también en la Comisión 865, donde también los representantes de los trabajadores, muchos -no voy a involucrar a todos- solicitaron que todos los proyectos fueran enviados a archivo.

Lamentablemente, una vez más, no fue por el Frente para la Victoria que no pudimos lograr los consensos para llevar adelante este debate, que hoy estamos haciendo acá, y que, gracias a Dios, hemos logrado los consensos; hemos trabajado muchísimo.

Luego de que el proyecto fue enviado a archivo, se trabajó con los trabajadores, con todos aquellos que quisieron compartir y de, alguna manera, aportar ideas para contribuir y enriquecer este asunto.

Hoy nos toca hacernos cargo, y para ello hemos trabajado con muchísima seriedad. Desde hace varios años, especialistas anunciaban la falta de sustentabilidad en el sistema previsional y esta situación se confirmó en el año 2010, oportunidad en que se conoció el Primer Informe para la Valuación Actuarial del Instituto Previsional Autárquico Unificado de la Seguridad Social, al 31 de diciembre de 2009, realizado por el doctor en Ciencias Económicas, Eduardo Melinsky. El experto actuario, en aquel entonces, al analizar la valuación actuarial de la población activa advertía que puede apreciarse que para todas las poblaciones analizadas, los ingresos por aportes personales y contribuciones patronales, que se obtengan durante la etapa activa son insuficientes para poder abonar las prestaciones previsionales futuras.

Y al referirse a la población ingresante sostenía que puede apreciarse que la población ingresante es deficitaria, atento con que el valor actual de los aportes y contribuciones es insuficiente para abonarlos beneficios previsionales futuros.

En su extenso trabajo, el actuario también sostuvo que la situación financiera actual y su proyección muestran la necesidad de implementar ajustes técnicos al régimen, todo ello sujeto al respectivo análisis jurídico e institucional.

Desde aquella presentación, el sistema solo se ha visto modificado por la sanción de la Ley provincial 947, que incrementó las contribuciones patronales progresivamente, hasta

llegar al 16% actual; hecho que, en modo alguno, alcanzó para cubrir el actual y creciente déficit sino que también lo aumentó. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando aprobamos esa ley, el gobierno no contaba con los recursos. Y qué dijo: Yo no tengo los recursos. Y generó una deuda superior de la que hoy estamos hablando de más de 500 millones de pesos.

También ingresaron, oportunamente, en el año 2013, informes del Tribunal de Cuentas, en la Resolución Plenaria 255 y los informes contables 355 y 376 del año 2013.
A través de estos informes se omitió opinión técnica calificada referida a las razones que estarían provocando el déficit y a la imposibilidad de la sustentabilidad del mismo, resultando de los mismos algunas conclusiones: El sistema no puede sustentarse en las condiciones actuales, es decir, con los extremos de años de aportes y servicios actualmente fijados normativamente, dado que al haberse extendido la expectativa de vida, se quebró la ecuación lógica que debe existir entre la cantidad de años aportados al sistema y la cantidad de años de pasividad.

Por otro lado, se indican como factores generadores del déficit en el régimen previsional, la modificación introducida por la Ley provincial 742, en cuanto a la forma del cálculo del haber, al reducir el prorrateo de los últimos 10 años de aportes a los dos mejores consecutivos de los últimos 10 años. Que, en efecto, ello genera inequidad en el sistema, por cuanto casi el 30% de los beneficiarios han obtenido un cargo o categoría muy por encima del ejercido durante la mayor parte de su vida como aportante al sistema.

Se vislumbra que, desde enero de 2012 a la fecha, existe un déficit previsional que alcanzó su máxima expresión en abril de 2013.

Esta reforma ataca los números centrales de la problemática que estamos describiendo para sentar las bases de un sistema sano y sustentable.

Separar la gestión de la cobertura de enfermedades y accidentes, a través de un nuevo organismo que, con un enfoque en la salud de la población de Tierra del Fuego, pueda administrar el sistema y su financiamiento atendiendo las particularidades del mismo, que lo diferencien en esencia del sistema previsional con otros problemas y con otros plazos de inversión, con otros tiempos para la adquisición de los derechos.

En salud, desde la afiliación misma del trabajador, desde su primer día de trabajo, él y su grupo familiar comienza a demandar prestaciones sanitarias, farmacéuticas; mientras que en el sistema previsional en la generalidad de los casos se accede a las prestaciones tras muchos años de aportes. Los costos de las prestaciones de salud son una variable a considerar.

Proponemos la separación de la administración previsional de la asistencial en materia de salud, creando dos entes autárquicos, independientes, además de coincidir con las mejores prácticas y actuales tendencias en el derecho comparado, redundará en mayor eficacia e inmediatez en la cobertura de contingencias, la vejez, la invalidez y el desamparo por fallecimiento de un afiliado en un caso, de otras muy diferentes como la enfermedad y los accidentes no laborales.

En cuanto a la obra social, se trata de un ente autárquico al que hemos denominado Obra Social de la Provincia de Tierra del Fuego, cuyo objeto principal será el de administrar el sistema médico asistencial destinados a jubilados y pensionados en el régimen previsional provincial y a los trabajadores de todo el Estado provincial, incluidos entes autárquicos y municipalidades.

Será conducido por un presidente y un directorio, que a su vez serán asistidos por un comité asesor.

El directorio estará conformado por el presidente y tres vocales; uno designado por el Poder Ejecutivo; uno elegido por el sector pasivo, y otro por los trabajadores.

El comité asesor estará integrado por los funcionarios de mayor jerarquía de las distintas áreas de la obra social, conjuntamente con los integrantes elegidos por los municipios de Ushuaia, Tolhuin y Río Grande.

En cuanto a la caja previsional, se trata otro ente autárquico al que hemos dado el nombre de Caja de Previsión Social de la Provincia de Tierra del Fuego, cuyo objeto específico será el de administrar el sistema de jubilaciones, retiros y pensiones en el ámbito

de la provincia, destinado a los trabajadores también de los tres poderes del Estado, sus municipalidades, entes autárquicos, excluidas las fuerzas de seguridad dependientes de la provincia, que poseen su caja propia.

Será conducida por un presidente y un directorio, que a su vez serán asistidos por un comité asesor.

El directorio estará conformado por un presidente y tres vocales: uno designado por el Poder Ejecutivo, uno elegido por el sector pasivo y otro por los trabajadores.

El comité asesor estará integrado también por los funcionarios de mayor jerarquía de las distintas áreas de la obra social, y también por los tres integrantes por las municipalidades de Ushuaia, Tolhuin y Río Grande.

Con respecto a la modificación de la Ley 389, se efectúan modificaciones al Régimen Único de Pensiones Especiales, un mecanismo típicamente asistencial que otorga cobertura a quienes no están incluidos en el régimen previsional y de salud general para cubrir las contingencias de vejez y de salud, a personas con discapacidad, a menores desamparados, otorgar prestaciones graciables y a excombatientes.

Esta modificación apunta a la adecuada atención de prestaciones no contributivas, que hoy se financian con recursos de los trabajadores provinciales. En gran medida, este régimen requiere otras pautas de financiamiento, otras pautas de gestión. Aquí la respuesta debe ser rápida y eficiente ya que atiende a las situaciones de desamparo.

Se llevará a 70 años la edad para solicitar pensiones por vejez, teniendo en cuenta que hemos modificado el régimen de la Ley 561 con respecto a la jubilación por edad avanzada.

Hemos incorporado un porcentaje de aporte a la obra social del 5%, teniendo en cuenta que este tipo de pensiones no aporta y no contribuye a la obra social. Según las informaciones que tenemos, hay un gasto mensual de 5.000.000 mensuales Ushuaia, Tolhuin, Río Grande, Buenos Aires y Córdoba. Hay alrededor de 1.500 pensiones no contributivas generarían un aporte de 1.300 millones de pesos.

Para poder tramitar y derivar la pensión por vejez o invalidez al cónyuge o unido de hecho, en el caso de fallecimiento del beneficiario, que no se encuentre desarrollando actividad rentada, ni sea beneficiario de prestaciones de la seguridad social de ningún tipo.

Con respecto a las modificaciones de edades proponemos unificarlas para acceder a los diferentes beneficios previsionales, para mujeres y hombres. Es importante tener en cuenta y analizar que la expectativa de vida se ha incrementado sensiblemente, así lo demuestra un estudio recientemente publicado. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, la expectativa de vida en Argentina, para el año 2013, se estimó en 73 años para los hombres y 80 para las mujeres.Nuestra provincia no escapa a este incremento de la expectativa de vida. El Indec en las “Proyecciones provinciales de población por sexo y grupos de edad 2010-2014” ilustra, que Tierra del Fuego es la provincia con la esperanza de vida, al nacer, más alta a nivel país; para los varones, con 74 años; mientras en el caso de las mujeres se ubica en el cuarto lugar, siendo la misma de 80 años; proyectando que para el año 2040 la esperanza de vida de nuestra provincia alcanzará a los 79 años para los varones y a los 85 años para las mujeres.

Los datos mencionado impactan directamente sobre el sistema, pues claramente se advierte que mientras mayor sea la expectativa de vida, mayor recarga sufrirá el mismo, a la vez que la ecuación de cantidad de años de aportes sobre cantidad de años en que se perciben beneficios se modifica sustancialmente, produciéndose sin duda un desequilibrio que repercute negativamente en las proyecciones.

La equiparación propuesta de las edades jubilatorias entre la mujer y el hombre se formula ya que no existe razón objetiva que permita razonablemente justificar dicha diferencia, incluso así lo refleja la legislación comparada y la de muchos sistemas previsionales de las provincias argentinas; ya que, como se vio, la mujer tiene una expectativa de vida notablemente superior a la del hombre, entendiendo que mantener la diferencia de edad para acceder a una jubilación encubre una situación injusta.

Paso a enumerar los puntos más importantes de la modificación de la Ley 561: Se

lleva la edad para acceder a la jubilación ordinaria a 60 años, unificando la edad entre el hombre y la mujer. Esto se hace de manera progresiva, a razón de incrementar un año de edad cada dos años, de modo que recién en el año 2025 los hombres deberán tener 60 años, y en el año 2035 las mujeres deberán tener 60 años. Es decir, de acá a 10 años, los hombres deberán tener 60 años y , de aquí a 20 años, las mujeres deberán tener 60 años.

Se establece que para el cálculo de la jubilación ya no se tomen los dos mejores años de los últimos 10 sino que se toma el haber actualizado de los últimos 120 meses.

Las modificaciones que se proponen al cálculo del haber jubilatorio se inscriben en la búsqueda de un mecanismo más equitativo que refleje el esfuerzo contributivo de los empleados públicos de la provincia; que premie la portación constante por largos períodos de tiempo al considerar el cálculo los últimos 120 meses.

Lógicamente, se garantizan los derechos adquiridos de quienes han obtenido las presentaciones previsionales, porque si bien la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación, ha sostenido reiteradamente que lo que se incorpora al patrimonio de los beneficiarios es el estatus de jubilado y no el *quantum* del beneficio jubilatorio, mantendremos el 82% móvil ya que el sistema de movilidad es el núcleo duro de los derechos adquiridos, como también lo ha reconocido la jurisprudencia. Como dije, se mantiene el 82% móvil y se toma para su actualización la proporción que ha generado el trabajador durante estos últimos 10 años.

Se exige para todos los casos 20 años de aportes efectivos a la caja provincial.

Se propone la posibilidad de compensar exceso de servicio a los que poseen 30 años de aporte a la caja provincial. Y se mantiene la compensación de exceso de edad con falta de años de servicios.

Se elimina la posibilidad de reajustar el haber por reingreso a la actividad.

Se establece un aporte diferenciado de dos por ciento más para las jubilaciones especiales, docentes, radiólogos, sanidad, tareas penosas, riesgosas, insalubres o determinantes de vejez, que se jubilan con menor edad y menos años de servicio pero hoy aportan lo mismo que los que lo hacen por la jubilación ordinaria.

En cuanto a los regímenes diferenciados, en el caso de los docentes, se fija la edad en 50 años y 25 años de servicios dentro del ámbito de la educación, si tienen 10 años frente al grado.

Los docentes que no cuenten con los 10 años frente al grado, la edad para tener derecho al beneficio es de 55 años.

Se crea un régimen especial, también para los docentes que estando al frente del grado, cumplieron los 55 años de edad cuenten con los 10 años frente al grado, tengan 15 años de servicios pero no hayan completado los 25 años para alcanzar el requisito, lo podrán hacer aportando posteriormente.

En el caso de los médicos y técnicos radiólogos, se establece que, una vez jubilado por este régimen especial, no puedan desarrollar tareas vinculadas a la radiología en sector público ni privado.

Para los trabajadores que realizan tareas penosas, riesgosas, insalubres o determinantes de vejez o agotamiento prematuro, se estableció que deben cumplir 50 años para obtener el beneficio y los años de servicio se computarán a razón de cinco años de servicio por cada cuatro años efectivamente trabajados.

Se crea un régimen especial para los profesionales que se desempeñen en atención directa a pacientes en hospitales y centros de salud de la provincia, quienes se podrán jubilar al cumplir 55 años y tener 25 años de aportes dentro del ámbito de la salud. En este caso, tampoco pueden volver a la actividad salvo que lo hagan como consejeros o en carácter honorífico.

Se establece también una prestación diferencial, para quienes hayan ingresado al Estado provincial, antes del 31 de diciembre de 2015, y tengan 50 años de edad en el caso de las mujeres y 55 años de edad en el caso de los hombres, quienes podrán acceder a esta jubilación con un porcentaje móvil menor al 82%, que va del 65% al 70%, según edad alcanzada y años de aportes.

Es importante destacar que la progresividad que hemos planteado es para todos los regímenes, el incremento de los años es gradual a razón de un año, cada dos.

Finalmente, y con el fin de evaluar y controlar el comportamiento del sistema previsional, se establece que la caja debe realizar anualmente proyecciones financieras de fondo, y cada tres años debe efectuar una proyección a largo plazo para poder detectar anticipadamente cualquier desviación a futuro en el sistema y actuar en consecuencia.

Un Estado ordenado es más eficaz y brinda mejores servicios. Por eso estamos convencidos de que con todas estas propuestas se generará un sistema que brindará mejores servicios y que, por sobre todas las cosas, cumplirá con lo establecido en el artículo 52 de nuestra Constitución Provincial, con los principios de solidaridad, equidad e integrabilidad, garantizando la sustentabilidad.

Quiero hacer, también, una reflexión porque se han dicho muchas cuestiones cuando nosotros presentamos este proyecto y les contamos, a los trabajadores y a la sociedad, qué era lo que pensábamos de aquellas personas que habían accedido a la jubilación con una edad de 42, 44 o 45 años; aquellos que aportaron solamente 10 años al sistema de la provincia.

Hay que pensar que para poder mantener un sistema solidario, una de las cuestiones más importantes es que siempre hay trabajadores que aportan muchísimos años más para sostener un sistema solidario, porque en un sistema solidario se trata de buscar el bien común. Y cuando hablamos buscar el bien común, tenemos que pensar que el sistema también trata de proteger a aquellos que, por diferentes circunstancias, deben jubilarse anticipadamente, por tareas diferenciales, riesgosas, penosas, insalubres por cuestiones que pueden llegar a suceder, tal vez una invalidez, tal vez una pensión.

Entonces no podemos permitir y no se puede dejar a la deriva un sistema cuando debe existir siempre el poder establecer una edad requerida con una cantidad de años de servicios.

Ya finalizando, quiero agradecer a muchos trabajadores que han aportado desde su lugar, a partir de que comenzáramos a trabajar estos temas previsionales y este pensamiento de la división de la obra social y de la caja de jubilaciones.

Necesitamos tener un Estado presente, que se ocupe de todos nuestros problemas, de los trabajadores de la provincia pero también de todos los que habitan esta provincia. Es por eso que lo que estamos presentando hoy es un gran desafío, porque esta problemática de nuestro sistema previsional es una problemática que tiene más de 20 años.

A los legisladores, les agradezco el acompañamiento recibido en la modificación al régimen previsional y les pido que nos acompañen en la división de los institutos y también en la modificación de la Ley 389. Muchas gracias, señor presidente.

Sr. BLANCO.— Pido la palabra.

Señor presidente: En principio, me hubiese gustado que fuese más temprano porque seguramente hubiera estado en mejores condiciones pero no puedo dejar pasar la oportunidad de hacer algunas reflexiones y consideraciones respecto al tema que recién tratamos.

La legisladora preopinante hablaba de la Comisión 865. Debo recordar -y permítanme hacer un poquito de historia- por lo menos desde la Unión Cívica Radical, desde cuándo venimos hablando del Instituto Provincial de Previsión Social. Desde la campaña en la que nos presentamos como candidato a legisladores, allá por 2011.

El primer proyecto que desde nuestro bloque presentamos fue la creación de la comisión, que después se llamó Comisión 865. La iniciativa surgió producto de que dos de quienes integrábamos el bloque en esa oportunidad -y que continuamos en la actualidad- tuvimos la responsabilidad de formar parte del directorio del Instituto Provincial Autárquico Unificado de Seguridad Social. Y, en mi caso, en cinco años y medio como director -en el caso de Liliana Martínez, tres años como representante de los activos- tuve la oportunidad de vivir un montón de circunstancias dentro del instituto.

A su vez, veíamos, producto de la información que se manejaba y de los estudios actuariales que había -y que ahora para algunos son valederos pero hace años atrás no lo

eran tanto- de la situación difícil que iba a tener el instituto; y sobre todo cuando se dieron algunas circunstancias que modificaron sustancialmente la ecuación previsional, como por ejemplo los 25 Inviernos, cuya idea originaria era que alcanzara a una cierta cantidad de trabajadores del Estado que habían ingresado muy jóvenes. Pero, en definitiva, cuando esa idea se trasladó y se transformó en una ley, quedó una ley abierta que produjo serias dificultades.

También, otras de las decisiones que este Poder Legislativo tomó -y uno puede cuestionar o no pero es lo que en su momento decidió la Legislatura- aún con la opinión contraria de quienes formábamos el directorio del IPAUSS, fue la redeterminación del haber.

Y recuerdo haber leído, días pasados, declaraciones de algunos legisladores mandato cumplido que decían que se había hecho justicia social al redeterminar el haber jubilatorio en lugar de 120 meses a los 24 mejores meses.

Y a veces uno se pregunta -sin el afán de polemizar con nadie- qué pasó en estos años que quien sostenía que era la justicia social recalcular el haber jubilatorio en los 24 mejores meses, hoy está sosteniendo que la mejor forma es volver a los 120. Algo habrá pasado pero, bueno, cada cual se debe hacer cargo.

El sistema previsional de Tierra del Fuego es de larga data. Es un sistema -hoy lo dije en algún medio de comunicación- que nació mal. ¿Y por qué nació mal? Cuando se sancionó la Ley 244, allá por fines de 1984, quienes accedieron por primera vez -independientemente de haber nacido la ley con algunos sistemas de privilegio- a la posibilidad de jubilarse por la caja del exterritorio, en su momento, obtenían como premio por jubilarse, en principio -creo que eran 20 meses- con seguridad 10 meses de haber completo, producto de haber accedido a la jubilación de una caja que recién nacía; con la mayoría de los aportes, de esos que se jubilaban, realizados a lo que en la actualidad es ANSES. O sea, esos recursos, esos aportes, no estaban en la caja que recién nacía, pero obstante se llevaban 10 meses de premio por haberse jubilado. Con esos 10 meses de haberes, seguramente, se llevaban los aportes de por lo menos 15 años, de los cuales solamente seis meses estaban en la caja recién nacida, y el resto estaba en poder de Nación. La caja nunca se hizo de esos recursos; o sea que ya nació mal. La determinación del haber era el mejor haber de los últimos años.

Después, vino una serie de vicisitudes que parece que se hicieron crónicas en el sistema previsional de Tierra del Fuego: el no cumplimiento de aportes y contribuciones, seguramente producto de la crisis económica que se vivía pero como era una caja nueva con muchos aportantes y pocos jubilados, no se notaba.

Recuerdo, sobre fines del mandato del exterritorio de la Tierra del Fuego ya transformada en provincia, la deuda que dejaron los distintos gobiernos, tanto territoriales como a nivel municipal, fue de alrededor de 58 millones de dólares que nunca recuperó la caja, o que recuperó la provincia pero nunca cumplió con la Caja de Previsión Social.

Después vinieron otras etapas que, producto de la emergencia y de la situación económica, cuando se decía que el aporte patronal era de un 7,5% terminó siendo de 3,75%, con el compromiso -superada la emergencia económica- de acercarle a la caja lo que se había dejado de pagar y nunca se devolvió.

Después la costumbre se hizo... Y en esto debemos hacernos cargo “todos” los partidos políticos porque, en su momento, la Unión Cívica Radical, el justicialismo, el Movimiento Popular Fueguino y aquellos que tenían la solución de todo resultó que no la tenían -como el último gobierno que se fue- utilizaron el sistema previsional como la forma de financiarse ante la falta de caja.

Y eso produjo, entre otras cosas, salvo el primer período del gobierno del Movimiento Popular Fueguino que cumplió en tiempo y forma con la totalidad, eso dio origen a lo que con posterioridad fue la deuda de 208 millones de pesos/dólares.

Yo, siempre, medio en chiste decía que si José Estabillo no hubiera cumplido en tiempo y forma con los aportes de jubilaciones, seguramente no estaríamos en condiciones de reclamar los 208 millones de dólares que depués dieron origen a la Ley 676.

La realidad es que todos los gobiernos incumplieron, vinieron formas y refinanciaciones de una manera y de otra.

Surgió un problema en la crisis del Banco de la Provincia de Tierra del Fuego, que dio origen a la creación del Fondo Residual. De ahí se estableció que la deuda con el instituto era de 208 millones de pesos o dólares.

En realidad no era esa la plata del instituto; eran 146 millones del instituto y el resto era un descubierto que tenía el gobierno de la provincia, en el Banco de la Provincia de Tierra del Fuego que después terminó en una sola deuda y quedó como si fuera del instituto.

Los 208 millones de pesos/dólares que, después producto de la salida de la convertibilidad, yo creía que era la única deuda pero me dijeron que no porque en Santiago del Estero también había otra -hubo dos casos en el país- que en lugar de pesificarse se dolarizó. Y eso dio origen a una serie de reclamos que terminó con la Ley 676.

En principio, la idea originaria era buena: transformar la deuda en meses de jubilaciones. ¿Pero que pasó? Siempre, en el medio, alguien mete la cola. Una cosa era una deuda de 151 CPPM de 1.283 jubilaciones y pensiones actualizadas en el tiempo, y muy distinta es una deuda de 151 CPPM que, de 1.283 jubilaciones pasó a 5.600 o 5.700, que no solo se actualizaba por la cantidad de jubilaciones sino también por el monto de las jubilaciones.

Y se llegó a la realidad de que, al tercer CPPM, si usted multiplicaba el valor del CPPM por el monto de la cuota que debía pagar, se triplicaba la deuda en tres veces. Ni Martínez de Hoz, en su perversión más suprema, hubiese logrado una rentabilidad como la que se pretendió lograr en el instituto.

Lo más grave es que muchos se creyeron la propia mentira, entonces gastamos a cuenta. Y ahí vinieron una serie de modificaciones y de flexibilización en el régimen pero eso ya es historia conocida para muchos.

Retomando los fundamentos de la señora legisladora preopinante, referente a la Comisión 865, mucho se discutió allí. Se aceptó la opinión de todo el mundo y aceptaron proyectos de distintos sectores: de centros de jubilados, de gremios, de empleados del IPAUSS, de empleados del Poder Legislativo, iniciativas de distintos tenores. Lamentablemente, por la responsabilidad de quien les habla de no haber tenido la suficiente capacidad de convencer al resto no tuvimos el resultado que esperábamos de la comisión.

Ahora, una reflexión, después del proyecto que acabamos de votar: ¿por qué si este proyecto es bastante similar al proyecto que presentamos desde mi bloque, hace más de dos años y medio, y que comprendía no solamente la modificación del régimen previsional sino la modificación del sistema de funcionamiento del instituto, el recupero de la deuda, no se trató en su momento y hoy lo tenemos que tratar en esta situación, agregando una emergencia previsional que es necesaria? Molesta votar una emergencia en este sentido, pero es necesaria porque la realidad así lo indica.

Si uno analiza el proyecto que recién aprobamos, salvo dos o tres puntos, el resto es prácticamente coincidente -no digo una copia porque nadie reclama el derecho de autor- con el que oportunamente presentamos y para el que no logramos el acompañamiento de la mayoría de la Cámara para darle tratamiento. Y esto produjo, a mi criterio, llegar a la situación que hoy se llegó, porque proponíamos la determinación del haber en ciertos meses; proponíamos la eliminación de algunas compensaciones; proponíamos la eliminación de los 25 Inviernos; proponíamos el aumento de aportes y de contribuciones; proponíamos un sistema de recupero de deuda; proponíamos una modificación en el funcionamiento del instituto y en la integración del directorio, si bien no proponíamos la separación de los institutos que hoy proponen quienes forman parte del mismo espacio político que unificó los institutos en su momento. Muchas veces es oportuno y es bueno reconocer los errores.

Si nosotros -y lo hablé con mis compañeros de bloque- hubiéramos actuado como algunos espacios políticos lo hicieron, de idéntica manera, hoy estaríamos oponiéndonos a cualquier reforma. Pero entendemos que ser oposición no significa oponerse a todo lo que proponga el oficialismo, sino que ser oposición significa discutir todo aquello en lo que uno no esté de acuerdo y acompañar, y brindarle las herramientas a quien la gente le dio la responsabilidad de gobernar, a efectos que pueda llevar adelante las modificaciones necesarias. Después, con todas las herramientas que se le han brindado a propuesta de ellos,

si no se dan los resultados que uno pretende que se dé con esos instrumentos, ahí vendrá la etapa de la crítica.

¿Y por qué digo esto? Porque hoy he tenido infinidad de llamados y de comentarios. Muchos de mis correligionarios me decían por qué le vas a dar los dos tercios para tratar la reforma, si total que la aprueben ellos. Y creo que no es así, no es así la forma de hacer política, o a lo mejor no la entiendo así. Hay que dar las herramientas y hay que discutir.

Y lamento que estemos discutiendo casi dos años después porque seguramente si lo hubiésemos podido debatir antes, a lo mejor la realidad hoy sería distinta; a lo mejor no estaríamos tratando una emergencia previsional; a lo mejor no estaríamos haciendo descuentos a los activos y a los pasivos a efectos de subsanar la deficiencia del instituto, porque seguramente muchas de las jubilaciones que se dieron en este tiempo no estaría, en el cálculo del haber, los mejores 24 meses sino en los 120; a lo mejor se hubieran modificado una serie de situaciones que tal vez, hubieran cambiado la ecuación de la caja.

Pero, bueno, “la realidad es una sola -decía San Agustín, que tan bien copió el general: “la única verdad es la realidad”-. Y la realidad de hoy es que tenemos que tratar esto que no es agradable y que seguramente tendrá sus costos. Y uno, a los costos, los viene pagando hace tiempo, porque tanto hablamos del IPAUSS durante tres años y medio que, seguramente, el resultado electoral de junio, en lo que hace al bloque Unión Cívica Radical, ha tenido mucho que ver.

Porque acá en Tierra del Fuego, donde todos dicen que es la “isla de la Fantasía” -y es cierto que es la isla de la Fantasía- muchos vivimos una realidad completamente distinta; muchos, en la intimidad o en la conversación mano a mano dicen: “nosotros sabemos que hay que modificar esto, que hay que modificar esto, que hay que modificar esto, que hay que ser 'solidarios' (con la plata de los demás).

“Yo quiero ser solidario con la plata del otro, no ser solidario con mi plata. Hay que modificar la situación, pero modificala vos porque yo creo que hay que hacerlo, pero yo voy a decir que no”. En la intimidad te dicen” cambiemos todo”, pero públicamente salen de la oficina y te dicen: “Acá no hay que cambiar nada”.

Muchas veces es difícil actuar así, pero cada cual sabe lo que tiene que hacer, cada quien se debe hacer cargo de los costos que debe pagar.

Hoy no ha tocado, a algunos, acompañar esto; por supuesto que no alegremente. Seguramente tendrá sus consecuencias, pero creo que a la larga las consecuencias van a hacer que los jubilados no anden deambulando como en el transcurso en los últimos años.

Seguramente, tendrán que hacer un sacrificio, un aporte. ¡Por supuesto que a nadie le gusta poner plata! Pero esta es la situación porque parece que la isla de la Fantasía se está terminando, señor presidente.

Estamos tratando de vivir una realidad que, muchas veces, es dolorosa.

Tenía muchas cosas para decir pero, al filo de la hora, estoy bastante cansado. No es que me he olvidado pero no tengo ganas de iniciar un debate que, seguramente, nos llevará mucho tiempo. La verdad, si fuese más temprano sería lindo pero a esta hora estamos cansados.

Esto es parte de los fundamentos por los que el bloque de la Unión Cívica Radical, más allá de las disidencias y de ser la minoría, acompañó al oficialismo.

Me hubiera gustado que quienes son hoy oficialismo hubieren acompañado a la Unión Cívica Radical en su iniciativa en la Comisión 865, pero “la única verdad es la realidad”, no sucedió.No estamos acostumbrados a hacer lo que otros hicieron. Y espero que este gesto de la Unión Cívica Radical sirva para cambiar la realidad del sistema previsional de Tierra del Fuego. Nada más, señor presidente.

Sr. PRESIDENTE.— Gracias, señor legislador.

Mociones

Sra. GÓMEZ.— Pido la palabra.

Señor presidente: Quiero pedirle al resto de los legisladores dejar sin efecto los cuatro días de observación, sobre la ley que acabamos de aprobar.

Sr. PRESIDENTE.— Si vamos hacer una moción general por todas las leyes al final de la sesión, legisladora.

- 8 -

Asunto Nº 6/16

Caja de Previsión Social de la Provincia de Tierra del Fuego

Sr. BILOTA IVANDIC.— Si vamos a proceder a la lectura del próximo asunto, solicito poner a consideración que el Cuerpo se constituya en comisión.
Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración la moción del legislador Bilota Ivandic.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.

En Comisión

Sr. PRESIDENTE.— Se constituye el Cuerpo en comisión para dar lectura, por Secretaría, al proyecto de ley.
Sec. LEGISLATIVA.— "La Legislatura de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Sanciona con fuerza de ley

Creación de la Caja de Previsión Social de la Provincia de Tierra del Fuego

Capítulo I
Creación del Órgano

Objeto

Artículo 1º.- Créase la Caja de Previsión Social de la Provincia de Tierra del Fuego (CPSPTF) como organismo…".

Moción

Sr. FURLAN.— Pido la palabra.

Señor presidente: Solicito que se deje sin efecto la lectura del Asunto Nº 6/16, dado que ya nos hemos puesto de acuerdo con todos los bloques y alcanzaremos una modificación del artículo 29.
Sr. LÖFFLER.— Pido la palabra.

Señor presidente: Quiero hacer una sugerencia, para mayor tranquilidad de los legisladores de los bloques políticos, el público presente y la comunidad en general. Pido que -como no se dará lectura- el texto que se acuerde sea firmado por todos los presidentes de bloques, a efectos de acreditar que lo que se acordó es lo que se será sancionado y promulgado, y quedará como proyecto de ley.
Sr. PRESIDENTE.— Se propone que los presidentes de bloque firmen el dictamen que se acaba de corregir.

Por Secretaría se lee el artículo modificado del proyecto.
Sec. LEGISLATIVA.**—** "Artículo 29.- El Poder Ejecutivo determinará la división y adjudicación de la totalidad de los bienes de propiedad del IPAUSS entre la caja que se crea por la presente ley y la entidad que cumpla con la prestación asistencial prevista por las leyes

territoriales 10 y 442, propuesta que será elevada al Poder Legislativo para su aprobación.

El personal perteneciente al IPAUSS podrá ser ubicado en la Caja de Previsión Social de la Provincia de Tierra del Fuego (CPSPTF) o en la Obra Social de la Provincia de Tierra del Fuego (OSPTF), respetando su categoría profesional, antigüedad y remuneración.”.

Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración, en comisión, el proyecto consensuado por todos los señores legisladores, con la modificación del artículo 29, leído por Secretaría, a mano alzada.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado en comisión.

Moción

Sr. FURLAN.— Pido la palabra.

Señor presidente: Solicito constituir la Cámara en sesión.

Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración la moción del legislador Furlan.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.

¿Hay alguna disidencia con algún artículo en particular, antes de comenzar con la votación?

- Sin asentimiento.

En Sesión

Sr. PRESIDENTE.— Por tratarse de un proyecto de ley, corresponde votación nominal, en general y en particular, que se toma por Secretaría Administrativa.

Sec. ADMINISTRATIVO.— Procedo a tomar la votación.

- Votan por la afirmativa los legisladores Bilota Ivandic, Blanco, Carrasco, Freites, Furlan, Gómez, Harrington, Martínez, Romano y Rubinos.

- Votan por la negativa los legisladores Boyadjian, Löffler, Urquiza y Villegas.

Sec. ADMINISTRATIVO.— Resultan 10 votos por la afirmativa y cuatro por la negativa, señor presidente.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado. Será comunicado al Poder Ejecutivo provincial.

Por Secretaría se da lectura al Asunto Nº 5/16.

- 9 -

Asunto Nº 5/16

Obra Social de la Provincia de Tierra del Fuego

Mociones

Sr. FURLAN.— Pido la palabra.

Señor presidente: Solicito que se deje sin efecto la lectura porque fue consensuado con los demás bloques.

Sr. PRESIDENTE.— Legislador, primero tenemos que constituir el Cuerpo en comisión.

Sr. FURLAN.— Pido la palabra.

Señor presidente: Solicito que se constituya la Cámara en comisión.

Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración la moción del legislador Furlan.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.

En Comisión

Sr. FURLAN.— Pido la palabra.

Señor presidente: Al igual que en el asunto anterior -dado que los señores legisladores han tomado conocimiento y se va a realizar la misma nota con los presidentes de bloques, y una sola modificación que pido se lea por Secretaría- solicito obviar la lectura del proyecto en general.

Sr. PRESIDENTE.— Se da lectura por Secretaría a la modificación propuesta del legislador Furlan del proyecto que tienen todos los señores legisladores.

Sr. LÖFFLER.— Pido la palabra.

Señor presidente: Quiero hacer igual moción que en el tratamiento del asunto anterior, pero pido que se firmen todas las hojas. Me hicieron firmar la última hoja, pero gustaría que desde la Secretaría Legislativa pasen con el total de las hojas del proyecto para que se firmen todas; así todos tenemos la tranquilidad que debemos tener.

Sr. PRESIDENTE.— Cómo no. Ahora le pasaremos las hojas a cada uno de los presidentes de bloques.

Mociones

Sr. FURLAN.— Pido la palabra.

Señor presidente: Hubo una pequeña confusión y el proyecto queda como estaba, que es el que tiene la Secretaría.

Solicito que se deje sin efecto la lectura y que, a través del mecanismo de los presidentes de bloque, sea firmado y elevado al Ejecutivo.

Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración, en comisión, el Asunto Nº 5/16, que tienen sobre sus bancas.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.

Sr. LÖFFLER.— Pido la palabra.

Señor presidente: Solicito constituir la Cámara en sesión.

Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración la moción del legislador Löffler.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.

En Sesión

Sr. PRESIDENTE.— Por tratarse de un proyecto de ley, corresponde votación nominal, en general y en particular, que se toma por Secretaría Administrativa.

Sec. ADMINISTRATIVO.— Procedo a tomar la votación.

- Votan por la afirmativa los legisladores Bilota Ivandic, Blanco, Carrasco, Freites, Furlan, Gómez, Harrington, Martínez, Romano y Rubinos.
- Votan por la negativa los legisladores Boyadjian, Löffler, Urquiza y Villegas.

Sec. ADMINISTRATIVO.— Resultan 10 votos por la afirmativa y cuatro por la negativa.
Sr. PRESIDENTE.— Aprobado. Se comunicará al Poder Ejecutivo provincial, en general y en particular, aclaro.

- 10 -

Asunto Nº 8/16

Régimen Único de Pensiones Especiales

Mociones

Sr. FURLAN.— Pido la palabra.
Señor presidente: Solicito constituir la Cámara en comisión.
Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración la moción del legislador Furlan para tratar el Asunto Nº 8/16.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.

En Comisión

Sr. FURLAN.— Pido la palabra.
Señor presidente: Solicito un cuarto intermedio para hacer una corrección al Asunto Nº 8/16, y efectuar el mismo trámite que los asuntos anteriores.
Sr. PRESIDENTE.— Señor legislador, estamos en comisión.
Sr. FURLAN.— Pido la palabra.
Señor presidente: Hemos consensuado que solo se lea el inciso b), del artículo 2º, del Asunto Nº 8/16.
Sr. PRESIDENTE.— Por Secretaría Legislativa se leerá, la petición del legislador Furlan.
Sec. LEGISLATIVA.— "Artículo 2º, inciso b): Acta de matrimonio o para las uniones convivenciales, actas de inscripción ante la autoridad competente y o información sumarial que acredite haber convivido con el causante en aparente matrimonio de pública notoriedad, como mínimo durante un lapso ininterrumpido, y anterior al fallecimiento, de 10 años.".
Sr. PRESIDENTE.— Se pone en consideración, en comisión, el proyecto de ley que tienen los legisladores en sus bancas (Asunto Nº 8/16) con las modificaciones introducidas y leídas por Secretaría.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado en comisión.

Moción

Sr. FURLAN.— Pido la palabra.
Señor presidente: Solicito poner la Cámara en sesión.

Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración la moción del legislador Furlan.

-Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.

En Sesión

Sr. PRESIDENTE.— Por tratarse de un proyecto de ley se tomará votación nominal, en general y en particular, del Asunto Nº 8/16, por Secretaría Administrativa.
Sec. ADMINISTRATIVO.— Procedo a tomar la votación.

- *Votan por la afirmativa los legisladores Bilota Ivandic, Blanco, Carrasco, Freites, Furlan, Gómez, Harrington, Martínez, Romano, Rubinos, Urquiza y Villegas.*
- *Votan por la negativa Boyadjian y Löffler.*

Sec. ADMINISTRATIVO.— Resultan 12 votos por la afirmativa y dos por la negativa.
Sr. PRESIDENTE.— Aprobado en general y en particular. Será comunicado al Poder Ejecutivo provincial.

- 11 -

Asunto Nº 7/16

Ley de Emergencia del Sistema de Seguridad Social

Moción

Sr. BILOTA IVANDIC.— Pido la palabra.
Señor presidente: el próximo asunto que trataremos es un proyecto de ley sin dictamen, por lo que solicito al Cuerpo que se constituya en comisión.
Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración la moción del legislador Bilota Ivandic para que el Cuerpo pase a comisión.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.

En Comisión

Sec. LEGISLATIVA.—"La Legislatura de la provincial de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Sanciona con fuerza de ley

Ley de Emergencia del Sistema de Seguridad Social de la Provincia

Título I
De la Declaración de Emergencia

Artículo 1º.- Declárase la Emergencia del Sistema de la Seguridad Social de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur por el lapso de dos años, los que se computarán desde la fecha de la sanción de la presente. El Poder Ejecutivo elevará a la Legislatura provincial, en el plazo y condiciones que establezca la reglamentación, un informe circunstanciado que deberá relevar el impacto de las medidas previstas en la presente, de acuerdo a los fines tenidos en miras con su sanción durante el lapso de emergencia. El Poder Legislativo, previo análisis de la información remitida, podrá prorrogar por única vez la emergencia aquí declarada por un plazo igual o inferior a dos años.

Asimismo, durante el plazo de la emergencia el Poder Ejecutivo elevará a la Legislatura provincial informes semestrales del avance y aplicación de las medidas dispuestas en la presente ley.

Artículo 2°.- Las medidas que se disponen en la presente ley estarán orientadas a la regularización integral de la situación de crisis actual mediante la implementación de una administración eficaz y con el objeto primordial de ejecutar acciones tendientes a conquistar la sustentabilidad y sostenibilidad del sistema, asegurando a las generaciones presentes y futuras el acceso al derecho de la seguridad social en el ámbito de las normas locales que lo regulan.

Título II
De las Medidas de Corto y Mediano Plazo

Artículo 3º.- Suspéndase durante la vigencia de la emergencia previsional establecida en el artículo 1°, la aplicación de los incisos c) y d), del artículo 6°, de la Carta Orgánica del Banco de la Provincia de Tierra del Fuego para la estimación de las utilidades distribuibles.

Con excepción de las utilidades devengadas durante el ejercicio 2015, suspéndase la distribución de utilidades devengadas para la aplicación del Fondo Estímulo del personal del Banco de la Provincia de Tierra del Fuego mientras dure la emergencia previsional.

Artículo 4°.- Instrúyese al directorio del Banco de la Provincia de Tierra del Fuego para que, cumplidas las disposiciones del artículo 6º, del capítulo IV, del Anexo Único, de la Ley territorial 234, conforme redacción incorporada en la presente, previa autorización del Banco Central de la República Argentina, ponga a disposición del Poder Ejecutivo las utilidades remanentes del Banco de la Provincia de Tierra del Fuego las que, en virtud de la emergencia decretada en la presente ley deberán ser destinadas a cubrir déficit estacionales de caja del IPAUSS o el organismo que lo reemplace.

El directorio del banco, al transferir las utilidades a las que se refiere la presente, deberá deducir las sumas devengadas que correspondan al Fondo Estímulo, en el porcentual establecido en la Ley provincial 863.

El Poder Ejecutivo podrá destinar dichas utilidades al pago de contribuciones vencidas, a cuenta de contribuciones futuras o pago de deuda consolidada.

Artículo 5º.- Durante el plazo de la emergencia, los funcionarios que ocupen la titularidad de los tres poderes del Estado, incluidos los magistrados judiciales, abonarán un aporte adicional extraordinario equivalente al máximo establecido en el Anexo II del artículo 9º de la presente.

El mismo aporte se aplicará a los ministros, secretarios de Estado, secretarios y todo aquel que ocupe cargos de la planta política en la administración central, organismos autárquicos y descentralizados, el Poder Legislativo, y los organismos de control del Estado provincial, Banco de la provincia de Tierra del Fuego, departamentos ejecutivos, concejos deliberantes, juzgados de faltas y órganos de control de los municipios de la provincia.

Invítase al Superior Tribunal de Justicia a una acordada de adhesión a los fines del presente artículo.”.

Sr. BILOTA IVANDIC.— Pido la palabra.

Señor presidente: Estaba leyendo a la secretaria, y donde dice: “Invítase al Superior Tribunal de Justicia a una acordada” debería decir “al dictado de una acordada”.

Sec. LEGISLATIVA.— “Invítase al Superior Tribunal de Justicia al dictado de una acordada de adhesión a los fines del presente artículo.

Dichos fondos serán afectados al fondo solidario para el pago de jubilaciones creado en la presente y no se acumularán al resto de los incrementos establecidos en la presente ley.

Artículo 6°.- Oblígase a todas las jurisdicciones del gobierno provincial, organismos autárquicos, entes descentralizados y municipios de la provincia de Tierra del Fuego a operar con el Banco de la Provincia de Tierra del Fuego como caja única obligada para todas las operaciones financieras de pagos y recaudación, depósitos y colocaciones financieras, excepto aquellas operaciones que por convenios nacionales se habilite en otra entidad oficial.

Invítase a adherir para propender a este mecanismo financiero a todas las empresas que certifiquen procesos en el Área Aduanera Especial.

Artículo 7°.- En el contexto de la presente ley considéranse 'conceptos remunerativos', a los efectos de la determinación del límite constitucional establecido por todo concepto en el artículo 73, inciso 4), de la Constitución provincial, a aquellos ítems remunerativos sujetos a aportes y contribuciones previsionales, en las condiciones actuales de vigencia.

Los haberes previsionales que a la fecha de la presente, superen el límite constitucional, de acuerdo a las pautas establecidas en el párrafo anterior, no serán afectados; pero no podrán ser incrementadas por causa o motivo alguno hasta tanto no se observen las condiciones establecidas en este artículo.

Artículo 8º.- Créase el Fondo Solidario para el Pago de Jubilaciones, el que se conformará con un aporte extraordinario financiero de emergencia previsional a cargo de todo beneficiario del régimen provincial jubilatorio que se encuentre incluido en las siguientes condiciones:

a) a los beneficiarios del sistema previsional que perciban un haber bruto superior a la suma de $40.000 y no cumplan con las condiciones establecidas en los incisos b), c) y d) del presente, se les deducirá mensualmente, durante el plazo de la emergencia, un aporte especial variable y progresivo, cuyo importe se liquidará según la escala prevista en la tabla I, del Anexo I, de la presente;
b) a aquellas personas que hubiesen accedido al beneficio con una edad menor a los 50 años, se les deducirá mensualmente del haber bruto, durante el plazo de la emergencia, un aporte especial variable y progresivo, cuyo importe se liquidará según la escala prevista en la tabla II, del Anexo I, de la presente.
c) quedan excluidos del presente aporte aquellos que accedieren al beneficio por medio del otorgamiento de pensión por fallecimiento o jubilación por invalidez;
d) a los beneficiarios del sistema previsional que perciban en concepto de pensión por fallecimiento o jubilación por invalidez, se les deducirá mensualmente, durante el plazo de la emergencia, un aporte especial variable y progresivo, cuyo importe se liquidará según la escala prevista en la tabla III, del Anexo I, de la presente;
e) a aquellas personas que hubieren accedido al beneficio habiendo aportado directamente al organismo provincial con un máximo de cinco años de aportes o que fueren titulares de beneficios concedidos por jubilaciones especiales o anticipadas con un máximo de cinco años de aportes, se les deducirá mensualmente un aporte especial variable, cuyo importe se liquidará según la escala prevista en la tabla IV, del Anexo I, de la presente.

A los efectos de la determinación particular del aporte extraordinario de cada beneficiario alcanzado, el Poder Ejecutivo establecerá en la reglamentación la fórmula polinómica conforme los parámetros contenidos en cada una de las tablas incorporadas al Anexo I y sobre las siguientes bases: al importe de cada beneficio se le aplicará el porcentaje de aporte correspondiente al tope del escalón inmediatamente inferior y se le adicionará la tasa marginal del tramo donde cae exactamente el beneficio, aplicada sobre la diferencia

entre el beneficio y el mencionado tope del escalón inmediatamente inferior.

Facúltase al Poder Ejecutivo a disponer un incremento del monto mínimo establecido en el presente y de las alícuotas según el monto, de acuerdo a una escala proporcional al porcentaje de movilidad de los haberes para el momento en que se produzcan aumentos generales en la administración.

Los presentes aportes extraordinarios en ningún caso serán acumulativos ni podrá su aplicación superar el 15%.

Artículo 9°.- Los trabajadores activos se encuentran obligados a realizar un aporte adicional extraordinario de emergencia previsional en los porcentajes y las condiciones establecidas en el Anexo II de la presente.

Artículo 10.- Autorízase al presidente del IPAUSS, o el organismo que lo reemplace, a implementar un programa de evaluación, formación de indicadores y desarrollo de nuevas herramientas de gestión, en un plazo de 90 días, desde la sanción de la presente medida con un plazo máximo de desarrollo, implementación y evaluación de 24 meses.

Este programa deberá contemplar la revisión de la totalidad de las prestaciones otorgadas, e implementar bases de datos, cruces, programa de liquidación y demás información relevante que permita evaluar la evolución del sistema más allá de las proyecciones actuariales.

A los fines de lo dispuesto en este artículo, autorízase la contratación directa de servicios de auditoría con universidades públicas u organismos públicos en materia previsional y profesionales especializados en la materia.”.

Sr. BILOTA IVANDIC.— Pido la palabra.

Señor presidente: Por una cuestión de sintaxis del párrafo, por la conjunción de “u” e “i”, creo que quedaría mejor redactado: “A los fines de lo dispuesto en este artículo, autorízase la contratación directa de servicios de auditoría con universidades públicas, organismos públicos en materia previsional y/o profesionales especializados en la materia”.

Sec. LEGISLATIVA.—“A los fines de lo dispuesto en este artículo, autorízase la contratación directa de servicios de auditoría con universidades públicas, organismos públicos en materia previsional y/o profesionales especializados en la materia.

Artículo 11.- El Poder Ejecutivo podrá instruir al fiscal de Estado para que inicie las acciones tendientes a la devolución de las sumas detraídas y al cese de la retención del 15% de la masa de impuestos coparticipables pactada en la cláusula primera del Acuerdo entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales, el 12 de agosto de 1992, ratificado por la Ley nacional 24130 y conforme los términos del artículo 76 de la Ley nacional 26078.

Artículo 12.- El Poder Ejecutivo podrá instruir al fiscal de Estado a que inicie las acciones tendientes a la devolución de las sumas detraídas y al cese de las retenciones actuales relacionadas con el porcentual resultante de la aplicación del Decreto 1399/2001, en lo que se refiere a la provincia de Tierra del Fuego.

Artículo 13.- El Poder Ejecutivo deberá asignar prioritariamente al IPAUSS, o al organismo previsional que lo reemplace, las sumas que se generen como consecuencia de la devolución y cese de las detracciones y retenciones referidos en los artículos anteriores.

La asignación de las sumas que correspondan a la devolución y cese no podrán ser menores al 70% de lo que ingrese al Tesoro provincial en dichos conceptos.

El Poder Ejecutivo, al momento de la transferencia, imputará el concepto en que se deben aplicar los fondos, pudiéndolo hacer al pago de contribuciones vencidas, a cuenta de contribuciones futuras o pago de deuda consolidada, integrándolos en este último supuesto al fideicomiso establecido en la presente ley.

Artículo 14.- Suspéndase, por el plazo de la emergencia, la aplicación de la Ley provincial 855 en el ámbito del Poder Ejecutivo de la provincia.

Durante el plazo de la emergencia, la dieta de la gobernadora solo podrá ser aumentada en la medida en que exista una modificación dispuesta con carácter general para toda la Administración Pública. En tal supuesto, el porcentaje de aumento no podrá exceder el porcentaje de incremento que se hubiese otorgado.

Artículo 15.- Autorízase al IPAUSS o el organismo que lo reemplace, a establecer, por el plazo

de la emergencia, un cronograma de pago de haberes que permita el desdoblamiento de la fecha de pago de los beneficiarios por número de documento o monto del haber, con la condición de que en todos los casos se abone en intervalos regulares mensuales y se priorice a los beneficiarios de menores ingresos.

Establecido dicho cronograma, y por el plazo de la emergencia, el mismo se aplicará a las consecuencias de las relaciones o situaciones jurídicas existentes, aun en aquellos casos en que la fecha de pago se hubiera determinado judicialmente.

Artículo 16.- En cualquier proceso judicial en los que el IPAUSS o el organismo que lo reemplace sea parte, durante el plazo de la emergencia, se impondrán en todos los casos las costas por su orden.

Artículo 17.- Establécese que, para los ajustes de movilidad de los haberes previsionales se aplicará el 82% de la equivalencia establecida para la jubilación ordinaria, y el resto de los porcentajes de ley establecidos para los beneficios de edad avanzada, invalidez y pensiones.

Durante el plazo de la emergencia, la movilidad será actualizada dos veces al año, en la fecha y condiciones que establezca la reglamentación en tanto los haberes del personal en actividad que se desempeñe en la categoría y/o función considerada para la determinación del haber inicial, dentro de las administraciones indicadas y en el respectivo escalafón sufran variaciones.

Título III

De la Consolidación de Deudas y de la Creación del Fideicomiso para el Desarrollo Habitacional

Artículo 18.- Consolídanse en el Estado provincial la totalidad de las obligaciones de la seguridad social vencidas impagas a la fecha de sanción de la presente ley.

Artículo 19.- La consolidación dispuesta en el artículo precedente comprende las obligaciones de la seguridad social a cargo de la Administración central y organismos descentralizados de la Administración Pública provincial, como así también de los departamentos ejecutivos, concejos deliberantes y juzgados de faltas de los municipios de la provincia de Tierra del Fuego siempre que adhieran a los términos de la presente por medio de ordenanza.

Artículo 20.- Instrúyese a los organismos de control previstos por la Ley de Administración Financiera y...".

Sr. BLANCO.— Pido la palabra.

Señor presidente: En el artículo 19, donde dice: "comprende las obligaciones de la seguridad social a cargo de la Administración central y organismos descentralizados de la Administración Pública provincial, como así también de los departamentos ejecutivos, concejos deliberantes y juzgados de faltas de los municipios de la provincia de Tierra del Fuego", habría que agregar "juzgados de faltas y organismos de control".

Sec. LEGISLATIVA.—"... departamentos ejecutivos, concejos deliberantes, juzgados de faltas y organismos de control de los municipios de la provincia de Tierra del Fuego siempre que adhieran a los términos de la presente por medio de ordenanza.

Artículo 20.- Instrúyese a los organismos de control previstos por la Ley de Administración Financiera y de los sistemas de control para que, en el plazo de 90 días corridos contados a partir del quinto día hábil de la publicación de la presente, prorrogables por igual período de tiempo, determine fehacientemente y certifique las acreencias del IPAUSS a la fecha de sanción de la presente.

Dentro de los cinco días hábiles de finalizada su labor, los organismos deberán remitir, al Ministerio de Economía de la provincia, informe circunstanciado de la certificación de acreencias correspondientes de cada uno de los organismos comprendidos en el artículo que antecede.".

Prosec. ADMINISTRATIVA.— "Artículo 21.- La certificación de las acreencias previstas en el artículo anterior serán actualizadas aplicando la tasa de interés de plazo fijo en pesos a 30 días que fije el Banco de la Provincia de Tierra del Fuego para el caso de las deudas que no

se hayan originado a partir de lo establecido en el artículo 5º de la Ley provincial 478.
Artículo 22.-".

Sr. RUBINOS.— Pido la palabra.

Señor presidente: Recién ahora acabo de enganchar algo que habíamos planteado hace un ratito.

Cuando hablábamos de las deudas de los privados con el Estado provincial, les aplicábamos un interés del doble del descubierto bancario o de descuentos de documentos, que es muy superior a la tasa de plazo fijo que tiene el Banco de Tierra de Fuego. Si es posible, yo propondría que sea de una vez y media la tasa del plazo fijo, porque no es una colocación que hacen el Estado municipal o el Estado provincial de una inversión; es una deuda de aportes y contribuciones. Entonces, me parece que tendríamos que contemplar la posibilidad de que no sea una tasa tan favorable para un deudor de aportes y contribuciones.

Por otro lado, quiero aprovechar para aclarar que en las modificaciones que se pudieron introducir está la de que el Estado provincial, de por sí, va a comenzar a pagar inmediatamente las deudas, porque es quien va completando los importes necesarios para terminar de pagar las jubilaciones. En la redacción original se fijaba que los municipios empezaban a pagar sus deudas a partir de la finalización del cálculo, después de que pase por el Ministerio de Economía y a luego de lograr firmar los convenios. Creo que queda claro que no hace falta que esté adherido por medio de ordenanza, que no hace falta que se firme ningún convenio, y que inmediatamente después de la firma, de que se sancione esta ley, los municipios y el gobierno tienen que empezar a pagar, -porque tiene que cubrir lo que le falta a la caja para pagarlas jubilaciones- y los municipios van a tener retenidas, antes del envío de la coparticipación, las sumas que están previstas en el artículo 22. Nada más, señor presidente.

Sr. BILOTA IVANDIC.— Pido la palabra.

Señor presidente: Respecto de lo que estaba hablando el legislador Rubinos, y en particular sobre la tasa de interés, nosotros habíamos acordado aplicar esa tasa porque entendíamos que era costo de oportunidad de las acreencias que podía tener el IPAUSS en ese momento, y los beneficios que podía tener en una colocación a plazo fijo. Nosotros tenemos esa posición. Creemos que no es una tasa desfavorable, es una tasa en el mercado .estimamos. que es razonable a una tasa de plazo fijo. Nosotros vamos a mantener la postura de que sea esa tasa. Reitero: nosotros vamos a mantener esa posición; si quieren hacer una moción para votarla, yo no tengo problemas.

Sr. RUBINOS.— Pido la palabra.

Señor presidente: La verdad, solo manifesté lo que es una preocupación. Entiendo que la mantengan.

Me parece que lo que pudimos introducir en los cambios, en las reuniones, está puesto acá, y sabía que no iba a prosperar pero por lo menos quería dejarlo aclarado en el recinto. Nada más.

Sr. PRESIDENTE.— Continuamos con la lectura.

Prosec. ADMINISTRATIVA.— "Artículo 22.- Para el caso de las deudas que no tienen origen en el artículo 5° de la Ley provincial 478, dentro del plazo de los 180 días, una vez certificadas las acreencias y aplicados los intereses correspondientes, el IPAUSS o el organismo que lo reemplace y los organismos deudores deberán suscribir los correspondientes acuerdos de pago, los que deberán cancelarse en hasta 180 meses por el sistema de cuotas de capital más intereses, según reglamentación del Poder Ejecutivo.

Las jurisdicciones provinciales y municipales podrán acordar y proponer entre sí e informar al IPAUSS, o al organismo que lo reemplace, la compensación de deudas y acreencias mutuas con cargo al pago de deudas previsionales o asistenciales, las que podrán cancelarse en las mismas condiciones financieras y de plazos establecidos en la presente.

Hasta tanto se suscriban...".

Sr. BILOTA IVANDIC.— Pido la palabra.

Señor presidente: Solicito un breve cuarto intermedio sobre bancas.

Sr. PRESIDENTE.— Estamos en comisión.

- Hablan varios a la vez.

Prosec. ADMINISTRATIVA.— "...los acuerdos o convenios de pago mencionados precedentemente, los municipios deberán abonar al IPAUSS, o al organismo que lo reemplace, en concepto de pago a cuenta de las acreencias adeudadas, las siguientes sumas mensuales y consecutivas: por los municipios de Río Grande y Ushuaia, cada uno la suma de $500.000 y por el municipio de Tolhuin la suma de $100.000. Dichas sumas serán retenidas previas al envío de la coparticipación.

Artículo 23.- Los montos de las cuotas determinados para cada organismo sea provincial y/o municipal serán con garantía de coparticipación y con la retención automática directa de dichas cuotas de los recursos de coparticipación y regalías que perciba el Banco de la Provincia de Tierra del Fuego, tanto de la Administración central o a transferirse a través del sistema de coparticipación municipal, montos que se transferirán en forma automática al IPAUSS por el Banco de la Provincia de Tierra del Fuego.

Artículo 24.- El Estado provincial, de conformidad con lo establecido por el artículo 28 de la Ley provincial 641, modificatorio del artículo 5º de la Ley provincial 478, a partir del 1 de enero de 2006 y con el propósito de honrar la deuda que mantiene con el IPAUSS, establece como cuantificación de la deuda la fórmula que a continuación se establece.

El monto total de la deuda de 208.000.000 de dólares estadounidenses serán actualizados con la tasa de interés Libor tomando como fecha de inicio el 12 de mayo de 2000 y como fecha de corte el día de la publicación de la presente.

Artículo 25.- Autorízase al Poder Ejecutivo a la emisión y colocación de bonos de consolidación de deudas de la seguridad social por hasta la suma total que se obtenga de la actualización prevista en el artículo anterior para afrontar las obligaciones consolidadas que resulten de la certificación de acreencias que determinen los organismos de control.

Para tal fin se autoriza al Poder Ejecutivo a realizar la instrumentación de la operación con el Banco de la Provincia de Tierra del Fuego, Banco Central de la República Argentina...".

Sr. BLANCO.— Pido la palabra.

Señor presidente: En lugar de "Banco Central de la República Argentina" corresponde "Banco de la Nación Argentina"... El glorioso BNA.

Prosec. ADMINISTRATIVA.— "Con el Banco de la Provincia de Tierra del Fuego, Banco de la Nación Argentina u otras entidades financieras públicas o privadas, organismos nacionales e internacionales de crédito.

Dicho financiamiento será por el plazo máximo que permita lograr el objetivo de la colocación de la totalidad de los bonos emitidos, pudiendo constituir como garantía recursos del régimen federal de coparticipación de impuestos y/o regalías hidrocarburíferas, con las tasas de interés y condiciones de plaza al momento de su constitución.

Artículo 26.- El Poder Ejecutivo constituirá un fideicomiso que se denominará Fideicomiso para el Desarrollo Habitacional, a fin de garantizar la afectación de los recursos producidos por la emisión del bono de consolidación para destinarlos a la inversión en planes de construcción de viviendas familiares y créditos hipotecarios que tengan el mismo destino.".

Sec. LEGISLATIVA.— "Artículo 27.- El fiduciario realizará con los recursos transferidos por el fiduciante, planes de construcción de viviendas a través de empresas de probada solvencia técnica, económica y financiera, las que serán seleccionadas a través de procedimientos de contratación que garanticen la participación y transparencia de la selección. El fiduciario también podrá otorgar créditos hipotecarios para la construcción de viviendas para uso familiar. Las personas beneficiarias de los créditos deberán reunir los requisitos establecidos por la reglamentación que establezca el Poder Ejecutivo.

Artículo 28.- Los recursos obtenidos por el recupero de las operaciones autorizadas a realizar por parte del fiduciario serán transferidos al IPAUSS u organismo que lo reemplace, siendo el mismo, el beneficiario del presente Fideicomiso para el Desarrollo Habitacional.

Artículo 29.- La consolidación legal del pasivo público alcanzado por la presente implica la

novación de la obligación original y de cualquiera de sus accesorios así como la extinción de todos los efectos inmediatos, mediatos o remotos que la imposibilidad de cumplir sus obligaciones por parte de cualquiera de las personas jurídicas u organismos comprendidos por el artículo 19 pudieran provocar o haber provocado. En lo sucesivo solo subsisten a su respecto los derechos derivados de la consolidación.

Artículo 30.- Créase el registro de inmuebles de propiedad privada del Estado provincial, el que estará integrado por la totalidad de los predios fiscales y demás bienes inmuebles del dominio privado del Estado provincial, actualmente existentes, con excepción de los inmuebles de titularidad del IPAUSS o el organismo que lo reemplace.

Los organismos autárquicos y descentralizados, transcurridos 15 días hábiles desde la sanción de la presente norma deberán inventariar su patrimonio inmobiliario e informar al Poder Ejecutivo la existencia de inmuebles de su propiedad, su afectación actual si la tuviere, nomenclatura catastral, deudas que por cualquier concepto se hayan devengado hasta la fecha de la sanción de la presente norma, si el mismo se encuentra libre de todo gravamen y cualquier otro dato de interés o que haga a su correcta individualización.

Los entes y organismos podrán convenir con el Poder Ejecutivo la transferencia de inmuebles por el valor que surja de la tasación que se realice, con intervención del Tribunal de Cuentas de la provincia.

Artículo 31.- El patrimonio inmobiliario que integre el registro establecido en el artículo 30 será destinado a la integración del fideicomiso para el desarrollo habitacional creado en el título III de la presente ley.

Artículo 32.- Derógase la Ley provincial 676, desafectándose los fondos depositados en el Banco Central de la República Argentina...".

Sr. BLANCO.— Pido la palabra.

Señor presidente: En lugar de decir "Banco Central de la República Argentina" debe decir "Banco de la Nación Argentina"

Sec. LEGISLATIVA.— "Artículo 32.- Derógase la Ley provincial 676, desafectándose los fondos depositados en el Banco de la Nación Argentina, los que serán transferidos al IPAUSS o al organismo..."

Sr. BLANCO.— Pido la palabra.

Señor presidente: Que diga "Banco de la Nación Argentina, sucursal Ushuaia".

Sec. LEGISLATIVA.— "...Banco de la Nación Argentina, sucursal Ushuaia, los que serán transferidos al IPAUSS o al organismo que lo reemplace para hacer frente a las jubilaciones del sistema.

Artículo 33.- La presente ley es de orden público y se dicta en ejercicio de los poderes de emergencia de la Legislatura provincial. No se aplicarán a las obligaciones consolidadas ni a sus accesorios las disposiciones contenidas en leyes especiales en tanto se contrapongan con lo normado en la presente. No serán exigibles a los titulares de créditos consolidados el cumplimiento de sus obligaciones accesorias a dichos créditos, sino en las condiciones de la presente ley.

Cláusulas Transitorias.

Artículo 34.- Hasta tanto se comience a aplicar el producido del fideicomiso establecido en la presente ley a favor del IPAUSS o el organismo que lo reemplace, el Poder Ejecutivo deberá seguir abonando el compromiso asumido en el Decreto provincial 761/2013.

Dichas sumas deberán ser deducidas del monto de la deuda consolidada que se determine de acuerdo a la presente ley.

Artículo 35.- Hasta tanto se efectivice la separación del sistema previsional y el asistencial y se pongan en funciones las autoridades que sean designadas y elegidas para la conducción de ambos sistemas, autorízase al IPAUSS o el organismo que lo reemplace, a transferir los fondos disponibles en las cuentas del sistema asistencial para el pago de los haberes jubilatorios.

A tales efectos se autoriza al directorio a realizar las transferencias entre ambas cuentas de acuerdo a las necesidades financieras de caja de las mismas.

Dicha autorización deberá aplicarse sin afectar ni poner en riesgo la normal prestación

de servicios asistenciales a cargo...".

Sr. BILOTA IVANDIC.— Pido la palabra.

Señor presidente: En el párrafo que dice: "a los efectos se autoriza al directorio, al directorio -del IPAUSS, obviamente se refiere- a realizar las transferencias entre ambas cuentas". Nosotros hemos sancionado una norma que ha modificado la competencia, nos parece conveniente que se refiera al presidente del instituto, hasta tanto se separen las cajas, porque ha sufrido modificaciones su competencia.

Por lo tanto, quedaría redactado: "A tales efectos se autoriza al presidente a realizar las transferencias".

Sec. LEGISLATIVA.**—** "A tales efectos se autoriza al presidente a realizar las transferencias entre ambas cuentas de acuerdo a las necesidades financieras de caja de las mismas. Dicha autorización deberá aplicarse sin afectar ni poner en riesgo la normal prestación de servicios asistenciales a cargo del IPAUSS.

Los fondos que resulten utilizados del sistema asistencial en el sistema previsional deberán ser restituidos a dicho sistema a medida que los organismos aportantes hagan efectivos los pagos de aportes y contribuciones correspondientes al sistema previsional y todo otro recurso percibido correspondiente al IPAUSS, a excepción de los recursos a los que hace referencia el artículo 32 de la presente ley.

En ningún caso la transferencia de fondos autorizada por la presente ley podrá significar una quita de fondos al sistema previsional.

Artículo 36.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.".

Moción

Sr. BLANCO.— Pido la palabra.

Señor presidente: Antes de proceder a la lectura de las tablas -no sé si no sería conveniente hacer como hicimos con los otros proyectos, que firmen los presidentes de bloques- quisiera hacer algunas consideraciones.

Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración la moción del legislador Blanco.

- *Se vota y es afirmativa.*

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.

Sr. BLANCO.— Pido la palabra.

Señor presidente: En el artículo 22 dice: "Para el caso de las deudas que no tienen origen en el artículo 5°, de la Ley provincial 478, dentro del plazo de 180 días, una vez certificadas las acreencias y aplicados los intereses correspondientes, el IPAUSS o el organismo que lo reemplace y los organismos deudores deberán suscribir los correspondientes acuerdos de pago, los que deberán cancelarse en hasta 180 meses por el sistema de cuotas de capital más intereses según reglamentación del Poder Ejecutivo".

Acá, cuando hablamos de los intereses -a efectos de evitar lo que surgió en su momento, cuando se estableció un plan de pago a través de la Ley 460, que decía que el Ejecutivo en la reglamentación fijaba los intereses, y luego esos intereses establecidos por decreto no fueron aceptados por el Instituto- y a efectos de evitar una discusión, sería oportuno aclarar que el interés a aplicar, como mínimo, debe ser el mismo que se aplicó para la consolidación de la deuda. O sea, el interés del plazo fijo del Banco de la Provincia Tierra del Fuego, como mínimo ese, para que no suceda como en la 460 que el Ejecutivo puso el interés de caja de ahorro.

No estoy en condiciones de redactarlo pero doy la idea para alguien que pueda hacerlo a esta altura.

Sr. PRESIDENTE.— Por Secretaría se dará lectura a la modificación del artículo 22.

Sec. LEGISLATIVA.**—** "Artículo 22.- Para el caso de las deudas que no tienen origen en el artículo 5° de la Ley provincial 478, dentro del plazo de 180 días, una vez certificadas las acreencias y aplicados los intereses correspondientes, el IPAUSS o el organismo que lo

reemplace y los organismos deudores deberán suscribir los correspondientes acuerdos de pago, los que deberán cancelarse en hasta 180 meses por el sistema de cuotas de capital más intereses, los que serán los establecidos para la consolidación del artículo 21 de la presente, según reglamentación del Poder Ejecutivo.”.

Sr. BLANCO.— Pido la palabra.

Señor presidente: Es para aclarar que el bloque Unión Cívica Radical no va a votar de forma afirmativa el artículo 17, porque a nuestro criterio se modifica la movilidad que establece la Constitución de la provincia, ni el artículo 9º que establece el descuento.

Sr. BILOTA IVANDIC.— “Artículo 9°.- Los trabajadores activos se encuentran obligados a realizar un aporte adicional extraordinario de emergencia previsional del Anexo II.”.

Sr. BLANCO.— Y voy a dar las razones porque creo que en la tabla que se adjunta acá, dice que los menores de 45 años aportan el 1%, sin tener en cuenta el monto; de 45 a 50 años, el 3% y más de 50 años, el 4,5%.

Por ahí se daría la situación -a nuestro criterio- de que alguien que tenga una remuneración de $20.000 y porque es mayor de 50 años tenga que pagar el 4,5%. Y alguien que tenga una remuneración de $50.000 y que tenga menos de 45 años, pague el 1%. Creemos que no es equitativo, razón por la cual no vamos acompañar el artículo 9º.

O sea, los artículos 9º y 17 que establecen la modificación de la movilidad, que cuando votemos en sesión, lo haremos por la negativa en esos dos artículos.

Sr. VILLEGAS.— Pido la palabra.

Señor presidente: Atento a la hora que estamos voy a tratar de ser lo más breve posible para explicitar el porqué vamos a votar en contra el presente proyecto de ley, pero principalmente voy a hacer pivotear mi pensamiento sobre dos cuestiones básicas.

Una es la que hizo referencia recién el legislador Blanco, el artículo 17 de este proyecto de ley, que le otorga, a la señora gobernadora, durante el plazo de emergencia, la potestad de actualizar dos veces la movilidad de los haberes previsionales, entendiendo que de ese modo se está atacando de manera manifiesta una de las conquistas en materia de derechos sociales, obtenidas en los últimos 50 años en la república Argentina; por cuanto la movilidad previsional es una herramienta que tiene garantía constitucional, que tiende a reparar lo que el proceso inflacionario produce en los haberes previsionales de nuestros jubilados.

Esa reparación vendría a constituirse imposible en la medida que no acompañe las actualizaciones que se deben dar al sector activo, en función de un país en el que las propias autoridades nacionales reconocen que tendremos una proyección de entre un 25 y un 30% de inflación en el año en curso. Y dar la posibilidad a la señora gobernadora de que tan solo dos veces al año ponga en ejecución en este sistema de movilidad, creo que es un retroceso para una conquista social que, precisamente, tuvo sus orígenes en las décadas del 40 o 50, cuando gobernaba el Partido Justicialista. Pareciera ser que hay un cierto contrasentido histórico en ese aspecto.

Por otro lado, y para no ahondar en lo que hace a la movilidad, otro punto importante es el de la novación respecto de la deuda que prevé el artículo 29. Novación –para que se entienda- es la transformación de una obligación en otra, mediante la extinción de una, nace otra; y esa novación tiene efecto. Y como bien dice ese artículo, los efectos son la extinción de todos los efectos inmediatos, mediatos o remotos que la imposibilidad de cumplir sus obligaciones por parte de cualquiera de las personas jurídicas u organismos comprendidos por el artículo 19, pudieran provocar o haber provocado”.

A mi modo de ver, la “novación echa como una especie de “manto de olvido” sobre la conducta que han tenido los últimos funcionarios del gobierno que se ha retirado hace poco y que, sinceramente, ha puesto en jaque los sistemas previsional, de salud y el educativo.

En este caso, como estamos hablando del sistema previsional, en realidad esta novación que se produce, a mi modo de ver, conlleva una especie de perdón a la errónea y grave conducta política desplegada por el gobierno de Fabiana Ríos.

No quiero ser parte de ese manto de olvido porque creo que tendríamos que hacer todo lo contrario. Y es por eso que no acompaño este proyecto de ley. Nada más, gracias.

Sra. URQUIZA.— Pido la palabra.

Señor presidente: Para sumar a lo que decía mi compañero de banca, por supuesto, adelanto mi voto negativo. Para justificarlo debo decir que si bien he acompañado al reforma del sistema previsional, porque se entiende que es una reforma de fondo y que es necesaria para la continuidad del sistema en el tiempo, entiendo que esta ley de emergencia en varios puntos se contrapone con lo que votamos y está relacionado, incluso, con la contribución patronal, que también nosotros pedimos que se incrementara.

En esta ley de emergencia estamos castigando, por una parte, a los jubilados y a los activos y, por otra parte, beneficiando a los grandes deudores del sistema previsional que, por supuesto, obtuvieron la financiación más barata en todos estos años, pagando la deuda con la tasa de plazo fijo del banco de la provincia.

Por eso, y por supuesto sumado a esto que explicaba con respecto a la novación de la deuda, es que no acompaño el presente proyecto. Gracias.

Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración de los señores legisladores, en comisión, el proyecto de ley leído por Secretaría, con las modificaciones introducidas en los artículos 5º, 10, 22, 25, 32 y 35.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado en comisión.

Moción

Sr. LÖFFLER.— Pido la palabra.

Señor presidente: Solicito constituir la Cámara en sesión.

Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración la moción del legislador Löffler.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.

En Sesión

Sr. PRESIDENTE.— Por tratarse de un proyecto de ley, corresponde votación nominal.

Moción

Sr. BILOTA IVANDIC.— Pido la palabra.

Señor presidente: Previo a la votación, voy a realizar algunas consideraciones y fundamentaciones que guardan relación con lo que ha relatado y expuesto la legisladora Myriam Martínez, y otras cuestiones más puntuales y técnicas.

Por la hora, y para no cansar, voy a pedir autorización (porque creo que están relacionadas directamente con la técnica que apunta a la fundamentación de la emergencia) para insertar los fundamentos y pasar a la votación.

Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración la moción del legislador Bilota Ivandic, para insertar sus fundamentos en el Diario de Sesiones, a mano alzada.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado. *(Ver fundamentos en Anexo II).*

Sr. PRESIDENTE.— En primer lugar, ponemos a consideración de los señores legisladores la votación en general.

Moción

Sr. RUBINOS.— Pido la palabra.

Señor presidente: Solicito un cuarto intermedio sobre bancas.

Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración la moción del legislador Rubinos.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.

Cuarto Intermedio.

- Son las 04:40.
- A las 04:50,

Sr. PRESIDENTE.— Se levanta el cuarto intermedio.

Por tratarse de un proyecto de ley, corresponde votación nominal. En primera instancia se tomará en general, por Secretaría Administrativa.

Sec. ADMINISTRATIVO.— Procedo a tomar votación nominal.

- Votan por la afirmativa los legisladores Bilota Ivandic, Blanco, Carrasco, Freites, Furlan, Gómez, Harrington, Martínez, Romano, Rubinos.
- Votan por la negativa los legisladores Boyadjian, Löffler, Urquiza, Villegas.

Sec. ADMINISTRATIVO.— Resultan 10 votos por la afirmativa y cuatro por la negativa.

Sr. PRESIDENTE.— Resulta aprobado en general.

Ahora vamos a votar en particular, exceptuados los legisladores que han votado en forma negativa en general.

Se pone a consideración en particular, exceptuados los artículos 9º, 17, 21, 24 y 29. Se tomará votación nominal por Secretaría Administrativa.

Sec. ADMINISTRATIVO.— Procedo a tomar votación nominal.

- Votan por la afirmativa los legisladores Bilota Ivandic, Blanco, Carrasco, Freites, Furlan, Gómez, Harrington, Martínez, Romano, Rubinos.

Sec. ADMINISTRATIVO.— Resultan 10 votos por la afirmativa, señor presidente.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado, en particular, exceptuados los artículos 9º, 17, 21, 24 y 29.

Se pone a consideración, en particular, los artículos 9º, 17, 21, 24 y 29. Por tratarse de un proyecto de ley se tomará votación nominal por Secretaría Administrativa.

Sr. BLANCO.— Pido la palabra.

Señor presidente: Voy a solicitar que el artículo 24 se deje de lado y se vote después porque hay opiniones divididas en el bloque.

Sr. PRESIDENTE.— Entonces, vamos a tomar votación nominal, por Secretaría Administrativa, en los artículos 9º, 17, 21 y 29.

Sec. ADMINISTRATIVO.— Procedo a tomar votación nominal.

- Votan por la afirmativa los legisladores Bilota Ivandic, Carrasco, Freites, Furlan, Gómez, Harrington, Martínez, Romano.
- Votan por la negativa los legisladores Blanco y Rubinos.

Sec. ADMINISTRATIVO.— Ocho votos por la afirmativa y dos por la negativa.

Sr. PRESIDENTE.— Resultan aprobados los artículos 9º, 17, 21 y 29.

Ahora voy a poner a consideración el artículo 24, por tratarse de un proyecto de ley...

Sr. BLANCO.— Pido la palabra.

Señor presidente: Es a efectos de fundamentar por qué voy a votar en forma positiva el artículo 24. Para ser coherente con lo que sostuve desde siempre, creo que la Ley 676 no solamente fue inconstitucional sino que fue lesiva a los intereses de la provincia.

Varias veces solicité que el gobierno de turno hiciese las presentaciones que correspondían porque es una ley que tiene doble sistema de indexación, y es por eso que voy a votar afirmativamente para su derogación.

Sr. PRESIDENTE.— Gracias, señor legislador.

Se toma votación nominal del artículo 24.

Sec. ADMINISTRATIVO.— Procedo a tomar la votación.

- *Votan por la afirmativa los legisladores Bilota Ivandic, Blanco, Carrasco, Freites, Furlan, Gómez, Harrington, Martínez y Romano.*
- *Votan por la negativa el legislador Rubinos.*

Sec. ADMINISTRATIVO.— Resultan nueve votos por la afirmativa y uno por la negativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado el artículo 24, por lo cual queda sancionada la ley leída por Secretaría. Será comunicada al Poder Ejecutivo provincial.

Moción

Sra. GÓMEZ.— Pido la palabra.

Señor presidente: Solicito que se deje sin efecto los cuatro días de observación para todas las leyes que aprobamos en esta sesión.

Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración la moción de la legisladora Gómez.

- *Se vota y es afirmativa.*

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado. Se quitan los cuatro días de observación.

- 12 -

Asunto Nº 13/16

Receso Legislativo

Resolución de Presidencia Nº 12/16

Sec. LEGISLATIVA.— “El vicegobernador y presidente del Poder Legislativo de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Resuelve:

Artículo 1º.- Establecer el receso legislativo estival para el personal de planta permanente dependiente del Poder Legislativo provincial, desde el 16 de enero y hasta el 22 de febrero de 2016, por los motivos expuestos en el exordio.

Artículo 2º.- La Presidencia, la Secretaría Legislativa y la Secretaría Administrativa, funcionarán con el personal legislativo que garantice las necesidades propias de cada despacho de recepción de documentación y/o mesas de entradas, informándose a esta Presidencia de los agentes designados a tal efecto.

Artículo 3º.- El horario de atención al público en cada Mesa de Entrada y de las actividades propias de cada área se establece de 10:00 a 15:00, en las fechas indicadas en el artículo 1º del presente acto administrativo.

Artículo 4º.- El personal designado para cubrir el receso establecido en el artículo 1º y de

acuerdo a las pautas fijadas en el artículo 2º podrá usurfructuar la licencia pendiente hasta el día 30 de noviembre de 2016.
Artículo 5º.- Los bloques políticos deberán adherir a la presente resolución respecto al personal de planta temporaria dependiente de cada uno de ellos.
Artículo 6º.- La presente se dicta ad referéndum de la Cámara legislativa.
Artículo 7º.- Registrar, comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.
Resolución de Presidencia 12/16.

La Legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Resuelve:

Artículo 1º.- Ratificar en todos sus términos la Resolución de Presidencia 12/16, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese y archívese.”.
Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración de los señores legisladores, la resolución leído por Secretaría. Los que estén por la afirmativa, a mano alzada.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.

- 13 -

Asunto Nº 14/16

Comisión Legislativa de Receso

Sec. LEGISLATIVA.— “La Legislatura de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Resuelve:

Artículo 1º.- Designar miembros de la Comisión Legislativa de Receso, establecida durante el período 16 de enero de 2016 al 5 de febrero inclusive, a los legisladores Martínez Myriam; Freites Andrea; Romano Ricardo, Carrasco Noelia, Gómez Marcela, Blanco Pablo, Boyadjian Cristina y Villegas Pablo; para el período comprendido desde el 6 de febrero del 2016 al 29 de febrero inclusive, a los legisladores Bilota Ivandic Federico, Harrigton Claudio, Martínez Allende Liliana, Furlan Ricardo, Rubinos Oscar, Löffler Damián y Urquiza Mónica.
Artículo 2º.- En el caso de que sea necesario modificar los miembros titulares de la Comisión Legislativa de Receso, dicha novedad será informada a la Presidencia de la Cámara mediante nota fundada del bloque político que corresponda.
Artículo 3º.- Regístrese, comuníquese y archívese.”.
Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración la resolución leída por Secretaría. Los que estén por la afirmativa, a mano alzada.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.

- VI -

CIERRE DE SESIÓN

Sr. PRESIDENTE.— Antes de finalizar la sesión, quiero agradecer a todo el personal de la Legislatura provincial porque hemos tenido una sesión maratónica de muchas horas, más de 14, y han brindado toda la colaboración a los señores legisladores. Muchas gracias al personal legislativo.

No habiendo más temas para tratar se levanta la presente sesión especial. *(Aplausos).*

- Son las 05:00.

Andrea Elizabeth RODRÍGUEZ
Secretaria Legislativa

Juan Carlos ARCANDO
Presidente

Marcela Fabiana AMOR
Subdirección de Taquigrafía

ANEXO I

ASUNTOS APROBADOS

- 1 -

Asunto Nº 15/16

Artículo 1º.- Ratificar en todos sus términos la Resolución de Presidencia Nº 13/16, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese y archívese.

- 2 -

Asunto Nº 4/16

Artículo 1º.- Apruébase en todos sus términos el Acuerdo Complementario, registrado bajo el Nº 17.443, referente al Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias Argentinas, celebrado el 25 de noviembre de 2015, entre la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Gobierno Nacional; ratificado mediante Decreto provincial 3012/15.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

- 3 -

Asunto Nº 9/16

Creación de la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF)

Capítulo I
De la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF)

Artículo 1°.- Créase, en el ámbito del Ministerio de Economía de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF) como entidad autárquica en el orden administrativo y financiero, con las competencias fijadas por la presente ley.
El Ministerio de Economía ejercerá, respecto de la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF), la superintendencia general.
Artículo 2°.- Fusiónese en el ámbito de la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF) a las dependencias del Ministerio de Economía que se detallan a continuación:

a) Secretaría de Ingresos Públicos;
b) Subsecretaría de Catastro;
c) Dirección Provincial de Asuntos Dominiales;
d) Dirección Provincial de Catastro;
e) Dirección Provincial de Información Territorial; y la
f) Dirección General de Rentas.

La Agencia de Recaudación Fueguina (AREF) ejercerá todas las competencias, facultades, derechos y obligaciones que le fueran originalmente asignadas a las dependencias fusionadas por la presente ley.

Todas las referencias que las normas legales y reglamentarias vigentes hagan a las dependencias citadas precedentemente, su competencia o autoridades, se considerarán hechas a la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF).

Los cargos y secretarías de las dependencias fusionadas por la presente pasarán a formar parte íntegra de la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF). A tal efecto, se faculta al Ministerio de Economía a reasignar las partidas presupuestarias que correspondan a fin de

dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente párrafo.

Capítulo II
Finalidades y Atribuciones

Artículo 3°.- La Agencia de Recaudación Fueguina (AREF) será el ente de ejecución de la política tributaria de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el que perciba el pago de los cánones, regalías y derechos relacionados conforme lo establecido en la Ley nacional 26.197 o la que en un futuro la reemplace.

La Agencia de Recaudación Fueguina (AREF) es la autoridad de aplicación del Código Fiscal de la Provincia, de la Ley de Catastro, de las disposiciones legales complementarias y toda otra ley fiscal salvo expreso mandato en contrario. Podrá disponer, en cada caso, la investigación y aplicación de sanciones por las infracciones determinadas en las mismas y ejercerá todas las funciones referentes a la determinación, fiscalización, devolución, percepción y ejecución judicial de los tributos y accesorios establecidos por las normas legales y la administración de Catastro e Información Territorial.

Asimismo, podrá recaudar otros ingresos públicos por mandato legal específico, por encargo del Poder Ejecutivo o en virtud de Convenios celebrados con otras entidades públicas nacionales, provinciales o municipales.

Artículo 4°.- Sin perjuicio de las atribuciones conferidas por el artículo 3º, por otras normas legales o las que resulten necesarias para el cumplimiento de su finalidad, la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF) tendrá las siguientes atribuciones:

a) administrar, resolver y aprobar los gastos e inversiones de los recursos asignados a la entidad. A tal fin, podrá proponer la venta de bienes, autorizar, adjudicar y contratar obras y servicios, adquirir bienes bajo cualquier título y modalidad, y aceptar donaciones con o sin cargo;
b) entender en el proceso de negociaciones colectivas de trabajo con las entidades gremiales que representen al personal, con la autorización previa del MINISTERIO DE ECONOMIA, en el marco de lo dispuesto por la Ley provincial 113;
c) solicitar el auxilio de la fuerza pública de los organismos de seguridad nacionales y/o provinciales y requerir de su colaboración para el cumplimiento sus competencias;
d) difundir y comunicar a la población las actividades del Organismo y, especialmente, las normas que dictare y fueran de interés para el universo de contribuyentes de la Provincia. Podrá, entre otras acciones, contratar espacios de publicidad, idear, elaborar y editar publicaciones, y toda acción necesaria para la difusión de las actividades y resultados del organismo, utilizando las partidas del presupuesto propias de la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF);
e) efectuar la suscripción de convenios de colaboración y/o complementación de servicios técnicos especializados con organismos públicos, entes privados y/o mixtos en el ámbito de las materias que hacen a las competencias de la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF);
f) aplicar sanciones disciplinarias a sus agentes de conformidad con las normas legales y reglamentarias respectivas;
g) convenir la realización de acciones conjuntas con organismos municipales, provinciales, nacionales, regionales e internacionales, a los efectos del cumplimiento de la finalidad especificada en el presente ley, sin perjuicio de la observación de los recaudos que sobre el particular exige la legislación vigente;
h) efectuar la suscripción de convenios de colaboración y/o complementación de servicios con organismos públicos estatales nacionales, provinciales o municipales, tendientes a controlar y constatar, en el marco de las acciones de fiscalización que se desarrollen, cuestiones vinculadas a las competencias específicas de dichos organismos. Las citadas acciones de fiscalización podrán desarrollarse exclusivamente con personal de la Agencia de Recaudación

Fueguina (AREF) o en forma conjunta con personal dependiente de los restantes organismos indicados; e

i) todas aquellas funciones que surjan de su misión y las necesarias para su administración interna.

Artículo 5°.- Los actos de administración y la documentación consecuente que respalden la entrada o salida de fondos de la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF) requerirán la previa intervención de su contaduría, sin perjuicio de las acciones que correspondan a los organismos de control previstos en la Constitución Provincial.

Artículo 6°.- Se considerarán agentes de la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF) a todo funcionario, empleado, personal permanente, no permanente o contratado que preste servicios en forma efectiva para la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF), sean sus funciones remuneradas o “ad honórem” y cualquiera sea su nivel jerárquico.

Artículo 7°.- Todos los agentes pertenecientes a la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF) deberán presentar ante dicho organismo, una declaración jurada patrimonial integral en la forma y plazos que se establezca por reglamentación, la que deberá contemplar la situación patrimonial del agente a partir del 1 de enero del año de asunción a sus cargos.

Capítulo III
Dirección y Administración

Artículo 8°.- La Dirección Superior y la Administración de la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF) estarán a cargo de un Director Ejecutivo, que será designado y removido por el Poder Ejecutivo, y tendrá rango y remuneración equivalente al de Secretario.

La duración de su mandato será de cuatro (4) años, pudiendo ser designado por períodos sucesivos de igual duración.

Cuando por cualquier motivo se produjere la vacancia del cargo antes del vencimiento de su mandato, la designación de su reemplazante se hará por el término que reste hasta la finalización del mandato inconcluso.

Artículo 9°.- Son facultades y atribuciones del Director Ejecutivo:

a) representar a la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF) y dictar todos los actos y contratos que se requieran para el funcionamiento, la finalidad y el desenvolvimiento del servicio a la agencia de acuerdo a las disposiciones en vigor;
b) representar al Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur ante las comisiones encargadas de la aplicación del Convenio Multilateral de Impuestos sobre los Ingresos Brutos en carácter de titular y ante la Comisión Federal de Impuestos (CFI) en carácter de suplente;
c) representar al Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur en el Centro de Administraciones Tributarias Subnacionales (CeATS) y en cualquier otro organismo, congreso y/o reuniones de carácter internacional, nacional, provincial, municipal, público, privado y/o mixto en las materias que hacen a la competencia de la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF);
d) conservar la máxima autoridad dentro del organismo y avocarse al conocimiento y decisión de cualquiera de las cuestiones planteadas;
e) administrar y dirigir la actividad de la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF). A tal fin podrá establecer, organizar y aprobar, de acuerdo al presupuesto anual asignado, su estructura orgánica funcional, de administración de personal, sus agentes, el plantel básico correspondiente y el régimen por cumplimiento de metas y objetivos -incluyendo sus propios servicios de contaduría, tesorería y servicios generales que resulten necesarios- y fijar las políticas, el planeamiento estratégico, los programas y criterios generales de conducción del Organismo;
f) proponer, al Poder Ejecutivo y/o Poder Legislativo, las normas que complementen, modifiquen o reglamenten la legislación tributaria provincial y participar en los proyectos de normas elaborados por el Poder Ejecutivo y/o Poder Legislativo cuando las mismas complementen, modifiquen o reglamenten aspectos

relacionados con la legislación tributaria provincial, la administración tributaria y las competencias de la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF);

g) elevar anualmente al Ministerio de Economia los Compromisos de Gestión, el anteproyecto de presupuesto de gastos y el cálculo de recursos para el año siguiente. Rendir anualmente, a dicho Ministerio, los resultados de los Compromisos de Gestión suscriptos para el período así como la Memoria Anual de lo actuado, de acuerdo a la reglamentación que dicho Ministerio dicte;
h) delegar facultades de su competencia en el personal de la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF);
i) designar y remover el personal a su cargo y aplicar medidas disciplinarias conforme las pautas establecidas en la legislación vigente;
j) designar provisoriamente, y limitar en sus funciones, a los funcionarios que ejercen los cargos del agrupamiento jerárquico hasta la cobertura definitiva de los cargos vacantes;
k) Disponer los ascensos y promociones del personal de la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF), previo desarrollo de concursos que garanticen la transparencia y la igualdad de oportunidades;
l) impartir normas generales obligatorias para los responsables y terceros en las materias en que las leyes autorizan a la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF) a reglamentar la situación de aquellos frente a la Administración;
m) interpretar con carácter general las disposiciones de la presente ley y de las normas legales que establecen o rigen la percepción de los gravámenes a cargo de la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF). Asimismo a solicitud de los contribuyentes y/u otros responsables y siempre que el pronunciamiento a dictarse ofrezca interés general, la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF) podrá pronunciarse sobre la interpretación de una norma determinada en un caso concreto. El pedido de dicho pronunciamiento no suspenderá cualquier decisión que los demás funcionarios de la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF) hayan de adoptar en casos particulares;
n) autorizar la recaudación de los tributos por intermedio de instituciones bancarias o agentes, oficiales o privados. Asimismo, podrá designar agentes de percepción, retención, recaudación e información tributaria e implementar y/o diseñar nuevos regímenes;
o) efectuar contrataciones de personal para la realización de labores estacionales, extraordinarias y/o especiales que no puedan realizarse con sus recursos de planta permanente, fijando las condiciones y requisitos de prestación de servicio y su remuneración;
p) iniciar los juicios de ejecución fiscal y solicitar, en los supuestos legalmente autorizados, embargos preventivos por las sumas adeudadas por los contribuyentes, responsables o deudores solidarios debiendo los jueces decretarlo en 24 horas ante el solo pedido y bajo la responsabilidad del Fisco;
q) conceder planes de facilidades de pagos a los contribuyentes o responsables a efectos de regularizar obligaciones tributarias que ellos mantengan con la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF);
r) cumplir y hacer cumplir el secreto fiscal;
s) ejercer la dirección y potestad de remoción de los mandatarios judiciales en los juicios de ejecución fiscal, la que estará a su cargo, en función de la evaluación de su desempeño;
t) nombrar el personal de planta permanente en el ámbito de su dependencia; y
u) toda otra atribución necesaria, compatible con el cargo, para el cumplimiento de las finalidades y funciones del organismo que le asigna la presente ley o establecidas en las normas legales vigentes, a cuyo fin se entenderá que los apartados precedentes no revisten carácter taxativo.

Artículo 10.- Los Compromisos de Gestión consistirán en programas acordados y suscriptos

anualmente por el Director Ejecutivo de la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF) y el Ministerio de Economía. Su finalidad será la de contar con la definición previa del curso de acción a seguir por el organismo y los resultados concretos a alcanzar en materia de cumplimiento de políticas, objetivos y metas, todo ello a efectos de lograr una mayor eficiencia, eficacia y calidad en su gestión.

Artículo 11.- De lo recaudado del artículo 19 inciso a), la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF) detraerá una suma que se llamará Cuenta Incentivo en la cual se acreditará el uno coma cincuenta y seis por ciento (1,56%) del importe mensual de la recaudación fiscal y los ingresos provenientes de las prestaciones a terceros relacionadas con la finalidad del organismo, para su distribución entre sus agentes.

La Cuenta Incentivo tendrá carácter remunerativo y se distribuirá en forma mensual en partes iguales entre todos los agentes, incluyendo al Director Ejecutivo y al personal jerárquico, que presten servicio en la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF) al tiempo de su devengamiento.

Ningún agente podrá percibir en concepto de Cuenta Incentivo una suma superior a su salario bruto mensual percibido en el mes a liquidar y que, a tales efectos, se considerará como máximo del adicional a liquidar a cada agente respectivamente. A este fin, se considerará salario bruto mensual a la remuneración total –excluidos los ítems correspondientes a asignaciones familiares y la presente Cuenta Incentivo- que corresponda percibir a cada agente.

Quedan expresamente excluidos de la Cuenta Incentivo establecida por el presente, los miembros integrantes del Consejo Asesor de Impuestos Provinciales, con excepción del Director Ejecutivo.

El Director Ejecutivo podrá reglamentar el otorgamiento del Incentivo mencionado precedentemente contemplando quitas por inasistencias, indisciplina y otros factores que disminuyan la capacidad operativa de la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF).

Los fondos ingresados y no devengados, el excedente de la suma que integre la Cuenta Incentivo, luego de haberse repartido entre los agentes de acuerdo a la reglamentación vigente, formarán parte íntegra del patrimonio de la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF), en los términos del artículo 19 inciso b).

Artículo 12.- La Agencia de Recaudación Fueguina (AREF) contará con un Consejo Asesor de Impuestos Provinciales y Regalías, con carácter no vinculante, que tendrá como objetivo elaborar un proyecto de coordinación fiscal entre el Estado Provincial y los Estados Municipales. El proyecto buscará evitar la doble imposición de los impuestos y tasas provinciales y/o municipales y mejorar la coordinación e intercambio de información entre los organismos de recaudación en funcionamiento en la Provincia de Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur.

La reglamentación que dictare el Director Ejecutivo determinará las modalidades y procedimientos de funcionamiento del Consejo Asesor de Impuestos Provinciales y Regalías.

Artículo 13.- El Consejo Asesor de Impuestos Provinciales y Regalías Provinciales estará integrado por el Director Ejecutivo –que presidirá el presente Consejo-, un (1) representante del Ministerio de Economía, un (1) representante de la Municipalidad de Ushuaia, un (1) representante Municipalidad de Río Grande, un (1) representante de la Municipalidad de Tolhuin, un (1) representante del Consejo Profesional de Ciencias Económicas y un (1) representante de la Legislatura. La reglamentación a dictarse por el Director Ejecutivo determinará las modalidades, condiciones y el procedimiento a seguir para el funcionamiento, ocupación e implementación de las vacantes.

Se desempeñarán en el cargo durante el período de dos (2) años pudiendo ser re-elegidos.

Artículo 14.- Los miembros del Consejo Asesor de Impuestos Provinciales y Regalías ejercerán sus funciones “ad honórem”.

Artículo 15.- Asimismo, la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF) contará con un Gabinete Asesor que tendrá a su cargo el seguimiento trimestral y la evaluación del cumplimiento de los Compromisos de Gestión asumidos. La reglamentación determinará las modalidades y procedimientos de funcionamiento del Consejo Asesor.

Artículo 16.- El Gabinete Asesor estará integrado por cuatro (4) miembros que tendrán cargo de Sub-secretario provincial. La reglamentación establecerá las modalidades, condiciones y el procedimiento de funcionamiento.

Capítulo IV
Patrimonio, Recursos y Personal

Artículo 17.- La Agencia de Recaudación Fueguina estará sometida al régimen establecido en el artículo 8° inciso a) de la Ley provincial 495 y la Ley provincial 1015 sobre contrataciones.

Artículo 18.- El patrimonio de la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF) estará constituido por la totalidad del patrimonio actual correspondiente a las dependencias fusionadas por la presente medida, por todos los bienes que le asigne el Estado Provincial y por aquellos que le sean transmitidos o adquiera por cualquier causa jurídica válida, quedando afectados los bienes propios o los cedidos en uso, créditos, derechos y obligaciones de las fusionadas y de sus órganos dependientes.

El Poder Ejecutivo queda facultado para transferir, sin cargo, los inmuebles en uso por la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF) y que son propiedad del Estado Provincial.

La Agencia de Recaudación Fueguina (AREF) deberá llevar el inventario general de los bienes en forma actualizada.

Artículo 19.- Para el cumplimiento de sus misiones y funciones, la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF) contará con recursos financieros que serán incluidos en el Presupuesto de la Provincia y que estarán conformados por:

a) una suma equivalente al cuatro coma veinte por ciento (4,20%) de la recaudación fiscal mensual de los tributos y los cánones, regalías y derechos derivados de la Ley nacional 26.197, o la que en un futuro la reemplace, cuya recaudación está a cargo de la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF).

   De lo recaudado por todos estos conceptos se obtendrá la Cuenta Incentivo que se establece en el artículo 11.

   El porcentual establecido en el presente inciso es previa a la coparticipación de recursos con las municipalidades conforme la Ley provincial 892, o la que en un futuro la reemplace, excluidos los ingresos en concepto de coparticipación de impuestos federales;
b) los ingresos provenientes de las prestaciones a terceros relacionados con la finalidad de la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF) y el excedente al que se alude en el artículo 11 in fine;
c) todo recurso adicional establecido en el Presupuesto provincial que determinare el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo;
d) por la venta de publicaciones, formularios y otros bienes y servicios conforme el ordenamiento vigente; y
e) así como cualquier otro ingreso recibido por legado, donación o asignado por otra norma.

La Agencia de Recaudación Fueguina (AREF) tendrá, con arreglo al ordenamiento jurídico, amplias facultades de administración y disposición de los bienes propios y de los recursos asignados.

A tal efecto, el Director Ejecutivo podrá asignar y redistribuir los fondos que le correspondan a la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF), a proyectos, programas, premios, tareas y actividades, así como para determinar la planta de personal, su distribución y la asignación de dotaciones a las distintas unidades del organismo y efectuar las inversiones que resulten necesarias para la mejor consecución de los Compromisos de Gestión asumidos.

Artículo 20.- La Agencia de Recaudación Fueguina (AREF) es titular de todos los recursos enumerados en el artículo anterior; recursos que no podrán ser afectados por ningún Poder del Estado. Los fondos correspondientes que no fuesen utilizados al finalizar el ejercicio pasarán a incrementar los recursos del año siguiente.

Artículo 21.- El Director Ejecutivo elaborará el proyecto de presupuesto de la Agencia de

Recaudación Fueguina (AREF) debiendo observar los principios de transparencia en la gestión, eficiencia y asignación racional en el uso de los recursos.
Artículo 22.- La Agencia de Recaudación Fueguina (AREF) dispondrá de un sistema de contratación de personal por concursos, donde los cargos deberán ser ocupados por quienes surjan de concurso público convocado con la antelación suficiente, conforme lo establezca el Director Ejecutivo y aprobado por el Poder Ejecutivo.
Artículo 23.- Los derechos y obligaciones del personal de la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF) se regirán por las disposiciones de la Ley Marco de Regulación del Empleo Público 22.140. Las condiciones de trabajo, empleo y las relaciones entre empleadores y trabajadores o las organizaciones que los representen, serán establecidas mediante los mecanismos de negociación colectiva previstos en la Ley provincial 113.
Artículo 24.- Derógase la Ley provincial 603.

Capítulo V
Normas Transitorias

Artículo 25.- Al personal proveniente de los organismos mencionados en el artículo 2º que pase a formar parte de la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF), se le asegurará:

a) el reconocimiento de la antigüedad de cada agente en el sector público provincial;
b) el mantenimiento de su retribución al momento de la puesta en vigencia de la Agencia; y
c) la estabilidad de todo el personal de planta permanente al momento de la entrada en vigencia de la presente ley.

El Director Ejecutivo de la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF) podrá disponer la apertura de un período de opción para incorporación voluntaria de agentes provenientes de otras áreas del Estado provincial en caso de juzgarlo necesario y bajo idénticas condiciones de transferencia a las descriptas precedentemente.
Artículo 26.- Facúltase al Ministerio de Economía a efectuar las reasignaciones presupuestarias que se requieran para la puesta en funcionamiento y operación de la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF).
Artículo 27.- Facúltase al Poder Ejecutivo a disponer las medidas necesarias para la implementación y el funcionamiento de la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF), en todos sus aspectos administrativos, presupuestarios y de personal.
Artículo 28.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

- 4 -

Asunto Nº 10/16

Modificación de la Ley Impositiva

Artículo 1º.- Sustitúyese el punto 3 del artículo 9º de la Ley provincial 440, por el siguiente texto:

"3.- Dirección General de Catastro
Establécese que, para la valuación de las tasas retributivas de los servicios que a continuación se detallan, se tomará como base en Unidad de Medida (U.M.) el equivalente al valor de mercado en la Provincia de un (1) litro de nafta súper YPF:

3.1.) Certificados Catastrales:

a) por cada certificado catastral, solicitado por escrito para el otorgamiento de actas notariales, inscripción de declaratorias de herederos, títulos, etc., veinticinco (25) U.M.;
b) por informes, certificados o valuaciones, para cada parcela, veinticinco (25) U.M.;
c) todo trámite urgente, dentro de las setenta y dos (72) horas subsiguientes a la

presentación y con documentación en regla, tributará el doble de la tasa establecida.

3.2.) Copias:

a) por fotocopia de cada foja de una carpeta de antecedentes catastrales, veinte centésimos (0,20) U.M.;
b) por fotocopia de cada plano catastral de manzana (plancheta), diez (10) U.M.;
c) por fotocopia parcial (tamaño A4) de plano de mensura, DOS (02) U.M.

3.3.) Planos de subdivisión en Propiedad Horizontal:

a) por cada unidad funcional o complementaria que se originen en las subdivisiones bajo el Régimen de Propiedad Horizontal, treinta (30) U.M.;
b) por la reforma de planos registrados que no originen nuevas unidades funcionales ni modifiquen las ya existentes, veinte (20) U.M.;
c) cuando la reforma o reformas a introducir en planos registrados sean a efectos de originar nuevas unidades funcionales o complementarias o modificar las ya existentes, se pagará además de lo establecido en el inciso anterior por cada unidad funcional y complementaria que se origine o modifique, veinte (20) U.M.;
d) por pedido de anulación de planos registrados, cuarenta (40) U.M.;
e) por primera visación provisoria de todo plano de mensura y subdivisión para someterla al Régimen de Propiedad Horizontal, treinta (30) U.M.;
f) por reposición de fojas en todo expediente de mensura, por foja, tres (03) U.M.;
g) por pedido de urgente despacho dentro de las setenta y dos (72) horas, cincuenta (50) U.M. por cada unidad funcional o complementaria que origine el plano;
h) por corrección de un plano o registrado para subsanar errores u omisiones imputables al profesional que lo suscribe, cincuenta (50) U.M.;
i) cuando se tramite un plano de subdivisión de un inmueble propiedad del Estado nacional, provincial o municipal, así como sus entes autárquicos que no sea realizado por administración, el profesional deberá abonar las tasas retributivas previstas en esta Ley.

3.4.) Reproducciones:

a) por cada copia de plano reproducida en sistema heliográfico se pagará por superficie, tomando como unidad de medida el tamaño oficio, una tasa de una (01) U.M.;
b) por fotocopia en blanco y negro de aerofotogramas, tres (03) U.M.;
c) por copia heliográfica de hojas de restitución fotogramétrica a escalas 1/1000, 1/5000, 1/10000, por hoja DIEZ (10) U.M.;
d) por graficaciones color parciales de archivos de restitución fotogramétrica o SIG, se pagará por superficie, tomando como unidad de medida el tamaño oficio, una tasa de DOS (02) U.M.;
e) por graficaciones parciales de imágenes satelitales en papel opaco se pagará por superficie, tomando como unidad de medida el tamaño oficio, una tasa de cuatro (04) U.M.;
f) por graficaciones parciales de imágenes satelitales en papel brillante se pagará por superficie, tomando como unidad de medida el tamaño oficio, una tasa de cinco (05) U.M.;
g) por archivos digitales de imágenes satelitales no rectificadas, una (01) U.M. cada 1000 Pixeles;
h) por archivos digitales de imágenes satelitales rectificadas, dos (02) U.M. cada 1000 Pixeles;
i) por archivos digitales de restitución, cien (100) U.M. el primer megabyte de tamaño del archivo sin comprimir y cincuenta (50) U.M. los siguientes megabyte o fracción del mismo.

3.5.) Planos de mensura:

a) por visación provisoria de todo plano de mensura, treinta (30) U.M.;
b) por reposición de fojas en todo expediente de registro de planos, por foja, tres (03) U.M.;
c) por pedido de urgente despacho de expediente de mensura (dentro de las setenta y dos (72) horas), cincuenta (50) U.M. por parcela originada;
d) por cada unidad parcelaria que originen los planos de mensura o subdivisión, a registrar, treinta (30) U.M.;
e) por cada parcela originada que supere una hectárea deberá complementarse la tasa del inciso anterior con un adicional por hectárea de cinco (05) U.M.;
f) por anulación de planos registrados, sesenta (60) U.M.;
g) por corrección de un plano registrado para subsanar errores u omisiones imputables al profesional que lo suscribe, cincuenta (50) U.M.;
h) por ratificación de un plano encuadrado en el Decreto Territorial Nº 348/86, sesenta (60) U.M.;
i) cuando se tramite un plano de mensura de inmueble propiedad del Estado nacional, provincial o municipal, así como de sus entes autárquicos que no sea realizado por administración, el profesional deberá abonar las tasas retributivas previstas en la presente Ley de cinco (05) U.M.,

3.6.) Reingresos - Urgencias:

por cada reingreso de trámites, se abonará el cincuenta por ciento (50%) de la tasa establecida en cada caso.

Por todo trámite urgente, dentro de las setenta y dos (72) horas hábiles subsiguientes a la presentación, con documentación en regla, se tributará el doble de la tasa establecida en los incisos anteriores.

3.7.) Disposiciones generales:

I. Título Ejecutivo: en todos los casos, será suficiente título ejecutivo la Certificación de Multa o la Certificación de Deuda emitida por la Dirección de Catastro.
II. Redondeo: Las fracciones que surjan del resultado de la valuación realizada en unidades de medida deberán absorberse por redondeo a favor del administrado.
III. Cuenta especial y fondo específico: el total de los fondos recaudados serán de carácter específico con destino a gastos operativos y de equipamientos. Se depositarán en una cuenta especial de la Dirección General de Catastro e Información Territorial de la Provincia creada para tal fin.”.

Artículo 2°.- Incorpórese a continuación del Artículo 9° ter de la Ley provincial 440 lo siguiente:

“Tasas Retributivas de Servicios Especiales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

Artículo 9° Quáter.- Por los servicios que a continuación se detallan, prestados por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social o reparticiones que de él dependan, se pagarán las siguientes tasas:

a) Tasa en relación a rúbrica de libros:
1. por rúbrica de libros obligatorios según lo establecido por el artículo 52 de la Ley nacional 20744, por hoja útil, pesos uno ($ 1,00);
2. por rúbrica de hojas móviles de libros según lo establecido por el artículo 52 de la Ley nacional 20744, por hoja, pesos uno ($ 1,00);
3. por rúbrica de libros de actas obligatorios según lo establecido por el artículo 21 de la Ley provincial 90, por libro, pesos trescientos ($300,00);
4. por rúbrica de libros en caso de extravío acompañando certificado expedido por autoridad competente, por libro, pesos seiscientos ($ 600,00);
5. por rúbrica de planillas de control de kilometraje recorrido, por hoja, pesos uno ($ 1,00);
6. por rúbrica de hojas móviles libro de viajantes, según lo establecido en el

artículo 10 de la Ley nacional 14546, por hoja pesos uno ($ 1,00);
7. por rúbrica de libretas de trabajo, por libreta, pesos diez ($ 10,00);
8. por rúbrica de micro fichas, por folio contenido en cada micro ficha, pesos uno ($ 1,00);
9. por rúbrica de Libro de Enfermedades y Accidentes, según lo establecido en el artículo 21, inciso 1.2, Decreto nacional 351/79 reglamentario de la Ley nacional 19587, por Libro, pesos trescientos ($ 300,00);
10. por rúbrica del Libro de Contaminantes Ambientales, según lo establecido en el artículo 38 del Decreto nacional 351/79 reglamentario de la Ley nacional 19587, por Libro, pesos trescientos ($ 300,00).".

Artículo 3º.- Incorpórese, a continuación del artículo 42 Septies de la Ley provincial 440, el siguiente Capítulo:

"Capítulo VI

Fondo De Financiamiento Para El Sistema Previsional

Artículo 42 Octies.- Créese el "Fondo de Financiamiento para el Sistema Previsional" con afectación específica al sostenimiento del sistema previsional de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, el que se integrará

con el producido derivado de una alícuota adicional del Impuesto sobre los Ingresos Brutos del tres por ciento (3,00%), aplicable a las actividades gravadas por dicho Impuesto según el siguiente detalle: 651100, 652110, 652120, 652130, 652200, 652202, 652203, 659810, 659891, 659892, 659910, 659920, 659990, 661110, 661120, 661130, 661210, 661220, 661300, 662000, 671110, 671120, 671130, 671200, 671910, 671920, 671990, 672110, 672191, 672192, 672200, 672201.

Dada la afectación específica de los recursos del presente artículo, los mismos no serán coparticipables a los municipios, considerando asimismo que el sistema previsional los incluye.

La Agencia de Recaudación Fueguina establecerá por vía reglamentaria la forma y condiciones de recaudación de este adicional.".

Artículo 4°.- Establécese que el Capítulo V que incluye a los artículos 43 y 44 de la Ley provincial 440 se denominará: "Capítulo VII- Disposiciones Varias.".

Artículo 5°.- Las disposiciones establecidas en los artículos 1º, 2° y 3° de la presente ley regirán para los hechos imponibles generados a partir del primer día del mes siguiente al de su publicación.

Artículo 6º.- Autorízase al Poder Ejecutivo a elaborar un texto ordenado de la Ley provincial 440.

Artículo 7º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

- 5 -

Asunto Nº 11/16

Código Fiscal
Libro Primero - Parte General

Título Primero
Disposiciones Comunes
Ámbito De Aplicación De Las Normas

Artículo 1º.- Este Código regirá respecto de la determinación, fiscalización, percepción de todos los tributos y aplicación de sanciones por infracciones materiales y formales vinculadas con tributos que se impongan en el ámbito de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur por los organismos de la Administración Central, de acuerdo con las leyes y normas complementarias.

Asimismo, las disposiciones contenidas en el Libro Primero de este Código se aplicarán

supletoriamente a las leyes tributarias especiales.
VIGENCIA DE LAS NORMAS TRIBUTARIAS
Artículo 2º.- Toda ley, decreto, resolución general y decisión de la autoridad de aplicación, cualquiera sea su forma, dictada a los fines previstos en el artículo 1º de este Código tiene vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la provincia, conforme el artículo 112 de la Constitución de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, salvo que la propia norma disponga otra fecha de vigencia.
HECHO IMPONIBLE.
Artículo 3º.- Se considera hecho imponible a todo hecho, acto, operación o situación de vida económica, de los que este Código o las Leyes Tributarias Especiales hagan depender el nacimiento de la obligación tributaria.
NACIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA.
Artículo 4º.- La obligación tributaria nace al producirse el hecho, acto o circunstancia previsto en la ley. Los medios o procedimientos para la determinación de la deuda revisten carácter meramente declarativos.
DE LA INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS LEYES.
Artículo 5°.- En la interpretación de las disposiciones de este Código o de las leyes tributarias sujetas a su régimen, se atenderá al fin de las mismas y a su significación económica. Solo cuando no sea posible establecer el sentido o alcance de las mismas a través del análisis, a través de su texto o de su espíritu, podrá recurrirse a los distintos métodos de interpretación aplicables en el derecho privado.
APLICACIÓN SUPLETORIA.
Artículo 6º.- Para los casos que no puedan ser resueltos por las disposiciones pertinentes de este Código o de una Ley Tributaria especial se recurrirá supletoriamente a las disposiciones de las siguientes normas de acuerdo al orden de prelación que se enumera a continuación, a saber: la Ley nacional 11.683 de Procedimiento Tributario de la Nación y sus modificaciones, la Ley provincial 141 de Procedimiento Administrativo de la Provincia y el Código Procesal Civil, Comercial, Laboral, Rural y Minero de la Provincia.
En caso de insuficiencia de las normas de aplicación supletoria se recurrirá a los principios generales de derecho teniendo en cuenta la finalidad y naturaleza de las normas fiscales.
REALIDAD ECONÓMICA.
Artículo 7º.- Para determinar la verdadera naturaleza de los hechos imponibles se atenderá a los actos, situaciones o relaciones económicas que efectivamente realicen, persigan o establezcan los contribuyentes.
Cuando estos sometan tales actos, situaciones o relaciones a formas y/o estructuras jurídicas que no sean las que el derecho privado prevea o autorice para representar adecuadamente la cabal intención económica y efectiva de los contribuyentes se prescindirá, a los efectos de la consideración del hecho imponible real, de las formas y estructuras jurídicas inadecuadas y se considerará, a los fines de la configuración de la relación tributaria, como encuadradas en las formas o estructuras que el derecho privado les aplicaría con independencia de las escogidas por los contribuyentes.
TÉRMINOS.
Artículo 8º.- Los términos o plazos establecidos en este Código y en las Leyes Tributarias Especiales se refieren a días hábiles administrativos.
Respecto del Título Décimo, el Juicio de Ejecución Fiscal, se refieren a días hábiles judiciales.
Para hacer efectiva la sanción de clausura se computarán días corridos.
Cuando la fecha de vencimiento fijada por leyes, decretos o resoluciones, para la presentación de las declaraciones juradas, pagos de impuestos, anticipos o vencimientos coincida con día no laborable, feriado o inhábil -nacional, provincial o municipal- en el lugar donde deba cumplirse la obligación, el pago o presentación se considerarán realizados en término si se efectúan hasta el primer día hábil siguiente.
En caso de recibirse notificación en día inhábil o feriado se tendrá por efectuada el primer día hábil siguiente.

PLAZO GENERAL SUBSIDIARIO.
Artículo 9º.- Cuando no se haya establecido un plazo especial para las citaciones, intimaciones y emplazamientos, o para cualquier otro acto que requiera la intervención del contribuyente y/o responsable, el mismo será de diez (10) días hábiles, sin perjuicio de la excepción establecida por el artículo 31 de presente Código.
EFECTOS.
Artículo 10.- Los plazos administrativos obligan por igual y sin necesidad de intimación alguna a la Agencia de Recaudación Fueguina, a los funcionarios públicos personalmente y a los interesados en el procedimiento.
SECRETO FISCAL.
Artículo 11.- Las declaraciones juradas, comunicaciones, informes y escritos que los contribuyentes, responsables o terceros presenten ante la Administración son secretos en cuanto en ellos se consignen informaciones referentes a la situación u operaciones económicas de aquellos, a su persona o las de sus familiares.
La información allí expresada no será admitida como prueba en causas judiciales, debiendo los jueces rechazarla de oficio, salvo que sea ofrecida por el mismo contribuyente, responsable o tercero y siempre que no revele datos de terceros o en las cuestiones de familia y en los procesos criminales por delitos comunes cuando aquella se halle directamente relacionada con los hechos que se investiguen.
El deber del secreto no alcanza a la utilización de las informaciones por la Administración para la fiscalización de obligaciones tributarias diferentes de aquellas para las que fueron obtenidas o para su uso con la Unidad de Información Financiera (UIF) o el organismo que en un futuro lo reemplace, ni subsiste, previo acuerdo de reciprocidad, frente a los pedidos de informes de las municipalidades y comunas de la Provincia, del Fisco nacional o de Fiscos provinciales. Tampoco rige el secreto para el supuesto en que, por desconocerse el domicilio del contribuyente o responsable, sea necesario recurrir a la notificación por edictos.
Tampoco rige el secreto fiscal para personas, empresas o entidades a quienes la Administración encomiende la realización de relevamientos, estadísticas, sistemas de computación, procedimiento de información y otras cuestiones para el cumplimiento de sus fines. En este caso, para las entidades o personas intervinientes y para el personal de ellas, rigen las prohibiciones establecidas en este Código y, en el supuesto que divulguen, reproduzcan o utilicen la información suministrada u obtenida con motivo o en ocasión de la tarea encomendada por la Administración serán pasibles de la pena prevista en el artículo 156 del Código Penal. El uso de la facultad establecida en este párrafo debe estar debidamente fundamentada por el Director Ejecutivo.

TÍTULO SEGUNDO
DOMICILIO FISCAL

CONCEPTO.
Artículo 12.- A los efectos de la aplicación de este Código, de las Leyes Tributarias Especiales y normas legales complementarias, se considerará como domicilio fiscal de los contribuyentes y demás responsables de impuestos, tasas o contribuciones los que se establecen en el presente Título, los que serán válidos para todos los efectos administrativos y judiciales.

a) Se entiende por domicilio fiscal de las personas físicas los que se indican a continuación, en el siguiente orden:
a) lugar de residencia permanente o habitual; y
b) subsidiariamente, si hubiera dificultad para su determinación, el lugar en el que ejerzan su actividad comercial, industrial, profesional, establecimiento o medio de vida.
b) Se entiende por domicilio fiscal de las personas jurídicas los que se indican a continuación, en el siguiente orden:
a) lugar dónde se encuentre su dirección o administración; y
b) subsidiariamente, si hubiera dificultad para su determinación, el lugar donde desarrollen su actividad o establecimiento principal. Cuando no coincida con el lugar

donde este situada la dirección, administración o explotación principal y efectiva de sus actividades dentro de la jurisdicción provincial, este último deberá ser el denunciado como domicilio fiscal.

Cuando no se hubiere denunciado el domicilio fiscal y la Agencia de Recaudación Fueguina conociere alguno de los domicilios previstos en el presente artículo o cuando se comprobare que el domicilio denunciado no es el previsto en el presente artículo, o fuere físicamente inexistente, quedare abandonado, desapareciere, o se alterase o suprimiese su numeración y la Agencia de Recaudación Fueguina conociere el lugar de su asiento podrá declararlo de oficio como domicilio fiscal, conforme al procedimiento que determine la reglamentación.

Cuando no fuere posible la determinación del domicilio fiscal por la Agencia de Recaudación Fueguina, conforme a lo previsto en los párrafos anteriores, la Agencia podrá, de oficio, tenerlo por constituido en la sede de la Agencia.

A los efectos de proceder de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo precedente, la Agencia deberá publicar edictos en el Boletín Oficial por dos (2) días.

La autoridad de aplicación podrá establecer mediante la reglamentación pertinente el carácter único del domicilio fiscal para todas las obligaciones tributarias que los contribuyentes y demás responsables mantienen con la Agencia de Recaudación Fueguina.

EFECTOS DEL DOMICILIO FISCAL.

Artículo 13.- El domicilio fiscal produce en el ámbito administrativo los efectos del domicilio constituido, siendo válidas, vinculantes y plenamente eficaces todas las notificaciones, emplazamientos y comunicaciones que allí se practiquen en los términos del artículo 45 de la Ley provincial 141 de Procedimiento Administrativo o la que en un futuro la reemplace.

Sin perjuicio de la facultad otorgada por el artículo 19, puede constituirse domicilio especial al contestar vistas, resoluciones, citaciones, intimaciones y notificaciones siempre que ello no obstaculice la prosecución del trámite administrativo, la determinación y/o percepción de los tributos, según el caso.

DOMICILIO FISCAL ELECTRÓNICO.

Artículo 14.- Se entiende por domicilio fiscal electrónico al sitio informático personalizado, seguro, registrado por los contribuyentes y responsables para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y para la entrega o recepción de comunicaciones de cualquier naturaleza.

Su constitución, implementación, funcionamiento y cambio se efectuará conforme a las formas, requisitos y condiciones que establezca la autoridad de aplicación.

Dicho domicilio producirá en el ámbito administrativo los mismos efectos indicados en el primer párrafo del artículo 13.

La autoridad de aplicación podrá disponer, con relación a aquellos contribuyentes o responsables que evidencien acceso al equipamiento informático necesario, la constitución obligatoria del domicilio fiscal electrónico, conforme lo determine la reglamentación, la que también podrá habilitar a los contribuyentes o responsables interesados para constituir voluntariamente domicilio fiscal electrónico.

DOMICILIO FUERA DE JURISDICCIÓN.

Artículo 15.- Cuando los contribuyentes o demás responsables se domicilien fuera del territorio de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, están obligados a constituir un domicilio tributario dentro de la Provincia.

Si no se cumpliere con lo establecido en precedencia, se considerará como domicilio el último de los domicilios que tenga o haya tenido de acuerdo al artículo 12 o, en defecto, el de su agente o representante en la Provincia.

En caso de tratarse de personas físicas que se inscriban en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos dentro de la categoría Contribuyentes Locales o Régimen Simplificado, se presumirá sin admitir prueba en contrario que, no realizan operaciones que configuren sustento territorial en jurisdicción ajena a esta. En caso de existir sustento territorial en otras jurisdicciones, no podrá solicitar devolución del impuesto abonado en esta jurisdicción.

CAMBIO DE DOMICILIO.

Artículo 16.- Los contribuyentes y responsables están obligados a denunciar cualquier cambio

de domicilio fiscal en la forma que determine la reglamentación dentro de los quince (15) días de efectuado quedando, en caso contrario, sujeto a las sanciones que este Código establezca al respecto. La Agencia únicamente quedará obligada a tener en cuenta el cambio de domicilio si el mismo hubiere sido realizado conforme lo determine la reglamentación, caso contrario, el mismo no surtirá efecto vinculante alguno subsistiendo el anterior, a todos los efectos.
No habiéndose denunciado el cambio de domicilio, y sin perjuicio de las sanciones que correspondan, se reputará subsistente el último domicilio que se haya comunicado, en la forma debida, o que haya sido determinado como tal por la Agencia de Recaudación Fueguina, en ejercicio de las facultades conferidas por este Título.
Si se denunciara el cambio de domicilio de acuerdo a los párrafos precedentes pero, el contribuyente o responsable, tuviere actuaciones administrativas en curso, deberá, además, cumplir con la carga que le impone el artículo a continuación.
COMUNICACIÓN DEL CAMBIO DE DOMICILIO EN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS.
Artículo 17.- Una vez iniciado un trámite, ya sea por la Administración o por un contribuyente, todo cambio del domicilio fiscal, además de ser comunicado de acuerdo con las disposiciones del artículo 16 y las normas dictadas por la Agencia de Recaudación Fueguina, debe denunciarse de modo fehaciente en la actuación correspondiente para que surta plenos efectos legales en esas actuaciones.
Caso contrario, toda notificación se efectuará en el domicilio fiscal conocido en la actuación, cualquiera sea la instancia administrativa del trámite de que se trate. Ello sin perjuicio de la validez del domicilio denunciado conforme el artículo 16 para actuaciones de fecha posterior al cambio de domicilio.
INFORMES PARA OBTENER EL DOMICILIO DEL CONTRIBUYENTE.
Artículo 18.- Cuando a la Agencia de Recaudación Fueguina le resulte necesario conocer el domicilio de un contribuyente y este no surgiere de sus registros podrá requerir informes al Registro Nacional de las Personas, a la Justicia Electoral, a la Dirección de Personas Jurídicas, a la Administración Federal de Ingresos Públicos, organismos fiscales provinciales y, en general, a todo organismo público o privado hábil al efecto.
El domicilio obtenido permitirá cursar las notificaciones que correspondan al responsable y/o apoderado denunciados, quienes más allá de exhibir elementos que prueben su desvinculación del contribuyente no servirán de oposición al cumplimiento si la comunicación que los desvincule no es implementada adjuntando los formularios y demás requisitos exigidos en la forma que la reglamentación determina.
DOMICILIO ESPECIAL.
Artículo 19.- Podrá admitirse la constitución de un domicilio especial cuando se considere que de ese modo se facilita el cumplimiento de las obligaciones.
DOMICILIO POSTAL.
Artículo 20.- Los responsables de los tributos empadronados cuya liquidación este a cargo de la Agencia de Recaudación Fueguina podrán constituir, de modo fehaciente, un domicilio postal en cualquier punto del país a efectos de que le sean remitidas las boletas de gravámenes.
CARACTERÍSTICAS.
Artículo 21.- La constitución del domicilio se hará en forma clara y precisa, indicando calle, número, agregando piso, número o letra del inmueble, código postal, localidad y provincia, así como cualquier otro dato de utilidad a efectos de cursar la notificación o lo que pudiera corresponder.

TÍTULO TERCERO
NOTIFICACIONES

FORMA
Artículo 22.- Las citaciones, notificaciones, intimaciones de pago, etc., serán practicadas en cualquiera de las siguientes formas:

1. por carta documento, por carta certificada con aviso especial de retorno con constancia fehaciente del contenido de la misma. El aviso de recibo o el aviso de

retorno, en su caso, servirá de suficiente prueba de notificación siempre que la carta haya sido entregada en el domicilio fiscal o, de corresponder, en domicilio especial de los contribuyentes y/o responsables, aunque aparezca suscripto por algún tercero;

2. personalmente a través de un empleado de la autoridad de aplicación, y mediante cédula por duplicado en la que estará transcripta la citación, la resolución, intimación de pago, etc., que deba notificarse. Una de las copias la entregará a la persona a la cual deba notificar, o en su defecto, a quien se encuentre en el domicilio. En la otra copia, destinada a ser agregada a las actuaciones respectivas, dejará constancia del lugar, día y hora de la entrega requiriendo la firma del interesado o de la persona que manifieste ser de la casa o dejando constancia de que se negaron a firmar.

Si el interesado no supiese o no pudiera firmar, podrá hacerlo a su ruego un testigo. Cuando no encontrase la persona a la cual va a notificar, o esta se negare a firmar y ninguna de las otras personas de la casa quisiera recibirla la fijará en la puerta de la misma dejando constancia de tal hecho en el ejemplar destinado a ser agregado a las actuaciones respectivas. Las actas labradas por los empleados de la autoridad de aplicación harán plena fe mientras no se acredite su falsedad en los términos del artículo 289 y concordantes del Código Civil y Comercial, o la enumeración que en un futuro lo reemplace;

3. por telegrama colacionado; y
4. por comunicación informática en la forma y condiciones que determine la reglamentación. La notificación se considerará perfeccionada con la puesta a disposición del archivo o registro que la contiene, en el domicilio fiscal electrónico del contribuyente o responsable.

Si las citaciones, notificaciones, intimaciones, etc. no pudieran practicarse en la forma antedicha por no conocerse el domicilio del contribuyente, se efectuarán por medio de edictos publicados durante cinco (5) días en el Boletín Oficial.

EFECTOS.

Artículo 23.- Las notificaciones de los actos y resoluciones dictados por la Agencia de Recaudación Fueguina en ejercicio de sus funciones se tendrán por válidas y vinculantes cuando se hubieren realizado en el domicilio fiscal de los contribuyentes y responsables conforme lo establecido en el Título anterior.

CONTENIDO DE LA NOTIFICACIÓN.

Artículo 24.- Cuando la Administración proceda a notificar a los contribuyentes y/o responsables de la determinación de oficio de tributos y/o el requerimiento del pago de los mismos, deberá hacerse constar en la notificación, citación o intimación la vía impugnativa que tendrá el contribuyente, con indicación expresa del recurso que podrá interponer, los plazos con que cuenta y el detalle de la norma aplicable.

TÍTULO CUARTO
DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LA ADMINISTRACIÓN FISCAL

DENOMINACIÓN. REMISIÓN.

Artículo 25.- Cuando en este Código se mencione la palabra "Dirección", “Agencia”, “Agencia de Recaudación”, “Administración”, “Administración Fiscal”, “Administración Tributaria”, “Autoridad Fiscal” o “Autoridad de Aplicación” se referirá a la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF) o al organismo que en un futuro la remplace, en función de las competencias dispuestas para dicho organismo por el presente Código y por las leyes especiales correspondientes.

FUNCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN FISCAL.

Artículo 26.- La Agencia de Recaudación Fueguina será la encargada de la aplicación del presente Código y las facultades y poderes atribuidos, por este Código, leyes fiscales especiales y normas reglamentarias serán ejercidos por el Director de la Agencia, sin perjuicio de la delegación de facultades y de las facultades que la Constitución Provincial y las leyes atribuyan a otros órganos del Estado.

DE LA REPRESENTACIÓN DE LA AGENCIA.
Artículo 27.- La Agencia de Recaudación Fueguina está a cargo de un Director Ejecutivo que tiene todas las facultades, poderes, atribuciones y deberes asignados a la Agencia, y las que fueren establecidas por Leyes Tributarias Especiales.
Representa a la Agencia, legalmente en forma personal o por delegación, en todos los actos y contratos que se requieran para el funcionamiento del servicio, de acuerdo a las disposiciones en vigor, suscribiendo los documentos públicos y/o privados que sean necesarios.
Esta representación la ejerce ante los poderes públicos, contribuyentes, responsables y terceros.
RESPECTO DE LA DELEGACIÓN DE FACULTADES.
Artículo 28.- El Director Ejecutivo de la Agencia de Recaudación Fueguina podrá, a través de los actos administrativos correspondientes, delegar en los dependientes la suscripción de los actos y/o contratos que estime pertinentes y que se requieran para el funcionamiento del servicio. A su vez, en caso de ausencia y/o impedimento del Director Ejecutivo, el mismo designará al funcionario responsable a cargo de la firma del Despacho.
No obstante la delegación de las competencias dadas por el Director Ejecutivo, este conserva la máxima autoridad dentro de la Agencia y puede, por lo tanto, avocarse al conocimiento y decisión de cualquiera de las cuestiones planteadas.
FACULTADES DE LA ADMINISTRACIÓN FISCAL.
Artículo 29.- Para el cumplimiento de sus funciones la Agencia de Recaudación Fueguina tiene las siguientes obligaciones y facultades:

a) establecer, modificar y reglamentar su organización interna y de personal;
b) dictar e impartir normas generales obligatorias para los responsables y terceros en cuanto a la forma y modo como deban cumplirse los deberes formales así como en las materias en que las leyes autorizan a la Agencia de Recaudación Fueguina a reglamentar la situación de aquellos frente a la Administración Tributaria. La Administración podrá, además, dictar resoluciones generales modificatorias o interpretativas de las normas tributarias cuando así lo estimare conveniente o a solicitud de los contribuyentes y responsables o de cualquier entidad con personería jurídica. El pedido de tal pronunciamiento, en ningún caso, suspenderá cualquier decisión que los funcionarios de la Administración hayan de adoptar en casos particulares.

Dichas resoluciones deberán contener las razones de hecho y de derecho en que se funden, y entrarán en vigor en los términos del artículo 2º del presente Código;

c) responder las consultas vinculantes que los sujetos pasivos y demás obligados tributarios hubiesen formulado de acuerdo a lo establecido en el artículo 38 de este Código;
d) aplicar sanciones, liquidar intereses, actualizaciones, recibir pagos totales o parciales, compensar, acreditar, imputar y disponer la devolución de las sumas pagadas de más;
e) resolver las cuestiones atinentes a las exenciones tributarias y a las vías recursivas previstas en este Código o por Leyes Tributarias Especiales en las cuales sea competente;
f) emitir constancias de deuda para el cobro judicial de los tributos;
g) implementar nuevos regímenes de percepción, retención, información, pagos a cuenta y designar los agentes para que actúen dentro de los diferentes regímenes;
h) conceder planes de facilidades de pagos a contribuyentes o responsables a efectos de regularizar obligaciones que ellos mantengan con la Administración;
i) disponer clausuras de establecimientos cuando se constatare que se hayan configurado uno o más de los hechos u omisiones previstas en el artículo 103 de este Código;
j) hacerse parte o tomar intervención en todo procedimiento judicial o administrativo a los efectos de determinar, verificar o exigir el pago de tributos, tasas, contribuciones y sus actualizaciones, intereses y sanciones;
k) participar en los procesos concursales y aceptar o rechazar, las propuestas de

acuerdo presentadas. Asimismo, adoptar cualquier otra medida que tienda a asegurar y defender los derechos como mejor convenga a los intereses del Estado;

l) tomar intervención en los proyectos de disposiciones legales iniciados por cualquier jurisdicción en el ámbito de la Provincia que se refieran, relacionen o incidan sobre la materia tributaria. Las jurisdicciones que propicien los proyectos deberán dar la pertinente y oportuna intervención de los mismos al Director Ejecutivo de la Agencia;

m) establecer y/o suscribir convenios de cooperación e intercambio de información con organismos estatales municipales, provinciales o nacionales, instituciones privadas y/o sin fines de lucro con el fin de recabar información útil para el cumplimiento de las funciones establecidas en este Código; y

n) denunciar ante el fuero penal la presunta comisión de los delitos tipificados en la Ley nacional 24.769 (B.O Nº 28.564) y sus modificatorias, respecto de los tributos locales, cuando entendiere que se ha ejecutado una conducta punible encuadrable en alguno de los tipos penales contemplados en esa ley.

INCOMPATIBILIDADES.

Artículo 30.- Las personas encargadas de ejercer sus funciones en el ámbito de la Agencia de Recaudación Fueguina, no podrán, bajo ningún carácter o título, asesorar, liquidar y/o realizar, promover o participar en trámites de los contribuyentes que se relacionen directa o indirectamente con los impuestos cuya recaudación está a cargo de dicha Institución, bajo apercibimiento de aplicarse las sanciones previstas en la legislación vigente. Se aplicarán también las sanciones que correspondan cuando el mencionado personal invocando expresamente la representación de la Agencia, dictare o participare en conferencias, debates o similares, relacionadas con tributos provinciales, sin la previa autorización expresa de la Agencia de Recaudación Fueguina.

DE LAS PRESENTACIONES ANTE LA AGENCIA. DOS PRIMERAS.

Artículo 31.- Para determinar si un escrito presentado personalmente en las oficinas de la Administración lo ha sido en término se tomará en cuenta la fecha indicada en el cargo o sello fechador. En caso de duda, deberá estarse a la fecha enunciada en el escrito y si este no la tuviere, se considerará que ha sido presentado en término.

El escrito no presentado dentro del horario administrativo del día en que venciere el término, podrá ser entregado válidamente el día hábil inmediato siguiente y dentro de las dos primeras horas del horario de atención, incluyendo el supuesto contemplado en el artículo siguiente.

ESCRITOS RECIBIDOS POR CORREO.

Artículo 32.- Los escritos recibidos por correo se consideran presentados en la fecha de su imposición en la oficina de correos a cuyo efecto se agregará el sobre sin destruir su sello fechador. En el caso de los telegramas y cartas documento se contará a partir de la fecha de emisión que en ellos conste como tal.

ACTUACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL.

Artículo 33.- La persona que se presente en las actuaciones administrativas que tramiten por ante la Administración por un derecho o interés que no sea propio, deberá acompañar los documentos que acrediten la calidad invocada en la primera presentación. Ante la imposibilidad de acompañar dichos documentos, la Administración Fiscal podrá acordar un plazo razonable para la subsanación de dicho requisito el cual no podrá ser inferior a diez (10) días.

La parte interesada, su apoderado, letrado patrocinante y/o las personas que ellos expresamente autoricen tendrán libre acceso al expediente durante todo su trámite. A tal efecto, los autorizantes deberán denunciar el número de documento nacional de identidad de las personas a las que autorizan a tomar vista del expediente.

FORMAS DE ACREDITAR LA PERSONERÍA.

Artículo 34.- Los representantes o apoderados acreditarán su personería con el instrumento público correspondiente o copia simple del mismo, debidamente suscripta por el mandante, o por escribano público o autoridad competente.

En caso de que dichos instrumentos se encontrasen agregados a otro expediente que tramite ante la Administración bastará la certificación correspondiente.

ACTA PODER.
Artículo 35.- El mandato también podrá otorgarse por acta ante la Agencia de Recaudación Fueguina, la que contendrá una simple relación de la identidad y domicilio del compareciente, designación de la persona del mandatario, mención de la facultad de percibir sumas de dinero u otra facultad especial que se le confiera para actuar ante la Administración.
GESTIÓN. ACTOS URGENTES.
Artículo 36.- Cuando sea necesario la realización de actos urgentes de cualquier naturaleza y existan hechos o circunstancias que impidan la actuación de la parte que ha de cumplirlos, se admitirá la comparecencia de quien no tuviere representación conferida.
Si dentro de los treinta (30) días, contados desde la primera presentación del gestor, no fueren acompañados los instrumentos que acreditan su personería como apoderado o la parte no ratificase todo lo actuado por el gestor, se tendrán por no realizados los actos en los cuales este haya intervenido, a sus efectos.
ALCANCES DE REPRESENTACIÓN.
Artículo 37.- Desde el momento en que el mandato se presenta a la autoridad administrativa y esta admita la personería, el representante asume todas las responsabilidades que las leyes le imponen y sus actos obligan al mandante como si personalmente los hubiere practicado. Esta obligado a continuar la gestión mientras no haya cesado legalmente en su mandato y con él se entenderán los emplazamientos, citaciones y notificaciones, incluso las de las decisiones de carácter definitivo, salvo las actuaciones que la ley disponga se notifiquen al mismo mandante o que tengan por objeto su comparendo personal.
CONSULTA VINCULANTE. CONCEPTO.
Artículo 38.- Los sujetos pasivos y demás obligados tributarios, que tuvieran un interés personal y directo, podrán formular ante la Agencia consultas vinculantes debidamente documentadas, sobre la determinación de los impuestos cuya recaudación se encuentra a cargo de dicho organismo y/o sobre la aplicación del derecho a una situación actual y real. A tal efecto, deberá exponer con claridad y precisión todos los elementos constitutivos de la situación que motiva la consulta y podrá, asimismo, expresar su opinión fundada.
La consulta deberá presentarse conforme las condiciones reglamentarias que, a tal efecto, dicte la mencionada Agencia, debiendo ser contestada en un plazo que no deberá exceder el término de sesenta (60) días, contados a partir de la fecha de notificación al contribuyente de la admisibilidad formal de la consulta vinculante.
En caso de requerirse informes o dictámenes de otros organismos, o de resultar pertinente solicitar al consultante el aporte de nuevos elementos necesarios para la contestación de la consulta, el plazo se suspenderá hasta tanto dichos requerimientos sean respondidos o venzan los plazos para hacerlo. Si dentro del plazo requerido, el consultante no cumpliere con la requisitoria, el pedido se considerara denegado y remitido para su archivo.
La presentación de la consulta no suspenderá el transcurso de los plazos ni justificará, en modo alguno, el incumplimiento de los obligados.
IMPEDIMENTOS DE DERECHO.
Artículo 39.- No podrán someterse al régimen de consulta vinculante los hechos imponibles o situaciones que a continuación se describen:

1. se vinculen con la interpretación de aspectos cuya competencia le corresponda a los organismos del Convenio Multilateral y/o la Comisión Federal de Impuestos;
2. se refieran a la aplicación o interpretación de regímenes de retención, percepción y/o recaudación establecidos;
3. se hallen sometidos a un procedimiento de fiscalización debidamente notificado al contribuyente o responsable, respecto del mismo gravamen por el que se pretende efectuar la consulta, o esta última se refiera a temas relacionados con una determinación de oficio o de deuda en trámite, o un recurso impugnativo interpuesto en sede administrativa, judicial u organismos interjurisdiccionales. Este impedimento operará aun cuando la fiscalización, determinación o recurso se refiera a períodos fiscales distintos al involucrado en la consulta; y
4. se hallen sometidos a juicios de ejecución fiscal, respecto del mismo gravamen, aun

cuando se refieran a períodos fiscales distintos por el que se pretende efectuar la consulta. Tratándose del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, dicha exclusión resulta de aplicación cuando la materia consultada pueda relacionarse con la deuda ejecutada.

EFECTOS DE SU PLANTEAMIENTO.

Artículo 40.- La consulta y su respectiva respuesta vinculará, exclusivamente, al consultante y a la Agencia con relación al caso estrictamente consultado, en tanto no se hubieren alterado los antecedentes, circunstancias y datos suministrados en otra oportunidad de evacuarse la misma o se modifique la legislación vigente.

La Administración estará obligada a aplicar, respecto al consultante, el criterio técnico sustentado en la contestación. Sin perjuicio de ello, la respuesta emitida podrá ser revisada, modificada y/o dejada sin efecto de oficio y en cualquier momento por la Agencia. El cambio surtirá efectos respecto de los consultantes, únicamente con relación a hechos imponibles que se produzcan a partir de la notificación del acto que dispuso su revocación y/o modificación.

Las contestaciones por parte de la Administración serán vinculantes para ella y quién las formule siempre que se establezca en la presentación el carácter vinculante de la misma. La omisión trae como efecto que, en los términos previstos en los artículos precedentes, la consulta tendrá carácter meramente informativo y, lo allí resuelto, no será vinculante para la Administración.

RECURSO JERÁRQUICO.

Artículo 41.- Contra la respuesta emitida por la autoridad competente, el consultante podrá interponerse recurso jerárquico ante el Ministerio de Economía dentro de los quince (15) días de notificada la resolución. En el recurso deberá presentarse ante la Administración y deberá ser fundado en ese mismo acto. La Dirección elevará las actuaciones para que el Ministerio de Economía dicte resolución definitiva dentro de los ciento veinte (120) días de recepcionado el expediente en el área pertinente.

TÍTULO QUINTO
DE LOS SUJETOS PASIVOS DE LAS OBLIGACIONES FISCALES

CONTRIBUYENTES.

Artículo 42.- Son contribuyentes, y están obligados a ingresar el tributo correspondiente como responsables del cumplimiento de las obligaciones propias en la forma y oportunidad debida así como cumplir con los restantes deberes que le impongan las disposiciones en vigor, siempre que se verifique, a su respecto, el hecho generador de la obligación tributaria previsto en este Código o las leyes tributarias especiales, los siguientes:

1. las personas físicas, capaces o incapaces, según el Código Civil y Comercial;
2. las personas jurídicas de carácter público o privado del Código Civil y Comercial;
3. todas aquellas entidades a las que el derecho privado reconoce la calidad de sujetos de derecho, incluso las organizadas bajo la Ley nacional 20.337;
4. las entidades que no poseen la calidad prevista en el inciso anterior, los patrimonios destinados a un fin determinado, las Uniones Transitorias de Empresas, las Agrupaciones de Colaboración Empresaria, los demás consorcios y formas asociativas que no tienen personería jurídica pero que son considerados por las normas tributarias como unidades económicas para la atribución del hecho imponible. En tales casos y cuando corresponda, deben inscribirse incorporando el nombre de todos sus integrantes;
5. las sociedades no constituidas según lo dispuesto en el Capítulo III –tres- de la Ley General de Sociedades conforme Leyes nacionales 26.994 y 27.077, o la que en un futuro la reemplace, deben inscribirse a nombre de todos sus integrantes;
6. los fideicomisos que se constituyan de acuerdo a lo establecido en la Ley nacional 24.441, excepto los constituidos con fines de garantía; y
7. las sucesiones indivisas, hasta la declaratoria de herederos o se declare la validez del testamento que cumpla la misma finalidad.

La Agencia de Recaudación Fueguina se encuentra facultada para calificar a los sujetos pasivos, categorizarlos y crear un Registro Especial a fin de obtener un estricto control de las actividades y/u operaciones que efectúen.

PLURALIDAD DE PERSONAS REALIZANDO UN MISMO ACTO.

Artículo 43.- Cuando un mismo acto, operación o situación que origine obligaciones fiscales sea realizado o se verifique respecto de dos (2) o más personas, todas serán consideradas como contribuyentes por igual y obligadas solidariamente al pago del gravamen en su totalidad. Ello sin perjuicio del derecho de la Administración de dividir la obligación a cargo de cada una de ellas.

CONJUNTO ECONÓMICO.

Artículo 44.- Los actos, operaciones o situaciones en que interviniese una persona o entidad se atribuirán también a otra persona o entidad con la cual aquella tenga vinculaciones económicas o jurídicas, cuando de la naturaleza de esas vinculaciones resultare que ambas personas o entidades pueden ser consideradas como constituyendo una unidad o conjunto económico que hubiere sido adoptado exclusivamente para eludir en todo o en parte obligaciones fiscales. En este caso, ambas personas o entidades se considerarán como contribuyentes codeudores de los gravámenes con responsabilidad solidaria y total.

RESPONSABLES.

Artículo 45.- Son responsables, y están obligados a ingresar el tributo correspondiente como responsables del cumplimiento por deuda ajena en la forma y oportunidad debida que corresponda así como a cumplir con los restantes deberes que le impongan las disposiciones en vigor:

a) el cónyuge, que percibe y dispone de todos los réditos propios del otro;
b) los padres, tutores o curadores de los incapaces o inhabilitados, total o parcialmente;
c) los síndicos designados en los concursos preventivos o quiebras y los liquidadores de entidades financieras regidas por la Ley nacional 21.526 o de otros entes cuyos regímenes legales prevean similar procedimiento, representantes de las sociedades en liquidación, los albaceas o administradores legales o judiciales de las sucesiones y, a falta de éstos, el cónyuge supérstite y los herederos;
d) los directores, gerentes y demás representantes, fiduciarios y administradores de las personas jurídicas, sociedades, asociaciones, entidades, empresas y patrimonios a que se refiere el artículo 42 de este Código;
e) los administradores de patrimonios, empresas o bienes, que en ejercicio de sus funciones puedan determinar la materia imponible que gravan las respectivas normas tributarias con relación a los titulares de aquéllos y pagar el gravamen correspondiente; y en las mismas condiciones los mandatarios con facultad de percibir dinero;
f) los agentes de retención, recaudación o de percepción de los impuestos;
g) los fiduciarios en las operaciones de fideicomiso previstas en la Ley nacional 24.441, cuando el fideicomiso sea sujeto del impuesto según lo dispuesto en el apartado 6 del artículo 42 de este Código;
h) los responsables sustitutos en la forma y oportunidad que, para cada caso, se estipule en las respectivas normas de aplicación;
i) los mandatarios y/o presentantes de trámites ante los registros de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios (DNRPA) y los que por sus funciones públicas o por razón de su actividad, oficio o profesión, intervengan en actos u operaciones sujetos a impuesto, tasas o contribuciones, o respecto de los bienes que administren y dispongan;
j) los que trasladen o transporten en forma onerosa o gratuita, habitual u ocasional, mercaderías, productos y/o todo tipo de cargas propias o ajenas, sujetas a impuestos, tasas o contribuciones, entre dos o más puntos dentro del territorio provincial, o que provengan desde otra jurisdicción provincial o nacional con destino a un punto o varios del territorio de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur;

k) los usufructuarios de bienes muebles o inmuebles sujetos al impuesto correspondiente; y
l) los terceros que, incluso cuando no tuvieran deberes tributarios a su cargo, faciliten con su culpa o dolo la evasión del tributo.

EFECTOS DE LA RESPONSABILIDAD: “LA SOLIDARIDAD”.

Artículo 46.- Los responsables indicados en el artículo precedente, por otras disposiciones del Código o en virtud de leyes especiales responden en forma solidaria e ilimitada con el contribuyente por el pago de los gravámenes. A tal efecto, debe seguirse el procedimiento establecido en el artículo 51 de este Código.

Los indicados en los incisos d) y e) del artículo precedente, se eximirán de esta responsabilidad solidaria si acreditan haber exigido de los sujetos pasivos de los gravámenes los fondos necesarios para el pago y que estos los colocaron en la imposibilidad de cumplimiento en forma correcta y tempestiva.

Los responsables indicados en el inciso f) del artículo precedente, se eximirán si acreditan fehacientemente que el contribuyente o responsable ha extinguido la obligación tributaria. La retención, percepción o recaudación oportunamente practicada libera al contribuyente principal de toda consecuencia siempre que pueda acreditar fehacientemente la retención, percepción o recaudación que se le hubiera realizado.

En todos los casos, los convenios referidos a obligaciones tributarias realizados entre los contribuyentes y responsables o entre estos y terceros de ningún modo son oponibles al Fisco.

RESPONSABILIDAD POR LOS DEPENDIENTES O SUBORDINADOS.

Artículo 47.- Los contribuyentes o responsables responden por las consecuencias de los hechos y omisiones de sus factores, agentes o dependientes, incluyendo las sanciones, gastos y honorarios consiguientes. La responsabilidad aludida es la establecida en el artículo 46 de este Código.

RESPONSABILIDAD DE LOS SÍNDICOS Y LIQUIDADORES.

Artículo 48.- Los síndicos designados en los concursos preventivos y en las quiebras y los liquidadores de entidades financieras regidas por la Ley nacional 21.526 o de otros entes cuyos regímenes legales prevean similares procedimientos, deberán dentro de los treinta (30) días corridos de haber aceptado su designación informar a la Administración la nómina de los bienes inmuebles y muebles registrables, indicando los períodos por los que los mismos registren deudas.

Tratándose del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, los síndicos o liquidadores deberán suministrar la información que surja de la documentación de los fallidos o liquidados por todos los períodos fiscales no prescriptos.

En caso de incumplimiento de estas obligaciones, serán considerados responsables por la totalidad del gravamen que resultare adeudado conforme el artículo 46 de este Código.

SUCESORES A TÍTULO PARTICULAR DE EMPRESAS, EXPLOTACIONES O BIENES.

Artículo 49.- Los sucesores a título particular en el activo y pasivo de empresas o explotaciones o en bienes que constituyan el objeto de hechos imponibles o servicios retribuibles o beneficios que originen contribuciones, responderán solidariamente con el contribuyente y demás responsables por el pago de impuestos, tasas y contribuciones, con sus accesorios. La responsabilidad de los adquirentes cesará:

a) cuando la Administración hubiere expedido certificación de no adeudarse ningún impuesto, tasa o contribución, según corresponda; y
b) a los ciento ochenta (180) días de efectuada la denuncia del acto jurídico de transferencia ante la Administración si, al vencimiento de dicho plazo, ésta no hubiese expedido el certificado aludido en el inciso a).

La responsabilidad a la que alude el presente artículo es la establecida en el artículo 46 del presente Código.

RESPONSABILIDAD DEL CONSUMIDOR FINAL

Artículo 50.- Es obligación del tercero particular que intervenga en actos u operaciones sujetas a impuestos, cuyo monto total sea superior a PESOS VEINTE ($ 20), o al monto que fije la

Agencia de Recaudación Fueguina, exigir al contribuyente la emisión y entrega del comprobante que corresponda a cada tipo de acto u operación y exhibirlos cuando lo requiera un funcionario de la Agencia de Recaudación Fueguina.
Entiéndase por tercero particular la persona física o jurídica que participe como contratante del contribuyente, por sí o por otro, en cualquiera de las etapas del proceso de industrialización y/o comercialización de bienes y servicios.
El incumplimiento de dicha obligación hará pasible al tercero particular de asumir el carácter de responsable solidario del impuesto debiendo abonar el importe del tributo cuyo monto surge de la alícuota que sea aplicable a la operación que da origen al hecho imponible, sin perjuicio de la multa prevista por el artículo 101 de conformidad con lo que reglamente la Agencia de Recaudación Fueguina.
Sin perjuicio de todo ello, es obligación del contribuyente fijar en lugar visible y de modo claro las disposiciones precedentes para que pueda ser leída por el tercero particular contratante. En caso de incumplimiento tendrá la sanción establecida en el artículo 101 de este Código, de acuerdo con lo que reglamente la Agencia de Recaudación Fueguina.
La sanción al que haya incumplido el deber de emitir o entregar facturas o comprobantes equivalentes será un requisito previo para que recaiga sanción al consumidor final por la misma omisión.
PROCEDIMIENTO PARA HACER EFECTIVA LA SOLIDARIDAD.
Artículo 51.- El procedimiento para hacer efectiva la solidaridad establecida en el artículo 46 deberá promoverse contra todos los responsables a quienes se pretende obligar, debiendo extenderse los procedimientos administrativos a todos los involucrados de acuerdo a lo establecido en el artículo 62 del presente Código.
SOLIDARIDAD. EFECTOS.
Artículo 52.- Los efectos de la solidaridad son los siguientes:

1. la obligación puede ser exigida, total o parcialmente, a cualquiera de los deudores, a elección del sujeto pasivo;
2. el pago efectuado por uno de los deudores libera a los demás;
3. el cumplimiento de un deber formal por parte de uno de los obligados no libera a los demás cuando sea de utilidad para el sujeto activo que los otros obligados lo cumplan;
4. la extensión o remisión de las obligaciones libera a todos los deudores salvo que el beneficio haya sido concedido a determinada persona. En este caso el sujeto activo podrá exigir el cumplimiento a los demás con deducción de la parte proporcional al beneficiado; y
5. cualquier interrupción o suspensión de la prescripción, caducidad o cosa juzgada favorece o perjudica a los demás.

TÍTULO SEXTO
DETERMINACIÓN Y PERCEPCIÓN DE LOS TRIBUTOS

DETERMINACIÓN DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA.
Artículo 53.- La determinación de las obligaciones tributarias se efectuará en base a o mediante:

a) declaraciones juradas que los contribuyentes, responsables o terceros deberán presentar a la autoridad de aplicación, sea en soporte papel, por medios electrónicos o magnéticos;
b) datos que la Agencia posea y utilice para efectuar la determinación o liquidación administrativa, según lo establecido con carácter general para el gravamen de que se trate;
c) exhibición de los documentos que sean pertinentes;y
d) procedimiento de determinación de oficio.

La declaración jurada deberá contener todos los datos y elementos necesarios para hacer conocer el hecho imponible realizado y el monto del tributo. La información estará resguardada por el artículo 11 de este Código.
Cuando la Agencia de Recaudación Fueguina lo juzgue necesario podrá también hacer

extensiva la obligación impuesta en este artículo a los terceros que de cualquier modo intervengan en las operaciones o transacciones de los contribuyentes y demás responsables, que estén vinculados a los hechos gravados por las leyes respectivas.

LIQUIDACIONES EXPEDIDAS MEDIANTE SISTEMAS DE COMPUTACIÓN.

Artículo 54.- Las liquidaciones de impuestos previstas en el artículo anterior así como las de intereses resarcitorios, punitorios y anticipos pueden expedirse por la Agencia de Recaudación Fueguina mediante sistemas de computación, por medios electrónicos o magnéticos y constituirán título suficiente a los efectos de la intimación de pago de los mismos si contienen la sola impresión del nombre y cargo del Juez administrativo.

OBLIGATORIEDAD DE PAGO. FACULTAD VERIFICATORIA. DECLARACIONES JURADAS RECTIFICATIVAS.

Artículo 55.- La declaración jurada presentada por el contribuyente o responsable obliga al declarante al pago de la suma allí indicada, cuyo monto no podrá reducir por declaraciones posteriores salvo por errores de cálculo cometidos en la misma. Sin perjuicio de ello, la declaración jurada presentada estará sujeta a verificación administrativa.

El contribuyente o responsable podrá presentar la declaración jurada rectificativa si antes no se hubiera determinado de oficio la obligación tributaria o se hubiesen reconocido los cargos formulados en el proceso de fiscalización.

FORMACIÓN DEL SALDO DE DECLARACIÓN JURADA.

Artículo 56.- El importe de impuesto que deben abonar los contribuyentes o responsables en las circunstancias previstas por el artículo 61 y siguientes será el que resulte de deducir del total del gravamen correspondiente al período fiscal que se declare, las cantidades pagadas a cuenta del mismo, las retenciones sufridas por hechos gravados cuya denuncia incluya la Declaración Jurada y los saldos favorables ya acreditados por la Agencia de Recaudación Fueguina o que el propio responsable hubiera consignado en declaraciones juradas anteriores, en cuanto estas no hayan sido impugnadas.

Sin la conformidad de la Agencia de Recaudación Fueguina no podrán los responsables deducir, del impuesto que les corresponda abonar, otras cantidades que las provenientes de los conceptos indicados.

IMPORTES IMPROCEDENTES. LA INTIMACIÓN DE PAGO.

Artículo 57.- Cuando en la Declaración Jurada el contribuyente o responsable compute contra el impuesto determinado conceptos o importes improcedentes, tales como retenciones, percepciones, pagos a cuenta, acreditaciones de saldos a favor y/o cuando aplique alícuotas que no se correspondan con las establecidas en la Ley Impositiva del período que se trate para la actividad declarada, no procederá para su impugnación el procedimiento establecido en los artículos 62 y siguientes de este Código, sino que bastará la simple intimación de pago de los conceptos reclamados o la diferencia que generen en el resultado de dicha Declaración Jurada.

Para el supuesto en el que los agentes de retención, percepción o recaudación –habiendo practicado la retención, percepción o recaudación correspondiente- hubieran presentado declaraciones juradas determinativas o informativas de su situación frente al gravamen de que se trate o, alternativamente, la Administración constatare la retención o percepción practicada a través de los pertinentes certificados en cuyo caso no será de aplicación el procedimiento establecido por los artículos 62 y siguientes, bastando la simple intimación de pago.

En todos los casos, sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder.

PERCEPCIÓN EN LA FUENTE.

Artículo 58.- La percepción de los tributos se hará en la misma fuente cuando así lo establezcan las leyes impositivas o cuando la Agencia de Recaudación Fueguina, por considerarlo conveniente y mediante resolución fundada, disponga qué personas y en qué casos intervendrán como agentes de retención y/o percepción.

En caso de incumplimiento resultarán de aplicación las disposiciones de los artículos 82, 83, 88 y 101, en caso de corresponder y artículos concordantes.

DETERMINACIÓN SOBRE BASE CIERTA.

Artículo 59.- La determinación de oficio se practicará sobre base cierta cuando el

contribuyente o los responsables suministren a la Agencia de Recaudación Fueguina todos los elementos comprobatorios de las operaciones o situaciones que constituyen hechos imponibles o cuando las normas fiscales establezcan taxativamente los hechos y circunstancias que la autoridad de aplicación debe tener en cuenta a los fines de la determinación.

DETERMINACIÓN SOBRE BASE PRESUNTA.

Artículo 60.- Cuando no se cumplan las condiciones establecidas en el artículo anterior, la Agencia de Recaudación Fueguina practicará la determinación de oficio sobre base presunta considerando todos los hechos y circunstancias que, por su vinculación o conexión con las normas fiscales, se conceptúen como hecho imponible y permitan inducir en el caso particular la procedencia y el monto del gravamen.

La determinación de oficio sobre base presunta se efectuará también cuando de hechos conocidos se presuma que hubiera habido hechos imponibles, y su posible magnitud, por los cuales se hubiere omitido el pago de los impuestos.

En las determinaciones de oficio sobre base presunta podrán aplicarse los promedios y coeficientes generales que a tal fin establezca la Agencia de Recaudación Fueguina en relación a explotaciones de un mismo género conforme lo establecido en el artículo 65 de este Código.

DETERMINACIÓN DE OFICIO. LIQUIDACIÓN ADMINISTRATIVA.

Artículo 61.- Cuando no se hayan presentado declaraciones juradas o resulten impugnables las presentadas, la Agencia de Recaudación Fueguina procederá a determinar de oficio la materia imponible o el quebranto impositivo, en su caso, y a liquidar el gravamen correspondiente, sea en forma directa por conocimiento cierto de dicha materia, sea mediante estimación si los elementos conocidos solo permiten presumir la existencia y magnitud de aquélla.

Las liquidaciones y actuaciones practicadas por los inspectores y demás empleados que intervienen en la fiscalización de los tributos, no constituyen determinación administrativa de aquellos, la que solo compete a los funcionarios que ejercen las atribuciones de jueces administrativos.

Cuando se trate de liquidaciones administrativas el responsable podrá manifestar su disconformidad antes del vencimiento general del gravamen; no obstante ello, cuando no se hubiere recibido la liquidación quince (15) días antes del vencimiento, el término para hacer aquella manifestación se extenderá hasta quince (15) días después de recibida. El rechazo del reclamo autorizará al responsable a interponer los recursos previstos en el artículo 148 en la forma allí establecida.

Por cada notificación que practique la Administración, conformadas o no por el contribuyente, se abonará un cargo que será fijado por la Ley Impositiva y reglamentado por el Director Ejecutivo.

También se aplicará un cargo por cada notificación que requiera de la presentación de declaraciones juradas o documentación equivalente por la que se abonará un cargo que será fijado por la Ley Impositiva y reglamentado por el Director Ejecutivo.

PROCEDIMIENTO DE DETERMINACIÓN DE OFICIO.

Artículo 62.- El procedimiento que determine, total o parcialmente, la obligación tributaria se iniciará por la Administración que correrá vista al contribuyente o responsable de las actuaciones administrativas y de las impugnaciones o cargos que se le formulen proporcionando detallado fundamento de los mismos por el término de quince (15) días.

Reconociendo, negando u observando los hechos y el derecho controvertido, dentro del plazo establecido en el párrafo precedente el cual podrá ser prorrogado por otro lapso igual y por única vez, el contribuyente o responsable deberá contestar la vista: descargo. En este acto deberá acompañarse, conjuntamente, la prueba documental y ofrecerse los restantes medios probatorios que hagan a su derecho. No será admisible la prueba testimonial. Podrá agregar informes, certificaciones o pericias producidas por profesionales con título habilitante. Si no compareciera dentro del plazo fijado, las actuaciones continuarán en rebeldía.

La Administración abrirá la causa a prueba disponiendo la producción y/o desestimando

aquella que resulta inconducente, improcedente o meramente dilatoria. El interesado dispondrá para la producción de la prueba del término que a tal efecto le fije la Administración y bajo ningún supuesto podrá ser inferior a quince (15) ni mayor a sesenta (60) días.
La Agencia podrá disponer medidas para mejor proveer en cualquier estado del trámite con notificación al interesado.
La prueba no ofrecida o acompañada al momento de presentarse el descargo no puede ser ofrecida en las instancias posteriores, salvo la referida a hechos nuevos no contemplados en la vista o a la necesaria para refutar el resultado de medidas para mejor proveer. Esta limitación no será aplicable en materia sancionatoria.
Vencido el término probatorio o cumplidas las medidas para mejor proveer, la Administración dictará, dentro del plazo de noventa (90) días, resolución fundada determinando el tributo e intimando el pago. No habiéndose abierto a prueba, la Administración deberá dictar resolución en el mismo plazo, a contar desde la presentación del descargo o desde la fecha de vencimiento para formular descargo cuando se hallare en rebeldía, la causa sea de puro derecho o la prueba ofrecida improcedente.
Vencido los términos indicados precedentemente sin que la Administración dicte la resolución determinativa, el contribuyente o responsable podrá requerir pronto despacho. Recibido el requerimiento de pronto despacho, la Administración deberá dictar la resolución determinando el tributo e intimando al pago dentro del plazo de quince (15) días. No habiéndose dictado la resolución en el plazo antedicho, caducará el procedimiento sin perjuicio de la validez de las actuaciones administrativas realizadas. En este supuesto, la Agencia de Recaudación Fueguina podrá iniciar, por una única vez, un nuevo proceso de determinación de oficio, previa autorización del titular de la Agencia de Recaudación Fueguina, de lo que se dará conocimiento dentro del término de diez (10) días al ente que ejerza la superintendencia respecto de la Administración, con expresión de las razones que motivaron el evento y las medidas adoptadas en el orden interno.
No será necesario dictar resolución determinando la obligación tributaria e intimando al pago si, antes de ese acto, prestase el contribuyente o responsable su conformidad con las impugnaciones o cargos formulados, la que surtirá entonces los efectos de una declaración jurada para el responsable y de una determinación de oficio para la Administración.
Si la disconformidad ocurriere en cuanto a errores de cálculo respecto de las liquidaciones administrativas practicadas por la Agencia de Recaudación Fueguina dicha disconformidad se resolverá sin sustanciación. Si la disconformidad se refiere a cuestiones conceptuales deberá estarse al procedimiento establecido en el presente Artículo.
En los casos en que exista determinación de oficio, total o parcial, la notificación de la resolución deberá ajustarse a lo establecido en el artículo 23 del presente Código. Asimismo, el contribuyente o responsable podrá interponer el recurso previsto en el artículo 148 del presente; caso contrario, surtirá el efecto establecido en el artículo presedente.
MODIFICACIÓN Y EFECTOS DE LA DETERMINACIÓN DE OFICIO.
Artículo 63.- La resolución que determina de oficio la obligación tributaria adquirirá firmeza vencido el término de quince (15) días desde la notificación al contribuyente o responsable salvo que se interponga contra ella el recurso previsto en el artículo 148 del presente Código.
Válidamente notificada, la resolución determinativa, solo podrá ser modificada cuando en la resolución respectiva se hubiera dejado expresa constancia del carácter parcial de la determinación realizada y de los aspectos fiscalizados o cuando surjan nuevos elementos de juicio, se descubran errores, omisiones o fraudes en la exhibición o consideración de los datos o elementos que sirvieron de base para la determinación por la autoridad de aplicación.
PAGO PROVISORIO DE IMPUESTOS VENCIDOS.
Artículo 64.- En aquellos supuestos en que los contribuyentes o responsables no ingresen uno o más de los anticipos fiscales liquidados por la Agencia de Recaudación Fueguina, esta podrá requerirles el pago de los mismos por vía de apremio.
Asimismo, en los casos de contribuyentes o responsables que liquiden el impuesto sobre la base de declaraciones juradas y omitan la presentación de las mismas por uno o más anticipos fiscales y cuando la autoridad de aplicación conozca por declaraciones o

determinaciones de oficio la medida en que les ha correspondido tributar total o parcialmente gravamen en períodos anteriores, sobre la base de los anticipos o los saldos de declaración jurada efectivamente ingresados, los emplazará para que en el término de diez (10) días presenten las declaraciones juradas e ingresen el tributo correspondiente.
No habiéndose cumplido con dicha intimación podrá requerirles, sin otro trámite por vía de apremio el pago a cuenta del gravamen que en definitiva les sea debido abonar, de una suma equivalente a tantas veces el gravamen ingresado en la última oportunidad declarada o determinada, respecto a cualquiera de los anticipos o saldos de declaración jurada de los períodos por los cuales dejaron de presentar declaraciones.
A tal fin el monto de la obligación tributaria del último anticipo impositivo o saldo de declaración jurada anual, declarado o determinado, podrá ser corregido mediante la aplicación de un coeficiente indicativo de la variación de precios ocurrida durante el término transcurrido entre el último anticipo fiscal declarado o determinado y los de cada uno de los anticipos no declarados. La Agencia de Recaudación Fueguina utilizará los índices de precios que resulten compatibles con la actividad desarrollada por el contribuyente o responsable.
Vencido el plazo de diez (10) días indicado precedentemente, se librará la constancia de deuda correspondiente y se iniciarán las acciones de apremio, con el alcance previsto en los artículos 130 y concordantes de este Código.
Asimismo, no se admitirá ningún tipo de reclamo contra el importe requerido sino por la vía de la repetición establecida en el artículo 157 y previo pago de las costas y gastos del juicio e intereses que correspondan –condición sine qua non para la procedencia de la misma-.
En los casos de concursos civiles o comerciales, la liquidación de deuda confeccionada conforme el procedimiento descripto anteriormente, aún sin la previa intimación al concursado, expedida por el funcionario autorizado a tal efecto, será título suficiente a los efectos de solicitar la verificación del crédito fiscal ante la Sindicatura.
PRESUNCIONES. INGRESOS GRAVADOS.
Artículo 65.- Para efectuar la determinación de oficio sobre base presunta podrán servir como indicio:
I. el capital invertido en la explotación, las fluctuaciones patrimoniales, el volumen de las transacciones y/o ventas de otros períodos fiscales, el monto de las compras, utilidades, la existencia de mercaderías, el rendimiento normal del negocio o explotación o de empresas similares, los gastos generales de aquellos, los salarios, el alquiler del negocio y de la casa-habitación, el nivel de vida del contribuyente y cualesquiera otros elementos de juicio que obren en poder de la autoridad de aplicación o que deberán proporcionarle los agentes de retención, cámaras de Comercio o Industria, Bancos, Asociaciones Gremiales, Entidades Públicas o Privadas, o cualquier otra persona que posea información útil al respecto, relacionada con el contribuyente y que resulte vinculada con la verificación de los hechos imponibles.
A los efectos de este artículo y para el Impuesto sobre los Ingresos Brutos podrá tomarse como presunción general, salvo prueba en contrario, que:

1. Cuando las diferencias físicas de inventario de mercaderías comprobadas por la autoridad de aplicación valuadas de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Impuesto a las Ganancias fueran superiores al declarado o registrado por el contribuyente, cualitativamente representan un indicio de montos de ventas gravadas omitidas del ejercicio en curso.
   Los montos de ventas gravadas omitidas se determinaran aplicando sobre el valor determinado conforme lo dispuesto en el párrafo precedente el coeficiente que resulte de dividir el monto de ventas gravadas, correspondientes al Ejercicio Fiscal cerrado inmediato anterior a aquel en que se verifiquen las diferencias de inventarios, declaradas o registradas, ajustadas impositivamente, según corresponda, por el valor de las mercaderías en existencia al final del ejercicio citado precedentemente, declaradas o registradas, ajustadas impositivamente, según corresponda;
2. las diferencias entre la producción considerada por el contribuyente a los fines tributarios teniendo en cuenta las existencias iniciales y finales y la información

obtenida por relevamiento efectuado por dispositivos de detección remota, procesamiento de imágenes, censores, herramientas satelitales u otros mecanismos tecnológicos de alto nivel de certeza y precisión, previamente valuadas en función de precios oficiales determinados para exportación o en función de precios de mercado en los que el contribuyente acostumbra a operar, representa los montos de ventas omitidas.

3. el resultado de promediar el total de ventas, de prestaciones de servicios o de cualquier otra operación controlada por la Agencia de Recaudación Fueguina, en no menos de cinco (5) días continuos o alternados, multiplicado por el total de días hábiles comerciales, representan las ventas, prestaciones de servicios u operaciones presuntas del contribuyente o responsable bajo control, durante ese período;

   Si el mencionado control se efectuara en no menos de cuatro (4) meses continuos o alternados de un mismo ejercicio comercial o fiscal, el promedio de ventas, prestaciones de servicios u operaciones se considerará suficientemente representativo y podrá también aplicarse a los demás meses no controlados del mismo período, a condición de que se haya tenido debidamente en cuenta la estacionalidad de la actividad o ramo de que se trate.

   La diferencia de ventas, prestaciones de servicios u operaciones detectadas en ese período entre las declaradas o registradas y las ajustadas impositivamente, se considerarán ventas, prestaciones de servicios u operaciones gravadas o exentas en el impuesto en la misma proporción que tengan las que hubieran sido declaradas o registradas en cada uno de los períodos del ejercicio comercial anterior;

4. ante la comprobación de omisión de contabilizar, registrar o declarar:
   a) ventas o ingresos, el monto detectado se considerará para la base imponible en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Si el monto detectado corresponde a un período fiscal inferior a un (1) mes, el porcentaje que resulte de compararlas con las registradas, informadas, declaradas o facturadas conforme a las normas legales vigentes, de ese mismo período, aplicado sobre las ventas de los últimos doce (12) meses, que pueden no coincidir con el ejercicio comercial, determinara, salvo prueba en contrario, diferencias de ventas que se consideraran en la misma forma que se prescribe en el inciso e) precedente para los meses involucrados y teniendo en cuenta lo allí determinado sobre la estacionalidad de la actividad o ramo de que se trate.

      Si la fiscalización y la comprobación de operaciones marginales abarcare un periodo fiscal, la presunción a que se refiere el párrafo precedente se aplicará, del modo allí previsto, sobre los años no prescriptos;
   b) compras, determinado el monto de las mismas, se considerarán ventas omitidas el monto resultante de adicionar a las compras omitidas el porcentaje de utilidad bruta sobre compras declaradas por el obligado en sus declaraciones juradas impositivas y otros elementos de juicio a falta de aquellas, del ejercicio; y
   c) gastos, se considerará que el monto omitido y comprobado, representa utilidad bruta omitida del período fiscal al que pertenezcan los gastos y que se corresponden con ventas o ingresos omitidos del mismo período.

      A fin de determinar las ventas o ingresos omitidos citados precedentemente, se aplicará el procedimiento establecido en el segundo párrafo del inciso c);

5. los incrementos patrimoniales no declarados o no justificados total o parcialmente en el Impuesto a las Ganancias más un diez por ciento (10%) en concepto de renta dispuesta o consumida, representan montos de ventas omitidas determinadas por la suma total de los mismos.

   Los montos de ventas omitidas indicadas previamente, serán atribuidos a cada uno de los meses calendarios comprendidos en el ejercicio comercial o impositivo en el que se constataren las mismas, prorrateándolas en función de las ventas gravadas, no gravadas o exentas que se hubieren declarado o registrado;

6. los depósitos bancarios, debidamente depurados, que superen las ventas y/o ingresos declarados del período, representan los montos de ventas omitidas, determinadas por la suma equivalente a los mismos.
   Los montos de ventas omitidas indicadas previamente, serán atribuidas a cada uno de los meses calendarios comprendidos en el ejercicio comercial o impositivo en el que se constataren las mismas, prorrateándolas en función de las ventas gravadas, no gravadas o exentas que se hubieren declarado o registrado;
7. el importe de las remuneraciones abonadas al personal en relación de dependencia no declarado, así como las diferencias salariales no declaradas, representan montos de ventas omitidas determinadas por un monto equivalente a las remuneraciones no declaradas en concepto de incremento patrimonial, más un diez por ciento (10%) en concepto de renta dispuesta o consumida.
   Los montos de ventas omitidas indicadas previamente, serán atribuidas a cada uno de los meses calendarios comprendidos en el ejercicio comercial o impositivo en el que se constataren las mismas, prorrateándolas en función de las ventas gravadas, no gravadas o exentas que se hubieren declarado o registrado;
8. el valor de la mercadería que se traslade o transporte dentro del territorio provincial sin la documentación respaldatoria exigida por la Agencia de Recaudación Fueguina se considerará monto de ingreso gravado omitido del mes en el que se haya detectado. En caso de reincidencia dentro de un plazo de veinticuatro (24) meses se considerará que dicho ingreso también fue omitido en cada uno de los últimos seis (6) meses incluido el de detección, y que se corresponden con ventas o ingresos omitidos durante el mismo lapso;
9. por el ejercicio de la actividad específica de profesionales matriculados en la Provincia, que los importes netos declarados en el Impuesto al Valor Agregado por los años no prescriptos, constituyen monto de ingreso gravado del impuesto sobre los Ingresos Brutos, debiéndose considerar las declaraciones del referido impuesto nacional que se correspondan con el anticipo del impuesto sobre los Ingresos Brutos objeto de determinación o en su defecto, la anterior o posterior más próxima. Tratándose de contribuyentes inscriptos en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, que el importe establecido como límite máximo de ingresos brutos anuales de la categoría en la que se encuentra encuadrado el contribuyente en el último mes del lapso fiscalizado, constituye monto de ingreso gravado del impuesto sobre los Ingresos Brutos de los últimos doce (12) meses; como así también, que dicho ingreso fue omitido en los períodos fiscales anteriores no prescriptos;
10. El ingreso bruto de un período fiscal se presume no podrá ser inferior a tres (3) veces las remuneraciones básicas promedio del Convenio Colectivo de Trabajo propio de la actividad, conforme a los Indicadores Mínimos de Trabajadores (IMT) previsto en la Ley nacional 26.063 y en la resolución 2927/10 AFIP o la que en el futuro la remplace, o el alquiler que paguen o el que se comprometieran a pagar, el que fuera mayor correspondiente al mismo período.
    Cuando los importes locativos de los inmuebles que figuren en los instrumentos sean notoriamente inferiores a los vigentes en plaza, o cuando no figure valor locativo alguno, y ello no sea debidamente fundado y documentado por los interesados, por las condiciones de pago, por las características peculiares del inmueble o por otras circunstancias, la Agencia de Recaudación Fueguina podrá impugnar dichos precios y fijar de oficio un precio razonable de mercado, solicitar valuaciones e informes a entidades públicas o privadas;
11. cuando los precios de inmuebles que figuren en los boletos de compraventa y/o escrituras sean notoriamente inferiores a los vigentes en plaza al momento de su venta, y ello no sea debidamente fundado y documentado por los interesados, por las condiciones de pago, por características peculiares del inmueble o por otras circunstancias la Agencia de Recaudación Fueguina podrá, a los fines de impugnar dichos precios y fijar de oficio un precio razonable de mercado, solicitar valuaciones e

informes a entidades públicas o privadas.

Asimismo, a los efectos de lo previsto en este artículo, la autoridad de aplicación podrá valerse de cualquiera de las presunciones previstas en el artículo siguiente, aún con relación a contribuyentes o responsables que no revistan las características mencionadas en el primer párrafo de dicho artículo;

II. para determinar la cuantía de las ventas, prestaciones de servicios u operaciones, en los casos de contribuyentes o responsables que no hubiesen presentado declaraciones juradas o abonado la liquidación practicada por la autoridad de aplicación por seis (6) o más anticipos correspondientes al período fiscal en curso o a los últimos dos (2) períodos fiscales vencidos; o que habiéndolas presentado, hayan declarado no tener actividad en seis (6) o más anticipos correspondientes al período fiscal en curso o a los últimos dos (2) períodos fiscales vencidos, en contraposición a lo que resulta de la información a su respecto suministrada por terceros; o hayan declarado un importe de ingresos inferior al que resultara verificado en un procedimiento de control de operaciones o de facturación realizado por la autoridad de aplicación durante el lapso de un (1) día o más, o al que resulte del cruce de información de terceros; o hayan surgido diferencias entre las sumas declaradas y las obtenidas luego de la aplicación de los promedios o coeficientes elaborados en base a información de explotaciones de un mismo género, podrá tomarse como presunción, salvo prueba en contrario, que:

a) el importe de ingresos que resulte del control que la autoridad de aplicación efectúe sobre la emisión de comprobantes durante el lapso de un día, o el resultado de promediar los ingresos controlados cuando el procedimiento se realice durante dos (2) días o más, multiplicado por las dos terceras partes de los días hábiles comerciales del mes en que se realice, a condición de tener debidamente en cuenta la representatividad que en el mes exhiba el lapso durante el cual se llevó acabo el procedimiento según la actividad o ramo de que se trate, constituye monto de ingreso gravado por el impuesto sobre los Ingresos Brutos para ese período.

   Asimismo, se considerará que el importe estimado es ingreso gravado en los demás meses no controlados de ese período fiscal y de los dos (2) últimos períodos fiscales vencidos, a condición de que se haya tenido debidamente en cuenta la estacionalidad de la actividad o ramo de que se trate;

b) el equivalente hasta tres (3) veces el monto total de liquidaciones por ventas, prestación de servicios o cualquier otra operación del contribuyente, autorizadas y efectuadas a través de tarjetas de crédito o débito, informado por las entidades emisoras de las mismas, constituye ingreso gravado del período fiscal en el que se han realizado. En el supuesto que se hubiera realizado un procedimiento de control de la facturación conforme lo previsto en el apartado anterior, a los fines de establecer el importe de ingreso gravado, se considerará la participación que representan las ventas con tarjeta sobre el total de operaciones controladas;

c) el equivalente hasta tres (3) veces el monto total de las acreditaciones bancarias, neto de remuneraciones obtenidas en relación de dependencia, jubilaciones, pensiones, préstamos de cualquier naturaleza, transferencias entre cuentas del mismo titular y contrasientos por error, efectuadas en cuenta corriente, caja de ahorro y/o similar de titularidad del contribuyente o responsable, durante el lapso de un mes, constituye monto de ingreso gravado del impuesto sobre los Ingresos Brutos para ese período. En aquellos supuestos en que las acreditaciones bancarias se produzcan en cuentas pertenecientes a más de un titular, para estimar el importe de ingresos gravados, la autoridad de aplicación tomará en consideración el monto que resulte de dividir el total de dichas acreditaciones en tantas partes iguales como cotitulares de la cuenta bancaria existan, salvo prueba en contrario;

d) el monto de las compras no declaradas por el contribuyente, obtenido a partir de la información brindada por proveedores de aquel, más un importe equivalente al porcentaje de utilidad bruta sobre compras declaradas por otros contribuyentes que desarrollen actividades de similar naturaleza y magnitud, se considerará ventas o ingresos omitidos del período de que se trate;

e) constituye base imponible omitida el importe que resulte de la multiplicación de los volúmenes de producción o comercialización obtenidos mediante dispositivos de detección remota, procesamiento de imágenes, sensores, herramientas satelitales u otros mecanismos tecnológicos de alto nivel de certeza y precisión, con precios de referencia, cotizaciones y datos estadísticos provenientes de organismos oficiales o públicos no estatales, y en su defecto a entes privados vinculados a la actividad;
f) hasta el treinta por ciento (30%) del producido de las ventas o prestaciones de servicios o volúmenes de producción, obtenidos por el locatario del inmueble arrendado con destino que no sea el de casa habitación, constituye ingreso gravado en concepto de cobro de alquileres del locador contribuyente del Impuesto Inmobiliario, correspondientes al período durante el cual se efectuaron las ventas o se verificó la producción; y
g) los importes correspondientes a ventas netas declaradas en el Impuesto al Valor Agregado por los años no prescriptos, constituyen monto de ingreso gravado del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, debiéndose considerar las declaraciones del referido impuesto nacional que se correspondan con el anticipo del tributo provincial objeto de determinación o en su defecto, la anterior o posterior más próxima.

Se presume el desarrollo de actividad gravada por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos cuando: exista información sobre consumos de servicios por parte del contribuyente o responsable, suministrada por las empresas prestatarias de los mismos y/o por organismos de la Nación, Provincia o Municipios; registre personal en relación de dependencia, conforme la información de organismos sindicales y previsionales; los agentes de recaudación con los que hubiera operado el contribuyente informen la percepción y/o retención del impuesto; o cuando ello resulte de cualquier otro elemento de juicio que obre en poder de la autoridad de aplicación o que le proporcionen los terceros.

La Agencia de Recaudación Fueguina podrá valerse de una o varias de las presunciones previstas en el presente artículo.

La Agencia de Recaudación Fueguina podrá valerse de los indicios, promedios o coeficientes relativos a explotaciones o actividades de un mismo género y de la siguiente información: el consumo de gas, de agua, de energía eléctrica u otros servicios públicos, la adquisición de materias primas o envases, el monto de los servicios de transporte utilizados, el importe de las remuneraciones abonadas al personal en relación de dependencia calculado en función de los aportes de la Seguridad Social conforme dispone la Ley nacional 26.063 o la que en futuro la reemplace, el monto de alquileres o el valor locativo del inmueble cedido gratuitamente donde realiza la actividad, los seguros, seguridad y vigilancia, publicidad, los gastos particulares (alimentación, vestimenta, combustible, educación, salud, servicio doméstico, alquiler, etc.) acorde al nivel de vida de los propietarios o socios, el tipo de obra ejecutada, la superficie explotada y nivel de tecnificación y, en general, el tiempo de ejecución y las características de la explotación o actividad, los datos obtenidos por los software que contabilizan personas y vehículos a través de cámaras de video o filmaciones. Este detalle es meramente enunciativo y su empleo puede realizarse individualmente o utilizando diversos índices en forma combinada.

Artículo 66.- En los concursos preventivos o quiebras, serán títulos suficientes para la verificación del crédito fiscal correspondiente al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, las liquidaciones de deuda expedidas por funcionario autorizado al efecto, cuando el contribuyente o responsable no hubiere presentado Declaración Jurada por uno (1) o más anticipos fiscales y la autoridad de aplicación conozca por declaraciones anteriores, determinaciones de oficio o declaraciones juradas presentadas ante otras administraciones tributarias, la medida en que presuntivamente les corresponda tributar el gravamen respectivo.

TITULO SÉPTIMO
PAGO E INTERESES

RESPECTO DEL PAGO

ANTICIPOS.

Artículo 67.- La Agencia de Recaudación Fueguina podrá exigir con carácter general o para determinada categoría de contribuyentes o responsables, el ingreso de importes a cuenta del tributo que se deba abonar por el período fiscal en curso, en la forma y plazo que se establezca a tal efecto, hasta el vencimiento del plazo general o hasta la fecha de presentación de la declaración jurada, el que fuera posterior.

PAGOS. VENCIMIENTOS.

Artículo 68.- El pago de los gravámenes deberá ser efectuado por los contribuyentes o responsables dentro de los siguientes plazos, en la forma y condiciones que establezca el órgano de aplicación:

a) los que resulten de declaraciones juradas, al vencimiento general que establezca la Agencia de Recaudación Fueguina;
b) los que resulten del procedimiento de determinación de oficio, a los quince (15) días de la notificación de la resolución dictada al efecto. En el supuesto que el contribuyente interponga recursos contra la resolución dictada por la autoridad de aplicación, al término de quince (15) días de agotada la vía administrativa;
c) los que no requieran declaración jurada de los contribuyentes o responsables, a los quince (15) días de realizado el hecho imponible, salvo disposición diferente de las normas fiscales; y
d) en el caso de liquidaciones administrativas el pago de los impuestos determinados deberá ser efectuado dentro de los quince (15) días de notificada la liquidación respectiva.

Asimismo, la Agencia de Recaudación Fueguina podrá facultar a los contribuyentes y responsables, a efectuar pagos a cuenta de obligaciones fiscales futuras. En caso que los pagos así realizados deviniesen indebidos o sin causa, serán considerados como créditos fiscales a favor del contribuyente y podrán ser objeto de demanda de repetición conforme lo establecido en el artículo 157 en este Código.

PAGO DE MULTAS: TÉRMINO.

Artículo 69.- Las multas por infracciones previstas en los artículos 101, 120 y 121 deberán ser satisfechas por los infractores dentro de los quince (15) días de notificada la resolución respectiva.

DEL SEGUNDO VENCIMIENTO.

Artículo 70.- Cuando el pago de los gravámenes se efectúe mediante la emisión de boletas a través de sistemas de computación, la autoridad de aplicación podrá incluir un segundo vencimiento dentro de los treinta (30) días corridos posteriores al primero. En estos casos corresponderá también incluir la aplicación de un interés igual al previsto en el artículo 82, vigente al momento de disponerse la emisión, proporcional a los días de plazo que medien entre uno y otro vencimiento.

Las instituciones bancarias habilitadas recibirán hasta el segundo vencimiento de la obligación el importe de la misma con más el interés respectivo, sin necesidad de intervención previa de la autoridad de aplicación.

FORMA DE PAGO.

Artículo 71.- El pago deberá efectuarse en efectivo, cheque, giro, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, a través de medios electrónicos, o valores admitidos por el Poder Ejecutivo, en las oficinas o instituciones autorizadas al efecto.

Cuando el pago se efectúe con tarjetas de crédito y/o débito, el crédito fiscal se considerará cancelado al momento en el cual las entidades emisoras de las citadas tarjetas autoricen la operación a realizar.

Cuando el pago se efectúe con cheque o giro, el crédito fiscal se considerará cancelado al momento de la presentación de los mismos ante la Agencia de Recaudación Fueguina, siempre y cuando su valor se acredite efectivamente en los plazos promedio fijados por las

entidades bancarias, momento en el cual quedará facultada la emisión del correspondiente certificado de situación fiscal regular, de corresponder.

FACULTADES DE LA AGENCIA DE RECAUDACIÓN FUEGUINA PARA ESTABLECER OTRAS FORMAS DE PAGO.

Artículo 72.- Si la Agencia de Recaudación Fueguina considerara que la aplicación de las disposiciones relativas a la percepción previstas por las leyes no resultaran adecuadas o eficaces para la recaudación, o la perjudicasen, podrá desistir de ellas, total o parcialmente, y disponer otras formas y plazos de ingreso.

LUGAR DE PAGO.

Artículo 73.- Los pagos de los tributos deberán efectuarse en las instituciones bancarias u oficinas habilitadas por la Agencia de Recaudación Fueguina.

RESPONSABLE SUSTITUTO.

Artículo 74.- Dispónese que el contribuyente del Impuesto sobre los Ingresos Brutos no residente en el territorio nacional, resultará sustituido en el pago del tributo por el contratante, organizador, administrador, usuario, tenedor, pagador; debiendo ingresar dicho sustituto el monto resultante de la aplicación de la alícuota que corresponda en razón de la actividad de que se trate, sobre los ingresos atribuibles al ejercicio de la actividad gravada en el territorio de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, en la forma, modo y condiciones que establezca la Agencia de Recaudación Fueguina.

Artículo 75.- Los responsables determinarán, al efectuar los pagos o los ingresos a cuenta a qué deudas deberán imputarse. Cuando así no lo hicieren y las circunstancias especiales del caso no permitiesen establecer la autoridad de aplicación de oficio imputará el pago de acuerdo al siguiente orden:

1. a las multas firmes o consentidas;
2. los recargos;
3. los intereses moratorios;
4. los intereses punitorios;
5. el capital de la deuda principal; y
6. los cargos -si existieran.

Idéntico criterio se aplicará para la re-imputación de pago respecto de planes de pagos caducos.

COMPENSACIÓN.

Artículo 76.- La autoridad de aplicación podrá compensar de oficio o a pedido de los contribuyentes o responsables, los saldos acreedores provenientes de pagos hechos por error, en demasía o sin causa, con las deudas o saldos deudores de tributos declarados por los contribuyentes o responsables o determinados por la autoridad de aplicación.

La compensación se aplicará de modo tal de extinguir la totalidad de las deudas no prescriptas de la obligación fiscal comenzando por las más remotas y aunque se refieran a distintas obligaciones tributarias, previo de lo cual deberá actualizarse, cuando así correspondiere, débitos y créditos fiscales según las disposiciones vigentes en la materia.

Si una vez extinguida la totalidad de la deuda correspondiente a la obligación fiscal, subsistiese a favor del contribuyente o responsable un remanente, la autoridad de aplicación podrá computar el mismo, en la forma y modo que establezca mediante reglamentación, como pago a cuenta de obligaciones futuras de la misma obligación, o aplicarlo a la cancelación de otras obligaciones adeudadas por el contribuyente o responsable.

La compensación prevista en el presente artículo se efectuará comenzando por los intereses y recargos, siguiendo con las multas y los gravámenes, en ese orden.

Cuando el contribuyente o responsable fuere acreedor del Estado provincial por cualquier motivo, podrá solicitar al Poder Ejecutivo la compensación de su crédito con las obligaciones fiscales que adeude, en la forma que establezca la reglamentación.

ACREDITACIÓN Y DEVOLUCIÓN.

Artículo 77.- Como consecuencia de la compensación prevista en el artículo anterior la Administración podrá de oficio o a solicitud del interesado acreditarle el remanente respectivo o si lo estima necesario en atención al monto o las circunstancias proceder a su devolución.

Los contribuyentes que hayan deducido una acción de repetición no podrán hacer uso del mecanismo dispuesto en el párrafo anterior con relación a los saldos comprendidos en ella, hasta tanto la autoridad de aplicación resuelva su pretensión.
Los agentes de percepción podrán compensar en períodos posteriores, y respecto del mismo gravamen, lo ingresado en exceso por error en las percepciones efectuadas, en las formas y condiciones que establezca la reglamentación.
Los agentes de retención podrán compensar en operaciones posteriores, previa autorización de la Agencia de Recaudación Fueguina, lo ingresado en exceso por error en las retenciones efectuadas respecto del mismo gravamen a los mismos contribuyentes y responsables.
PRÓRROGA.
Artículo 78.- Facúltase a la Agencia de Recaudación Fueguina para conceder facilidades para el pago de las deudas que los contribuyentes, responsables y terceros mantengan con la Administración que acrediten encontrarse en condiciones económico-financieras que les impidan el cumplimiento oportuno de las obligaciones pertinentes.
Cuando la deuda se encontrare suficientemente garantizada a satisfacción de la Agencia de Recaudación Fueguina, se aplicará un interés que no podrá exceder del previsto por el artículo 83 y que resultará del cuadro de tasas que establecerá la Agencia de Recaudación Fueguina en atención a la antigüedad de la deuda.
Cuando la deuda no estuviere garantizada, se aplicará un interés que fijará la Agencia de Recaudación Fueguina dentro de los límites establecidos en el párrafo anterior.
La Agencia de Recaudación Fueguina podrá, en los casos de contribuyentes y responsables concursados, otorgar facilidades especiales para el ingreso de las deudas privilegiadas relativas a tributos y sus actualizaciones a cargo de aquella, originadas con anterioridad al auto de iniciación del concurso preventivo o auto declarativo de quiebra, estableciendo al efecto plazos y condiciones para dicho acogimiento.
Asimismo, la Agencia de Recaudación Fueguina podrá votar favorablemente en las condiciones que se fijen en las propuestas judiciales de acuerdos preventivos o resolutorios, por créditos quirografarios en tanto se otorgue al crédito fiscal idéntico tratamiento que al resto de las deudas quirografarias.
PLANES DE FACILIDADES DE PAGO.
Artículo 79.- La Agencia de Recaudación Fueguina podrá conceder con carácter general:

1. planes de facilidades de pago no mayores a cinco (5) años, conforme con lo que establezca la reglamentación, pudiéndose extender a siete (7) años en los casos de concurso o quiebras legislados en las Ley nacional 24.522 o la que en un futuro la reemplace.

No gozarán de este beneficio los agentes de retención y percepción por los importes retenidos y/o percibidos a los contribuyentes o administradores;

2. prórroga para el cumplimiento de obligaciones formales en la forma que se reglamente.

Los planes de pago podrán instrumentarse a través del sistema de tarjeta de crédito, pudiéndose adicionar el mismo porcentual que se aplique sobre el importe total de débito tributario a financiar en concepto de costo de administración del régimen.
Facúltase al Director Ejecutivo a:

a) acordar bonificaciones especiales para estimular el ingreso anticipado de impuestos no vencidos;
b) otorgar esperas y en general a celebrar acuerdos tendiente a asegurar la cancelación de las deudas fiscales pendientes;
c) otorgar planes de facilidades de pago no mayores de doce (12) cuotas, conforme con lo que establezca la reglamentación para agentes de retención y percepción por los importes retenidos y/ o percibidos a los contribuyentes o administradores.

Cuando la deuda se encontrare suficientemente garantizada a satisfacción de la Agencia de Recaudación Fueguina, se aplicará un interés que no podrá exceder del previsto por el artículo 83 y que resultará del cuadro de tasas que establecerá la Agencia de Recaudación Fueguina en atención a la antigüedad de la deuda.

Cuando la deuda no estuviere garantizada, se aplicará un interés que fijará la Agencia de Recaudación Fueguina dentro de los límites establecidos en el párrafo anterior.
En todos los supuestos indicados precedentemente, la solicitud de facilidades que fuera denegada no suspende el curso de los accesorios correspondientes.
GARANTÍA EN SEGURIDAD DE OBLIGACIONES FISCALES.
Artículo 80.- Para garantizar el ingreso de obligaciones en el marco de regímenes de facilidades de pago, o el otorgamiento de esperas para el pago, la Agencia de Recaudación Fueguina podrá exigir que se constituyan garantías tales como aval solidario de entidad de crédito o seguro de caución.
Asimismo podrá admitir garantías que consistan en hipoteca con cláusula de mandato irrevocable de venta, prenda, fianza personal y solidaria u otra que se estime suficiente, en la forma que determine la reglamentación.
La autoridad de aplicación podrá determinar mediante la reglamentación el universo de contribuyentes y/o responsables que resultarán alcanzados por lo dispuesto en el presente Artículo.
En todos los casos, los gastos que deriven de la constitución, modificación y cancelación de las garantías estarán a cargo del contribuyente.
Artículo 81.- La constitución, ampliación, modificación, sustitución, cancelación y extinción de garantías en seguridad de obligaciones fiscales de cualquier naturaleza y de sus intereses, multas y restantes accesorios, como también de los demás actos u operaciones que así lo exijan, podrá efectivizarse por medios electrónicos o magnéticos que aseguren razonablemente la autoría e inalterabilidad de las mismas, en las formas, requisitos y condiciones que a tal efecto establezca la Agencia de Recaudación Fueguina.
RESPECTO DE LOS INTERESES.
RECARGOS.
Artículo 82.- La falta de pago total o parcial de las obligaciones tributarias en los términos establecidos en este Código o por las leyes tributarias especiales hará surgir, sin necesidad de interpelación alguna, la obligación de abonar simultáneamente con aquellas, más lo establecido por el artículo 83 de este Código en caso de corresponder, un recargo mensual que no podrá exceder, al momento de su fijación, del doble del que aplique el Banco de Tierra del Fuego para las operaciones de descuento de documentos a treinta (30) días.
Dicho recargo será establecido por el Director Ejecutivo el que podrá determinar la forma en que el mismo será prorrateado, quedando facultado, asimismo, para adoptar las medidas que correspondan tendientes a compatibilizar la aplicación del nuevo régimen con el existente hasta el presente y establecer su vigencia.
Los plazos indicados se contarán en días corridos, desde la fecha en que debió efectuarse el pago y hasta aquella en que el pago se realice, se solicite la compensación, se inicie la acción judicial correspondiente, se acceda a un plan de facilidades de pago o hasta la fecha de la resolución de la Administración que determine la obligación tributaria, la que correspondan según el caso.
La aplicación de los recargos no obsta a lo dispuesto en los artículos, 101, 120 y 121 de este Código.
Los recargos son aplicables también a los agentes de recaudación que no hubiesen percibido o retenido el tributo y la obligación de pagarlos por parte del agente subsiste aunque el gravamen sea ingresado por el contribuyente u otro responsable.
En el caso de concursos y quiebras, y a los efectos de la solicitud de verificación de créditos, los recargos se computarán desde la fecha en que debió efectuarse el pago hasta la fecha de presentación en Concurso Preventivo o fecha de Sentencia Declarativa de Quiebra, según corresponda.
Cuando la extinción total o parcial de deudas tributarias vencidas no incluya el recargo resarcitorio generados hasta ese momento, este se capitalizará y generará idéntico recargo desde
ese momento hasta la fecha de su pago.

INTERESES MORATORIOS.
Artículo 83.- Los créditos fiscales por todo concepto que resulten de determinaciones practicadas por la Administración y no sean abonadas dentro de los quince (15) días de notificada la resolución respectiva, devengarán, a partir de la fecha del dictado de la resolución y sin necesidad de interpelación alguna, un interés mensual que no podrá exceder, en el momento de su fijación, del doble del que aplique el Banco de la Provincia de Tierra del Fuego para las operaciones de descuento de documentos a treinta (30) días.
Dicho interés será establecido por el Director Ejecutivo el que podrá determinar la forma en que el mismo será prorrateado, quedando facultado, asimismo, para adoptar las medidas que correspondan tendientes a compatibilizar la aplicación del nuevo régimen con el existente hasta el presente y establecer su vigencia.
La presentación en Concurso Preventivo y/o Declaración de Quiebra produce la suspensión de los intereses que devengue todo crédito de causa o título anterior a ella. El cómputo de los mismos renacerá con la homologación del Acuerdo Preventivo y/o resolutorio.
Cuando el monto del interés no fuera abonado al momento de ingresar el tributo o crédito fiscal adeudado, el mismo constituirá deuda fiscal y será de aplicación, desde ese momento y hasta el de efectivo pago, el régimen dispuesto en el primer párrafo.
El régimen previsto en el presente artículo no resultará aplicable a deudas por impuestos, tasas, contribuciones u otras obligaciones fiscales originadas en diferencias imputables exclusivamente a errores de liquidación por parte de la autoridad de aplicación, debidamente reconocidos.
VÍA RECURSIVA.
Artículo 84.- Las liquidaciones en concepto de recargos o intereses expedidas por la Administración únicamente podrán ser recurridas mediante la interposición de la demanda de repetición prevista en el artículo 157 de este Código.
LA IMPUTACIÓN DE LOS INTERESES.
Artículo 85.- Los importes abonados de conformidad con lo establecido en los artículos 82 y 83, respecto de anticipos, pagos a cuenta, retenciones y percepciones, no constituyen crédito a favor del contribuyente o responsable contra la deuda del tributo al vencimiento de este, salvo en los casos en que el mismo no fuere adeudado.
FALTA DE RESERVA NO CADUCA DERECHO.
Artículo 86.- La obligación de pagar los intereses o recargos subsiste no obstante la falta de reserva por parte de la Agencia de Recaudación Fueguina al recibir cualquier pago ingresado con posterioridad al vencimiento de la deuda principal, el que será imputado conforme lo dispuesto por el artículo precedente.
SANCIONES. INDEPENDENCIA DE LAS MISMAS.
Artículo 87.- Si la falta de pago, además, encuadra dentro de alguna de las conductas punibles, deberá ser materia de sanción conforme la normativa y el procedimiento vigente.
INTERESES PUNITORIOS.
Artículo 88.- En los juicios de ejecución fiscal se devengará, desde el momento de la interposición de la demanda, un interés mensual punitorio equivalente al doble del fijado en el artículo 83.
El referido interés, al igual que la forma en que el mismo será prorrateado, respecto de otros créditos fiscales que correspondan, será establecido por el Poder Ejecutivo.

TÍTULO OCTAVO
DEBERES FORMALES. FACULTADES DE VERIFICACIÓN Y FISCALIZACIÓN.
DEBERES FORMALES. CONCEPTO.

Artículo 89.- Los contribuyentes, agentes de retención, percepción y/o información y demás sujetos responsables deben cumplir con los deberes que este Código o leyes fiscales establezcan con el fin de facilitar la verificación, fiscalización, determinación y recaudación de los impuestos, tasas y contribuciones y sus accesorios.

DEBERES FORMALES.
Artículo 90.- Sin perjuicio de lo que se establezca de manera especial en las leyes tributarias están obligados:

1. los contribuyentes y responsables a:
   b) inscribirse en los registros que correspondan como contribuyente, agente de retención, percepción e información;
   c) presentar, en tiempo y forma, la declaración jurada o anticipos de todos los hechos imponibles atribuidos a ellos, por las normas de este Código o las leyes fiscales especiales, salvo expresa indicación en contrario;
   d) presentar los estados contables en los casos de contribuyentes o responsables obligados a emitirlos;
   e) emitir y conservar las facturas o documento equivalente por todas las operaciones que efectúe, de conformidad con los requisitos que establezca la reglamentación respectiva, así como a registrar todas sus operaciones en libros o registros determinados, de acuerdo a la legislación nacional o provincial que a tal efecto se fije;
   f) comunicar a la Administración, dentro de los diez (10) días de verificado cualquier cambio en su situación que pueda dar origen a nuevos hechos imponibles, modificar o extinguir los existentes;
   g) conservar por el término de la prescripción y presentar a cada requerimiento de la Administración, todos los elementos y documentos que de algún modo se refieran a las operaciones y situaciones que constituyan los hechos imponibles y sirvan como comprobantes de veracidad de los datos consignados en las declaraciones juradas u otros documentos;
   h) presentar a requerimiento de la Administración originales o copias certificadas de contratos, estatutos, sus modificaciones, actas sociales, papeles de trabajo y cualquier otro documento que la Administración estime necesario para la identificación del sujeto tributario o para evaluar la naturaleza o cuantificación del hecho imponible, así como a conservar y exhibir los certificados o constancias por ella expedidos que acrediten su condición de contribuyente;
   i) contestar cualquier pedido de la Administración de informes y aclaraciones con respecto a sus declaraciones juradas o, en general, a las operaciones y situaciones que, a juicio de la Administración, puedan constituir hechos imponibles;
   j) comunicar directamente y en forma fehaciente a la dependencia que le haya intimado el ingreso o notificado el monto de la deuda fiscal, todo pago relacionado con la misma y no computado en la respectiva liquidación. Esta comunicación deberá realizarla dentro de los diez (10) días corridos de la intimación o notificación. Sin perjuicio de la sanción que corresponda por incumplimiento a los deberes formales, su incumplimiento en caso de juicio de ejecución fiscal relevará a la Administración de la parte de las costas que le puedan corresponder;
   k) facilitar con todos los medios a su alcance las tareas de verificación, fiscalización y determinación de las obligaciones tributarias;
   l) concurrir a las oficinas fiscales cuando su presencia le sea requerida y a acreditar personería cuando correspondiere;
   m) utilizar los certificados, guías, formularios y demás documentos equivalentes que determine la Administración y exhibirlos ante la autoridad competente;
   n) comunicar a los dos (2) días de la petición de concurso preventivo o quiebra propia a la Administración dicha circunstancia, el incumplimiento de esta disposición liberará a la Administración de la carga de las costas;
   o) solicitar las constancias y/o documentación respecto del traslado o transporte de bienes en el territorio provincial, cualquiera fuese el destino y origen de los mismos.
2. los agentes de retención, percepción y/o información a:

a. actuar como agente de retención, percepción o información cuando la Administración lo designe como tal;
b. efectuar retenciones o percepciones de conformidad con las disposiciones legales vigentes;
c. presentar las declaraciones juradas que les correspondan con la información veraz y completa; y
d. prestar la debida cooperación a las tareas de determinación, verificación y fiscalización de sus obligaciones conforme a las reglamentaciones vigentes emitidas por la Administración.

FACULTADES DE VERIFICACIÓN Y FISCALIZACIÓN.

Artículo 91.- Con el fin de asegurar la verificación y fiscalización oportuna de la situación impositiva de los contribuyentes y demás responsables, la autoridad de aplicación podrá exigir de ellos y aún de terceros:

a) la inscripción en tiempo y forma ante las autoridades fiscales correspondientes.
En tal sentido, se faculta a la Agencia de Recaudación Fueguina a unificar el número de inscripción de los contribuyentes con la CUIT establecida por la Administración Federal de Ingresos Públicos;
b) la presentación de declaraciones en formularios, planillas, soporte magnético u otro medio similar de transferencia electrónica de datos, según se establezca de forma general, conteniendo la información requerida por las normas fiscales o por la autoridad administrativa;
c) la confección, exhibición y conservación por un término de diez (10) años de los libros de comercio rubricados, cuando corresponda, que registren todas las operaciones que interese verificar, o de libros o registros especiales de las negociaciones y operaciones propias y de terceros que se vinculen con la materia imponible en la forma y condiciones que determine la autoridad de aplicación.
Todas las registraciones contables deberán estar respaldadas por los comprobantes y facturas correspondientes;
d) el mantenimiento en condiciones de operatividad de los soportes magnéticos que contengan datos vinculados a la materia imponible, por el término de cinco (5) años contados a partir de la fecha de cierre del ejercicio en el cual se hubieran utilizado;
e) el suministro de información relativa a terceros;
f) la comunicación del cambio de domicilio, comienzo o cesación de actividades, transferencia de fondos de comercio, designación de nuevas autoridades societarias, modificación de integrantes de los órganos de la administración social, cesión de cuotas y/o acciones; o cualquier otro acto que modifique su situación fiscal;
g) el otorgamiento, con motivo del ejercicio de la actividad, de determinados comprobantes y la conservación de sus duplicados, en la forma y condiciones que establezca la Agencia de Recaudación Fueguina.
Asimismo, la Agencia de Recaudación Fueguina podrá imponer obligaciones referidas a los sistemas de impresión de facturas de venta o documento equivalente;
h) el uso obligatorio de máquinas registradoras especiales, terminales, o similares, balanzas electrónicas, con medidor fiscal que emita tickets y posean memoria inalterable y de acceso exclusivo de la Agencia de Recaudación o compartido con la Dirección General Impositiva (AFIP), para el control de las obligaciones emergentes de los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización se encuentran a cargo de ambos organismos de fiscalización.
Los requisitos y características técnicas de los modelos, su aprobación, las condiciones que deben cumplir los fabricantes, proveedores o importadores en lo referente a mantenimiento, provisión de repuestos, controles, garantía de fabricación, así como todo otro requerimiento que deban reunir los equipos y las formalidades referidas al uso de los mismos, serán reglamentadas por la Agencia de Recaudación Fueguina, no pudiendo diferir los mismos de los previstos a tal efecto por las disposiciones nacionales pertinentes;

i) atender las inspecciones y verificaciones enviadas por la autoridad de aplicación, no obstaculizando su curso con prácticas dilatorias;
j) cumplir, en el plazo que se fije, las intimaciones o requerimientos que se efectúen;
k) exhibir los comprobantes de pago, ordenados cronológicamente por vencimiento y por impuesto;
l) el mantenimiento en condiciones de operatividad de los soportes magnéticos que contengan datos vinculados con la materia imponible;
m) exigir de las sucursales, agencias, oficinas o anexos, que dependen de una administración central, ubicada fuera de la Provincia y que no puedan aportar directamente los elementos necesarios para determinar las obligaciones, la registración de sus operaciones en libros especiales y conservar la documentación que las respalde. Asimismo, podrá exigirse la exhibición y puesta a disposición de la Administración, por el tiempo que esta estime razonable, de los libros de contabilidad o documentación que los sujetos posean fuera de su domicilio en la Provincia.
La Agencia de Recaudación Fueguina tendrá amplios poderes para verificar en cualquier momento, inclusive en forma simultánea con la verificación del hecho imponible, el cumplimiento que los obligados den a las normas fiscales de cualquier índole.

A tal fin podrá:

1. citar al firmante de la Declaración Jjurada, al presunto contribuyente o responsable o a los terceros que a juicio de la autoridad de aplicación tengan conocimiento de las negociaciones u operaciones de aquellos, para que comparezcan a sus oficinas a contestar e informar verbalmente o por escrito, según esta estime conveniente, todas las preguntas o requerimientos que se les hagan sobre los ingresos, egresos, ventas y, en general, sobre las circunstancias y operaciones que a juicio de la autoridad de aplicación estén vinculadas al hecho imponible o a la naturaleza de los actos gravados;
2. requerir de los contribuyentes, responsables o terceros la presentación de todos los comprobantes, facturas y justificativos que se refieran al hecho precedentemente señalado;
3. inspeccionar los lugares, establecimientos, bienes, libros, anotaciones, papeles y documentos de contribuyentes o responsables, que puedan registrar o comprobar las negociaciones y operaciones que se juzguen vinculadas a los datos que contengan o deban contener las declaraciones juradas.
La inspección a que se alude podrá efectuarse aun concomitantemente con la realización y ejecución de los actos u operaciones que interesen a la fiscalización.
Asimismo, detener e inspeccionar los vehículos automotores, con el fin de verificar la situación impositiva de los contribuyentes y responsables y la documentación respaldatoria de la mercadería transportada. Disponer un régimen de intervención fiscal permanente para determinada categoría de contribuyentes, que la reglamentación establecerá tomando en consideración la índole y magnitud de las actividades desarrolladas;
4. requerir de los contribuyentes, responsables y terceros, el acceso en tiempo real a los sistemas informáticos que registran operaciones vinculadas con la materia imponible y a los soportes magnéticos aludidos en el inciso d) del presente artículo, debiendo determinar la autoridad de aplicación los medios informáticos necesarios para generar el enlace con el contribuyente. Asimismo, podrá requerir copia de la totalidad o parte de dichos soportes magnéticos suministrando los elementos materiales al efecto.
5. requerir información o documentación relacionada con el equipamiento de computación utilizado y de las aplicaciones implantadas, sobre las características técnicas del hardware y software, ya sea que el procesamiento se desarrolle en equipos propios o arrendados o que el servicio sea prestado por un tercero. Asimismo podrá requerir especificaciones acerca del sistema operativo y los lenguajes y/o utilitarios utilizados, como así también, listados de programas, carpetas de sistemas,

diseños de archivos y toda otra documentación o archivo inherentes al procesamiento de los datos que configuran los sistemas de información;

6. previa autorización del Juez correspondiente, utilizar, por parte del personal fiscalizador del organismo, los programas y utilitarios de aplicación en auditoría fiscal que posibiliten la obtención de datos, instalados en el equipamiento informático del contribuyente que sean necesarios en los procedimientos de control a realizar. Lo especificado en el presente acápite también será de aplicación a los servicios de computación que realicen tareas para terceros.
   Esta norma solo será de aplicación en relación a los sujetos que se encuentren bajo verificación. La autoridad de aplicación dispondrá los datos que obligatoriamente deberán registrarse, la información inicial a presentarse por parte de los responsables o terceros y la forma y plazos en que deberán cumplimentarse las obligaciones dispuestas en el presente inciso;
7. requerir por medio del Director de la Agencia de Recaudación Fueguina y demás funcionarios especialmente autorizados para estos fines por el mismo, el auxilio inmediato de la fuerza pública cuando vieran impedido el desempeño de sus funciones, cuando dicho auxilio fuera menester para hacer comparecer a los contribuyentes, responsables y terceros, o cuando fuera necesario para la ejecución de las órdenes de allanamiento, otorgadas por Juez competente. Dicho auxilio deberá acordarse sin demora, bajo la exclusiva responsabilidad del funcionario que lo haya requerido;
8. solicitar al Juez competente, cuando hubiere motivos para presumir que en algún lugar existen elementos de juicio probablemente relacionados con la presunta comisión de alguno de los delitos previstos en la Ley nacional 24.769 y sus modificatorias, las medidas de urgencia y toda autorización que fuera necesaria a los efectos de la obtención y resguardo de aquellos.
   Dichas diligencias serán encomendadas al organismo recaudador, quien actuará en tales casos en calidad de auxiliar de la justicia, conjuntamente con el organismo de seguridad competente y/o la policía judicial, según lo disponga el Juez interviniente.
   Asimismo, podrá recabar orden de allanamiento de la autoridad judicial citada, cuando hubiere indicios vehementes de existencia de infracciones tributarias, como también en el caso de resistencia pasiva de los contribuyentes a la fiscalización. La solicitud especificará el lugar y la oportunidad en que habrá de practicarse, dejando expresa constancia de la facultad de los autorizados para secuestrar los libros, registros y documentación contable del lugar allanado que puedan servir como testimonio probatorio de infracciones a este Código. Dichas órdenes deberán ser despachadas por el Juez, dentro de las veinticuatro (24) horas, habilitándose días y horas si fuera solicitado.
9. el incumplimiento fehacientemente acreditado, en más de una oportunidad, de los deberes de información y colaboración previstos en los puntos 1. a 5. de este artículo, constituirá resistencia pasiva a la fiscalización;
10. en aquellos casos que se verifique la falta de inscripción en el impuesto sobre los Ingresos Brutos de aquel contribuyente que tuviera obligación de hacerlo y se encuentre ejerciendo actividad comercial en la vía pública o áreas comerciales no convencionales y se hallen en posesión de bienes y mercaderías sobre cuya adquisición no aporten facturas o comprobantes, se procederá al secuestro y posterior decomiso de la misma, en las formas y condiciones que establezca la autoridad de aplicación.

La autoridad de aplicación, podrá celebrar con las correspondientes fuerzas de seguridad, los convenios que resulten necesarios a fin de permitir la correcta y eficaz implementación de lo regulado en el presente artículo.

DEBER DE EXTENDER CONSTANCIA ESCRITA.

Artículo 92.- En todos los casos de ejercicio de facultades de verificación y fiscalización, los funcionarios que las ejerciten deberán extender constancia escrita de los resultados así como

de la existencia e individualización de los elementos exhibidos. Cada constancia escrita será suscripta por el funcionario que la extienda y por el interesado, salvo que este se negare o no pudiere firmar, de lo cual se dejará constancia. Las constancias escritas constituirán elementos de prueba en los procedimientos de determinación, de reconsideración y en los infraccionales.

AGENTES. INFORMACIÓN Y RECAUDACIÓN.

Artículo 93.- La Agencia de Recaudación Fueguina podrá imponer a terceros la obligación de actuar como agentes de información, control, recaudación, retención y/o percepción de impuestos, tasas, contribuciones en los casos y en la forma que ella determine.

Facúltase a la Agencia de Recaudación Fueguina a celebrar con los Municipios de la Provincia convenios para la gestión extrajudicial de cobranza de los impuestos administrados por ella, y de las multas impuestas por otros órganos u organismos provinciales, cuya cobranza se le haya asignado a la Agencia de Recaudación Fueguina, tendientes a evitar la promoción de acciones judiciales por apremio.

Artículo 94.- Los contadores públicos que certifiquen balances de entidades de cualquier tipo, deberán hacer constar en el pasivo en renglón separado, claramente desglosada según corresponda a tributos, tasas o contribuciones provinciales, municipales y/o comunales, la deuda impaga por gravámenes y una previsión razonablemente estimada para cubrir los intereses que correspondiesen.

Artículo 95.- Los agentes de la Administración Pública provincial y Municipal y los magistrados y funcionarios del Poder Judicial, están obligados a informar al organismo recaudador los hechos que lleguen a su conocimiento en el desempeño de sus tareas específicas y que puedan constituir o modificar la materia imponible oportunamente declarada por el contribuyente o responsable.

A tal efecto, la Agencia de Recaudación Fueguina reglamentará el régimen de información previsto, cuyo incumplimiento hará a los respectivos funcionarios pasibles de la sanción establecida en el artículo 101.

Artículo 96.- Las instituciones bancarias, financieras, de seguros, organismos públicos o privados, nacionales, provinciales, municipales o comunales y, además, terceros en general están obligados a suministrar toda la información y documentación que le fuera requerida por la Administración que refieran a hechos que en el ejercicio de sus actividades hayan contribuido a realizar o hayan debido conocer y que constituyan, modifiquen o extingan hechos imponibles o que refieran a bienes de titularidad de contribuyentes o terceros relacionados con el mismo y toda otra información o documentación que a criterio de la Administración resulte necesaria para el cumplimiento de sus funciones.

Artículo 97.- Los jueces notificarán de oficio a la Agencia de Recaudación Fueguina la apertura de juicios universales dentro de los dos (2) días de iniciados, a fin de que la Administración tome la intervención que corresponda.

Artículo 98.- La Administración puede establecer, con carácter general o para una categoría de contribuyentes o responsables, la obligación de llevar uno o más libros donde anotarán las operaciones y los actos relevantes para la determinación de sus obligaciones tributarias, con independencia de los libros exigidos por la ley.

Artículo 99.- En los casos que se indican deberá observarse:

1. los escribanos no podrán otorgar escritura, los titulares del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor no podrán autorizar operaciones sobre bienes automotores, las entidades públicas centralizadas, descentralizadas y/o autárquicas, o funcionarios del Poder Judicial no podrán realizar o autorizar tramitación alguna, sin previa:
    a) registración del número de CUIT (Clave Única de Identificación Tributaria) o CUIL (Clave Única de Identificación Laboral) o CDI (Clave de Identificación) o el que lo reemplazare, otorgado por la AFIP, correspondiente al o a los sujetos titulares y/o intervinientes en las operaciones, actos o bienes relacionados con obligaciones fiscales;
    b) acreditación del cumplimiento de las obligaciones fiscales pertinentes mediante la presentación de un Certificado de Cumplimiento Fiscal de todos

los tributos pertinentes extendido por la Administración Fiscal, con comprobantes de la Agencia de Recaudación Fueguina y de las demás reparticiones que tengan a su cargo la recaudación de tasas y contribuciones de mejoras;

c) acreditación y/o declaración del bien o del personal en cuestión, según corresponda, en las obligaciones fiscales correspondientes al Impuesto a las Ganancias, Impuesto sobre los Bienes Personales, Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, Impuesto al Valor Agregado, Impuestos Internos y de la Seguridad Social, según corresponda;

2. en las transferencias de bienes, negocios, activos y pasivos de personas, entidades civiles o comerciales, o cualquier otro acto de similar naturaleza, se deberá acreditar la inexistencia de deudas fiscales hasta la fecha de otorgamiento del acto, mediante certificación expedida por la Agencia de Recaudación Fueguina. El certificado de inexistencia de deudas, emitido por la Agencia de Recaudación Fueguina tendrá efectos liberatorios, cuando se trate de los impuestos cuya recaudación y fiscalización están a cargo de dicha Administración.

Si la Agencia de Recaudación Fueguina constatare, antes del 31 de diciembre del año inmediato siguiente al de expedición de dicho certificado, la existencia de deudas, solamente estará obligado a su pago quien hubiera revestido en relación a las mismas la condición de contribuyente. Cuando se trate del impuesto sobre los Ingresos Brutos, la expedición del certificado solo tiene por objeto facilitar el acto y no posee efecto liberatorio, salvo cuando expresamente lo indicare el mismo certificado; y

3. toda repartición del Gobierno de la Provincia, ente autárquico y organismo descentralizado, cuentas especiales, otras entidades, Poder Legislativo y Poder Judicial deberán requerir, previo pago de la orden de pago, la presentación a los proveedores de bienes y/o servicios que desarrollen actividades gravadas en la Provincia, constancia de cumplimiento fiscal de impuestos provinciales, conforme los determine la reglamentación de la Agencia de Recaudación Fueguina.

TÍTULO NOVENO
SANCIONES E ILÍCITOS

INFRACCIONES. CONCEPTO.

Artículo 100.- Toda acción u omisión que importe violación de normas tributarias de índole sustancial o formal constituye infracción punible en la medida y con los alcances establecidos en este Código o leyes tributarias especiales. Las infracciones tributarias se aplicarán sin perjuicio de la responsabilidad penal por delitos comunes o por los delitos tributarios establecidos en la Ley nacional 24.769 o la que en un futuro la reemplace.

SANCIONES FORMALES.

Artículo 101.- El incumplimiento de los deberes formales establecidos en este Código, en leyes tributarias especiales, en decretos reglamentarios, en resoluciones de la Dirección y en toda otra norma de cumplimiento obligatorio, constituye infracción que será reprimida con multas graduable entre mil cien (1.100) Unidades Ajustables por Evolución Salarial (UAPES) o la unidad que un futuro la reemplace, y trece mil quinientos (13.500) UAPES o la unidad que un futuro la reemplace, sin perjuicio de las multas que pudieren corresponder por otras infracciones.

En caso que la infracción consistiere en la omisión de presentar la Declaración Jurada dentro de los plazos establecidos será sancionada con una multa de trescientos cincuenta (350) UAPES o la unidad que un futuro la reemplace, y tres mil seiscientos (3.600) UAPES o la unidad que un futuro la reemplace, según se trate de persona física o jurídica, respectivamente, sin necesidad de requerimiento previo por parte de la Administración. El procedimiento podrá iniciarse con una notificación emitida por el sistema de computación de la Administración.

Si dentro del plazo de quince (15) días a partir de la notificación, el infractor pagare

voluntariamente la multa y presentare la Declaración Jurada omitida -o lo hubiese hecho antes de haber recibido la notificación-, el importe de la multa a que hace referencia el párrafo precedente se reducirá, de pleno derecho, a la mitad y la infracción no se considerará como antecedente en su contra.
En caso de no pagarse la multa o de no presentarse la Declaración Jurada reclamada conforme al procedimiento previsto en el segundo párrafo de este artículo, deberá sustanciarse el sumario previsto en el artículo 123 de este Código. Sin perjuicio de las facultades previstas en el artículo 62 y/o, de reclamar el pago provisorio de impuestos vencidos previstos en el artículo 64 del presente Código.
Las multas por infracciones a los deberes formales podrán ser reducidas total o parcialmente mediante resolución fundada cuando las mismas impliquen culpa leve de los infractores.
SUMARIO. EXCEPCIONES.
Artículo 102.- Facúltase a la Administración a no realizar el procedimiento establecido en el artículo 123 del presente Código, para la imposición de sanciones por las infracciones a los deberes formales que tipifique la Dirección, cuando el contribuyente o responsable cumplimente las formalidades omitidas, reconozca y abone espontáneamente la obligación adeudada con más los recargos e intereses previstos en este Código de corresponder.
MULTA Y/O CLAUSURA.
Artículo 103.- Sin perjuicio de la aplicación de las multas previstas en el artículo 101, la Dirección podrá disponer la clausura por tres (3) a diez (10) días de los establecimientos, en los siguientes casos:

1. cuando se hubiere comprobado la falta de inscripción, ante la Dirección, de contribuyentes y responsables, en los casos y términos que establezca la reglamentación;
2. cuando se omita presentar reiteradamente las declaraciones juradas establecidas en este Código;
3. en caso que se omita la emisión y/o entrega y/o la registración de facturas o comprobantes equivalentes, relativos a operaciones comerciales, industriales, agropecuarias o de prestación de servicios, o que no reúnan los requisitos que establezca la Dirección; o no conserven sus duplicados o constancias de emisión;
4. cuando no se acredite con la factura de compra o documento equivalente, o correspondiente, expedido en legal forma, la posesión en el establecimiento de materias primas, mercaderías o bienes de cambio;
5. cuando, ante requerimientos efectuados por la Dirección, se verificara incumplimiento reiterado del contribuyente o responsable a suministrar en tiempo y forma la información solicitada por la autoridad administrativa;
6. no lleven anotaciones o registraciones de sus adquisiciones de bienes o servicios o de sus ventas, locaciones o prestaciones, o que llevadas, no reúnan los requisitos de oportunidad, orden o respaldo conforme a los requerimientos que en la materia exija la Agencia de Recaudación Fueguina;
7. haber recurrido a entes o personas jurídicas manifiestamente improcedentes respecto de la actividad específicamente desarrollada, adoptadas para evadir gravámenes. En tales casos la Agencia de Recaudación Fueguina deberá, obligatoriamente, poner en conocimiento a la Inspección General de Justicia tal circunstancia en un plazo no mayor de cuarenta y cinco (45) días;
8. no mantener en condiciones de operatividad los soportes magnéticos que contengan datos vinculados con la materia imponible, por el término de cinco (5) años contados a partir de la fecha de cierre del ejercicio en el cual se hubieren utilizado o no facilitar a la Agencia de Recaudación Fueguina copia de los mismos cuando les sean requeridos;
9. no exhibir dentro de los cinco (5) días de solicitados por la autoridad de aplicación los comprobantes de pago que les sean requeridos;
10. en los casos en que la Agencia de Recaudación Fueguina tome conocimiento fehaciente a través de información propia u obtenida de terceros respecto de la

existencia de personal en relación de dependencia no registrado de acuerdo con las pautas establecidas por la Administración Federal de Ingresos Públicos.

Sin perjuicio de lo establecido en el primer párrafo del presente artículo, la autoridad de aplicación podrá determinar fundadamente la aplicación alternativa de la sanción de multa o de clausura, según las circunstancias objetivas que se registren en cada caso en particular.

Cuando se hubieren cumplido alguna de las sanciones previstas en este artículo, la reiteración de los hechos u omisiones indicados en el mismo, dará lugar a la aplicación de las siguientes sanciones:

a. cuando se hubiere cumplido en forma exclusiva sanción de clausura: se aplicará una nueva clausura por el máximo de la escala;
b. cuando se hubieren cumplido las sanciones de clausura y multa en forma conjunta: se aplicarán en forma conjunta una nueva clausura y una nueva multa, ambas por el máximo de la escala;
c. cuando se hubiere cumplido en forma exclusiva sanción de multa: se aplicará sanción de clausura por seis (6) días.

La reiteración aludida se considerará en relación a todos los establecimientos de un mismo responsable, dedicados total o parcialmente a igual actividad; pero la clausura solo se hará efectiva sobre aquel en que se hubiera cometido la infracción, salvo que por depender de una dirección o administración común, se pruebe que los hechos u omisiones hubieran afectado a todo o una parte de ellos por igual. En este caso, la clausura se aplicará al conjunto de todos los establecimientos involucrados.

ACTA DE COMPROBACIÓN. CITACIÓN.

Artículo 104.- La clausura prevista en el artículo anterior deberá ser precedida de un acta de comprobación en la cual los agentes de la Administración dejarán constancias de todas las circunstancias relativas a los hechos y/o omisiones, a su prueba y de la normativa legal prima facie infringida.

El acta de comprobación y citación deberá ser firmada por los agentes intervinientes y notificada en el mismo acto, entregándose copia a la persona que deba notificarse, o en su defecto, a cualquier persona del establecimiento o administración. Si se negaren a firmar o a recibirla, se dejará en el lugar donde se lleva a cabo la actuación, certificándose tal circunstancia en el original que se incorpore al sumario.

La misma acta contendrá una citación para que el contribuyente o responsable comparezcan a una audiencia para ejercer su defensa, munidos de las pruebas que hagan a su derecho, la que se fijará con un plazo no inferior a cinco (5) días.

El imputado podrá presentar un escrito antes de la audiencia pero si así lo hiciera no tendrá derecho a ser oído verbalmente. Si este no asistiere a la audiencia o no presentare previamente un escrito se dejará constancia de ello y se procederá al dictado de la resolución respectiva, con los elementos obrantes en autos. Si compareciera con posterioridad se proseguirán las actuaciones en el estado en que se encuentren en ese momento.

AUDIENCIA.

Artículo 105.- La audiencia o la presentación del escrito, en su caso, deberán realizarse ante el Juez administrativo, quien deberá dictar resolución en un plazo no mayor a diez (10) días que podrá extenderse a diez (10) días más por decisión fundada. La resolución que ordene la clausura dispondrá sus alcances y el número de días en que deba cumplirse.

Firme la resolución, la Dirección procederá a hacerla efectiva, adoptando los recaudos y seguridades del caso. Podrá realizar asimismo comprobaciones con el objeto de verificar el acatamiento de la medida y dejar constancia documentada de las violaciones que se observaren en la misma.

PROCEDIMIENTO RECURSIVO CONTRA LA CLAUSURA.

Artículo 106.- La sanción de clausura podrá ser recurrida por recurso de apelación, otorgado con efecto suspensivo ante los Tribunales de Primera Instancia en lo Correccional que correspondan a la jurisdicción administrativa del deudor.

El recurso deberá ser interpuesto y fundado en sede administrativa, con patrocinio letrado, dentro de los cinco (5) días de notificada la resolución del artículo anterior. Verificado el

cumplimiento de los requisitos formales y dentro de los tres (3) días de deducida la apelación, deberán elevarse el recurso y las piezas pertinentes de las actuaciones que determine el apelante y la Dirección al juez competente, quien, previa audiencia del apelante, sin perjuicio de recabar todos los antecedentes que creyere indispensables, deberá dictar resolución dentro del término de veinte (20) días, contados en su caso a partir de que se hayan practicado o adjudicado las diligencias o antecedentes necesarios e indispensables, requeridos por el mismo.
En caso de que la resolución establecida en el artículo anterior no sea recurrida por el infractor, la sanción se reducirá de pleno derecho a dos (2) días.
CESE DE ACTIVIDADES DURANTE EL PERÍODO DE CLAUSURA.
Artículo 107.- Durante el período de clausura cesará totalmente la actividad en los establecimientos, salvo la que fuese necesaria para la conservación o custodia de los bienes o para la continuidad de los procesos de producción que no pudieran interrumpirse por causas relativas a su naturaleza. El quebrantamiento de lo establecido en el presente será pasible de la sanción establecida en el artículo 108.
No podrá suspenderse el pago de salarios u obligaciones tributarias o previsionales, sin perjuicio del derecho del empleador a disponer de su personal en las formas que autoricen las normas laborales.
QUEBRANTAMIENTO DE LA CLAUSURA.
Artículo 108.- Quien quebrantare una clausura prevista en este Título del Código o violare los sellos, precintos o instrumentos que hubieran sido utilizados para hacerla efectiva, podrá ser sancionado con una nueva clausura hasta el triple del tiempo de aquella.
DE LA INCAUTACIÓN Y DEL DECOMISO DE BIENES.
Artículo 109.- Serán objeto de decomiso los bienes cuyo traslado o transporte, dentro del territorio provincial, se realice en ausencia total de la documentación respaldatoria que corresponda, en la forma y condiciones que exija la autoridad de aplicación, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 110 de este Código y de las sanciones formales que pudieran corresponder.
En aquellos supuestos en los cuales la ausencia de documentación no fuera total, la autoridad de aplicación podrá optar entre aplicar la sanción de decomiso o una multa de entre el quince por ciento (15%) y hasta el treinta por ciento (30%) del valor de los bienes transportados, aunque en ningún caso podrá ser inferior a la suma de CUATRO MIL (4.000) UAPES o la unidad que un futuro la reemplace.
En cualquiera de los supuestos previstos en los párrafos anteriores, si el interesado reconociere la infracción cometida dentro del plazo fijado para la celebración de la audiencia establecida en el artículo 105 o para la presentación de su descargo por escrito en sustitución de esta última, y abonara voluntariamente en forma conjunta una multa equivalente a los dos tercios del mínimo de la escala, se procederá al archivo de las actuaciones, no registrándose el caso como antecedente para el infractor. En estos supuestos la multa a abonarse no podrá ser inferior a la suma de TRES MIL SEISCIENTOS (3.600) UAPES o la unidad que un futuro la reemplace.
A los fines indicados en este artículo, la autoridad de aplicación podrá proceder a la detención de vehículos automotores, requiriendo el auxilio de la fuerza pública en caso de ver obstaculizado el desempeño de sus funciones.
Artículo 110.- Verificada la infracción señalada en el artículo anterior, los funcionarios o agentes competentes podrán instrumentar el procedimiento tendiente a la aplicación de las siguientes medidas preventivas:

a) interdicción, en cuyo caso se designará como depositario al propietario, transportista, tenedor o quien acredite ser poseedor al momento de comprobarse el hecho; y
b) secuestro, en cuyo supuesto se debe designar depositario a una tercera persona.

En tales casos se impondrá de las previsiones y obligaciones que establecen las leyes civiles y penales para el depositario debiendo, asimismo, ordenar las medidas necesarias para asegurar una buena conservación, atendiendo a la naturaleza y características de los bienes.
Los gastos que se generen con motivo de las medidas previstas en este artículo y los

derivados de la guarda, custodia, conservación y traslado de los bienes, entre otros gastos, serán a cargo del propietario de los mismos.
Artículo 111.- La autoridad de aplicación estará facultada para disponer el traslado de los bienes objeto de la medida preventiva de secuestro a depósitos de su propiedad o contratados a terceros, pudiendo utilizar a tal efecto los vehículos en los que se transportaban los mismos.
En aquellos supuestos en que los contribuyentes no presten la colaboración necesaria para el traslado de los bienes al depósito designado para su almacenamiento, la autoridad de aplicación podrá disponer, según corresponda, el traspaso de los bienes a otro vehículo, la contratación de personal para la conducción de los vehículos que contengan los bienes, el remolque o la inmovilización del vehículo mediante el uso de cualquiera de los métodos adecuados a tal fin.
Artículo 112.- En el mismo acto del artículo 109 o 110, según corresponda, los agentes procederán a labrar un acta de comprobación de los hechos y omisiones detectados, de sus elementos de prueba y la norma prima facie infringida.
Asimismo, se dejará constancia de:

1) la medida preventiva dispuesta respecto de los bienes objeto del procedimiento;
2) la citación al propietario, poseedor, tenedor y/o transportista para que efectúen las manifestaciones que hagan a sus derechos, en una audiencia con el Director Ejecutivo de la Agencia o con el funcionario a quien este delegue su competencia, la que deberá celebrarse en el término máximo de cinco (5) días corridos de comprobado el hecho.

Si alguno de los citados tuviera su domicilio fiscal a una distancia igual o superior a los cien (100) kilómetros de la sede en la que se debe comparecer se ampliará el plazo de la audiencia en razón de un (1) día por cada doscientos (200) kilómetros o fracción que supere los setenta (70) kilómetros; y

3) el inventario de la mercadería y la descripción general del estado en que se encuentra, como así también la indicación de ausencia total o parcial de documentación respaldatoria. En caso de ausencia parcial de documentación respaldatoria, deberá detallarse la existente.

El acta deberá ser firmada por dos (2) de los funcionarios o agentes intervinientes y el propietario, poseedor, tenedor y/o transportista de los bienes. Se hará entrega al interesado de copia de la misma.
Si el propietario, poseedor, tenedor y/o transportista de los bienes se negare a firmar el acta, se dejará constancia de tal circunstancia.
Artículo 113.- El acta de comprobación de la infracción deberá ser comunicada inmediatamente al Director Ejecutivo de la Agencia de Recaudación Fueguina o funcionario en quien se delegue su competencia, el que podrá dentro de las cuarenta y ocho (48) horas, disponer el levantamiento o modificar la medida preventiva dispuesta y, eventualmente, designar otro depositario. La resolución que al efecto se dicte será irrecurrible.
Cuando se decida el levantamiento de la medida preventiva se dispondrá que los bienes objeto del procedimiento sean devueltos o liberados en forma inmediata a favor de la persona oportunamente desapoderada, de quien no podrá exigirse el pago de gasto alguno derivado de la referida medida.
Artículo 114.- El imputado podrá presentar antes de la fecha prevista para la celebración de la audiencia, y en sustitución de esta, su defensa por escrito, quedando las actuaciones en estado de resolver.
El Director de la Agencia de Recaudación Fueguina o el funcionario en quien delegue la competencia, decidirá sobre la procedencia de la sanción y el alcance de la misma, dictando resolución, en el plazo máximo de diez (10) días corridos, contados a partir de la celebración de la audiencia, o de la fecha prevista para la misma en caso de incomparecencia, o de presentado el escrito de defensa.
Resuelta la improcedencia de la sanción por la autoridad de aplicación, se dispondrá que los bienes objeto del procedimiento sean devueltos o liberados en forma inmediata a favor de la

persona oportunamente desapoderada, de quien no podrá exigirse el pago de gasto alguno.
La resolución que establece la sanción deberá disponer, cuando los bienes transportados en infracción sean de tipo perecederos, la entrega de mercadería de la misma naturaleza y cantidad que las descriptas en el acta de comprobación.
Asimismo, deberá establecer que le corresponde al imputado hacerse cargo de la totalidad de los gastos ocasionados por la medida preventiva que eventualmente se hubiera adoptado, como así también de la totalidad de los gastos derivados del cumplimiento de la sanción de decomiso, incluyendo aquellos referidos al traslado de los bienes decomisados al organismo público o institución a la cual los mismos sean destinados, de acuerdo con lo previsto en el artículo 118 del presente Código.
Artículo 115.- El interesado podrá interponer, con efecto suspensivo, en contra de la resolución que disponga la sanción de decomiso, recurso de apelación ante los Tribunales de Primera Instancia en lo Correccional que correspondan a la jurisdicción administrativa del deudor, dentro de los cinco (5) días hábiles de notificada la misma.
El recurso deberá presentarse debidamente fundado ante la autoridad que dictó la resolución que se recurre la cual, dentro de las veinticuatro (24) horas corridas, deberá elevarlo junto con todos los antecedentes del caso al Juez competente. La sentencia que se dicte será inapelable.
Toda acción o impugnación judicial posterior, que ante cualquier instancia intente el interesado, no suspenderá la ejecución de la sentencia.
Si correspondiere revocar la sanción no se podrá imponer al interesado el pago de gasto alguno, disponiendo asimismo el Juez Correccional la inmediata devolución o liberación de los bienes a favor de la persona oportunamente desapoderada.
Artículo 116.- Transcurrido el término para recurrir la sanción de decomiso, de conformidad con lo establecido en el artículo anterior, sin que se haga uso del derecho de apelar la decisión administrativa, el titular de la autoridad de aplicación o el funcionario a quien este delegue su competencia elevará, dentro de las veinticuatro (24) horas corridas, las actuaciones al Juez Correccional en turno quien deberá expedirse, sin más trámite, sobre la legalidad de la sanción de decomiso impuesta.
Artículo 117.- En los casos en que de acuerdo con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 109 se hubiere impuesto sanción de multa, la misma podrá recurrirse de acuerdo con lo establecido en el artículo 125 y concordantes del presente Código.
Artículo 118.- Los bienes decomisados conforme las disposiciones establecidas por el presente Título serán destinados a instituciones sin fines de lucro de tipo asistencial, educacional o religioso oficialmente reconocidas o las que el Poder Legislativo determine.
Las instituciones que resulten beneficiarias deberán destinar los bienes al cumplimiento de su fin social, quedando prohibida su transferencia bajo cualquier modalidad o título.
La autoridad de aplicación podrá proponer al contribuyente la sustitución de los bienes objeto de decomiso por otros bienes de primera necesidad, debiendo esto ser del mismo valor que los sustituidos. La totalidad de los gastos derivados de la sustitución de los bienes decomisados estará a cargo del sujeto sancionado.
Artículo 119.- Cuando se hubiere aplicado la sanción de decomiso de los bienes transportados, la misma quedará sin efecto si el propietario, poseedor, transportista o tenedor de los bienes, dentro del plazo establecido en el artículo 114, acompaña la documentación exigida por la autoridad de aplicación que diera origen a la infracción y abona una multa de hasta el treinta por ciento (30%) del valor de los bienes, la que, en ningún caso, podrá ser inferior a la suma de pesos siete mil ($7.000), renunciando a la interposición de los recursos administrativos y judiciales que pudieran corresponder.
A los efectos de la graduación de la multa se entenderá por valor de los bienes al precio de venta de los mismos estimados por la autoridad de aplicación al momento de verificarse la infracción, facultándosela para disponer con carácter general los mecanismos y parámetros a considerar a tales efectos.

SANCIONES MATERIALES.

OMISIÓN. MULTAS.

Artículo 120.- Incurrirá en omisión y será sancionado con una multa graduable de un cincuenta por ciento (50%) hasta un doscientos por ciento (200%) del monto de la obligación fiscal omitida, todo contribuyente o responsable que omitiere el pago, total o parcial, de tributos y/o sus anticipos mediante la falta de presentación de declaraciones juradas o por ser inexactas las presentadas.

Cuando se tratare del Impuesto de Sellos, cuya determinación no se realice mediante la presentación de Declaración Jurada, la falta de pago, total o parcial, del gravamen por parte del contribuyente o responsable hará incurrir a este en las previsiones del párrafo anterior.

La misma sanción se aplicará a los agentes de retención y/o percepción y/o recaudación que no actuaren como tales.

No corresponderá la aplicación de la sanción prevista en el presente artículo cuando la infracción fuera considerada como defraudación por este Código o por leyes tributarias especiales.

Asimismo, la multa establecida por el presente artículo sólo será de aplicación cuando existiere intimación, actuaciones o expedientes en trámite, vinculados con la situación fiscal del contribuyente o responsables o cuando se hubiera iniciado inspección.

DEFRAUDACIÓN FISCAL. MULTA.

Artículo 121.- Incurren en defraudación fiscal y son punibles con multas graduables de tres (3) a diez (10) veces el importe del tributo en que se defraudare o se intentase defraudar al Fisco, y/o clausura por diez (10) a treinta (30) días, sin perjuicio de la responsabilidad penal por delitos comunes y por delitos previstos en la ley penal tributaria:

a) Los contribuyentes, responsables o terceros que realicen cualquier hecho, aserción, omisión, simulación, ocultación o maniobra con el propósito de producir o facilitar la evasión total o parcial de las obligaciones tributarias que a ellos o a terceros les incumban; y
b) Los agentes de retención o de percepción o recaudación que mantengan en su poder el importe de tributos retenidos o percibidos después de haber vencido el plazo en que debieron abonarlos al Fisco. El dolo se presume por el solo vencimiento del plazo, salvo prueba en contrario.

La multa que se establece en el presente artículo se reducirá al cien por ciento (100%) del impuesto no ingresado oportunamente por los agentes de retención, percepción y recaudación, en tanto haya mediado el pago de los importes retenidos o percibidos hasta diez (10) días después del vencimiento establecido por las normas legales.

Asimismo, la multa establecida por el presente artículo solo será de aplicación cuando existiere intimación, actuaciones o expedientes en trámite, vinculados con la situación fiscal del contribuyente o responsables o cuando se hubiera iniciado inspección.

PRESUNCIÓN DE FRAUDE.

Artículo 122.- Se presume la intención de defraudar al Fisco, salvo prueba en contrario, en las siguientes circunstancias cuando:

a) exista contradicción evidente entre las constancias de los libros, documentos o demás antecedentes con los datos consignados en las declaraciones juradas;
b) las declaraciones juradas contengan datos falsos o se omitan consignar bienes, actividades u operaciones que constituyan hechos imponibles;
c) se produzcan informes o comunicaciones intencionadamente falsos ante la Dirección sobre bienes, actividades u operaciones que constituyan hechos imponibles;
d) se lleven dos (2) o más juegos de libros para una misma contabilidad con distintos asientos o no se lleven o exhiban libros, documentos o antecedentes contables cuando la naturaleza o el volumen de las actividades u operaciones desarrolladas no justifique tal omisión;
e) no se lleven los libros especiales que menciona el artículo 90 de este Código, documentos de comprobación suficiente u otras registraciones;
f) medie manifiesta disconformidad entre los preceptos legales o reglamentarios y su

aplicación al declarar, liquidar o pagar el tributo;

g) los contribuyentes o responsables omitan presentar las declaraciones juradas y pagar el tributo adeudado, si por la naturaleza, volumen e importancia de las operaciones resulte que los mismos no podían ignorar su calidad de contribuyentes o responsables y la existencia de las obligaciones emergentes de tal condición;
h) cuando se adopten formas o estructuras jurídicas inadecuadas y/o improcedentes para desfigurar la efectiva operación gravada y ello se traduzca en apreciable disminución del ingreso tributario;
i) se adultere la fecha de los instrumentos o se extiendan sin fecha y lugar de otorgamiento, siempre que tales actos puedan resultar en un perjuicio a la renta fiscal;
j) se adulteren las estampillas y/o las fechas de su utilización;
k) se adulteren o destruya la documentación respecto de la cual los contribuyentes o responsables hubieran sido nombrados depositarios por la Dirección. Se presumirá que existe adulteración cuando se observen diferencias entre los actos consignados por el inspector en las actas o planillas de inventarios de los documentos intervenidos y el contenido de los mismos, salvo que aquellos permaneciesen en paquetes lacrados y sellados que no presenten signos de violación, o que los originales o las copias fotostáticas, debidamente controladas, se hubieran agregado al expediente. Se presumirá que existe destrucción, cuando la documentación intervenida no sea presentada a requerimiento de la Dirección;
l) se produzcan cambios de titularidad de un negocio inscribiéndolo a nombre del cónyuge, otro familiar o tercero al solo efecto de eludir obligaciones fiscales y se probare debidamente la continuidad económica; y
m) no comunique a la Administración en tiempo y forma cambios o modificaciones que el contribuyente o responsable deba hacer a la Administración respecto de su domicilio fiscal y/o todo otro proceder que obstaculice los poderes de fiscalización y verificación de la Agencia.

SUMARIO. PROCEDIMIENTO.

Artículo 123.- Para aplicar las sanciones por las infracciones previstas por los artículos 101 -salvo la situación prevista en su segundo y tercer párrafos-, 120 y 121, dispondrá la instrucción de un sumario, si no ha entablado el procedimiento del Artículo 62, notificando al presunto infractor y emplazándolo para que en el término de quince (15) días alegue su defensa y ofrezca las pruebas que hagan a su derecho. El interesado podrá agregar informes, certificaciones o pericias producidas por profesionales con título habilitante. No se admitirán las pruebas inconducentes ni las presentadas fuera de término.

La instrucción del sumario podrá disponerse por acta labrada por el funcionario de la Dirección que hubiere comprobado la presunta infracción, acta que hará plena fe mientras no se pruebe lo contrario. Dicha acta será notificada al presunto infractor acordándole el plazo indicado en el párrafo anterior a los efectos y con los alcances allí consignados.

Si el imputado notificado en forma legal, no compareciere dentro del término señalado en el párrafo anterior, el sumario proseguirá en rebeldía. Si compareciera con posterioridad, se seguirán las actuaciones en el estado en que se encuentren, debiendo el interesado purgar la rebeldía mediante el pago de la tasa retributiva de servicios cuyo importe establezca la ley impositiva anual, dentro del término consignado en los párrafos anteriores.

El interesado dispondrá para la producción de la prueba del término que a tal efecto le fije la Dirección y que en ningún supuesto podrá ser inferior a quince (15) días.

El término de prueba no podrá ser prorrogado ni suspendido sino por disposición de la Dirección.

La Dirección podrá disponer medidas para mejor proveer en cualquier estado del trámite.

Vencido el término probatorio o cumplidas las medidas para mejor proveer, la Dirección dictará resolución motivada, dentro de los noventa (90) días siguientes, la que será notificada al interesado.

La resolución impondrá la multa correspondiente a la infracción cometida o declarará la

inexistencia de la infracción y la absolución del imputado.
SUMARIO EN LA DETERMINACIÓN: VISTAS SIMULTÁNEAS.
Artículo 124.- Cuando de las actuaciones tendientes a determinar la obligación tributaria surja prima facie la existencia de infracciones previstas en los artículos 101 - salvo los supuestos indicados en el segundo y tercer párrafo del mismo-, 120 y 121, la Dirección podrá ordenar la instrucción del sumario mencionado en el artículo anterior, antes de dictar la resolución que determine la obligación tributaria.
En tal caso, se podrá decretar simultáneamente la vista dispuesta por el artículo 62 y la notificación y emplazamiento aludidos en el artículo anterior, siendo facultativos de la Dirección decidir ambas cuestiones en una sola o en distintas resoluciones.
RESOLUCIONES. NOTIFICACIÓN. EFECTO.
Artículo 125.- Las resoluciones que apliquen las sanciones previstas en los artículos 101, 120 y 121 o declaren la inexistencia de presuntas infracciones deberán ser notificadas a los interesados y quedarán firmes, si dentro de los quince (15) días de notificadas, aquellos no interponen la vía recursiva que corresponda según las disposiciones previstas en el artículo 148 de este Código.
EXTINCIÓN DE ACCIONES Y SANCIONES POR MUERTE DEL INFRACTOR.
Artículo 126.- Las acciones y sanciones previstas en el presente Título se extinguen por la muerte del infractor, aunque la decisión hubiere quedado firme y su importe no hubiere sido abonado.
SANCIONES A LOS TERCEROS QUE PARTICIPEN EN EL ILÍCITO.
Artículo 127.- Se aplicará la misma sanción que al responsable principal, sin perjuicio de la graduación que corresponda:

a) a los coautores, cómplices o encubridores, considerándose como tales a los que financien, instiguen o colaboren de cualquier manera con el autor para la realización del acto punible, según sea el caso;
b) a los directores, gerentes, administradores, representantes o mandatarios de entidades de hecho o de derecho y de personas físicas, cuando hubiesen actuado con dolo; y
c) a los terceros que, aunque no tuvieran deberes tributarios a su cargo, faciliten o silencien una infracción.

SANCIONES A LOS FUNCIONARIOS Y PROFESIONALES.
Artículo 128.- Los funcionarios o profesionales que participen en carácter de coautores, cómplices o encubridores de las infracciones previstas en los artículos 120 y 121 de este Código, serán pasibles de las sanciones allí mencionadas, sin perjuicio de las que les correspondan por el ejercicio de su cargo o profesión.
La resolución de la Agencia de Recaudación Fueguina deberá ser comunicada al organismo que ejerza el contralor de la respectiva actividad.
ERROR EXCUSABLE.
Artículo 129.- En todos los casos, la Dirección podrá no aplicar las multas previstas en los artículos 101 y 120 cuando las infracciones impliquen error excusable de hecho o de derecho.

TÍTULO DÉCIMO
JUICIO DE EJECUCIÓN FISCAL

SUPUESTOS COMPRENDIDOS. BOLETA DE DEUDA.
Artículo 130.- El cobro judicial de los tributos adeudados –total o parcialmente-, pagos a cuenta, retenciones, percepciones, anticipos, accesorios, intereses y multas ejecutoriadas se hará por la vía de la ejecución fiscal establecida en el presente título.
La ejecución fiscal procederá a partir del vencimiento de los plazos de pago establecidos, según corresponda, sin necesidad de mediar intimación individual o requerimiento extrajudicial alguno.
La Dirección también podrá iniciar reclamos judiciales de los créditos en que resulten acreedores otros organismos del Estado provincial.

Servirá de suficiente título ejecutivo la liquidación y/o determinación administrativa de deuda expedida por los funcionarios autorizados al efecto y en las condiciones previstas por la Administración.
En caso de existir varios créditos contra una misma persona, podrán acumularse en una ejecución y en una misma boleta de deuda los varios conceptos, a elección del actor. La Administración podrá fijar por resolución el límite mínimo de las deudas a ejecutar por la vía de la ejecución fiscal y el mínimo de las deudas a verificar en los procesos universales.
Cuando sea necesario recurrir a la vía judicial establecida en el presente, los importes respectivos devengarán un interés punitorio computable desde la fecha de interposición de la demanda conforme el Artículo 88 de este Código.
JUICIO EJECUTIVO. NORMAS DE APLICACIÓN SUPLETORIA.
Artículo 131.- La ejecución fiscal será considerada juicio ejecutivo a todos sus efectos, aplicándose las normas establecidas en este Título y, de manera supletoria, las disposiciones contenidas en el Código Procesal Civil, Comercial, Laboral, Rural y Minero de la Provincia.
En el juicio de ejecución fiscal no se producirá la caducidad de instancia. Asimismo, la Administración podrá fijar por resolución el límite mínimo de las deudas a ejecutar.
DE LA REPRESENTACIÓN EJERCIDA POR LA ADMINISTRACIÓN.
Artículo 132.- La representación del poder público en el juicio de ejecución fiscal será ejercida por los Recaudadores Fiscales nombrados por la Administración Fiscal de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Asimismo, la susodicha Administración queda facultada para removerlos.
Los Recaudadores Fiscales que lleven adelante las causas deberán ser abogados. En juicio, acreditarán la personería con la respectiva resolución de nombramiento, o copia íntegra de la misma certificada por la Administración.
Los Recaudadores Fiscales no podrán actuar como patrocinantes, defensores o mandatarios en contra del Estado provincial, sus dependencias, reparticiones descentralizadas o desconcentradas, sus empresas, sociedades del Estado y/o Municipales ya sea en recursos administrativos y/o acciones judiciales.
Los recaudadores no podrán percibir fuera de juicio los rubros ejecutados. Los honorarios y gastos causídicos, sea en forma total o parcial, serán calculados con intervención de la repartición de la cual dependen, conforme a la liquidación que la misma practique o la que apruebe la autoridad competente.
Tampoco podrán desistir, transar, conceder esperas, paralizar o suspender el procedimiento, sin previa autorización escrita de la superioridad. Los jueces no podrán proveer tales peticiones sin que se acredite esta circunstancia.
INTERPOSICIÓN DE LA DEMANDA. REQUISITOS. EFECTOS.
Artículo 133.- La demanda de ejecución fiscal debe entablarse ante los Tribunales Ordinarios de la Provincia que correspondan al domicilio fiscal del accionado, y en caso que el mismo no existiere o no subsistiere, se podrá optar entre el lugar de cumplimiento de la obligación o en el lugar donde se encuentren sus bienes inmuebles, sus negocios o ejerza su actividad económica o donde se realice el hecho imponible.
A los efectos del procedimiento, la ejecución se tendrá por interpuesta con la sola presentación de la demanda ante el Juzgado y esta interposición es la que debe tomarse para computar los intereses establecidos por el artículo 88.
La demanda contendrá, según surja del título administrativo base de la acción, el nombre del demandado, su domicilio y el carácter del mismo, concepto y monto reclamado. Además, podrá especificar las medidas cautelares u otras medidas alternativas a trabarse para garantizar el cobro del crédito fiscal reclamado. La Administración deberá constituir domicilio especial para la tramitación del juicio en cuestión.
En ningún caso la facultad que el Fisco confiere a los contribuyentes para el pago de sus obligaciones fuera de la jurisdicción provincial podrá entenderse como declinación de esta última.
PLURALIDAD DE SUJETOS PASIVOS. PLURALIDAD DE CRÉDITOS.
Artículo 134.- Si fueren varios los ejecutados en razón de la misma obligación, el juicio de

ejecución fiscal tramitará en un solo juicio, unificándose la personería en un representante, a menos que existan intereses encontrados a criterio del magistrado. Si a la primera intimación las partes no coinciden en la elección del representante único, el Juez lo designará de oficio y sin recurso alguno por parte de los ejecutados contra tal designación.
En caso de existir varios créditos contra una misma persona, podrán acumularse en una misma ejecución, a elección del actor. Asimismo podrá emitirse un único título ejecutivo comprensivo de todas las deudas y conceptos que el contribuyente o responsable mantenga con la Administración.
MANDAMIENTO DE INTIMACIÓN DE PAGO.
Artículo 135.- Cumplidos los recaudos del artículo 133 si el Juez encontrara en forma el título ejecutivo, y sin más trámite, ordenará mandamiento de intimación de pago y embargo por el monto total reclamado en la demanda con más un treinta por ciento (30%) para atender a intereses y costas. En el mismo acto y auto citará de remate al deudor para que oponga excepciones en el término de cinco (5) días perentorios e improrrogables.
EXCEPCIONES. PRUEBAS. OFRECIMIENTO Y OPORTUNIDAD. TRASLADO DE LA CONTESTACIÓN.
Artículo 136.- Las únicas excepciones admisibles serán las siguientes, a saber:

a) pago total o parcial documentado. Los pagos efectuados después de iniciado el juicio, los pagos mal imputados por el contribuyente o no comunicados por el contribuyente o responsable en la forma establecida, no serán hábiles para fundar la excepción. Acreditados los mismos en los autos, procederá su archivo o la reducción del monto demandado con costas a los ejecutados;
b) espera documentada;
c) prescripción; y
d) inhabilidad de título, no admitiéndose esta excepción si no estuviere fundada exclusivamente en vicios relativos a la forma extrínseca del título ejecutivo.

En ningún caso y bajo ningún concepto, bajo pena de decretar la nulidad de la sentencia, admitirán los jueces en juicio controversias sobre el origen del crédito ejecutado ni podrá cuestionarse la inconstitucionalidad del tributo o conceptos cuyos pagos se perciben.
La prueba de las excepciones opuestas por el demandado deberá ofrecerse en el mismo escrito en que se opongan al contestar la intimación. No procediéndose así, el magistrado de oficio y sin más trámite, rechazará las excepciones y dictará sentencia de trance y remate, siendo inapelable el pronunciamiento.
La prueba del pago deberá consistir exclusivamente en los recibos otorgados por funcionarios o reparticiones fiscales o constancias de instrumentos públicos o actuaciones judiciales. El comprobante respectivo deberá acompañarse al oponerse la excepción.
De las excepciones opuestas y documentación acompañada se dará traslado con copia por cinco (5) días al ejecutante debiendo el auto que así lo dispone notificarse personalmente o por cédula. Inmediatamente de recibida la cédula o habiéndose notificado personalmente, el Recaudador Fiscal deberá notificar las defensas interpuestas por el ejecutado a su superioridad, bajo apercibimiento de la separación del cargo. Si se opusieren otras excepciones o defensas que las enumeradas o se intentara probar las admisibles en otra forma que la autorizada, el Juez procederá a su rechazo sin más trámite, debiendo poner los autos para sentencia.
Contestadas las excepciones o una vez vencido el plazo para el traslado de las mismas, existiendo prueba a producir, se abrirá a prueba la causa por el término de diez (10) días, prorrogables.
AUTOS PARA SENTENCIA. INAPELABILIDAD.
Artículo 137.- Vencido el término que se hubiere acordado para producir la prueba conforme lo dispuesto en el artículo anterior, el Tribunal llamará a autos para sentencia y resolverá dentro de los quince (15) días siguientes.
La sentencia de ejecución o la revocación del auto de intimación de pago y embargo, en ambos casos son inapelables, quedando a salvo el derecho del Fisco provincial de librar nuevo título ejecutivo, y del ejecutado de repetir las sumas abonadas conforme las normas

tributarias aplicables en la especie.
En los casos de sentencias dictadas en los juicios de ejecución fiscal por cobro de tributos, la acción de repetición sólo podrá deducirse una vez satisfecho el tributo adeudado, accesorios y costas.
JUICIO ORDINARIO DE CONOCIMIENTO POSTERIOR. CONDICIÓN SINE QUA NON.
Artículo 138.- Cualquiera fuera la sentencia que recaiga en la ejecución fiscal el ejecutante o el ejecutado podrán promover juicio ordinario una vez cumplidas las condenas impuestas en aquellas y dentro de los treinta (30) días de quedar firme la sentencia. Cumplir la condena impuesta en la sentencia de ejecución, para la parte que fuera, resultara condición sine qua non para la admisibilidad de la demanda de conocimiento posterior.
Toda defensa o excepción que por ley no fuese admisible en la ejecución fiscal podrán hacerse valer en el juicio ordinario. No corresponderá el nuevo proceso para el ejecutado que no opuso excepciones, respecto de las que legalmente pudo deducir, ni para el ejecutante en cuanto a las que se hubiese allanado. Tampoco se podrán discutir nuevamente las cuestiones de hecho debatidas y resueltas en el juicio de ejecución fiscal cuya defensa o prueba no tuviesen limitaciones establecidas por la ley, ni las interpretaciones legales formuladas en la sentencia, ni la validez o nulidad del procedimiento de ejecución.
CURSO DEL SUMARIO. INDEPENDENCIA DE LA EJECUCIÓN.
Artículo 139.- En todos los casos, el cobro de los impuestos por la vía de ejecución fiscal no estará supeditado al curso del sumario a que pueda dar origen la falta de pago de los mismos.
NOTIFICACIONES. OFICIALES “AD-HOC”.
Artículo 140.- Las notificaciones que deban practicarse se efectuarán en el domicilio constituido por la parte demandada o el que corresponda al lugar de cumplimiento de la obligación, a elección del actor. Los jueces podrán autorizar notificaciones por telegrama colacionado, carta documento o cualquier otro medio fehaciente a solicitud del actor, y en este caso servirá como suficiente prueba de la notificación al ejecutado el recibo especial que expida la empresa a cargo del servicio público de correos y telecomunicaciones, contándose los términos a partir de la fecha consignada en el mismo.
El diligenciamiento de los mandamientos de ejecución y embargo y las notificaciones, podrán estar a cargo de empleados de la Administración cuando esta lo requiera. En estos casos, los jueces designarán al funcionario propuesto como oficial de justicia ad hoc dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas. El costo que demande la realización de diligencias será soportado por la parte condenada en costas.
La Administración podrá igualmente, una vez firme la sentencia de remate dictada en el juicio de ejecución fiscal, proponer martillero y tasador para efectuar la subasta, debiendo en tal caso el juez que entiende en la causa, designar al propuesto.
La publicación de los edictos pertinentes se efectuará por el término de dos (2) días en el Boletín Oficial, en un diario de los de mayor circulación del lugar o en otros medios masivos de comunicación, a elección de la Administración.
FACILIDADES DE PAGO.
Artículo 141.- La Administración podrá acordar a los deudores ejecutados planes de facilidades de pago siempre que a juicio de esa Administración la ejecución de los bienes pueda ocasionar un daño irreparable al contribuyente o responsable. Dicha facilidad podrá acordarse previa constitución de garantía suficiente. Habiéndose producido la caducidad de la facilidad de pago concedida, se proseguirá con las acciones en el estado en que se encontraban previo al otorgamiento de dicha facilidad.
El contribuyente que regularice su deuda en plan de regularización o de facilidades de pago deberá hacerse cargo de las costas y gastos causídicos, incluidos la tasa de justicia y la contribución sobre la misma respecto del juicio.
DEUDA GARANTIZADA.
Artículo 142.- Si la deuda líquida y exigible estuviera garantizada mediante aval, fianza personal, prenda, hipoteca o cualquier otra garantía, la demanda de ejecución fiscal se entablará conjuntamente contra el garante y el contribuyente o responsable principal de la deuda reclamada. Dictada la sentencia de trance y remate, se procederá en primer lugar a

ejecutar la garantía. Si la misma no fuese suficiente para cubrir la deuda, se podrá seguir con la ejecución contra cualquier otro bien o valor de los ejecutados. Los profesionales ejecutores no podrán percibir a sus nombres el capital reclamado ni sus intereses y actualización; las sumas correspondientes a tales conceptos se depositarán por el demandado a la orden de los autos del juicio correspondientes a la cuenta del juzgado quien dispondrá la transferencia de los fondos a la orden de la Administración.

EMBARGOS PREVENTIVOS.

Artículo 143.- En cualquier momento podrá la Administración solicitar embargo preventivo, inhibición general de los deudores o sus sucesores, o cualquier otra medida cautelar en resguardo del crédito fiscal, por la cantidad que presumiblemente adeuden los contribuyentes o responsables. En tal circunstancia, los jueces deberán decretarla en el término de veinticuatro (24) horas sin más recaudos ni necesidad de acreditar peligro en la demora, bajo responsabilidad del Fisco.

Para hacer efectivas las medidas que se ordenen, la Administración podrá proponer la designación de oficiales ad-hoc, los que actuarán con las facultades y responsabilidades de los titulares. La caducidad de las medidas cautelares se producirá si la Administración no iniciase la ejecución fiscal transcurridos treinta (30) días judiciales contados de la siguiente manera, a saber:

a. desde la fecha de notificación al contribuyente del rechazo del recurso que agote la vía administrativa, y
b. desde que la deuda ha sido consentida por el contribuyente, al no interponer recursos contra su determinación o liquidación administrativa, dentro de los plazos establecidos.

Cuando el contribuyente o responsable cancele o regularice la deuda cautelada o solicite la sustitución de la medida trabada, las costas serán a su cargo.

MEDIDAS PRECAUTORIAS.

Artículo 144.- La Administración estará facultada para trabar por las sumas reclamadas las medidas precautorias indicadas en el escrito de inicio del juicio de ejecución fiscal o que indicare en posteriores presentaciones.

A tal efecto, podrá la Administración decretar el embargo de cuentas bancarias, fondos y valores depositados en entidades financieras, o de bienes de cualquier tipo o naturaleza, inhibiciones generales de bienes y adoptar otras medidas cautelares tendientes a garantizar el recupero de la deuda en ejecución. También podrá disponer el embargo general de fondos y valores de cualquier naturaleza que los ejecutados tuvieran depositados en las entidades financieras regidas por la Ley nacional 21.526. Asimismo, podrá controlar su diligenciamiento y efectiva traba. Dentro de los quince (15) días de notificadas de la medida, las entidades financieras deberán informar a la Administración acerca de los fondos y valores que resulten embargados, no rigiendo a tales fines el secreto que establece el artículo 39 de la Ley nacional 21.526.

Para los casos que se requieran desapoderamiento físico o allanamiento de domicilios deberá requerir la orden respectiva del Juez competente. Asimismo, y en su caso, podrá llevar adelante la ejecución de sentencias mediante la enajenación de los bienes embargados a través de subasta o concurso públicos.

Si las medidas cautelares recayeran sobre bienes registrables o sobre cuentas bancarias del deudor, la anotación de las mismas se practicará de oficio expedido por la Administración, el cual tendrá el mismo valor que una requisitoria y orden judicial.

En caso de que cualquier medida precautoria resulte efectivamente trabada antes de la intimación al demandado, estas deberán serle notificadas dentro de los cinco (5) días siguientes de haber tomado conocimiento de la traba.

Las entidades financieras y terceros deberán transferir los importes totales o líquidos embargados a una cuenta a nombre de autos y a la orden del juzgado que deberá abrirse en la sucursal del Banco de la Provincia de Tierra del Fuego correspondiente a la jurisdicción del juzgado, hasta la concurrencia del monto total del título ejecutivo, dentro de los dos (2) días hábiles inmediatos siguientes a la notificación de la orden emitida por el Juez.

Los gastos y/o comisiones que demande dicha medida serán soportados íntegramente por el contribuyente o responsable y no podrán detraerse del monto transferido.

LEVANTAMIENTO DE LAS MEDIDAS PRECAUTORIAS.

Artículo 145.- La Administración estará facultada para ordenar, previa regularización de la deuda o sustitución de la misma, el levantamiento de las medidas que oportunamente se hubieran trabado en resguardo del crédito fiscal de conformidad a lo establecido en el artículo anterior, informándolo al juez interviniente en el juicio de ejecución fiscal.

MEDIDAS CAUTELARES.

Artículo 146.- Al inicio de juicio de ejecución fiscal o con posterioridad y en cualquier estado del proceso, podrá solicitarse como medida cautelar, entre otras, y el Juez deberá disponerla en el término de veinticuatro (24) horas sin más recaudos ni necesidad de acreditación de peligro en la demora, todo ello bajo responsabilidad del fisco:

1. traba de embargos sobre:
   a) general de fondos, cuentas o activos bancarios y financieros y valores de cualquier naturaleza que los contribuyentes tengan depositados en las entidades financieras regidas por la Ley nacional 21.526, a diligenciar directamente ante las entidades correspondientes para el supuesto de encontrarse determinadas, caso contrario ante el Banco Central de la República Argentina para que proceda a efectuar las comunicaciones pertinentes a las instituciones donde puedan existir, instruyendo la transferencia a cuenta de autos exclusivamente del monto reclamado con más lo presupuestado para responder a intereses y costas. Para el caso de resultar insuficientes, las cuentas permanecerán embargadas hasta que se acredite y transfiera el monto por el cual procedió la medida asegurativa del crédito fiscal;
   b) bienes inmuebles y muebles sean registrables o no;
   c) sueldos, jubilaciones, pensiones u otras remuneraciones siempre que sean superiores a tres (3) salarios mínimos;
2. inhibición general de bienes; y
3. intervención de caja.

En todos los casos, las anotaciones y levantamientos de las medidas asegurativas del crédito fiscal como así también las órdenes de transferencia de fondos que tengan como destinatarios los registros públicos, instituciones bancarias o financieros, podrán efectivizarse a través de sistemas y medios de comunicación informáticos.

RESPONSABILIDAD DE LOS DEPOSITARIOS.

Artículo 147.- Las entidades financieras, así como las demás personas físicas o jurídicas depositarias de bienes embargados, serán responsables en forma solidaria por hasta el valor del bien o la suma de dinero que se hubiere podido embargar, cuando con conocimiento previo del embargo, hubieren permitido su levantamiento, y de manera particular en las siguientes situaciones:

a) sean causantes en forma directa de la ocultación de bienes, fondos, valores o derechos del contribuyente ejecutado, con la finalidad de impedir la traba del embargo, o
b) cuando sus dependientes incumplan las órdenes de embargo u otras medidas cautelares ordenadas por los jueces o por los agentes fiscales.

Verificada alguna de las situaciones descriptas, el agente fiscal la comunicará de Inmediato al juez de la ejecución fiscal de que se trate, acompañando todas las constancias que así lo acrediten. El juez dará traslado por cinco (5) días a la entidad o persona denunciada, luego de lo cual deberá dictar resolución mandando a hacer efectiva la responsabilidad solidaria aquí prevista, la que deberá cumplirse dentro de un plazo máximo de diez (10) días.

TITULO UNDÉCIMO
PROCEDIMIENTO RECURSIVO

RECURSO DE RECONSIDERACIÓN.

Artículo 148.- Contra las resoluciones de la Administración que determinen total o

parcialmente obligaciones tributarias, anticipos, pagos a cuenta y sus accesorios, impongan sanciones por infracciones –excepto de clausura o demanda de repetición- o denieguen exenciones o compensaciones, el contribuyente o responsable solo podrá interponer el recurso de reconsideración, no pudiendo interponerse en esta materia ninguno de los previstos por la Ley provincial 141 de Procedimiento Administrativo.

PRESENTACIÓN. FORMA.

Artículo 149.- El recurso establecido en el artículo precedente deberá interponerse por escrito ante la Administración, personalmente, por correo o mediante carta certificada con recibo de retorno, fundadamente y dentro del plazo de quince (15) días de notificada la resolución que es objeto del recurso.

Con la interposición del recurso deberán exponerse circunstanciadamente los agravios que cause al recurrente la resolución recurrida. En el mismo acto deberán ofrecerse todas las pruebas acompañando las que consten en documentos.

Con el recurso interpuesto solo podrán ofrecerse o acompañarse pruebas que se refieran a hechos posteriores a la resolución recurrida o documentos que no pudieron presentarse a la Administración por impedimento justificable. Podrá también el recurrente reiterar la prueba ofrecida ante la Administración y que no fue admitida o que, habiendo sido admitida y estando su producción a cargo de la Administración, no hubiera sido sustanciada.

PLAZO MÁXIMO PARA RESOLVER.

Artículo 150.- La Administración deberá resolver el recurso de reconsideración dentro de un plazo máximo de noventa (90) días contados desde su interposición. En caso de que proceda la situación prevista por el artículo 153, el plazo estipulado precedentemente de noventa (90) días podrá ampliarse por otros treinta (30) días.

Una vez producida la prueba o vencido el plazo para la producción de la misma, la resolución que se dicte causará fuerza ejecutoria.

Vencido el plazo establecido en los apartados precedentes, sin que la Dirección haya dictado resolución, el interesado podrá presentar pronto despacho para agotar la vía administrativa y, transcurridos veinte (20) días sin resolución por parte de la Dirección, podrá considerar denegada tácitamente el recurso, quedando habilitada la vía judicial pertinente previo pago del tributo reclamado.

EFECTO SUSPENSIVO PARA EL APELANTE.

Artículo 151.- La interposición del recurso de reconsideración suspenderá la intimación de pago respectiva.

TRÁMITE DEL RECURSO.

Artículo 152.- Dentro de los cinco (5) días de interpuestos el Recurso de Reconsideración, la Agencia, examinará si el mismo ha sido deducido en término y si resulta procedente. Si existen defectos formales subsanables en la presentación del recurso se intimará al recurrente a fin de que subsane dicho defecto en el plazo que a tal efecto fije la Administración, bajo apercibimiento de tenerlo por desistido.

PRUEBA.

Artículo 153.- La Administración ordenará la recepción de las pruebas que se consideren admisibles, conducentes y pertinentes para la pronta y recta resolución de la materia objeto del recurso, fijando quién deberá diligenciarlas y el término dentro del cual deberán ser sustanciadas, el que no podrá exceder de quince (15) días.

La Administración podrá ampliar, a solicitud del contribuyente antes de vencido el citado plazo y cuando existan circunstancias que así lo justifiquen, por igual término, el plazo establecido en el párrafo anterior.

MEDIDAS PARA MEJOR PROVEER.

Artículo 154.- La Administración podrá disponer medidas para mejor proveer. Las medidas para mejor proveer, incluidas las periciales, podrán ser practicadas por organismos provinciales competentes en la materia de que se trate. En todos los casos las medidas para mejor proveer serán notificadas a las partes, quienes podrán controlar su diligenciamiento y efectuar las comprobaciones y verificaciones que estimen convenientes.

RESOLUCIÓN.
Artículo 155.- Vencido el término fijado para la producción de las pruebas y diligenciadas las medidas para mejor proveer que puedan disponer conforme el artículo anterior, la Administración deberá pronunciarse dentro del término establecido por el artículo 150, debiendo practicar en la resolución la liquidación del tributo con más sus accesorios y fijar el importe de la multa, en su caso.
Esta resolución agota la vía administrativa y extingue el efecto suspensivo del recurso.
DEMANDA ORDINARIA. PAGO DE LO RECLAMADO CONDICIÓN SINE QUA NON.
Artículo 156.- Contra las decisiones definitivas y que agotan la vía administrativa, incluidas las de este Título, el contribuyente o responsable podrá interponer demanda judicial dentro de los treinta (30) días de notificada la resolución ante los fueros locales pertinentes.
En los casos de denegatoria presunta el interesado deberá presentar pronto despacho y si no hubiere pronunciamiento dentro de los veinte (20) días hábiles quedará, por este solo hecho, expedita la vía judicial.
En todos los casos, el actor no podrá fundar sus pretensiones en hechos no alegados en la última instancia administrativa ni ofrecer prueba que no hubiera sido ofrecida en dicha instancia, con excepción de los hechos nuevos y de la prueba sobre los mismos.
Será requisito sine qua non para admitir la demanda judicial, el pago previo de los tributos adeudados, su actualización, recargos e intereses mediante las formas previstas en la ley vigente, liquidadas a la fecha de interposición de la demanda.
Ningún Juez podrá dar curso a la demanda ordinaria si no se han abonado los importes reclamados, dar curso a la misma será considerada falta grave salvo que medien razones constitucionales debidamente acreditadas.
Presentada la demanda ante el Poder Judicial, el contribuyente deberá comunicar, mediante escrito a la Dirección, en las oficinas donde se tramitan las actuaciones, la interposición de la misma dentro del plazo de cinco (5) días. La falta de comunicación constituye una infracción que será reprimida en los términos del Artículo 101 del presente Código.
RECURSO DE REPETICIÓN.
Artículo 157.- Los contribuyentes o responsables podrán interponer ante la Administración recurso de repetición de los impuestos, tasas, contribuciones y sus accesorios, cuando consideren que el pago de los mismos hubiere sido indebido o sin causa.
La devolución total o parcial de un tributo obliga a devolver, en la misma proporción, los intereses, recargos y multas excepto la multa prevista en el Artículo 101 de este Código.
En caso de que el recurso fuere promovido por agentes de retención o recaudación, éstos deberán presentar la nómina de contribuyentes a quienes la Administración efectuará la devolución de los importes cuestionados, salvo que acrediten la debida autorización para su cobro.
PRUEBAS. DETERMINACIÓN. RENACIMIENTO DE LAS ACCIONES Y PODERES PRESCRIPTOS.
Artículo 158.- Para obtener la devolución de las sumas que consideren indebidamente abonadas y cuya restitución no hubiere sido dispuesta de oficio, los contribuyentes o responsables deberán interponer demanda o recurso de repetición ante la Administración. Con la demanda deberán acompañarse y ofrecerse todas las pruebas.
La demanda de repetición obliga a la Administración a practicar la determinación de la obligación tributaria con respecto al período y al tributo de que se trate y, en su caso, a exigir el pago de las sumas que resultaren adeudarse. En caso de detectarse deuda, se procede en primer lugar a su compensación con el crédito reclamado, reintegrando o intimado el pago de la diferencia resultante.
La determinación de la obligación tributaria no será obligatoria para la Administración cuando el demandante no fuera contribuyente ni responsable del tributo que abonó y cuya repetición solicita, o en el caso en que se resuelva compensar o acreditar las sumas reclamadas.
Cuando la demanda se refiera a tributos para cuya determinación estuvieren prescriptas las acciones y facultades del Fisco, estas renacerán por el período fiscal al que se impute la devolución y hasta el límite de la cantidad que se reclame. No será necesario el requisito de la

protesta previa para la procedencia de la demanda de repetición, cualquiera sea la causa en que se funde.
PROCEDIMIENTO.
Artículo 159.- Interpuesta la demanda, la Administración previa sustanciación de la prueba ofrecida que considere conducente y demás medidas que estime oportuno disponer, correrá al demandante la vista que prevé el Artículo 62, a sus efectos, y dictará resolución dentro de los ciento ochenta (180) días de interpuesta la demanda. La resolución será notificada al demandante.
FIRMEZA. PRONTO DESPACHO.
Artículo 160.- La resolución de la Administración quedará firme a los quince (15) días de notificada. Vencido el plazo establecido en el Artículo precedente, sin que la Dirección haya dictado resolución, el interesado podrá presentar pronto despacho para agotar la vía administrativa y, transcurridos veinte (20) días sin resolución por parte de la Dirección, podrá considerar denegada tácitamente el recurso, quedando habilitada la vía judicial pertinente.
EFECTOS.
Artículo 161.- La resolución del Recurso de Repetición o su denegación tácita tendrá los efectos del Recurso de Reconsideración y podrá ser objeto de la vía impugnativa allí establecida. Quedará agotada la vía administrativa.
Si el reclamo fuera procedente, se podrá reconocer la actualización desde la fecha del reclamo hasta la fecha de notificación de la resolución que la reconoce. Asimismo, se devengarán los intereses desde la fecha del reclamo hasta la fecha de notificación de la resolución que reconoce el reclamo. A este efecto, se autoriza al Director Ejecutivo a establecer el mismo.

TÍTULO DUODÉCIMO
PRESCRIPCIÓN

TÉRMINO.
Artículo 162.- Prescriben por el transcurso de cinco (5) años:

a) las facultades de la Administración para determinar las obligaciones tributarias y aplicar las sanciones por infracciones previstas en este Código o leyes tributarias especiales;
b) la facultad de la Administración para promover la acción judicial para el cobro de la deuda tributaria; y
c) la facultad de la Administración para disponer la devolución, acreditación o compensación de las sumas indebidamente abonadas: de oficio o no.

Cuando se tratare de deudas originadas en regímenes de retención, percepción y/o recaudación, practicadas y no ingresadas a su vencimiento, las facultades establecidas en los incisos a) y b) del presente artículo prescriben por el trascurso de seis (6) años.
En todos los casos tratándose de contribuyentes no inscriptos y del Impuesto Inmobiliario la prescripción operará trascurrido el plazo de diez (10) años.
CÓMPUTO DEL TÉRMINO.
Artículo 163.-

1. el término de prescripción en el caso del apartado a) del artículo anterior, comenzará a correr desde el 1 de enero siguiente:
   a) del año en que se produzca el vencimiento del plazo para presentar la declaración jurada correspondiente;
   b) del año en que se produzca el hecho imponible generador de la obligación tributaria respectiva, cuando no mediare obligación de presentar declaración jurada;
   c) del año en que se cometieron las infracciones punibles.
2. en el supuesto contemplado en el apartado b) del artículo anterior, el término de prescripción comenzará a correr desde el 1 de enero del año siguiente al año en que quede firme la resolución de la Agencia que determine la deuda tributaria o imponga

las sanciones por infracciones o al año en que debió abonarse la obligación tributaria, cuando no mediare determinación.

Bajo el mismo supuesto, en los casos de reconocimiento de obligaciones tributarias con motivo de acogimientos a planes de facilidades de pago, el término de la prescripción comenzará a correr desde el 1 de enero del año siguiente al año en que opere la caducidad del mismo; y

3. en el supuesto del apartado c) del artículo anterior el término de prescripción comenzará a correr desde la fecha de cada pago.

Los términos de prescripción establecidos en el artículo 162 de este Código no correrán mientras los hechos imponibles no hayan podido ser conocidos por la Dirección por algún acto o hecho que los exteriorice en la Provincia. Esta norma será de aplicación para el Impuesto de Sellos.

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, el impuesto no resultará exigible cuando al momento de la exteriorización hubieran transcurrido más de diez (10) años contados a partir del 1 de enero del año siguiente a la realización de los hechos imponibles.

SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO.

Artículo 164.- Se suspenderá el curso de la prescripción de las acciones y poderes fiscales:

a) En el caso del apartado a) del artículo 162 por la corrida de vista que se refiere el artículo 62 de este Código o la intimación de pago en los casos que la misma no sea procedente o por la iniciación del sumario a que se refiere el artículo 123 de este Código, hasta sesenta (60) días después que la Administración dicte resolución sobre los mismos o que venza el término para dictarla, lo que ocurra primero; no pudiendo extenderse el período de suspensión más allá de un (1) año de acaecida la causa suspensiva.

   Cuando medien recursos de reconsideración ante la Administración, la suspensión por el importe apelado se prolongará hasta sesenta (60) días después de notificada la resolución o, en su caso, de vencido el término legal para dictarla, no siendo aplicable el plazo límite de un (1) año previsto en el párrafo precedente; y

b) desde la fecha de interposición por el contribuyente o responsable del recurso previsto en el artículo 24 inciso b) del Convenio Multilateral, siempre que el contribuyente no haya hecho uso de los recursos establecidos en el presente Código y notifique de la presentación en los términos y plazos previstos en la Ordenanza Procesal la Comisión Arbitral, la suspensión, en este caso, hasta el importe reclamado, se prolongará hasta noventa (90) días después de haber adquirido firmeza la resolución dictada por la Comisión Arbitral o Plenaria, según corresponda.

Sin perjuicio de lo establecido en el inciso a) precedente, en relación a la suspensión del curso de la prescripción de las acciones y poderes fiscales para la iniciación del sumario a que se refiere el artículo 123 de este Código, cuando exista formulación de denuncia penal establecida en la Ley nacional 24.769 por presunta comisión de algunos de los delitos tipificados en dicha ley, la suspensión de la prescripción se extenderá hasta los ciento ochenta (180) días posteriores al momento en que se encuentre firme la sentencia judicial que se dicte en la causa penal respectiva.

INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN.

Artículo 165.- La prescripción de las facultades de la Dirección para determinar la obligación tributaria se interrumpirá:

a) por el reconocimiento expreso o tácito de la obligación tributaria por parte del contribuyente o responsable; y
b) por la renuncia al término corrido de la prescripción en curso.

El nuevo término de la prescripción comenzará a correr desde el 1 de enero siguiente en el que ocurra el reconocimiento o la renuncia.

SANCIONES POR INFRACCIONES: INTERRUPCIÓN.

Artículo 166.- El término de prescripción de la facultad de la autoridad de aplicación para aplicar sanciones por infracciones se interrumpirá por la comisión de nuevas infracciones, en cuyo caso el nuevo término de la prescripción comenzará a correr desde la comisión de la

nueva infracción.
FACULTAD PARA PROMOVER EJECUCIÓN FISCAL.
Artículo 167.- La prescripción de la facultad mencionada en el apartado b) del artículo 161, se interrumpirá por la iniciación del juicio ejecutivo contra el contribuyente o responsable, o por cualquier acto judicial tendiente a obtener el cobro de lo adeudado.
ACCIÓN DE REPETICIÓN. INTERRUPCIÓN.
Artículo 168.- La prescripción de la acción de repetición del contribuyente o responsable se interrumpirá por la interposición de la demanda de repetición a que se refiere el artículo 157 de este Código. El nuevo término de la prescripción comenzará a correr el 1 de enero siguiente a la fecha en que la Administración debió dictar resolución, si el interesado no hubiere interpuesto los recursos autorizados por este Código.

TÍTULO DECIMOTERCERO
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 169.- Salvo disposición legal en contrario, las exenciones de gravámenes regirán a partir del momento en que el sujeto pasivo de la obligación fiscal reúna todos los requisitos exigidos por la ley y conservarán su vigencia mientras no se modifique el destino, afectación o condiciones de su procedencia.
La reglamentación determinará en cada caso cuales sujetos se encuentran alcanzados por el deber de tramitar el acto declarativo del beneficio o de denunciar su situación mediante declaración tributaria pertinente, sin perjuicio de lo cual, si la autoridad de aplicación cuenta con la información necesaria respecto de la concurrencia de las condiciones para la procedencia del beneficio podrá otorgarlo de oficio.
Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, las exenciones se otorgarán de oficio y de pleno derecho cuando se trate del Estado nacional, estados provinciales, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las municipalidades.
Artículo 170.- En el caso de transferencia de bienes inmuebles o muebles registrables, de un sujeto exento a otro gravado o viceversa, la obligación o la exención, respectivamente, comenzará a regir a partir de la fecha del otorgamiento del acto traslativo de dominio, excepto cuando uno de los sujetos fuera el Estado, en cuyo caso la obligación o la exención comenzará a partir de la fecha de la toma de posesión.
De corresponder la tributación, la Agencia de Recaudación Fueguina deberá practicar la liquidación del gravamen anual en forma proporcional por el lapso que reste hasta la finalización del ejercicio fiscal.

LIBRO SEGUNDO - PARTE ESPECIAL
TITULO PRIMERO
DEL IMPUESTO INMOBILIARIO
DEL HECHO Y LA BASE IMPONIBLE

Artículo 171.- Los titulares de dominio, los usufructuarios, adjudicatarios de tierras fiscales y los poseedores a título de dueño pagarían anualmente por los inmuebles situados en la Provincia, el impuesto establecido en el presente Título.
El impuesto inmobiliario se abonará por cada inmueble, de acuerdo a las alícuotas y mínimos que fije la Ley Impositiva.
A efectos de lo dispuesto anteriormente, se considera como único inmueble al conjunto constructivo correspondiente a edificios destinados a hoteles, residenciales, o similares y a clínicas, sanatorios, o similares, aunque correspondan a divisiones o subdivisiones efectuadas en distintas épocas, cuando pertenezcan a un mismo titular de dominio, o correspondan a un mismo usufructuario o poseedor a título de dueño, sean personas físicas o jurídicas.
En el caso de subdivisiones parcelarias o loteos de inmuebles rurales destinados a la creación de clubes de campo, countries y/o emprendimientos similares; cada una de las nuevas parcelas resultantes de la subdivisión realizada no tributará el Impuesto como inmueble rural

independiente, sino hasta ser transferida e inscripta a nombre de un nuevo titular, o bien hasta que comiencen a realizarse en ella obras de construcción o infraestructura o mejoras que evidencien un uso independiente de la parcela respectiva.
Artículo 172.- La base imponible del impuesto inmobiliario estará constituida por la valuación fiscal de cada inmueble, según lo establecido por la Ley territorial 118.
Artículo 173- Las obligaciones por el Impuesto Inmobiliario Rural se generan por la sola existencia de los inmuebles, con prescindencia de su inscripción en los registros o padrones, o de la incorporación de las valuaciones fiscales al Catastro, o de la determinación por la Administración.
La Administración podrá crear, asimismo, su propio Padrón Jurídico Impositivo de contribuyentes del Impuesto Inmobiliario.
CONTRIBUYENTES Y RESPONSABLES.
Artículo 174.- El gravamen correspondiente por cada inmueble es indivisible y son solidariamente responsables de su pago los condóminios, cousufructuarios, coherederos y coposeedores a título de dueño.
DEL PAGO.
Artículo 175.- El impuesto establecido por la presente ley deberá ser pagado anualmente, en una o varias cuotas, en las condiciones y términos que la Agencia de Recaudación Fueguina establezca.
Cuando se trate de la incorporación de edificios u otras mejoras declaradas por el obligado, el impuesto correspondiente al período fiscal corriente se considerará devengado a partir del momento que surja de los datos de la declaración jurada espontánea del contribuyente, en cuyo caso la autoridad de aplicación deberá practicar la liquidación del gravamen anual en forma proporcional al período que transcurra entre dicha fecha y la finalización del ejercicio.
Cuando se trate de la incorporación de edificios u otras mejoras efectuada de oficio o se rectifique la declaración a que se refiere el párrafo anterior, el impuesto se considerará devengado desde el día 1 de enero del año en que se hubiera originado la obligación de denunciar la modificación.
Artículo 176.- Las liquidaciones para el pago del impuesto expedidas por la Agencia de Recaudación Fueguina sobre la base de declaraciones juradas del contribuyente no constituyen determinaciones administrativas, quedando vigente la obligación de completar el pago total del impuesto cuando correspondiere.
Cuando de la aplicación del procedimiento de integración establecido para la determinación del Impuesto queden alcanzados por el gravamen total resultante sujetos que no revistan la calidad de contribuyentes con relación a alguno o algunos de los inmuebles objeto de integración, la autoridad de aplicación podrá efectuar la desintegración de los fraccionamientos o parcelas que correspondan, de oficio o a pedido de parte interesada, en la forma, modo y condiciones que determine la reglamentación a dictarse por la agencia de Recaudación Fueguina.
Artículo 177.- A solicitud de parte interesada, se procederá a la apertura de las partidas inmobiliarias correspondientes a las parcelas resultantes de un plano de mensura de subdivisión para someter al régimen de propiedad horizontal, con efectividad a la fecha de registración de dicho documento cartográfico.
Artículo 178.- La Agencia de Recaudación Fueguina no prestará aprobación a la unificación o subdivisión de partidas -aún en los casos de aperturas a que se refiere el artículo anterior-, sin la previa acreditación de inexistencia de deudas por el impuesto Inmobiliario hasta la cuota que resulte exigible a la fecha de dicha aprobación, mediante certificación expedida por la autoridad de aplicación. Dicha acreditación no será exigible cuando el titular de dominio solicite que dicha deuda sea imputada a la partida o partidas que se generen por la unificación o subdivisión, a cuyos efectos la citada Agencia deberá establecer, con carácter general, el procedimiento y demás condiciones para su instrumentación.
Asimismo, la modalidad de imputación referida precedentemente, también podrá aplicarse cuando la unificación o subdivisión sea realizada de oficio.

DE LAS EXENCIONES.

Artículo 179.- Están exentos de este impuesto:

a) el Estado nacional, estados provinciales, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las municipalidades, y sus organismos descentralizados o autárquicos, salvo aquellos que realicen actos de comercio con la venta de bienes o prestación de servicios a terceros.

También estarán exentos los inmuebles cedidos en uso gratuito al Estado Nacional, los estados provinciales, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las municipalidades, y sus organismos descentralizados o autárquicos, salvo aquellos que realicen actos de comercio con la venta de bienes o prestación de servicios a terceros;

a) los templos religiosos pertenecientes a cultos reconocidos por autoridad competente; los Arzobispados, Obispados y los Institutos de Vida Consagrada conforme a la Ley nacional 24.483 y Decretos Reglamentarios, de la Iglesia Católica Apostólica Romana;
b) las fundaciones debidamente reconocidas como tales por autoridad competente, cuyos inmuebles estén destinados exclusivamente a cumplir con su objeto estatutario;
c) las universidades reconocidas como tales;
d) la Cruz Roja Argentina;
e) los inmuebles declarados monumentos históricos, por autoridad competente;
f) los inmuebles o parte de los mismos que sean destinados a las asociaciones y sociedades civiles, con personería jurídica, cuando el producto de sus actividades se afecte exclusivamente a los fines de su creación y que no distribuyan suma alguna de su producto entre asociados y socios, y solamente respecto de aquellos inmuebles que se utilicen principalmente para los fines que a continuación se expresan:
    1. servicio de bomberos voluntarios;
    2. salud pública, asistencia social gratuitas y beneficencia;
    3. bibliotecas públicas y actividades culturales;
    4. enseñanza e investigación científica;
    5. actividades deportivas;
    6. servicio especializado en la rehabilitación de personas discapacitadas.

    La exención del impuesto también alcanza a los propietarios de aquellos inmuebles cedidos gratuitamente en uso a las asociaciones y sociedades civiles mencionadas en el primer párrafo que utilicen los mismos para los fines señalados en el presente artículo;
g) los titulares de dominio y demás responsables por las instalaciones, obras accesorias y plantaciones de los inmuebles de las plantas rural y subrural, según la clasificación de la Ley de Catastro 146, modificatorias y complementarias;
h) el valor correspondiente a las plantaciones de los inmuebles de la zona suburbana, según la clasificación de la Ley de Catastro;
i) los inmuebles pertenecientes o cedidos en uso gratuito a los establecimientos educativos reconocidos y autorizados por el Ministerio de Educación de la Provincia, y destinados total o parcialmente al servicio educativo.

Asimismo, esta exención alcanzará a los bienes inmuebles locados o cedidos en comodato, usufructo o uso no gratuito, a los mencionados establecimientos, siempre que se encontraren destinados en forma exclusiva y habitual al servicio educativo y cuando las contribuciones, tasas, impuestos o expensas comunes que gravan el bien fueren a su cargo;
j) los propietarios y demás responsables de inmuebles pertenecientes a la planta urbana edificada, cuyo avalúo fiscal total no supere la suma que fije la Ley Impositiva y además sean propietarios, usufructuarios o poseedores de ese solo inmueble.

En el supuesto de pluralidad de obligados al pago, gozarán de la exención solamente los que reúnan los requisitos establecidos en el párrafo anterior. El resto de los obligados abonará la parte proporcional del impuesto que corresponda, el que se liquidará de conformidad a lo establecido en el artículo 178;
k) los propietarios y demás responsables de inmuebles pertenecientes a la planta

urbana edificada, cuyo avalúo fiscal total no supere la suma que fije la Ley Impositiva y que reúnan los siguientes requisitos:

1. ser el solicitante y/o su cónyuge o pareja conviviente jubilado o pensionado;
2. ser el solicitante y/o su cónyuge o pareja conviviente propietario, usufructuario o poseedor de ese sólo inmueble;
3. que el único ingreso de los beneficiarios este constituido por haberes previsionales cuyos importes brutos, en conjunto, no superen mensualmente el monto que establezca la Ley Impositiva.

   Cuando se trate de parejas convivientes deberá acreditarse un plazo de convivencia no menor a dos (2) años mediante información sumaria judicial.

   En el supuesto de la pluralidad de obligados al pago, la exención sólo beneficiará a aquellos que reúnan los requisitos establecidos precedentemente. El resto de los obligados abonará la parte proporcional del impuesto que corresponda, el que se liquidará de conformidad con lo establecido en el artículo 178;

l) los inmuebles ocupados por asociaciones gremiales de trabajadores con personería jurídica y/o gremial, siempre que les pertenezcan en propiedad, usufructo, o les hayan sido cedidos gratuitamente en uso, siempre que el uso y/o la explotación sean realizadas exclusivamente por dichas entidades;

m) los inmuebles ocupados por los partidos políticos y agrupaciones municipales, debidamente reconocidos, siempre que les pertenezcan en propiedad, usufructo o les hayan sido cedidos gratuitamente en uso y se encontraren destinados en forma exclusiva y habitual a las actividades específicas del partido o agrupación municipal;

n) los titulares de dominio que hubieran participado en las acciones bélicas desarrolladas entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982, por la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur o sus derecho-habientes beneficiarios de la pensión de guerra prevista en la Ley nacional 23.848, que sean propietarios, poseedores o usufructuarios de esa única vivienda, la misma se encuentre destinada a uso familiar y la valuación fiscal no supere el monto que establezca la Ley impositiva. Los límites de valuación fiscal y el de única vivienda referidos en el párrafo anterior no serán aplicables cuando quienes hayan participado de dichas acciones bélicas fueran ex soldados conscriptos y civiles. En el supuesto en el que los mismos sean propietarios, poseedores o usufructuarios de uno o varios inmuebles, la exención procederá únicamente por el que destinen a sus viviendas.
   No podrán acceder a la exención prevista en este inciso o mantenerla quienes hubiesen sido condenados por delitos de lesa humanidad;

o) los inmuebles que hayan sido la última vivienda de personas que se encuentren en situación de desaparición forzada o que hubiesen fallecido como consecuencia del accionar de las fuerzas armadas, de seguridad o de cualquier grupo paramilitar con anterioridad al 10 de diciembre de 1983, mientras que mantengan la titularidad dominial de los mismos sus derecho-habientes comprendidos en el beneficio establecido en la Ley nacional 24.411 y sus modificatorias; y

p) los titulares de dominio comprendidos en las Leyes nacionales 24.043 y 25.914 y sus modificatorias, que sean propietarios, poseedores o usufructuarios de esa única vivienda y la misma se encuentre destinada a uso familiar y que la valuación fiscal no supere el monto que establezca la Ley Impositiva.

En todos los casos de exenciones contempladas en el presente artículo, la proporción exenta se calculará sobre el gravamen liquidado.

Artículo 180.- Las proporciones a que se refiere el segundo párrafo del inciso j) del artículo 179, se determinarán sobre la base de los valores que surgen de las declaraciones juradas.

Artículo 181.- Los contadores públicos que certifiquen balances de entidades de cualquier tipo incluso unipersonales, deberán hacer constar en el pasivo en renglón separado, claramente desglosada, la deuda impaga por este impuesto, en el supuesto de mora, así como la provisión razonablemente estimada, para cubrir los recargos, intereses y ajustes de valor por

el mismo concepto, en cuanto correspondiese.
Artículo 182.- En los casos de transferencias del dominio de inmuebles o constitución de usufructo, producidos con anterioridad a la fecha de actualización de valuaciones, los adquirentes o usufructuarios serán responsables del pago de la diferencia de impuesto que pudiera resultar.

TITULO SEGUNDO
DEL IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

DEL HECHO IMPONIBLE.
Artículo 183.- El ejercicio habitual y a título oneroso en jurisdicción de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur, del comercio, industria, profesión, oficio, negocio, locaciones de bienes, obras o servicios, o de cualquier otra actividad a título oneroso -lucrativa o no- cualquiera sea la naturaleza del sujeto que la preste, incluidas las sociedades cooperativas y el lugar donde se realice (zonas portuarias, espacios ferroviarios, aeródromos y aeropuertos, terminales de transporte, edificios y lugares de dominio público y privado y todo otro de similar naturaleza) estará alcanzado con un Impuesto sobre los Ingresos Brutos en las condiciones que se determinan en los artículos siguientes.
La habitualidad deberá determinarse teniendo en cuenta especialmente la índole de las actividades, el objeto de la empresa, profesión o locación y los usos y costumbres de la vida económica.
Se entenderá como ejercicio habitual de la actividad gravada el desarrollo, en el ejercicio fiscal, de hechos, actos u operaciones de la naturaleza de las gravadas por el impuesto, con prescindencia de su cantidad o monto, cuando los mismos sean efectuados por quienes hagan profesión de tales actividades.
La habitualidad no se pierde por el hecho de que, después de adquirida, las actividades se ejerzan en forma periódica o discontinua.
ACTIVIDADES ALCANZADAS.
Artículo 184.- Se considerarán también actividades alcanzadas por este impuesto, las siguientes operaciones, realizadas dentro de la Provincia, sea en forma habitual o esporádica:

1. profesiones liberales: el hecho imponible está configurado por su ejercicio, no existiendo gravabilidad por la mera inscripción en la matrícula respectiva;
2. la mera compra de productos agropecuarios, forestales, frutos del país y minerales para industrializarlos o venderlos fuera de la jurisdicción. Se considerará "fruto del país" a todos los bienes que sean el resultado de la producción nacional perteneciente a los reinos vegetal, animal o mineral obtenidos por acción de la naturaleza, el trabajo o el capital, mientras conserven su estado natural, aun en el caso de haberlos sometido a algún proceso o tratamiento -indispensable o no- para su conservación o transporte, lavado, salazón, derretimiento, pisado, clasificación, etc.; y
3. el fraccionamiento y la venta de inmuebles (loteos, la compraventa y la locación de inmuebles).

Esta disposición no alcanza a las siguientes operaciones realizadas por personas físicas sobre inmuebles propios:

a) alquiler de una (1) unidad locativa independiente destinada a vivienda;
b) venta de inmuebles efectuada antes de los dos (2) años de la escrituración. Este plazo no será exigible cuando se trate de enajenaciones efectuadas por sucesiones, o cuando versen sobre vivienda única o inmueble afectado como bien de uso; y
c) ventas de lotes pertenecientes a subdivisiones de no más de cinco (5) unidades.

DETERMINACIÓN DEL HECHO IMPONIBLE. NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA.
Artículo 185.- Para la determinación del hecho imponible, se atenderá a la naturaleza específica de la actividad desarrollada, con prescindencia -en caso de discrepancia- de la calificación que mereciera a los fines de policía municipal o de cualquier otra índole, o a los fines del encuadramiento en otras normas nacionales, provinciales o municipales, ajenas a la

finalidad de la ley.
ACTIVIDAD NO GRAVADA.
Artículo 186.- No constituye actividad gravada con este impuesto:

a) el trabajo personal ejecutado en relación de dependencia, con remuneración fija o variable;
b) el desempeño de cargos públicos;
c) el transporte internacional de pasajeros y/o cargas efectuados por empresas constituidas en el exterior, en Estados con los cuales el país tenga suscriptos o suscriba acuerdos o convenios para evitar la doble imposición en la materia, de los que surja, a condición de reciprocidad, que la aplicación de gravámenes queda reservada únicamente al país en el cual están constituidas las empresas;
d) las exportaciones, entendiéndose por tales las actividades consistentes en la venta de productos y mercaderías efectuadas al exterior por el exportador, con sujeción a los mecanismos aplicados por la Administración Nacional de Aduanas.

Esta exención no alcanza a las actividades conexas de transporte, eslingaje, estibaje, depósito y toda otra de similar naturaleza;

e) honorarios de directorios y consejos de vigilancia, ni otros de similar naturaleza.

Esta disposición no alcanza a los ingresos en concepto de sindicaturas; y

f) jubilaciones y otras pasividades en general.

DE LOS CONTRIBUYENTES Y DEMÁS RESPONSABLES.
Artículo 187.- Son contribuyentes del impuesto las personas físicas, sociedades con o sin personería jurídica, las uniones transitorias de empresas, las agrupaciones de colaboración empresaria y demás entes que realicen las actividades gravadas. Cuando lo establezca la Administración, deberán actuar como agentes de retención, percepción o información, las personas físicas, sociedades con o sin personería jurídica y toda entidad que intervenga en operaciones o actos de los que deriven o puedan derivar ingresos alcanzados por el impuesto.
Las sucesiones indivisas serán contribuyentes desde la fecha de fallecimiento del causante hasta la fecha de declaratoria de herederos o de declaración de validez del testamento que cumpla la misma finalidad. Asimismo mantendrán su condición de sujetos pasivos quienes hayan sido declarados en quiebra o concurso civil o comercial, con relación a las ventas en subastas judiciales y a los demás hechos imponibles que se efectúen o generen en ocasión o con motivo de los procesos respectivos.
Artículo 188.- Los escribanos, martilleros, empresas inmobiliarias, industriales, de construcción, de seguros, de capitalización, de crédito recíproco, acopiadores, consignatarios, frigoríficos, cooperativas, asociaciones de productores agropecuarios, entidades o instituciones públicas o privadas que intervengan en operaciones o actos de los que deriven o puedan derivar ingresos alcanzados por el impuesto, actuarán como agentes de retención o exigirán la acreditación del pago del tributo determinado.
La Agencia queda facultada para disponer la aplicación de una alícuota diferencial en los casos que los sujetos pasivos de la retención o percepción sean contribuyentes o responsables obligados a inscribirse al momento de la retención o percepción y no demuestren tal calidad por los medios que la misma disponga.
CATEGORIZACIÓN DE LOS CONTRIBUYENTES.
Artículo 189.- La Ley Impositiva podrá establecer en función de los ingresos brutos u otra base de medición, categorías de contribuyentes, excepto para los que tributan bajo el régimen del Convenio Multilateral.
CATEGORIZACIÓN DE CONTRIBUYENTES.
Artículo 190.- La Agencia de Recaudación Fueguina queda facultada a implantar un régimen de identificación -total o parcial- de contribuyentes y responsables del impuesto sobre los ingresos brutos, que será obligatorio para quienes desarrollen hechos, actos, operaciones o actividades que generen ingresos brutos gravados, conforme se reglamente. En la jurisdicción de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, los organismos de los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo Nacional, Provincial, Municipal y sus dependencias, no darán curso a ningún trámite que resulte de interés para los solicitantes si los obligados no

exhiben, de corresponder como consecuencia de lo dispuesto en el párrafo anterior, la correspondiente identificación.
Tales organismos y sus funcionarios -de cualquier jerarquía- deberán prestar obligatoriamente la colaboración que se les requiera, a los fines del párrafo precedente, y si omitieren el cumplimiento de su obligación en tiempo y forma, se harán pasibles de las sanciones que dispone este Código.
DETERMINACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE. EXCEPCIONES.
Artículo 191.- Salvo expresa disposición en contrario, el gravamen se determinará sobre la base de los ingresos brutos devengados durante el período fiscal por el ejercicio de la actividad gravada.
Se considera ingreso bruto el valor o monto total -en valores monetarios, en especies o en servicios- devengado en concepto de venta de bienes, de remuneraciones totales obtenidas por los servicios, la retribución por la actividad ejercida, los intereses obtenidos por préstamos de dinero o plazos de financiación o, en general, el de las operaciones realizadas.
En las operaciones de venta de inmuebles en cuotas por plazos superiores a doce (12) meses, se considera ingreso bruto devengado, a la suma total de las cuotas o pagos que vencieran en cada período. En las operaciones realizadas por las entidades financieras comprendidas en el régimen de la Ley nacional 21.526, se considerará ingreso bruto a los importes devengados, en función del tiempo, en cada período. En las operaciones realizadas por responsables que no tengan obligación legal de llevar libros y formular balances en forma comercial, la base imponible será el total de los ingresos percibidos en el período.
Los ingresos brutos se imputarán al período fiscal en que se devengan. Se entenderá que los ingresos se han devengado, salvo las excepciones previstas en la presente ley:

a) en el caso de venta de inmuebles, desde el momento de la firma del boleto, la posesión o escrituración, el que fuere anterior;
b) en el caso de venta de otros bienes, desde el momento de la facturación o de la entrega del bien o acto equivalente, el que fuere anterior;
c) en los casos de trabajos sobre inmuebles de terceros, desde el momento de la aceptación del certificado de obra, parcial o total o de la percepción total o parcial del precio de la facturación, el que fuere anterior;
d) en el caso de prestaciones de servicio y de locaciones de obra y servicios -excepto las comprendidas en el inciso anterior- desde el momento en que se facture o termine total o parcialmente la ejecución de prestaciones pactada o de la percepción de pagos a cuenta del precio, lo que fuere anterior, salvo que las mismas se efectuaren sobre bienes o mediante su entrega, en cuyo caso el gravamen se devengará desde el momento de la entrega de tales bienes;
e) en el caso de provisión de energía eléctrica, agua o gas, o prestaciones de servicios cloacales, de desagües o de telecomunicaciones, desde el momento en que se produzca el vencimiento del plazo fijado para su pago o desde su percepción total o parcial, el que fuere anterior;
f) en el caso de intereses y/o actualizaciones, desde el momento en que se generan y en proporción al tiempo transcurrido hasta cada período de pago del impuesto;
g) en el caso del recupero total o parcial de créditos deducidos con anterioridad como incobrables, en el momento en que se verifique el recupero; y
h) en los demás casos, desde el momento en que se genere el derecho a la contraprestación.

A los fines de lo dispuesto precedentemente, se presume que el derecho a la percepción se devenga con prescindencia de la exigibilidad del mismo.
NO INTEGRAN LA BASE IMPONIBLE.
Artículo 192.- No integran la base imponible los siguientes conceptos:

a) los importes correspondientes a impuestos internos, impuesto al valor agregado -débito fiscal- e impuesto para los fondos: nacional de autopistas, tecnológico del tabaco y de los combustibles.
   Esta deducción solo podrá ser efectuada por los contribuyentes de derecho de los

gravámenes citados, en tanto se encuentren inscriptos como tales. El importe a computar será el del débito fiscal o el del monto liquidado, según se trate del impuesto al valor agregado o de los restantes gravámenes, respectivamente en todos los casos, en la medida en que correspondan a las operaciones de la actividad sujeta a impuesto, realizadas en el período fiscal que se liquida;

b) los importes que constituyan reintegro de capital, en los casos de depósitos, préstamos, créditos, descuentos y adelantos, y toda otra operación de tipo financiero, así como sus renovaciones, repeticiones, prórrogas, esperas u otras facilidades, cualquiera sea la modalidad o forma de instrumentación adoptada;

c) los reintegros que perciban los comisionistas, consignatarios y similares, correspondientes a gastos efectuados por cuenta de terceros, en las operaciones de intermediación en que actúen y siempre que se rinda cuenta de los mismos, con comprobantes.

Tratándose de concesionarios o agentes oficiales de ventas, lo dispuesto en el párrafo anterior solo será de aplicación a los del Estado en materia de juegos de azar y similares y de combustibles;

d) los subsidios y subvenciones que otorguen el Estado nacional, provincial y las municipalidades;

e) las sumas percibidas por los exportadores de bienes o servicios, en concepto de reintegros o reembolsos, acordados por la Nación;

f) los ingresos correspondientes a venta de bienes de uso propios;

g) los importes que correspondan al productor asociado por la entrega de su producción, en las cooperativas que comercialicen producción agrícola, únicamente, y el retorno respectivo; y

h) en las cooperativas de grado superior, los importes que correspondan a las cooperativas agrícolas asociadas de grado inferior, por la entrega de su producción agrícola y el retorno respectivo.

Las cooperativas citadas en los incisos g) y h) del presente artículo, podrán pagar el impuesto deduciendo los conceptos mencionados en los citados incisos y aplicando las normas específicas dispuestas por la ley impositiva para estos casos, o bien podrán hacerlo aplicando las alícuotas pertinentes sobre el total de sus ingresos. Efectuada la opción en la forma que determinará la Agencia de Recaudación Fueguina no podrá ser variada sin autorización expresa del citado organismo. Si la opción no se efectuare en el plazo que determine la Agencia, se considerará que el contribuyente ha optado por el método de liquidar el gravamen sobre la totalidad de los ingresos.

DEDUCCIONES DE LA BASE IMPONIBLE.

Artículo 192 bis.- De la base imponible se deducirán los siguientes conceptos:

a) las sumas correspondientes a devoluciones, bonificaciones y descuentos efectivamente acordados por épocas de pago, volumen de ventas u otros conceptos similares, generalmente admitidos según los usos y costumbres, correspondientes al período fiscal que se liquida;

b) el importe de los créditos incobrables producido en el transcurso del período fiscal que se liquida y que hayan sido computados como ingreso gravado en cualquier período fiscal.

Esta deducción no será procedente cuando la liquidación se efectúe por método de lo percibido.

Constituyen índices justificativos de la incobrabilidad cualquiera de los siguientes: la cesación de pagos, real y manifiesta, la quiebra, el concurso preventivo, la desaparición del deudor, la prescripción y la iniciación del cobro compulsivo.

En caso de posterior recupero, total o parcial, de los créditos deducidos por este concepto, se considerará que ello es un ingreso gravado imputable al período fiscal en que el hecho ocurra; y

c) los importes correspondientes a envases y mercaderías devueltas por el comprador, siempre que no se trate de actos de retroventa o retrocesión.

Las deducciones enumeradas precedentemente solo podrán efectuarse cuando los conceptos a que se refieren correspondan a operaciones o actividades de las que derivan los ingresos objeto de la imposición.
Las mismas deberán efectuarse en la oportunidad en que la erogación, débito fiscal o detracción tengan lugar y siempre que sean respaldadas por las registraciones contables o comprobantes respectivos.
CONCEPTOS NO EXCLUIDOS.
Artículo 193.- De la base imponible no podrán detraerse el laudo correspondiente al personal, ni los tributos que incidan sobre la actividad, salvo los específicamente determinados en la ley.
BASE IMPONIBLE ESPECIAL.
Artículo 194.- La base imponible estará constituida por la diferencia entre los precios de compra y de venta en los siguientes casos:

a) comercialización de billetes de lotería y juegos de azar autorizados cuando los valores de compra y de venta sean fijados por el estado;
b) comercialización mayorista y minorista de tabacos, cigarros y cigarrillos;
c) las operaciones de compra y venta de divisas; y
d) comercialización de productos agrícola-ganaderos efectuada por cuenta propia por los acopiadores de esos productos.

A opción del contribuyente, el impuesto podrá liquidarse aplicando las alícuotas pertinentes sobre el total de los ingresos respectivos.
A los efectos de cualquier tipo de categorización que se establezca en el presente Código, deberán considerarse los ingresos brutos totales del contribuyente, aun cuando difiera de la base imponible considerada a los efectos de la determinación de la obligación tributaria.
BASE IMPONIBLE. ENTIDADES FINANCIERAS.
Artículo 195.- Para las entidades financieras comprendidas en la Ley nacional 21.526 y sus modificatorias, la base imponible estará constituida por la diferencia que resulte entre el total de la suma del haber de las cuentas de resultados y los intereses y actualizaciones pasivas, ajustada en función de su exigibilidad en el período fiscal de que se trata.
Asimismo se computarán como intereses acreedores y deudores respectivamente, las compensaciones establecidas en el artículo 3º de la Ley nacional 21.572 y los cargos determinados de acuerdo con el artículo 3º, inciso a), del citado texto legal.
BASE IMPONIBLE. PRÉSTAMOS DE DINERO. ENTIDADES NO INCLUIDAS EN LA LEY NACIONAL 21.526.
Artículo 196.- En los casos de operaciones de préstamos de dinero, realizadas por personas físicas o jurídicas que no sean las contempladas por la Ley nacional 21.526 de entidades financieras, la base imponible será el monto de los intereses y ajustes por desvalorización monetaria.
Cuando en los documentos referidos a dichas operaciones, no se mencione el tipo de interés o se fije uno inferior al establecido por el Banco de la Provincia de Tierra del Fuego para el descuento de documentos, se computará este último a los fines de la determinación de la base imponible.
BASE IMPONIBLE. COMPAÑÍAS DE SEGURO.
Artículo 197.- Para las compañías de seguros y reaseguros, se considera monto imponible aquel que implique una remuneración de los servicios o un beneficio para la entidad.
Se conceptúan especialmente en tal carácter:

a) la parte que sobre las primas, cuotas o aportes se afecte a gastos generales, de administración, pago de dividendos, distribución de utilidades u otras obligaciones a cargo de la institución; y
b) las sumas ingresadas por locación de bienes inmuebles y la venta de valores mobiliarios no exenta del gravamen, así como las provenientes de cualquier otra inversión de sus reservas.

No se computarán como ingresos, la parte de las primas de seguros destinada a reservas matemáticas y de riesgos en curso, reaseguros pasivos y siniestros y otras obligaciones con asegurados.

BASE IMPONIBLE. PLANES DE AHORRO.
Artículo 198.- Las empresas o entidades que exploten directa o indirectamente los círculos de ahorro compartido, ahorro para fines determinados, círculos cerrados o planes de compra por autofinanciación, los también denominados "60 x 1.000", etc., pagarán sobre el total de ingresos brutos cualquiera sea la denominación de la percepción (cuota pura, gastos de administración, intereses, inscripción, etc.) deduciendo el costo de los bienes adjudicados.
BASE IMPONIBLE. COMISIONISTAS Y OTROS INTERMEDIARIOS.
Artículo 199.- Para las operaciones efectuadas por comisionistas, consignatarios, mandatarios, corredores, representantes y/o cualquier tipo de intermediarios que realicen operaciones de naturaleza análoga, la base imponible estará constituida por los ingresos devengados en el período fiscal: comisiones, bonificaciones, participaciones, porcentajes o similares, así como todo otro ingreso que signifique una retribución por su actividad, las garantías de créditos, los fondos especiales, el pesaje y báscula, los intereses o actualizaciones, los fletes en camiones propios y cualquier recupero de gasto sin rendición de cuentas con comprobante.
Esta disposición no será de aplicación en los casos de operaciones de compraventa que por cuenta propia efectúen los intermediarios citados en el párrafo anterior. Tampoco para los concesionarios o agentes oficiales de venta, los que se regirán por las normas generales.
En el caso de ejercicio de profesiones liberales, cuando la percepción de los honorarios se efectúe -total o parcialmente- por intermedio de consejos o asociaciones profesionales, la base imponible estará constituida por el monto líquido percibido por los profesionales.
BASE IMPONIBLE. COMERCIALIZACIÓN DE BIENES USADOS.
Artículo 200.- En el caso de comercialización de bienes usados, la base imponible será la diferencia entre su precio de venta y el monto que se le hubiere atribuido en oportunidad de su recepción o compra.
Artículo 201.- En el caso de comercialización de bienes usados recibidos como parte de pago de unidades nuevas o usadas, la base imponible será la diferencia entre su precio de venta y el monto que se le hubiere atribuido en oportunidad de su recepción.
BASE IMPONIBLE. AGENCIAS DE PUBLICIDAD.
Artículo 202.- Para las agencias de publicidad, la base imponible esta dada por los ingresos provenientes de los "servicios de agencias", bonificaciones por volúmenes y los montos provenientes de servicios propios, y productos que facturen. Cuando la actividad consista en la simple intermediación los ingresos provenientes de las comisiones recibirán el tratamiento previsto para comisionistas, consignatarios, mandatarios, corredores y representantes.
BASE IMPONIBLE. PAGOS EN ESPECIES.
Artículo 203.- Cuando el precio se pacte en especies, el ingreso bruto estará constituido por la valuación de la cosa entregada, la locación, el interés o el servicio prestado, aplicando los precios, la tasa de interés, el valor locativo, etc., oficiales o corrientes en plaza, a la fecha de generarse el devengamiento.
EXENCIONES.
Artículo 204.- Están exentos del pago de este gravamen:

a) las actividades ejercidas por el Estado nacional, el Estado provincial, los estados provinciales, las municipalidades y comunas, sus dependencias, reparticiones autárquicas y descentralizadas. No se encuentran comprendidos en esta disposición los organismos, reparticiones o empresas pertenecientes total o parcialmente al Estado nacional, provincial, municipal o comunal que ejerzan actos de comercio o industria;
b) la prestación de servicios públicos efectuados directamente por el Estado Provincial, Municipal o Comunal, sus dependencias, reparticiones autárquicas o descentralizadas, cuando las prestaciones efectuadas lo sean en función de Estado como poder público y siempre que no constituyan actos de comercio o industria;
c) el Banco Provincia de Tierra del Fuego;
d) los partidos políticos reconocidos legalmente;
e) las representaciones diplomáticas y consulares de los países extranjeros acreditados

ante el Gobierno de la República en un todo de acuerdo a la legislación vigente;

f) las Bolsas de Comercio autorizadas a cotizar títulos valores y los Mercados de Valores;

g) toda operación sobre títulos, letras, bonos, obligaciones y demás papeles emitidos y que se emitan en el futuro por la Nación, las provincias o municipalidades, así como también las rentas producidas por los mismos o los ajustes de estabilización o corrección monetaria;

Aclárase que las actividades desarrolladas por los agentes de bolsa y todo tipo de intermediación en relación con tales operaciones no se encuentran alcanzadas por la presente exención;

h) los intereses de depósito en caja de ahorro y a plazo fijo;

i) la edición e impresión de libros, diarios, periódicos y revistas en todo su proceso de creación ya sea que la actividad la realice el propio editor, o terceros por cuenta de este, incluidos los ingresos provenientes de la venta de espacios publicitarios. Igual tratamiento tendrán la distribución y venta de los impresos citados.

Esta exención no alcanza a la edición, impresión, distribución y venta de material de carácter condicionado;

j) las asociaciones mutualistas y las obras sociales constituidas de acuerdo a la legislación vigente, únicamente por los ingresos en concepto de cuotas sociales, de contribuciones que perciban de socios o terceros, por la venta de medicamentos y por prestación de servicios de salud, las que serán otorgadas bajo resolución fundada de la Agencia de Recaudación Fueguina;

k) los ingresos percibidos por las cooperativas de trabajo y los ingresos de los socios o accionistas de las mismas, provenientes de los servicios prestados. Esta exención no alcanza a los ingresos provenientes de prestaciones o locaciones de obra o de servicios por cuenta de terceros, aun cuando dichos terceros sean socios o accionistas o tengan inversiones que no integren el capital societario;

l) los ingresos obtenidos por asociaciones, entidades o comisiones de beneficencia, de bien público, asistencia social, de educación, científicas, artísticas, culturales y deportivas, instituciones religiosas y asociaciones gremiales únicamente por el cobro de las cuotas sociales y otras contribuciones que perciban de sus asociados, benefactores o terceros, o por la realización de festivales o actos de cultura, deportivos o de esparcimiento, por la venta de medicamentos y prestaciones de servicios de salud, por la prestación de servicios de salud, por la prestación de servicios encomendados y abonados por el Estado provincial, siempre que los ingresos obtenidos sean destinados exclusivamente al objeto previsto en sus estatutos sociales, acta de constitución o documento similar y en ningún caso se distribuyan directa o indirectamente entre los socios. En estos casos, se deberá contar con personería jurídica o gremial o el reconocimiento o autorización por autoridad competente, según corresponda;

m) los establecimientos educacionales privados, incorporados a los planes de enseñanza oficial y reconocidos como tales en las respectivas jurisdicciones;

n) los ingresos de profesiones liberales, correspondientes a cesiones o participaciones que les efectúen otros profesionales, cuando estos últimos computen la totalidad de los ingresos como materia gravada.

Esta disposición no será de aplicación en los casos de cesiones o participaciones efectuadas por empresas o sociedades inscriptas en el Registro Público de Comercio;

o) las emisoras de radiofonía y de televisión, incluyendo las de televisión por cable codificadas, satelitales, de circuitos cerrados y toda otra forma que haga que sus emisiones puedan ser captadas únicamente por sus abonados;

p) los ingresos percibidos por las cooperativas prestadoras de servicios eléctricos y de suministros de agua potable en el ámbito provincial, únicamente por la prestación de dichos servicios; y

q) aquellos contribuyentes que se encuentren inscriptos en el Registro Nacional de

Efectores de Desarrollo Local y Economía Social que depende de la Dirección Nacional de Fomento del Monotributo Social perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y que cumplan con las pautas vigentes al respecto.

Las exenciones previstas en el presente artículo serán otorgadas por la Agencia de Recaudación Fueguina, siendo requisito indispensable que el solicitante se encuentre en situación fiscal regular por toda actividad a la que se halle vinculado y una vez cumplimentados todos los requisitos exigidos en la pertinente reglamentación. La exención comenzará a regir para el peticionante, cualquiera sea la fecha de solicitud de la exención, a partir del otorgamiento de la personería jurídica o del reconocimiento oficial en su caso y se mantendrá mientras mantenga su situación fiscal regular, de conformidad con las disposiciones legales vigentes. Sin perjuicio de ello, las entidades peticionantes que hubieren efectuado pagos por los conceptos exceptuados no podrán repetir los mismos, los que quedarán irrevocablemente incorporados al Fisco provincial.

DEL PERÍODO FISCAL.

ARTÍCULO 205.- El período fiscal será el año calendario.

DE LA LIQUIDACIÓN Y PAGO.

Artículo 206.- La Ley Impositiva establecerá las distintas alícuotas a aplicar a los hechos imponibles alcanzados por la presente ley.

La misma ley fijará los impuestos mínimos y los importes fijos a abonar por los contribuyentes, tomando en consideración la actividad, la categoría de los servicios prestados o actividades realizadas, mayor o menor grado de suntuosidad, las características económicas u otros parámetros representativos de la actividad desarrollada.

DECLARACIÓN JURADA.

Artículo 207.- El impuesto se liquidará por Declaración Jurada, en los plazos y condiciones que determine la Agencia de Recaudación Fueguina, la que establecerá asimismo, la forma y plazos de inscripción de los contribuyentes y demás responsables.

Así también, deberán presentar una Declaración Jurada en la que se resuma la totalidad de las operaciones del año, de conformidad con la reglamentación que a sus efectos dicte la autoridad de aplicación.

El pago se hará por el sistema de anticipos mensuales, en función de los ingresos calculados sobre base cierta, en las condiciones y plazos que determine la Agencia de Recaudación Fueguina.

Los contribuyentes comprendidos en las disposiciones del Convenio Multilateral del 18 de agosto de 1977 y sus modificaciones ajustarán su liquidación y pago a las normas del mismo. Las normas citadas, en caso de concurrencia con normas provinciales, tendrán preeminencia. No son aplicables a los mencionados contribuyentes las normas generales relativas a impuestos mínimos y están sujetos a retención en la fuente.

En todos los casos, los anticipos abonados fuera de término, no abonados o abonados por un monto inferior al que correspondiere devengarán los intereses, actualizaciones y darán origen a las sanciones previstas en este Código.

Los agentes de retención o percepción ingresarán el impuesto de conformidad con lo que determine al efecto la Agencia de Recaudación Fueguina.

El impuesto se ingresará por depósito en el Banco de la Provincia de Tierra del Fuego o en las entidades bancarias con las que se convenga la percepción y/o por medio de las tarjetas de crédito habilitadas por la Agencia de Recaudación Fueguina.

RÉGIMEN DE RECAUDACIÓN.

Artículo 208.- Facúltase a la Agencia de Recaudación Fueguina a establecer y reglamentar un régimen de recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que se aplicará sobre los importes acreditados en las cuentas abiertas en entidades regidas por la Ley nacional 21.526 y sus modificatorias, a nombre de los contribuyentes de dicho impuesto, inclusive los comprendidos en el régimen del Convenio Multilateral. Los Agentes de Recaudación Fueguina designados por la autoridad de aplicación o por la Comisión Arbitral, resultarán pasibles en caso de incumplimiento de sus deberes formales o materiales, de los procedimientos, sanciones y responsabilidades establecidas en las Leyes provinciales 439 y 440, sus

modificatorias y normas reglamentarias, para los sujetos que actúen como agentes de retención y/o percepción. El importe debitado por el Agente de Recaudación Fueguina tendrá para el contribuyente el carácter de un pago a cuenta de su obligación tributaria.

REDUCCIONES POR CUMPLIMIENTO.

Artículo 209.- Los contribuyentes que acrediten cumplimiento y situación regular en el pago del impuesto gozarán de las siguientes reducciones respecto de los importes que les corresponda tributar:

a) doce por ciento (12%) para aquellos contribuyentes cuya base imponible anual no supere la suma de PESOS TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL ($ 37.500.000); y
b) cinco por ciento (5%) para aquellos contribuyentes que superen la base imponible anual establecida en el inciso a).

La base imponible anual a considerar para el encuadramiento en los porcentajes de reducción del tributo a ingresar será la correspondiente al año calendario inmediato anterior al ejercicio fiscal en que se usufructúe el beneficio.

En el caso de contribuyentes que tributan el impuesto bajo las disposiciones del régimen del Convenio Multilateral, las reducciones establecidas en el presente artículo serán de aplicación para aquellos cuyo fisco sede sea la Jurisdicción Tierra del Fuego y la base imponible anual a considerar para la determinación del porcentaje del beneficio a aplicar será la base imponible total del país del año calendario inmediato anterior.

A los fines del encuadramiento en la presente norma, los contribuyentes deberán declarar su situación respecto de los supuestos indicados -a) o b)-, de conformidad con la reglamentación que al efecto se dicte.

Se considera cumplimiento y situación regular en el pago del impuesto, el acreditar el cumplimiento de las obligaciones formales y materiales correspondientes a los tributos recaudados por la Agencia de Recaudación Fueguina, devengados o exigibles, conjuntamente con el pago de las últimas doce (12) posiciones y la que se pretende abonar en la fecha de vencimiento establecida por la mentada Agencia.

A este efecto se considerará que se encuentran encuadrados aquellos contribuyentes que poseyendo deuda con la Administración, procedan o hayan procedido a su regularización mediante planes de facilidades de pago u otro medio de cancelación autorizado, en tanto y en cuanto no hayan incurrido o incurran en el futuro en causal de caducidad.

Aquellos contribuyentes que no reúnan las condiciones mencionadas precedentemente deberán tributar el Impuesto sobre los Ingresos Brutos de conformidad con las alícuotas establecidas en la Ley Tarifaria correspondiente, sin el beneficio de reducción con más los accesorios de ley devengados hasta la fecha del efectivo pago.

El beneficio no podrá ser ejercido retroactivamente ni tampoco en forma acumulada y comenzará a gozarse a partir de la decimotercera (13ª) posición, manteniéndose vigente en tanto y en cuanto las subsiguientes se sigan presentando y abonando en término. Se admitirá el pago fuera de término de tres (3) posiciones mensuales por año calendario sin pérdida del beneficio, siempre que se cancelen con los intereses correspondientes dentro del mismo mes del vencimiento de la respectiva obligación.

Los contribuyentes que, habiendo comenzado a gozar del beneficio de la referida deducción incurran en alguna falta formal o material relativa a las obligaciones y tributos que recauda la Agencia de Recaudación Fueguina, no perderán el mismo en tanto y en cuanto:

a) procedan a regularizar su situación en forma espontánea;
b) procedan a la regularización de la situación fiscal a requerimiento de la Dirección y dentro del plazo establecido por la misma; y
c) procedan a la cancelación de la deuda exigida por la Dirección en los términos establecidos, una vez firme.

A solicitud de los contribuyentes, y a efectos de evitar inequidades, se admitirá la aplicación retroactiva del párrafo mencionado precedentemente, siempre que el mismo no implique la generación de un derecho de repetición al contribuyente ni devolución de impuestos por parte del Fisco.

ANTICIPOS. CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.
Artículo 210.- La Agencia podrá requerir anticipos del impuesto, que se determinarán en función de los ingresos brutos o del impuesto pagado del período que se fije, los que revestirán el carácter de Declaración Jurada, en la forma, condiciones y plazos que la misma establezca.
Los contribuyentes que no tengan actividad en el período a que corresponda el anticipo deberán comunicar a la Agencia el inicio de dicha situación así como también su finalización, acreditándolo fehacientemente.
En los casos de contribuyentes o responsables que no abonen sus anticipos en los términos establecidos, la Agencia de Recaudación Fueguina podrá liquidar y exigir el ingreso como pago a cuenta por cada mes adeudado, del pago de una suma igual a la ingresada por el mismo período considerado en el año inmediato anterior o en los que le antecedan, en ese orden o una suma igual a la ingresada por el mes anterior, o en defecto de ambos métodos que guardan prioridad, una suma igual a cualquiera de los anticipos ingresados, declarados o determinados, con anterioridad al que se liquida, sea perteneciente al mismo período fiscal o a uno anterior no prescripto, con más los intereses que resulten aplicables.
La notificación del obligado de los importes establecidos por la Agencia de conformidad con el procedimiento indicado, elimina la facultad de autodeterminación de los anticipos por parte del contribuyente, no efectuada ni declarada en término. No obstante, si los importes aludidos excedieran la determinación practicada por el obligado, el saldo a su favor podrá ser compensado en las liquidaciones de los anticipos con vencimientos posteriores al del período considerado, o en la declaración jurada anual, sin perjuicio de la acción que corresponda por vía del recurso de repetición.
Cuando el monto del anticipo omitido excediera el importe del pago a cuenta del mismo, establecido por la Dirección, subsistirá la obligación del contribuyente o responsable de ingresar la diferencia correspondiente, con más los intereses y actualización, sin perjuicio de la multa que pudiera corresponder.
OBLIGATORIEDAD DEL PAGO DEL ANTICIPO MÍNIMO.
Artículo 211.- El pago de anticipo mínimo mensual será obligatorio desde la fecha de vencimiento de la posición correspondiente al inicio de actividades debidamente acreditadas. Dicha obligación cesará cuando el contribuyente comunique a la Agencia de Recaudación Fueguina su cese de actividad, o cuando los elementos de prueba presentados indiquen que esta fuera anterior.
Los contribuyentes que ejerzan actividades alcanzadas con distinto tratamiento fiscal ingresarán solo el impuesto mínimo mayor previsto para ellas.
AGENTES DE RECAUDACIÓN. ALÍCUOTA APLICABLE A CONTRIBUYENTES NO INSCRIPTOS.
Artículo 212.- Todo agente de retención o percepción que deba realizar o recibir pagos de contribuyentes no inscriptos deberá retener o percibir el doble de la alícuota establecida para la respectiva actividad.
ACTIVIDADES. DISCRIMINACIÓN.
Artículo 213.- Cuando un contribuyente ejerza dos (2) o más actividades o rubros con distinto tratamiento, deberá discriminar en sus declaraciones juradas el monto de los ingresos brutos correspondiente a cada uno de ellos.
Cuando omitiera esta discriminación estará sujeto a la alícuota más elevada, tributando un impuesto no menor a la suma de los mínimos establecidos en la Ley Impositiva anual para cada actividad o rubro.
Las actividades o rubros complementarios de una actividad principal -incluido financiación y ajustes por desvalorización monetaria- estarán sujetos a la alícuota que, para aquella contemple la Ley Impositiva.
AGENTE DE PERCEPCIÓN. BANCO DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO.
Artículo 214.- El Banco de la Provincia de Tierra del Fuego efectuará la percepción de los impuestos correspondientes a todos los Fiscos, que deben efectuar los contribuyentes del Convenio Multilateral, acreditando a la cuenta "Convenio Multilateral" los fondos resultantes

de la liquidación efectuada en favor de esta provincia y efectuando las transferencias que resulten en favor de los Fiscos respectivos, a condición de reciprocidad. La recaudación y transferencias respectivas, por ingresos de otros Fiscos, se hallarán exentas del Impuesto de Sellos respectivo.
Las normas relativas a la mecánica de pago y transferencias y los formularios de pago serán dispuestos por la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral.
DECLARACIONES JURADAS ANUALES. CONDICIONES.
Artículo 215.- Facúltase a la Agencia de Recaudación Fueguina a establecer la forma, condiciones y plazos para la presentación de las declaraciones juradas y pago del gravamen; este último no podrá exceder de noventa (90) días de producida la finalización del período fiscal.
De los ingresos brutos del período fiscal no podrán efectuarse otras detracciones que las implícitamente enumeradas en la presente ley, las que únicamente podrán ser usufructuadas por parte de los responsables que, en cada caso, se indican. No dejará de gravarse un ramo o actividad por el hecho de que no haya sido previsto en forma expresa en la presente ley o en la Ley Impositiva. En tal supuesto, se aplicará la alícuota general.
HONORARIOS JUDICIALES. RETENCIÓN DEL IMPUESTO.
Artículo 216.- En toda regulación de honorarios, el juez actuante ordenará la retención que corresponda por aplicación de la alícuota correspondiente, depositando el importe respectivo en la cuenta oficial que al efecto habilite la Agencia de Recaudación Fueguina.
Cuando en la causa que da origen a la regulación no existieran fondos depositados que permitieran efectuar la retención, el juzgado actuante comunicará a la Agencia de Recaudación Fueguina el monto de los honorarios regulados.
En la Declaración Jurada del anticipo y determinado el impuesto a abonar, se deducirá del mismo el importe de las retenciones sufridas procediéndose al depósito del saldo resultante a favor del Fisco.
A los efectos establecidos en la presente, en la primera oportunidad en que el profesional tome intervención en cada proceso judicial deberá denunciar sus datos de inscripción como contribuyente al Impuesto sobre los Ingresos Brutos y/o Convenio Multilateral.
La falta de cumplimiento de esta obligación importará la cesación automática de la intervención del profesional que, intimado a cumplimentar con tal recaudo, no lo efectivice dentro de las cuarenta y ocho (48) horas subsiguientes.
Ante la falta de cumplimiento de la presente obligación así como en el supuesto de que el profesional actuante declare encontrarse inscripto como contribuyente en el Convenio Multilateral, deberá notificar la situación a la Agencia de Recaudación Fueguina.
DEL INICIO Y CESE DE ACTIVIDADES.
INSCRIPCIÓN.
Artículo 217.- En los casos de iniciación de actividades, deberá solicitarse con carácter previo la inscripción como contribuyente, dentro de los plazos y condiciones que la Agencia de Recaudación Fueguina determine.
La Agencia está facultada para disponer que, en determinadas circunstancias, ciertos tipos, clases o sectores de contribuyentes o responsables se encuentren eximidos de su obligación de inscribirse.
CESE DE ACTIVIDADES.
Artículo 218.- En caso de cese de actividades, incluidas transferencias de fondos de comercio, sociedades y explotaciones gravadas, la Agencia de Recaudación Fueguina reglamentará las tramitaciones a cumplirse, estableciendo los plazos, formalidades, requisitos, condiciones y documentación a aportar por los contribuyentes o responsables. En estos casos deberá satisfacerse el impuesto correspondiente hasta la fecha de cese, presentándose la Declaración Jurada respectiva.
Si se tratara de contribuyentes cuya liquidación se efectúa por el sistema de lo percibido, deberán computar también los importes devengados no incluidos en aquel concepto.
Lo dispuesto precedentemente no será de aplicación obligatoria en los casos de transferencias en las que se verifique continuidad económica para la explotación de la o de

las mismas actividades y se conserve la inscripción como contribuyente, supuesto en el cual se considera que existe sucesión de las obligaciones fiscales.
Evidencian continuidad económica:

a) la fusión de empresas u organizaciones -incluidas las unipersonales- a través de una tercera que se forme o por absorción de una de ellas;
b) la venta o transferencia de una entidad a otra que, a pesar de ser jurídicamente independiente constituye un mismo conjunto económico;
c) el mantenimiento de la mayor parte del capital en la nueva entidad; y
d) la permanencia de las facultades de dirección empresarial en la misma o mismas personas.

TITULO TERCERO
DEL RÉGIMEN SIMPLIFICADO DEL IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

Artículo 219.- Establécese un régimen simplificado del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para los contribuyentes locales de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Este régimen sustituye la obligación de tributar por el sistema general del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para aquellos contribuyentes que resulten alcanzados.
SUJETOS OBLIGADOS.
Artículo 220.- Están obligados a ingresar al régimen simplificado los pequeños contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. A estos fines se consideran pequeños contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a las personas físicas que realicen cualquiera de las actividades alcanzadas por dicho impuesto, y las sucesiones indivisas en su carácter de continuadoras de las actividades de las mencionadas personas físicas.
Asimismo, las sociedades no constituidas según lo dispuesto en el Capítulo III –tres- de la Ley General de Sociedades de acuerdo a la Leyes nacionales 26.994 y 27.077, o la que en un futuro la reemplace, se considerarán pequeños contribuyentes. En todos los casos serán considerados pequeños contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos aquellos que cumplan las siguientes condiciones:

a) que por las actividades alcanzadas por el impuesto sobre los ingresos brutos hayan obtenido en el período fiscal inmediato anterior al que se trata, ingresos brutos totales (gravados, no gravados, exentos) inferiores o iguales al importe que fije la Ley Impositiva;
b) que no superen en el mismo período fiscal anterior los parámetros máximos referidos a las magnitudes físicas que se establezcan para su categorización a los efectos del pago de impuestos que les corresponda realizar;
c) que el precio máximo unitario de venta, solo en los casos de venta de cosas muebles, no supere la suma que fije la Ley Impositiva; y
d) que no realicen importaciones de cosas muebles y/o de servicios.

CATEGORÍAS.
Artículo 221.- Se establecen ocho (8) categorías de contribuyentes de acuerdo a las bases imponibles gravadas y a los parámetros máximos de las magnitudes físicas, entendiéndose por tales "superficie afectada a la actividad" y "energía eléctrica consumida".
Artículo 222.- Los parámetros "superficie afectada a la actividad" y/o "energía eléctrica consumida" no deben ser considerados en las actividades que, para cada caso, se señalan a continuación:

1. parámetro superficie afectada a la actividad:
    a) servicios de playas de estacionamiento, garajes y lavaderos de automotores;
    b) servicios de prácticas deportivas (clubes, gimnasios, canchas de tenis y paddle, piletas de natación y similares);
    c) servicios de diversión y esparcimiento (billares, pool, bowling, salones para fiestas, peloteros y similares);
    d) servicios de alojamiento y/u hospedaje prestados en hoteles, pensiones,

excepto en alojamientos por hora;
e) servicios de enseñanza, instrucción y capacitación (institutos, academias, liceos y similares), y los prestados por jardines de infantes, guarderías y jardines materno infantiles;
f) servicios prestados por establecimientos geriátricos y hogares para ancianos;
g) servicios de reparación, mantenimiento, conservación e instalación de equipos y accesorios, relativos a rodados, sus partes y componentes;
h) servicios de depósitos y resguardo de cosas muebles; e
i) locaciones de bienes inmuebles.

2. parámetro de "energía eléctrica consumida":
   a) lavadero de automotores;
   b) expendio de helados;
   c) servicios de lavado y limpieza en seco, no industriales; y
   d) explotación de kioscos, poli-rubros y similares.

La Dirección General de Rentas evaluará la procedencia de mantener las excepciones señaladas precedentemente en base al análisis periódico en las distintas actividades económicas involucradas.

DECLARACIÓN JURADA ANUAL. ANTICIPOS MENSUALES.

Artículo 223.- La obligación que se determina para los contribuyentes alcanzados por este sistema tiene carácter anual y deberá ingresarse mensualmente según las categorías indicadas en el artículo precedente y de acuerdo a los montos que se consignan en la Ley Impositiva, para cada una de las alícuotas determinadas.

Los montos consignados que fije la Ley Impositiva deberán abonarse aunque no se hayan efectuado actividades ni obtenido bases imponibles computables por la actividad que desarrolle el contribuyente.

Los contribuyentes que realicen actividades que se encuentren alcanzadas por más de uno (1) de los dos (2) grupos de alícuotas descriptas en la Ley Impositiva, tributarán de acuerdo al mayor de ambos.

INSCRIPCIÓN.

Artículo 224.- La inscripción a este régimen simplificado se perfeccionará mediante la presentación de una Declaración Jurada ante la Agencia de Recaudación Fueguina, la que establecerá los requisitos y exigencias que contendrá la misma.

EXCLUSIONES.

Artículo 225.- Quedan excluidos del Régimen Simplificado:

a) los contribuyentes cuyas bases imponibles acumuladas o los parámetros máximos de las magnitudes físicas superen los límites de la máxima categoría, para cada alícuota y actividad;
b) sean sociedades no incluidas en el artículo 220;
c) se encuentren sujetos al régimen del Convenio Multilateral;
d) desarrollen actividades que, por su naturaleza, se encuentren alcanzadas con alícuotas diferenciales superiores a la alícuota general establecida en la Ley Impositiva vigente;

Sin perjuicio de ello, aquellos contribuyentes que desarrollen la actividad de venta minorista de tabacos, cigarrillos y otras manufacturas de tabaco, quedarán comprendidos en el presente régimen, en la medida en que cumplan con todas las condiciones establecidas en el artículo 220. A los efectos de su categorización anual, los mencionados contribuyentes deberán excluir de los montos de facturación computables, el importe correspondiente a la actividad reseñada;

e) desarrollen actividades que tengan supuestos especiales de base imponible – artículos 194 a 203, ambos inclusive, del Código Fiscal vigente;
f) desarrollen actividades que, de acuerdo a la Ley Impositiva vigente, tengan establecidos anticipos mínimos mensuales;
g) desarrollen actividades que se encuentran alcanzadas con el beneficio de tasa cero (0) establecido en la Ley Impositiva vigente;

h) desarrollen la actividad de servicio de transporte automotor de pasajeros mediante taxis y remises; e
i) desarrolle la actividad de pesca artesanal.

OBLIGACIONES FORMALES.

Artículo 226.- Los contribuyentes incluidos en el Régimen Simplificado deberán exhibir en sus establecimientos y en lugar visible al público los siguientes elementos:

a) la constancia que acredite su adhesión al Régimen Simplificado y la categoría en la cual se encuentra encuadrado; y
b) Comprobante de pago correspondiente al último mes.

RÉGIMEN SANCIONATORIO.

Artículo 227.- Los contribuyentes comprendidos en el presente régimen quedan sujetos al Régimen Sancionatorio Aplicable al incumplimiento de los deberes formales y materiales conforme el presente Código Fiscal, ley impositiva y normas regulatorias vigentes.

EXCLUSIÓN DE LOS REGÍMENES DE RETENCIÓN Y PERCEPCIÓN.

Artículo 228.- Los agentes de retención y percepción designados por la Agencia de Recaudación Fueguina, deberán abstenerse de efectuar retenciones y percepciones a aquellos contribuyentes que se encuentren incluidos en el presente régimen. A tal fin, estos últimos deberán exhibir ante el agente de retención o percepción, el comprobante que lo acredite como inscripto, el cual será emitido por la Agencia de Recaudación Fueguina en el tiempo y forma que la misma determine.

CESE DE ACTIVIDADES.

Artículo 229.- Cuando los contribuyentes cesen en sus actividades, a los efectos de dejar de tributar en el presente régimen, deberán informarlo a la Agencia de Recaudación Fueguina de acuerdo al mecanismo que la misma determine.

FACULTADES DE CONTROL.

Artículo 230.- La Agencia de Recaudación Fueguina queda facultada para impugnar, rechazar y/o modificar la inscripción en el Régimen Simplificado cuando existan indicios suficientes de que dicha inclusión está dirigida a ocultar el monto de la base imponible y eludir el pago del impuesto que efectivamente debería abonarse.

Artículo 231.- La Agencia de Recaudación Fueguina queda facultada para reglamentar el presente régimen en todo lo aquí no prescripto y a adoptar todas las medidas necesarias para su instrumentación.

TITULO CUARTO – DEL IMPUESTO DE SELLOS

SUJETOS.

Artículo 232.- Estarán sujetos al Impuesto de Sellos, de conformidad con las disposiciones del presente Título, los actos, contratos y operaciones de carácter oneroso instrumentados sobre contratos a título oneroso formalizados por correspondencia y sobre operaciones monetarias que representen entregas o recepciones de dinero que devenguen un interés efectuadas por las entidades financieras regidas por la Ley nacional 21.526, siempre que:

a) se otorguen en jurisdicción de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, así como también los otorgados fuera de ella, en los casos especialmente previstos en este Título; y
b) se formalicen en instrumentos públicos o privados, o por correspondencia en los casos previstos en el artículo 240 así como los que se efectúen con intervención de las bolsas o mercados de acuerdo con lo que se establece a dichos efectos.

Artículo 233.- También estarán sujetos al impuesto:

a) los actos que tengan por objeto la transmisión de la propiedad de embarcaciones y aeronaves;
b) los contratos de seguros y sus endosos, incluido seguro de automotor, de incendio, transporte de bienes, robo, granizo y otras coberturas de daños patrimoniales. Los contratos de seguros, serán gravados cuando cubran riesgos sobre cosas situadas o colocadas o personas domiciliadas en la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, siempre que el tomador sea una persona jurídica.

También pagarán el impuesto los contratos de seguros emitidos fuera de la Provincia de Tierra

del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur que cubran bienes situados dentro de su jurisdicción o personas domiciliadas en la misma, siempre que el tomador sea una persona jurídica;

c) todas las operaciones efectuadas en el ejercicio de actividades hidrocarburíferas, sus servicios complementarios y los supuestos previstos en el artículo 21 del Título III, Capítulo IV de la Ley nacional 23.966;
d) los contradocumentos en instrumento público o privado; y
e) los contratos de fideicomisos celebrados al amparo de las disposiciones de la Ley nacional 24.441, Título I;
f) están gravados con el impuesto de este capítulo las liquidaciones o resúmenes periódicos que las entidades emisoras de tarjetas de crédito o compra produzcan para su remisión a los titulares.

Son sujetos pasivos los titulares de las tarjetas de crédito o compra emitidas según lo indicado en el párrafo anterior.

La base imponible estará constituida por los débitos o cargos del período, netos de los ajustes provenientes de saldos anteriores. Los cargos o débitos a considerar son: compras, cargos financieros, intereses punitorios, cargos por servicios, adelantos de fondos y todo otro concepto incluido en la liquidación o resumen.

El impuesto se liquidará aplicando la alícuota que fije anualmente la Ley Impositiva, sobre la base imponible determinada conforme a lo previsto en el párrafo anterior, y será ingresado por las entidades que intervengan en la operatoria, a través del régimen de percepción que disponga la Agencia de Recaudación Fueguina.

EXTRAÑA JURISDICCIÓN.

Artículo 234.- Los actos, contratos u operaciones de carácter oneroso: formalizados en instrumentos públicos o privados en las provincias o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se encuentran sujetos al pago de este impuesto en los siguientes casos:

1. cuando los bienes objeto de las transacciones se encuentren radicados o situados en la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur;
2. cuando se trate de actos que tengan por objeto o que prometan la constitución, modificación o extinción de cualquier derecho real sobre bienes inmuebles ubicados dentro de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur o sobre bienes muebles registrables, inscriptos en dicha jurisdicción o en la matrícula nacional de buques y artefactos navales y aeronaves, con radicación en la Provincia;
3. los contratos de locación o sublocación de inmuebles ubicados en la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, así como los que instrumenten la locación de servicios y obras, públicas o privadas, sobre tales bienes;
4. los contratos de suministros de materiales y equipos para la ejecución de obras públicas en el país, que se formalicen en instrumentos separados de la ejecución de la obra, cuando en tales instrumentos conste que a la fecha de celebración del contrato dichos bienes se encontraban ubicados en la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur o, no habiendo constancia de la ubicación de los mismos, el domicilio del vendedor esté ubicado en esa jurisdicción;
5. las operaciones de compra venta de cereales, oleaginosas, semovientes, productos y subproductos ganaderos, agrícolas, forestales, apícolas, avícolas, frutícolas, de la pesca y de la minería, registrados o no en bolsas y mercados, cuando en los respectivos instrumentos o registros conste que a la fecha de celebración del contrato dichos bienes se encontraban ubicados en la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur o, no habiendo constancia de la ubicación de los mismos, que el domicilio del vendedor este ubicado en esa jurisdicción;
6. los contratos de constitución de sociedades o ampliación de su capital, sobre los aportes efectuados en:
    a) bienes inmuebles o muebles registrables que resulten sujetos al impuesto de este Título en virtud de lo dispuesto por el inciso a) de este artículo; y
    b) semovientes, cuando en el instrumento conste que a la fecha de celebración

del contrato dichos bienes se encontraban ubicados en la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur;

7. los contratos de prórroga del término de duración de sociedades con domicilio social en la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; y
8. los demás actos otorgados en las provincias o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuando produzcan efectos en la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

CONTRATOS FORMALIZADOS EN EL EXTERIOR.

Artículo 235.- En todos los casos los actos formalizados en el exterior deberán pagar el impuesto de acuerdo con las prescripciones del presente Título al tener efectos en jurisdicción de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Artículo 236.- Los actos y contratos a que se refiere el presente Título quedarán sujetos al impuesto por la sola creación y/o existencia material de los instrumentos respectivos, con abstracción de su validez, eficacia jurídica o posterior cumplimiento.

Salvo los casos especialmente previstos, la anulación de los actos o la no utilización total o parcial de los instrumentos no darán lugar a la devolución, compensación o acreditación del impuesto pagado.

Artículo 237.- La obligación de tributar el presente impuesto no importa solo hacerlo respecto de los actos y contratos expresa o implícitamente mencionados, sino también respecto de todos los actos y contratos expresa o implícitamente encuadrados en las disposiciones de este Título.

Artículo 238.- A los fines de este Título se entenderá por instrumento toda escritura, papel o documento del que surja el perfeccionamiento de los actos y contratos alcanzados por la misma, de manera que revista los caracteres exteriores de un título jurídico con el cual pueda ser exigido el cumplimiento de las obligaciones sin necesidad de otro documento y con prescindencia de los actos que efectivamente realicen los contribuyentes.

Artículo 239.- Las obligaciones condicionales se entenderán, a los efectos del impuesto, como si fueran puras y simples.

Artículo 240.- Los actos, contratos y operaciones cuyo precio, monto o valor pudiera resultar incrementado por cláusulas sujetas a condición, abonarán el tributo máximo condicional del contrato.

Cuando el contribuyente pudiere demostrar en forma fehaciente que dicha condición es de imposible cumplimiento, podrá solicitar vía repetición el reintegro de la diferencia de impuesto.

Artículo 241.- No abonarán nuevo impuesto los actos de aclaratoria, confirmación o ratificación de actos anteriores sujetos al tributo y los de simple modificación de las cláusulas pactadas, siempre que:

a) no se aumente su valor, cualquiera fuere la causa (aumento del precio pactado, mayores costos, actualización por desvalorización monetaria, etc.);
b) no se cambie su naturaleza o los términos del acuerdo, o de otro modo se efectúe la novación de las obligaciones convenidas; y
c) no se sustituyan las partes intervinientes o no se prorrogue el plazo convenido, cuando la prórroga pudiera hacer variar el impuesto aplicable.

Si se dieran estos supuestos, se pagará, sobre el respectivo instrumento, el impuesto que corresponda por el nuevo acto o la ampliación de valor que resulte.

Tampoco abonarán impuesto los documentos que se emitan en ejecución de cláusulas pactadas en un contrato anterior sujetos al tributo (certificados de obra, liquidaciones y sus complementos, actas de reconocimiento, etc.) aunque en los mismos se reconozca un mayor valor, siempre que este sea la consecuencia de la aplicación de los mecanismos previstos en el contrato anterior.

Artículo 242.- Será considerado acto o contrato sujeto al pago del impuesto que este Título determine aquel que se verifique en forma epistolar, por carta, cable o telegrama, siempre que se verifique cualquiera de las siguientes condiciones:

a) se acepte la propuesta o el pedido formulado por carta, cable o telegrama, reproduciendo totalmente la propuesta o sus enunciaciones o elementos esenciales

que permitan determinar el objeto del contrato; y

b) las propuestas o pedidos, o los presupuestos aplicados, aceptados con sus firmas por los destinatarios.

A los fines del párrafo anterior será en todos los casos requisito para la gravabilidad del acto que la aceptación respectiva haya sido recibida por el emisor de la propuesta, pedido o presupuesto.

La carta como cable o telegrama o cualquier otra correspondencia o papel firmado que acepte la propuesta o el pedido, sin reunir las condiciones establecidas en el primer párrafo de este artículo estarán gravados en el caso de ser presentados en juicio para hacer valer las obligaciones convenidas, su modificación o resolución. En dicha eventualidad, solo deberá abonarse el tributo por toda la correspondencia que se refiere a un mismo acto.

Artículo 243.- Si en un mismo instrumento se formalizan entre las mismas partes varios actos que versan sobre un mismo objeto y guardan relación de interdependencia entre sí, solo debe abonarse el impuesto correspondiente al acto cuyo gravamen resulte mayor.

Si el instrumento no reuniera esas condiciones, cada acto abonará el impuesto que, aisladamente considerado, le corresponde.

Artículo 244.- Si los instrumentos se extienden en varios ejemplares de un mismo tenor, el impuesto solo deberá pagarse en uno de ellos; en los demás ejemplares, a solicitud del poseedor, la Agencia de Recaudación Fueguina dejará constancia del impuesto pagado.

Artículo 245.- Cuando se trate de contratos celebrados con el Estado nacional, provincial o municipal, o sus dependencias y organismos, o con las empresas y entidades que le pertenezcan total o parcialmente, que para su aprobación se encuentren sujetos a un acto expreso de autoridad pública, a los fines del impuesto de esta ley dichos contratos se considerarán perfeccionados en el momento en que la autoridad preste la conformidad respectiva y a partir de la fecha en que se notifique la misma.

Artículo 246.- Las oficinas recaudadoras se limitarán a habilitar los instrumentos con los impuestos que se les solicite, sin perjuicio de las multas que pudieran corresponder.

La intervención de estas oficinas no libera a las partes de la responsabilidad por la omisión del gravamen, ni por las sanciones correspondientes.

DE LOS CONTRIBUYENTES Y RESPONSABLES.

Artículo 247.- Son contribuyentes del impuesto todos aquellos que formalicen actos, contratos y realicen las operaciones sometidas al Impuesto de Sellos.

RESPONSABILIDAD SOLIDARIA.

Artículo 248.- Cuando en la realización del hecho imponible intervengan dos (2) o más personas todas son solidariamente responsables por el total del impuesto, quedando a salvo el derecho de cada uno de repetir de los demás intervinientes la cuota parte que le pudiere corresponder de acuerdo con su participación en el acto.

Si alguno de los intervinientes estuviere exento del pago de este gravamen la obligación fiscal se considerará en este caso divisible y la exención se limitará a la cuota que le corresponda a la persona exenta.

Artículo 249.- Los que otorguen, endosen, autoricen o conserven en su poder por cualquier título o razón, actos o instrumentos sujetos al impuesto, son solidariamente responsables del gravamen omitido parcial o totalmente y de las multas aplicables.

El impuesto correspondiente a las escrituras públicas, será pagado bajo responsabilidad directa del escribano titular del Registro, sin perjuicio de la solidaridad de los adscriptos por las escrituras que autoricen y de la prevista en el párrafo anterior, de las partes intervinientes.

OPERACIONES DINERARIAS.

Artículo 250.- En las operaciones monetarias que representen entregas o percepciones de dinero o que devenguen intereses, el impuesto estará a cargo de quien contrate con las entidades financieras, sin perjuicio de la responsabilidad de estas como agentes de retención.

CONTRATOS DE PRENDAS. HIPOTECAS.

Artículo 251.- En los contratos de prenda y en las hipotecas el impuesto estará totalmente a cargo del deudor.

DE LA BASE IMPONIBLE.
TRANSFERENCIA DE DOMINIO A TITULO ONEROSO. NUDA PROPIEDAD. POSESIÓN DE INMUEBLES.
Artículo 252.- En toda transmisión de dominio a título oneroso de bienes inmuebles, incluida la transmisión de la nuda propiedad y los instrumentos por los cuales se otorgue la posesión de inmuebles, se liquidará el impuesto sobre el precio, monto o valor susceptible de apreciación dineraria asignado a la operación o la valuación fiscal, el que fuere mayor.
En los casos de trasmisión de dominio como consecuencia de subastas judiciales, subastas públicas realizadas por Instituciones Oficiales, conforme a las disposiciones de sus Cartas Orgánicas, y subastas privadas conforme a la Ley nacional 24.441, la base imponible está constituida por el precio de venta.
CONTRATOS DE COMPRAVENTA. TRANSFERENCIA DE DOMINIO DE INMUEBLES.
Artículo 253.- En los contratos de compraventa de inmuebles o en cualquier otro acto por el cual se transfiera el dominio de inmuebles situados dentro y fuera de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y la transferencia se realice por un precio global sin determinarse en el respectivo instrumento los valores que corresponden a cada jurisdicción, el impuesto se aplica sobre el importe resultante de proporcionar el monto imponible, en función de las valuaciones fiscales de los inmuebles.
En ningún caso el monto imponible puede ser inferior a la valuación fiscal del o de los inmuebles ubicados en jurisdicción de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
CONTRATOS DE LEASING.
Artículo 254.- En los contratos de leasing la base imponible estará constituida por el valor del canon establecido en función al tiempo del contrato.
En el caso que la transferencia de dominio de inmuebles o bienes muebles registrables tuviere lugar como consecuencia de un contrato de leasing, la base imponible al momento de formalizarse la escritura estará constituida por el valor total adjudicado al bien, canon de la locación más valor residual, o su valuación fiscal, el que fuera mayor.
El impuesto correspondiente al canon abonado durante la vigencia del contrato de leasing, será tomado como pago a cuenta en caso de realizarse la opción de compra del bien.
DONACIONES. PARTICIÓN HEREDITARIA. DIVISIÓN DE CONDOMINIO. LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL.
Artículo 255.- En el caso que la transferencia de inmuebles o bienes muebles registrables sea consecuencia de una donación, partición de herencia o división de condominio o liquidación de la sociedad conyugal, la base imponible estará constituida por el monto de la contraprestación pactada y siempre que este constituida por una suma cierta y determinada. De no existir contraprestación de dichas características el acto no estará alcanzado por el impuesto.
COMPRAVENTA DE TERRENOS CON MEJORAS.
Artículo 256.- En los contratos de compraventa de terrenos en los cuales se hayan efectuado mejoras o construcciones con posterioridad a la fecha del boleto respectivo, el impuesto se liquidará sobre el precio de venta o valuación fiscal, el que fuere mayor, sin computar en esta última las mejoras incorporadas por el adquirente con posterioridad a la toma de posesión del inmueble.
CONTRATOS DE PERMUTAS.
Artículo 257.- En las permutas de inmuebles o bienes muebles registrables el impuesto se aplica sobre la mitad de la suma de los valores que se permutan. Si no hubiera valor asignado a los inmuebles o bienes muebles registrable o este fuera inferior a las valuaciones fiscales, el impuesto se aplica sobre la mitad de la suma de las valuaciones fiscales, el que resulte mayor.
En los casos en que una de las partes compense a la otra con una suma de dinero para equiparar el valor de las cosas permutadas y esta sea inferior o igual al valor de la cosa dada, el impuesto será el establecido en el párrafo anterior, hasta el tope de las cosas permutadas y por la compensación en dinero, el gravamen que corresponda de acuerdo con la alícuota que determina la Ley Impositiva para el tipo de bien permutado.

Artículo 258.- En el caso de permutas que comprendan inmuebles o bienes muebles registrables ubicados en varias jurisdicciones, el impuesto se aplica sobre el precio de venta o la valuación fiscal total del o de los inmuebles y la valuación fiscal de los bienes muebles registrables ubicados en jurisdicción de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur o sobre el mayor valor asignado a tales bienes.
Artículo 259.- Si en la permuta de bienes una de las partes se obliga a bonificar a la otra con la adición de una suma de dinero para igualar el valor de las cosas permutadas y esta suma es mayor al valor de la cosa dada, el contrato se reputará como de compraventa, debiendo satisfacerse los gravámenes que en cada caso correspondan, según la naturaleza de los bienes.
PAGOS A CUENTA.
Artículo 260.- En los casos de transferencia de inmuebles y buques se computará como pago a cuenta, el impuesto de este Título pagado sobre los boletos de compraventa, siempre que:

a) en la escritura traslativa de dominio el escribano autorizante deje constancia de la forma de pago efectuada en el boleto; y
b) el acto escriturario se celebre dentro de los ciento veinte (120) días corridos de la celebración del respectivo boleto de compraventa.

No será de aplicación este último requisito cuando el adquirente que haya suscripto el boleto de compraventa suscriba la escritura traslativa de dominio en el mismo carácter.
HIPOTECAS SOBRE INMUEBLES UBICADOS EN VARIAS JURISDICCIONES.
Artículo 261.- Cuando se constituyan hipotecas sobre inmuebles ubicados en varias jurisdicciones, sin afectarse a cada uno de ellos con una cantidad líquida, el impuesto se aplicará sobre la valuación fiscal del o de los inmuebles situados en jurisdicción de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. En ningún caso el impuesto podrá aplicarse sobre una suma mayor a la del crédito garantizado.
CESIONES DE CRÉDITO HIPOTECARIO.
Artículo 262.- En las cesiones de créditos hipotecarios deberá liquidarse el impuesto sobre el precio convenido por la cesión o el monto efectivamente cedido, si fuera mayor que aquel. A ese efecto se deberán deducir las cantidades amortizadas. Igual procedimiento deberá observarse en cualquier contrato en donde se instrumente cesión de acciones y derechos.
OBLIGACIONES DE PAGAR SUMAS DE DINERO.
Artículo 263.- En los contratos de locación y sublocación, cesión de uso, leasing o cualquier otra forma de contrato por la cual una de las partes se obliga a pagar a la otra una suma de dinero a cambio de que esta le proporcione el uso, disfrute o explotación de inmuebles ubicados en una o en varias jurisdicciones, así como los que instrumentan la locación de servicios y obras, públicas y privadas, sobre tales bienes, el impuesto se aplicará:

a) en los contratos enumerados en la primer parte del párrafo anterior: sobre el importe resultante de proporcionar el monto imponible en función de las valuaciones fiscales de los inmuebles, siempre que del instrumento respectivo no surja el monto atribuible a cada jurisdicción; y
b) en los contratos de locación de servicios y obras públicas y privadas: Sobre el valor que corresponda a la parte realizada o a realizarse en jurisdicción de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

CONTRATOS DE SEGUROS.
Artículo 264.- En los contratos de seguros el impuesto se liquidará según la alícuota que fije la Ley Impositiva, de acuerdo con las reglas que a continuación se establecen:

a) en los seguros elementales, sobre la prima y recargo, incluido el adicional financiero, que se fije por la vigencia total del seguro; y
b) los certificados provisorios deberán pagar el impuesto conforme al inciso anterior, cuando no se emita la póliza definitiva dentro de los noventa (90) días.

TRANSFERENCIA DE DOMINIO DE BIENES REGISTRABLES.
Artículo 265.- En el caso que la transferencia de dominio de inmuebles o bienes muebles registrables tuviere lugar con motivo de aportes para la constitución de sociedades, aumento de su capital social, absorción, fusión, escisión o reorganización de las mismas, el Impuesto

de Sellos deberá abonarse sobre el precio pactado o la valuación fiscal, el que sea mayor, en la oportunidad de la instrumentación del acto o contrato por el cual se perfeccione la transferencia del dominio.

TRANSFERENCIAS DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.

Artículo 266.- En las transferencias de establecimientos comerciales o industriales, el monto imponible será el precio neto de la operación. Si en la transferencia estuvieran comprendidos bienes inmuebles ubicados en la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, dicho monto no podrá ser inferior a la valuación fiscal.

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE SOCIEDADES.

Artículo 267.- En las disoluciones y liquidaciones de sociedades, como así también en las adjudicaciones a los socios, el impuesto deberá pagarse únicamente cuando exista transmisión de domino de bienes inmuebles, tomándose como base imponible la valuación fiscal de dichos bienes o el valor asignado a los mismos, si fuera mayor. En tal caso el impuesto aplicable será el que corresponda a las transmisiones de dominio a título oneroso.

CONTRATOS DE EJECUCIÓN SUCESIVA.

Artículo 268.- En los contratos de ejecución sucesiva, pagos periódicos u otros análogos, el impuesto se aplicará sobre el valor correspondiente a la duración total. Si la duración no fuera prevista, el impuesto se calculará como si aquella fuera de cinco (5) años, debiendo renovarse cada cinco (5) años o período inferior hasta la finalización de la relación contractual.

PRÓRROGAS DE LOS CONTRATOS.

Artículo 269.- El valor de los contratos en que se prevea su prórroga, se determinará de la manera siguiente:

a) cuando la prórroga deba producirse por el solo silencio de las partes o aun cuando exista el derecho de rescisión por manifestación expresa de voluntad de ambas o de una de ellas, se calculará el tiempo de duración del contrato inicial más el período de prórroga;
b) cuando la prórroga sea por tiempo indeterminado, se la considerará como de cinco (5) años, que se sumará al período inicial; si la prórroga fuera por períodos sucesivos, se considerará renovado el contrato en cada período de cinco (5) años hasta la finalización de la relación contractual, debiendo ingresarse el tributo por cada uno de las prórrogas efectuadas; y
c) cuando la prórroga está supeditada a una expresa declaración de voluntad de ambas partes o de una de ellas, se tomará como monto imponible solo el que corresponda al período inicial; al instrumentarse la prórroga o la opción, se abonará el impuesto correspondiente a la misma.

CONTRATOS DE FIDEICOMISOS.

Artículo 270.- En los contratos de fideicomisos celebrados al amparo de las disposiciones de la Ley nacional 24.441, Título I, el impuesto se aplicará exclusivamente sobre la retribución que perciba el fiduciario durante la vigencia del contrato. No están alcanzados por el impuesto los instrumentos por medio de los cuales se formalice la transferencia de bienes que realicen los fiduciantes a favor de los fiduciarios. Los actos, contratos y operaciones de disposición o administración que realice el fideicomiso quedarán sometidos al impuesto en la medida que concurran los extremos de gravabilidad establecidos para este impuesto en cada caso.

MONTO IMPONIBLE EXPRESADO EN MONEDA EXTRANJERA.

Artículo 271.- Si el valor imponible se expresa en moneda extranjera, el impuesto deberá liquidarse sobre el equivalente en moneda argentina al tipo de cambio vendedor vigente al primer día hábil anterior a la fecha del acto registrado y/o publicado por el Banco Central de la República Argentina.

VALOR DE LOS ACTOS INDETERMINADO.

Artículo 272.-Salvo las disposiciones especiales contenidas en este Código, cuando el valor de los actos sea indeterminado, las partes estimarán dicho valor en el mismo instrumento; a tales efectos la estimación se fundará en el rendimiento de convenios y prestaciones similares anteriores; si no las hubiere, en los valores inferibles del negocio, inversiones, erogaciones y similares, vinculados al contrato; y a falta de ellos, en todo elemento de juicio de significación

a este fin existente a la fecha de celebración del acto. Cuando se fije como precio el corriente en fecha futura se pagará el impuesto con arreglo al precio de plaza en la fecha de otorgamiento.
Cuando se careciese de antecedentes y no pudiera practicarse una estimación del valor económico atribuible al acto, se satisfará el impuesto que establezca la Ley Tarifaria.
Dicha estimación y la circunstancias previstas en el párrafo anterior cuando fueran invocadas por el contribuyente y/o responsable, podrán ser impugnadas por la Agencia de Recaudación Fueguina, quien la practicará de oficio sobre la base de los mismos elementos de juicio señalados en este artículo.
Cuando la estimación del organismo de aplicación sea superior a la determinada por las partes, se integrará sin multa ni intereses la diferencia del impuesto dentro de los quince (15) días de su notificación, siempre que el instrumento hubiere sido presentado dentro del plazo correspondiente.
RENTAS VITALICIAS.
Artículo 273.- En las rentas vitalicias el valor para aplicar el impuesto será igual al importe del quíntuplo de una anualidad de renta o el cinco por ciento (5%) por ciento anual de la valuación fiscal o tasación judicial, el que fuere mayor.
NO INTEGRAN LA BASE IMPONIBLE.
Artículo 274.- No integran la base imponible los siguientes conceptos:

a) los importes correspondientes a los impuestos internos, impuesto al valor agregado, débito fiscal, impuesto a los combustibles líquidos y gas natural previsto en el Título III de la Ley nacional 23.966 e impuestos para los fondos nacional de autopistas y también tecnológico del tabaco;
b) los importes referidos a interés de financiación; y
c) gastos y expensas cuando quedan a cargo del locatario y no representen un ingreso para el locador.

Estas deducciones solo podrán ser efectuadas cuando se identifiquen y discriminen en forma precisa los conceptos enunciados en los instrumentos alcanzados por el tributo.
BASE IMPONIBLE. REGISTRACIONES CONTABLES QUE DEVENGUEN INTERESES. ENTIDADES LEY NACIONAL 21.526.
Artículo 275.- Para las operaciones registradas contablemente, que representen entregas o recepciones de dinero, que devenguen intereses, efectuadas por entidades regidas por la Ley nacional 21.526 de entidades financieras o sus modificaciones el impuesto se pagará sobre la base de los numerales establecidos para la liquidación de los intereses, en proporción al tiempo de la utilización de los fondos en la forma y plazo que la Agencia de Recaudación Fueguina establezca.
El impuesto será exigible a partir del momento en que los intereses se debiten, acrediten o abonen. En los casos de cuentas con saldos alternativamente deudores y acreedores, el gravamen deberá liquidarse en forma independiente sobre los numerales respectivos.
DE LAS EXENCIONES.
Artículo 276.- Están exentos del impuesto establecido en este Título:

1. el Estado nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las municipalidades y sus dependencias administrativas. No están comprendidas en este inciso las empresas y entidades pertenecientes total o parcialmente al Estado nacional, provincial o municipal, a que se refiere el artículo 1º de la Ley nacional 22.016;
2. las asociaciones y entidades civiles de asistencia social, de caridad, beneficencia, religiosas, de educación e instrucción, científicas, artísticas, gremiales, culturales, de fomento vecinal y protectoras de animales, siempre que sus réditos y patrimonio social se destinen exclusivamente a los fines de su creación y, en ningún caso, se distribuyan directa o indirectamente entre los socios. Se excluye de la exención establecida en el inciso a aquellas entidades organizadas jurídicamente en forma comercial y las que obtienen sus recursos en todo o en parte, de la explotación regular de espectáculos públicos, juegos de azar, carreras de caballos y actividades

similares;

3. las sociedades cooperativas de viviendas constituidas con arreglo a la Ley nacional 20.337 o sus modificaciones, y debidamente inscriptas como tales en el registro pertinente, así como los actos por los que se constituyan dichas entidades;
4. los instrumentos otorgados a favor del Gobierno nacional, de los gobiernos provinciales y municipales y de sus respectivas dependencias, que tengan por objeto documentar o afianzar obligaciones de carácter fiscal y previsional;
5. las transferencias de bienes muebles y las cesiones de derechos que han debido tributar el impuesto de esta ley con motivo de la constitución de sociedades o ampliaciones de su capital;
6. En el caso de disolución de sociedades y adjudicación a los socios, las transferencias de bienes o establecimientos comerciales o industriales y las cesiones de derechos.

Esta norma no se aplicará en el caso de compra venta o permuta de inmuebles a título oneroso que se realicen con motivo de disolución de sociedades y/o adjudicación a los socios;

7. las transformaciones de sociedades en otras de tipo jurídico distinto, siempre que no se prorrogue la duración de la sociedad primitiva.

Estarán también exentos los actos que formalicen la reorganización de sociedades o fondos de comercio (fusión, escisión o división), siempre que no se prorrogue el término de duración de la sociedad subsistente o de la nueva sociedad, según corresponda, respecto a la de mayor plazo de las que se reorganicen. Si el capital de la sociedad subsistente o de la nueva sociedad, en su caso, fuera mayor a la suma de los capitales de las sociedades reorganizadas, se abonará el impuesto sobre el aumento de capital.

Se entiende por reorganización societaria o de fondos de comercio, las operaciones definidas como tales por el artículo 77 de la Ley nacional 20.628 de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, su Decreto Reglamentario y las normas complementarias dictadas por la Administración Federal de Ingresos Públicos, concordantes y modificatorias;

8. las transferencias postales o telegráficas y los giros vendidos por entidades regidas por la Ley nacional 21.526 de entidades financieras, pagaderos a su presentación o hasta cinco (5) días vista;
9. los actos de constitución de sociedades para la administración y explotación de servicios estatales que se privaticen, cuando sean formalizados por los empleados y/u operarios de aquellos;
10. las reinscripciones de hipotecas;
11. las declaraciones de dominio, cuando se haya expresado en la escritura de compra que la adquisición se efectuó para la persona a favor de la cual se formulen;
12. las divisiones de condominio;
13. los endosos efectuados en cheques, letras de cambio, pagaré y otros documentos a la orden;
14. las fianzas u otras obligaciones accesorias, como asimismo la constitución de prendas, cuando se pruebe que han sido contraídas para garantizar obligaciones que hayan pagado el Impuesto de Sellos correspondientes en la respectiva jurisdicción de otorgamiento, o que se encontraban exentas del mismo. Si no se demostrara el pago del impuesto sobre el instrumento principal, o en su caso la exención, el documento en el cual se formalicen las obligaciones accesorias estará sometido al impuesto correspondiente o al que grava la obligación principal, el que sea mayor, sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder;
15. los pagarés o las fianzas otorgadas en garantía de ofertas en licitaciones o contrataciones directas con reparticiones nacionales, provinciales o municipales, como asimismo las garantías otorgadas por los adjudicatarios;
16. los pagarés entregados como parte del precio de un contrato de compraventa de inmuebles, cuando se haya efectuado la escritura traslativa de dominio, siempre que lleven al dorso la certificación del escribano ante el cual haya sido otorgada dicha escritura, del que resulte la fecha y número de esta y el importe del impuesto pagado.

No gozarán de esta exención los nuevos documentos que se otorguen para renovar las obligaciones no cumplidas a su vencimiento;

17. los documentos que se instrumenten o sean consecuencia de operaciones gravadas por el impuesto a la compra y venta de divisas;
18. los actos realizados en virtud de lo establecido en los artículos 17 y 18 de la Ley nacional 20.539 y sus modificaciones, cualquiera sea la forma en que se instrumenten;
19. el establecimiento de sucursales o agencias en la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, por parte de sociedades constituidas en las provincias o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
20. los contratos de cesión de derechos de propiedad intelectual, los contratos de edición y los contratos de traducción de libros;
21. los contratos de impresión de libros, celebrados entre las empresas gráficas argentinas y las empresas editoras argentinas;
22. los contratos de venta de papel para libros;
23. los contratos de venta de libros, aunque el precio se difiera en cuanto a su percepción, siempre que dichos contratos los celebren, como vendedoras, las empresas editoras argentinas;
24. las asociaciones deportivas y de cultura física, siempre que las mismas no persigan fines de lucro, exploten o autoricen juegos de azar y/o cuyas actividades de mero carácter social priven sobre las deportivas, teniendo en cuenta los índices representativos de las mismas (cantidad de socios que participen activamente, fondos que se destinan y otros);
25. las operaciones de compra venta al contado o a plazo de mercaderías, cereales, oleaginosas, productos o subproductos de la agricultura, ganadería o minería y frutos del país o semovientes excluidas las de títulos, acciones y debentures, cuando constituyan operaciones de arbitraje en mercados a término;
26. el contrato de seguro y los reaseguros;
27. los conformes prestados con motivo de circularizaciones a deudores y acreedores, efectuadas en virtud de la ejecución de prácticas de auditoría interna o externa, y las conformidades prestadas en los estados, resúmenes o movimientos de cuentas corrientes de cualquier tipo, así como en los remitos y facturas no conformadas;
28. los créditos concedidos por las entidades regidas por la Ley nacional 21.526 a más de un (1) año de plazo originario, cualquiera sea la forma adoptada para su concertación. Si se otorgaran pagarés para documentar dichas operaciones, los mismos gozarán de este beneficio en tanto no se endosen a terceros y se haga constar en su texto o al dorso, mediante constancia firmada por la entidad prestamista, el plazo, causas y modalidades de la operación crediticia respectiva.

    Esta exención no será aplicable para la renovación de operaciones de menor plazo, aunque excedieran en su conjunto el plazo de un (1) año. Tampoco regirá cuando antes de dicho lapso se produjera la cancelación total o parcial del crédito de que se trate, en cuyo caso deberá ingresarse el impuesto correspondiente al total de la operación debidamente actualizado de acuerdo con lo que dispone el Código Fiscal, sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder;
29. las escrituras hipotecarias y demás garantías otorgadas en seguridad de las operaciones sujetas al gravamen de este Título, aun cuando estas garantías sean extensivas a las futuras renovaciones de dichas operaciones.

    Cuando las entregas o recepciones de dinero que devenguen intereses queden garantizadas mediante vales, billetes, pagarés, letras de cambio y órdenes de pago o la firma de fórmulas en blanco de dichos documentos se deberá abonar por los mismos el impuesto correspondiente;
30. los boletos y/o el otorgamiento de las escrituras de compraventa de viviendas celebrados entre el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) y sus adjudicatarios, siempre que los mismos se refieran a viviendas construidas a través de planes

oficiales;
31. las locaciones de viviendas únicas familiares, solamente por el cincuenta por ciento (50%) correspondiente a los locatarios;
32. los contratos de trabajo por tiempo determinado, con excepción de los contratos celebrados con personas que desarrollen tareas vinculadas a las actividades hidrocarburíferas;
33. las liquidaciones o resúmenes periódicos que las entidades emisoras de tarjetas de débito produzcan para su remisión a los titulares;
34. las letras de cambio, giros, cheques, cheques de pago diferido, órdenes de pago y cualquier otro título valor;
35. los certificados de depósito a plazo fijo;
36. los depósitos en cajas de ahorro, cuentas especiales de ahorro, cuentas corrientes y plazos fijos;
37. los actos y contratos vinculados con la operatoria de tarjetas de crédito o compra, con excepción de las liquidaciones o resúmenes periódicos que remiten las entidades a los titulares de las tarjetas de crédito y/o compra;
38. las órdenes de compra que emitan organismos públicos y sus dependencias pertenecientes al Estado Nacional, Provincial y Municipal;
39. los contratos de locación de servicios y obras públicas celebrados por la Administración Pública Nacional, Provincial y Municipal;
40. los contratos, acuerdos o convenios que celebre el Poder Ejecutivo con entidades públicas o privadas, que permitan obtener recursos corrientes y/o contribuciones extraordinarias, o bien, que establezcan herramientas o procedimientos que optimicen los servicios propios de la Administración Pública.

DEL PAGO.

FORMA Y CONDICIONES.

Artículo 277.- Los impuestos establecidos en este Título se pagarán en la forma, condiciones y términos que establezca el organismo de aplicación según lo determine el Poder Ejecutivo en casos especiales o el organismo de aplicación con carácter general para determinados gravámenes o categorías de contribuyentes.

Podrán pagarse también sobre la base de declaraciones juradas cuando lo disponga el organismo de aplicación. El pago de impuestos se hará bajo exclusiva responsabilidad del contribuyente y las oficinas recaudadoras se limitarán a agregar, en cada caso, los valores que se soliciten, salvo cuando exista determinación previa del organismo de aplicación.

Los escribanos, las entidades financieras, las compañías de seguro y los encargados del Registro Nacional de la Propiedad Automotor y de créditos prendarios quedan designados como agentes de recaudación del Impuesto de Sellos, en los términos de la presente ley y en los que establezca la reglamentación pertinente.

DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO E INFRACCIONAL ESPECIAL.

DOCUMENTOS ANTE OTRAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS.

Artículo 278.- En todo documento que se presente ante cualquier autoridad administrativa y que aparezca en infracción a las disposiciones de este Código u otras leyes tributarias, deberá darse intervención a la Agencia de Recaudación Fueguina en la forma que establezca la reglamentación.

ESCRIBANOS. OBLIGACIONES.

Artículo 279.- Los Escribanos de Registro no podrán aceptar para darle fecha cierta, transcribir, ni dar fe de haber tenido a la vista instrumentos gravados, sin acreditar el pago del impuesto, debiendo dejar constancia en el cuerpo de la escritura de la numeración, serie e importe de los valores con que se encuentren habilitados, o de la respectiva individualización del timbrado mecánico o sello de autorización para abonar el impuesto por Declaración Jurada. Tampoco podrán extender protestos de documentos en infracción, sin exigir su reposición o garantizarla para el primer día hábil siguiente.

La falta de cumplimiento de estos requisitos los constituirá en infractores siendo pasibles de una multa de tres (3) veces el impuesto debidamente actualizado de acuerdo con lo que

establece el Código Fiscal, si se comprobaren omisiones de impuesto, o de pesos cien mil ($ 100.000) a pesos un millón ($ 1.000.000) si se tratare de una infracción formal.
SIMPLE MORA Y PAGO ESPONTÁNEO.
Artículo 280.- La simple mora en el pago del impuesto cuando el mismo se pague espontáneamente, inclusive en los casos en que el impuesto se abone por Declaración Jurada, será sancionada con una multa que resultará de aplicar la siguiente escala:

a) hasta tres (3) meses de retardo: el cincuenta por ciento (50%) del impuesto que se ingrese fuera de término;
b) más de tres (3) meses y hasta seis (6) meses de retardo: cien por ciento (100%) del impuesto que se ingrese fuera de término;
c) más de seis (6) meses y hasta nueve (9) meses de retardo: el ciento cincuenta por ciento (150%) del impuesto que se ingrese fuera de término;
d) más de nueve (9) meses y hasta doce (12) meses de retardo: el doscientos por ciento (200%) del impuesto que se ingrese fuera de término; y
e) más de doce (12) meses de retardo: el doscientos cincuenta por ciento (250%) del impuesto ingresado fuera de término.

Para la fijación de las multas solo se tendrá en cuenta el sello omitido en el instrumento u operación, con independencia del número de partes intervinientes en el acto o de infractores, siendo estos responsables solidarios.
En todos los casos, las multas podrán ser reducidas total o parcialmente, mediante resolución fundada, cuando las mismas impliquen culpa leve de los infractores.
Artículo 281.- Establécese que a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, operará, ipso iure, la sustitución del Capítulo III -Impuesto Inmobiliario Rural- de la Ley provincial 440, por el siguiente:

"CAPITULO III
DEL IMPUESTO INMOBILIARIO

Artículo 32- Establécese que los recursos producidos por el excedente en el cobro del Impuesto Inmobiliario sobre los inmuebles urbanos, respecto del importe actual recaudado por los municipios según bases imponibles y alícuotas que aplican a la fecha, serán coparticipados con los Municipios de la Provincia que adhieren a la presente ley, debiendo los mismos dejar de cobrar el impuesto creado por las ordenanzas locales.
Artículo 32 Bis.- La coparticipación establecida en el artículo anterior será del sesenta por ciento (60%), considerando los inmuebles urbanos localizados en cada ejido Municipal, respectivamente.
Artículo 33.- Establécese que la Provincia podrá designar como agentes de percepción y/o de fiscalización del impuesto a los Municipios de la Provincia, los que podrán retener la parte correspondiente a la coparticipación del impuesto, conforme el artículo anterior, en el porcentaje que corresponda.
Artículo 33 bis.- Establécese las siguientes escalas de alícuotas para la liquidación del Impuesto Inmobiliario:

INMUBLES RURALES			
VALUCACION FISCAL		CUOTA FIJA	ALICUOTA S/ EXCENDENTE LIM. MIN.
MAYOR A:	IGUAL O MENOR A:		
$ 18.000.000,00		$136,656,90	1,20%
$ 9.000.000,00	$ 18.000.000,00	$ 46.656.90	1,00%
$ 4.500.000,00	$ 9.000.000,00	$ 15.606,90	0,69%
$ 3.600.000,00	$ 4.500.000,00	$ 11.556,90	0,45%
$ 2.700.000,00	$ 3.600.000,00	$ 8.046,90	0,39%
$ 1.800.000,00	$ 2.700.000,00	$ 4.987,00	0,34%
$ 900.000,00	$ 1.800.000,00	$ 2.196,90	0,31%
$ 333.000,00	$ 900.000,00	$ 666,00	0,27%
$ 0,00	$ 333.000,00		0,20%

INMUEBLES URBANOS CON MEJORAS		
VALUACION FISCAL		ALICUOTA
MAYOR A:	IGUAL O MENOR A:	
$ 700.000,00		9,04%$_0$
$ 450.001,00	$ 700.000,00	7,5%$_0$
$ 363.001,00	$ 450.000,00	5,04%$_0$
$ 273.001,00	$ 363.000,00	3,15%$_0$
$ 182.001,00	$ 273.000,00	2,205%$_0$
$ 91.001,00	$ 182.000,00	1,89%$_0$
$ 1,00	$ 91.000,00	1,575%$_0$

INMUEBLES URBANOS BALDÍOS		
VALUACION FISCAL		ALICUOTA
MAYOR A:	IGUAL O MENOR A:	
$ 73.001,00		15,75%$_0$
$ 24.001,00	$ 73.000,00	12,50%$_0$
$ 14.001,00	$ 24.000,00	10,08%$_0$
$ 7.201,00	$ 14.000,00	7,56%$_0$
$ 1,00	$ 7.200,00	6,30%$_0$

Artículo 33 ter- Fíjase en pesos mil quinientos ($1.500,00) el impuesto mínimo para los inmuebles rurales.
Artículo 33 Quáter.- Facúltase al Poder Ejecutivo a dictar toda la normativa reglamentaria necesaria para la ejecución de la presente.”.
Artículo 282.- Establécese que a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, operará ipso iure la sustitución del artículo 44 de la Ley provincial 440 por el siguiente:
“Artículo 44.- Por cada liquidación de deuda y su notificación el contribuyente o responsable deberá abonar un importe de hasta el diez por ciento (10%) de la deuda.
Por cada notificación que requiera la presentación de declaraciones juradas o documentación equivalente en los que se acredite que existe mora u omisión, o en general, el incumplimiento satisfactorio de las obligaciones tributarias, el contribuyente o responsable deberá abonar un importe de hasta pesos doscientos ($ 200).
Lo prescripto en el presente artículo será conforme a la resolución que dicte la Agencia de Recaudación Fueguina.”.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Artículo 283.- Sustitúyese el artículo 9º de la Ley provincial 904 por el siguiente texto:
“Artículo 9º.- Exceptúase por única vez la aplicación de los artículos 10 y 11 de la Ley territorial 118, reemplazando el Cálculo de los Valores Unitarios Básicos allí establecidos por el resultante Informe Técnico producido según el Contrato de Obra (Expediente Nº 10367 00 01) con el Consejo Federal de Inversiones en virtud de ello:

a) el Valor Unitario Básico por hectárea para los Inmuebles de Planta Rural de la Provincia será de pesos novecientos ($900), el que será reajustado según los coeficientes correctores que se consignan en el Anexo I integrante de la presente ley. El valor así obtenido constituirá la valuación fiscal para el Impuesto Inmobiliario Rural hasta tanto sea reemplazado según el procedimiento establecido por el artículo 6º de la Ley territorial 118 y sin perjuicio de las actualizaciones que correspondan.
b) los Valores Unitarios Básicos por m2, libre de mejoras, para los inmuebles de la

Planta Urbana de la Provincia serán los establecidos en el siguiente cuadro. La valuación fiscal total resultará de aplicar los mencionados valores básicos a la superficie del inmueble más el valor de las mejoras implantadas en cada parcela. Ello hasta tanto sea reemplazado según el procedimiento establecido por el artículo 6º de la Ley territorial 118 y sin perjuicio de las actualizaciones que correspondan.

LOCALIDAD	SECCION (1)	$/m2
USHUAIA	A	$ 4.680,00
	B	$ 1.776,67
	C	$ 1.430,00
	D	$ 1.592,50
	E	$ 931,67
	F	$ 650,00
	G	$ 975,00
	H	$ 975,00
	I	$ 1.040,00
	J	$ 1.430,00
	K	$ 1.511,25
TOLHUIN	T	$ 137,27

RIO GRANDE	A	$ 741,82
	B	$ 590,00
	C	$ 416,67
	D	$ 683,33
	E	$ 275,00
	F	$ 325,00
	G	$ 350,00
	H	$ 550,00
	J	$ 330,00
	K	$ 187,50

c) el valor de las mejoras surgirá de aplicar un coeficiente de cinco (5) veces sobre la última valuación fiscal de la mejora por aplicación de la Ley territorial 118 efectuada en el año 1990. ello hasta tanto sea reemplazado según el procedimiento establecido por el artículo 6º de la Ley territorial 118 y sin prejuicio de las actualizaciones que correspondan.

Artículo 284.- La presente ley que unifica el Código Fiscal entrará en vigencia, ipso iure, a partir del primer día del mes de febrero de 2016 y regirá respecto de los hechos imponibles y/o determinaciones que ocurran a partir de dicha fecha.

Artículo 285.- La totalidad de los recursos excedentes producidos por la modificación del Impuesto Inmobiliario prevista en la presente ley, serán destinados a financiar el pago de jubilaciones y pensiones del IPAUSS o el organismo que lo reemplace por un período máximo de cuarenta y ocho (48) meses.

Artículo 286- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Asunto Nº 12/16

Artículo 1º.- Sustitúyese el artículo 8° de la Ley provincial 561, por el siguiente texto:

"Artículo 8º.- Los aportes personales y las contribuciones a cargo de los empleadores, serán obligatorios y equivalentes a un porcentaje de la remuneración determinada de conformidad con las normas de la presente ley, y cuyo monto será el que fije el Poder Ejecutivo de acuerdo con las necesidades económico-financieras del sistema. Los aportes personales serán del catorce por ciento (14%) para las jubilaciones ordinarias y del dieciséis por ciento (16%) para las jubilaciones previstas por los artículos 35, 35bis, 35ter y 38; las contribuciones patronales serán del dieciséis por ciento (16%).

El pago de los aportes y contribuciones será obligatorio para todo el personal a partir de los dieciséis (16) años de edad, se realizará sobre el total de la remuneración determinada, sin existir monto máximo.".

Artículo 2º.- Sustitúyese el artículo 15 de la Ley provincial 561, por el siguiente texto:

"Artículo 15.- A los efectos de establecer los aportes y contribuciones correspondientes a servicios honorarios, se considerará devengada la remuneración que para iguales o similares actividades rigió en las épocas que se cumplieron. El aporte personal y la contribución patronal estarán a cargo del empleador.".

Artículo 3º.- Sustitúyese el artículo 18 de la Ley provincial 561, por el siguiente texto:

"Artículo 18.- Al solo efecto de acreditar el mínimo de servicios necesarios para el logro de la jubilación ordinaria, podrán compensar el exceso de edad con la falta de servicios, en la proporción de dos (2) años de edad excedente por uno (1) de servicios faltantes.".

Artículo 4º.- Sustitúyese el artículo 21 de la Ley provincial 561, por el siguiente texto:

"Artículo 21.- Tendrán derecho a la jubilación ordinaria los afiliados de ambos sexos que hayan cumplido sesenta (60) años de edad y acrediten treinta (30) años de servicios computables en uno o más regímenes jubilatorios comprendidos en el sistema de reciprocidad jubilatoria.

Estos beneficios se acuerdan a aquellos agentes que se hayan desempeñado durante un período mínimo de veinte (20) años, dentro de las administraciones comprendidas en el presente régimen, computados a partir de enero de 1985.".

Artículo 5º.- Sustitúyese el artículo 22 de la Ley provincial 561, por el siguiente texto:

"Artículo 22.- Tendrán derecho a la jubilación por edad avanzada los afiliados que:

a) hayan cumplido setenta (70) años de edad sin distinción de sexo;
b) acrediten veinte (20) años de servicio con aportes computables en las Administraciones comprendidas en la presente, debiendo encontrarse en funciones al solicitar el beneficio; y
c) no gocen de jubilación o retiro nacional, provincial o municipal, sea el mismo contributivo o no contributivo, ni tengan derecho a Jubilación Ordinaria en cualquier otro régimen jubilatorio del país.

En el caso de cumplir la edad requerida para obtener la jubilación por edad avanzada y se hubieran desempeñado durante un período mínimo de quince (15) años dentro de las Administraciones comprendidas en el presente régimen tendrán derecho a la Jubilación por Edad Avanzada Mínima, debiendo encontrarse el causante en funciones al solicitar el beneficio.".

Artículo 6º.- Sustitúyese el artículo 23 de la Ley provincial 561, por el siguiente texto:

"Artículo 23.- Tendrán derecho a la jubilación por invalidez, cualquiera fuera su edad y antigüedad en el servicio, en concordancia con lo establecido en el artículo 34 de la presente norma, los agentes que se incapaciten física o intelectualmente en forma total para el desempeño de cualquier actividad compatible con sus aptitudes profesionales, siempre que la incapacidad se hubiera producido durante la relación de trabajo. La invalidez que produzca en la capacidad laborativa una disminución del

sesenta y seis por ciento (66%) o más, se considera total. La posibilidad de sustituir la actividad habitual del afiliado por otras compatibles con sus aptitudes profesionales será evaluada por la autoridad de aplicación teniendo en cuenta su edad, su especialización en la actividad ejercitada, la jerarquía profesional que hubiere alcanzado y las conclusiones del dictamen médico respecto del grado y naturaleza de la invalidez.".

Artículo 7º.- Sustitúyese el artículo 35 de la Ley provincial 561, por el siguiente texto:

"Artículo 35.- Las jubilaciones del personal docente dependiente de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, se regirán por las disposiciones de la presente Ley y las particulares que a continuación se establecen:

a) los docentes o profesores con un mínimo de veintiún (21) horas cátedra en todas las ramas de la enseñanza, que no correspondan a la gestión privada, dependientes de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, al frente efectivo y directo de grado en establecimientos educativos públicos de la Provincia, que no correspondan a la gestión privada, y el personal directivo y técnico docente con más de diez (10) años efectivos y directo al frente de grado en la Provincia, obtendrán la jubilación ordinaria al cumplir veinticinco (25) años de servicios dentro del ámbito de la educación y cincuenta (50) años de edad;
b) los docentes de educación especial con más de diez (10) años efectivos, al frente directo de grado en escuela de educación especial en cualquier jurisdicción y quince (15) años de servicios en escuelas especiales o diferenciadas en la Provincia obtendrán la jubilación ordinaria al cumplir veinte (20) años de servicios en enseñanza especial o diferenciada sin límite de edad;
c) el personal no comprendido en los incisos anteriores del presente artículo, con quince (15) años de servicios docentes en la Provincia, que no correspondan a gestión privada, obtendrán su jubilación ordinaria al cumplir treinta (30) años de servicios en el ámbito docente y cincuenta y cinco (55) años de edad;
d) aquellos docentes que con cincuenta y cinco (55) años de edad no reúnan las condiciones de años de aportes establecidas en el inciso a) del presente artículo podrán optar por acogerse al beneficio previsional debiendo:
    d.1) acreditar diez (10) años de servicio efectivos frente al grado en establecimientos educativos públicos de la Provincia, que no correspondan a gestión privada;
    d.2) haber cumplido un mínimo de quince (15) años de servicios en la docencia con aportes a la Caja Provincial;
    d.3) una vez obtenido el beneficio, aportar mensualmente el importe equivalente a los aportes y contribuciones que correspondan al monto actualizado por el que haya obtenido el beneficio, hasta alcanzar veinticinco (25) años de aportes efectivos a la Caja Provincial;
e) los requisitos de aportes efectivos a la Caja Provincial serán en todos los casos de veinte (20) años como mínimo, siendo computables para completar los restantes años de servicios aquellos aportes a regímenes jubilatorios comprendidos en el sistema de reciprocidad;
f) los servicios prestados en escuelas de ubicación desfavorable con residencia permanente, se computarán a razón de cuatro (4) por cada tres (3) meses de servicios efectivos. Se consideran a los fines de la presente ley como escuelas de ubicación desfavorables, aquellas instaladas o ubicadas fuera de los radios urbanos y suburbanos de las ciudades y comunas de la Provincia;
g) para el personal docente regirá el haber jubilatorio móvil determinado en el inciso b.1) del artículo 43;
h) a los efectos jubilatorios se considerarán todas las remuneraciones que el docente perciba regularmente, como asignación por cargos, funciones diferentes, prolongación de jornada, bonificación por ubicación y antigüedad. El

descuento jubilatorio y la contribución correspondiente se efectuará sobre estas remuneraciones.”.

Artículo 8º.- Sustitúyese el artículo 35 bis de la Ley provincial 561, por el siguiente texto:

“Artículo 35 bis.- Las jubilaciones de personal de radiología dependientes de la Provincia de Tierra del Fuego se regirán por las disposiciones de la presente ley y las particulares que a continuación se establecen;

a) los médicos radiólogos dependientes de la Provincia de Tierra del Fuego, en la atención directa a pacientes, obtendrán la jubilación ordinaria al cumplir, dentro del ámbito del servicio de radiología, veinticinco (25) años de servicios, sin límite de edad;
b) el personal que desempeñe tareas de técnico radiólogo, sea cual fuere su título, en atención directa a pacientes, obtendrán la jubilación ordinaria al cumplir, dentro del ámbito del servicio de radiología, veinticinco (25) años de servicios, sin límite de edad;
c) para el trabajo de radiología regirá el haber jubilatorio móvil determinado en el inciso b.1) del artículo 43;
d) los requisitos de aportes efectivos a la Caja Provincial serán de veinte (20) años como mínimo, siendo computables para completar los veinticinco (25) años de servicios aquellos aportes a regímenes jubilatorios comprendidos en el sistema de reciprocidad, debiéndose demostrar que se realizaron las tareas en la especialidad radiológica y en atención directa a pacientes.

Una vez obtenida la jubilación en los términos del presente artículo no podrán desarrollar tareas vinculadas a la radiología, ya sean estas bajo relación de dependencia pública o privada, ni en forma autónoma.”.

Artículo 9°.- Incorpórase el artículo 35 ter a la Ley provincial 561, con el siguiente texto:

“Artículo 35 ter.- Las jubilaciones de los profesionales que se desempeñen en atención directa a pacientes, conforme a la reglamentación que se dicte, en los Hospitales y Centros de Atención Primaria de Salud dependientes del Ministerio de Salud de la Provincia de Tierra del Fuego se regirán por las disposiciones de la presente ley y las particulares que a continuación se establecen;

a) obtendrán la jubilación ordinaria al cumplir, dentro del ámbito del servicio de salud, veinticinco (25) años de servicios y cincuenta y cinco (55) años de edad;
b) los requisitos de aportes efectivos a la Caja Provincial serán de veinte (20) años como mínimo, siendo computables para completar los veinticinco (25) años de servicios aquellos aportes a regimenes jubilatorios comprendidos en el sistema de reciprocidad, debiéndose demostrar que se realizaron en Hospitales o Centros de Salud dependientes del sector público nacional, provincial, municipal o comunal.

Una vez obtenida la jubilación en los términos del presente artículo no podrán desarrollar tareas en Hospitales o Centros de Salud públicos o privados, salvo las de carácter honorífico o de consejeros, según reglamentación que se dicte.”.

Artículo 10.- Sustitúyese el artículo 38 de la Ley provincial 561, por el siguiente texto:

“Artículo 38.- Los servicios prestados en tareas penosas, riesgosas, insalubres o determinantes de vejez o agotamiento prematuro, declaradas tales por la autoridad competente conforme la legislación vigente, se computarán a razón de cinco (5) años por cada cuatro (4) de servicios efectivos. El personal comprendido en el presente artículo obtendrá la jubilación ordinaria al cumplir cincuenta (50) años de edad, computando treinta (30) años de servicios y debiendo acreditar un mínimo de veinte (20) años en dichas tareas en la Administración provincial.

Una vez obtenida la jubilación en los términos del presente artículo no podrán desarrollar tareas penosas, riesgosas, insalubres o determinantes de vejez o agotamiento prematuro, declaradas tales por la autoridad competente conforme la legislación vigente, ya sean estas bajo relación de dependencia pública o privada, ni en forma autónoma.”.

Artículo 11.- Sustitúyese el artículo 40 de la Ley provincial 561, por el siguiente texto:

"Artículo 40.- Para tener derecho a cualquiera de los beneficios que acuerda la presente ley el afiliado debe reunir los requisitos necesarios para su logro encontrándose en actividad en alguno de los tres poderes del Estado provincial, sus municipalidades y comunas, antes Autárquicos y Descentralizados y Sociedades con Participación Mayoritaria Estatal, en cualquiera de sus manifestaciones; salvo para el caso de la jubilación ordinaria, la que se otorgará al afiliado, reuniendo los restantes requisitos para el logro del beneficio, si hubiere cesado en la actividad en el ámbito del Estado provincial dentro de los dos (2) años inmediatamente anteriores a la fecha en que se cumplió la edad requerida para la obtención de esta prestación.".

Artículo 12.- Sustitúyese el artículo 41 de la Ley provincial 561, por el siguiente texto:

"Artículo 41.- Las prestaciones se abonarán a los beneficiarios a partir de:

a) las jubilaciones ordinarias, por edad avanzada o por invalidez, desde el día en que se hubieren dejado de percibir remuneraciones del empleador, excepto para la salvedad prevista en la última parte del artículo 40°, en que se pagarán a partir de que se cumplió la edad requerida respectivamente;
b) la pensión, desde el día de la muerte del causante o de la declaración judicial de su fallecimiento presunto, excepto en los supuestos previstos en el artículo 28, en que se pagará a partir de la fecha de la solicitud.

La Caja no hará efectivo el pago del haber previsional hasta tanto no se acredite el cese definitivo del agente en el desempeño de sus funciones. No obstante dará curso a las solicitudes de reconocimientos de servicios en cualquier momento en que sean presentadas sin exigir que se justifique la iniciación del trámite jubilatorio.

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, cuando el afiliado reuniere los requisitos para obtener el beneficio, podrá optar, en el momento de la solicitud para que el cómputo se cierre a esa fecha, aunque no hubiere cesado en la actividad. Esta opción es irrevocable y los servicios prestados entre la fecha de solicitud y la de cese no darán derecho a reajuste o transformación alguna.".

Artículo 13.- Sustitúyese el artículo 43 de la Ley provincial 561, por el siguiente texto:

"Artículo 43.- El haber mensual inicial de las prestaciones se determinará de la siguiente forma:

a) consideraciones generales:
  a.1.) a los efectos del cálculo del haber se tomaran los importes de las remuneraciones mensuales que perciban los agentes que detenten las mismas categorías, cargos o funciones desempeñadas por el beneficiario –a valores de la fecha del cálculo- y se multiplicarán por la cantidad de meses en que el beneficiario hubiere laborado en cada una de dichas categorías, cargos o funciones, en los respectivos escalafones, hasta totalizar los ciento veinte (120) meses. La sumatoria de dichos importes se dividirá por ciento veinte (120);
  a.2) el importe inicial del haber jubilatorio a percibir por el beneficiario se establecerá multiplicando el monto obtenido por el porcentual previsto en el inciso b) del presente artículo según corresponda;
  a.3) el importe resultante, a los efectos de la movilidad prevista en el artículo 46 de la presente ley, será referenciado proporcionalmente a los periodos en los que el agente se haya desempeñado en las categorías, cargos o funciones –del respectivo escalafón- en los últimos ciento veinte (120) meses anteriores al cese definitivo de servicios;
  a.4) para el cálculo se tomarán en consideración los importes de las remuneraciones mensuales, sujetas al pago de aportes y contribuciones –excluidos el Sueldo Anual Complementario, las horas extras, las guardias, la Bonificacion Anual de Energia (BAE) y retroactivos devengados en períodos anteriores al computado-, que por todo concepto hubiere percibido el trabajador de uno o más empleadores comprendidos en el régimen de la

presente ley;

a.5) en los supuestos en que el trabajador compute menos de ciento veinte (120) meses de servicios dentro de las Administraciones del régimen, para la determinación del haber inicial, se tomarán todos los períodos laborados y se completaran los ciento veinte (120) meses con la categoría, cargo o función –del respectivo escalafón- en la que se haya desempeñado mayor cantidad de tiempo, la sumatoria de dichos importes, calculada conforme lo previsto en el párrafo anterior del presente artículo, se dividirá por ciento veinte (120). El importe inicial del haber jubilatorio a percibir por el beneficiario se establecerá multiplicando el monto obtenido por el porcentual correspondiente al beneficio en cuestión. Asimismo, el importe resultante, a los efectos de la movilidad prevista en el artículo 46 de la presente ley, será referenciado proporcionalmente a los periodos en los que el agente se haya desempeñado en las categorías, cargos o funciones –del respectivo escalafón- en los últimos ciento veinte (120) meses anteriores al cese definitivo de servicios;

a.6) en ningún caso las prestaciones previstas en los incisos b.2) y b.3) del presente artículo podrán ser inferiores al ochenta y dos por ciento (82%) del haber que perciba la menor categoría de la Administración Pública provincial;

b) monto del haber:

b.1.) Jubilación Ordinaria:

Será equivalente al ochenta y dos por ciento (82%) del promedio de la remuneración mensual actualizada sujeta al pago de aportes y contribuciones percibidas por el trabajador en los ciento veinte (120) meses laborados en las Administraciones del régimen, anteriores al cese definitivo de servicios;

b.2.) Jubilación por edad avanzada:

Será equivalente al sesenta por ciento (60%) del promedio de la remuneración mensual actualizada sujeta al pago de aportes y contribuciones percibidas por el trabajador en los ciento veinte (120) meses laborados en las Administraciones del régimen, anteriores al cese definitivo de servicios.

El haber se bonificará con el dos por ciento (2%) de la remuneración por cada año de servicio que exceda el mínimo requerido de veinte (20) años, no pudiendo superar el ochenta y dos por ciento (82%).

La jubilación por edad avanzada mínima prevista en el artículo 22, último párrafo de la presente ley, será equivalente al cincuenta por ciento (50%) del promedio de la remuneración mensual actualizada sujeta al pago de aportes y contribuciones percibidas por el trabajador en los ciento veinte (120) meses laborados en las Administraciones del régimen, anteriores al cese definitivo de servicios.

El haber se bonificará con el dos por ciento (2%) de la remuneración por cada año de servicio que exceda el mínimo requerido de quince (15) años, no pudiendo superar el ochenta y dos por ciento (82%);

b.3) Jubilación por Invalidez:

Será equivalente al ochenta y dos por ciento (82%) del promedio de la remuneración mensual actualizada sujeta al pago de aportes y contribuciones percibidas por el trabajador en los ciento veinte (120) meses laborados en las Administraciones del régimen, anteriores al cese definitivo de servicios;

b.4) Pensión:

El equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del haber jubilatorio que goce o le haya correspondido al causante.”.

Artículo 14.- Sustitúyase el artículo 54 de la Ley provincial 561, por el siguiente texto:

"Artículo 54.- Los empleadores están sujetos, sin perjuicio de lo establecido por otras disposiciones legales o reglamentarias, a las siguientes obligaciones:

a) inscribirse como tales en la Caja dentro del plazo de treinta (30) días a contar de la fecha de iniciación de las actividades;
b) afiliar o denunciar dentro del plazo de treinta (30) días a contar del comienzo de las relaciones laborales, a los trabajadores comprendidos dentro del presente régimen;
c) dar cuenta de las bajas que se produzcan en el personal, dentro de los treinta (30) días corridos de producida la misma;
d) practicar en las remuneraciones los descuentos correspondientes al aporte personal, depositándolo en la institución bancaria que se indique a la orden del IPAUSS o quien en el futuro lo remplace;
e) depositar en la misma forma indicada en el inciso anterior, las contribuciones a su cargo;
f) deducir de las remuneraciones y abonar al IPAUSS o quien en el futuro lo remplace, los importes que sean indicados por el IPAUSS o quien en el futuro lo remplace, por conceptos de préstamos otorgados en la forma y plazo que se fije;
g) remitir al IPAUSS o quien en el futuro lo remplace, las planillas de sueldos y aportes correspondientes al personal;
h) suministrar todo informe y exhibir los comprobantes y justificativos que requiera el IPAUSS o quien en el futuro lo remplace, en ejercicio de sus atribuciones y permitir las inspecciones, investigaciones, comprobaciones y compulsas que ordene;
i) otorgar a los afiliados y beneficiarios y sus causa-habientes, cuando estos lo soliciten, dentro de cada quinquenio y en todos los casos a la extinción de la relación laboral, la certificación de los servicios prestados, remuneraciones percibidas y aportes retenidos y toda otra documentación necesaria para el reconocimiento de servicios u otorgamiento de cualquier prestación;
j) en general, dar cumplimiento en tiempo y forma a toda disposición que la presente ley establece, o que sea dispuesta por el IPAUSS o quien en el futuro lo remplace; y
k) ninguna autoridad podrá disponer de los fondos del IPAUSS o quien en el futuro lo remplace, indicados en el artículo 4º de la presente, ingresados o a ingresar, para otra aplicación que la que expresamente asigne la presente ley, bajo pena de ser acusados ante la jurisdicción que corresponda, siendo ello causal de juicio político o exoneración del funcionario responsable.".

Artículo 15.- Sustitúyese el artículo 61 de la Ley provincial 561, por el siguiente texto:

"Artículo 61.- Cuando el personal enunciado en el artículo 1° de la presente ley reuniere los requisitos necesarios para obtener el beneficio jubilatorio en el presente régimen o en alguno de los regímenes comprendidos en el sistema de reciprocidad, podrá ser intimado a que inicie los trámites pertinentes. A partir de ese momento podrá continuar en la prestación de su servicio por un periodo máximo de un año a partir de la intimación respectiva.".

Artículo 16.- Sustitúyese el artículo 62 de la Ley provincial 561, por el siguiente texto:

"Artículo 62.- Las personas que reunieren los requisitos para acceder a la jubilación ordinaria y por edad avanzada, quedarán sujetos a las siguientes normas:

a) para entrar en el goce del beneficio deberá cesar en toda actividad en relación de dependencia, salvo en el supuesto previsto en el artículo 64 de la presente;
b) si reingresara en cualquier actividad en relación de dependencia o función pública ya sea bajo este régimen o cualquier otro, se le suspenderá el goce del beneficio hasta que cese en la actividad, salvo en los casos previstos en el artículo 64 de la presente o que dicha tarea sea realizada en carácter ad honórem; y

c) cualquiera fuera la naturaleza de los servicios computados podrán solicitar entrar en el goce del beneficio continuando o reingresando a la actividad autónoma sin incompatibilidad alguna.”.

Artículo 17.- Sustitúyese el artículo 64 de la Ley provincial 561, por el siguiente texto:

“Artículo 64.- Percibirá la jubilación sin limitación alguna, el jubilado que continuare o reingresare a la actividad en los términos del último párrafo del artículo 35ter, o en cargo docente o de investigación en universidades nacionales o en universidades provinciales o privadas autorizadas a funcionar por el Poder Ejecutivo nacional, o en facultades, escuelas, departamentos, institutos o demás establecimientos de nivel universitario que de ellas dependan. El Poder Ejecutivo podrá extender esa compatibilidad a los cargos docentes o de investigación científica desempeñados en otros establecimientos o institutos oficiales de nivel universitario, científico o de investigación, como así también establecer en los supuestos contemplados en este párrafo y en el anterior, límites de compatibilidad con reducción del haber de los beneficios. La compatibilidad establecida en este artículo es aplicable a los docentes e investigadores que ejerzan una o más tareas.”.

Artículo 18.- Sustitúyese el artículo 67 de la Ley provincial 561, por el siguiente texto:

“Artículo 67.- El jubilado que omitiere la denuncia en el plazo indicado en el artículo anterior será pasible de las siguientes medidas:

a) será suspendido en el goce del beneficio a partir del momento en que el IPAUSS o quien en el futuro lo remplace, tome conocimiento de su reingreso a la actividad; y
b) deberá reintegrar actualizado y con intereses lo percibido indebidamente en concepto de haberes jubilatorios.

El jubilado que incumpliera con lo establecido en los artículos 35 bis, 35 ter y 38 de la presente ley será pasible de las siguientes medidas:

a) será suspendido en el goce del beneficio a partir del momento en que el IPAUSS o quien en el futuro lo remplace, toma conocimiento de su incumplimiento; y
b) deberá reintegrar actualizado y con intereses lo percibido en concepto de haberes jubilatorios por el periodo en que se haya acreditado el incumplimiento.”.

Artículo 19.- Sustitúyase el artículo 70 de la Ley provincial 561, por el siguiente texto:

“Artículo 70.- El beneficiario de prestaciones de este régimen que reingrese a cualquier actividad en relación de dependencia o autónoma, tiene la obligación de efectuar los aportes que en cada caso correspondan, los nuevos aportes no darán derecho a reajustes o mejoras en las prestaciones originarias otorgadas en el marco de la presente ley.

Los aportes y contribuciones que ingresen al sistema como consecuencia de lo establecido en el párrafo precedente son recursos del IPAUSS o quien lo remplace en el futuro, quedando los mismos comprendidos en los incisos c) y d) del artículo 4º; y serán destinados al cumplimiento de los fines previstos en el artículo 3º.”.

Artículo 20.- Transitoriamente para el logro de la prestación, únicamente las edades y los años de servicio establecidos en el artículo 21 de la Ley provincial 561, conforme ha quedado modificado por la presente ley, se incrementarán gradualmente de acuerdo a la siguiente escala:

A partir del año:	Edad		Años de Servicio	
	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre
2017	51	56	26	30
2019	52	57	27	30
2021	53	58	28	30
2023	54	59	29	30
2025	55	60	30	30
2027	56	60	30	30
2029	57	60	30	30
2031	58	60	30	30
2033	59	60	30	30
2035	60	60	30	30

Artículo 21.- Transitoriamente para el logro de la prestación, únicamente las edades y los años de servicio establecidos en el artículo 22 de la Ley provincial 561, conforme ha quedado modificado por la presente ley, se incrementarán gradualmente de acuerdo a la siguiente escala:

A partir del año:	Edad		Años de Servicio	
	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre
2017	61	66	16	16
2019	62	67	17	17
2021	63	68	18	18
2023	64	69	19	19
2025	65	70	20	20
2027	66	70	20	20
2029	67	70	20	20
2031	68	70	20	20
2033	69	70	20	20
2035	70	70	20	20

Artículo 22.- Transitoriamente para el logro de la prestación, únicamente las edades y los años de servicio establecidos en el artículo 35, inciso c) de la Ley provincial 561, conforme ha quedado modificado por la presente ley, se incrementarán gradualmente de acuerdo a la siguiente escala:

A partir del año:	Edad		Años de Servicio	
	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre
2017	49	54	26	30
2019	50	55	27	30
2021	51	55	28	30
2023	52	55	29	30
2025	53	55	30	30
2027	54	55	30	30
2029	55	55	30	30

Artículo 23.- Transitoriamente para el logro de la prestación, únicamente los años de servicio establecidos en el artículo 35 bis de la Ley provincial 561, conforme ha quedado modificado por la presente ley, se incrementarán gradualmente de acuerdo a la siguiente escala:

A partir del año:	Años de Servicio
2017	21
2019	22
2021	23
2023	24
2025	25

Artículo 24.- Transitoriamente para el logro de la prestación, únicamente las edades de las mujeres establecidas en el artículo 35 ter de la Ley provincial 561, conforme ha quedado redactado por la presente ley, se incrementará gradualmente de acuerdo a la siguiente escala:

A partir del año:	Edad
	Mujer
2017	51
2019	52
2021	53
2023	54
2025	55

Artículo 25.- Hasta 31 de diciembre de 2025 tendrán derecho a jubilarse extraordinariamente los afiliados que:

c) hayan cumplido cincuenta (50) años de edad las mujeres y cincuenta y cinco (55) años de edad los hombres;
d) hayan ingresado a la Administración Pública provincial antes del 31 de diciembre de 2015;
e) se hallen desempeñando funciones dentro de las Administraciones indicadas en la presente ley, al momento de cumplir los requisitos necesarios para su logro;
f) acrediten treinta (30) años de servicios computables en uno o más regímenes jubilatorios comprendidos en el sistema de reciprocidad de los cuales un mínimo de veinte (20) años deben ser dentro de las administraciones comprendidas en el presente régimen, computados a partir de enero de 1985;
g) el importe inicial del haber jubilatorio a percibir por el beneficiario se establecerá multiplicando el monto obtenido por el porcentual previsto en la siguiente tabla, siendo de aplicación lo establecido en los incisos a.1), a.3) y a.4) del artículo 43 de la Ley provincial 561, conforme ha quedado modificado por la presente ley:

Edad		Porcentaje
Mujer	Hombre	
50	55	65%
51	56	66%
52	57	67%
53	58	68%
54	59	70%

Artículo 26.- Con el fin de evaluar y controlar el comportamiento del Sistema previsional del presente régimen, el IPAUSS o quien lo remplace en el futuro deberá realizar proyecciones financieras anuales de sus fondos, aportes, contribuciones, prestaciones y gastos, debiendo

remitir la misma antes del 31 de agosto de cada año a la Legislatura provincial para su conocimiento. Asimismo trienalmente, deberá presentar en la misma fecha una proyección financiera de largo plazo.
Artículo 27.- Las disposiciones contenidas en la presente ley no serán de aplicación a jubilaciones ya otorgadas ni a los trámites presentados ante el IPAUSS, siempre que:

c) se haya solicitado el beneficio con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente; y
d) se tenga el derecho para el otorgamiento del beneficio con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente.

Artículo 28.- Los agentes que hayan ingresado a la Administración Pública provincial, al 31 de diciembre del año 1994 inclusive y acrediten treinta (30) años de aportes efectivos e ininterrumpidos al Sistema Previsional de la Provincia de Tierra del Fuego, podrán compensar el exceso de servicios por edad, en la proporción de dos (2) años de servicio excedente por cada uno (1) de edad.
Artículo 29.- Derógase la Ley provincial 721, los artículos 53, 71, 77 y 79 de la Ley provincial 561 y el artículo 12 de la Ley provincial 460.
Artículo 30.- Derógase toda norma que se oponga a la presente ley.
Artículo 31.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

- 7 -

Asunto Nº 6/16

Creación De La Caja De Previsión Social
de la Provincia de Tierra del Fuego

Capítulo I
Creación del Órgano. Objeto

Artículo 1º.- Créase la Caja de Previsión Social de la Provincia de Tierra del Fuego (CPSPTF) como organismo descentralizado de carácter autárquico, en la Jurisdicción del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social quien tendrá a su cargo la administración del Sistema Previsional Provincial, sucediendo jurídicamente al Instituto Provincial Autárquico Unificado de Seguridad Social (IPAUSS) en la medida de sus competencias.
Tendrá su domicilio social en la ciudad de Ushuaia, donde establecerá su sede central.
Artículo 2º.- Tendrá por objeto el gobierno y la administración del sistema de jubilaciones, retiros y pensiones creado o a crearse en el ámbito de la Provincia –incluido el contemplado por la derogada Ley territorial 244, destinado a agentes dependientes de los tres poderes del Estado provincial, sus Municipalidades y Comunas, Entes Autárquicos y Descentralizados y Sociedades con Participación Mayoritaria Estatal, en cualquiera de sus manifestaciones, salvo las Fuerzas de Seguridad dependientes de la Provincia.

Capítulo II
De las Autoridades y sus Atribuciones

Artículo 3º.- La conducción y administración de la Caja estará a cargo de un (1) presidente y un (1) Directorio, quienes serán asistidos por un comité asesor.
Artículo 4º.- El presidente será designado y removido por el Poder Ejecutivo.
Artículo 5º.- Son funciones del presidente:

a) convocar y presidir las reuniones del directorio participando con voz y voto;
b) representar a la institución en todos los actos que se relacionen con sus actividades o fines, estar en juicio como actor, demandado o terceristas, o en cualquier otro carácter que correspondiere, pudiendo a tal efecto, otorgar los poderes que sean menester y quedando facultado para transigir;

c) conceder o denegar jubilaciones, pensiones y demás beneficios que en materia previsional acuerda la Ley provincial 561;
d) resolver sobre reconocimiento de servicios y demás cuestiones que se pretendan o susciten con motivo de la aplicación de la presente ley;
e) interpretar la aplicación de las normas de la presente ley, de todas aquellas vinculadas al ámbito de su competencia y resolver los casos no previstos;
f) celebrar convenios colectivos, fijar remuneraciones, nombrar, categorizar y promover o remover y otorgar licencias extraordinarias, de acuerdo con lo que fije la reglamentación del personal de la Caja, de planta permanente y transitoria;
g) celebrar convenios ad referéndum del Poder Ejecutivo con otros organismos similares provinciales o nacionales comprendidos en el régimen de reciprocidad nacional tendientes al logro de una mejor atención a los afiliados del sistema;
h) establecer regímenes, de auditoría técnica administrativa y contable, mediante los cuales controlará y evaluará la eficacia de los servicios y operaciones de la Caja en cada uno de sus sectores y en su conjunto;
i) resolver a los fines del otorgamiento de los beneficios mediante información testimonial previa, toda cuestión de aclaración de nombres comprobaciones de edad o de servicios y otros requisitos referentes a la afiliación o la calidad de derecho habiente o beneficiario, de acuerdo con lo que disponga la reglamentación;
j) intervenir en los recursos interpuestos contra los actos administrativos dictados por cada una de las áreas. Contra las resoluciones adoptadas por el presidente podrán interponerse recursos, con los alcances y procedimientos que se prescriben en la Ley provincial 141 de Procedimiento Administrativo;
k) vigilar la correcta recaudación de los aportes y contribuciones para lo cual podrá disponer todos los actos y controles que resulten necesarios para su mejor cumplimiento con mantenimientos de un padrón de todos los afiliados al sistema;
l) ejercer el poder disciplinario sobre el personal de la Caja con facultades de aplicar todas aquellas sanciones que no implique su remoción, de conformidad con lo que establezca la reglamentación;
m) ejercer las facultades que esta ley otorga a la Caja;
n) confeccionar la memoria anual;
o) publicar anualmente en el Boletín Oficial el balance de la Caja; y
p) disponer el pago de los beneficios y en general realizar todo acto de administración requerido para el cumplimiento de las finalidades de esta ley.

Artículo 6º.- El Directorio estará integrado por el presidente y tres (3) vocales, uno de ellos designado por el Poder Ejecutivo quién desempeñará la vicepresidencia de la Caja y será quién sustituya al presidente en caso de que por cualquier circunstancia le resulte imposible ejercer sus funciones, otro representará a los afiliados pasivos debiendo ser elegido por el voto directo de los mismos y otro representará a los afiliados activos debiendo ser elegido por el voto directo de los mismos.

Los afiliados activos y pasivos de la Caja elegirán sendos suplentes, quienes como tales no se encontrarán alcanzados por la limitación en la acumulación de cargos y empleos, establecida por el artículo 9º de la Constitución Provincial.

Artículo 7º.- La elección de los vocales representantes de los afiliados activos y pasivos se regirá por las siguientes pautas:

a) el Directorio convocará a elecciones con una antelación no menor a ciento veinte (120) días corridos del vencimiento del mandato de los mismos;
b) se confeccionarán dos (2) padrones electorales, uno de activos y otro de pasivos, por distrito único;
c) los afiliados que se postulen deberán presentarse por sectores y en boletas separadas, integrando titular y suplente;
d) el acto eleccionario se realizará en forma simultánea y separada por sector. La emisión del voto será obligatoria para los electores activos y pasivos;

e) para ser candidato en representación del sector activo se requerirá encontrarse en actividad como agente y contribuyente del sistema previsional, con un mínimo de tres (3) años de antigüedad como tal;
f) serán proclamados Vocales en representación de los afiliados activos y pasivos, los integrantes de las listas participantes que obtenga mayor cantidad de votos;
g) quienes fueren electos se integrarán en forma automática al Directorio al tiempo de la finalización del mandato de los representantes en ejercicio; y
h) la Junta Electoral será regulada por la Ley provincial 201, norma que actuará además supletoriamente en todo lo que no se contraponga con la presente.

Artículo 8º.- Los miembros electos del Directorio durarán tres (3) años en sus funciones, pudiendo ser reelectos. Solo podrán ser separados de sus cargos por mal desempeño o por haber sido procesados por la presunta comisión de delitos contra la Administración Pública o ausencias reiteradas o injustificadas a las reuniones de Directorio. El presidente y el vicepresidente designados por el Poder Ejecutivo, podrán ser removido en el momento en que lo decida la autoridad que los designo. No podrán ocupar ninguno de ellos otro cargo remunerado, salvo la docencia.

Artículo 9º.- No podrán ser miembros del Directorio los quebrados, los concursados civilmente y los condenados en causa criminal por delito doloso que no se encontraren legalmente rehabilitados.

Artículo 10.- La retribución del presidente será equivalente a la remuneración asignada para el cargo de Secretario de Estado y la de los vocales será equivalente al cargo de Subsecretario de Estado del Gobierno provincial.

Los representantes de los afiliados pasivos podrán optar entre percibir la remuneración prevista precedentemente o continuar percibiendo su haber jubilatorio.

Artículo 11.- El Directorio se reunirá en forma ordinaria, como mínimo, dos (2) veces por mes y en sesiones especiales cada vez que fuere convocado por el presidente o por no menos de tres (3) vocales con tres (3) días de anticipación, bajo pena de nulidad, lapso que podrá ser reducido en caso de reputarse necesario, indicando la causa que lo justifique. El quórum se formará con la presencia de la mitad más uno de los miembros del Directorio. Las resoluciones serán válidas por mayoría absoluta de los votos de los presentes, teniendo el presidente, en caso de empate, doble voto.

Artículo 12.- Los integrantes del Directorio serán responsables personal y solidariamente de las resoluciones que adopten, salvo constancia expresa de su disidencia en actas, la que será debidamente fundada.

Artículo 13.- Son atribuciones y obligaciones del Directorio:

a) proyectar y elevar anualmente al Poder Ejecutivo el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Caja, pudiendo destinar a gastos de funcionamiento hasta un nueve por ciento (9%) del total de los ingresos que, por aportes y contribuciones, se calcule percibir en el Ejercicio fiscal pertinente.
   La elevación prevista en el párrafo precedente deberá realizarse con una antelación mínima de quince (15) días a la fecha establecida constitucionalmente para la presentación, por parte del Poder Ejecutivo, del Proyecto de Ley de Presupuesto General de Gastos de la Administración Pública provincial y de las reparticiones autárquicas;
b) considerar y aprobar la memoria, balance general, cuenta de resultado, estado demostrativo de gastos y recursos, nómina de afiliados y beneficiarios de cada Ejercicio, el que comenzará el 1° de enero y concluirá el 31 de diciembre de cada año, el que será elevado al Poder Ejecutivo;
c) establecer planes de regularización y de pago de los montos adeudados a la Caja;
d) aprobar el temario para tratamiento en las sesiones ordinarias o extraordinarias;
e) dictar el o los reglamentos internos correspondientes estableciendo el trámite a observarse en los reconocimientos de servicios, otorgamientos de las prestaciones y el régimen orgánico funcional de la Caja;
f) disponer la realización y publicación periódica de valuaciones actuariales y censos

de afiliados de la Caja para control de seguridad del plan de prestaciones, como así también de estudios e investigaciones relacionadas con la materia controlando y comprobando la actualización permanente del padrón de afiliados;

g) controlar y comprobar periódicamente los libros y registros contables, los estados de caja, las cuentas bancarias y demás elementos y antecedentes que reflejen significativamente las actividades de la Caja;
h) disponer la realización de inversiones que sirvan de apoyo a la economía del sistema, en óptimas condiciones de liquidez, seguridad y rentabilidad, pudiendo establecer regímenes de préstamos con garantías personales o reales;
i) preparar y aprobar la política de inversiones de los recursos originados en las leyes aplicables por la Caja;
j) preparar y aprobar la estructura funcional de la Caja y la de sus distintas áreas y crear las comisiones y subcomisiones del Directorio que se consideren necesarias;
k) aprobar los planes y programas y asignar a cada una de las áreas los recursos necesarios para el cumplimiento de sus gestiones;
l) realizar cada cinco (5) años como máximo un estudio actuarial el que determinará la situación económico-financiera de la Caja y las modificaciones que deban introducirse a la legislación para su sostenimiento en el tiempo. El estudio deberá ser realizado a través de empresas especializadas en trabajos de esa naturaleza, de reconocida solvencia a nivel nacional y contratadas previa licitación pública;
m) realizar proyecciones financieras anuales de sus fondos, aportes, contribuciones, prestaciones y gastos, debiendo remitir la misma antes del 31 de agosto de cada año a la Legislatura provincial para su conocimiento. Asimismo trienalmente, deberá presentar en la misma fecha una proyección financiera de largo plazo;
n) aprobar o disponer la compra, venta, permuta, locación, leasing o el comodato de los muebles e inmuebles que se hubieren adquirido por cualquier título, quedando autorizado a suscribir los instrumentos pertinentes. La facultad de disposición de inmuebles será resuelta por el voto de los dos tercios (2/3) de los integrantes del Directorio y requerirá de conformidad legislativa. Las ventas de los inmuebles de propiedad de la Caja se realizarán, en bloque o subdivididos, al contado o financiado en los períodos que el Directorio determine, a través de licitación pública o subasta pública;
o) realizar las colocaciones de dinero y la toma de préstamos en dinero, al interés corriente de la institución bancaria oficial provincial, o en su defecto, de otras entidades bancarias oficiales o privadas, en tanto las condiciones por estas ofrecidas resulten financieramente más satisfactorias para la Caja;
p) elaborar y elevar al Poder Legislativo, por intermedio del Poder Ejecutivo, los proyectos de reforma de esta ley cuando estimare que la circunstancia así lo aconsejen;
q) proponer al Poder Ejecutivo los proyectos de reglamentación de la presente y de todas las normas legales relacionadas a las áreas de competencia de la Caja;
r) reunirse con la periodicidad que se determine en la reglamentación y cada vez que lo convoque el presidente;
s) en general realizar todos aquellos actos que no se opongan al régimen de la presente ley y que considere oportuno o conveniente para el mejor éxito o desarrollo de las actividades de la Caja;
t) elegir anualmente entre los vocales representantes de los activos y pasivos un vicepresidente 2º y un vicepresidente 3º para el eventual caso de acefalia los que tendrán las mismas atribuciones del titular suplantado;
u) aunque no mediare recurso contra los actos administrativos adoptados por las distintas áreas, el Directorio podrá disponer, por sí, la revisión de ellos;
v) delegar en los representantes de las respectivas comisiones, funciones o atribuciones adjudicadas al Directorio; y
w) ejercer otras facultades, además de las establecidas en el presente artículo,

tendientes al mejoramiento del servicio.

Capítulo III
Del Comité Asesor

Artículo 14.- Serán integrantes del comité asesor un (1) representante de cada Municipio y los funcionarios de las distintas áreas de la Caja con jerarquía inmediata al director, de conformidad con lo que determine la reglamentación.
Artículo 15.- El comité asesor deberá dictaminar, con carácter no vinculante, sobre todos aquellos asuntos que le sean sometidos a su consideración por el presidente o el Directorio.

Capítulo IV
De La Fiscalización

Artículo 16.- El Tribunal de Cuentas de la Provincia ejercerá el control de la Caja mediante los procedimientos reglados por las leyes que regulan su actividad, en todos los aspectos relacionados con el desenvolvimiento legal, económico, financiero y patrimonial a cuyo efecto deberá:

a) fiscalizar el desarrollo del presupuesto integral sobre la base de la correspondiente contabilidad financiera, la que será llevada conforme a las normas establecidas por la legislación vigente, en cuanto no fueren incompatibles con la naturaleza de los recursos que administra;
b) verificar el movimiento y gestión del patrimonio; y
c) observar todo acto u omisión que contravenga las disposiciones legales y reglamentarias;

En caso de imposibilidad del organismo para ejercer el control indicado por causa que lo justifique, se podrá solicitar la auditoría a un ente estatal o particular.

Capítulo V
De los Recursos

Artículo 17.- La Caja atenderá el cumplimiento de sus obligaciones con los siguientes recursos:

a) los establecidos por el artículo 4° de la Ley provincial 561;
b) las sumas recaudadas por multas, intereses y recargos;
c) los fondos existentes en la cuenta previsional del IPAUSS, a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley;
d) los recursos provenientes del Fondo Especial para la Solvencia del Sistema de Seguridad Social de Tierra del Fuego;
e) los fondos originados en las prestaciones de servicios realizados por establecimientos administrados por la Caja;
f) las sumas adeudadas por aportes y contribuciones previsionales al IPAUSS por los tres poderes del Estado provincial, sus Municipalidades y Comunas, entes Autárquicos y Descentralizados y Sociedades con Participación Mayoritaria Estatal, en cualquiera de sus manifestaciones;
g) los intereses y utilidades provenientes de inversiones que se realicen;
h) las utilidades que se originen por la evolución natural del capital;
i) los cánones y alquileres que se perciban por la concesión o locación de inmuebles pertenecientes a la Caja;
j) las donaciones y legados que se le hagan; y
k) los fondos provenientes del cumplimiento de lo establecido por la Ley provincial 478.

Artículo 18.- Los fondos asignados por la Constitución y las leyes a destinos específicos serán administrados a través de cuentas especiales con el objeto único de atender a los fines que la

Constitución determina, en inversiones sin riesgo.
Está expresamente prohibida la transferencia entre cuentas de afectación constitucional específica.

Capítulo VI
Disposiciones Atinentes a Honorarios Profesionales.

Artículo 19.- Todo acto notarial, incluyendo escrituras traslativas de dominio, en el que fuera parte la Caja, será realizado ante el Escribano Mayor de Gobierno, salvo impedimento legal o fuerza mayor, y se encontrará exento del pago de tasas, impuestos y contribuciones provinciales, como así también del pago de honorarios profesionales.

Capítulo VII
Del Fondo Especial para la Solvencia del Sistema de Seguridad Social

Artículo 20.- Mantiénese vigente y exigible el Fondo Especial para la Solvencia del Sistema de Seguridad Social de Tierra del Fuego, el que tendrá como propósito garantizar el flujo financiero de aportes y contribuciones al Régimen Previsional Provincial con el fin de evitar su desfinanciamiento.
Artículo 21.- El Ministerio de Economía actuará como agente de retención preventiva de los fondos que derivan de las obligaciones legales correspondientes a la Seguridad Social de los aportantes, incluidos la Administración Central, Municipios, Comuna, Organismos Descentralizados y Autárquicos, Poder Legislativo, Poder Judicial, Tribunal de Cuentas y Fiscalía de Estado, cuando estos se financien con la coparticipación de recursos provinciales y nacionales, o bien de transferencias internas, de programas y fondos específicos, y de fondos y recursos nacionales de participación federal cuya asignación y distribución opere desde el Tesoro provincial.
Artículo 22.- El Ministerio de Economía practicará preventivamente una retención del cincuenta por ciento (50%) de la asignación diaria de los fondos coparticipables hasta completar la suma equivalente al treinta por ciento (30%) del monto total de la nómina de personal de cada organismo, con el destino específico de constituir un Fondo de Garantía de pago de los aportes y contribuciones al Sistema de Seguridad Social.
Al momento de ser integrados en su totalidad, dichos fondos serán transferidos automáticamente para ser aplicados al pago anticipado de los aportes y contribuciones a la Seguridad Social correspondientes al mes anterior a su constitución, por cuenta y orden de cada organismo, cuya transferencia al sistema se tendrá en carácter de pago provisorio hasta tanto se realicen las liquidaciones y compensaciones mensuales definitivas. Completadas éstas, en caso de que exista saldo a favor de las administraciones, las sumas resultantes deberán ser liberadas o restituidas por el Ministerio de Economía, dentro de los dos (2) días hábiles de encontrarse fehacientemente acreditado el pago de los aportes y contribuciones por parte de cada organismo.
Los fondos a los que refiere el presente Capítulo son inembargables, y el cumplimiento de lo prescripto en él es responsabilidad del Tesorero General de la Gobernación de acuerdo con lo establecido en el artículo 168 de la Constitución Provincial.

Capítulo VIII
De la Insuficiencia de Fondos de la Caja

Artículo 23.- En caso de insuficiencia de los fondos de la Caja, los sujetos enunciados en el artículo 2° de la presente ley solventarán el déficit producido en la proporción que lo hubieran originado, lo que surgirá de multiplicar el monto de sus respectivos déficit por el déficit del sistema y de dividir por la suma de los déficit que concurren a la formación de este último al resultado así obtenido. La ley anual de presupuesto de la Provincia deberá contener en sus disposiciones los valores asignados como fondos disponibles para cubrir el déficit que pudiera

generar la Caja de Previsión Social de la Provincia de Tierra del Fuego.
A los efectos de este artículo se considerará como:

a) déficit de los sujetos enunciados en el artículo 2° de la presente ley a las diferencias financieras negativas que surjan de los ingresos y egresos que produzcan sus respectivos afiliados activos y pasivos en concepto de aportes y contribuciones y pagos de prestaciones; y
b) déficit del sistema: a las diferencias financieras negativas que surjan de los ingresos y egresos que produzcan la totalidad de los afiliados activos y pasivos, comprendidos en el régimen de previsión provincial en concepto de aportes y contribuciones y pago de prestaciones.

Artículo 24.- El Estado provincial suministrará mensualmente a la Caja las sumas necesarias para el pago de la totalidad de las prestaciones. A tal fin dicho organismo efectuará con anterioridad al día cinco (5) de cada mes la correspondiente solicitud debiendo realizarse la previsión de fondos en los primeros veinte (20) días del mismo mes anterior al pago. Esta obligación será cumplimentada por el Estado aun cuando implique el pago total o parcial de los déficit que deben solventar los sujetos enunciados en el artículo 2° de la presente ley de acuerdo con lo establecido en el artículo anterior, pero en tal caso formulará posteriormente a estas los respectivos cargos que podrán ser directamente retenidos de las sumas que por cualquier concepto les correspondan.
Artículo 25.- La Contaduría General de la Provincia retendrá de las sumas que por cualquier concepto corresponda a los sujetos enunciados en el artículo 2º de la presente ley, los importes adeudados por aportes, contribuciones e intereses. A tal efecto la comunicación oficial de la Caja servirá de orden suficiente para la retención debiendo depositarse las sumas en la cuenta de la Caja.

Capitulo IX
De la Intervención de la Caja

Artículo 26.- La Caja de Previsión Social de la Provincia de Tierra del Fuego solo podrá ser intervenida por ley aprobada con mayoría agravada cuando sus autoridades se aparten de las obligaciones que les impone la presente.

Capítulo X
Disposiciones Transitorias

Artículo 27.- La presente ley entrará en vigencia a partir del 11 de diciembre de 2016, a excepción de los Capítulos VII y VIII; y los artículos 5º y 13 que entrarán en vigencia a partir de la promulgación de la presente medida y modifican de pleno derecho toda norma que se oponga a las disposiciones de los mismos.
El mandato de los directores del IPAUSS caducará el 10 de diciembre de 2016.
Artículo 28.- El Poder Ejecutivo Provincial convocará a elecciones, para la renovación de los actuales Directores representativos de los sectores activos y pasivos, de acuerdo a lo establecido en la presente ley.
Artículo 29.- El Poder Ejecutivo determinara la división y adjudicación de la totalidad de los bienes de propiedad del IPAUSS entre la Caja que se crea por la presente ley y la entidad que cumpla con la, prestación asistencial prevista por las Leyes territoriales 10 y 442, propuesta que será elevada al Poder legislativo para su aprobación.-
El personal perteneciente al IPAUSS podrá ser reubicado en la Caja de Previsión Social de la Provincia de Tierra del Fuego (CPSPTF) o en la Obra Social de la Provincia de Tierra del Fuego (OSPTF), respetando su categoría profesional, antigüedad y remuneración.

Capítulo XI
Modificaciones Complementarias

Artículo 30.- Sustitúyese el artículo 2° de la Ley provincial 561, por el siguiente texto:

"Artículo 2º.- La Caja de Previsión Social de la Provincia de Tierra del Fuego (CPSPTF) será la autoridad de aplicación y administración del régimen.".

Artículo 31.- Sustitúyese el artículo 3° de la Ley provincial 561, por el siguiente texto:

"Artículo 3º.- De conformidad con las disposiciones de esta ley, la Caja orientará y cumplirá los fines de previsión social entre las personas comprendidas en el presente régimen, y con sus recursos acordará los siguientes beneficios:

a) jubilaciones;
b) pensiones; también podrá otorgar, con los recursos que al efecto se destinen, y dentro de las posibilidades financieras;
c) préstamos personales;
d) préstamos prendarios; y
e) préstamos hipotecarios.

Asimismo se atenderán, con los recursos que al efecto se destinen, los gastos de administración, la adquisición de los bienes necesarios para su funcionamiento y con sus saldos remanentes las inversiones que legalmente puedan realizarse.".

Artículo 32.- Sustitúyese el artículo 4° de la Ley provincial 561, por el siguiente texto:

"Artículo 4º.- La Caja atenderá el cumplimiento de las obligaciones previstas en la presente ley de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 51 de la Constitución Provincial con los siguientes recursos:

a) con el capital acumulado desde la implementación del régimen establecido por la Ley territorial 244;
b) con las sumas que el Gobierno provincial destine anualmente;
c) con las contribuciones a cargo de los empleadores;
d) con los aportes a cargo de los afiliados activos;
e) con los aportes a cargo de los afiliados pasivos;
f) con las sumas recaudadas por intereses, multas y recargos;
g) con los intereses de las inversiones;
h) con las utilidades que se originen por la evolución natural del capital;
i) con las donaciones y legados que se le hagan;
j) con las sumas provenientes de cargos y reconocimientos de servicios por los cuales no se hubieren efectuado aportes;
k) con los importes que ingresen de otras cajas o instituciones de conformidad con convenios de reciprocidad suscriptos o a suscribirse;
l) con los fondos provenientes del Gobierno de la Provincia conforme lo establecido por el artículo 5º de la Ley provincial 478; y
m) con cualquier otro importe que ingrese al patrimonio de la Caja.".

Artículo 33.- Sustitúyese el artículo 5° de la Ley provincial 561, por el siguiente texto:

"Artículo 5º.- Los fondos a que se refiere el artículo precedente, podrán ser invertidos en:

a) Bonos Hipotecarios o Títulos emitidos por el Banco Provincia de Tierra del Fuego;
b) Bonos Hipotecarios o Títulos emitidos o garantizados por la Nación o la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur;
c) inversiones financieras en el Banco de la Provincia de Tierra del Fuego;
d) adquisición o construcción de edificios en cualquier lugar de la Provincia, los que sólo podrán enajenarse por Resolución del Directorio aprobada por la mayoría de sus miembros, con posterior acuerdo de la Legislatura provincial;
e) compra de terrenos o campos en cualquier lugar de la Provincia, los que solo podrán enajenarse por Resolución del Directorio, aprobada por la mayoría de sus miembros, con posterior acuerdo de la Legislatura provincial;

f) adquisición o construcción de propiedades en la Provincia destinadas a oficinas del organismo;
g) préstamos personales con o sin garantía prendaria o hipotecaria destinados a sus afiliados o beneficiarios;
h) préstamos hipotecarios destinados a sus afiliados y beneficiarios o grupo de ellos actuando en consorcio, con destino a construcción, ampliación, refacción o adquisición de la vivienda propia, individual o colectiva;
i) Títulos Valores Privados correspondientes a sociedades líderes que coticen en mercados bursátiles y extrabursátiles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
j) Títulos Valores Privados que puedan formalizarse en el futuro en la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur;
k) Contratos de Futuro y opciones en mercados autorizados por la Comisión Nacional de Valores;
l) Obligaciones Negociables que coticen en mercados bursátiles y extrabursátiles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
m) Obligaciones Negociables que puedan formalizarse en el futuro en la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, emitidas preferentemente por sociedades radicadas en la Provincia o ligadas a la misma a través de sus ciclos productivo o comercial;
n) financiar, a través del Banco de la Provincia de Tierra del Fuego, la ejecución de obras de infraestructura y/o equipamiento, que favorezcan el desarrollo global y utilicen mayoritariamente mano de obra local. Estos financiamientos solamente se podrán conceder si se cuenta con las garantías efectivas que aseguren el recupero de los mismos y que su rendimiento para la Caja iguale, como mínimo, los de las inversiones en el sistema financiero; y
o) Fondos Comunes de Inversión.

Previo a la realización de cada una de las operaciones indicadas en el presente artículo, se deberá efectuar evaluación pormenorizada con el objeto de minimizar los riesgos emergentes y asegurar el repago de las operaciones involucradas en tiempo y forma, de manera tal que no afecten el normal desenvolvimiento financiero de la institución.”.

Artículo 34.- Sustitúyese el artículo 25 de la Ley provincial 561, por el siguiente texto:

“Artículo 25.- En caso de que el afiliado solicitare acogerse a la jubilación por invalidez, deberá ser sometido a examen de la Junta Médica Previsional, exclusiva de la Caja, la cual estará compuesta por el médico de la misma, que será el Presidente de la Junta, y dos (2) miembros del Cuerpo Médico de la Secretaría de Salud Pública, pudiendo integrarla el médico tratante del afiliado cuando éste lo requiera. En caso de empate, el Presidente tendrá doble voto. A los efectos de determinar el porcentaje de incapacidad, se deberán aplicar las Normas para la Evaluación, Calificación y Cuantificación del Grado de Invalidez de los Trabajadores, estatuidas por el Decreto del Poder Ejecutivo nacional Nº 1290/94, en forma supletoria las Tablas de Evaluación de Incapacidades Laborales (Decreto Nº 659/96, reglamentario de la Ley nacional 24.557), y las normas que las sustituyan en el futuro. El dictamen de la Junta Médica Previsional deberá expedirse sobre la incapacidad alegada, su grado, sus causas probables y si tienen relación directa con el trabajo, si es permanente o temporaria, general y específica, si es irreductible o capaz de reducirse o desaparecer con un tratamiento adecuado y en general, todo detalle que facilite su encuadramiento en la presente ley, en especial en los artículos 23 y 27. La Caja, a través de las áreas competentes, efectuará una lista de peritos médicos para consulta, opinión, o intervención en la Junta Médica, con voz pero sin voto, en los casos de patologías complejas, o en otros supuestos, a pedido de la Junta Médica Previsional.

La Junta Médica Previsional tendrá facultad para solicitar a las dependencias médicas del Servicio Oficial de la Provincia, los exámenes generales y especiales a practicarse a los afiliados en las condiciones de obtener el beneficio de jubilación por invalidez.”.

Artículo 35.- Sustitúyese el artículo 26 de la Ley provincial 561, por el siguiente texto:

"Artículo 26.- La jubilación por invalidez se otorgará con carácter provisional, quedando la Caja facultada para concederla por tiempo determinado y sujeta a los reconocimientos médicos periódicos que establezca. La negativa del beneficiario a someterse a las revisaciones que se dispongan, dará lugar a la suspensión del beneficio. El beneficio de jubilación por invalidez será definitivo cuando el titular tuviera cuarenta (40) años o más de edad y hubiera percibido la prestación por lo menos durante diez (10) años. Desaparecida la incapacidad, causal de la prestación, el afiliado deberá ser reintegrado al último cargo que desempeñó u otro con jerarquía equivalente o superior quedando extinguido el beneficio a partir de la fecha de su reincorporación. Los organismos del Estado sujetos a esta ley, están obligados a reintegrar a sus cargos a los comprendidos en este artículo y ellos obligados a reincorporarse dentro de los treinta (30) días corridos subsiguientes al de la fecha de modificación, bajo la pena de perder el derecho. El período de percepción del beneficio se considerará como servicios efectivamente prestados con aportes bajo el régimen de esta ley.".

Artículo 36.- Sustitúyese el artículo 33 de la Ley provincial 561, por el siguiente texto:

"Artículo 33.- El derecho a pensión será obligatorio por parte de la Caja de Previsión Social de la Provincia de Tierra del Fuego (CPSPTF) cuando los beneficiarios así lo soliciten y el jubilado o afiliado en actividad se encontrare amparado por lo establecido en la presente ley, al momento de producirse la muerte del mismo. Cuando se extinguiera el derecho a pensión de un causahabiente o no existieran copartícipes, gozarán de este beneficio los parientes del causante en las condiciones del artículo 28 que sigan en orden de prelación, siempre que se encontraren incapacitados para el trabajo a la fecha de extinción para el anterior titular y no gozaren de algún beneficio previsional o graciable, salvo que optaren por el de pensión de esta ley.".

Artículo 37.- Sustitúyese el artículo 34 de la Ley provincial 561, por el siguiente texto:

"Artículo 34.- La Caja será otorgante de los beneficios de jubilación por invalidez y pensión cuando los últimos servicios prestados por el causante pertenezcan a este régimen y acredite diez (10) años continuos o discontinuos en los mismos. Esta disposición no será aplicable cuando el afiliado no tenga cobertura en otro sistema previsional o, aun teniendo la misma, el tiempo sea inferior al prestado en las Administraciones del presente régimen.".

Artículo 38.- Sustitúyese el artículo 37 de la Ley provincial 561, por el siguiente texto:

"Artículo 37.- En los casos de supresión o sustitución de cargos, la autoridad del organismo competente con la participación del ente gremial respectivo, fijará la equivalencia que dichos cargos tendrán en el escalafón actualizado o modificado. Asimismo procederá a comunicar a la Caja esta circunstancia, como también las modificaciones de sueldos y remuneraciones del escalafón dentro de los quince (15) días corridos de producidas.".

Artículo 39.- Sustitúyese el artículo 46 de la Ley provincial 561, por el siguiente texto:

"Artículo 46.- El haber de los beneficios será móvil. La movilidad se efectuará en forma automática cada vez que los haberes del personal en actividad dentro de las Administraciones indicadas sufran variación.

Cuando el cargo o cargos, categoría o categorías que determinaron el haber inicial fueran reestructurados, modificados o suprimidos, la Caja determinará la equiparación más favorable para el beneficiario.

Será obligatorio para los tres poderes del Estado de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, sus reparticiones u organismos centralizados, descentralizados, entes autárquicos, empresas del Estado provincial, Tribunal de Cuentas, Fiscalía de Estado, como así también para las Municipalidades y Comunas que, en toda oportunidad en que se realicen estudios y/o paritarias tendientes a la modificación, total o parcial, a la reestructuración de los ordenamientos escalafonarios o remunerativos del personal de su dependencia, sea designada una representación

de la Caja con la finalidad de que se considere la equiparación de los beneficiarios que correspondan.”.

Artículo 40.- Sustitúyese el artículo 52 de la Ley provincial 561, por el siguiente texto:

“Artículo 52.- La jubilación o pensión será suspendida a quienes se ausentaren del país sin previa comunicación a la Caja en la forma que determine la reglamentación.”.

Artículo 41.- Sustitúyese el artículo 55 de la Ley provincial 561, por el siguiente texto:

“Artículo 55.- En caso de que el empleador no retuviera las sumas a que está obligado, será responsable del pago de los importes que hubiera omitido retener, sin perjuicio del derecho de la Caja a formular cargo al afiliado por dichas sumas.”.

Artículo 42.- Sustitúyese el artículo 56 de la Ley provincial 561, por el siguiente texto:

“Artículo 56.- Los afiliados están sujetos, sin perjuicio de lo establecido por otras disposiciones legales o reglamentarias, a las siguientes obligaciones:

a) suministrar los informes requeridos por la Caja, referente a su situación frente a las leyes de previsión;
b) suministrar los informes requeridos por la autoridad de aplicación y la documentación necesaria de servicios para el agregado a su legajo personal, tendiente a la implementación de la jubilación automática; y
c) comunicar a la Caja toda situación prevista por las disposiciones legales, que afecten o puedan afectar el derecho a la percepción parcial o total del beneficio que gozan.”.

Artículo 43.- Sustitúyese el artículo 59 de la Ley provincial 561, por el siguiente texto:

“Artículo 59.- Para la averiguación de los extremos legales, además de los justificativos oficiales, la Caja queda facultada para solicitar todos los informes que juzgue conveniente.”.

Artículo 44.- Sustitúyese el artículo 60 de la Ley provincial 561, por el siguiente texto:

“Artículo 60.- La Caja de Previsión Social de la Provincia de Tierra del Fuego no podrá por sí suspender el pago de las jubilaciones, pensiones u otros beneficios. Solo la justicia competente podrá decretar la suspensión del pago a pedido de la Caja o del beneficiario, como medida previa o durante el juicio, salvo en los supuestos previstos en los artículos 26, 27, 51, 52 y 67.”.

Artículo 45.- Sustitúyese el artículo 66 de la Ley provincial 561, por el siguiente texto:

“Artículo 66.- En los casos que de conformidad con la presente ley existiera incompatibilidad total o limitada entre el goce de la prestación y el desempeño de la actividad, el jubilado que se reintegrare al servicio deberá denunciar esas circunstancias a la Caja de Previsión Social de la Provincia de Tierra del Fuego dentro del plazo de treinta (30) días corridos a partir de la fecha en que volvió a la actividad. Igual obligación incumbe a la repartición que conociere dicha circunstancia.”.

Artículo 46.- Sustitúyese el artículo 72 de la Ley provincial 561, por el siguiente texto:

“Artículo 72.- Los aportes y contribuciones sobre las remuneraciones de los dependientes son obligatorias y se harán efectivas mediante depósitos bancarios en Cuenta Especial. Los depósitos se efectuarán a la orden de la Caja dentro de los quince (15) días hábiles inmediatamente siguientes a cada mes vencido.”.

Artículo 47.- Sustitúyese el artículo 75 de la Ley provincial 561, por el siguiente texto:

“Artículo 75.- Todos los bienes de la Caja estarán exentos de todo impuesto provincial o municipal existentes o que se crearen.”.

Artículo 48.- Sustitúyese el artículo 76 de la Ley provincial 561, por el siguiente texto:

“Artículo 76.- Son inembargables los bienes, recursos y rentas establecidos por esta Ley y que en conjunto constituyen el Fondo Previsional de la Caja.”.

Artículo 49.- Sustitúyese el artículo 78 de la Ley provincial 561, por el siguiente texto:

“Artículo 78.- Las Actas de Inspección labradas por los funcionarios o inspectores de la Caja hacen presumir, a todos los efectos legales, la veracidad de su contenido. El cobro judicial de los aportes, contribuciones, recargos e intereses se hará por la vía de apremio, constituyendo de suficiente título ejecutivo el certificado de deuda extendido

y suscripto por el Presidente y el Contador General de la Caja.”.
Artículo 50.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los noventa (90) días de su promulgación.
Artículo 51.- Derógase la Ley provincial 641 y toda norma que se oponga a la presente ley.
Artículo 52.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

- 8 -

Asunto Nº 5/16

Creación De La Obra Social De La Provincia De Tierra Del Fuego (OSPTF)

Capítulo I
Creación Del Órgano - Objeto

Artículo 1º.- Créase la Obra Social de la Provincia de Tierra del Fuego (OSPTF) como organismo descentralizado de carácter autárquico, de acuerdo al régimen de la presente y a las Leyes nacionales 23.660 y 23.661, quien tendrá a su cargo las prestaciones médico asistenciales del personal, funcionarios y magistrados dependiente de los tres poderes del Estado provincial, sus municipalidades y comunas, entes Autárquicos y Descentralizados y Sociedades con Participación Mayoritaria Estatal, en cualquiera de sus manifestaciones y las Fuerzas de Seguridad dependientes de la Provincia, sucediendo jurídicamente al Instituto Provincial Autárquico Unificado de Seguridad Social (IPAUSS) en la medida de sus competencias.

Tendrá su domicilio social en la ciudad de Ushuaia, donde establecerá su sede central y delegaciones en las ciudades de Tolhuin, Río Grande y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Tendrá por objeto principal el gobierno y la administración del sistema de prestaciones medico asistenciales, destinado a jubilados y pensionados en el Régimen Previsional provincial y al personal dependiente de:

a) la Administración Central;
b) los Organismos Autárquicos y/o Descentralizados;
c) el Poder Legislativo;
d) las Municipalidades;
e) el Poder Judicial de la Provincia incluyendo a los agentes, funcionarios y magistrados; y
f) el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Estado de la Provincia incluyendo a sus agentes y funcionarios.

Quedan también incluidos en calidad de beneficiarios:

1. los grupos familiares primarios de las categorías indicadas en los incisos precedentes, entendiéndose por grupo familiar primario el integrado por el cónyuge del afiliado titular, los hijos solteros hasta los veintiún (21) años, no emancipados por habilitación de edad o ejercicio de actividad profesional, comercial o laboral; los hijos solteros mayores de veintiún (21) años y hasta veinticinco (25) años inclusive, que estén a exclusivo cargo del titular, que cursen estudios regulares oficialmente reconocidos por la autoridad pertinente, los hijos incapacitados y a cargo del afiliado titular, mayores de veintiún (21) años, los hijos del cónyuge, los menores cuya guarda y tutela haya sido acordada por autoridad judicial o administrativa que reúnan los requisitos establecidos en este punto; y
2. las personas que convivan con el afiliado titular y reciban del mismo ostensible trato familiar, según la acreditación que determine la reglamentación y otros ascendientes o descendientes por consanguinidad del beneficiario titular que se encuentren a su cargo y que reúnan los requisitos establecidos por la Obra Social.

Todos los sujetos comprendidos en este artículo, sin excepción de ningún tipo, se encuentren o no afiliados al IPAUSS con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente

ley, quedan obligatoriamente incluidos en el presente régimen.

Artículo 3°.- La Obra Social otorgará las siguientes prestaciones en forma directa o por intermedio de terceros de:

a) servicios médicos, odontológicos, farmacéuticos, ópticos y de estudios destinados al fomento, prevención, recuperación de la salud y rehabilitación del individuo a la vida útil; y
b) cualquier otro servicio social que instituya la Obra Social.

Para la atención de las prestaciones mencionada en el inciso a) precedente, La Obra Social destinará como mínimo el ochenta por ciento (80%) de sus recursos brutos, deducidos los aportes al Sistema Nacional de Seguro de Salud, si así se conviniesen (artículo 5º, Ley nacional 23.660).

Artículo 4°.- El carácter de beneficiario, otorgado en artículo 2º de la presente, subsistirá mientras se mantenga el contrato de trabajo o la relación del empleo público y el trabajador o empleado reciba remuneración del empleador, salvo:

a) en caso de extinción del contrato de trabajo, los trabajadores que se hubieren desempeñado en forma continua durante tres (3) meses como mínimo, mantendrán su calidad de beneficiarios durante un período de tres (3) meses contados desde su distracto, sin obligación de efectuar aportes;
b) en caso de interrupción del trabajo por causa de accidente o enfermedad inculpable, el trabajador mantendrá su calidad de beneficiario durante el plazo de conservación del empleo sin percepción de remuneración y sin obligación de efectuar aportes;
c) en caso de suspensión del trabajador sin goce de remuneración, éste mantendrá su carácter de beneficiario durante un período de tres (3) meses. Si la suspensión se prolongare más allá de dicho plazo, podrá optar por continuar manteniendo ese carácter, cumpliendo con las obligaciones del aporte a su cargo y de la contribución a cargo del empleador;
d) en caso de licencia sin goce de haberes por razones particulares del trabajador, éste podrá optar por mantener durante el lapso de la licencia la calidad de beneficiario, cumpliendo con las obligaciones de aportes a su cargo y contribución a cargo del empleador;
e) los trabajadores de temporada podrán optar por mantener el carácter de beneficiarios durante el período de inactividad y mientras subsista el contrato de trabajo, cumpliendo durante ese período con las obligaciones del aporte a su cargo y de la contribución a cargo del empleador que establece la presente ley.

   Este derecho cesará a partir del momento en que, en razón de otro contrato de trabajo, pasen a ser beneficiarios titulares en los términos previstos en el artículo 2º de la presente ley;
f) la mujer que quedare en situación de excedencia podrá optar por mantener su calidad de beneficiario durante el período de la misma, cumpliendo con las obligaciones del aporte a su cargo y de la contribución a cargo del empleador que establece la presente ley; y
g) en caso de muerte del trabajador, los integrantes de su grupo familiar primario mantendrán el carácter de beneficiarios durante el período de tres (3) meses, a contar de la fecha de defunción del titular. Una vez finalizado ese período podrán optar por continuar en ese carácter cumpliendo con el pago de los aportes y contribuciones actualizados que hubiere correspondido al beneficiario titular. Este derecho cesará por la falta de pago de dos (2) periodos consecutivos de los aportes y contribuciones a su cargo y a partir del momento en que, por cualquier circunstancia, adquieran la calidad de beneficiarios titulares.

En todos los casos, el mantenimiento de la calidad de beneficiario del trabajador en relación de dependencia, se extiende a su respectivo grupo familiar primario.

Capítulo II
De las Autoridades y sus Atribuciones

Artículo 5º.- La conducción y administración de la Obra Social estará a cargo de un Presidente y un Directorio, quienes serán asistidos por un comité asesor.
Artículo 6º.- El Presidente será designado y removido por el Poder Ejecutivo.
Artículo 7º.- Son funciones del Presidente:

a) administrar los fondos de la Obra Social;
b) ejercer el control administrativo y técnico de todas las prestaciones;
c) fijar la orientación, planeamiento y coordinación de los servicios que se prestan;
d) convenir con entidades públicas o privadas la prestación de servicios;
e) intervenir los organismos y dependencias de la Obra Social para su mejor funcionamiento y aplicación de sus fines;
f) generar los actos administrativos necesarios que hacen al funcionamiento de la Obra Social, ajustándose a lo reglamentado para la Administración Pública, pudiendo delegar facultades mediante instrumento legal correspondiente e personal superior de la planta permanente de la Obra Social;
g) establecer regímenes, de auditoría técnica administrativa y contable, mediante los cuales controlará y evaluará la eficacia de los servicios y operaciones de la Obra Social en cada uno de sus sectores y en su conjunto;
h) celebrar convenios colectivos, fijar remuneraciones, nombrar, categorizar y promover o remover y otorgar licencias extraordinarias, de acuerdo con lo que fije la reglamentación del personal de la Obra Social, de planta permanente y transitoria;
i) convocar y presidir las reuniones del directorio participando con voz y voto;
j) representar a la Obra Social en todos los actos que se relacionen con sus actividades o fines, estar en juicio como actor, demandado o terceristas, o en cualquier otro carácter que correspondiere, pudiendo a tal efecto, otorgar los poderes que sean menester y quedando facultado para transigir;
k) interpretar la aplicación de las normas de la presente ley, de todas aquellas vinculadas al ámbito de su competencia y resolver los casos no previstos;
l) intervenir en los recursos interpuestos contra los actos administrativos dictados por cada una de las áreas. Contra las resoluciones adoptadas por el Presidente podrán interponerse recursos, con los alcances y procedimientos que se prescriben en la Ley provincial 141 de Procedimiento Administrativo;
m) vigilar la correcta recaudación de los aportes y contribuciones para lo cual podrá disponer todos los actos y controles que resulten necesarios para su mejor cumplimiento con mantenimientos de un padrón de todos los afiliados y aportantes a la Obra Social;
n) ejercer el poder disciplinario sobre el personal de la Obra Social con facultades de aplicar todas aquellas sanciones que no implique su remoción, de conformidad con lo que establezca la reglamentación;
o) ejercer las facultades que la presente ley otorga a la Obra Social;
p) confeccionar la memoria anual;
q) publicar anualmente en el Boletín Oficial el balance de la Obra Social; y
r) disponer el pago a prestadores y en general realizar todo acto de administración requerido para el cumplimiento de las finalidades de la presente ley.

Artículo 8º.- El Directorio estará integrado por el Presidente y tres (3) vocales, uno de ellos designado por el Poder Ejecutivo quién desempeñará la vicepresidencia de la Caja y será quién sustituya al Presidente en caso de que por cualquier circunstancia le resulte imposible ejercer sus funciones, otro representará a los afiliados pasivos debiendo ser elegido por el voto directo de los mismos y otro representará a los afiliados activos debiendo ser elegido por el voto directo de los mismos.
Los afiliados activos y pasivos de la Obra Social elegirán sendos suplentes, quienes como

tales no se encontrarán alcanzados por la limitación en la acumulación de cargos y empleos, establecida por el artículo 9º de la Constitución Provincial.
Artículo 9°.- La elección de los Vocales representantes de los afiliados activos y pasivos se regirá por las siguientes pautas:

1. el Directorio convocará a elecciones con una antelación no menor a ciento veinte (120) días corridos del vencimiento del mandato de los mismos;
2. se confeccionarán dos (2) padrones electorales, uno de activos y otro de pasivos, por distrito único;
3. los afiliados que se postulen deberán presentarse por sectores y en boletas separadas, integrando titular y suplente;
4. el acto eleccionario se realizará en forma simultánea y separada por sector. La emisión del voto será obligatoria para los electores activos y pasivos;
5. para ser candidato en representación del sector activo se requerirá encontrarse en actividad como agente y contribuyente del sistema previsional, con un mínimo de tres (3) años de antigüedad como tal;
6. serán proclamados Vocales en representación de los afiliados activos y pasivos, los integrantes de las listas participantes que obtenga mayor cantidad de votos;
7. quienes fueren electos se integrarán en forma automática al Directorio al tiempo de la finalización del mandato de los representantes en ejercicio; y
8. la Junta Electoral será regulada por la Ley provincial 201, norma que actuará además supletoriamente en todo lo que no se contraponga con la presente.

Artículo 10.- Los miembros electos del Directorio durarán tres (3) años en sus funciones, pudiendo ser reelectos. Sólo podrán ser separados de sus cargos por mal desempeño o por haber sido procesados por la presunta comisión de delitos contra la Administración Pública o ausencias reiteradas o injustificadas a las reuniones de Directorio. El Presidente y el Vicepresidente designados por el Poder Ejecutivo, podrán ser removidos en el momento en que lo decida la autoridad que los designó. No podrán ocupar ninguno de ellos otro cargo remunerado, salvo la docencia.
Artículo 11.- No podrán ser miembros del Directorio los quebrados, los concursados civilmente y los condenados en causa criminal por delito doloso que no se encontraren legalmente rehabilitados.
Artículo 12.- La retribución del Presidente será equivalente a la remuneración asignada para el cargo de Secretario de Estado y la de los Vocales será equivalente al cargo de Subsecretario de Estado del Gobierno provincial.
Los representantes de los afiliados pasivos podrán optar entre percibir la remuneración prevista precedentemente o continuar percibiendo su haber jubilatorio.
Artículo 13.- El Directorio se reunirá en forma ordinaria, como mínimo, dos (2) veces por mes y en sesiones especiales cada vez que fuere convocado por el Presidente o por no menos de tres (3) Vocales con tres (3) días de anticipación, bajo pena de nulidad, lapso que podrá ser reducido en caso de reputarse necesario, indicando la causa que lo justifique. El quórum se formará con la presencia de la mitad más uno de los miembros del Directorio. Las resoluciones serán válidas por mayoría absoluta de los votos de los presentes, teniendo el Presidente, en caso de empate, doble voto.
Artículo 14.- Los integrantes del Directorio serán responsables personal y solidariamente de las resoluciones que adopten, salvo constancia expresa de su disidencia en actas, la que será debidamente fundada.
Artículo 15.- Son atribuciones y obligaciones del Directorio:

a) proyectar y elevar anualmente al Poder Ejecutivo el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Obra Social, pudiendo destinar a gastos de funcionamiento hasta un nueve por ciento (9%) del total de los ingresos que, por aportes y contribuciones, se calcule percibir en el Ejercicio fiscal pertinente.

   La elevación prevista en el párrafo precedente deberá realizarse con una antelación mínima de quince (15) días a la fecha establecida constitucionalmente para la presentación, por parte del Poder Ejecutivo, del proyecto de ley de

Presupuesto General de Gastos de la Administración Pública provincial y de las reparticiones autárquicas;

b) considerar y aprobar la memoria, balance general, cuenta de resultado, estado demostrativo de gastos y recursos, nómina de afiliados y beneficiarios de cada Ejercicio, el que comenzará el 1 de enero y concluirá el 31 de diciembre de cada año, el que será elevado al Poder Legislativo por intermedio del Poder Ejecutivo;
c) establecer planes de regularización y de pago de los montos adeudados a la Obra Social;
d) aprobar el temario para tratamiento en las sesiones ordinarias o extraordinarias;
e) dictar el o los reglamentos internos correspondientes y el régimen orgánico funcional de la Obra Social;
f) disponer la realización y publicación periódica de valuaciones actuariales y censos de afiliados de la Obra Social para control de seguridad del plan de prestaciones, como así también de estudios e investigaciones relacionadas con la materia controlando y comprobando la actualización permanente del padrón de afiliados;
g) controlar y comprobar periódicamente los libros y registros contables, los estados de caja, las cuentas bancarias y demás elementos y antecedentes que reflejen significativamente las actividades de la Obra Social;
h) disponer la realización de inversiones que sirvan de apoyo a la economía del sistema, en óptimas condiciones de liquidez, seguridad y rentabilidad;
i) preparar y aprobar la política de inversiones de los recursos de la Obra Social;
j) preparar y aprobar la estructura funcional de la Obra Social y la de sus distintas áreas y crear las comisiones y subcomisiones del Directorio que se consideren necesarias;
k) aprobar los planes y programas y asignar a cada una de las áreas los recursos necesarios para el cumplimiento de sus gestiones;
l) aprobar o disponer la compra, venta, permuta, locación, leasing o el comodato de los muebles e inmuebles que se hubieren adquirido por cualquier título, quedando autorizado a suscribir los instrumentos pertinentes. La facultad de disposición de inmuebles será resuelta por el voto de los dos tercios (2/3) de sus integrantes del Directorio y requerirá de conformidad legislativa. Las ventas de los inmuebles de propiedad de la Obra Social se realizarán, en bloque o subdivididos, al contado o financiado en los períodos que el Directorio determine, a través de licitación pública o subasta pública;
m) realizar las colocaciones de dinero y la toma de préstamos en dinero, al interés corriente de la institución bancaria oficial provincial, o en su defecto, de otras entidades bancarias oficiales o privadas, en tanto las condiciones por estas ofrecidas resulten financieramente más satisfactorias para la Obra Social;
n) elaborar y elevar al Poder Legislativo, por intermedio del Poder Ejecutivo, los proyectos de reforma de la presente ley y de la reglamentación que en su consecuencia se dicte cuando estimare que la circunstancia así lo aconsejen;
o) proponer al Poder Ejecutivo los proyectos de reglamentación de la presente y de todas las normas legales relacionadas a las áreas de competencia de la Obra Social;
p) reunirse con la periodicidad que se determine en la reglamentación y cada vez que lo convoque el Presidente;
q) en general realizar todos aquellos actos que no se opongan al régimen de la presente ley y que considere oportuno o conveniente para el mejor éxito o desarrollo de las actividades de la Obra Social;
r) elegir anualmente entre los vocales representantes de los activos y pasivos un Vicepresidente 2º y un Vicepresidente 3º para el eventual caso de acefalia los que tendrán las mismas atribuciones del titular suplantado;
s) aunque no mediare recurso contra los actos administrativos adoptados por las distintas áreas, el Directorio podrá disponer, por sí, la revisión de ellos;

t) delegar en los representantes de las respectivas comisiones, funciones o atribuciones adjudicadas al Directorio; y
u) ejercer otras facultades, además de las establecidas en el presente artículo, tendientes al mejoramiento del servicio.

Capítulo III
Del Comité Asesor

Artículo 16.- Serán integrantes del Comité Asesor un (1) representante de cada municipio y los funcionarios de las distintas áreas de la Obra Social con jerarquía inmediata al Director, de conformidad con lo que determine la reglamentación.
Artículo 17.- El Comité Asesor deberá dictaminar, con carácter no vinculante, sobre todos aquellos asuntos que le sean sometidos a su consideración por el Presidente o el Directorio.

Capítulo IV
De la Fiscalización

Artículo 18.- El Tribunal de Cuentas de la Provincia ejercerá el control de la Obra Social mediante los procedimientos reglados por las leyes que regulan su actividad, en todos los aspectos relacionados con el desenvolvimiento legal, económico, financiero y patrimonial a cuyo efecto deberá:

a) fiscalizar el desarrollo del presupuesto integral sobre la base de la correspondiente contabilidad financiera, la que será llevada conforme a las normas establecidas por la legislación vigente, en cuanto no fueren incompatibles con la naturaleza de los recursos que administra;
b) verificar el movimiento y gestión del patrimonio; y
c) observar todo acto u omisión que contravenga las disposiciones legales y reglamentarias.

En caso de imposibilidad del organismo para ejercer el control indicado por causa que lo justifique, se podrá solicitar la auditoría a un ente estatal o particular.

Capítulo V
De los Recursos

Artículo 19.- La Obra Social atenderá el cumplimiento de sus obligaciones con los siguientes recursos:

a) la contribución mensual obligatoria equivalente al siete por ciento (7%) por parte del empleador;
b) el aporte mensual obligatorio equivalente al tres por ciento (3%) a cargo de los afiliados enunciados en el primer párrafo del artículo 2°;
c) el aporte del uno coma cinco por ciento (1,5%) de la remuneración del afiliado titular, por cada beneficiario a que se refiere el punto 2 del artículo 2º de la presente;
d) el aporte mensual que deben efectuar los beneficiarios de la Ley provincial 389;
e) los ingresos con motivo de convenios, contratos, aranceles, contribuciones especiales, donaciones, legados y subsidios;
f) las transferencias, aportes, subsidios o participaciones que le correspondan por aplicación de leyes, convenios, programas, acuerdos provinciales, nacionales o federales de aplicación en las distintas jurisdicciones, tanto provinciales como nacionales, en cumplimiento de las normas que hacen a la Asistencia Social y regímenes de Obra Social;
g) los fondos originados en las prestaciones de servicios realizadas por establecimientos administrados por la Obra Social y de los coseguros y demás aranceles o tasa, recuperos u otro tipo de retribución, que se origine en la

contraprestación de los servicios prestados;

h) las sumas recaudadas por multas, intereses y recargos;
i) los fondos provenientes de la cuenta asistencial del IPAUSS, a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley;
j) las sumas adeudadas por aportes y contribuciones asistenciales al IPAUSS por los tres poderes del Estado provincial, sus Municipalidades y Comunas, entes Autárquicos y Descentralizados y Sociedades con Participación Mayoritaria Estatal, en cualquiera de sus manifestaciones y las Fuerzas de Seguridad dependientes de la Provincia;
k) las sumas adeudadas por aplicación de la Ley provincial 939;
l) los fondos asignados por la Constitución, el Presupuesto General de la Obra Social, el Presupuesto General de la Administración Pública provincial y las leyes con destinos específicos;
m) los intereses y utilidades provenientes de inversiones que se realicen;
n) las utilidades que se originen por la evolución natural del capital; y
o) los cánones y alquileres que se perciban por la concesión o locación de inmuebles pertenecientes a la Obra Social.

Artículo 20.- Los fondos asignados por la Constitución y las leyes a destinos específicos serán administrados a través de cuentas especiales con el objeto único de atender a los fines que la Constitución determina, en inversiones sin riesgo.

Está expresamente prohibida la transferencia entre cuentas de afectación constitucional específica.

Artículo 21.- Los aportes y contribuciones en la presente ley se harán efectivos mediante depósitos bancarios en cuenta especial. Los depósitos se efectuarán a la orden de la Obra Social de la Provincia de Tierra del Fuego dentro de los quince (15) días hábiles inmediatamente siguientes a cada mes vencido.

Artículo 22.- Los responsables obligados que no depositaren los aportes y/o contribuciones u otras obligaciones previsionales dentro de los plazos legales, incurrirán en mora automática por el solo vencimiento de dicho plazo, sin necesidad de interpelación alguna. El incumplimiento dará lugar a la aplicación de un recargo cuyo interés será una vez y medio (1 1/2) la tasa de interés de plazo fijo en pesos a treinta (30) días que fije el Banco de la Provincia de Tierra del Fuego. Deberán asimismo comunicar mensualmente a la Obra Social, nómina de altas, bajas, licencias especiales y todo lo referente a los incisos previstos en el artículo 4° de la presente ley.

Artículo 23.- El cobro judicial de los aportes, contribuciones, recargos y actualizaciones adeudados a la Obra Social, se hará por vía de juicio ejecutivo previsto en el Código Civil, Comercial, Laboral, Rural y Minero de la Provincia, sirviendo de suficiente título ejecutivo el certificado de deuda expedido por la Caja o por los funcionarios en que éste hubiere delegado esa facultad; siendo competente el Juzgado Provincial de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, conforme lo determina la Ley Orgánica del Poder Judicial provincial.

Capítulo VI
Disposiciones Atinentes a Honorarios Profesionales

Artículo 24.- Todo acto notarial, incluyendo escrituras traslativas de dominio, en el que fuera parte la Obra Social, será realizado ante el Escribano Mayor de Gobierno, salvo impedimento legal o fuerza mayor, y se encontrará exento del pago de tasas, impuestos y contribuciones provinciales, como así también del pago de honorarios profesionales.

Capítulo VII
De la Intervencion de la Obra Social.

Artículo 25.- La Obra Social de la Provincia de Tierra del Fuego (OSPTF) sólo podrá ser intervenida por ley aprobada con mayoría agravada cuando sus autoridades se aparten de las

obligaciones que les impone la presente.

Capítulo VIII
Disposiciones Transitorias

Artículo 26.- La presente ley entrará en vigencia a partir del 11 de diciembre de 2016, a excepción de los artículos 6º y 15 que entran en vigencia a partir de la promulgación de la presente y modifican de pleno derecho toda norma que se oponga a las disposiciones previstas en los mismos.

El mandato de los Directores del IPAUSS caducará el 10 de diciembre de 2016.

Artículo 27.- El Poder Ejecutivo Provincial convocará a elecciones, para la renovación de los actuales Directores representativos de los sectores activos y pasivos, de acuerdo a lo establecido en la presente ley.

Artículo 28.- El Poder Ejecutivo determinara la división y adjudicación de la totalidad de los bienes de propiedad del IPAUSS entre la Obra Social que se crea por la presente ley y la entidad que cumpla con la prestación previsional prevista por la ley 561, propuesta que será elevada al Poder Legislativo para su aprobación.

El personal perteneciente al IPAUSS podrá ser reubicado en la Obra Social de la Provincia de Tierra del Fuego (OSPTF) o en la Caja de Previsión Social de la Provincia de Tierra del Fuego (CPSPTF), respetando su categoría profesional, antigüedad y remuneración.

Artículo 29.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los noventa (90) días de su promulgación.

Artículo 30.- Deróganse las Leyes territoriales 10, 442, sus modificatorias y toda norma que se oponga a la presente ley.

Artículo 31.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

- 9 -

Asunto Nº 8/16

Artículo 1º.- Sustitúyese el inciso a) del artículo 3º de la Ley provincial 389, Régimen Único de Pensiones Especiales (R.U.P.E.), por el siguiente texto:

"a) Vejez: aquellas personas que tuvieran más de setenta (70) años de edad.".

Artículo 2º.- Sustitúyese el artículo 15 de la Ley provincial 389, por el siguiente texto:

"Artículo 15.- En caso de fallecimiento de los titulares de pensiones a la vejez y por invalidez, los beneficios de ambas prestaciones solo podrán ser derivados al cónyuge o unido de hecho, quien deberá acreditar por ante la autoridad de aplicación las siguientes circunstancias, conforme lo determine la reglamentación:

a) acta de defunción del cónyuge;
b) acta de matrimonio o, para las uniones convivenciales, actas de inscripción ante autoridad competente y/o información sumaria que acredite haber convivido con el causante en aparente matrimonio de pública notoriedad como mínimo durante un lapso ininterrumpido y anterior al fallecimiento de diez (10) años; y
c) no encontrarse desarrollando actividad rentada ya sea en relación de dependencia o como autónomo, ni ser beneficiario de prestaciones de la seguridad social nacional o provincial de ningún tipo.".

Artículo 3º.- Sustitúyese el artículo 20 de la Ley provincial 389, por el siguiente texto:

"Artículo 20.- Los beneficiarios de las pensiones otorgadas en el marco de la presente ley, que no posean obra social o cobertura médico asistencial prepaga, gozarán de los servicios médico asistenciales a través de la Obra Social de la Provincia de Tierra del Fuego, debiendo aportar por dicho servicio el cinco por ciento (5%) del importe bruto de la pensión que perciba.

El aporte establecido en el párrafo que antecede será retenido por el Poder Ejecutivo y transferido a la obra social antes del día quince (15) del mes abonado.".

Artículo 4º.- Sustitúyese el artículo 27 de la Ley provincial 1037, por el siguiente texto:

"Artículo 27.- Obra Social. Los beneficiarios definidos en el artículo 9°, incluidos en el Sistema Provincial de Acogimiento Familiar que no posean obra social, deben ser incorporados a la Obra Social de la Provincia de Tierra del Fuego.

Los gastos que demande su atención por todo concepto serán facturados mensualmente por la obra social a la autoridad de aplicación de la presente ley, quien deberá abonar lo mismo dentro del plazo máximo de treinta (30) días de recibida su facturación.".

Artículo 5º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

- 10 -

Asunto Nº 7/16

Ley de Emergencia del Sistema de Seguridad Social de la Provincia

Título I
De la Declaración de Emergencia

Artículo 1º.- Declárase la Emergencia del Sistema de la Seguridad Social de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur por el lapso de dos (2) años, los que se computarán desde la fecha de la sanción de la presente. El Poder Ejecutivo elevará a la Legislatura provincial, en el plazo y condiciones que establezca la reglamentación, un informe circunstanciado que deberá relevar el impacto de las medidas previstas en la presente, de acuerdo a los fines tenidos en miras con su sanción durante el lapso de emergencia. El Poder Legislativo, previo análisis de la información remitida, podrá prorrogar por única vez la emergencia aquí declarada por un plazo igual o inferior a dos (2) años.

Asimismo, durante el plazo de la emergencia el Poder Ejecutivo elevará a la Legislatura provincial informes semestrales del avance y aplicación de las medidas dispuestas en la presente ley.

Artículo 2°.- Las medidas que se disponen en la presente ley estarán orientadas a la regularización integral de la situación de crisis actual mediante la implementación de una administración eficaz y con el objeto primordial de ejecutar acciones tendientes a conquistar la sustentabilidad y sostenibilidad del sistema, asegurando a las generaciones presentes y futuras el acceso al derecho de la seguridad social en el ámbito de las normas locales que lo regulan.

Título II
De las Medidas de Corto y Mediano Plazo

Artículo 3º.- Suspéndase durante la vigencia de la emergencia previsional establecida en el artículo 1°, la aplicación de los incisos c) y d) del artículo 6° de la Carta Orgánica del Banco de la Provincia de Tierra del Fuego para la estimación de las utilidades distribuibles.

Con excepción de las utilidades devengadas durante el Ejercicio 2015, suspéndase la distribución de utilidades devengadas para la aplicación del fondo estímulo del personal del Banco de la Provincia de Tierra del Fuego mientras dure la emergencia previsional.

Artículo 4°.- Instrúyese al Directorio del Banco de la Provincia de Tierra del Fuego para que, cumplidas las disposiciones del artículo 6º del Capítulo IV del Anexo Único de la Ley territorial 234, conforme redacción incorporada en la presente, previa autorización del Banco Central de la República Argentina (BCRA), ponga a disposición del Poder Ejecutivo las utilidades remanentes del Banco de la Provincia de Tierra del Fuego las que, en virtud de la emergencia decretada en la presente ley, deberán ser destinadas a cubrir déficit estacionales de caja del IPAUSS o el organismo que lo reemplace.

El Directorio del Banco, al transferir las utilidades a las que se refiere la presente,

deberá deducir las sumas devengadas que correspondan al fondo estímulo, en el porcentual establecido en la Ley provincial 863.
El Poder Ejecutivo, podrá destinar dichas utilidades, al pago de contribuciones vencidas, a cuenta de contribuciones futuras o pago de deuda consolidada.
Artículo 5º.- Durante el plazo de la emergencia, los funcionarios que ocupen la titularidad de los tres poderes del Estado, incluidos los magistrados judiciales, abonarán un aporte adicional extraordinario equivalente al máximo establecido en el Anexo II del artículo 9º de la presente.

El mismo aporte se aplicará a los Ministros, Secretarios de Estado, Secretarios y todo aquel que ocupe cargos de la planta política en la Administración Central, Organismos Autárquicos y Descentralizados, el Poder Legislativo, y los organismos de control del Estado provincial, Banco de la Provincia de Tierra del Fuego, Departamentos Ejecutivos, Concejos Deliberantes, Juzgados de Faltas y Órganos de Control de los Municipios de la Provincia.
Invítase al Superior Tribunal de Justicia al dictado de una acordada de adhesión a los fines del presente artículo.

Dichos fondos serán afectados al Fondo Solidario para el pago de jubilaciones creado en la presente y no se acumularán al resto de los incrementos establecidos en la presente ley.
Artículo 6°.- Oblígase a todos las jurisdicciones del Gobierno provincial, Organismos Autárquicos, entes Descentralizados y Municipios de la Provincia de Tierra del Fuego a operar con el Banco de la Provincia de Tierra del Fuego como Caja Única obligada para todas las operaciones financieras de pagos y recaudación, depósitos y colocaciones financieras, excepto aquellas operaciones que por convenios nacionales se habilite en otra entidad oficial.
Invítase a adherir para propender a este mecanismo financiero a todas las empresas que certifiquen procesos en el Área Aduanera Especial.
Artículo 7°.- En el contexto de la presente ley considéranse conceptos remunerativos, a los efectos de la determinación del límite constitucional establecido por todo concepto en el artículo 73 inciso 4) de la Constitución Provincial, a aquellos ítems remunerativos sujetos a aportes y contribuciones previsionales, en las condiciones actuales de vigencia.

Los haberes previsionales que a la fecha de la presente superen el límite constitucional, de acuerdo a las pautas establecidas en el párrafo anterior, no serán afectados; pero no podrán ser incrementadas por causa o motivo alguno hasta tanto no se observen las condiciones establecidas en este artículo.
Artículo 8º.- Créase el Fondo Solidario para el pago de jubilaciones el que se conformará con un aporte extraordinario financiero de emergencia previsional a cargo de todo beneficiario del régimen provincial jubilatorio que se encuentre incluido en las siguientes condiciones:

a) a los beneficiarios del sistema previsional que perciban un haber bruto superior a la suma de PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000,00) y no cumplan con las condiciones establecidas en los incisos b), c) y d) del presente, se les deducirá mensualmente, durante el plazo de la emergencia, un aporte especial variable y progresivo, cuyo importe se liquidará según la escala prevista en la Tabla I del Anexo I de la presente;
b) a aquellas personas que hubiesen accedido al beneficio con una edad menor a los cincuenta (50) años, se les deducirá mensualmente del haber bruto, durante el plazo de la emergencia, un aporte especial variable y progresivo, cuyo importe se liquidará según la escala prevista en la Tabla II del Anexo I de la presente.
Quedan excluidos del presente aporte aquellos que accedieren al beneficio por medio del otorgamiento de pensión por fallecimiento o jubilación por invalidez;
c) a los beneficiarios del sistema previsional que perciban en concepto de pensión por fallecimiento o jubilación por invalidez, se les deducirá mensualmente, durante el plazo de la emergencia, un aporte especial variable y progresivo, cuyo importe se liquidará según la escala prevista en la Tabla III del Anexo I de la presente;
d) a aquellas personas que hubieren accedido al beneficio habiendo aportado directamente al organismo provincial con un máximo de cinco (5) años de aportes o que fueren titulares de beneficios concedidos por jubilaciones especiales o anticipadas con un máximo de cinco (5) años de aportes, se les deducirá

mensualmente un aporte especial variable, cuyo importe se liquidará según la escala prevista en la Tabla IV del Anexo I de la presente.

A los efectos de la determinación particular del aporte extraordinario de cada beneficiario alcanzado, el Poder Ejecutivo establecerá en la reglamentación la fórmula polinómica conforme los parámetros contenidos en cada una de las tablas incorporadas al Anexo I y sobre las siguientes bases: al importe de cada beneficio se le aplicará el porcentaje de aporte correspondiente al tope del escalón inmediatamente inferior y se le adicionará la tasa marginal del tramo donde cae exactamente el beneficio, aplicada sobre la diferencia entre el beneficio y el mencionado tope del escalón inmediatamente inferior.

Facúltase al Poder Ejecutivo a disponer un incremento del monto mínimo establecido en el presente y de las alícuotas según el monto, de acuerdo a una escala proporcional al porcentaje de movilidad de los haberes, para el momento en que se produzcan aumentos generales en la administración.

Los presentes aportes extraordinarios en ningún caso serán acumulativos ni podrá su aplicación superar el quince por ciento (15%).

Artículo 9°.- Los trabajadores activos se encuentran obligados a realizar un aporte adicional extraordinario de emergencia previsional en los porcentajes y las condiciones establecidas en el Anexo II de la presente.

Artículo 10.- Autorízase al Presidente del IPAUSS, o el organismo que lo reemplace, a implementar un programa de evaluación, formación de indicadores y desarrollo de nuevas herramientas de gestión en un plazo de noventa (90) días desde la sanción de la presente medida con un plazo máximo de desarrollo, implementación y evaluación de veinticuatro (24) meses.

Este programa deberá contemplar la revisión de la totalidad de las prestaciones otorgadas, e implementar bases de datos, cruces, programa de liquidación y demás información relevante que permita evaluar la evolución del sistema más allá de las proyecciones actuariales.

A los fines de lo dispuesto en este artículo, autorízase la contratación directa de servicios de auditoría con universidades públicas, organismos públicos en materia previsional y/o profesionales especializados en la materia.

Artículo 11.- El Poder Ejecutivo podrá instruir al Fiscal de Estado para que inicie las acciones tendientes a la devolución de las sumas detraídas y al cese de la retención del quince por ciento (15%) de la masa de impuestos coparticipables pactada en la Cláusula Primera del “Acuerdo entre el Gobierno nacional y los Gobiernos provinciales” el 12 de agosto de 1992 ratificado por la Ley nacional 24.130 y conforme los términos del artículo 76 de la Ley nacional 26.078.

Artículo 12.- El Poder Ejecutivo podrá instruir al Fiscal de Estado a que inicie las acciones tendientes a la devolución de las sumas detraídas y al cese de las retenciones actuales relacionadas con el porcentual resultante de la aplicación del Decreto 1399/2001, en lo que se refiere a la Provincia de Tierra del Fuego.

Artículo 13.- El Poder Ejecutivo deberá asignar prioritariamente al IPAUSS o al organismo previsional que lo reemplace las sumas que se generen como consecuencia de la devolución y cese de las detracciones y retenciones referidos en los artículos anteriores.

La asignación de las sumas que correspondan a la devolución y cese, no podrán ser menores al setenta por ciento (70 %) de lo que ingrese al Tesoro provincial en dichos conceptos.

El Poder Ejecutivo, al momento de la transferencia, imputará el concepto en que se deben aplicar los fondos; pudiéndolo hacer al pago de contribuciones vencidas, a cuenta de contribuciones futuras o pago de deuda consolidada, integrándolos en este último supuesto al fideicomiso establecido en la presente ley.

Artículo 14.- Suspéndase, por el plazo de la emergencia, la aplicación de la Ley provincial 855 en el ámbito del Poder Ejecutivo de la Provincia.

Durante el plazo de la emergencia la dieta de la Gobernadora solo podrá ser aumentada en la medida en que exista una modificación dispuesta con carácter general para toda la

Administración Pública. En tal supuesto, el porcentaje de aumento no podrá exceder el porcentaje de incremento que se hubiese otorgado.
Artículo 15.- Autorízase al IPAUSS o el organismo que lo reemplace, a establecer, por el plazo de la emergencia, un cronograma de pago de haberes que permita el desdoblamiento de la fecha de pago de los beneficiarios por número de documento o monto del haber, con la condición de que en todos los casos se abone en intervalos regulares mensuales y se priorice a los beneficiarios de menores ingresos.

Establecido dicho cronograma y por el plazo de la emergencia, el mismo se aplicará a las consecuencias de las relaciones o situaciones jurídicas existentes, aun en aquellos casos en que la fecha de pago se hubiera determinado judicialmente.
Artículo 16.- En cualquier proceso judicial en los que el IPAUSS o el organismo que lo reemplace sea parte, durante el plazo de la emergencia, se impondrán en todos los casos las costas por su orden.
Artículo 17.- Establécese que, para los ajustes de movilidad de los haberes previsionales se aplicará el ochenta y dos por ciento (82 %) de la equivalencia establecida para la jubilación ordinaria, y el resto de los porcentajes de ley establecidos para los beneficios de edad avanzada, invalidez y pensiones.

Durante el plazo de la emergencia, la movilidad será actualizada dos (2) veces al año, en la fecha y condiciones que establezca la reglamentación en tanto los haberes del personal en actividad que se desempeñe en la categoría y/o función considerada para la determinación del haber inicial, dentro de las administraciones indicadas y en el respectivo escalafón, sufran variaciones.

Título III
De la Consolidación de Deudas y de la Creación del Fideicomiso para el Desarrollo Habitacional

Artículo 18.- Consolídanse en el Estado provincial la totalidad de las obligaciones de la seguridad social vencidas impagas a la fecha de sanción de la presente ley.
Artículo 19.- La consolidación dispuesta en el artículo precedente comprende las obligaciones de la seguridad social a cargo de la Administración Central y Organismos Descentralizados de la Administración Pública provincial, como así también de los Departamentos Ejecutivos, Concejos Deliberantes y Juzgados de Faltas y Organismos de Control de los Municipios de la Provincia de Tierra del Fuego siempre que adhieran a los términos de la presente por medio de Ordenanza.
Artículo 20.- Instrúyese a los Organismos de Control previstos por la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control para que en el plazo de noventa (90) días, corridos contados a partir del quinto (5º) día hábil de la publicación de la presente, prorrogables por igual período de tiempo, determine fehacientemente y certifique las acreencias del IPAUSS a la fecha de sanción de la presente.
Dentro de los cinco (5) días hábiles de finalizada su labor, los organismos deberán remitir al Ministerio de Economía de la Provincia informe circunstanciado de la certificación de acreencias correspondientes de cada uno de los organismos comprendidos en el artículo que antecede.
Artículo 21.- La certificación de las acreencias previstas en el artículo anterior serán actualizadas aplicando la tasa de interés de plazo fijo en pesos a treinta (30) días que fije el Banco de la Provincia de Tierra del Fuego para el caso de las deudas que no se hayan originado a partir de lo establecido en el artículo 5º de la Ley provincial 478.
Artículo 22.- Para el caso de las deudas que no tienen origen en el artículo 5° de la Ley provincial 478, dentro del plazo de ciento ochenta (180) días, una vez certificadas las acreencias y aplicados los intereses correspondientes, el IPAUSS o el organismo que lo reemplace y los organismos deudores deberán suscribir los correspondientes acuerdos de pago, los que deberán cancelarse en hasta ciento ochenta (180) meses por el sistema de cuotas de capital más intereses, los que serán establecidos para la consolidación del artículo

21 de la presente, según reglamentación del Poder Ejecutivo.

Las jurisdicciones provinciales y municipales podrán acordar y proponer entre sí e informar al IPAUSS o el organismo que lo reemplace, la compensación de deudas y acreencias mutuas con cargo al pago de deudas previsionales o asistenciales, las que podrán cancelarse en las mismas condiciones financieras y de plazos establecidas en la presente.

Hasta tanto se suscriban los acuerdos o convenios de pago mencionados precedentemente, los Municipios deberán abonar al IPAUSS, o al organismo que lo reemplace, en concepto de pago a cuenta de las acreencias adeudadas, las siguientes sumas mensuales y consecutivas: por los Municipios de Río Grande y Ushuaia, cada uno la suma de pesos quinientos mil ($ 500.000) y por el Municipio de Tolhuin la suma de pesos cien mil ($100.000). Dichas sumas serán retenidas previas al envío de la coparticipación.

Artículo 23.- Los montos de las cuotas determinados para cada organismo sea provincial y/o municipal serán con garantía de coparticipación y con la retención automática directa de dichas cuotas de los recursos de coparticipación y regalías que perciba el Banco de la Provincia de Tierra del Fuego, tanto de la Administración Central o a transferirse a través del sistema de coparticipación municipal, montos que se transferirán en forma automática al IPAUSS por el Banco de la Provincia de Tierra del Fuego.

Artículo 24.- El Estado provincial, de conformidad con lo establecido por el artículo 28 de la Ley provincial 641, modificatorio del artículo 5º de la Ley provincial 478, a partir del 1 de enero de 2006 y con el propósito de honrar la deuda que mantiene con el IPAUSS, establece como cuantificación de la deuda la fórmula que a continuación se establece.

El monto total de la deuda dólares estadounidenses doscientos ocho millones (U$D 208.000.000.-) serán actualizados con la tasa de interés LIBOR tomando como fecha de inicio el 12 de mayo del 2000 y como fecha de corte el día de publicación de la presente.

Artículo 25.- Autorízase al Poder Ejecutivo a la emisión y colocación de Bonos de Consolidación de Deudas de la Seguridad Social por hasta la suma total que se obtenga de la actualización prevista en el artículo anterior para afrontar las obligaciones consolidadas que resulten de la Certificación de Acreencias que determinen los organismos de control.

Para tal fin se autoriza al Poder Ejecutivo a realizar la instrumentación de la operación con el Banco de la Provincia de Tierra del Fuego, Banco de la Nación Argentina u otras entidades financieras públicas o privadas, organismos nacionales e internacionales de crédito. Dicho financiamiento será por el plazo máximo que permita lograr el objetivo de la colocación de la totalidad de los Bonos emitidos, pudiendo constituir como garantía recursos del Régimen Federal de Coparticipación de Impuestos y/o Regalías Hidrocarburíferas, con las tasas de interés y condiciones de plaza al momento de su constitución.

Artículo 26.- El Poder Ejecutivo constituirá un fideicomiso que se denominará “Fideicomiso para el Desarrollo Habitacional” a fin de garantizar la afectación de los recursos producidos por la emisión del Bono de Consolidación para destinarlos a la inversión en planes de construcción de viviendas familiares y créditos hipotecarios que tengan el mismo destino.

Artículo 27.- El fiduciario realizará con los recursos transferidos por el fiduciante, planes de construcción de viviendas a través de empresas de probada solvencia técnica, económica y financiera, las que serán seleccionadas a través de procedimientos de contratación que garanticen la participación y transparencia de la selección. El fiduciario también podrá otorgar créditos hipotecarios para la construcción de vivienda para uso familiar. Las personas beneficiarias de los créditos deberán reunir los requisitos establecidos por la reglamentación que establezca el Poder Ejecutivo.

Artículo 28.- Los recursos obtenidos por el recupero de las operaciones autorizadas a realizar por parte del fiduciario serán transferidos al IPAUSS o el organismo que lo reemplace, siendo el mismo, el beneficiario del presente Fideicomiso para el Desarrollo Habitacional.

Artículo 29.- La consolidación legal del pasivo público alcanzado por la presente implica la novación de la obligación original y de cualquiera de sus accesorios así como la extinción de todos los efectos inmediatos, mediatos o remotos que la imposibilidad de cumplir sus obligaciones por parte de cualquiera de las personas jurídicas u organismos comprendidos por el artículo 19 pudieran provocar o haber provocado. En lo sucesivo solo subsisten a su

respecto los derechos derivados de la consolidación.
Artículo 30.- Créase el Registro de Inmuebles de Propiedad Privada del Estado provincial, el que estará integrado por la totalidad de los predios fiscales y demás bienes inmuebles del dominio privado del Estado provincial, actualmente existentes, con excepción de los inmuebles de titularidad del IPAUSS o el organismo que lo reemplace.

Los organismos autárquicos y descentralizados, transcurridos quince (15) días hábiles desde la sanción de la presente, deberán inventariar su patrimonio inmobiliario e informar al Poder Ejecutivo la existencia de inmuebles de su propiedad, su afectación actual si la tuviere, nomenclatura catastral, deudas que por cualquier concepto se hayan devengado hasta la fecha de la sanción de la presente, si el mismo se encuentra libre de todo gravamen y cualquier otro dato de interés o que haga a su correcta individualización.

Los entes y organismos podrán convenir con el Poder Ejecutivo la transferencia de inmuebles por el valor que surja de la tasación que se realice, con intervención del Tribunal de Cuentas de la Provincia.
Artículo 31.- El patrimonio inmobiliario que integre el registro establecido en el artículo 30 será destinado a la integración del Fideicomiso para el Desarrollo Habitacional creado en el Título III de la presente ley.
Artículo 32.- Derógase la Ley provincial 676, desafectándose los fondos depositados en el Banco de la Nación Argentina, sucursal Ushuaia, los que serán transferidos al IPAUSS o al organismo que lo reemplace para hacer frente a las jubilaciones del sistema.
Artículo 33.- La presente ley es de orden público y se dicta en ejercicio de los poderes de emergencia de la Legislatura provincial. No se aplicarán a las obligaciones consolidadas ni a sus accesorios las disposiciones contenidas en leyes especiales en tanto se contrapongan con lo normado en la presente. No serán exigibles a los titulares de créditos consolidados el cumplimiento de sus obligaciones accesorias a dichos créditos, sino en las condiciones de la presente ley.

Clausulas Transitorias

Artículo 34.- Hasta tanto se comience a aplicar el producido del fideicomiso establecido en la presente ley a favor del IPAUSS o el organismo que lo reemplace, el Poder Ejecutivo deberá seguir abonando el compromiso asumido en el Decreto provincial 761/2013.

Dichas sumas deberán ser deducidas del monto de la deuda consolidada que se determine de acuerdo a la presente ley.
Artículo 35.- Hasta tanto se efectivice la separación del sistema previsional y el asistencial y se pongan en funciones las autoridades que sean designadas y elegidas para la conducción de ambos sistemas, autorízase al IPAUSS, o el organismo que lo reemplace, a transferir los fondos disponibles en las cuentas del sistema asistencial para el pago de los haberes jubilatorios.

A tales efectos se autoriza al Presidente a realizar las transferencias entre ambas cuentas de acuerdo a las necesidades financieras de caja de las mismas.

Dicha autorización deberá aplicarse sin afectar ni poner en riesgo la normal prestación de servicios asistenciales a cargo del IPAUSS.

Los fondos que resulten utilizados del sistema asistencial en el sistema previsional deberán ser restituidos a dicho sistema a medida que los organismos aportantes hagan efectivos los pagos de aportes y contribuciones correspondientes al sistema previsional y todo otro recurso percibido correspondiente al IPAUSS, a excepción de los recursos a los que hace referencia el artículo 32 de la presente ley.

En ningún caso la transferencia de fondos autorizada por la presente ley podrá significar una quita de fondos al sistema previsional.
Artículo 36.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

ANEXO I

TABLA I	beneficiarios agrupados en a)			
hasta	porcentaje	tasa marginal	desde	hasta
20000	0	0,0	20001	25000
25000	0	0,0	25001	30000
30000	0	0,0	30001	35000
35000	0	0,0	35001	40000
40000	0	72,0	40001	45000
45000	8	30,8	45001	65000
65000	15	15,0	65001	Máx.
Máx.	15			

TABLA II	beneficiarios agrupados en b)			
hasta	porcentaje	tasa marginal	desde	hasta
20000	0	0,0	20001	25000
25000	0	0,0	25001	30000
30000	0	0,0	30001	35000
35000	0	0,0	35001	40000
40000	0	90,0	40001	45000
45000	10	26,2	45001	65000
65000	15	15,0	65001	Máx.
Máx.	15			

TABLA III	beneficiarios pensión y jubilación en c)			
hasta	porcentaje	tasa marginal	desde	hasta
20000	0	0,0	20001	25000
25000	0	0,0	25001	30000
30000	0	0,0	30001	35000
35000	0	0,0	35001	40000
40000	0	54,0	40001	45000
45000	6	15,0	45001	65000
65000	10	10,0	65001	Máx.
Máx.	10			

TABLA IV	beneficiarios agrupados en d)			
hasta	porcentaje	tasa marginal	desde	hasta
20000	0	0	20001	25000
25000	0	0	25001	30000
30000	0	0	30001	35000
35000	0	0	35001	40000
40000	0	135	40001	45000
45000	15	15	45001	65000
65000	15	15	65001	Máx.
Máx.	15			

ANEXO II

APORTES DE ACTIVOS	Porcentaje
menos de 45 años	1,00%
de 45 a 50 años	3,00%
más de 50 años	4,50%

- 11 -

Asunto Nº 13/16

Artículo 1º.- Ratificar en todos sus términos la Resolución de Presidencia Nº 12/16, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese y archívese.

- 12 -

Asunto Nº 14/16

Artículo 1º.- Designar miembros de la Comisión Legislativa de Receso establecida durante el período 16 de enero de 2016 al 5 de febrero inclusive, a los legisladores Martinez, Myriam; Freites, Andrea; Romano, Ricardo; Carrasco, Noelia; Gomez, Marcela; Blanco, Pablo; Boyadjian, Cristina Y Villegas, Pablo; para el período comprendido desde el 6 de febrero del 2016 al 29 de febrero inclusive, a los legisladores Bilota Ivandic, Federico; Harrigton, Claudio; Martinez Allende, Liliana; Furlan, Ricardo; Rubinos, Oscar; Löffler, Damián Y Urquiza, Mónica.
Artículo 2º.- En el caso de que sea necesario modificar los miembros titulares de la Comisión Legislativa de Receso, dicha novedad será informada a la Presidencia de la Cámara mediante nota fundada del bloque político que corresponda.
Artículo 3º.- Regístrese, comuníquese y archívese.

ANEXO II

- 1 -

Inserción de fundamentos solicitada por el legislador Blanco

Asunto Nº 7/16

El sistema previsional de nuestra provincia se encuentra en una situación de grave crisis económica, financiera y prestacional.

Esto es una obviedad, pero pareciera que no se quiere reconocer.

Es esta situación que duele, que lastima y que avergüenza.

Podemos buscar responsable, podemos discutir sobre lo que debió hacerse, pero ello no cambia el presente.

Jubilados que hace más de tres años que no cobran en tiempo y forma, y empleados públicos en actividad que ven peligrar su derechos a jubilarse.

Esa realidad. Una realidad que pone a prueba a toda la dirigencia política.

Metemos la cabeza bajo la tierra y dejamos que todo a nuestro alrededor suceda, se deteriore y colapse, o asumimos nuestra responsabilidad y tomamos decisiones

La gente nos votó para que gobernemos y no para eludir nuestras responsabilidades.

Y nuestra responsabilidad pasa en primer término por tener una lectura de la realidad sincera, despojada de intereses particulares, de mezquindades y de miedos.

La situación en la que se encuentra actualmente el sistema previsional provincial no la generó este gobierno, pero asumimos completamente la responsabilidad de iniciar el camino de su solución.

La realidad indica que el sistema previsional tiene problemas estructurales de sustentabilidad que lo tornan inviable, insolidario e injusto, que no son atenuados ni remediables por el mero transcurso del tiempo, sino todo lo contrario.

Esta situación no sólo tiene un impacto entre los propios beneficiarios del sistema sino que sus efectos negativos se trasladan directamente a todo el Estado y por ende a la sociedad toda.

En 2010, el doctor Eduardo Melinsky, doctor en Ciencias Económicas (Actuariales), Actuario y Contador Público, en el marco de la Licitación Pública Nº 01/2010, para la valuación Actuarial del Instituto Provincial Autárquico Unificado de Seguridad Social al 31 de diciembre de 2009- Informe final de Valuación Actuarial, advertía en función de una proyección actuarial elaborada de 2010a 2050:

En términos de flujos de fondos se aprecia que los ingresos por aportes son levemente superiores a los aportes en los primeros dos años para pasar luego a ser inferiores a los egresos por pagos de beneficios, el déficit tiene carácter creciente a medida que la población va accediendo a los beneficios previsionales.

Puede apreciarse que para un afiliado que ingresa al Instituto a las 30 años y se jubila a los 55 años (antigüedad mínima de 25 años), el aporte técnico de equilibrio asciende a 44,96% de salario (masculino) y a 43,09% (femenino).

De esta manera las tasas de aporte técnicos de equilibrio son las casos superiores a la actuales tasa de aportes personales y contribuciones patronales.

Es importante mencionar que de realizarse aportes menores a los de "equilibrio" los fondos acumulados no serían suficientes para recibir los beneficios correspondientes.

La situación financiera actual y su proyección muestran la necesidad de implementar ajuste técnicos del régimen, todo ello sujeto al respectivo análisis jurídico e institucional.

Dicho informe actuarial anticipaba, entonces, un futuro negativo si no eran efectuados oportunamente los ajustes técnico recomendados, basados esencialmente en la modificación de los parámetros utilizados para la determinación del haber previsional, las edades mínimas para acceder al beneficio y las correcciones en los regímenes especiales.

Por su parte, el Tribunal de Cuentas de la provincia, en el marco del Expediente TCP PR Nº 101/2013 'auditoría externa al IPAUSS solicitada por la señora gobernadora de la

provincia, elaboró tres informes contables parciales N.os. 253, 278, y 311/2013, y un informe contable final 355/2013, mediante las cuales advertía también acerca de la situación del sistema previsional provincial.

En el punto B. 3), del mencionado informe final, bajo el título: ¿El régimen de pasividad de Tierra del Fuego es sustentable en el tiempo?, señalaba:

En principio, luego de 120 días de auditoría del sistema previsional, realizada por este equipo conformado por 6 contadores públicos, cuatro abogados y la permanente colaboración de los agentes del IPAUSS, nos encontramos en posición de opinar categóricamente que el régimen previsional vigente no es sustentable actualmente y la situación se agravaría en el muy corto plazo.

En nuestra opinión, la no sustentabilidad del sistema se demuestra en sí mismo por el déficit estructural señalado y se agravaría aceleradamente si no se toman medidas de fondo categóricas....

A continuación se ilustra la imposibilidad de sustentabilidad del sistema previsional fueguino en cuanto al régimen tradicional argentino de reparto, tratando en sus pilares de basarse en la solidaridad y la equitatividad, preveía hace 40 años atrás, 18 años de inactividad, 45 años de aportes y no más de 10 años de retiro por vejez teniendo en cuenta una expectativa de vida de alrededor de 72 años.

En cambio, el régimen previsional vigente en Tierra del Fuego, para una expectativa de vida de aproximadamente 82 años prevé la misma cantidad de años de aportes que de retiro, situación imposible de sostener salvo que siendo activo se aporte y contribuya al sistema el 82% de los haberes (imposible) en lugar de 27% legal actual (13% de aporte y 14% de contribuciones).

En Tierra del Fuego, el IPAUSS, en función de la normativa vigente, otorga la jubilación ordinaria a la mujer en promedio a los 49 años y al hombre a los 52..., con una expectativa promedio aproximada de vida de 82 años, la mujer recibirá los beneficios jubilatorios durante 33 años siendo que promedio aportó sólo 30 años, situación que se define en forma muy similar a la del hombre.

En este esquema y si se nos permitiera la colaboración más allá del rol de control cumplido con absoluto profesionalismo y dedicación, estimaríamos pertinente la revisión integral del sistema en los aspectos mencionados, que siente las bases para un régimen previsional estatal y provincial sustentable en lo económico y financiero y que le proporcione nuevamente los principios de uniformidad, solidaridad, equidad, proporcionalidad y ausente de privilegios tal como lo manda la Constitución Provincial, artículos 51 y 52, todo esto sin renunciar por parte del IPAUSS a conseguir el cobro de sus acreencias para poder, mientras se produzca el acontecimiento del régimen, paliar los déficit mensuales entre ingreso y gastos.

Se destaca que el régimen no sustentable en sí mismo por el déficit estructural existente y señalado oportunamente y que éste se agravaría en el transcurso del tiempo....

Tanto estudio actuarial elaborado por el doctor Melinsky (2010), como los informes contables efectuados por el Tribunal de Cuentas (2013), daban cuenta de que el problema del sistema previsional era estructural, que el mismo tendía a acrecentarse aceleradamente y que debían tomarse medidas drásticas para solucionarlo.

Como decía, nuestro primer compromiso es tener una lectura de la realidad sincera. Y la realidad indica que no estamos frente a un déficit estacional de flujo de caja, sino frente a un déficit estructural del diseño legal del sistema que lo torna insustentable, insolidario e injusto, tal como lo señalan los informes mencionados.

Tenemos que asumir un compromiso actual con la sociedad y un compromiso intergeneracional. No podemos tomar decisiones coyunturales para intentar solucionar problemas estructurales. Hacerlo significaría mentirnos a nosotros mismos, mentir a los actuales jubilados y mentir a las futuras generaciones de jubilados.

Este gobierno ha elaborado y remitido a esta Legislatura para su tratamiento diversos proyectos de ley que tienen por procurar la sustentabilidad del sistema previsional.

Ahora bien, la reforma del régimen previsional establecido por la Ley provincial 561,

tendrá un impacto sensible a mediano y largo plazo, ya que la misma ha sido diseñada para que su aplicación sea gradual y sin afectar derechos adquiridos.

La realidad indica que existen también desequilibrios y desfasajes actuales, derivados del déficit estructural del sistema, que deben solucionarse a corto plazo, ya que se encuentra en juego el derecho mismo a la percepción de los haberes previsionales.

El presupuesto elaborado por le propio IPAUSS para el ejercicio 2016 -sancionado por esta Legislatura – estima un déficit de casi $ 300 millones.

El total de ingresos por aportes y contribuciones correspondientes a diciembre de 2015 -pagados en su totalidad por el Estado provincial, la totalidad de sus organismos descentralizados y los tres municipios- no alcanza a cubrir la totalidad de las jubilaciones y pensiones devengadas para el mismo período, y el déficit se incrementa aceleradamente en el corto plazo.

Existen 6.880 juicios de amparo que tienen por objeto el pago de los haberes previsionales en tiempo y forma, de los cuales sólo 196 fueron ejecutados por insuficiencia de fondos.

Asimismo existen 330 beneficiados previsionales concedidos, cuyo beneficiarios no han renunciado a la actividad para no sufrir el pago de sus haberes a destiempo ni parcialmente.

Una deuda histórica impaga de más de U$S 200 millones y una deuda corriente impaga de más de $ 400 millones.

En ese contexto es que resulta necesario el reconocimiento y la declaración legal de la emergencia previsional.

Cabe señalar que esta ley no genera la emergencia previsional, la emergencia ya existe de hecho, ya que no hay medida más restrictiva que la convalidación de un sistema insolidario e inequitativo que tiene como efecto final la falta de pago del haber jubilatorio.

Este marco normativo de emergencia garantizará, mediante un cronograma preestablecido, el pago de los haberes previsionales a la totalidad de los beneficiarios del sistema.

Ello se logrará mediante el aumento de los recursos económicos y financieros destinados a garantizar dicho pago, los cuales se obtendrán mediante financiera, el aumento de la alícuota impositiva que grava la actividad financiera, el empleo de las utilidades de Banco de la Provincia, el aporte extraordinario por parte de la clase política, de los activos y de los pasivos con mayores ingresos, y de la consolidación, certificación y pago de la deuda histórica y la deuda corriente.

La emergencia previsional tiene por objeto paliar en el corto plazo un desequilibrio del sistema mediante la implementación de medidas de carácter transitorio, y proponiendo como fin último el bien colectivo por sobre cualquier por sobre cualquier interés particular.

En al doctrina existe consenso en considerar al estado de emergencia como un tipo o especie del género estado de necesidad. La emergencia es una variante del estado de necesidad de características imprevistas y transitorias.

Según el constitucionalista Néstor Sagües, cuatro elementos componen la doctrina del estado de necesidad: a) la situación de necesidad, o circunstancia fáctica que exige una respuesta por parte del Estado; b) el acto necesario para enfrentar la situación de necesidad; c) el sujeto necesitado; y d) el derecho de necesidad.

Asimismo cabe decir, en le marco fáctico y jurídico de la emergencia, que los derechos consagrados en los textos constitucionales no son absolutos, sino que están sujetos a las leyes que reglamentan su ejercicio (artículos 14 de la Constitución nacional y 13 de la Constitución provincial).

Tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que *ni el derecho de usar y disponer de la propiedad ni ningún otro derecho reconocido por la Constitución reviste el carácter de absoluto. Un derecho ilimitado sería una concepción antisocial CSJN, don Agustin Ercolano con doña Julieta Lanteri de Renshaw, fallos 136:161 (1922).*

Ha dicho nuestro máximo Tribunal: *reglamentar un derecho es limitarlo, es hacerlo compatible con el derecho de los demás dentro de la comunidad y con los intereses*

superiores de esta última.

El sistema previsional requiere de medidas categóricas, transitorias y de aplicación inmediata, que reaseguren el derecho de los beneficiarios a percibir sus haberes, hasta que las reformas de fondo del sistema reconstituyan su equilibrio.

El Estado debe garantizar la sustentabilidad del sistema previsional, el equilibrio de la ecuación solidaria y equitativa, y la primacía del interés colectivo por encima del interés particular.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas, en el artículo 11 de la Observación General Nº 19, en relación al artículo 9º del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Social y Culturales, advierte:

El derecho a la seguridad social requiere, para ser ejercido, que se haya establecido y funcione un sistema, con independencia de que esté compuesto de uno o varios planes que garantice las prestaciones correspondientes a los riesgos previstos sociales de que se trate. Este sistema debe establecerse en el marco del derecho nacional y las autoridades públicas deben asumir la responsabilidad de su administración o supervisión eficaz. Los planes también deben ser sostenibles,incluidos los planes de pensiones, a fin de asegurar que las generaciones presentes y futuras puedan ejercer ese derecho.

Por su parte, nuestra Constitución provincial, en su artículo 51, prescribe que....*La ley establecerá un régimen previsional general, uniforme y equitativo..., sentenciado categóricamente que... A partir de la sanción de esta Constitución queda prohibido el otorgamiento de beneficios previsionales que signifiquen privilegios.* Seguidamente, el artículo 52 determina que: *El Estado provincial establece y garantiza el efectivo cumplimiento de un régimen de seguridad social basado en los principios de solidaridad, equidad y integralidad.*

En esa inteligencia es que surge el deber del Estado de dictar medidas que garanticen efectivamente el derecho al acceso a la seguridad social y al disfrute de sus beneficios.

El esquema de justicia distributiva del sistema de la seguridad social provincial se encuentra en crisis y las medidas propuestas tienen por objeto reconstituir la ecuación previsional, teniendo en cuenta el bien colectivo del conjunto de los beneficiarios y la sociedad toda al interés individual.

El Superior Tribunal de Justicia provincial, con los votos del recordado doctor José Salomón y el doctor Carlos Andino, en el fallo “Bruglieri” (STJ, Bruglieri, Nilda Adelina con IPPS sobre contencioso administrativo, 30 de octubre de 2001), sostuvo al respecto:

Con razón se ha dicho que la solidaridad.....no es, pues, un sentimiento superficial, por los males de tantas personas cercanas o lejanas. Al contrario, es la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común, es decir, por el bien de todos y cada uno, para que todos seamos verdaderamente responsables de todos.....

Vista de ese modo, la solidaridad es una inquietud de participación y apoyo frente a los problemas actividades e inquietudes de los demás orientada al bien común de la sociedad.

Ahora bien -en el campo de la seguridad social- el principio de solidaridad necesariamente debe tener contrapartida; porque así lo exige el sistema jubilatorio para poder mantenerse a través del tiempo, de generación en generación, sin caer el quebranto.

En ese sentido el Tribunal ha dicho que 'debe partirse de base que el régimen previsional solidario descansa en un principio de orden contributista. Ello implica, entonces, la existencia de un esfuerzo y obligación conjunta que posteriormente, cuando el criterio es de reparto, en virtud de la condición solidaria, se atribuyan beneficios a quienes merecidamente contribuyeron al acervo común. En dicho criterio, el interés general de todos los beneficiarios se nutre, se legitima y tiene su correspondencia en el cumplimiento individual de la obligación contributiva del aporte', y que cuando se trata de fondos públicos especial control y prurito habrá detenerse, para evitar el uso indebido sel soporte normativo que desemboque en una situación que afecte al servicio jurídico en general.

Es una situación concreta de justicia legal o social donde; el bien individual ha de

subordinarse al bien común, por que no hay plenitud del bien individual fuera de la sociedad, y la condición primordial de la existencia de la sociedad es la primacía del bien común. Se trata de la relación de reciprocidad entre lo individual y lo social, sobre la cual ha de insistirse siempre.

Por ello, para que el sistema previsional cumpla con el principal objetivo de hacer efectivo el derecho al merecido descanso del trabajador que ha cumplido con los requisitos normativos para poder acceder al beneficio previsional – o a los miembros de su familia en caso de fallecimiento- garantizándole una subsistencia decorosa y adecuada a la posición que ha ocupado... es necesario que -en forma solidaria- determinado número de activos (siempre la misma cantidad) solvente con su aporte a un pasivo.

Por último, si mediante la realización de una 'proyección actuarial', de carácter demográfico y económico; elaboración ésta, que contribuye, sin duda, una de las labores más complejas que debe encarar el experto en el actuariado de la seguridad social... se comprueba que no es factible el desenvolvimiento equilibrado del IPPS en el futuro, a mediano y largo plazo, y que ambos sistemas (reparto- capitalización), son insuficientes para costear las erogaciones del organismo previsional, podrá recurrirse a otras variables legales que solidariamente contribuyan para mantener el equilibrio financiero; incrementar los años de aporte de los afiliados a la caja provincial y/o los años de edad exigidos (artículo 38, Ley 244) como requisitos previos para la obtención del haber jubilatorio; y/o elevar los aportes y contribuciones sobre las remuneraciones que fija el artículo 24, de esa misma norma: 13% y 15%, a un porcentaje mayor.

Para ello, para que no se afecte el principio de igualdad y se hagan realidad y adquieran plena operatividad los principios básicos del derecho de la seguridad social (solidaridad, equidad e integralidad) -complementarios y abarcadores de los preceptos de proporcionalidad, movilidad e irreductibilidad del haber jubilatorio-, debe mantenerse también en forma constante y a través del tiempo el justo equilibrio de la ecuación que rige el sistema de reparto (aportes jubilatorios y contribuciones-haber previsional).

La necesidad del reconocimiento de la emergencia previsional se impone ante las circunstancias fácticas y sus implicancias jurídicas. El déficit estructural del sistema requiere paliativos inmediatos hasta tanto el mismo encuentre su propia sustentabilidad.

Es hora de que tomemos una decisión en función de una realidad que ya no podemos esconder.

Nuestra responsabilidad como dirigencia política no es para con nuestro interés, ni para ningún interés particular, sino que nuestra responsabilidad es para con toda la sociedad.

La historia, los trabajadores, los jubilados y la sociedad nos juzgará si estuvimos a la altura de la circunstancias, si nos hicimos cargo o miramos al costado.

Firmante: Federico Bilota Ivandic.

ESTADÍSTICA ASISTENCIA LEGISLADORES
A LAS REUNIONES DE COMISION
Articulo 25 Reglamento Interno de Camara

ANUAL 2015

Legisladores	Total Reuniones	Asistencia	% Asistencia
ANDRADE TENORIO, Claudia Gabriela	18	15	83,00%
ARCANDO, Juan Carlos	6	2	33,00%
BARRIENTOS, Néstor Eduardo	11	10	90,00%
BLANCO, Pablo Daniel	19	18	94,00%
DEL CORRO, Amanda Ruth	17	12	70,00%
LECHMAN, Jorge Andrés	14	9	64,00%
LIENDO, Marcelo Adrián	24	10	41,00%
LÖFFLER, Damián Alberto	12	5	41,00%
MARINELLO, Fabio Adrián	15	14	93,00%
MARTÍNEZ, Myriam Noemí	26	12	46,00%
MARTÍNEZ ALLENDE, Liliana	13	13	100,00%
RODRÍGUEZ, Juan Felipe	12	11	91,00%
ROJO, Laura Susana	11	7	63,00%
SIRACUSA, Marta Susana	21	16	76,00%
TAPIA, Reinaldo Héctor	12	3	25,00%

ESTADÍSTICA ASISTENCIA LEGISLADORES

A SESIÓN

ANUAL 2015

Legisladores	Total Sesiones	Asistencia	% Asistencia
ANDRADE TENORIO, Claudia Gabriela	9	9	100%
ARCANDO, Juan Carlos	9	5	56%
BARRIENTOS, Néstor Eduardo	9	9	100%
BILOTA IVANDIC, Federico Ricardo	6	6	100%
BLANCO, Pablo Daniel	15	15	100%
BOYADJIAN, Cristina Ester	6	6	100%
CARRASCO, Angelina Noelia Mariné	6	6	100%
DEL CORRO, Amanda Ruth	9	6	67%
FREITES, Andrea Graciela	6	6	100%
FURLAN, Ricardo Humberto	6	6	100%
GÓMEZ, Marcela Rosa	6	6	100%
HARRINGTON, Claudio Daniel	6	6	100%
LECHMAN, Jorge Andrés	9	8	89%
LIENDO, Marcelo Adrián	9	7	78%
LÖFFLER, Damián Alberto	15	15	100%
MARINELLO, Fabio Adrián	9	8	89%
MARTÍNEZ, Myriam Noemí	15	12	80%
MARTÍNEZ ALLENDE, Liliana	15	14	93%

RODRÍGUEZ, Juan Felipe	**9**	**9**	**100%**
ROJO, Laura Susana	**9**	**8**	**89%**
ROMANO, Ricardo Andrés	**6**	**6**	**100%**
RUBINOS, Oscar Hugo	**6**	**6**	**100%**
SIRACUSA, Marta Susana	**9**	**8**	**89%**
TAPIA, Reinaldo Héctor	**9**	**7**	**78%**
URQUIZA, Mónica Susana	**6**	**6**	**100%**
VILLEGAS, Pablo Gustavo	**6**	**6**	**100%**

ESTADÍSTICA ASISTENCIA LEGISLADORES

A SESIÓN

ENERO 2016

Legisladores	Total Sesiones	Asistencia	% Asistencia
BILOTA IVANDIC, Federico Ricardo	**1**	**1**	**100%**
BLANCO, Pablo Daniel	**1**	**1**	**100%**
BOYADJIAN, Cristina Ester	**1**	**1**	**100%**
CARRASCO, Angelina Noelia Mariné	**1**	**1**	**100%**
FREITES, Andrea Graciela	**1**	**1**	**100%**
FURLAN, Ricardo Humberto	**1**	**1**	**100%**
GOMEZ, Marcela Rosa	**1**	**1**	**100%**
HARRINGTON, Claudio Daniel	**1**	**1**	**100%**
LÖFFLER, Damián Alberto	**1**	**1**	**100%**
MARTÍNEZ, Myriam Noemí	**1**	**1**	**100%**
MARTÍNEZ ALLENDE, Liliana	**1**	**0**	**0%**
ROMANO, Ricardo Andrés	**1**	**1**	**100%**
RUBINOS, Oscar Hugo	**1**	**1**	**100%**
URQUIZA, Mónica Susana	**1**	**1**	**100%**
VILLEGAS, Pablo Gustavo	**1**	**1**	**100%**
Observaciones: corresponde a las sesiones especial de fecha 8 de enero de 2016.			

SUMARIO

	Página
I. APERTURA DE LA SESIÓN	**2**
II. IZAMIENTO	**2**
III. PEDIDOS DE LICENCIA	**2**
IV. HOMENAJES	**2**
V. CONVOCATORIA	**3**
. Nota de Legisladores	**3**
. Resolución de Presidencia 13/16	**3**
1. Asunto Nº 15/16. Resolución de Presidencia Nº 13/16.	**4**
2. Asunto Nº 4/16. Desendeudamiento de las Provincias Argentinas.	**5**
3. Asunto Nº 5/16. Obra Social de la Provincia de Tierra del Fuego.	**6**
4. Asunto Nº 9/16. Agencia de Recaudación Fueguina (AREF).	**6**
5. Asunto Nº 10/16. Modificación Ley Impositiva.	**16**
6. Asunto Nº 11/16. Ley Código Fiscal.	**23**
7. Asunto Nº 6/16. Caja de Previsión Social de la Provincia de Tierra del Fuego.	**141**
8. Asunto Nº 5/16. Continuación: Obra Social de la Provincia de Tierra del Fuego.	**142**
9. Asunto Nº 8/16. Régimen Único de Pensiones Especiales.	**144**
10. Asunto Nº 7/16. Ley de Emergencia del Sistema de Seguridad Social.	**145**
11. Asunto Nº 13/16. Receso Legislativo.	**157**
12. Asunto Nº 14/16. Comisión Legislativa de Receso.	**158**
VI. CIERRE DE SESIÓN	**159**
. ANEXO I	**160**
. Asuntos Aprobados	
. ANEXO II	
. Fundamentos legislador Bilota Ivandic	**285**
. Estadística de Asistencia de Comisión Anual de 2015.	**290**
. Estadística de Asistencia a Sesión Anual de 2015.	**291**
. Estadística de Asistencia a Sesión de Enero.	**293**